

CEPC

DOSSIER

*TRATA DE SERES HUMANOS,
TRABAJO FORZOSO Y
ESCLAVITUD*

Servicio de Documentación Jurídica



CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES
Subdirección General de Publicaciones y Documentación
ÁREA DE DOCUMENTACIÓN, BIBLIOTECA Y ARCHIVO

EDITA: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC)
Plaza de la Marina Española, nº 9 - 28071 Madrid
Publicación: enero 2020
NIPO: 091-20-001-8

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	5
---------------------------	----------

Parte primera: TEXTOS Y DOCUMENTOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

7

<i>PROTOCOLOS, DIRECTRICES Y NORMATIVA</i>	<i>7</i>
ONU	7
UNICEF	12
UNESCO	21
OIT	23
OSCE	29
CONSEJO DE EUROPA	31
<i>JURISPRUDENCIA</i>	<i>33</i>

Parte segunda: LEGISLACIÓN, JURISPRUDENCIA Y DOCUMENTOS DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

34

<i>ALEMANIA.....</i>	<i>34</i>
Legislación	35
LEY FUNDAMENTAL DE LA REPÚBLICA FEDERAL ALEMANA	35
CÓDIGO PENAL / STRAFGESETZBUCH (StGB)	36
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO PENAL /STRAFPROZESSORDNUNG (StPO)	46
OTRAS LEYES Y NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE TSH	50
OTRA LEGISLACIÓN RELACIONADA.....	59
Jurisprudencia	60
<i>ESPAÑA</i>	<i>64</i>
Legislación	65
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978	65
LEGISLACIÓN GENERAL ESPAÑOLA	66
Jurisprudencia	84
Otros protocolos y planes de actuación.....	90
<i>FINLANDIA</i>	<i>91</i>
Legislación	92
CRIMINAL CODE (excerpts)	92

ALIENS ACT (Excerpts).....	94
Informe EUROPEAN COMMISSION	97
Otras líneas de actuación	98
Casos de trata	99
<i>FRANCIA</i>	<i>100</i>
Legislación	101
DEFINICIONES tomadas de los artículos del Código Penal Francés:	101
CODE PENAL FRANÇAIS.....	102
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.....	119
CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES	122
<i>Legislación relacionada</i>	123
Jurisprudencia	160
<i>HOLANDA</i>	<i>185</i>
<i>Legislación</i>	186
CÓDIGO PENAL.....	186
LEY DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL.....	196
RELATOR NACIONAL SOBRE TRATA DE SERES HUMANOS	198
LEY DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA INFANCIA	198
Otra legislación relacionada	201
Jurisprudencia	202
<i>ITALIA</i>	<i>204</i>
Legislación	205
CÓDIGO PENAL.....	205
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.....	214
Leyes y otras normas específicas sobre TSH	221
Otra legislación relacionada	221
Jurisprudencia	230
<i>PORTUGAL</i>	<i>231</i>
Legislación	232
CÓDIGO PENAL.....	232
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.....	243
LEGISLACIÓN RELACIONADA.....	248
Otra documentación	263
Jurisprudencia	264

<i>REINO UNIDO</i>	381
Legislación	382
Modern Slavery Act 2015.....	382
Human Trafficking and Exploitation (Scotland) Act 2015	386
Human Trafficking and Exploitation (Criminal Justice and Support for Victims) Act (Northern Ireland) 2015	389
Otra legislación.....	392
<i>Otras regulaciones</i>	392
<i>SUECIA</i>	393
<i>Legislación</i>	394
CÓDIGO PENAL.....	394
LEY DE EXTRANJERÍA	395
Informes relacionados.....	403
Informe EUROPEAN COMMISSION	404
Parte tercera: BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA.....	405
<i>MONOGRAFÍAS</i>	405
<i>CAPÍTULOS DE LIBRO</i>	408
<i>ARTÍCULOS</i>	409
<i>INFORMES</i>	412
<i>PÁGINAS WEB</i>	413
<i>TESIS DOCTORALES</i>	413
<i>VIDEOGRABACIONES</i>	413

PRESENTACIÓN



A principios del año 2019, la Fiscalía de Extranjería del Ministerio de Justicia planteó al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales una consulta sobre la legislación internacional relativa a la trata de seres humanos, el trabajo forzoso y la esclavitud en el siglo XXI. A raíz de esta solicitud, se decidió elaborar este Dossier, cuya actualización finalizó en diciembre de 2019.

En los últimos veinte años se han producido grandes corrientes migratorias hacia los países desarrollados. Estas migraciones se deben a diversas causas, políticas, culturales, socioeconómicas y bélicas, entre otras. En consecuencia han aparecido nuevos delitos y graves violaciones de los derechos humanos como la trata de seres humanos, formas modernas de esclavitud y trabajo forzoso. La llamada "esclavitud del siglo XXI" se ha convertido en un problema mundial, que afecta prácticamente a todos los países y que supone uno de los negocios ilícitos más lucrativos que existen: la compraventa de seres humanos con fines de explotación laboral y esclavitud.

Partiendo, por tanto, de que la trata de seres humanos constituye una violación de los derechos humanos y una ofensa a la dignidad e integridad de la persona, parece que la solución al problema pasa por establecer un marco normativo adecuado a los tiempos en que vivimos. Por ello, tanto los países de nuestro entorno como España actualizan constantemente sus legislaciones en torno a este tema.

Asimismo, los diferentes Organismos Internacionales han prestado especial atención a los asuntos relativos a los derechos humanos y han desarrollado también sus protocolos, directivas y diferentes líneas de actuación.

El Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, define la Trata de seres humanos de la siguiente manera:

"Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos".

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), define el trabajo forzoso, en líneas generales de la siguiente forma:

"Todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente".

Asimismo la OIT dice que la definición de trabajo forzoso abarca:

"Las prácticas tradicionales del trabajo forzoso, por ejemplo, las secuelas de la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud y las diversas formas de servidumbre por deudas, así como las nuevas formas de trabajo forzoso que han hecho su aparición en décadas recientes, tales como la trata de personas, también llamadas "esclavitud-moderna" para echar luz sobre condiciones de vida y trabajo que son contrarias a la dignidad humana".

Con este dossier trataremos de recoger directrices, directivas y protocolos de actuación que están desarrollando los diferentes Organismos Internacionales, así como legislación en vigor y jurisprudencia tanto de estos organismos como de los países europeos afectados por estos delitos.

Como veremos en este informe, cada país ha trabajado en la legislación siguiendo líneas de actuación, directivas y protocolos aprobados por Organismos Internacionales, pero abordando el tema desde su propia perspectiva.

En algunos casos por cuestiones prácticas o por su interés, se han expuesto los documentos completos. En otros casos, sólo se indican título, resúmen y enlace a los mismos o a las páginas de los diferentes organismos dónde aparecen los documentos publicados.

En todo caso, a pesar de esta diversidad, se ha procurado que la presentación fuera lo más uniforme posible.

El objetivo final de esta publicación es establecer una visión actual lo más amplia posible, tanto sobre las iniciativas legislativas sobre trata de seres humanos, trabajo forzoso y esclavitud, como su aplicación a través de la jurisprudencia.

Parte primera: TEXTOS Y DOCUMENTOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

PROTOCOLOS, DIRECTRICES Y NORMATIVA

ONU

- DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ([enlace al documento](#))

Referencia especial al *Artículo 4: Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.*

- La ONU y el Estado de Derecho: TRATA DE PERSONAS ([enlace al documento](#))

La trata de personas es un delito serio y una violación grave de los derechos humanos, que constituye una amenaza para la seguridad nacional y menoscaba el desarrollo sostenible y el estado de derecho, como se reconoce en la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho (párr. 24).

El sistema de las Naciones Unidas ofrece ayuda práctica a los Estados para que elaboren leyes y creen estrategias nacionales amplias de lucha contra la trata de personas, y aporta recursos para aplicarlas. Los Estados reciben asistencia especializada, incluido el desarrollo de la capacidad local y conocimientos especializados, así como instrumentos prácticos con miras a fomentar la cooperación transfronteriza, las investigaciones y los enjuiciamientos. La aprobación en 2000 por la Asamblea General del [Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños](#) supuso un hito importante en los esfuerzos internacionales para poner fin a la trata de personas. En la actualidad, una gran mayoría de Estados ya han firmado y ratificado el Protocolo. Otras respuestas de las Naciones Unidas son el [Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas](#) y el [Grupo Mundial sobre Migración](#), establecido por la Asamblea General en su [resolución 61/180](#).

Documentos y enlaces pertinentes:

- [Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito \(UNODC\)](#)
 - [UNODC — Trata de personas](#)
 - [Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas](#)
- OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

Normas Internacionales [Enlace](#)

En el desempeño de sus funciones el Relator Especial debe remitirse a los [Principios y directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas](#) (en lo sucesivo denominados “Directrices”), elaborados por la Oficina del ACNUDH con el fin de

proporcionar orientaciones políticas prácticas y basadas en los derechos humanos sobre la prevención de la trata y la protección de sus víctimas, con vistas a facilitar la integración de la perspectiva de derechos humanos en las leyes, políticas y medidas nacionales, regionales e internacionales relativas a la lucha contra la trata.

Las Directrices y su aplicación se examinarán en el marco de referencia general del [Protocolo para prevenir, reprimir, y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa a la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y otros convenios y tratados pertinentes](#).

Al interpretar las cláusulas del Protocolo y las Directrices y al usarlas como base para formular sus recomendaciones, el Relator Especial debe referirse a la [Declaración Universal de Derechos Humanos](#) y a los principales instrumentos internacionales de derechos humanos: el [Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos](#), el [Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales](#), la [Convención contra la tortura](#), la [Convención contra la discriminación de la mujer](#), la [Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial](#), la [Convención sobre los derechos del niño](#), la [Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares](#), la [Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad](#), la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y de las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia y los convenios y tratados regionales existentes contra la trata de personas.

Habida cuenta de que, en la mayoría de los casos, las víctimas de la trata se encuentran en situación irregular en el país de destino, el Relator Especial deberá referirse en su análisis a las investigaciones existentes en lo tocante a los derechos humanos de las personas que no son ciudadanos del país en cuestión. Lo anterior no debe afectar en modo alguno la aplicación de medidas específicas de protección para las víctimas de la trata.

La Convención sobre los derechos del niño, que ha sido ratificada por casi todos los países del mundo, será la referencia principal en lo relativo a la situación de los niños que son víctimas de la trata. Asimismo será de especial importancia el [Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y el uso de niños en la pornografía](#).

Diversos convenios de la [Organización Internacional del Trabajo \(OIT\)](#) serán también especialmente pertinentes para la labor del Relator Especial, en particular los [Convenios No. 29 y No. 105 sobre el trabajo forzoso](#), el [Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil](#) y el Convenio No. 143 sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes.

Referente a la esclavitud

- Fondo Fiduciario de contribuciones voluntarias para luchar contra las formas contemporáneas de esclavitud ([enlace](#))
- Grupo de Trabajo sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud ([enlace](#))
- Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias. ([enlace](#))

Documentación más actualizada:

- ✓ [Informe de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias - 25 de julio de 2019](#)

RESUMEN

En el presente informe, la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, Urmila Bhoola, estudia las características actuales de la esclavitud e indica de qué manera los cambios previstos en el futuro del trabajo, la demografía, las migraciones y el medio ambiente pueden configurar la esclavitud en los próximos años. Haciendo balance y mirando hacia el futuro, se exponen las iniciativas contra la esclavitud emprendidas por los Estados, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y los agentes privados, se presenta un análisis de la eficacia y se evalúan las lagunas que es preciso colmar para combatir mejor las nuevas formas de esclavitud.

La Relatora Especial propone un enfoque integral basado en las normas y criterios internacionales de derechos humanos para hacer frente a la esclavitud de manera más eficaz.

El informe se presenta de conformidad con la resolución 33/1 del Consejo de Derechos Humanos

Referente a la trata de personas

- Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente las mujeres y los niños ([enlace](#))

Documentación más actualizada:

- ✓ [Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños - 23 de abril de 2019](#)

RESUMEN

El presente informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Maria Grazia Giammarinaro, fue elaborado en cumplimiento de la resolución 35/5 del Consejo de Derechos Humanos.

Durante su mandato, la Relatora Especial ha observado que las actividades de protección y asistencia a las víctimas de la trata se han centrado casi exclusivamente en las intervenciones a corto plazo, con escasa atención a los derechos y necesidades de las víctimas y los supervivientes a largo plazo. Consciente de esa deficiencia, la Relatora Especial sostiene en el presente informe que la inclusión social de las víctimas y los supervivientes de la trata de personas es una obligación de los Estados que tiene su origen en la norma de diligencia debida y en el derecho a una reparación efectiva.

La Relatora Especial señala igualmente los principales desafíos que plantea la inclusión social a largo plazo y destaca algunas prácticas prometedoras de carácter innovador y transformador que los Estados, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional deberían reproducir, financiar y aplicar a mayor escala.

- ✓ [Visita a Nigeria. Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niño - 16 de abril de 2019](#)

RESUMEN

Durante su visita a Nigeria, del 3 al 10 de septiembre de 2018, la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, examinó las principales formas de trata de personas, tanto a nivel nacional como internacional. En su informe, la Relatora Especial alaba el amplio marco legislativo e institucional de lucha contra la trata y aboga por mejorar su aplicación y aumentar la financiación de su organismo especializado de lucha contra la trata, a fin de lograr mejores resultados en lo que respecta a la identificación y el apoyo de las víctimas de la trata.

La Relatora Especial acoge con satisfacción el establecimiento de diez centros de acogida públicos para las víctimas de la trata, pero está profundamente preocupada por su carácter “cerrado”, que atenta contra los derechos humanos de las víctimas y los supervivientes. Por lo tanto, recomienda revisar urgentemente esa política. La Relatora Especial también celebra el establecimiento en el Estado de Edo del equipo de trabajo contra la trata de personas, encomia la labor de las organizaciones de la sociedad civil y aboga por la creación de un fondo gubernamental específico para financiar sus proyectos. Destaca que, especialmente en el contexto de los retornos forzados o voluntarios, se necesitan medidas de inclusión social a largo plazo para ofrecer alternativas viables a los supervivientes y evitar que vuelvan a ser víctimas de la trata. Las medidas de prevención destinadas exclusivamente a sensibilizar sobre los riesgos de la migración han resultado ineficaces y deben ir acompañadas de medidas de empoderamiento económico efectivas, como la creación de empleo, la formación empresarial y una amplia orientación durante la fase de creación de una empresa.

- ✓ [Resolución aprobada por la Asamblea General el 17 de diciembre de 2018 - 18 de enero de 2019](#)

- Trata de personas ([enlace](#))

Publicaciones

- ✓ PRINCIPIOS Y DIRECTRICES RECOMENDADOS SOBRE DERECHOS HUMANOS Y TRATA DE PERSONAS ([enlace al documento](#))
- ✓ Comentario a PRINCIPIOS Y DIRECTRICES RECOMENDADOS SOBRE DERECHOS HUMANOS Y TRATA DE PERSONAS ([enlace al documento](#))
- ✓ LOS DERECHOS HUMANOS Y LA TRATA DE PERSONAS (2014) ([enlace al documento](#))

NOTICIAS SOBRE LA TRATA DE SERES HUMANOS:

- El peligro de la trata de personas en el contexto migratorio ([enlace al documento](#))
- La trata de personas ([enlace al documento](#))

- Trabajo infantil ([enlace](#)) - Documento del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).

FACTSHEET: CHILD LABOUR

The facts

An estimated 246 million children are engaged in child labour. Nearly 70 per cent (171 million) of these children work in hazardous conditions – including working in mines, working with chemicals and pesticides in agriculture or with dangerous machinery. They are everywhere, but invisible, toiling as domestic servants in homes, labouring behind the walls of workshops, hidden from view in plantations. The vast majority of working children – about 70 per cent – work in the agriculture sector.

Millions of girls work as domestic servants and unpaid household help and are especially vulnerable to exploitation and abuse.

Millions of others work under horrific circumstances. They may be trafficked (1.2 million), forced into debt bondage or other forms of slavery (5.7 million), forced into prostitution and/or pornography (1.8 million) or recruited as child soldiers in armed conflict (300,000).

Regional estimates indicate that:

- the Asia and Pacific region harbours the largest number of child workers in the 5 to 14 age group, 127.3 million in total (19 per cent of children are working in the region);
- sub-Saharan Africa has an estimated 48 million child workers. Almost one child in three (29 per cent) below the age of 15 is economically active;
- Latin America and the Caribbean harbours approximately 17.4 million child workers (16 per cent of children in the region are working);
- 15 per cent of children in the Middle East and North Africa are working; approximately 2.5 million and 2.4 million children are working in developed and transition economies respectively.

Building a protective environment for children

Education services need to be in place and they must be free, compulsory, relevant and attractive. All children have the right to education. Children and parents need to see school as a better option than work.

Governments need to ensure that all children have access to compulsory education as a front-line response to child labour. They need to commit themselves to international standards such as the International Labour Organization (ILO) Convention No.182 on the Worst Forms of Child Labour, which has been ratified by 132 governments. And they need to make sure that laws are in place to prosecute employers who exploit children.

Resources for this struggle are available. Child labour should be at the top of the agenda of finance ministries, as well as those of the traditional social ministries associated with children's welfare. Developing countries can demonstrate the seriousness of their commitment by allocating more resources to basic social services.

Attitudes and practices need to change. Too often there is little objection by families and communities to children working. Frequently it is felt that work is a better and more appropriate activity for girls than going to school. In the case of forced and bonded labour, there may be a misunderstanding of the nature of the agreement that leads to the child being bound to his or her employer. The willingness of landowners and employers to exploit children in such arrangements, and the lack of social disapproval of employers who operate in this way, also fail to provide protection for children.

Laws that prohibit child labour need to be in place. And even more importantly, they need to be rigorously enforced.

Governments and others need to know how many children are working in the various forms of labour. They also need information on the gender, age and ethnicity of the children to understand what made them vulnerable in the first place and to devise effective responses.

Children need to be removed immediately from the worst forms of child labour and provided with care and education.

Children's views need to be taken into account in programmes aimed at helping child labourers. If children are going to be provided with real alternatives to hazardous labour, it is essential to make them active partners in identifying these alternatives.

Donor nations can show their commitment by increasing the proportion of assistance they allocate to basic social services and by supporting debt forgiveness.

UNICEF's response

The 246 million children who are engaged in child labour are living proof of the world's systemic failure to protect them. They are also the reason why UNICEF's work is focused on building a protective environment for children that safeguards them from exploitation and abuse.

UNICEF's responses to child labour are based on child-centred policies – viewing children as resilient, yet vulnerable, capable yet inexperienced and active rather than passive in their development. This is why a protective environment for children must include strategies aimed at getting and keeping vulnerable children and young people in school. It also aims at:

preventing all forms of child labour that are detrimental to children;

- using the most ratified human rights instrument in history – the Convention on the Rights of the Child – as a guiding force behind its work;
- supporting other key areas of the child's development, including health, nutrition and sanitation;
- building alliances with other partners;
- working for the ratification and implementation of ILO Convention No.182 to immediately end the worst forms of child labour.

Child labour laws have been strengthened in many countries, and a number of international corporations have adopted codes of conduct concerning child labour.

UNICEF in action

In **Bangladesh**, UNICEF, ILO and the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association concluded an agreement to end child labour in the country's garment factories. Freed child workers were given stipends to attend school, through funds provided by the Association, UNICEF and ILO. By 1998, 10,500 children had been removed from work under the programme, and about 80 per cent were enrolled in community-based schools organized by two NGOs. A follow-up agreement was designed to keep these children in school beyond the age of 14.

In **Brazil**, UNICEF and its partners brought working children back to school and introduced activities to complement their education, promote family and community participation and organize courses on citizenship for children, adolescents and families. UNICEF also supported the creation of the Parliamentarian Front for the Rights of Children and Adolescents, which monitors legislation affecting children.

In **Nepal**, UNICEF is working to increase parents' awareness of the harmful effects of child labour through a Parenting Education initiative, and to give children between the ages of three and five a safe, encouraging place to learn and play in community-based child development centres. In 1999, 50,000 parents and caregivers participated in the initiative.

In the **United Republic of Tanzania**, UNICEF and ILO have worked to raise awareness about child labour and support training and mobilization for representatives from trade unions, NGOs and other groups. This has developed the capacities of communities to assess the reasons children are forced to work and to devise ways to get them into school. In addition, birth registration systems have been improved and children's enrolment in school is being monitored. At the international level, UNICEF supported the adoption of ILO Convention No. 182 to immediately end the worst forms of child labour, and works for its ratification and implementation. UNICEF also works with governments at the national level to develop the time-bound national plans of action that are required by that convention.

Definitions

Child work: UNICEF is not opposed to children working. Children's or adolescents' participation in work – economic activity – that does not negatively affect their health and development or interfere with their education, is often positive. Light work (that does not interfere with education) is permitted from the age of 12 years under ILO Convention No.138.

Child labour: Child labour is a much narrower concept and refers to children working in contravention of ILO standards contained in Conventions 138 and 182. This means all children below 12 years of age working in any economic activities, those aged between 12 and 14 engaged in more than light work, and all children engaged in the worst forms of child labour.

Worst forms of child labour: These involve children being enslaved, forcibly recruited, prostituted, trafficked, forced into illegal activities or exposed to hazards.

Relevant article of the Convention on the Rights of the Child

Article 32(1): "States Parties recognize the right of the child to be protected from economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental

- Hojas Informativas sobre Protección de la Infancia [enlace](#)

TRABAJO INFANTIL

DERECHOS HUMANOS

Las Convenciones 138 (1973) y 182 (1999) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) definen como trabajadores infantiles a los menores de 12 años que realizan actividades remuneradas, a los de 12 a 14 años que realizan trabajos más que livianos, y a todos los niños y niñas sometidos a las peores formas de trabajo infantil, por medio de las cuales se les esclaviza, se les recluta a la fuerza, se les prostituye, se les somete a la trata, se les obliga a cometer actividades ilegales o se les pone en peligro.

El artículo 32(1) de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) exige el reconocimiento del “derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.”

En marzo de 2006, 143 países ratificaron la Convención 138, que ajustaba la edad mínima para trabajos de tipo general, leves o peligrosos, y 158 países ratificaron la Convención 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil.

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

El trabajo infantil es tanto causa como consecuencia de la pobreza y desperdicia el capital humano de un país. Impide la educación de los menores, especialmente la de las niñas. Las peores formas de trabajo infantil –incluidas la prostitución y la trata– son una de las causas y consecuencias de la pandemia del VIH/ SIDA. Por lo tanto, la eliminación del trabajo infantil es particularmente pertinente para lograr el ODM 1 (acabar con la extrema pobreza y el hambre), el ODM 2 (asegurar que todos los niños y niñas completan sus estudios primarios) y el ODM 6 (combatir contra el VIH/ SIDA, el paludismo y otras enfermedades). La consecución del ODM 7, que pretende dar marcha atrás en la pérdida de los recursos del medio ambiente, ayudaría a reducir los desastres medioambientales que destruyen los hogares y aumentan, de manera significativa, las condiciones que favorecen el trabajo.

Según precisan las Convenciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el trabajo infantil y sus peores formas dañan la salud de los niños, ponen en peligro su educación y conducen a una mayor explotación y abusos. UNICEF no pone reparos a que los niños trabajen en sus casas, en las granjas o negocios familiares, siempre y cuando ese trabajo no ponga en peligro su salud y bienestar ni impida que vayan a la escuela y tengan tiempo para jugar.

DATOS Y CIFRAS

- En 2004 había 218 millones de niños y niñas sometidos al trabajo infantil, excluyendo el trabajo infantil doméstico¹.
- Se cree que unos 126 millones de niños y niñas de entre 5 a 17 años realizan trabajos peligrosos.
- Se calcula que los niños y niñas representan de un 40% a un 50% de todas las víctimas del trabajo forzado, o 5,7 millones de niños y niñas atrapados en el trabajo forzado y el trabajo en condiciones de servidumbre.
- Se calcula que los niños y niñas representan de un 40% a un 50% de todas las víctimas del trabajo forzado, o 5,7 millones de niños y niñas atrapados en el trabajo forzado y el trabajo en condiciones de servidumbre².

CREAR UN AMBIENTE PROTECTOR PARA LA INFANCIA

- Capacidad y compromiso de los gobiernos: la responsabilidad de cualquier gobierno es proporcionar a los niños y niñas acceso a la educación y responder con medidas prácticas para prevenir el trabajo infantil. Es imprescindible ofrecer una educación gratuita, obligatoria, adecuada y de buena calidad.
- Legislación y aplicación de la misma: los gobiernos deben promulgar y hacer respetar leyes y regulaciones contra el trabajo infantil. Tal como lo exige la Convención 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, es esencial formular un plan de medidas nacionales en el menor tiempo posible.
- Actitudes, costumbres y prácticas: las niñas son quienes corren un riesgo mayor de que se las envíe a trabajar en vez de ir a la escuela. La comprensión, por parte de los progenitores y la comunidad, de los beneficios de la educación, junto con un fuerte rechazo social hacia los patrones explotadores, ayudará a disminuir este peligro.
- Debate abierto: la sociedad civil y el compromiso de los medios de comunicación pueden cambiar las actitudes que toleran el trabajo infantil. Concienciar sobre los efectos perjudiciales en la salud y el desarrollo del niño ayudará a mitigar la vulnerabilidad de los niños y niñas a los abusos.
- Aptitudes para la vida práctica, conocimiento y participación de los niños y niñas: los niños y niñas pueden ser agentes de cambio mediante la participación activa y el contacto con los progenitores, patrones y otros adultos. Con un plan de estudios adecuado y programas de formación profesional adaptados a las circunstancias de los estudiantes, aumentará su asistencia a la escuela.
- Función de la familia y la comunidad: la creación de programas sociales de asistencia a familias necesitadas que les ayuden a encontrar ingresos alternativos para reemplazar a los conseguidos con el trabajo de sus hijos o hijas puede ayudar a prevenir el trabajo infantil.

¹ Oficina Internacional del Trabajo, *La eliminación del trabajo infantil: un objetivo a nuestro alcance, Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, Conferencia Internacional del Trabajo, 95a reunión, 2006, Informe I (B), OIT, Ginebra, 2006.*

² Programa internacional sobre la eliminación del trabajo infantil, *Helping Hands or Shackled Lives? Understanding child domestic labour and responses to it, OIT, Ginebra, 2004, p. III.*

También es necesario este respaldo en el caso de niños y niñas que ejercen de cabezas de familia, de huérfanos y de niños o niñas vulnerables a causa del VIH/SIDA. Habría que capacitar a los representantes de escuelas, iglesias, sindicatos y organizaciones no gubernamentales para que valoren las razones por las que trabajan los niños y encuentren un medio de asegurar su asistencia a la escuela.

- Servicios esenciales, como la prevención, recuperación y reintegración: se puede aplicar un horario escolar flexible a las necesidades de las niñas y niños trabajadores. Los programas de educación extraoficial pueden servir de preparación para que los niños y niñas que trabajaban reanuden los estudios a tiempo completo, y la formación profesional puede ofrecer aptitudes para que sean productivos cuando se conviertan en adultos.
- Control, información y supervisión: ¿Cuántos niños y niñas están ocupados laboralmente? ¿Qué clase de trabajo realizan? Para supervisar medidas protectoras, asegurar que los patrones cumplan las leyes correspondientes y llevar a cabo medidas jurídicas si fuera necesario, los gobiernos, servicios sociales y todos los organismos que trabajan con la infancia necesitan tener esta información.

EJEMPLOS DE UNICEF EN ACCIÓN

En la India, UNICEF y sus asociados trabajaron para disminuir la tasa de trabajo infantil al reducir la carga de deudas de las familias mediante la formación de grupos de autoayuda y el aumento del número de inscripciones en las escuelas. En Andhra Pradesh y Maharashtra se ofreció preparación para la vida práctica a las adolescentes y a los trabajadores infantiles. La documentación de éstas y otras experiencias positivas llevaron a una defensa más efectiva con los aliados estatales y con las organizaciones no gubernamentales y a un aumento de la asignación presupuestaria del gobierno y del apoyo de los donantes.

En Marruecos, UNICEF y sus asociados trabajan para reducir el número de niñas y niños trabajadores en el sector de la artesanía de Fez. A comienzos del curso escolar de 2005, el número de menores de 12 años a los que se había retirado del trabajo superaba los 600, y el 80 % de ellos eran niñas que trabajaban en la industria del tejido de alfombras.

En Senegal, un acuerdo de cancelación de deuda entre los gobiernos de Italia y Senegal firmado en 2005 va a suministrar fondos para estrategias de reducción de la pobreza, en particular para la eliminación del trabajo infantil. Parte de los fondos disponibles permitirá que el gobierno de Senegal contribuya al proyecto respaldado por UNICEF para la eliminación del trabajo infantil. El acuerdo es en parte el resultado de las actividades de UNICEF con miras a integrar la protección del niño dentro de los documentos de estrategia para la reducción de la pobreza nacional.

MATRIMONIO INFANTIL

DERECHOS HUMANOS

El derecho a elegir y aceptar libremente el matrimonio está reconocido en la **Declaración Universal de Derechos Humanos** (1948), que admite que el consentimiento no puede ser “libre y completo” cuando una de las partes involucradas no es lo suficientemente madura como para tomar una decisión con conocimiento de causa sobre su pareja. **La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer** (1979) estipula que el compromiso matrimonial y el casamiento de un niño o niña no tendrán efectos jurídicos y que se deben tomar todas las medidas necesarias, incluidas las legislativas, para especificar una edad mínima de matrimonio. La edad recomendada por el comité sobre la eliminación de discriminación contra la mujer es de 18 años.

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

El matrimonio infantil es una respuesta a la miseria y al mismo tiempo una práctica perniciosa que mantiene a las familias atrapadas en la pobreza. Las niñas y niños casados prematuramente suelen sentirse aislados, se les aleja de sus familiares más cercanos, se les saca de la escuela y se les niega la relación con los de su edad y con su propia comunidad. El embarazo prematuro lleva a las adolescentes a correr riesgos más graves (incluida la muerte durante el parto), que ponen en peligro la salud de estas jóvenes madres y de sus bebés. Las adolescentes son más susceptibles a contraer enfermedades sexuales que las mujeres de más edad. Puesto que el matrimonio antes de los 18 años es frecuente en muchos países en dificultades, esta práctica llega a ser un obstáculo para casi todos los objetivos de desarrollo: acabar con la pobreza y el hambre (ODM 1); lograr una educación primaria universal (2); promover la igualdad entre los géneros (3.); proteger las vidas de los niños (4); y mejorar la salud (5, 6).

El matrimonio infantil viola los derechos humanos independientemente de si la persona involucrada es un niño o una niña, pero sin duda se trata de la forma más generalizada de abuso sexual y explotación de las niñas. Algunas consecuencias negativas son la separación de la familia y los amigos, la falta de libertad para relacionarse con las personas de la misma edad y participar en las actividades comunitarias, y una reducción de las oportunidades de recibir una educación. El matrimonio infantil también puede acarrear trabajos forzados, esclavitud, prostitución y violencia contra las víctimas. Puesto que no pueden evitar las relaciones sexuales ni insistir en el uso del preservativo, las novias menores de edad se exponen a graves riesgos para su salud, como los embarazos prematuros, las infecciones transmitidas sexualmente y, cada vez más, al VIH/SIDA.

Los progenitores a veces consienten estos matrimonios por necesidades económicas. En estos casos, el matrimonio se considera como un medio de proporcionar a sus hijas una tutela masculina, de protegerlas contra las agresiones sexuales, de evitar embarazos sin estar casadas, de alargar sus años de fecundidad o de asegurar su obediencia en el hogar del marido.

DATOS Y CIFRAS

- El 36% de las mujeres de 20 a 24 años de todo el mundo se casaron o vivían en pareja antes de cumplir los 18 años³.
- Se calcula que 14 millones de adolescentes de entre 15 a 19 años dan a luz cada año. Las que se encuentran en esta franja de edad tienen más probabilidades de morir durante el embarazo o el parto que las que ya han cumplido 20 años⁴.
- El matrimonio de niñas es más frecuente en África subsahariana y en Asia meridional. En el Níger, el 77% de las mujeres entre 20 y 24 años se casaron antes de cumplir los 18. En Bangladesh, la tasa era del 65%.

CREAR UN AMBIENTE PROTECTOR PARA LA INFANCIA

- Capacidad y compromiso de los gobiernos: la labor del estado y de las instituciones de la sociedad civil es desarrollar y ejecutar unos sistemas que prevengan o rechacen esta práctica. Se necesitarían medidas por parte del gobierno que revisen el derecho consuetudinario y civil. Puesto que el matrimonio infantil está estrechamente relacionado con la escasez económica, el compromiso del gobierno de reducir la pobreza probablemente llevará a una disminución de los matrimonios infantiles.
- Legislación y aplicación de la misma: los gobiernos tienen que establecer una ley por la que la edad mínima de los jóvenes para contraer matrimonio legalmente sea los 18 años y asegurarse de que dicha ley se lleve a la práctica. Fomentar la inscripción de los matrimonios y los nacimientos contribuirá a ejecutar estas leyes.
- Actitudes, costumbres y prácticas: acabar con el matrimonio infantil es complicado, ya que incluso a los progenitores que comprenden su efecto negativo les resulta difícil resistir las presiones económicas y sociales, y de la tradición. Enfrentarse a las actitudes y costumbres que promueven y toleran esta práctica es vital para cambiar la edad adecuada para contraer matrimonio.
- Debate abierto: en muchas culturas, el matrimonio se considera un asunto privado. Las campañas de comunicación pueden ayudar a crear las circunstancias necesarias para debatir sobre este tema y examinar las creencias tradicionales sobre el matrimonio. Para promover un cambio de actitud desde dentro de las comunidades, hay que hacer hincapié en los derechos humanos, especialmente los de las mujeres, incluyendo la igualdad, el acceso a la educación y la liberación de la explotación y la discriminación.
- Aptitudes para la vida práctica, conocimiento y participación de los niños y niñas: es muy importante ampliar el saber y la capacidad de decisión de los niños y niñas, especialmente de estas últimas. Es menos probable que las niñas que han recibido educación acepten casarse a una edad temprana. Los esfuerzos por salvar las diferencias de género incluyen la creación de escuelas acogedoras, de incentivos económicos para padres y madres y el desarrollo de una educación no oficial.

³ Esta cifra no incluye a China. A no ser que se indique de otro modo, las cifras proceden de Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, *Estado Mundial de la Infancia 2006*, UNICEF, Nueva York, 2005, pág. 131.

⁴ Fondo de Población de las Naciones Unidas, *El estado de la población en el mundo 2005: la promesa de igualdad: Equidad de género, salud reproductiva y los Objetivos de Desarrollo del Milenio*, FNUAP, Nueva York, 2005, pág. 50.

- Función de la familia y la comunidad: las organizaciones de mujeres a nivel comunitario necesitan respaldo para actuar como abogadas y educadoras efectivas. Los programas de educación y desarrollo basados en los derechos humanos pueden crear un tipo de dinámica que produzca un cambio en las costumbres, jerarquías y prejuicios vinculados a la tradición del matrimonio infantil.
- Servicios esenciales, como la prevención, recuperación y reintegración: los servicios de orientación sobre abusos, salud reproductiva y protección de infecciones por VIH son fundamentales para las jóvenes. Las jóvenes que escapan de los matrimonios prematuros necesitan de un apoyo inmediato, así como las que huyen de unos progenitores que las obligan a casarse sin desearlo.
- Control, información y supervisión: los estudios demográficos y de salud y las encuestas de indicadores múltiples por conglomerados reúnen datos importantes sobre el hábito y las razones del matrimonio infantil. Los sistemas de control a nivel comunitario también pueden ayudar a dejar constancia sobre la frecuencia de estos matrimonios. Se debería promover la inscripción del matrimonio.

EJEMPLOS DE UNICEF EN ACCIÓN

A nivel mundial, una de las formas en que UNICEF aborda el problema de los matrimonios infantiles es promoviendo la educación de las niñas. Los estudios han demostrado que un mayor nivel de educación las protege contra los matrimonios precoces. UNICEF es el organismo principal de la Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas, cuya misión es que todos los niños y niñas del mundo puedan terminar sus estudios primarios antes de 2015.

En Bangladesh, UNICEF ha recibido fondos de Kishori Abhijan, un proyecto que promueve los derechos de las adolescentes y lucha contra violaciones de derechos como el matrimonio precoz y las dotes infantiles. El proyecto ofrece educación, formación profesional y conexiones con actividades económicas para agrupaciones de muchachas adolescentes con el fin de enseñarles medios para ganarse el sustento.

- *La Ruta del Esclavo* ([enlace](#)): *Nuevas formas de esclavitud* ([enlace](#))

LA RUTA DEL ESCLAVO

La ignorancia o la ocultación de acontecimientos históricos importantes constituye un obstáculo para el entendimiento mutuo, la reconciliación y la cooperación entre los pueblos. Por ello la UNESCO ha decidido romper el silencio sobre la trata negrera y la esclavitud que implicaron a todos los continentes y provocaron trastornos considerables que modelaron en consecuencia nuestras sociedades modernas.

Iniciado en 1994 en Ouidah (Benín), a propuesta de Haití, el proyecto “*La Ruta del Esclavo: resistencia, libertad, patrimonio*” persigue los objetivos siguientes:

- Contribuir a una mejor comprensión de las causas y modalidades de funcionamiento de la esclavitud y la trata negrera, así como de las problemáticas y consecuencias de la esclavitud en el mundo (África, Europa, Américas, Caribe, Océano Índico, Oriente Medio y Asia) ;
- Evidenciar las transformaciones globales y las interacciones culturales derivadas de esta historia;
- Contribuir a una cultura de paz propiciando la reflexión sobre el pluralismo cultural, el diálogo intercultural y la construcción de nuevas identidades y ciudadanías.

Bajo la orientación de un Comité Científico Internacional, el proyecto persigue sus acciones para alentar nuevas investigaciones sobre regiones desatendidas, definir nuevos enfoques para la enseñanza de esta historia, elaborar nuevas guías para la identificación, la preservación y la promoción de sitios e itinerarios de memoria relacionados con la trata negrera y la esclavitud, promover las contribuciones de las personas de ascendencia africana a la construcción de las sociedades contemporáneas y para conservar los archivos escritos y el patrimonio inmaterial vinculado con esta historia.

Desde 2012, nuevas orientaciones conceptuales fueron elaboradas para el proyecto y presentadas a los Estados miembros al fin de tener en cuenta el nuevo contexto Internacional. En ellas se definen los principales ámbitos de acción del proyecto en respuesta a los grandes retos inscritos en la Agenda Internacional, y particularmente en el programa de actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024) como:

- Memoria, historia y legados compartidos
- Interculturalidad, transculturalidad y nuevas formas de identidad y ciudadanía
- Derechos humanos, lucha contra el racismo y la discriminación, nuevas solidaridades y nuevo humanismo
- África y sus diásporas de ayer y hoy

- Culturas vivas y creación artística contemporánea (figuración y escenografía de la esclavitud)
- Educación intercultural, cultura de la paz y dialogo intercultural.

NUEVAS FORMAS DE ESCLAVITUD

El tráfico de seres humanos se define generalmente como "la contratación, el transporte, la transferencia, el alojamiento o la recepción de personas, en la amenaza de recurso o el recurso a la fuerza o a otras formas de coacción, por raptos, fraude, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o por la oferta o la aceptación de pagos o ventajas para obtener el consentimiento de una persona que tiene autoridad sobre otra a efectos de explotación." ("[Protocolo de las Naciones Unidas](#) para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional).

Este comercio no requiere barcos de esclavos, ni cadenas y bolas, pero, el fondo del problema permanece: se trata de la violación de los derechos humanos y de la dignidad humana tal como enunciados en la Declaración Universal de los Derechos humanos de 1948. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) este fenómeno afecta millones de personas, en su mayoría mujeres y niños, en todos los países.

El enfoque de la UNESCO para combatir el tráfico de seres humanos

En el marco del "Proyecto para combatir la trata de las personas en África", la UNESCO lleva a cabo investigaciones sobre los factores específicos que conducen a la trata de mujeres y niños en África, y organiza talleres de formación destinados a los responsables políticos, a las organizaciones no gubernamentales, a los líderes comunitarios y a los medios de comunicación, con el fin de sensibilizar e inspirar políticas para combatir esta forma moderna de esclavitud.

Para mayor información:

- [Normas y Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo \(Organización internacional del Trabajo\)](#)
- [Trabajo infantil](#) (un documento del [Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia](#))
- [Comité de derechos humanos \(Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos\)](#)

Hoy, [varias convenciones internacionales](#) han declarado la esclavitud y el tráfico de seres humanos un "crimen contra la Humanidad" castigado por el derecho penal internacional.

- Trabajo forzoso, formas modernas de esclavitud y trata de seres humanos ([enlace](#)):
 - *Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y del Trabajo Forzoso (IPEC+)* [enlace](#)

El Programa de referencia mundial IPEC+ reúne dos programas de cooperación técnica primordiales de la OIT: el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) y el Programa Especial de Acción para Combatir el Trabajo Forzoso (SAP-FL), con el fin de establecer una nueva fuerza importante en la lucha contra el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas. Reconoce que estas formas inaceptables de trabajo niegan a los trabajadores sus derechos humanos básicos en el trabajo y que, si bien su solapamiento afecta a 4,5 millones de niños atrapados en formas contemporáneas de esclavitud, comparten causas fundamentales de la gobernanza deficiente, la discriminación y la exclusión social, la pobreza en las familias y comunidades, y la falta de acceso al trabajo decente y a los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva.

El objetivo del Programa de referencia mundial IPEC+, en consonancia con la Meta 8.7 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es proporcionar el liderazgo de la OIT a los esfuerzos desplegados a escala mundial para erradicar todas las formas de trabajo infantil para 2025 y todas las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas para 2030. También pretende asegurar que se brinde protección a todas las personas – y que éstas puedan protegerse a sí mismas – contra estas graves vulneraciones de los derechos humanos.

El Programa de referencia mundial IPEC+ colabora con los interlocutores sociales tripartitos de la OIT desde las comunidades hasta el escenario mundial – gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores - así como con las empresas y con las organizaciones de pequeños productores, con objeto de erradicar el trabajo infantil y el trabajo forzoso, y de hacer realidad todos los derechos fundamentales en el trabajo, centrándose en:

- ✓ las economías rurales e informales;
- ✓ las empresas y las cadenas mundiales de producción;
- ✓ los países en situaciones de crisis y de fragilidad.

- Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 ([enlace](#)) (ratificado por España el 20 de septiembre de 2017).

Preámbulo

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 28 de mayo de 2014, en su 103.^a reunión;

Reconociendo que la prohibición de la utilización del trabajo forzoso u obligatorio forma parte de los derechos fundamentales, y que el trabajo forzoso u obligatorio constituye una violación de los derechos humanos, atenta contra la dignidad de millones de mujeres, hombres, niñas y niños, contribuye a perpetuar la pobreza y es un obstáculo para la consecución del trabajo decente para todos;

Reconociendo el papel fundamental que desempeñan el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), en adelante, el «Convenio», y el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), para luchar contra todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, pero que las lagunas en su aplicación requieren la adopción de medidas adicionales;

Recordando que la definición de trabajo forzoso u obligatorio prevista en el artículo 2 del Convenio abarca el trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas y manifestaciones, y se aplica a todos los seres humanos sin distinción;

Recalcando la urgencia de eliminar el trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas y manifestaciones;

Recordando que los Miembros que han ratificado el Convenio tienen la obligación de cerciorarse de que el trabajo forzoso u obligatorio sea objeto de sanciones penales, con inclusión de sanciones impuestas por la ley que sean realmente eficaces y se apliquen estrictamente;

Tomando nota de que ha expirado el período transitorio previsto en el Convenio, y de que las disposiciones del artículo 1, párrafos 2 y 3, y de los artículos 3 a 24 ya no son aplicables;

Reconociendo que el contexto y las formas del trabajo forzoso u obligatorio han cambiado y que la trata de personas con fines de trabajo forzoso u obligatorio, que puede implicar explotación sexual, suscita una creciente preocupación internacional y que su eliminación efectiva requiere acciones urgentes;

Tomando nota de que un número creciente de trabajadores se encuentran en situación de trabajo forzoso u obligatorio en la economía privada, de que ciertos sectores de la economía son particularmente vulnerables, y de que ciertos grupos de trabajadores corren un riesgo mayor de ser víctimas de trabajo forzoso u obligatorio, en particular los migrantes;

Tomando nota de que la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio contribuye a garantizar una competencia leal entre los empleadores, así como protección a los trabajadores;

Recordando las normas internacionales del trabajo pertinentes, en particular el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), el Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), el Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97), el Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143), el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), el Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), y el Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129), así como la

Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998), y la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa (2008);

Tomando nota de otros instrumentos internacionales pertinentes, en particular la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención sobre la esclavitud (1926), la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud (1956), la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (2000), el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (2000), el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire (2000), la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990), la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1984), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006);

Habiendo decidido adoptar diversas proposiciones para subsanar las lagunas en la aplicación del Convenio, y reafirmado que las medidas de prevención y de protección y las acciones jurídicas y de reparación, tales como indemnización y readaptación, son necesarias para lograr la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio, de conformidad con el cuarto punto del orden del día de la reunión, y

Habiendo decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un protocolo relativo al Convenio,

adopta, con fecha once de junio de dos mil catorce, el siguiente Protocolo, que podrá ser citado como el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930.

Artículo 1

- 1. Al dar cumplimiento a sus obligaciones en virtud del Convenio de suprimir el trabajo forzoso u obligatorio, todo Miembro deberá adoptar medidas eficaces para prevenir y eliminar su utilización, proporcionar a las víctimas protección y acceso a acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces, tales como una indemnización, y sancionar a los autores del trabajo forzoso u obligatorio.
- 2. Todo Miembro deberá formular, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, una política y un plan de acción nacionales a fin de lograr la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio que prevea la adopción de medidas sistemáticas por parte de las autoridades competentes y, si procede, en coordinación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como con otros grupos interesados.
- 3. Se reafirma la definición de trabajo forzoso u obligatorio contenida en el Convenio y, por consiguiente, las medidas mencionadas en el presente Protocolo deberán incluir actividades específicas para luchar contra la trata de personas con fines de trabajo forzoso u obligatorio.

Artículo 2

Las medidas que se han de adoptar para prevenir el trabajo forzoso u obligatorio deberán incluir:

- (a) educación e información destinadas en especial a las personas consideradas particularmente vulnerables, a fin de evitar que sean víctimas de trabajo forzoso u obligatorio;
- (b) educación e información destinadas a los empleadores, a fin de evitar que resulten involucrados en prácticas de trabajo forzoso u obligatorio;
- (c) esfuerzos para garantizar que:
 - (i) el ámbito de la legislación relativa a la prevención del trabajo forzoso u obligatorio y el control de su cumplimiento, incluida la legislación laboral si procede, abarquen a todos los trabajadores y a todos los sectores de la economía, y
 - (ii) se fortalezcan los servicios de inspección del trabajo y otros servicios responsables de la aplicación de esta legislación;
- (d) la protección de las personas, en particular los trabajadores migrantes, contra posibles prácticas abusivas y fraudulentas en el proceso de contratación y colocación;
- (e) apoyo a los sectores público y privado para que actúen con la debida diligencia a fin de prevenir el trabajo forzoso u obligatorio y de responder a los riesgos que conlleva; y
- (f) acciones para abordar las causas generadoras y los factores que aumentan el riesgo de trabajo forzoso u obligatorio.

Artículo 3

Todo Miembro deberá adoptar medidas eficaces para identificar, liberar y proteger a todas las víctimas de trabajo forzoso u obligatorio y para permitir su recuperación y readaptación, así como para proporcionarles otras formas de asistencia y apoyo.

Artículo 4

- 1. Todo Miembro deberá velar por que todas las víctimas de trabajo forzoso u obligatorio, independientemente de su situación jurídica o de que se encuentren o no en el territorio nacional, tengan acceso efectivo a acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces, tales como una indemnización.
- 2. Todo Miembro deberá adoptar, de conformidad con los principios fundamentales de su sistema jurídico, las medidas necesarias para velar por que las autoridades competentes puedan decidir no enjuiciar ni imponer sanciones a las víctimas de trabajo forzoso u obligatorio por su participación en actividades ilícitas que se han visto obligadas a cometer como consecuencia directa de estar sometidas a trabajo forzoso u obligatorio.

Artículo 5

Los Miembros deberán cooperar entre sí para garantizar la prevención y la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.

Artículo 6

Las medidas adoptadas para aplicar las disposiciones del presente Protocolo y del Convenio deberán ser determinadas por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas.

Artículo 7

Se suprimen las disposiciones transitorias del artículo 1, párrafos 2 y 3, y de los artículos 3 a 24 del Convenio.

Artículo 8

- 1. Un Miembro podrá ratificar el presente Protocolo al mismo tiempo que ratifica el Convenio, o en cualquier momento después de la ratificación del mismo, comunicando la ratificación formal, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
- 2. El Protocolo entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General. Desde dicho momento, el presente Protocolo entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha de registro de su ratificación. A partir de ese momento, el Convenio será obligatorio para el Miembro interesado, con la adición de los artículos 1 a 7 del presente Protocolo.

Artículo 9

- 1. Todo Miembro que haya ratificado el presente Protocolo podrá denunciarlo en todo momento en que el Convenio esté abierto a la denuncia de conformidad con su artículo 30, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
- 2. La denuncia del Convenio de conformidad con sus artículos 30 ó 32 implicará, ipso jure, la denuncia del presente Protocolo.
- 3. Toda denuncia del presente Protocolo efectuada de conformidad con los párrafos 1 ó 2 de este artículo no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

Artículo 10

- 1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.

- 2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación, el Director General señalará a la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Protocolo.

Artículo 11

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, para su registro de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y denuncias registradas por el Director General.

Artículo 12

Las versiones inglesa y francesa del texto del presente Protocolo son igualmente auténticas.

- Informe sobre esclavitud moderna, elaborado conjuntamente por la OIT y la Walk Free Foundation relativo al período 2012-2016, en asociación con la Organización Mundial de Migraciones, Ginebra, 2017. [Enlace](#)

OSCE

- Lucha contra la trata de personas ([enlace](#))

La trata de personas afecta a prácticamente todos los Estados de la OSCE, ya sea como países de origen o de destino. Esta modalidad moderna de esclavitud es un ultraje a la dignidad humana, que a menudo conlleva terror psicológico y violencia física. La trata de personas plantea cuestiones relativas a los derechos humanos y el Estado de derecho, la aplicación coercitiva de las leyes y el control de la delincuencia, la desigualdad y la discriminación, la corrupción, las privaciones económicas y la migración.

En sí misma, la trata de personas afecta a prácticamente todos los Estados de la OSCE, ya sea como países de origen, de tránsito o de destino. Esta modalidad moderna de esclavitud es un ultraje a la dignidad humana, que a menudo conlleva el terror psicológico y la violencia física. La OSCE se ocupa de muchas cuestiones relacionadas con la trata de personas: los derechos humanos y el Estado de derecho, la corrupción y el control de la delincuencia, la discriminación y la desigualdad, y las políticas económicas, laborales y relativas a la migración.

En 2003, la Organización estableció [la Oficina y el cargo del Representante Especial y Coordinador para la Lucha contra la Trata de Personas](#) a fin de ayudar a [los Estados participantes](#) a que elaborasen y aplicasen políticas efectivas para luchar contra la trata de personas. La Oficina del Representante Especial promueve un enfoque centrado en las víctimas y basado en los derechos humanos a la hora de amparar a las víctimas.

- Plan de Acción de la OSCE contra la trata de personas ([enlace](#)):

Es el marco de las actividades de la OSCE para apoyar las iniciativas de lucha contra la trata de los Estados participantes. Incluye recomendaciones esenciales para tomar medidas a nivel nacional, conocidas como las “3 P”:

- **Prevención**, incluida la concienciación y la gestión de las causas originales;
- **Prosecución judicial**, lo que incluye la investigación y la cooperación con las fuerzas policiales internacionales; y
- **Protección** de los derechos de las víctimas, lo que incluye brindarles asistencia y una compensación.

En 2013, la OSCE añadió una cuarta “P” (un capítulo sobre partenariados), para destacar la necesidad de mejorar la cooperación con las organizaciones internacionales y otros asociados, entre otras cosas también acerca de cuestiones relativas a las fuerzas policiales, los mecanismos de remisión nacionales y la labor conjunta de las instituciones públicas y el sector privado.

Algunas de las operaciones de la OSCE sobre el terreno ayudan a reforzar las capacidades de las autoridades nacionales y locales, así como de las organizaciones de la sociedad civil, para que puedan prevenir y combatir la trata de personas, fortalecer los procesos judiciales y ayudar

a las víctimas. También imparten seminarios y cursos de formación para, entre otros destinatarios, agentes policiales, guardias fronterizos, jueces, fiscales, abogados, trabajadores sociales, líderes religiosos y medios informativos; realizan encuestas y estudios, y campañas de información para el público.

CONSEJO DE EUROPA

- Convenio Europeo de Derechos Humanos - [Enlace al documento](#)

Relativo al tema que nos ocupa tenemos el artículo 4, que dice lo siguiente:

Artículo 4. Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado.

1. Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre.
2. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio.
3. No se considera como «trabajo forzado u obligatorio» en el sentido del presente artículo:
 - a) Todo trabajo exigido normalmente a una persona privada de libertad en las condiciones previstas por el artículo 5 del presente Convenio, o durante su libertad condicional.
 - b) Todo servicio de carácter militar o, en el caso de objetores de conciencia en los países en que la objeción de conciencia sea reconocida como legítima, cualquier otro servicio sustitutivo del servicio militar obligatorio.
 - c) Todo servicio exigido cuando alguna emergencia o calamidad amenacen la vida o el bienestar de la comunidad.
 - d) Todo trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

- Convención para la acción contra la Trata de Derechos Humanos - [Enlace al documento](#)

Este tratado se centra en la protección de las víctimas de trata y de sus derechos. Asimismo intenta evitar la trata de seres humanos y enjuiciar a los culpables.

La convención se aplica a todas las formas de trata, sea cual sea la naturaleza de la víctima y cualquiera que sea la forma de explotación.

Además, la Convención establece un mecanismo de vigilancia con dos grupos de trabajo:

- GRETA, grupo de expertos independientes para la acción contra la trata de seres humanos: supervisa la aplicación de la Convención y elabora informes de evaluación de las medidas adoptadas por los estados.
- Comité de los Estados miembros, compuesto por los representantes en el Comité de Ministros de los estados de la Convención y de los representantes de los estados no miembros del Consejo de Europa: sobre la base del informe de GRETA puede formular recomendaciones a los estados.
- Informes GRETA - [Enlace](#)
 - Último Informe GRETA - (*8th GENERAL REPORT ON GRETA'S ACTIVITIES*): - [Enlace al documento](#)

En este último informe, se enumeran una serie de obligaciones jurídicas basadas en la Convención sobre la Trata del Consejo de Europa, especialmente aquellas relativa a la asistencia a la víctimas de trata: proporción de alojamiento, atención sanitaria, asistencia psicológica y material, información sobre sus derechos, asistencia jurídica y ayuda para su reinserción en la sociedad.

El 8º Informe de GRETA es un resumen detallado de las actividades llevadas a cabo por este grupo de expertos entre enero y diciembre de 2018.

Este último informe contiene una serie de ejemplos, país por país, de como se ha ido desarrollando la legislación y las políticas y prácticas dictadas por la Convención contra la trata de personas. Asimismo señala las áreas para mejorar.

- INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Segundo informe sobre los progresos realizados en la lucha contra la trata de seres humanos (2018) con arreglo al artículo 20 de la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas - [Enlace al documento](#)

JURISPRUDENCIA RELACIONADA

Se ha realizado una recopilación y selección de jurisprudencia a partir de la base de datos HUDOC ([enlace a la base de datos](#)) del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El TEDH es la máxima autoridad judicial para garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales en Europa. Este órgano judicial se creó en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuyo artículo 4 recoge la prohibición de esclavitud, servidumbre y trabajo forzado.

Sentencias TEDH relativas a este tema:

- **Asunto Van der Musselle contra Bélgica, STEDH de 23 de noviembre de 1983.** [Enlace al documento](#)
- **Asunto Siliadin c. Francia, STEDH de 26 de julio de 2005.** [Enlace al documento](#)
- **Asunto Rantsev c. Chipre y Rusia, Sentencia de 7 de enero de 2010.** [Enlace al documento](#)
- **Asunto C. N. y V. c. Francia, Sentencia de 11 de octubre de 2012.** [Enlace al documento](#)
- **Asunto C. N. c. Reino Unido, de 13 de noviembre de 2012.** [Enlace al documento](#)
- **Asunto J y otros c. Austria, de 17 de enero de 2017.** [Enlace al documento](#)
- **Asunto Chowdury y otros c. Grecia, Sentencia de 30 de marzo de 2017.** [Enlace al documento](#)

Para la selección de estas sentencias se ha tomado como referencia el artículo:

OLARTE ENCABO, Sofía: “La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre esclavitud, servidumbre y trabajo forzado. Análisis crítico desde la perspectiva laboral”. En: *Revista Temas laborales: revista andaluza de trabajo y bienestar social*, ISSN 0213-0750, nº 145, 2018, págs. 55-86.

Parte segunda: LEGISLACIÓN, JURISPRUDENCIA Y DOCUMENTOS DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

ALEMANIA

Fuentes de consulta y referencia

Legislación

- Deutscher Bundestag (página oficial del Parlamento alemán): de esta página se recoge la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania. La versión en alemán es del 23 de mayo de 1949 y la última modificación del 28 de marzo de 2019. Traducción: Prof. Dr. Ricardo García Macho, Universidad Jaime I (Castellón); Prof. Dr. Karl-Peter Sommermann, Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer. [Enlace al documento](#)
- Bundesgesetzblatt I (Hoja Legislativa Federal. Sección I) que se encuentra dentro del Boletín Oficial del Gobierno alemán: [Enlace a la página](#)
- Buzer.de - Leyes y reglamentos de la ley federal alemana en internet: [Enlace a la página](#)
- Dejure.org - Leyes y reglamentos de la ley federal alemana en internet: [Enlace a la página](#)
- Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und das Bundesamt für Justiz - Gesetz und Internet (Ministerio de Justicia y para la Protección del Consumidor y la Oficina Federal de Justicia – Leyes en internet). Permite bajarse la legislación actualizada en distintos formatos: [Enlace a la página](#)
- KOK – Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandele. V. (Grupo de Coordinación Federal contra la Trata de Seres Humanos e.V.): [Enlace a la página](#)
- KOK – Apartado: **Fundamentos legales en Alemania:** [Enlace a la página](#)

Jurisprudencia

- KOK – Apartado: **Base de datos de jurisprudencia:** [Enlace a la página](#)
- openJur - Base de datos de jurisprudencia: [Enlace a la página](#)

Legislación

LEY FUNDAMENTAL DE LA REPÚBLICA FEDERAL ALEMANA.

[Enlace al documento](#)

Se han extrapolado los artículos y párrafos de constitución alemana relacionados con los derechos humanos.

I. Derechos Fundamentales:

Artículo 1 [Protección de la dignidad humana, vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales]

(1) La dignidad humana es intangible. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público.

Artículo 3 [Igualdad ante la ley]

(3) Nadie podrá ser perjudicado ni favorecido a causa de su sexo, su ascendencia, su raza, su idioma, su patria y su origen, sus creencias y sus concepciones religiosas o políticas. Nadie podrá ser perjudicado a causa de un impedimento físico o psíquico.

Artículo 12 [Libertad de profesión, prohibición del trabajo forzoso]

(2) Nadie puede ser obligado a un trabajo determinado salvo en el marco de un deber público de prestación que sea habitual, general y igual para todos. I

(3) El trabajo forzoso es admisible sólo en el caso de privación de libertad ordenada judicialmente.

CÓDIGO PENAL / STRAFGESETZBUCH (StGB).

- Fuentes:
 - Código Penal promulgado el 13 de noviembre de 1998 (Bundesgesetzblatt (BGBl.) I, n° 75, de 19 de noviembre de 1998, pág. 3322): [Enlace al documento](#)
 - Código Penal (actualizado): [Enlace al documento](#)
 - Código Penal (actualizado y con posibilidad de bajar en pdf etc.): [Enlace al documento](#)

- Sobre las traducciones:

Se ha utilizado en la mayor parte la traducción del Código Penal, del 15 de mayo de 1871, con la última reforma del 31 de enero de 1998, traducción de Claudia López Díaz (Universidad Externado de Colombia): [Enlace al documento](#)

Se han realizado por parte del propio CEPC las traducciones de los artículos 232-233b y de los artículos 237, 238 y 239a. Estas traducciones se han llevado a cabo por parte de documentalistas y bibliotecarios sin un conocimiento profundo del lenguaje jurídico. Por tanto, incluimos los enlaces a los artículos originales en alemán.

- Relación de los artículos del Código penal además relativos a la trata de seres humanos, trabajo forzoso y esclavitud:

Parte especial

Apartado Decimoctavo - Hechos punibles contra la libertad personal

Artículo 232. Trata de seres humanos

Artículo 232a. Prostitución forzada

Artículo 232b. Trabajo forzoso

Artículo 233. Explotación laboral

Artículo 233a. Explotación usando la privación de libertad

Artículo 233b. Sujeción a la vigilancia de autoridad

Artículo 234. Secuestro

Artículo 234a. Deportación

Artículo 235. Sustracción de menores

Artículo 236. Trata de niños

Artículo 237. Matrimonio forzado

Artículo 238 Acoso

Artículo 239 Privación de libertad

Artículo 239a Secuestro con extorsión

Artículo 239b Toma de rehenes

Artículo 239c Sujeción a la vigilancia de autoridad

Artículo 240 Coacción

Artículo 241 Amenaza

Artículo 241a Persecución política

Artículo 232 - Trata de personas

[Enlace al artículo](#)

(1) Se castigará con condenas de 6 meses hasta 5 años a una persona que se aprovecha de la situación personal de otra, de su situación económica o de su desamparo asociada con la residencia en un país extranjero; o que capta a otra persona menor de veintiún años, la traslada, transporta, la hace circular, acomoda o recibe cuando

1. esta persona es explotada
 - a) en el ejercicio de la prostitución o en la realización de actos sexuales por parte del agresor o de una tercera persona o en el consentimiento de actos sexuales contra sí por parte del delincuente o de una tercera persona,
 - b) a través de un empleo,
 - c) en la explotación de la mendicidad,
 - d) en la comisión de actos punibles
2. mantiene a esta persona en esclavitud, servidumbre o en situaciones que se correspondan o se parezcan a esto, o
3. para la extracción ilegal de un órgano de esta persona

La explotación a través de un empleo en el sentido del primer punto, número 1, letra b) se produce cuando el empleo se realiza a través de una despiadada búsqueda de lucro en condiciones de trabajo sorprendentemente desproporcionadas con las condiciones de trabajo de trabajadores que participan en empleos iguales o comparables (empleo de explotación).

(2) Se aplicarán condenas de entre seis meses y diez años para castigar a quien explota a otra persona de la manera descrita en la primera sección, primera oración, de los números 1 al 3,

1. por la fuerza, por la amenaza con un mal sensible o a través de engaño, capta, traslada, pone en circulación, aloja o recibe o
2. secuestra o sojuzga o favorece su sometimiento por un tercero

(3) En los casos contemplados en el apartado 1, se reconocerá el encarcelamiento de entre seis meses y diez años si:

1. la víctima es menor de dieciocho años en el momento del delito,
2. el perpetrador maltrata físicamente a la víctima durante el delito o, al menos, lo pone en peligro de muerte o grave daño para su salud por el delito o en un acto cometido durante el delito, o
3. el perpetrador actúa comercialmente o como miembro de una banda que se ha confabulado a continuar con la comisión de tales delitos.

En los casos a los que se refiere el apartado 2, se impondrá una pena de prisión de entre uno y diez años si se cumple una de las circunstancias descritas en la oración 1, puntos 1 a 3.

(4) En los casos a los que se refieren los apartados 1, 2 y 3, punto 1 la tentativa es punible.

Artículo 232a - La prostitución forzosa

[Enlace al artículo](#)

- (1) Se aplicarán condenas de entre seis meses y diez años para castigar a quien conduce a otra persona, aprovechándose de su situación personal o económica o de su desvalimiento asociado con la residencia en un país extranjero, o a cualquier persona menor de veintiún años:
 1. a aceptar o continuar con la prostitución o
 2. a realizar actos sexuales, por los que es explotado, por el perpetrador o por una tercera persona, o inducidos a causa del perpetrador o de una tercera persona.
- (2) La tentativa es punible.
- (3) Se impondrán condenas de entre uno y diez años de prisión a quien conduce a otra persona por la fuerza, amenazando con un mal sensible o mediante el engaño, a aceptar o a continuar con la prostitución, o con los actos sexuales mencionados en el apartado 1, punto 2.
- (4) En los casos a los que se hace referencia en el apartado 1, una pena de prisión de un año a diez años y, en el caso del apartado 3, la de prisión no será inferior a un año si se dan las circunstancias mencionadas en la Sección 232, apartado 2, puntos 1-3.
- (5) En los casos menos graves del Párrafo 1, el encarcelamiento será de tres meses a cinco años; en los casos menos graves de los Párrafos 3 y 4, el encarcelamiento será de seis meses a diez años.
- (6) Se castigará con prisión de tres meses a cinco años a cualquier persona que provoque que otra
 1. según la Sección 232, apartado 1, Oración 1, punto 1a del Código Penal, también en relación con la Sección 232, apartado 2, o
 2. en relación con un delito según los apartados 1-5

se convierta en víctima de trata de personas y se dedique a la prostitución realizando actos sexuales a cambio de una remuneración o induciendo a ello aprovechándose de su situación personal o económica o de su desvalimiento asociado con la residencia en un país extranjero.

Artículo 232b - Trabajo forzoso

[Enlace al artículo](#)

- (1) Se impondrán condenas que van desde los seis meses hasta los diez años para quién conduzca a otra persona, aprovechándose de su situación personal o económica o de su desvalimiento asociado con la residencia en un país extranjero, o a cualquier persona menor de veintiún años:
 1. a aceptar o continuar con un empleo en condiciones de explotación (artículo 232 , párrafo 1, punto 2)
 2. a someterse a esclavitud, servidumbre, servidumbre por endeudamiento o relaciones similares o
 3. a aceptar o continuar la mendicidad por la que es explotada.

- (2) La tentativa es punible.
- (3) Se impondrá una pena de prisión de uno a diez años a toda persona que lleve a otra persona por la fuerza, amenazando un mal sensible o mediante engaños, a:
1. asumir o continuar con un empleo en condiciones de explotación (artículo 232, apartado 1, punto 2),
 2. someterse a esclavitud, servidumbre, servidumbre por endeudamiento o relaciones similares o
 3. aceptar o continuar la mendicidad por la que es explotada.
- (4) Artículo 232a, apartados 4 y 5 se aplicará de manera análoga.

Artículo 233 - Explotación laboral

[Enlace al artículo](#)

- (1) Se castigará con condenas que van hasta los tres años a quién explote a otra persona, aprovechándose de su situación personal o económica o de su desvalimiento asociado con la residencia en un país extranjero, o a cualquier persona menor de veintiún años, a través de:
1. un empleo según el artículo 232, apartado 1, punto 2,
 2. la mendicidad o
 3. la comisión de actos punibles.
- (2) Encarcelamiento de seis meses hasta diez años, cuando:
1. la víctima es menor de dieciocho años en el momento del delito,
 2. el perpetrador maltrate físicamente a la víctima, o al menos, imprudentemente, le ponga en peligro de muerte o de lesiones graves para la salud a través del delito o en un acto cometido durante el delito,
 3. el perpetrador ponga a la víctima en dificultad económica por la retención total o parcial de la normal contraprestación de servicios por el trabajo de la víctima, o aumente considerablemente una dificultad económica ya existente o
 4. el perpetrador actúe como miembro de una banda que se ha unido para la comisión continua de tales actos.
- (3) La tentativa es punible.
- (4) En los casos menos severos del apartado 1, implicará encarcelamiento de hasta dos años o una multa, en casos menos severos del apartado 2, un encarcelamiento de tres meses a cinco años
- (5) Se impondrá una pena de prisión de hasta dos años o una multa a toda persona que, promueva un delito de conformidad con el apartado 1, punto 1, por medio de:
1. la mediación/facilitación de un empleo en condiciones de explotación (artículo 232, apartado 1, punto 2),
 2. el alquiler de locales comerciales o
 3. el alquiler de habitaciones para que viva la persona explotada.

El punto 1 no se aplica si el delito ya está apercibido por otras regulaciones con castigos más severos.

Artículo 233a - Explotación usando la privación de libertad

[Enlace al artículo](#)

- (1) Se castigará con condenas que van de seis meses hasta diez años a quien encarcele a otra persona o la prive de libertad de otras maneras y la explote en esta situación en los siguientes casos:
 1. en la práctica de la prostitución,
 2. a través de una ocupación conforme al artículo 232, apartado 1, punto 2
 3. en el ejercicio de la mendicidad o
 4. en la comisión de actos punibles por parte de esta persona.
- (2) La tentativa es punible.
- (3) En los casos mencionados en el apartado 1, implicará una sentencia de prisión de uno a diez años si se da una de las circunstancias descritas en el artículo 233, apartado 2, puntos 1 al 4.
- (4) En casos menos severos, el apartado 1 implicará encarcelamiento de tres meses a cinco años, y en casos menores del apartado 3, encarcelamiento de seis meses a diez años.
- (...)

Artículo 233b Sujeción a la vigilancia de autoridad

[Enlace al artículo](#)

En los casos de los artículos 232, 232a (1) a (5), artículos 232b, 233 (1) a (4) y artículo 233a, el tribunal puede ordenar la supervisión penal (sección 68 (1)).

Artículo 234 -Secuestro

[Enlace al artículo](#)

- (1) Quien con violencia por medio de amenaza con un mal considerable o por astucia se apodere de una persona, para exponerla a una situación de desamparo, o para llevarla a la esclavitud, servidumbre, o a servicios en establecimientos militares o paramilitares en el exterior, será castigado con pena privativa de libertad no inferior a un año.
- (2) En casos menos graves la pena es de privación de libertad de seis meses hasta cinco años.

Artículo 234a - Deportación

[Enlace al artículo](#)

- (1) Quien deporte indebidamente a otro con astucia, amenaza o con violencia a un territorio fuera del ámbito espacial de validez de ésta ley, o disponga que se dirija hacia allí, o impida que regrese de allí y con ello en contradicción con principios del estado de derecho por medio de violencia o de medidas arbitrarias lo exponga al peligro de ser perseguido por razones políticas e incluso a sufrir

daños en su integridad física o vida, a ser privado de la libertad, o ser perjudicado considerablemente en su posición profesional o económica,, será castigado con pena privativa de libertad no inferior a un año.

- (2) En casos menos graves el castigo será de pena privativa de libertad de tres meses hasta cinco años.
- (3) Quien prepare tal hecho, será castigado con pena privativa de libertad hasta cinco años o con multa.

Artículo 235 - Sustracción de menores de edad

[Enlace al artículo](#)

- (1) Será castigado con pena de privación de la libertad hasta cinco años o con multa quien
 - 1. sustraiga o retenga a una persona menor de 18 años con violencia a través de amenaza con un mal considerable o por medio de astucia,
 - 2. sustraiga o retenga a un niño de sus padres, de uno de sus padres progenitores, del tutor o del curador.
- (2) De igual manera será castigado quien
 - 1. sustraiga un menor de sus padres, de uno de sus padres progenitores, del tutor o el curador con el fin de llevarlo al extranjero, o
 - 2. retenga un menor separado de sus padres, de uno de sus padres progenitores, del tutor o del curador, en el extranjero después de haber sido llevado o trasladado allá.
- (3) En los casos del punto (1) n° 2 y del punto 2 n° 1, la tentativa es punible.
- (4) Se impondrá pena privativa de libertad de uno a diez años cuando el autor
 - 1. por sus actos ponga a la víctima en peligro de muerte o le pueda ocasionar un grave perjuicio de salud o un perjuicio considerable para su desarrollo físico o psíquico, o
 - 2. cometa el acto con ánimo de lucro o con el propósito de enriquecerse para sí o para un tercero
- (5) Si por los hechos el autor causa la muerte de la víctima, entonces el castigo es pena privativa de la libertad no inferior a tres años.
- (6) En casos menos graves del punto (4) se impondrá pena privativa de libertad de 6 meses hasta cinco años; en casos menos graves del punto (5) la pena privativa de la libertad es de uno hasta diez años
- (7) La sustracción de menores de edad en los casos de los puntos 1 a 3 se perseguirá solamente a instancia de parte, a menos que la autoridad penal persecutora a causa del interés público especial considere una intervención de oficio.

Artículo 236 - Trata de niños

[Enlace al artículo](#)

- (1) Quien deje a término indefinido y con ánimo de lucro su hijo menor de 14 años bajo grave descuido de su deber de asistencia y educación a otra persona, o actuando con el propósito de enriquecerse a sí mismo o a un tercero, será castigado con pena privativa de libertad hasta cinco años o con multa. De la misma manera será castigado quien en los casos de la frase 1 acoja al menor a término indefinido y concedan remuneración para éste propósito.
- (2) Quien sin autorización
 1. medie en la adopción de una persona menor de 18 años, o
 2. ejerza una actividad mediadora que tiene como propósito la acogida a término indefinido de una persona menor de 18 años por parte de un tercero,
 3. actuando contra remuneración o con el propósito de lucrarse a mismo o a otro, será castigado con pena privativa de libertad hasta tres años o con multa. Si el autor consigue en los casos de la frase 1 que la persona implicada sea trasladada al interior o exterior, entonces el castigo es pena privativa de libertad hasta cinco años o multa.
- (3) La tentativa es punible
- (4) Debe imponerse una pena privativa de libertad de seis meses hasta diez años, cuando el autor
 1. actúe con ánimo de lucro, profesionalmente o como miembro de una banda que se ha asociado para la comisión continua de la trata de niños, o
 2. conduzca al menor o la persona implicada por el hecho al peligro de un perjuicio considerable de su desarrollo físico o psíquico.
- (5) En los casos del punto (1) en caso de partícipes, y del punto (2) en caso de cómplices cuya culpabilidad es mínima en consideración con el bienestar físico y psíquico del menor o de la persona implicada, el tribunal puede disminuir la pena según su discrecionalidad (artículo 49 punto 2) o prescindir de ella según los puntos 1 a 3.

Artículo 237 - Matrimonio forzado

[Enlace al artículo](#)

- (1) Toda persona que obligue ilegalmente a otra a contraer matrimonio por la fuerza o amenazándola con un mal coercitivo, será castigada con una pena de prisión de seis meses a cinco años. El acto es ilegal si el uso de la fuerza o la amenaza del mal ha de considerarse reprobable para el fin previsto.
- (2) Se castigará asimismo a toda persona que, por la fuerza, amenaza de un mal o engaño grave, lleve a una persona a una zona fuera del ámbito territorial de la presente ley o le haga ir allí o le impida regresar de allí para cometer un delito de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1.
- (3) La tentativa es punible.
- (4) En casos menos severos, la condena de prisión es de hasta tres años o una multa.

Artículo 238 - Acoso

[Enlace al artículo](#)

- (1) Será castigada con una pena de prisión de hasta tres años o con una multa quien acose a otra persona de una manera capaz de dañar gravemente su estilo de vida mediante la persistente
 1. búsqueda de la cercanía física de esta persona,
 2. intentando establecer contacto con esta persona utilizando telecomunicaciones u otros medios de comunicación o a través de un tercero,
 3. mal uso de los datos personales de esta persona,
 - a) para obtener bienes o servicios o
 - b) inducir a terceros a contactar con él o
 4. amenaza a esta persona con lesiones vitales, su integridad física, salud o su propia libertad , la de alguno de sus familiares o la de cualquier otra persona cercana a ella, o
 5. realizando otro acto comparable.
- (2) Se reconoce el encarcelamiento de entre tres meses y cinco años si el autor pone a la víctima, a un familiar de la víctima o a cualquier otra persona cercana a la víctima en riesgo de muerte o daños graves para su salud.
- (3) Si el perpetrador causa la muerte de la víctima, de un familiar de la víctima o de otra persona cercana a la víctima, la sentencia será de prisión de entre uno y diez años.
- (4) En los casos a los que se hace referencia en el párrafo (1), el delito será enjuiciado sólo a instancia de parte, a menos que la fiscalía considere necesario intervenir de oficio debido al interés público en el procesamiento.

Artículo 239 - Privación de la libertad

[Enlace al artículo](#)

- (1) Quien encierre a una persona o de otra manera la prive de su libertad, será castigado con pena privativa de libertad hasta cinco años o con multa.
- (2) La tentativa es punible
- (3) Debe imponerse pena privativa de libertad de uno hasta diez años, cuando el autor
 1. prive a la víctima de libertad por más de una semana, o
 2. haya causado por el hecho o por una acción cometida durante el hecho un grave perjuicio de salud a la víctima.
- (4) Si el autor por el hecho o por una acción cometida durante el hecho causa la muerte de la víctima, incurrirá en pena privativa de libertad no inferior a tres años.
- (5) En casos menos graves del punto 3 se impondrá pena privativa de libertad de seis meses hasta diez años; en casos menos graves del punto 4 se impondrá pena privativa de libertad de un año hasta diez años.

Artículo 239a -Secuestro con extorsión

[Enlace al artículo](#)

- (1) Quien secuestre a una persona, o se apodere de una persona, para aprovechar la preocupación de la víctima por su bienestar o para aprovechar la preocupación de un tercero para su extorsión (artículo 253), o quien aproveche la situación de la persona creada por él por medio de tal extorsión, el castigo será de pena privativa de libertad no inferior a cinco años.
- (2) En casos menos graves, el castigo será de pena privativa de libertad no inferior a un año.
- (3) Si el autor causa por medio del hecho por lo menos con imprudencia la muerte de la víctima, entonces el castigo es pena privativa de libertad de por vida o pena privativa de libertad no inferior a diez años.
- (4) El tribunal puede atenuar la pena establecida en el apartado 1 del párrafo 49, si el culpable deja en libertad a la víctima, renunciando a la prestación exigida en su entorno vital. Si dicho éxito se logra sin la intervención del culpable, bastaría con un esfuerzo formal suyo para alcanzarlo.

Artículo 239b - Toma de rehenes

[Enlace al artículo](#)

- (1) Quien secuestre a una persona, o se apodere de una persona, para coaccionarlo a él a una acción, tolerancia u omisión o a un tercero por medio de la amenaza con la muerte o de una grave lesión personal, (artículo 226) de la víctima o con la privación de su libertad por más de una semana, o quien aproveche la situación creada por él a una persona para tal coacción, será castigado con pena privativa de libertad no inferior a cinco años.
- (2) El artículo 239 a, párrafos 2 a 4, rigen en lo pertinente.

Artículo 239c - Sujeción a la vigilancia de autoridad

[Enlace al artículo](#)

En los casos de los artículos 239 a y 239 b, el tribunal puede ordenar la sujeción a la vigilancia judicial (artículo 68, párrafo 1).

Artículo 240 - Coacción

[Enlace al artículo](#)

- (1) Quien coaccione ilegalmente a una persona a actuar, tolere o se abstenga de hacerlo mediante la amenaza de un mal grave, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa.

- (2) El acto es ilegal si el uso de la fuerza o la amenaza del mal ha de considerarse reprobable para el fin previsto.
- (3) La tentativa es punible.
- (4) En casos especialmente graves el castigo es pena privativa de libertad de seis meses hasta cinco años. Por regla general, se presenta un caso especialmente grave cuando el autor
 1. coaccione a otra persona a efectuar una acción sexual,
 2. coaccione a una embarazada a la interrupción del embarazo
 3. abuse de sus competencias y de su posición como titular de un cargo

Artículo 241 - Amenaza

[Enlace al artículo](#)

- (1) Quien amenace a una persona con cometer contra él o contra una persona cercana a él un crimen, será castigado con pena privativa de libertad hasta un año o con multa.
- (2) De la misma manera será castigado quien contra su propia convicción, finja a otro que está próxima la realización de un crimen dirigido contra él o contra una persona cercana a él.

Artículo 241 a - Persecución política

[Enlace al artículo](#)

- (1) Quien exponga a otro por medio de una denuncia o de una sospecha, al peligro de ser perseguido por motivos políticos, y con ello en contradicción con principios del estado de derecho por medio de violencia o de medidas arbitrarias lo exponga al peligro de ser perseguido por razones políticas e incluso a sufrir daños en su integridad física o vida, a ser privado de la libertad, o ser perjudicado considerablemente en su posición profesional o económica, será castigado con pena privativa de libertad hasta cinco años o con multa.
- (2) De igual manera será castigado quien haga una manifestación sobre otro, o la transmita y con ello lo exponga al peligro descrito en el punto 1 de una persecución política.
- (3) La tentativa es punible
- (4) Si en la denuncia, sospecha, o comunicación se hace una afirmación no cierta, o si el hecho se comete en la intención de provocar una de las consecuencias descritas en el punto 1, o de otra manera se presenta un caso especialmente grave, entonces se puede imponer pena privativa de libertad hasta diez años.

REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO PENAL /STRAFPROZESSORDNUNG (StPO)

Fuente:

[Reglamento de Procedimiento Penal \(Strafprozeßordnung –StPO\)](#) de 7 de abril de 1987 (BGBl. I Nr. 24, de 15 de abril de 1987, pág. 1074).

Versión completa del Reglamento de Procedimiento Penal: [Enlace al documento](#)

Versión completa del Reglamento de Procedimiento Penal (posibilidad de descargar en pdf, etc.): [Enlace al documento](#)

A continuación, traducimos el apartado correspondiente a este tema que se encuentra en la página web del KOK – Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V. (Grupo de Coordinación Federal contra la Trata de Seres Humanos e.V.): [Enlace a la página](#)

Traducción:

El Código de Procedimiento Penal (Strafprozessordnung - StPO) contiene importantes regulaciones que las víctimas de trata pueden usar en los procedimientos penales. El tráfico de seres humanos es un delito penal, la representación legal es absolutamente recomendable.

Además, hay varios procedimientos en los que se pueden hacer valer las reclamaciones de salarios y daños contra los perpetradores: en los procesos penales, este es el llamado procedimiento de adhesión. El **procedimiento de adhesión** (Adhäsionsverfahren) está **regulado en los artículos 403 y siguientes del StPO**:

<https://www.buzer.de/gesetz/5815/b15612.htm>

En particular, los afectados se beneficiarán en delitos en los que la violación de sus intereses legales también ha provocado daños en virtud de las normas del derecho civil. En realidad, este daño tendría que ser reclamado en otro proceso. Debido al procedimiento de adhesión, la unión y, por lo tanto, el fallo en un solo procedimiento son posibles.

La llamada “**Incautación de Bienes**”(Vermögenabsöpfung) se modificó en el [artículo 73 y siguientes del Código Penal \(StGB\)](#), según el cual los bienes incautados a los perpetradores se entregarán al Estado y no se distribuirán/revertirán entre los perpetradores si los afectados no hacen valer sus reclamaciones.

Las personas afectadas por la trata de personas pueden unirse en los procedimientos penales como co-demandantes de acuerdo con el artículo 395 del Código de Procedimiento Penal (StPO) y tener un abogado como representante de los co-demandantes. Esta demanda legal también está asegurada financieramente.

Las personas afectadas por la trata de seres humanos, como todos los demás testigos legales, tienen ciertos derechos en los procesos penales como co-demandantes. Estos resultan de el **artículo 397 del StPO** ([Derechos procesales del demandante secundario](#)):

La participación en el procedimiento brinda a las personas afectadas la oportunidad de influir activamente en él. **Se evitará especialmente la victimización secundaria.**

Rara vez, sin embargo, el delito de trata de seres humanos se convierte en una acusación. Más a menudo, está siendo evitado [este delito] por las autoridades encargadas de aplicar la ley [sustituyéndolo] con delitos más fáciles de castigar tales como el contrabando o el proxenetismo según el [artículo 180a StGB](#). Esta evasión/sustitución con otros delitos no es problemática en el ámbito de la co-demanda, porque no son co-demandables.

Se puede considerar y abogar en tales casos por la asignación de un asesor legal de acuerdo con el **artículo 406f StPO** ([Asistencia de un abogado por la personas lesionadas](#)). Sin embargo, esta asistencia no tiene los mismos poderes que un representante de un co-demandante.

Con el consentimiento de la Oficina del fiscal, según el **artículo 68b StPO** ([Testigos](#)) también se puede asignar un abogado. Sin embargo, este último sólo puede informar al testigo sobre sus derechos y obligaciones en el procedimiento y recibe muy poco honorario.

Si las personas afectas son acusadas de haber cometido delitos, por ejemplo, si se trata de delitos penales contra la Ley de residencia, entonces la Oficina del fiscal puede abstenerse de procesar un delito cometido por la persona interesada de conformidad con el **artículo 154c, párrafo 2, de la StPO** ([Renuncia a la persecución de la víctima de coerción o extorsión](#)). La condición es que el delito sea conocido sólo por la indicación de la persona interesada con respecto a la trata. Aunque los **artículos 232 y siguientes del Código Penal (StGB)** ([Delitos contra la libertad personal](#)) no están recogidas por la redacción de la disposición del **artículo 154c párrafo 2 del Reglamento del Procedimiento Penal (StPO)** ([Renuncia a la persecución de la víctima de coerción o extorsión](#)) la posibilidad de sobreseimiento es aplicable a los casos de trata. Sin embargo, la decisión de sobreseimiento es a discreción del fiscal. Tendrá que considerar si es ineludible la reparación a causa de la gravedad del crimen.

La [Tercera Ley de Reforma de los Derechos de las Víctimas \(3. Opferrechtsreformgesetz – 3. ORRG\)](#) ha fortalecido la protección y el cuidado de las víctimas de delitos penales en los tribunales.

Muchos de los reglamentos que rigen los derechos y obligaciones de las personas involucradas en los procedimientos penales se encuentran en el Código de Procedimiento Penal. Las regulaciones esenciales incluyen:

Exámen de vulnerabilidad:

Según el **artículo 48 StPO** ([Deberes de los testigos. Citación](#)), las necesidades especiales de protección de los testigos deben ser examinadas durante todo el proceso penal. Por ejemplo, siempre se debe verificar si los testigos deben testificar por separado de los demás, en particular del acusado ([artículo 247 StPO: Remoción del acusado en audiencia de acusados y testigos](#)), y si se debe llevar a cabo una audiencia de video ([artículo 247a StPO: Orden de interrogatorio audiovisual de testigos](#)), si el público debe ser excluido durante una interrogación ([artículo 171b GVG: Gerichtsverfassungsgesetz - Ley de la Judicatura](#)) y si se pueden prescindir de las preguntas relacionadas con el ámbito personal de la vida de los testigos. En este sentido, la protección de los niños y adolescentes siempre debe recibir una consideración especial.

Información y derechos de información:

Junto con la **Ley de Reforma de Derechos de las Víctimas**, a las víctimas se les reconocerá amplios derechos a ser informados en los procesos penales.

Por ejemplo, según el **artículo 158 del Reglamento de Procedimiento Penal StPO** ([Denuncia, querrela](#)), la recepción de su notificación debe confirmarse por escrito.

De conformidad con la **artículo 406d StPO** ([Información sobre el estado del proceso](#)), a su solicitud, deben ser informados de la terminación del procedimiento, el lugar y la hora del procedimiento principal, así como los cargos y el resultado del procedimiento legal.

Los documentos requeridos para el ejercicio de los derechos procesales deben traducirse a petición de la persona co-demandante -autorizada para representar al afectado-.

Esta información también estará disponibles si no se lleva a cabo un juicio o si no son escuchados.

Los interesados también deben ser informados de sus derechos fuera del proceso penal, tales como sobre la posibilidad de presentar reclamaciones de indemnizaciones por daños personales ante el Tribunal Civil o las disposiciones de la [Ley de Protección contra la Violencia \(Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen - Gewaltschutzgesetz–GewSchG\)](#), la [Ley de Compensación de Víctimas \(Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten - Opferentschädigungsgesetz– OEG\)](#) u otras opciones de compensación.

También tienen según la **artículo 406h del Código de Procedimiento Penal StPO** ([Asistencia de la parte lesionada](#)) las autoridades judiciales tienen la obligación de proporcionar información y la obligación de notificar que las personas lesionadas pueden recibir el apoyo y la asistencia de los centros de asistencia a las víctimas, por ejemplo, en forma de asesoramiento o de un proceso de acompañamiento psicosocial. La notificación debe hacerse a tiempo, por escrito y en un idioma comprensible para la persona lesionada.

Asistencia judicial:

Cada persona afectada tiene derecho a ser acompañado por un abogado al ser interrogado. En casos especiales, un abogado podrá ser asignado retribuido por el sistema judicial - según la **artículo 68b párrafo 2 StPO** ([Testigos](#))-.

Las personas lesionadas pueden -siguiendo el **artículo 406f, párrafo 2 StPO** ([Ayuda a las personas lesionadas](#))- también pueden estar acompañada por una persona de su confianza, siempre que esto no ponga en riesgo el propósito de la investigación. Un riesgo sería, por ejemplo, si el propio acompañante se considerase como testigo en el juicio o si tuviera una relación especial con el acusado. En principio, esto es posible sin una solicitud previa, pero es aconsejable anunciar con anticipación que se tiene la intención de tener un acompañante.

El Código de Procedimiento Penal (StPO) también regula los deberes de los testigos:

Estos están regulados en los **artículos 48 y siguientes del Código de Procedimiento Penal StPO** ([Deberes de los testigos. Citación](#)). Estos incluyen, por un lado, el llamado "**deber de comparecer**", es decir, la obligación de presentar los cargos de las autoridades investigadoras en las fechas

programadas. Por otro lado, hay un **deber de testificar la verdad**. Bajo ciertas condiciones, sin embargo, el deber de testificar puede ser rechazado.

Además, existe el derecho de negarse a testificar por el llamado secreto profesional, como por ejemplo abogados, médicos o psicoterapeutas psicológicos en el ejercicio de su profesión según el **artículo 53 StPO** ([Derecho a negarse a testificar por ser portador de secreto profesional](#)). Incluso los asistentes profesionales, como los intérpretes para las consultas con los abogados, tienen el derecho correspondiente a negarse a declarar según el **artículo 53a StPO** ([Derecho a negarse a dar declarar de las personas colaboradoras](#))

Los empleados de los centros de asesoramiento especializados para las personas afectadas por la trata no tienen derecho a negarse a testificar. Esto suele ser un problema en la práctica, ya que los consultores deben informar a los clientes desde el principio que pueden tener que declarar ante el tribunal como testigos. Esto puede perjudicar la relación de confianza. Además, una declaración en el Tribunal puede poner en peligro a los asesores.

Por esto, desde hace año el **KOK (Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel - Grupo de Coordinación Federal contra la Trata de Seres Humanos)** y sus miembros han exigido el derecho a negarse a testificar a los empleados de los centros de asesoría especializada.

La información que se presenta aquí se toma en parte de las "[Directrices para los derechos de asesoría de las personas lesionadas, en particular las personas perjudicadas por la trata de personas, en procedimientos penales con especial consideración de las enmiendas actuales a la Ley de reforma de la tercera víctima](#)", autora Christina Clemm, en nombre del KOK. El folleto contiene descripciones detalladas de los derechos que se describen brevemente aquí, así como otros derechos en procedimientos penales.

OTRAS LEYES Y NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE TSH

REGULACIÓN DE RECLAMACIONES CIVILES.

Incluso sin un contrato de trabajo por escrito, los afectados tienen derecho a reclamar una remuneración razonable de acuerdo con el **artículo 612 del Código Civil (BürgerlichesGesetzbuch - BGB) (Renumeración)**. La reparación por otros daños debe compensarse de acuerdo con el **artículo 823 del Código Civil (BGB) (Responsabilidad por daños)**. No es fácil, sin embargo, la ejecución de estas reclamaciones. Por un lado, los afectados a menudo se encuentran en una posición desfavorable para probar la relación de empleo, por otro lado, el estado de residencia poco claro desalienta a muchos de los afectados a hacer valer sus reclamaciones. Es importante saber que la reclamación laboral también se puede hacer valer si la persona en cuestión no está en posesión de un permiso de residencia.

El **18.06.2009**, entró en vigor la [Directiva 2009/52/CE sobre normas mínimas para sanciones y medidas aplicables contra los empleadores de residentes nacionales de terceros países en situación irregular](#)

Se introdujo el nuevo **artículo 25 (4b) de la Ley de Residencia (Aufenthaltsgesetz – AufenthG) (Residencia por razones humanitarias)**. Esto regula un permiso de residencia temporal para extranjeros para ciertos delitos:

Art. 25 (4b) Un extranjero que haya sido víctima de un delito penal en virtud del artículo 10 (1) u 11 (1) (3) de la **Ley de Trabajo Ilegal** o en virtud del artículo 15a de la **Ley de Empleo Temporal** se le puede otorgar un permiso de residencia para una estancia temporal, incluso si está obligado a abandonar el país. El permiso de residencia solo podrá expedirse si:

1. la presencia temporal del extranjero en el territorio federal es considerada apropiada por el fiscal o el tribunal penal para los procedimientos penales relacionados con el delito, ya que sin su información la investigación de los hechos sería difícil, y
2. el extranjero ha declarado estar dispuesto a declarar en el proceso penal por el delito,

El permiso de residencia puede extenderse si al extranjero aún no ha pagado la remuneración debida al empleador y supondría una dificultad para el extranjero llevar a cabo su reclamación de remuneración desde el extranjero.

REGULACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y COMPENSACIÓN DE VÍCTIMAS.

Los mejores ejemplos son la [Ley de Reforma de los Derechos de las Víctimas – Gesetz zur Stärkung der Opferrechte im Strafverfahren \(3. Opferrechtsreformgesetz - 3. ORRG\)](#) y la [Ley de Compensación de las Víctimas de Violencia – Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten \(Opferentschädigungsgesetz - OEG\)](#).

- La [Tercera Ley de Reforma de los Derechos de las Víctimas \(3. ORRG\)](#) se aprobó el 21 de diciembre de 2015 y entró en vigor el 31 de diciembre de 2015 (BGBl, I, Nr. 55, páginas: 2525-2430)

La Ley transpone la [Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos](#)

Fortalece la protección y el cuidado de las personas lesionadas ante los tribunales. Además, las partes lesionadas deben recibir más información sobre el procedimiento inmediato al presentar una denuncia. En el caso de dificultades de idioma, existe el derecho a traducción en las tomas de declaración de la policía y la fiscalía. Los niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia severa o sexual tienen derecho a recibir una monitorización de apoyo psicosocial gratuito. Esto también es válido en el caso de la vulnerabilidad especial de adultos.

Los principales cambios son:

Normas mínimas para los derechos de las víctimas de delitos.

Las negociaciones y los interrogatorios se realizarán teniendo en cuenta la vulnerabilidad especial de la víctima. Tiene que ser supervisado en particular: la toma de declaración del testigo en ausencia del acusado, **artículo 168e del Código de Procedimiento Penal (StPO)** ([Toma de declaración de testigos separados de personas con derecho a asistencia](#)), o un interrogatorio audiovisual, **artículo 247a del Código de Procedimiento Penal (StPO)** ([Orden de interrogatorio audiovisual de testigos](#)), o una exclusión del público en el juicio, [artículo 171b párrafo 1 de la Ley de la Judicatura \(GVG\)](#), en qué medida se puede prescindir de las preguntas sobre la vida personal del testigo, **artículo 48 párrafo 3, punto 2 del Código de Procedimiento Civil (StPO)** ([Deberes de los testigos. Citación](#))

El derecho a la información y la obligación de informar de la persona lesionada sobre sus competencias dentro y fuera del proceso penal están garantizados por la ley. Además, el derecho a la información de la persona lesionada del **artículo 406d Código de Procedimiento Penal (StPO)** ([Información sobre el estado de los procedimientos](#)) con respecto al estado del proceso se amplía parcialmente. Varias tareas de información se reestructuran en los **artículos 406i a 406k del Código de Procedimiento Penal (StPO)** ([art. 406i. Informar a la persona lesionada sobre sus competencias en los procedimientos penales](#) y [art. 406k. Más información](#)). Finalmente, está establecido como un derecho de la víctima servicios destinados a la interpretación y traducción.

Al mismo tiempo, esto significa que el deber de informar de las autoridades policiales debe aumentar. En el futuro, la persona lesionada debe recibir confirmación por escrito de su denuncia.

Ley de acompañamiento psicosocial procesal.

La ley introduce un derecho de acompañamiento psicosocial en el proceso para víctimas infantiles y juveniles de violencia sexual y actos violentos, para las víctimas adultas dependerá de la discreción del Tribunal ([artículo 406g del Código de Procedimiento Penal – StPO: Acompañamiento psicosocial procesal](#)).

La ley regula las bases del acompañamiento psicosocial en el proceso y especifica los requisitos para la calificación y remuneración de especialista. La exacta organización se deja a los estados federales.

Aquí se puede encontrar más información sobre estos cambios según la opinión del **KOK (Grupo de Coordinación Federal contra la Trata de Seres Humanos)**: [Enlace al documento](#)

(También disponible en versión corta: [Enlace al documento](#)).

Legislación anterior:

El 1 de septiembre de 2004, entró en vigor la [1ª Ley de reforma de los derechos de las víctimas \(Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Verletzten im Strafverfahren - 1. Opferrechtsreformgesetz - OpferRRG](#), BGBl. I, Nr. 31, de 30 de junio de 2004, pág.: 1354-1358). El propósito previsto de la nueva legislación se centró en fortalecer los derechos de las víctimas en los procesos penales. En última instancia, el legislador quería abstenerse de tratar a las víctimas en procesos penales simplemente como testigos y, por lo tanto, como pruebas.

La tarea del estado de derecho ley no es sólo determinar la culpabilidad de un perpetrador en un procedimiento judicial. Es igualmente importante defender los intereses de la víctima. La Ley de Reforma de los Derechos de las Víctimas creaba otras condiciones previas importantes que facilitan a la víctima hacer frente a los recuerdos a menudo traumáticos de un crimen. Especialmente los procedimientos legales, en los cuales la parte lesionada se enfrenta directamente con el crimen y con el perpetrador, representa una gran carga. En estas situaciones, las víctimas deben ser relevadas tanto como sea posible. La Ley de reforma de los derechos de las víctimas está destinada a fortalecer los derechos de las víctimas de delitos en los procesos penales. En estas situaciones, las víctimas deben ser aliviadas tanto como sea posible. La Ley de reforma de los derechos de las víctimas está destinada a fortalecer los derechos de las víctimas de delitos en los procesos penales.

El 1 de octubre de 2009, entró en vigor la [2ª Ley de reforma de los derechos de las víctimas \(Gesetz zur Stärkung der Rechte von Verletzten und Zeugen im Strafverfahren - 2. Opferrechtsreformgesetz - OpferRRG](#), BGBl. I, Nr. 48, de 31 de Julio de 2009, pág.: 2280-2285).

En un [comunicado](#) del 22 de mayo de 2009, el **KOK (Grupo de Coordinación Federal contra la Trata de Seres Humanos)** comentó el Proyecto de ley con respecto a la regulación particular de relevancia para las víctimas de la trata y de la violencia contra las mujeres migrantes.

Fueron bienvenidos los cambios o la inclusión de la siguiente normativa:

- las regulaciones para el mejoramiento de los deberes de información de las autoridades policiales a las personas lesionadas de delitos penales de acuerdo con el **artículo 406h del Código de Procedimiento Penal (StPO)** ([Artículo 1 Modificación del Código de Procedimiento Penal](#)),
- así como la modificación en el **artículo 142 del Código de Procedimiento Penal (StPO)** ([Artículo 1 Modificación del Código de Procedimiento Penal](#)), según el cual las partes lesionadas también pueden elegir abogados no residentes en la selección de su asistencia legal.

- La [Ley de Compensación de las Víctimas de Violencia – Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten \(Opferentschädigungsgesetz - OEG\)](#) se aprobó el 7 de enero de 1985 y entró en vigor el 11 de enero de 1985 (BGBl, I, Nr.1, pág: 1-4)

Las personas que se convierten en víctimas de actos violentos en el territorio alemán pueden reclamar en virtud de la **Ley de indemnización de las víctimas (OEG)**.

Como las personas afectadas por la trata a menudo son víctimas simultáneamente de actos de violencia, generalmente pueden reclamar beneficios conforme a la **Ley de Compensación a las Víctimas**. Hasta ahora, sin embargo, esta posibilidad ha sido aún muy poco aprovechada o muchos requerimientos han sido desestimados según la OEG.

Se ha anunciado una reforma integral de la OEG desde hace algún tiempo, pero hasta la fecha (hasta septiembre de 2016) no se ha llevado a cabo modificaciones de la OEG: <https://www.buzer.de/gesetz/6538/1.htm> .

Sobre la OEG:

Los requisitos previos de demanda según la OEG son la existencia de un acto violento y la existencia de daños a la salud como resultado de este acto de violencia. Los reclamantes son las víctimas o sobrevivientes.

Un acto de violencia en el sentido de la OEG es un asalto deliberado e ilegal contra una persona, por ejemplo: lesiones corporales intencionales, violaciones, agresiones sexuales, abusos sexuales, etc.

Cualquier daño a la salud resultante de actos de violencia puede ser reclamado. La salud perjudicial puede ser física y/o emocional, así como temporal o permanente. Los trastornos de salud deben estar relacionados causalmente con la violencia.

Previa solicitud, las **Oficinas de Asuntos Sociales** (“Versorgungsämter” o “Ämter für Soziale Angelegenheiten”, ASA) deciden sobre la concesión de los beneficios de la OEG. Estos se designan de manera diferente en cada Estado.

El **procedimiento administrativo** se cierra con una resolución. La resolución emitida es legalmente ejecutiva, es decir, por otro lado, se puede recurrir. Si la oficina de asuntos sociales no reconoce ninguna compensación, la siguiente autoridad superior decide.

Reclamaciones por víctimas de trata.

Con efecto a partir del 01 de junio de 1990, todos los ciudadanos extranjeros que residan legalmente en Alemania y han sido víctimas de un acto ilícito de violencia intencional también tienen derecho a una indemnización en virtud de la OEG. Así, las personas afectadas por la trata pueden reclamar demandas. De acuerdo con las **circulares** emitidas por el **Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales (Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, BAMS)** del

05 de marzo de 2001, los afectados por la trata de personas que han residido ilegalmente también son beneficiarios: https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/fileadmin/user_upload/OEG.pdf

El alcance de los servicios depende de la duración de la estancia y del tipo de permiso de residencia de acuerdo con el **artículo 1 (5) y (6) de la Ley de Compensación de las Víctimas de Violencia (OEG)** ([Derecho a la indemnización](#))

Párrafo 4, número 1: los ciudadanos de la UE tienen derecho a recibir atención como los alemanes.

Párrafo 5, número 1: Si la víctima reside legalmente en el territorio federal por más de 3 años sin interrupción, puede recibir beneficios como las víctimas alemanas de violencia.

Párrafo 5, número 2: Si la víctima es legalmente residente en el territorio federal por un período temporal de seis meses a tres años sin interrupción, según la **OEG** se concederán las indemnizaciones no relacionadas con los ingresos disponibles.

Párrafo 6, número 1: las víctimas que están relacionadas con un alemán o un extranjero en el sentido de los párrafos 4 y 5 hasta el tercer grado reciben indemnizaciones tales como personas en el sentido del párrafo 5 número 2.

El [artículo 10b \(Compensación extrema/severa\)](#):

en relación con el artículo 1 (5) y (6): Si el extranjero lesionado reside legalmente en Alemania para una estancia temporal de no más de seis meses en la República Federal de Alemania, sólo se podrá otorgar único pago como “prestación extrema/severa” (“Härteleistung”).

El alcance de los pagos de compensación se determina de acuerdo con las disposiciones de la [Ley Federal de Atención \(Ley sobre Atención de Víctimas de Guerra - Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges -Bundesversorgungsgesetz – BVG\)](#) e incluye tratamiento médico y de salud, una pensión por discapacidad y una prestación de asistencia, así como beneficios de asistencia social como asistencia médica, asistencia complementaria con medios de subsistencia, asistencia para la vivienda y asistencia para circunstancias especiales. Además, las víctimas tienen derecho a beneficios complementarios individuales bajo ciertas condiciones. La ayuda se presta como asistencia personal, prestaciones en especie y prestaciones en efectivo. Se excluyen daños y perjuicios o indemnizaciones por otros daños a la propiedad y pérdidas financieras, como, por ejemplo, las ganancias impagas como prostituta.

La adopción del consentimiento de indemnizaciones por la Oficina de Asuntos Sociales no será de carácter temporal/transitoria, a menos que se trate de la concesión de beneficios provisionales de tratamiento médico.

El KOK remite al siguiente enlace sobre la compensación: “**Indemnización para las personas afectadas por la trata**”: [Enlace al documento](#)

Indemnización a las personas afectadas por la trata

Las personas víctimas de trata a menudo sufren daños físicos, por ejemplo, como resultado de la violencia por parte de los perpetradores, la falta de atención médica o la mala alimentación, así como el daño psicológico, como, por ejemplo, los síndromes traumáticos.

A muchas víctimas de la trata y la explotación laboral no se les paga parte o la totalidad del salario por el trabajo que realizan (ya sea en la industria del sexo o en otras áreas). Al mismo tiempo, los perpetradores obtienen un alto beneficio a través de las actividades que las víctimas de la trata hacen por ellos.

La compensación es la compensación por daños incurridos o sufridos. Los beneficios de compensación pueden tomar la forma de daños y perjuicios, indemnización económica o pago de salarios perdidos. Ya que las víctimas de la **trata de mujeres** sufren en términos materiales e inmateriales, es importante proporcionarles los recursos adecuados para que puedan hacer cumplir efectivamente no solo su derecho al salario sino también una compensación adecuada.

Aunque la base legal para la compensación y el desembolso de los salarios retenidos existe en la República Federal de Alemania, **en la práctica hay una serie de razones por las cuales las personas involucradas no pueden hacer valer sus derechos.**

Ha tratado estos temas el estudio de viabilidad "[Trata de Personas en Alemania - Fortalecimiento de los Derechos Humanos de los Afectados](#)" ("[Menschenhandel in Deutschland-Die Menschenrechte der Betroffenen stärken](#)") por el Instituto Alemán de Derechos Humanos (Deutsche Institut für Menschenrechte, DIMR) y la Fundación para el Recuerdo, Responsabilidad, Futuro (Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, EVZ) (los autores son la Dra. Petra Follmar-Otto y Heike Rabe) que fue **publicado en junio de 2009**. También llega a la conclusión de que, a pesar de las condiciones legales existentes, sólo un pequeño número de los afectados pueden realmente hacer valer sus derechos.

Para mejorar esta situación de las víctimas, el **Instituto Alemán de Derechos Humanos (DIMR), en colaboración con la Fundación EVZ, llevó a cabo el proyecto "Trabajo forzoso hoy: fortalecer a los afectados por la trata de personas"** ("[Zwangsarbeit heute - Betroffene von Menschenhandel stärken](#)"[dirigido desde 2009 por Heike Rabe]). **Comenzó el 2 de junio de 2009 y duró tres años.** El objetivo de este proyecto fue principalmente fortalecer a los interesados para que puedan ejercer sus derechos de manera independiente, así como el apoyo (incluso financiero) de los afectados para hacer cumplir sus reclamaciones:

Documentos en línea sobre el proyecto:

<https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/meldung/article/pressemitteilung-zwangsarbeit-heute-betroffene-von-menschenhandel-staerken-neues-projekt-am-deuts/>

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Info-Flyer/flyer_zwangsarbeit_heute_dt.pdf

[https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Handreichungen/Handreichung Menschenhandel als Menschenrechtsverletzung.pdf](https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Handreichungen/Handreichung_Menschenhandel_als_Menschenrechtsverletzung.pdf)

UE-Proyecto COMP.ACT

Con respecto a Europa , el [Proyecto "COMP.ACT"](#) ("[European Action for Compensation for Trafficked Persons](#)"), coordinado por La Strada International y Anti-Slavery International y sus 14 socios del proyecto, que abogan por que las personas traficadas reclamen sus reclamaciones de compensación y salarios. **Este proyecto comenzó en enero de 2010 y se completó con éxito en diciembre de 2012. Todos los socios del proyecto realizaron investigaciones en sus propios países sobre el marco legal existente para hacer cumplir las reclamaciones de salarios e indemnizaciones para las víctimas de la trata y los obstáculos para hacer cumplir estas reclamaciones.** [[Estudio sobre Alemania](#)].

Los resultados se pueden encontrar en el informe final "[Hallazgos y resultados de la Acción Europea de Compensación para Personas Víctimas de Tráfico](#)" ("[Findings and Results of the European Action for Compensation for Trafficked Persons](#)")

Además, el proyecto desarrolló una "[Plantilla de investigación para recopilar y analizar datos sobre el acceso de las personas objeto de trata a una compensación](#)" ("[Research template for collecting and analysing data on the access of trafficked persons to compensation](#)"), así como la "[Guía para representar a las personas objeto de trata en reclamaciones de compensación](#)" ("[Guidance on representing trafficked persons in compensation claims](#)"): como **documentos útiles para abogados**, centros de asesoramiento y diferentes proveedores de servicios.

Desde un punto de vista internacional, también se ha realizado un trabajo de promoción para dar más importancia al tema de la compensación, por ejemplo, a través del video: <https://www.youtube.com/watch?v=KoVsrIpQRK8>

Guía de acción sobre el tema de la indemnización [formato póster]

El KOK y el Instituto Alemán de Derechos Humanos (DIMR), en cooperación con el proyecto europeo Comp.Act. creó una guía de acción sobre compensación en formato póster. El **póster** del sitio online KOK recibió apoyo financiero de fondos de terceros asignados por un grupo privado de donantes , desde el sitio online del DIMR, por la Fundación "Recuerdo, Responsabilidad, Futuro" en el marco del proyecto "Trabajo forzoso hoy" y por la Comisión Europea en el marco del Programa "Prevención y lucha contra la delincuencia". Describe las reclamaciones financieras de los afectados por la trata, la violencia y la explotación laboral. Este desplegable puede descargarse como documento [PDF](#). También está disponible en [inglés](#) y [ruso](#).

Dossier de información sobre el tema de la indemnización.

El KOK ha creado un **folleto informativo** dentro del proyecto COMP.ACT. Describe las posibilidades existentes de compensación en Alemania para las personas afectadas por la trata. Los afiliados de

KOK pueden distribuir el folleto a las partes potencialmente afectadas para obtener información. Se puede descargar en formato **PDF** en [alemán](#), [inglés](#), [búlgaro](#), [húngaro](#), [francés](#), [polaco](#) y [rumano](#).

Indemnización por los perpetradores en procesos penales. Método de adhesión (Adhäsionsverfahren).

Dado que el tráfico es un delito penal, los afectados tienen la posibilidad de hacer valer sus reclamaciones de salarios y daños ante un tribunal penal en un proceso judicial. En el **procedimiento de adhesión** (regulado en los **artículos 403 y siguientes del Código de Procedimiento Penal - StPO: [Alegación de una reclamación en el proceso de adhesión](#)**), un tribunal penal puede, a petición del demandante, decidir sobre reclamaciones por daños y perjuicios civiles. Esto requiere que se haya iniciado un proceso penal, se haya presentado una acusación y se haya condenado al delincuente. La ventaja de este enfoque es que durante el proceso penal, se examinan las reclamaciones civiles de los afectados y se proporcionan pruebas, por ejemplo, si se ha producido una lesión física.

Indemnización por los autores según el derecho laboral. Leyes laborales reclamaciones sobre pago de salarios.

Las reclamaciones de salarios pueden ser presentados de acuerdo con el **artículo 611 del Código Civil BGB (Obligaciones típicas en el contrato de servicios)**. Para ello debe haber existido un contrato de trabajo. Lo irrelevante aquí es si se acordó por escrito o verbalmente. Igualmente irrelevante es la situación de legalidad de residencia o empleo de los afectados. Incluso sin un permiso de residencia o trabajo, tienen acceso a la jurisdicción laboral alemana. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la autoridad de extranjería o la oficina de impuestos, en el contexto de la obligación existente de informar según el **artículo 87 de la Ley de Residencia - AufenthG ([Comunicación a las autoridades de inmigración](#))** puede estar al tanto de la situación de residencia de los afectados. Esto es particularmente problemático si los interesados no están en posesión de un permiso de residencia legal. Por lo tanto, existe un riesgo para los afectados de que puedan ser deportados o que tengan que temer otras consecuencias por su estatus de residencia.

La jurisdicción de los tribunales laborales alemanes existe si el domicilio del empleador está en Alemania o si el lugar de trabajo está en Alemania o si el trabajo ha tenido que ser realizado en Alemania.

En los procedimientos civiles, la parte demandante, en este caso los trabajadores, es en principio responsable de proporcionar la evidencia para respaldar su reclamación. Para un juicio ante el Tribunal Laboral es suficiente evidencia, es decir: si los afectados presentan su acusación convincentemente, el empleador tiene que demostrar la inexistencia de un contrato de trabajo.

La cantidad de la reclamación de salario que se va a demandar se basa en el pago de otros empleados por actividades similares, por ejemplo, según el convenio colectivo. En el caso de trabajos que no requieren calificaciones específicas, puede ser extremadamente difícil determinar una reclamación salarial, ya que depende, por ejemplo, de las horas y condiciones de trabajo. ([Würdinger, Andrea. *Frauenhandeln in Deutschland*, pág. 57](#))

Reclamaciones de derecho laboral derivadas de incumplimiento de contrato por parte del empleador.

Si, como resultado de un incumplimiento de contrato, el empleado ha sufrido más daños como parte de la relación laboral, puede, de acuerdo con los **artículo 280** ([Daños por incumplimiento en la relación contractual](#)), **249** ([Naturaleza y alcance de los daños](#)) y **siguientes del Código Civil BGB** tiene derecho a una compensación económica. Las indemnizaciones incluyen, entre otras cosas, los salarios perdidos y la compensación por los días de vacaciones perdidos, las pensiones por invalidez y los costos del tratamiento médico. También pueden hacer valer las reclamaciones ante el Tribunal Laboral de conformidad con el **artículo 2 (1) de la Ley del Tribunal Laboral** ([Jurisdicción en el procedimiento judicial](#))

Reclamaciones de derecho civil derivadas de actos ilícitos.

Las reclamaciones de derecho civil se pueden hacer valer a partir del **artículo 823 (1) del Código Civil – BGB** ([Compensación](#)). De acuerdo con el **artículo 823 (1) del Código Civil – BGB**, cualquier persona que deliberadamente o por negligencia lesione la vida, el cuerpo, la salud, la libertad, la propiedad u otro derecho de otra persona, está obligado a compensar a la otra persona por el daño resultante. Dado que estos bienes son bienes especialmente protegidos, el **artículo 823 (1) del Código Civil - BGB** no requiere la existencia de una relación laboral.

Además, las reclamaciones por daños pueden presentarse de acuerdo con el **artículo 823 (2) - BGB**. El **artículo 823 (2) – BGB** obliga por daños y perjuicios a aquel que viola una ley que tiene como objetivo proteger a las personas.

De acuerdo con el **artículo 253 (2) del Código Civil – BGB** ([Daño inmaterial](#)), se pueden exigir indemnizaciones por lesiones personales, daños a la salud, privación de libertad y violación del derecho a la libre autodeterminación sexual.

Reclamaciones de indemnización contra el Estado: Ley de indemnización a las víctimas (OEG)

Según una **decisión del Tribunal Social Federal** (Ref.: **9 RVg 2/78**), el Estado tiene el deber de proteger a sus ciudadanos de actos de violencia y actos criminales. Si el Estado fracasa en esta tarea, está obligado a compensar a los afectados. Este tipo de compensación está regulada en la Ley de Compensación de Víctimas ([Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten – Opferentschädigungsgesetz - OEG](#)) [ver pág. 22 y siguientes].

OTRA LEGISLACIÓN RELACIONADA

Ley sobre la lucha contra el matrimonio infantil promulgada el 17 de julio de 2017, (Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen –KeheBekG, BGBl I, Nr. 48 de 21 de julio de 2017, pág.: 2429-2433)

Jurisprudencia

Selección hecha a partir de una búsqueda en la **Base de Datos de Jurisprudencia** del Grupo **KOK** ([Rechtsprechungsdatenbank](#)):

Se ha realizado una búsqueda por la materia “**Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung**” (“**Trata con fines de explotación laboral**”) en todos los tribunales alemanes. El resultado han sido 17 sentencias: 16 de tribunales penales y 1 de un tribunal social. A continuación presentamos el listado de los 17 casos con su traducción y los enlaces que llevan a una descripción más detallada y a las sentencias:

- **Strafgerichte = Tribunales penales**

- **AG Itzehoe (20.9.2016):** Aktenzeichen 42 303 s 27910/13 (2016), Urteil Entscheidung im Strafverfahren wegen Menschenhandels zum Zwecke der Arbeitsausbeutung indischer Küchenhilfen; Stundenlöhne von 2-4 EUR, Ausnutzung auslandsspezifischer Hilflosigkeit; Bewährungsstrafen.

Tribunal de Distrito de Itzehoe (Estado Federal de Schleswig-Holstein) (20.9.2016): [Expediente número 42 303 pág. 27910/13 \(2016\)](#), decisión en un proceso penal relacionado con la trata de seres humanos con el fin de explotar a **ayudantes de cocina indios**; salario por hora de 2 a 4 euros, utilización de la indefensión específica del extranjero; suspensión de la condena. [Enlace al texto completo](#)

- **LG Frankfurt (16.4.2012):** Aktenzeichen 25/Ns 149/10, Urteil Bedenkliche Berufungsentscheidung im Strafverfahren wegen Menschenhandels zur Arbeitsausbeutung; Reduzierung der dreijährigen Haftstrafe auf Bewährungsstrafe.

Tribunal del Distrito de Frankfurt (16.4.2012): [Expediente número 25 / Ns 149/10](#), **recurso de apelación dudosa** en un proceso penal por tráfico con fines de explotación laboral; reducción de la sentencia de tres años de prisión a libertad condicional. [Enlace al texto completo](#)

Más datos: El Tribunal de Distrito de Frankfurt (LG) favorece la apelación del acusado de su condena a un encarcelamiento de tres años y lo condena a un encarcelamiento de dos años, lo cual posibilita la libertad condicional. Los acusados habían sido condenados por el [Tribunal del Distrito de Bernau \(AG\)](#) con una sentencia de 11.10.2010 por tráfico con fines de explotación laboral.

- **AG Düsseldorf (26.1.2012):** Aktenzeichen 106 Ls-50 Js 208/07-58/07, Urteil Strafverfahren wegen Menschenhandels zur Ausbeutung der Arbeitskraft; gehörlose Polen zum Betteln gezwungen; Freiheitsstrafen auf Bewährung.

Tribunal del Distrito de Düsseldorf (26.1.2012): [Expediente número. 106 Ls-50 Js 208/07-58/07](#), procedimiento penal por tráfico de seres humanos para la explotación laboral; **polacos sordos obligados a mendigar**; libertad condicional. [Enlace al texto completo](#)

- **LG Trier, 3. große Strafkammer (2.11.2011):** Aktenzeichen 8045 Js 9059/10.5 Kls, Urteil Strafverfahren wegen Menschenhandels zum Zwecke der Ausbeutung der Arbeitskraft; Ausbeutung tschechischer und deutscher Kraftfahrer.

Tribunal del Distrito de Tréveris (Estado de Renania-Platinado), Tercer Tribunal de la Corte Penal (2.11.2011): [Expediente número 8045 Js 9059 / 10.5 Kls](#), procedimiento penal por trata de seres humanos con fines de explotación laboral; **explotación de conductores de camiones checos y alemanes.** [Enlace al texto completo](#)

Más detalles: De 2008 a 2010, el acusado reclutó a 124 automovilistas checos, que fueron traídos a Alemania y trabajaron para él por un salario promedio por hora de 2.60 euros. (...) El acusado es condenado a con una sentencia de privación de libertad total de tres años y seis meses.

- **AG Bernau (11.10.2010):** Aktenzeichen 4 Ls 8/09, Urteil Bemerkenswerte Entscheidung im Strafverfahren wegen Menschenhandels zur Ausbeutung der Arbeitskraft; Pensionsbetreiber lässt Deutschen über ein Jahr lang wie 'Hausklaven' für sich arbeiten; Ausführungen zum Merkmal der 'Ausnutzung einer Zwangslage' bei wirtschaftlicher oder persönlicher Notlage; umfassende Erläuterungen zur Beweiswürdigung; Darstellung der psychischen und physischen Tatfolgen; 10.000 Euro Schmerzensgeld im Adhäsionsverfahren.

Tribunal del Distrito de Bernau (Estado Federal de Brandeburgo) (11.10.2010): [Expediente 4 Ls 8/09](#), Decisión digna de atención en el proceso penal relativo a la trata de seres humanos para la explotación laboral; un **gestor de una casa de huéspedes** obligó a alemanes trabajar durante un año como '**esclavos domésticos**'; declaraciones sobre las características de la "explotación en una situación difícil" por dificultades económicas o personales; declaraciones sobre la evaluación de las pruebas; descripción de las consecuencias psíquicas y físicas; **10.000 euros de compensación en el proceso de adhesión.** [Enlace al texto completo](#)

- **AG Hamburg St. Georg (22.2.2010):** Aktenzeichen 940 Ls 6500 Js 38/09 (494/09) Strafverfahren wegen Menschenhandels zum Zweck der Arbeitsausbeutung und der versuchten sexuellen Ausbeutung, wegen Einschleusens von Ausländern sowie vorsätzlicher Körperverletzung; Ausbeutung in Friseursalon.

Tribunal del Distrito de Hamburgo St. Georg (22.2.2010): [Expediente 940 Ls 6500 Js 38/09 \(494/09\)](#) Proceso penal por tráfico de seres humanos con fines de explotación laboral e intento de explotación sexual, con introducción clandestina de extranjeros así como con lesiones corporales premeditadas; **Explotación en un salón de belleza/peluquería.** [Enlace al texto completo](#)

- **BGH, 3. Strafsenat (13.1.2010):** Aktenzeichen 3 StR 507/09, Beschluss Vorangegangenes Urteil LG Hannover vom 04.03.2009, Aktenzeichen 89 Kls 2/07 Strafverfahren wegen Menschenhandels zur Arbeitsausbeutung und des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern; Verstoß gegen die Verfahrensordnung (das Gericht war nicht ordnungsgemäß besetzt); Tatbestandsmerkmal "Dazu-Bringen"; Ausführungen zur Frage, wann jemand in ein ausbeuterisches Arbeitsverhältnis im Sinne des § 233 Strafgesetzbuch gebracht wird.

Tribunal Federal de Justicia, 3ª División Penal (13.1.2010): [Expediente 3 StR 507/09](#), sentencia anterior LG Hannover, 04.03.2009, número de expediente 89 Kls 2/07. Procedimiento penal por tráfico de mano de obra para la explotación laboral e introducción clandestina de extranjeros; incumplimiento de las normas procesales (el [primer] Tribunal no estaba debidamente dotado de personal); elemento constituyente del delito: "Incitación"; comentarios sobre la cuestión de cuándo alguien es llevado a

una relación laboral de explotación en el sentido del artículo 233 del Código Penal. Textos completos: [Enlace 1](#) y [Enlace 2](#)

Más datos: En respuesta a la apelación del acusado, el Tribunal Federal de Justicia (BGH) anula la condena del Tribunal Regional de Hanover (LG) por tráfico de personas para la explotación laboral y por la introducción clandestina de extranjeros, en lo que le concierne. El caso se remite al Tribunal Regional de Hanover para un nuevo juicio.

- **LG Traunstein (4.6.2008):** Aktenzeichen Ns 220 Js 23280/07, Urteil Strafverfahren wegen Menschenhandels zum Zweck der Arbeitsausbeutung, der Beschäftigung von Ausländern ohne Genehmigung und wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt.

Tribunal del Distrito de Traunstein (Baviera) (4.6.2008): [Expediente Ns 220 Js 23280/07](#), Procedimiento penal por tráfico de seres humanos con fines de explotación, empleo de extranjeros sin autorización y retención y malversación de pago. [Enlace al texto completo](#)

- **AG Berlin Tiergarten (20.2.2008):** Aktenzeichen 3St Js 723/05, Strafbefehl Strafverfahren wegen Menschenhandels zum Zweck der Arbeitsausbeutung; Ausbeutung in Spezialitätenrestaurant; Ausführung der Lohnansprüche.

Tribunal del Distrito de Berlin Tiergarten (20.2.2008): [Expediente 3St Js 723/05](#), proceso penal por tráfico con fines de explotación laboral; **Explotación en restaurante de especialidades; ejecución de reclamaciones salariales.** [Enlace al texto completo](#)

- **LG Augsburg (18.2.2008):** Aktenzeichen 9KLs 507 Js 121451/07, Urteil Strafverfahren wegen Menschenhandels zum Zweck der Arbeitsausbeutung und Beschäftigung von Ausländern ohne Genehmigung; Anwerbung und Beschäftigung von Erntehelfern.

Tribunal del Distrito de Augsburg (18.2.2008): [Expediente número 9KLs 507 Js 121451/07](#), procedimiento penal por trata de seres humanos con fines de explotación laboral y empleo de extranjeros sin autorización; **contratación y empleo de trabajadores de la cosecha.** [Enlace al texto completo](#)

- **AG Köln (24.10.2007):** Aktenzeichen 523 Ds 451/07, Urteil Strafverfahren wegen Menschenhandels zum Zweck der Arbeitsausbeutung und Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz; Geständnis der Angeklagten.

Tribunal del Distrito de Colonia (24.10.2007): [Expediente 523 Ds 451/07](#), procedimientos penal por trata de seres humanos con fines de explotación laboral y violación de la Ley de residencia; confesión de los acusados. [Enlace al texto completo](#)

- **AG Ingolstadt (10.5.2005):** Aktenzeichen 1 Ds 12 Js 6059/05, Urteil Strafverfahren wegen Menschenhandels zum Zweck der Arbeitsausbeutung, Vorenthaltung und Veruntreuung von Arbeitsentgelten; Ausbeutung in Spezialitätenrestaurant; Sozialversicherungsbetrug; faktisches Arbeitsverhältnis.

Tribunal Distrito de Ingolstadt (Baviera) (10.5.2005): [Expediente 1 Ds 12 Js 6059/05](#), Procedimiento penal por trata de seres humanos con fines de explotación, **retención y malversación de salarios; explotación en restaurante de**

especialidades; fraude a la seguridad social; relación laboral fáctica. [Enlace al texto completo](#)

- **Sozialgerichte = Tribunales Sociales**

- **LSG Baden-Württemberg (27.10.2011):** Aktenzeichen L 7 AY 3998/11 ER-B, Beschluss Aufhebung einer Entscheidung im Sozialgerichtsverfahren; Gericht darf im Eilverfahren auch bei Zweifel an Verfassungsmäßigkeit des Asylbewerberleistungsgesetzes keine höheren Leistungen zusprechen; konkrete Ausgestaltung des Grundrechtes auf ein menschenwürdiges Existenzminimum obliegt dem Gesetzgeber.

Tribunal Sozial Federal de Baden-Württemberg (27.10.2011): [Expediente L 7 AY 3998/11 ER-B](#), orden de anulación de una decisión en el proceso judicial social anterior; en caso de duda sobre la constitucionalidad de la Asylbewerberleistungsgesetz (**Ley alemana de beneficios para solicitantes de asilo**), el tribunal no puede otorgar mayores beneficios; la interpretación concreta del derecho básico a un mínimo nivel de subsistencia recae en el legislador. [Enlace al texto completo](#)

ESPAÑA

Fuentes de consulta y referencia

Legislación

- Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE) [enlace a la página](#)

Jurisprudencia

- Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) [enlace a la página](#)

Protocolos y Planes de actuación

- Ministerio del Interior - [enlace a la página](#)
- Comunidad de Madrid - [enlace a la página](#)

Legislación

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas.

Artículo 15.

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

Artículo 17.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.
2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.
4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

Artículo 18.

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Jefatura del Estado (BOE 281 de 24/11/1995)

[Enlace al documento](#)

TÍTULO VII bis

De la TRATA DE SERES HUMANOS

Se añade por el art. único.39 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. (**Texto añadido, publicado el 23/06/2010, en vigor a partir del 23/12/2010**) [Enlace al documento](#)

Artículo 177 bis.

1. Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de TRATA DE SERES HUMANOS el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, acogiere, o recibiere, incluido el intercambio o transferencia de control sobre esas personas, con cualquiera de las finalidades siguientes:

a) La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad.

b) La explotación sexual, incluyendo la pornografía.

c) La explotación para realizar actividades delictivas.

d) La extracción de sus órganos corporales.

e) La celebración de matrimonios forzados.

Existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso.

2. Aun cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado anterior, se considerará TRATA DE SERES HUMANOS cualquiera de las acciones indicadas en el apartado anterior cuando se llevare a cabo respecto de menores de edad con fines de explotación.

3. El consentimiento de una víctima de TRATA DE SERES HUMANOS será irrelevante cuando se haya recurrido a alguno de los medios indicados en el apartado primero de este artículo.

4. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado primero de este artículo cuando:

a) se hubiera puesto en peligro la vida o la integridad física o psíquica de las personas objeto del delito;

b) la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, estado gestacional, discapacidad o situación personal, o sea menor de edad.

Si concurriere más de una circunstancia se impondrá la pena en su mitad superior.

5. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 de este artículo e inhabilitación absoluta de seis a doce años a los que realicen los hechos prevaleciendo de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. Si concurriere además alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 de este artículo se impondrán las penas en su mitad superior.

6. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 de este artículo e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena, cuando el culpable perteneciera a una organización o asociación de más de dos personas, incluso de carácter transitorio, que se dedicase a la realización de tales actividades. Si concurriere alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 de este artículo se impondrán las penas en la mitad superior. Si concurriere la circunstancia prevista en el apartado 5 de este artículo se impondrán las penas señaladas en este en su mitad superior.

Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado. En todo caso se elevará la pena a la inmediatamente superior en grado si concurriera alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 o la circunstancia prevista en el apartado 5 de este artículo.

7. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

8. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito de TRATA DE SERES HUMANOS serán castigadas con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente.

9. En todo caso, las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que correspondan, en su caso, por el delito del artículo 318 bis de este Código y demás delitos efectivamente cometidos, incluidos los constitutivos de la correspondiente explotación.

10. Las condenas de jueces o tribunales extranjeros por delitos de la misma naturaleza que los previstos en este artículo producirán los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho español.

11. Sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales de este Código, la víctima de TRATA DE SERES HUMANOS quedará exenta de pena por las infracciones penales que haya cometido en la situación de explotación sufrida, siempre que su participación en ellas haya sido consecuencia directa de la situación de violencia, intimidación, engaño o abuso a que haya sido sometida y que exista una adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal realizado.

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Jefatura del Estado (BOE 157 de 02/07/1985)

[Enlace al documento](#)

LIBRO I

DE LA EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN Y DE LA PLANTA Y ORGANIZACIÓN DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES

TÍTULO I

De la extensión y límites de la jurisdicción

Artículo 23.

1. En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte.

2. También conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos:

a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que, en virtud de un Tratado internacional o de un acto normativo de una Organización internacional de la que España sea parte, no resulte necesario dicho requisito, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes.

b) Que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querrela ante los Tribunales españoles.

c) Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no haya cumplido la condena. Si sólo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda.

3. Conocerá la jurisdicción española de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos:

a) De traición y contra la paz o la independencia del Estado.

b) Contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor o el Regente.

c) Rebelión y sedición.

d) Falsificación de la firma o estampilla reales, del sello del Estado, de las firmas de los Ministros y de los sellos públicos u oficiales.

e) Falsificación de moneda española y su expedición.

f) Cualquier otra falsificación que perjudique directamente al crédito o intereses del Estado, e introducción o expedición de lo falsificado.

g) Atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles.

h) Los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos españoles residentes en el extranjero y los delitos contra la Administración Pública española.

i) Los relativos al control de cambios.

4. Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos cuando se cumplan las condiciones expresadas:

a) Genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas.

b) Delitos de tortura y contra la integridad moral de los artículos 174 a 177 del Código Penal, cuando:

1.º el procedimiento se dirija contra un español; o,
2.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español.

c) Delitos de desaparición forzada incluidos en la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva York el 20 de diciembre de 2006, cuando:

1.º el procedimiento se dirija contra un español; o,

2.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español.

d) Delitos de piratería, terrorismo, tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, TRATA DE SERES HUMANOS, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra la seguridad de la navegación marítima que se cometan en los espacios marinos, en los supuestos previstos en los tratados ratificados por España o en actos normativos de una Organización Internacional de la que España sea parte.

e) Terrorismo, siempre que concurra alguno de los siguientes supuestos:

1.º el procedimiento se dirija contra un español;

2.º el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente o se encuentre en España o, sin reunir esos requisitos, colabore con un español, o con un extranjero que resida o se encuentre en España, para la comisión de un delito de terrorismo;

3.º el delito se haya cometido por cuenta de una persona jurídica con domicilio en España;

4.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos;

5.º el delito haya sido cometido para influir o condicionar de un modo ilícito la actuación de cualquier Autoridad española;

6.º el delito haya sido cometido contra una institución u organismo de la Unión Europea que tenga su sede en España;

7.º el delito haya sido cometido contra un buque o aeronave con pabellón español; o,

8.º el delito se haya cometido contra instalaciones oficiales españolas, incluyendo sus embajadas y consulados.

A estos efectos, se entiende por instalación oficial española cualquier instalación permanente o temporal en la que desarrollen sus funciones públicas autoridades o funcionarios públicos españoles.

f) Los delitos contenidos en el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, hecho en La Haya el 16 de diciembre de 1970, siempre que:

1.º el delito haya sido cometido por un ciudadano español; o,

2.º el delito se haya cometido contra una aeronave que navegue bajo pabellón español.

g) Los delitos contenidos en el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, hecho en Montreal el 23 de septiembre de 1971, y en su Protocolo complementario hecho en Montreal el 24 de febrero de 1988, en los supuestos autorizados por el mismo.

h) Los delitos contenidos en el Convenio sobre la protección física de materiales nucleares hecho en Viena y Nueva York el 3 de marzo de 1980, siempre que el delito se haya cometido por un ciudadano español.

i) Tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que:

1.º el procedimiento se dirija contra un español; o,

2.º cuando se trate de la realización de actos de ejecución de uno de estos delitos o de constitución de un grupo u organización criminal con miras a su comisión en territorio español.

j) Delitos de constitución, financiación o integración en grupo u organización criminal o delitos cometidos en el seno de los mismos, siempre que se trate de grupos u organizaciones que actúen con miras a la comisión en España de un delito que esté castigado con una pena máxima igual o superior a tres años de prisión.

k) Delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos sobre víctimas menores de edad, siempre que:

1.º el procedimiento se dirija contra un español;

2.º el procedimiento se dirija contra ciudadano extranjero que resida habitualmente en España;

3.º el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España; o,

4.º el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España.

l) Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, siempre que:

1.º el procedimiento se dirija contra un español;

2.º el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España; o,

3.º el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España, siempre que la persona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España.

m) TRATA DE SERES HUMANOS, siempre que:

1.º el procedimiento se dirija contra un español;

2.º el procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España;

3.º el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España; o,

4.º el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España, siempre que la persona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España.

n) Delitos de corrupción entre particulares o en las transacciones económicas internacionales, siempre que:

1.º el procedimiento se dirija contra un español;

2.º el procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España;

3.º el delito hubiera sido cometido por el directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil, o de una sociedad, asociación, fundación u organización que tenga su sede o domicilio social en España; o,

4.º el delito hubiera sido cometido por una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España.

o) Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 28 de octubre de 2011, sobre falsificación de productos médicos y delitos que supongan una amenaza para la salud pública, cuando:

1.º el procedimiento se dirija contra un español;

2.º el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España;

3.º el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España;

4.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos; o,

5.º el delito se haya cometido contra una persona que tuviera residencia habitual en España en el momento de comisión de los hechos.

p) Cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un Tratado vigente para España o por otros actos normativos de una Organización Internacional de la que España sea miembro, en los supuestos y condiciones que se determine en los mismos.

Asimismo, la jurisdicción española será también competente para conocer de los delitos anteriores cometidos fuera del territorio nacional por ciudadanos extranjeros que se encontraran en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas, siempre que así lo imponga un Tratado vigente para España.

5. Los delitos a los que se refiere el apartado anterior no serán perseguibles en España en los siguientes supuestos:

a) Cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en un Tribunal Internacional constituido conforme a los Tratados y Convenios en que España fuera parte.

b) Cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en el Estado del lugar en que se hubieran cometido los hechos o en el Estado de nacionalidad de la persona a que se impute su comisión, siempre que:

1.º la persona a la que se impute la comisión del hecho no se encontrara en territorio español; o,

2.º se hubiera iniciado un procedimiento para su extradición al país del lugar en que se hubieran cometido los hechos o de cuya nacionalidad fueran las víctimas, o para ponerlo a disposición de un Tribunal Internacional para que fuera juzgado por los mismos, salvo que la extradición no fuera autorizada.

Lo dispuesto en este apartado b) no será de aplicación cuando el Estado que ejerza su jurisdicción no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o no pueda realmente hacerlo, y así se valore por la Sala 2.^a del Tribunal Supremo, a la que elevará exposición razonada el Juez o Tribunal.

A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto determinado, se examinará, teniendo en cuenta los principios de un proceso con las debidas garantías reconocidos por el Derecho Internacional, si se da una o varias de las siguientes circunstancias, según el caso:

a) Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal.

b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia.

c) Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia.

A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto determinado, se examinará si el Estado, debido al colapso total o sustancial de su administración nacional de justicia o al hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o no está por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio.

6. Los delitos a los que se refieren los apartados 3 y 4 solamente serán perseguibles en España previa interposición de querrela por el agraviado o por el Ministerio Fiscal.

Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Ministerio de Gracia y Justicia (Gaceta de Madrid 260 de 17/09/1882)

[Enlace al documento](#)

TÍTULO III

De la Policía judicial

Artículo 282.

La Policía Judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. Cuando las víctimas entren en contacto con la Policía Judicial, cumplirá con los deberes de información que prevé la legislación vigente. Asimismo, llevarán a cabo una valoración de las circunstancias particulares de las víctimas para determinar provisionalmente qué medidas de protección deben ser adoptadas para garantizarles una protección adecuada, sin perjuicio de la decisión final que corresponderá adoptar al Juez o Tribunal.

Si el delito fuera de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte legítima, tendrán la misma obligación expresada en el párrafo anterior, si se les requiere al efecto. La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de las primeras diligencias de prevención y aseguramiento de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial.

Artículo 282 bis.

1. A los fines previstos en el artículo anterior y cuando se trate de investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia organizada, el Juez de Instrucción competente o el Ministerio Fiscal dando cuenta inmediata al Juez, podrán autorizar a funcionarios de la Policía Judicial, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de seis meses prorrogables por períodos de igual duración, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad.

La resolución por la que se acuerde deberá consignar el nombre verdadero del agente y la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto. La resolución será reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad.

La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento de quien autorizó la investigación. Asimismo, dicha información deberá aportarse al proceso en su integridad y se valorará en conciencia por el órgano judicial competente.

2. Los funcionarios de la Policía Judicial que hubieran actuado en una investigación con identidad falsa de conformidad a lo previsto en el apartado 1, podrán mantener dicha identidad cuando testifiquen en el proceso que pudiera derivarse de los hechos en que hubieran intervenido y siempre que así se acuerde mediante resolución judicial motivada, siéndole también de aplicación lo previsto en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre.

Ningún funcionario de la Policía Judicial podrá ser obligado a actuar como agente encubierto.

3. Cuando las actuaciones de investigación puedan afectar a los derechos fundamentales, el agente encubierto deberá solicitar del órgano judicial competente las autorizaciones que, al respecto, establezca la Constitución y la Ley, así como cumplir las demás previsiones legales aplicables.

4. A los efectos señalados en el apartado 1 de este artículo, se considerará como delincuencia organizada la asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los delitos siguientes:

- a) Delitos de obtención, tráfico ilícito de órganos humanos y trasplante de los mismos, previstos en el artículo 156 bis del Código Penal.
- b) Delito de secuestro de personas previsto en los artículos 164 a 166 del Código Penal.

- c) Delito de TRATA DE SERES HUMANOS previsto en el artículo 177 bis del Código Penal.
- d) Delitos relativos a la prostitución previstos en los artículos 187 a 189 del Código Penal.
- e) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico previstos en los artículos 237, 243, 244, 248 y 301 del Código Penal.
- f) Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270 a 277 del Código Penal.
- g) Delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en los artículos 312 y 313 del Código Penal.
- h) Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros previstos en el artículo 318 bis del Código Penal.
- i) Delitos de tráfico de especies de flora o fauna amenazada previstos en los artículos 332 y 334 del Código Penal.
- j) Delito de tráfico de material nuclear y radiactivo previsto en el artículo 345 del Código Penal.
- k) Delitos contra la salud pública previstos en los artículos 368 a 373 del Código Penal.
- l) Delitos de falsificación de moneda, previsto en el artículo 386 del Código Penal, y de falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 bis del Código Penal.
- m) Delito de tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos previsto en los artículos 566 a 568 del Código Penal.
- n) Delitos de terrorismo previstos en los artículos 572 a 578 del Código Penal.
- o) Delitos contra el patrimonio histórico previstos en el artículo 2.1.e de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.

5. El agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito.

Para poder proceder penalmente contra el mismo por las actuaciones realizadas a los fines de la investigación, el Juez competente para conocer la causa deberá, tan pronto tenga conocimiento de la actuación de algún agente encubierto en la misma, requerir informe relativo a tal circunstancia de quien hubiere autorizado la identidad supuesta, en atención al cual resolverá lo que a su criterio proceda.

6. El juez de instrucción podrá autorizar a funcionarios de la Policía Judicial para actuar bajo identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación con el fin de esclarecer alguno de los delitos a los que se refiere el apartado 4 de este artículo o cualquier delito de los previstos en el artículo 588 ter a.

El agente encubierto informático, con autorización específica para ello, podrá intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos por razón de su contenido y analizar los resultados de los algoritmos aplicados para la identificación de dichos archivos ilícitos.

7. En el curso de una investigación llevada a cabo mediante agente encubierto, el juez competente podrá autorizar la obtención de imágenes y la grabación de las conversaciones que puedan mantenerse en los encuentros previstos entre el agente y el investigado, aun cuando se desarrollen en el interior de un domicilio.

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Jefatura del Estado (BOE 10 de 12/01/2000)

[Enlace al documento](#)

TÍTULO PRELIMINAR Disposiciones generales

Artículo 2 bis. La política inmigratoria. 1. Corresponde al Gobierno, de conformidad con lo previsto en el artículo 149.1.2.^a de la Constitución, la definición, planificación, regulación y desarrollo de la política de inmigración, sin perjuicio de las competencias que puedan ser asumidas por las Comunidades Autónomas y por las Entidades Locales. 2. Todas las Administraciones Públicas basarán el ejercicio de sus competencias vinculadas con la inmigración en el respeto a los siguientes principios: a) la coordinación con las políticas definidas por la Unión Europea; b) la ordenación de los flujos migratorios laborales, de acuerdo con las necesidades de la situación nacional del empleo; c) la integración social de los inmigrantes mediante políticas transversales dirigidas a toda la ciudadanía; d) la igualdad efectiva entre mujeres y hombres; e) la efectividad del principio de no discriminación y, consecuentemente, el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para todos aquellos que vivan o trabajen legalmente en España, en los términos previstos en la Ley; f) la garantía del ejercicio de los derechos que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes reconocen a todas las personas; g) la lucha contra la inmigración irregular y la persecución del tráfico ilícito de personas; h) la persecución de la TRATA DE SERES HUMANOS; i) la igualdad de trato en las condiciones laborales y de Seguridad Social; j) la promoción del diálogo y la colaboración con los países de origen y tránsito de inmigración, mediante acuerdos marco dirigidos a ordenar de manera efectiva los flujos migratorios, así como a fomentar y coordinar las iniciativas de cooperación al desarrollo y codesarrollo. 3. El Estado garantizará el principio de solidaridad, consagrado en la Constitución, atendiendo a las especiales circunstancias de aquellos territorios en los que los flujos migratorios tengan una especial incidencia.

CAPÍTULO III. De las autorizaciones para la realización de actividades lucrativas.

Artículo 40. Supuestos específicos de exención de la situación nacional de empleo. 1. No se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo cuando el contrato de trabajo vaya dirigido a: a) Los familiares reagrupados en edad laboral, o el cónyuge o hijo de extranjero residente en España con una autorización renovada, así como al hijo de español nacionalizado o de ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Espacio Económico Europeo, siempre que estos últimos lleven, como mínimo, un año residiendo legalmente en España y al hijo no le sea de aplicación el régimen comunitario. b) Los titulares de una autorización previa de trabajo que pretendan su renovación. c) Los trabajadores necesarios para el montaje por renovación de una instalación o equipos productivos. d) Los que hubieran gozado de la condición de refugiados, durante el año siguiente a la cesación de la aplicación de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951, sobre el Estatuto de los Refugiados, por los motivos recogidos en el supuesto 5 de la sección C de su artículo 1. e) Los que hubieran sido reconocidos como apátridas y los que hubieran perdido la condición de apátridas el año siguiente a la terminación de dicho estatuto. f) Los extranjeros que tengan a su cargo ascendientes o descendientes de nacionalidad española. g) Los extranjeros nacidos y residentes en España. h) Los hijos o nietos de español de origen. i) Los menores extranjeros en edad laboral con autorización de residencia que sean tutelados por la entidad de protección de menores competente, para aquellas actividades que, a criterio de la mencionada entidad, favorezcan su integración social, y una vez acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen. j) Los extranjeros que obtengan la autorización de residencia por circunstancias excepcionales en los supuestos que se determinen reglamentariamente y, en todo caso, cuando se trate de víctimas de violencia de género o de TRATA DE SERES HUMANOS. k) Los extranjeros que hayan sido titulares de autorizaciones de trabajo para actividades de temporada, durante dos años naturales, y hayan retornado a su país. l) Los extranjeros que hayan renunciado a su autorización de residencia y trabajo en virtud de un programa de retorno voluntario. 2. Tampoco se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo, en las condiciones que se determinen reglamentariamente para: a) La cobertura de puestos de confianza y directivos de empresas. b) Los profesionales altamente cualificados, incluyendo técnicos y científicos contratados por entidades públicas, universidades o centros de investigación, desarrollo e innovación

dependientes de empresas, sin perjuicio de la aplicación del régimen específico de autorización aplicable de conformidad con la presente Ley. c) Los trabajadores en plantilla de una empresa o grupo de empresas en otro país que pretendan desarrollar su actividad laboral para la misma empresa o grupo en España. d) Los artistas de reconocido prestigio.

TÍTULO III. De las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador

Artículo 59 bis. Víctimas de la TRATA DE SERES HUMANOS. 1. Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para la identificación de las víctimas de la trata de personas conforme a lo previsto en el artículo 10 del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la TRATA DE SERES HUMANOS, de 16 de mayo de 2005. 2. Los órganos administrativos competentes, cuando estimen que existen motivos razonables para creer que una persona extranjera en situación irregular ha sido víctima de TRATA DE SERES HUMANOS, informarán a la persona interesada sobre las previsiones del presente artículo y elevarán a la autoridad competente para su resolución la oportuna propuesta sobre la concesión de un período de restablecimiento y reflexión, de acuerdo con el procedimiento previsto reglamentariamente. Dicho período de restablecimiento y reflexión tendrá una duración de, al menos, noventa días, y deberá ser suficiente para que la víctima pueda decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el procedimiento penal. Tanto durante la fase de identificación de las víctimas, como durante el período de restablecimiento y reflexión, no se incoará un expediente sancionador por infracción del artículo 53.1.a) y se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se le hubiere incoado o, en su caso, la ejecución de la expulsión o devolución eventualmente acordadas. Asimismo, durante el período de restablecimiento y reflexión, se le autorizará la estancia temporal y las administraciones competentes velarán por la subsistencia y, de resultar necesario, la seguridad y protección de la víctima y de sus hijos menores de edad o con discapacidad, que se encuentren en España en el momento de la identificación, a quienes se harán extensivas las previsiones del apartado 4 del presente artículo en relación con el retorno asistido o la autorización de residencia, y en su caso trabajo, si fueren mayores de 16 años, por circunstancias excepcionales. Finalizado el período de reflexión las administraciones públicas competentes realizarán una evaluación de la situación personal de la víctima a efectos de determinar una posible ampliación del citado período. Con carácter extraordinario la Administración Pública competente velará por la seguridad y protección de aquellas otras personas, que se encuentren en España, con las que la víctima tenga vínculos familiares o de cualquier otra naturaleza, cuando se acredite que la situación de desprotección en que quedarían frente a los presuntos traficantes constituye un obstáculo insuperable para que la víctima acceda a cooperar. 3. El período de restablecimiento y reflexión podrá denegarse o ser revocado por motivos de orden público o cuando se tenga conocimiento de que la condición de víctima se ha invocado de forma indebida. La denegación o revocación deberán estar motivadas y podrán ser recurridas según lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 4. La autoridad competente podrá declarar a la víctima exenta de responsabilidad administrativa y podrá facilitarle, a su elección, el retorno asistido a su país de procedencia o la autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales cuando lo considere necesario a causa de su cooperación para los fines de investigación o de las acciones penales, o en atención a su situación personal, y facilidades para su integración social, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. Asimismo, en tanto se resuelva el procedimiento de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, se le podrá facilitar una autorización provisional de residencia y trabajo en los términos que se determinen reglamentariamente. En la tramitación de las autorizaciones referidas en el párrafo anterior se podrá eximir de la aportación de aquellos documentos cuya obtención suponga un riesgo para la víctima. 5. Las previsiones del presente artículo serán igualmente de aplicación a personas extranjeras menores de edad, debiendo tenerse en cuenta la edad y madurez de éstas y, en todo caso, la prevalencia del interés superior del menor. 6. Reglamentariamente se desarrollarán las condiciones de colaboración de las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro que tengan por objeto la acogida y protección de las víctimas de la TRATA DE SERES HUMANOS.

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Jefatura del Estado (BOE 15 de 17/01/1996)

[Enlace al documento](#)

Artículo 13. Obligaciones de los ciudadanos y deber de reserva.

1. Toda persona o autoridad y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una situación de maltrato, de riesgo o de posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.

2. Cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación, durante el período obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas competentes, que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización.

3. Las autoridades y las personas que por su profesión o función conozcan el caso actuarán con la debida reserva.

En las actuaciones se evitará toda interferencia innecesaria en la vida del menor.

4. Toda persona que tuviera noticia, a través de cualquier fuente de información, de un hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de TRATA DE SERES HUMANOS, o de explotación de menores, tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación procesal penal.

5. Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por TRATA DE SERES HUMANOS. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

Se modifica el apartado 1 y se añaden los apartados 4 y 5 por el art. 1.8 de la [Ley 26/2015, de 28 de julio](#).

Artículo 18. Actuaciones en situación de desamparo.

1. Cuando la Entidad Pública constate que el menor se encuentra en situación de desamparo, actuará en la forma prevista en el artículo 172 y siguientes del Código Civil, asumiendo la tutela de aquél por ministerio de la ley, adoptando las oportunas medidas de protección y poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, del Juez que acordó la tutela ordinaria.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 y siguientes del Código Civil, se considerará situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.

La situación de pobreza de los progenitores, tutores o guardadores no podrá ser tenida en cuenta para la valoración de la situación de desamparo. Asimismo, en ningún caso se separará a un menor de sus progenitores en razón de una discapacidad del menor, de ambos progenitores o de uno de ellos.

Se considerará un indicador de desamparo, entre otros, el tener un hermano declarado en tal situación, salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente.

En particular se entenderá que existe situación de desamparo cuando se dé alguna o algunas de las siguientes circunstancias con la suficiente gravedad que, valoradas y ponderadas conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, supongan una amenaza para la integridad física o mental del menor:

a) El abandono del menor, bien porque falten las personas a las que por ley corresponde el ejercicio de la guarda, o bien porque éstas no quieran o no puedan ejercerla.

b) El transcurso del plazo de guarda voluntaria, bien cuando sus responsables legales se encuentren en condiciones de hacerse cargo de la guarda del menor y no quieran asumirla, o bien cuando, deseando asumirla, no estén en condiciones para hacerlo, salvo los casos excepcionales en los que la guarda voluntaria pueda ser prorrogada más allá del plazo de dos años.

c) El riesgo para la vida, salud e integridad física del menor. En particular cuando se produzcan malos tratos físicos graves, abusos sexuales o negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y de salud por parte de las personas de la unidad familiar o de terceros con consentimiento de aquellas; también cuando el menor sea identificado como víctima de TRATA DE SERES HUMANOS y haya un conflicto de intereses con los progenitores, tutores y guardadores; o cuando exista un consumo reiterado de sustancias con potencial adictivo o la ejecución de otro tipo de conductas adictivas de manera reiterada por parte del menor con el conocimiento, consentimiento o la tolerancia de los progenitores, tutores o guardadores. Se entiende que existe tal consentimiento o tolerancia cuando no se hayan realizado los esfuerzos necesarios para paliar estas conductas, como la solicitud de asesoramiento o el no haber colaborado suficientemente con el tratamiento, una vez conocidas las mismas. También se entiende que existe desamparo cuando se produzcan perjuicios graves al recién nacido causados por maltrato prenatal.

d) El riesgo para la salud mental del menor, su integridad moral y el desarrollo de su personalidad debido al maltrato psicológico continuado o a la falta de atención grave y crónica de sus necesidades afectivas o educativas por parte de progenitores, tutores o guardadores. Cuando esta falta de atención esté condicionada por un trastorno mental grave, por un consumo habitual de sustancias con potencial adictivo o por otras conductas adictivas habituales, se valorará como un indicador de desamparo la ausencia de tratamiento por parte de progenitores, tutores o guardadores o la falta de colaboración suficiente durante el mismo.

e) El incumplimiento o el imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de guarda como consecuencia del grave deterioro del entorno o de las condiciones de vida familiares, cuando den lugar a circunstancias o comportamientos que perjudiquen el desarrollo del menor o su salud mental.

f) La inducción a la mendicidad, delincuencia o prostitución, o cualquier otra explotación del menor de similar naturaleza o gravedad.

g) La ausencia de escolarización o falta de asistencia reiterada y no justificada adecuadamente al centro educativo y la permisividad continuada o la inducción al absentismo escolar durante las etapas de escolarización obligatoria.

h) Cualquier otra situación gravemente perjudicial para el menor que traiga causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de la patria potestad, la tutela o la guarda, cuyas consecuencias no puedan ser evitadas mientras permanezca en su entorno de convivencia.

3. Cada Entidad Pública designará al órgano que ejercerá la tutela de acuerdo con sus estructuras orgánicas de funcionamiento.

4. En caso de traslado permanente de residencia de un menor sujeto a una medida de protección desde la Comunidad Autónoma que la adoptó a otra distinta, corresponde a ésta asumir aquella medida o adoptar la que proceda en un plazo máximo de tres meses desde que esta última sea informada por la primera de

dicho traslado. No obstante lo anterior, cuando la familia de origen del menor permanezca en la Comunidad Autónoma de origen y sea previsible una reintegración familiar a corto o medio plazo, se mantendrá la medida adoptada y la Entidad Pública del lugar de residencia del menor colaborará en el seguimiento de la evolución de éste. Tampoco será necesaria la adopción de nuevas medidas de protección en los casos de traslado temporal de un menor a un centro residencial ubicado en otra Comunidad Autónoma o cuando se establezca un acogimiento con familia residente en ella, con el acuerdo de ambas Comunidades Autónomas.

5. En los supuestos en los que se detecte una situación de posible desprotección de un menor de nacionalidad española que se encuentre fuera del territorio nacional, para su protección en España será competente la Entidad Pública correspondiente a la Comunidad Autónoma en la que residan los progenitores o tutores del menor. En su defecto, será competente la Entidad Pública correspondiente a la Comunidad Autónoma con la cual el menor o sus familiares tuvieren mayores vínculos. Cuando, conforme a tales criterios, no pudiere determinarse la competencia, será competente la Entidad Pública de la Comunidad Autónoma en la que el menor o sus familiares hubieran tenido su última residencia habitual.

En todo caso, cuando el menor que se encuentra fuera de España hubiera sido objeto de una medida de protección previamente a su desplazamiento, será competente la Entidad Pública que ostente su guarda o tutela.

Los posibles conflictos de competencia que pudieran originarse habrán de resolverse conforme a los principios de celeridad y de interés superior del menor, evitando dilaciones en la toma de decisiones que pudieran generar perjuicios al mismo.

La Administración General del Estado se encargará del traslado del menor a España. La Comunidad Autónoma que corresponda asumirá la competencia desde el momento en que el menor se encuentre en España.

6. En los supuestos en que las medidas de protección adoptadas en un Estado extranjero deban cumplirse en España, se atenderá, en primer lugar, a lo previsto en el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000, o norma europea que lo sustituya. En los casos no regulados por la normativa europea, se estará a los Tratados y Convenios internacionales en vigor para España y, en especial, al Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, hecho en La Haya el 19 de octubre de 1996, o Convenio que lo sustituya. En defecto de toda normativa internacional, se estará a las normas españolas de producción interna sobre eficacia en España de medidas de protección de menores.

Se modifica por el art. 1.11 de la [Ley 26/2015, de 28 de julio](#).

Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros.

Jefatura del Estado (BOE 234 de 30/09/2003)

[Enlace al documento](#)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El Plan de lucha contra la delincuencia, presentado por el Gobierno el día 12 de septiembre de 2002, contemplaba un conjunto de actuaciones que incluían medidas tanto organizativas como legislativas. Entre estas últimas se ponía un especial acento en las medidas dirigidas a fortalecer la seguridad ciudadana, combatir la violencia doméstica y favorecer la integración social de los extranjeros.

Esta ley orgánica viene a completar el conjunto de medidas legislativas que sirven de desarrollo a dicho plan y, por ello, no debe considerarse aisladamente, sino en el conjunto de iniciativas del Gobierno para mejorar la protección de los derechos de los ciudadanos, especialmente frente a las agresiones de la delincuencia.

Alcanzar estos objetivos exige abordar una serie de reformas en las materias mencionadas para lograr un perfeccionamiento del ordenamiento jurídico, cuyos elementos esenciales se exponen a continuación.

II

La realidad social ha puesto de manifiesto que uno de los principales problemas a los que tiene que dar respuesta el ordenamiento jurídico penal es el de la delincuencia que reiteradamente comete sus acciones, o lo que es lo mismo, la delincuencia profesionalizada. Son numerosos los ejemplos de aquellos que cometen pequeños delitos en un gran número de ocasiones, delitos que debido a su cuantía individualizada no obtienen una respuesta penal adecuada.

El presente texto establece, en primer lugar, medidas dirigidas a dar una respuesta adecuada a aquellos supuestos en que los autores ya han sido condenados por la realización de actividades delictivas, a través de la aplicación de la agravante de reincidencia, en este caso cualificada por el número de delitos cometidos, siguiendo un criterio ya establecido en nuestra doctrina y en nuestros textos legales.

Se introduce, por tanto, una nueva circunstancia agravante de reincidencia cuando se dé la cualificación de haber sido el imputado condenado ejecutoriamente por tres delitos, permitiéndose, en este caso, elevar la pena en grado. Dicha circunstancia de agravación es compatible con el principio de responsabilidad por el hecho, siendo el juzgador el que, ponderando la magnitud de pena impuesta en las condiciones precedentes y el número de éstas, así como la gravedad de la lesión o el peligro para el bien jurídico producido por el nuevo hecho, imponga, en su caso, la pena superior en grado.

Por otra parte, se recogen medidas dirigidas a mejorar la aplicación de la respuesta penal a la habitualidad de la conducta cuando los hechos infractores del Código Penal cometidos con anterioridad no hubieran sido aún juzgados y condenados. Así, los artículos 147, respecto a las lesiones, 234, respecto al hurto y 244, respecto a la sustracción de vehículos, establecen una pena de delito para la reiteración en la comisión de faltas, siempre que la frecuencia sea la de cuatro conductas constitutivas de falta en el plazo de un año, y en el caso de los hurtos o sustracción de vehículos de motor el montante acumulado supere el mínimo exigido para el delito.

III

El fenómeno de la violencia doméstica tiene un alcance ciertamente pluridisciplinar. Es preciso abordarlo con medidas preventivas, con medidas asistenciales y de intervención social a favor de la víctima, con

medidas incentivadoras de la investigación, y también con medidas legislativas orientadas a disuadir de la comisión de estos delitos.

Por ello, los delitos relacionados con la violencia doméstica han sido objeto en esta reforma de una preferente atención, para que el tipo delictivo alcance a todas sus manifestaciones y para que su regulación cumpla su objetivo en los aspectos preventivos y represivos.

También se ha incrementado de manera coherente y proporcionada su penalidad y se han incluido todas las conductas que puedan afectar al bien jurídico protegido.

En esta línea, en primer lugar, las conductas que son consideradas en el Código Penal como falta de lesiones, cuando se cometen en el ámbito doméstico pasan a considerarse delitos, con lo cual se abre la posibilidad de imponer pena de prisión y, en todo caso, la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

Por esta razón se ajusta técnicamente la falta regulada en el artículo 617.

En segundo lugar, respecto a los delitos de violencia doméstica cometidos con habitualidad, se les dota de una mejor sistemática, se amplía el círculo de sus posibles víctimas, se impone, en todo caso, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas y se abre la posibilidad de que el juez o tribunal sentenciador acuerde la privación de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento.

IV

Nuestro ordenamiento jurídico proporciona una adecuada respuesta y protección a los extranjeros que residen legalmente en España. Sin embargo, también es cierto que la experiencia acumulada frente a un fenómeno cada vez más importante exige abordar reformas desde diversas perspectivas:

1.º La respuesta penal frente a los extranjeros no residentes legalmente en España que cometen delitos.

Se introducen cambios en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 89, en coherencia con la reforma de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para dar adecuado cauce a que el juez penal acuerde la sustitución de la pena impuesta al extranjero no residente legalmente en España que ha cometido un delito, por su expulsión. En concreto, se establece que, en el caso de extranjeros que, además de no ser residentes legalmente en España, cometan un delito castigado con pena de prisión inferior a seis años, la regla general sea la sustitución de la pena por la expulsión. Si la pena de prisión es igual o superior a seis años, una vez que cumpla en España las tres cuartas partes de la condena o alcance el tercer grado de tratamiento penitenciario, se acordará, también como regla general, la expulsión.

De esta forma se logra una mayor eficacia en la medida de expulsión, medida que, no podemos olvidar, se alcanzaría de todas maneras por la vía administrativa al tratarse de personas que no residen legalmente en España y que han delinquido. En definitiva, se trata de evitar que la pena y su cumplimiento se conviertan en formas de permanencia en España quebrantando así de manera radical el sentido del ordenamiento jurídico en su conjunto.

Paralelamente se reforma el artículo 108 del Código Penal para establecer, con carácter general, la expulsión de los extranjeros no residentes legalmente en España en sustitución de las medidas de seguridad aplicadas por el juez o tribunal a consecuencia de la comisión de un delito.

2.º La respuesta penal frente a las nuevas formas de delincuencia que se aprovechan del fenómeno de la inmigración para cometer sus delitos.

La modificación de los artículos 318 y 318 bis del Código Penal (y la necesaria adaptación técnica a los mismos del 188) tienen como finalidad combatir el tráfico ilegal de personas, que impide la integración de los extranjeros en el país de destino.

La Unión Europea ha desplegado un notable esfuerzo en este sentido, ya que el Tratado establece, entre los objetivos atribuidos a la Unión, la lucha contra la TRATA DE SERES HUMANOS, aproximando cuando proceda las normas de derecho penal de los Estados miembros. La prioridad de esta acción se recordó en el Consejo Europeo de Tampere, y se ha concretado en las recientes iniciativas del Consejo para establecer un marco penal común de ámbito europeo relativo a la lucha contra la TRATA DE SERES HUMANOS y a la lucha contra la inmigración clandestina.

Nuestro ordenamiento jurídico ya recogía medidas para combatir este tipo de delincuencia, realizando la presente reforma una tarea de consolidación y perfeccionamiento de las mismas. El nuevo texto contiene un importante aumento de la penalidad al respecto, estableciendo que el tráfico ilegal de personas -con independencia de que sean o no trabajadores- será castigado con prisión de cuatro a ocho años. Con ello, los umbrales de penas resultantes satisfacen plenamente los objetivos de armonización que se contienen en la Decisión marco del Consejo de la Unión Europea destinada a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares.

En aras a una efectiva protección de las personas mediante la prevención de este tipo de conductas, se agravan las penas cuando el tráfico ilegal, entre otros supuestos, ponga en peligro la vida, la salud o la integridad de las personas, o la víctima sea menor de edad o incapaz.

Por último, se ha incluido en el artículo 318 la posibilidad de que los jueces o tribunales impongan alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 del Código Penal.

3.º La existencia de formas delictivas surgidas de prácticas contrarias a nuestro ordenamiento jurídico.

Por otro lado, la reforma se plantea desde el reconocimiento de que con la integración social de los extranjeros en España aparecen nuevas realidades a las que el ordenamiento debe dar adecuada respuesta. Así, como novedad igualmente reseñable, se tipifica el delito de mutilación genital o ablación. Y ello porque la mutilación genital de mujeres y niñas es una práctica que debe combatirse con la máxima firmeza, sin que pueda en absoluto justificarse por razones pretendidamente religiosas o culturales. Esta reforma ya había sido planteada en el seno de las Cortes a través de una proposición de ley que pretendía introducir una cláusula interpretativa sobre la represión de la mutilación genital femenina.

En la actual reforma se modifica el artículo 149 del Código Penal, mencionando expresamente en su nuevo apartado 2 la mutilación genital, en cualquiera de sus manifestaciones, como una conducta encuadrable entre las lesiones de dicho artículo, castigadas con prisión de seis a 12 años.

Se prevé, además, que, si la víctima fuera menor de edad o incapaz, se aplicará la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, si el juez lo estima adecuado al interés del menor. En la mayoría de las ocasiones, son los padres o familiares directos de la víctima quienes la obligan a someterse a este tipo de mutilaciones aberrantes, por lo cual la inhabilitación especial resulta absolutamente necesaria para combatir estas conductas y proteger a la niña de futuras agresiones o vejaciones.

4.º La adecuación de las instituciones civiles a las nuevas culturas que conviven en nuestro país.

Con el objetivo de mejorar la integración social de los inmigrantes en España y de garantizar que disfrutaran de semejantes derechos a los nacionales, se aborda una reforma del Código Civil en materia de separación y divorcio para garantizar la protección de la mujer frente a nuevas realidades sociales que aparecen con el fenómeno de la inmigración. En concreto, se modifica, siguiendo los trabajos realizados por la Comisión General de Codificación, el artículo 107 del Código Civil para solventar los problemas que encuentran ciertas mujeres extranjeras, fundamentalmente de origen musulmán, que solicitan la separación o el divorcio.

El interés de una persona de lograr la separación o el divorcio, por ser expresión de su autonomía personal, debe primar sobre el criterio que supone la aplicación de la ley nacional. Y sucede que, en estos casos, la aplicación de la ley nacional común de los cónyuges dificulta el acceso a la separación y al divorcio de determinadas personas residentes en España.

Para ello, se reforma el artículo 107 del Código Civil estableciendo que se aplicará la ley española cuando uno de los cónyuges sea español o residente en España, con preferencia a la ley que fuera aplicable si esta última no reconociera la separación o el divorcio, o lo hiciera de forma discriminatoria o contraria al orden público.

5.º Por último, la adaptación de la Ley de extranjería a la realidad delictiva y procesal existente.

Esta ley orgánica reforma también la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, ya fue modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, para mejorar el régimen jurídico de entrada y permanencia en territorio español de los extranjeros.

Se trata ahora, mediante la reforma de los apartados 4 y 7 del artículo 57 y del artículo 62.1, de mejorar la regulación actual en materia de expulsión para lograr una coordinación adecuada cuando se produce la tramitación simultánea de procedimientos administrativo y penal.

Con la nueva redacción del apartado 4 del artículo 57 se mejora el texto actual, aclarando que la expulsión, además de conllevar "en todo caso, la extinción de cualquier autorización para permanecer en España de la que fuese titular el extranjero expulsado", implicará también "el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España".

Igualmente, esta ley orgánica, al modificar el artículo 57.7 de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, trata de hacer frente a los problemas que se derivan de los supuestos en que los extranjeros se encuentran sujetos a uno o varios procesos penales. La solución que se adopta consiste en prever que cuando un extranjero se encuentre procesado o inculcado en un procedimiento judicial por delito o falta castigado con una pena privativa de libertad inferior a seis años, si existe orden de expulsión debidamente dictada, se autorice judicialmente la expulsión.

La nueva redacción del artículo 57.7 establece un procedimiento especialmente ágil y urgente para ello.

En él, la autoridad gubernativa solicita la autorización judicial para llevar a cabo la expulsión acordada en un expediente administrativo cuando el extranjero se encuentre incurso en un procedimiento penal. El plazo para dictar dicha resolución judicial es muy breve, pues no podrá pasar de los tres días.

Con ello se garantiza la eficacia de la orden de expulsión incluso en los supuestos de coincidencia con procesos penales. También se prevé el modo de actuar cuando sean varios los órganos judiciales que están conociendo procesos penales contra un mismo ciudadano extranjero.

En este caso, como es lógico, se impone a la autoridad gubernativa el deber de solicitar la autorización de la expulsión a todos esos órganos jurisdiccionales.

Por último, esta reforma también mejora la regulación de la resolución judicial que dispone el ingreso del extranjero en un centro de internamiento. Con ella se trata de garantizar que las resoluciones administrativas o judiciales de expulsión no queden sin efecto por la imposibilidad de hallar al extranjero.

Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Jefatura del Estado (BOE 175 de 23/07/2015)

[Enlace al documento](#)

Disposición final segunda. Modificación del apartado 2 del artículo 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Se modifica el apartado 2 del artículo 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que queda redactado en los siguientes términos:

«2. Los órganos administrativos competentes, cuando estimen que existen motivos razonables para creer que una persona extranjera en situación irregular ha sido víctima de TRATA DE SERES HUMANOS, informarán a la persona interesada sobre las previsiones del presente artículo y elevarán a la autoridad competente para su resolución la oportuna propuesta sobre la concesión de un período de restablecimiento y reflexión, de acuerdo con el procedimiento previsto reglamentariamente.

Dicho período de restablecimiento y reflexión tendrá una duración de, al menos, noventa días, y deberá ser suficiente para que la víctima pueda decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el procedimiento penal. Tanto durante la fase de identificación de las víctimas, como durante el período de restablecimiento y reflexión, no se incoará un expediente sancionador por infracción del artículo 53.1.a) y se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se le hubiere incoado o, en su caso, la ejecución de la expulsión o devolución eventualmente acordadas. Asimismo, durante el período de restablecimiento y reflexión, se le autorizará la estancia temporal y las administraciones competentes velarán por la subsistencia y, de resultar necesario, la seguridad y protección de la víctima y de sus hijos menores de edad o con discapacidad, que se encuentren en España en el momento de la identificación, a quienes se harán extensivas las previsiones del apartado 4 del presente artículo en relación con el retorno asistido o la autorización de residencia, y en su caso trabajo, si fueren mayores de 16 años, por circunstancias excepcionales. Finalizado el período de reflexión las administraciones públicas competentes realizarán una evaluación de la situación personal de la víctima a efectos de determinar una posible ampliación del citado período.

Con carácter extraordinario la Administración Pública competente velará por la seguridad y protección de aquellas otras personas, que se encuentren en España, con las que la víctima tenga vínculos familiares o de cualquier otra naturaleza, cuando se acredite que la situación de desprotección en que quedarían frente a los presuntos traficantes constituye un obstáculo insuperable para que la víctima acceda a cooperar.»

Jurisprudencia

[Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 196/2017 de 24 Mar. 2017, Rec. 10655/2016](#)

TRATA DE SERES HUMANOS. Con fines de imposición de trabajo o servicios forzados, próximos a la esclavitud, concurriendo la circunstancia de ser las víctimas especialmente vulnerables, por razón de enfermedad, discapacidad o situación de vulnerabilidad. DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL. Trato degradante. Conductas humillantes que generaron en las víctimas sentimiento de temor y angustia, menoscabando su dignidad personal. PRUEBA. De testigos. Eficacia incriminatoria de la declaración de las cuatro víctimas, de características similares, que sufrieron el trato degradante continuado por parte de los dos acusados. Corroboración periférica. Testifical de referencia. Doctrina constitucional y ordinaria sobre su valor probatorio disminuido. INVIOABILIDAD DEL DOMICILIO. Diligencia de entrada y registro. Validez de la practicada con autorización judicial y en presencia de uno de los moradores. Justificación y suficiente motivación de la injerencia.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación y confirma la sentencia de condena de la AP de la Coruña por cuatro delitos de trata de seres humanos, cuatro delitos de trato degradante, un delito de lesiones, un delito continuado de hurto y un delito de tenencia ilícita de armas.

SENTENCIA

En Madrid, a 24 de marzo de 2017

Esta sala ha visto el recurso de casación num: 10655/2016, por vulneración de derechos fundamentales, quebrantamiento de forma e infracción de Ley, interpuestos por los acusados D. Fernando , D^a. Tamara , D. Herminio y D^a María Rosario , representados, los dos primeros por el Procurador D. José Gonzalo Santander Illera, bajo la dirección letrada de D^a, María de los Milagros Vergara Medina y los dos últimos representados por la Procuradora D^a. María Dolores de Haro Martínez, bajo la dirección letrada de D. Marcos García Montes, contra [sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, de fecha 29 de julio de 2016](#), en causa seguida por delitos de trata de seres humanos, contra la integridad moral por imposición de tratos degradantes, hurto y tenencia ilícita de armas.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Carlos Granados Perez

[Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 827/2015 de 15 Dic. 2015, Rec. 10542/2015](#)

TRATA DE SERES HUMANOS. De menores de edad con fines de explotación sexual. Conductas punibles. Distinción con tráfico de inmigrantes, pues el bien jurídico que la trata tutela, por encima del interés del Estado en el control de flujos migratorios, es la dignidad de la persona. Introducción clandestina en España. PROSTITUCIÓN COACTIVA. Elementos. Concurso medial con trata. Amenazas y violencia física. DETENCIÓN ILEGAL. En concurso real. Privación de libertad deambulatoria mediante encierro y constante vigilancia de las mujeres. LESIONES. Agravadas por ensañamiento. Reiteración de los golpes y uso de medios peligrosos. Exhibición de la víctima para persuadir a las otras menores de que trataran de huir. PRUEBA DE TESTIGOS. Eficacia incriminatoria de la declaración de las testigos protegidas. Ausencia de incredulidad subjetiva, persistencia en la incriminación y verosimilitud. Informes médicos y periciales psicológicos como claros elementos corroboradores. SECRETO EN LAS COMUNICACIONES. Inexistencia de vulneración del derecho en diligencia de escuchas telefónicas. Judicialidad, excepcionalidad y proporcionalidad de la medida. Suficiente motivación del auto. Oficio policial en el que se detallan contrastados indicios de delitos graves. Prórroga acordada previo control por informes policiales del resultado de lo grabado.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación y confirma la sentencia de condena de la AP de Madrid por delitos de trata de seres humanos, coacción a la prostitución, falsedad, detención ilegal, lesiones, resistencia a la autoridad y tenencia ilícita de armas.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a quince de Diciembre de dos mil quince.

En los recursos de casación por infracción de preceptos constitucionales, quebrantamiento de forma e infracción de ley que ante Nos pende, interpuestos por los acusados Higinio Damaso , Tania Susana , Alonso Gabriel , Dionisio Ruben , Calixto Ildefonso , Ildefonso Valeriano , Arcadio Tomas , Lorena Tania , Maria Constanza , Santiago Urbano , Soledad Esther , Franco Teodulfo , Feliciano Luciano Y Palmira Tatiana , contra [sentencia dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid](#) en causa seguida por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, lesiones, falsedad de documento oficial, detención ilegal y tenencia de armas prohibidas, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la votación y fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Carlos Granados Perez, siendo también parte el Ministerio Fiscal, y estando dichos recurrentes representados, respectivamente, por la Procuradora Sra. Vived de la Vega.

Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 191/2015 de 9 Abr. 2015, Rec. 10674/2014

CONCURSO MEDIAL. Entre los delitos de trata de seres humanos y prostitución coactiva de menores. Introducción en España de menor rumana captada bajo la falsa promesa de un trabajo como empleada de hogar para dedicarla a la explotación sexual. Coautoría del acusado que, sabedor de la situación precedente de captación de la víctima, la aloja para derivarla nuevamente a la prostitución. Complicidad del resto de coacusados que desarrollan actos de colaboración y vigilancia de la menor respecto a los dos principales acusados. Abuso de su situación de vulnerabilidad, como menor extranjera sin otros medios de vida y sin documentación válida, al ser privada de la misma. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. No se vulnera. Declaración persistente y reiterada de la testigo mediante videoconferencia, con las pertinentes medidas de protección, corroboradas por funcionarios de la policía judicial que instruyeron el atestado y documental.

El TS desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la AP Castellón y confirma la condena de los acusados por delito de trata de seres humanos en concurso medial con un delito de prostitución de menores.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a nueve de Abril de dos mil quince.

En el recurso de casación por infracción de Ley y de precepto constitucional que ante Nos pende interpuesto por el MINISTERIO FISCAL y por las representaciones legales de los procesados Eusebio , Agustina , Cecilia , Isidro , Santos y Miriam , contra Sentencia 269, de 7 de julio de 2014 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón, dictada en el Rollo de Sala núm. 451/13 , dimanante del Sumario núm. 2/13 del Juzgado de Instrucción núm. 5 de dicha Capital, seguido por delitos de trata de seres humanos y prostitución de menores contra mencionados recurrentes y además contra Tomasa ; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación, votación y fallo, bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Julian Sanchez Melgar; siendo parte el Ministerio Fiscal, y estando los otros recurrentes representados por: Santos y Miriam por la Procuradora de los Tribunales Doña Esperanza Azpeitia Calvin y defendidos por el Letrado Don Eugeni Gil Garcés, Agustina , Cecilia y Eusebio representados por la Procuradora de los Tribunales Doña Cristina Bota Vinuesa y defendidos por el Letrado Don Alejandro José Cándor Moreno, y Isidro representado por la Procuradora de los Tribunales Doña María Rosa Vidal Bil y defendido por el Letrado Don Borja Valencia.

[Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 188/2016 de 4 Mar. 2016, Rec. 1131/2015](#)

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS. Inmigración ilegal. Captación de extranjeras para su introducción en territorio español so capa de falsas ofertas de trabajo, con vistas a que se dediquen a la prostitución. Diferencias con el delito de trata de personas. El presupuesto del delito de inmigración ilegal es más benigno, y está heterointegrado con elementos del Derecho administrativo. En el delito de trata de blancas figura un componente de violencia o abuso y un propósito de explotación. La acción de simular la relación laboral para facilitar la entrada en España incorpora el elemento de trasgresión de las normas administrativas que configura el delito de inmigración ilegal. PENALIDAD. Aplicación retroactiva de la norma vigente por estar sancionada con una pena más favorable al reo. FALSEDAD. Documento oficial por destino. Confección de un documento privado cuya finalidad exclusiva es la de incorporarse a un expediente público.

El TS estima parcialmente el recurso de casación interpuesto frente a la sentencia de la AP Barcelona, que condena a los acusados como autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y un delito de falsedad documental, en el sentido de degradar la pena impuesta por el delito de inmigración ilegal.

En nombre del Rey

La sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituida por los Excmos. Sres. mencionados al margen, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha dictado lo siguiente

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cuatro de Marzo de dos mil dieciséis.

En los recursos de casación que ante Nos penden, interpuestos por infracción de Ley e infracción de precepto constitucional, por Jeronimo , Patricio , Victorino , Juan Miguel y Santiago , contra la sentencia de fecha 12 de diciembre de 2014, dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Décima , en causa seguida a los mismos por delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan, se han constituido para la votación y fallo bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. D. Candido Conde-Pumpido Touron, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando todos los acusados representados por el Procurador D. Pablo Sorribes Calle.

[Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 270/2016 de 5 Abr. 2016, Rec. 10381/2015](#)

TRATA DE SERES HUMANOS. Entrada ilegal en territorio nacional de menores con fines de explotación sexual. PROSTITUCIÓN. De menores. En concurso ideal con trata. Aun cuando la finalidad de explotación sexual constituye un elemento del tipo de la trata, la sanción por este delito no absorbe toda la gravedad de la conducta realizada, cuando dicha explotación se llega a consumir efectivamente. DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. Imposición mediante engaño o abuso de situación de necesidad condiciones laborales que perjudican, suprimen o restringen derechos reconocidos al trabajador. Carácter laboral de la relación de alterne conforme jurisprudencia social. En este caso, más allá de las ganancias obtenidas por las mujeres, se tiene en cuenta el férreo control al que estaban sometidas, con una clara explotación y privación de derechos básicos. PRUEBA DE TESTIGOS. Dispensa de declarar por razón de parentesco. Se trata de un derecho irrenunciable en beneficio de los testigos, pero no de las personas denunciantes espontáneas, respecto de los hechos que les han perjudicado, y que acuden a la policía en busca de protección, como sucede en el presente caso. Validez de la declaración sumarial de menores practicada con todas las garantías e introducidas en plenario mediante su lectura.

El TS desestima el recurso de casación y confirma la sentencia de condena de la AP de Málaga por delito de trata de seres humanos en concurso con prostitución, con agravante de parentesco, falsedad y delito contra los derechos de los trabajadores.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cinco de Abril de dos mil dieciséis.

En los recursos de casación por infracción de preceptos constitucionales, quebrantamiento de forma e infracción de ley interpuestos por los acusados Juana Crescencia , Moises Urbano , Ovidio Urbano , Luis Urbano , Elena Isabel , contra sentencia dictada por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga, en causa seguida por delito de trata de seres humanos, prostitución de menores, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la votación y fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Carlos Granados Perez, siendo también parte el Ministerio Fiscal, y estando dichos recurrentes representados y defendidos, respectivamente, por el Procurador D. Alvaro José de Luis Otero y por el Letrado D. Martín Eliseo Rodríguez Bernal, por la Procuradora Doña Beatriz Martínez Martínez y por el Letrado D. Francisco Ocaña Fernández, por la Procuradora Doña Beatriz Martínez Martínez y por el Letrado D. Enrique Cruz Villegas, por la Procuradora Doña Ana Leal Labrador y defendido por la Letrada Doña María Teresa Yeste Avilés, y por la Procuradora Doña Lucía Gloria Sánchez Nieto y defendida por la Letrada Doña Olalla Bragado Alvarez.

[Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 554/2019 de 13 Nov. 2019, Rec. 10121/2019](#)

TRATA DE SERES HUMANOS. En concurso medial con prostitución coactiva. Subtipo agravado de organización criminal. Los acusados traían jóvenes rumanas en situación económica precaria, con la promesa de trabajo legal, para después someterlas a prostitución. Los acusados sometían a las mujeres, aprovechando su situación de vulnerabilidad, a férreas vigilancias, disponiendo de sus ingresos a excepción de pequeñas cantidades para su sustento. BLANQUEO DE CAPITAL. Envío de grandes remesas de dinero a familiares residentes en su país de origen. DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. Imposición de condiciones con perjuicio de los derechos laborales. Obligación al ejercicio de la prostitución y a una prestación continuada por cuenta ajena, en el contexto de una relación de dependencia. Condiciones contrarias a la dignidad humana cercanas a la esclavitud. PRUEBA. Declaración de las víctimas prestadas mediante Comisión Rogatoria sin contradicción. La diligencia no fue llevada a cabo por funcionarios españoles, sino rumanos, y la ausencia de contradicción tuvo su justificación en la previa declaración de secreto. No se ha formulado queja alguna sobre la existencia de irregularidades en las declaraciones que pueda justificar una duda razonable sobre la declaración de los testigos.

El TS desestima el recurso de casación y confirma la sentencia de condena de la AP Asturias por tres delitos de trata de seres humanos en concurso medial con tres delitos de prostitución, siete delitos de prostitución coactiva, delito contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de capitales y lesiones.

RECURSO CASACION (P) núm.: 10121/2019 P

Ponente: Excmo. Sr. D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Sonsoles de la Cuesta y de Quero

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal

Sentencia núm. 554/2019

Excmos. Sres. y Excmas. Sras.

D. Julian Sanchez Melgar

D. Antonio del Moral Garcia

D. Vicente Magro Servet
D^a. Carmen Lamela Diaz
D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina

En Madrid, a 13 de noviembre de 2019.

Esta sala ha visto ha visto el recurso de casación 10121/2019 interpuesto por Rocío , representado por el procurador DON NICOLÁS ÁLVAREZ DEL REAL bajo la dirección letrada de DON ANDRÉS MARTÍNEZ CEYANES; Pedro Jesús , representado por la procuradora ANA MARÍA ÁLVAREZ DEL BRISO MONTIANO bajo la dirección letrada DON RICARDO ÁLVAREZ-BUYLLA FERNÁNDEZ; Adrian, representado por la procuradora DOÑA MARÍA ELENA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ , bajo la dirección letrada de DOÑA ALEXANDRA NICOLETA POP y por Amadeo, representado por la procuradora DOÑA MARÍA ELENA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ bajo la dirección letrada de DON JORGE GARCÍA GÓMEZ contra la [sentencia dictada el 11 de enero de 2019 por la Audiencia Provincial de Oviedo, Sección Segunda, en el Rollo de Sala Sumario Ordinario 6/2013](#), en el que se condenó a los recurrentes como autores penalmente responsable de los delitos de trata de seres humanos penado por el [artículos 177 bis](#) 1- b, 3, 6 y 9 del código penal; prostitución coactiva del artículos 188.1 y 4 b) del mismo cuerpo legal vigente en el momento de los hechos, contra los derechos de los trabajadores previsto en el artículos 311.1º y 31 del Código Penal vigente en el momento de los hechos, blanqueo de capitales previsto y penado en el artículo 301 del texto legal mencionado vigente en el momento de los hechos y delito de lesiones de los artículos 147 y 148.1 del Código Penal vigente en el momento de los hechos. Ha sido parte recurrida el MINISTERIO FISCAL, la acusación particular, representado por DOÑA MARÍA CRISTINA MÉNDEZ ROCASALANO, bajo la dirección letrada de DOÑA ANA MARÍA GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina.

[*Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 396/2019 de 24 Jul. 2019, Rec. 10619/2018*](#)

TRATA DE SERES HUMANOS. En concurso ideal con delito de prostitución coactiva. Fines de explotación sexual, cometido en clubs de alterne. Organización criminal. Captación de menores extranjeras traídas a España a las que se obliga a ejercer la prostitución, de las que se intenta obtener el máximo rendimiento económico, mientras son explotadas. Los acusados aprovechan la precaria situación económica de las víctimas o su minoría de edad, y las someten a un ritual de brujería, influyéndoles un gran temor por las consecuencias que, en su creencia, pueden ocasionarles si desobedecen, tanto a ellas como a sus familias. Diferenciación con el delito de inmigración ilegal. En el primero prevalece la protección de la dignidad y la libertad de los sujetos pasivos. El delito de inmigración clandestina tiene carácter transnacional, y predomina la defensa de los intereses del Estado en el control de los flujos migratorios. El bien jurídico se centra en la legalidad de la entrada en territorio español.

El TS estima parcialmente el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la AP Madrid y rebaja la pena de prisión a alguno de los condenados porque no se les puede imponer una mayor pena que la solicitada por el Ministerio Fiscal.

RECURSO CASACION (P) núm.: 10619/2018

Ponente: Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal

Sentencia núm. 396/2019

Excmos. Sres. y Excmas. Sras.
D. Julián Sánchez Melgar
D. Francisco Monterde Ferrer
D. Alberto Jorge Barreiro
D^a. Carmen Lamela Diaz
D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina

En Madrid, a 24 de julio de 2019.

Esta sala ha visto el recurso de casación por infracción de Ley y de precepto constitucional interpuesto por las representaciones legales de los encausados DOÑA Tomasa , DON Cipriano , DOÑA Virtudes , DON Damaso y DON David contra [Sentencia 63/18, de 29 de junio de 2018 de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, dictada en el Rollo de Sala P.O. núm. 4155/2016](#) , dimanante del Sumario núm. 1/2016 del Juzgado de Instrucción núm. 48 de Madrid, seguido por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, inmigración ilegal y explotación lucrativa de la prostitución contra DOÑA Tomasa , DON Cipriano , DOÑA Virtudes , DON Damaso , DON David , Ernesto , Eusebio , Fabio Y Arsenio . Los Excmos. Sres. Magistrados componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados. Han sido partes en el presente procedimiento: el Ministerio Fiscal, y los recurrentes: Don Damaso representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Teresa Vidal Bodi y defendido por el Letrado Don Juan Manuel Franco Martínez, Don Cipriano representado por el Procurador de los Tribunales Don Carlos Plasencia Baltes y defendido por la Letrada Doña María Edilma Varela Mondragón, Doña Virtudes representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Amalia Josefa Delgado Cid y defendida por la letrada Doña Ana Isabel Carreras Presencia, Doña Tomasa y Don David representados por el Procurador de los Tribunales Don Carlos Plasencia Baltes y defendidos por la Letrada Doña Alexandra Nicoleta.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar.

Otros protocolos y planes de actuación

- INSTRUMENTO de ratificación del protocolo número 11 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales relativo a la reestructuración del mecanismo de control establecido por Convenio, hecho en Estrasburgo el 11 de mayo de 1994 [Enlace al documento](#)
- Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual (2015-2018) [Enlace al documento](#)
- Estrategia madrileña contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual 2016 - 2021 [Enlace al documento](#)
- Protocolo para la protección de las víctimas de trata de seres humanos en la comunidad de madrid [Enlace al documento](#)

FINLANDIA

Fuentes de consulta y referencia

Legislación

- Legislationline.org, página web que proporciona acceso directo a normas y estándares internacionales relacionados con cuestiones específicas de la dimensión humana, así como a la legislación nacional y otros documentos relevantes para estas cuestiones. Estos datos y otra información disponible en el sitio están destinados a los legisladores de la región de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa). [Enlace a la página](#)
- Informe EUROPEAN COMMISSION [Enlace al documento](#)

Otras líneas de actuación

- Ihmiskauppa.fi: sitio web central para reunir información sobre la trata de personas y las actividades contra la trata en Finlandia. Está mantenido por el sistema nacional de asistencia para víctimas de trata de personas. [Enlace a la página](#)
- Informe Ombudman 2018. [Enlace al documento](#)

Casos de trata

- Ihmiskauppa.fi. [Enlace a la página](#)

Legislación

CRIMINAL CODE (excerpts)

[...]

Chapter 17 - Offences against public order (563/1998)

Section 7 – State border offence (146/2014)

(1) A person who

1) crosses the border of Finland without a valid passport, visa, residence permit or other document comparable to a passport, or does so other than through a valid point of entry into or departure from the country, or contrary to a statutory prohibition, or attempts the same,

2) otherwise breaches the provisions on border crossing, or

3) stays, moves or undertakes measures in the border zone in violation of section 51 of the Border Zone Act or without the permission required under section 52 of the Act,

shall be sentenced for a state border offence to a fine or imprisonment for at most one year.

(2) A foreigner who is refused entry or deported as a result of the act referred to in subsection 1 or a foreigner who seeks asylum or applies for a residence permit as a refugee in Finland shall not be sentenced for a border offence. Also a foreigner who has committed the act referred to in subsection 1 due to the fact that he or she has been subjected to trafficking in human beings referred to in Chapter 25, section 3 or 3(a) shall not be sentenced for a border offence. (650/2004)

[...]

Chapter 25 - Offences against personal liberty (578/1995)

Section 3 - Trafficking in human beings (650/2004)

(1) A person who

1) by taking advantage of the dependent status or vulnerable state of another person or by pressuring another,

2) by deceiving another person or by taking advantage of a mistake made by that person,

3) by paying remuneration to a person who has control over another person, or

4) by accepting such remuneration

takes control over another person, recruits, transfers, transports, receives or provides accommodation for another person for purposes of sexual abuse referred to in Chapter 20, section 9, subsection 1(1) or comparable sexual abuse, forced labour or other demeaning circumstances or removal of bodily organs or tissues shall be sentenced for trafficking in human beings to imprisonment for at least four months and at most six years. (1177/2014)

(2) Also a person who takes control over another person below the age of eighteen years or recruits, transfers, transports, receives or provides accommodation for that person for the purposes mentioned in subsection 1 shall be sentenced for trafficking in human beings even if none of the means referred to in subsection 1(1) –(4) have been used. (1177/2014)

(3) An attempt is punishable.

Section 3(a) - Aggravated trafficking in human beings (650/2004)

(1) If, in trafficking in human beings,

1) violence, threats or deceitfulness is used instead of or in addition to the means referred to in section 3,

2) grievous bodily harm, a serious illness or a state of mortal danger or comparable particularly grave suffering is intentionally or through gross negligence inflicted on another person,

3) the offence has been committed against a child below the age of eighteen years or against a person whose capacity to defend himself or herself has been substantially diminished, or

4) the offence has been committed within the framework of an organized criminal group referred to in Chapter 6, section 5, subsection 2 (564/2015) and the offence is aggravated also when considered as whole, the offender shall be sentenced for aggravated trafficking in human beings to imprisonment for at least two years and at most ten years.

(2) Also a person who enslaves or keeps another person in servitude, transports or trades in slaves shall be sentenced for aggravated trafficking in human beings if the act is aggravated when assessed as whole.

(3) An attempt is punishable.

[...]

Section 10 – Corporate criminal liability (511/2011)

The provisions on corporate criminal liability apply to trafficking in human beings and aggravated trafficking in human beings. The provisions laid down on corporate criminal liability apply to menace when a motive for the offence was race, skin colour, birth, national or ethnic origin, religion or belief, sexual orientation or incapacity or other corresponding grounds.

ALIENS ACT (Excerpts)

(301/2004, amendments up to 1152/2010 included)

Chapter 1 General provisions

Section 3

Definitions

[...]

22) trafficking in human beings means the trafficking and aggravated trafficking in human beings referred to in chapter 25, section 3 and 3a of the Penal Code (39/1889); (619/2006)

23) victim of trafficking in human beings means an alien who, on reasonable grounds, can be suspected of having become a victim of trafficking in human beings. (619/2006)

[...]

Residence, movement and transit

Section 40

Right of residence

(1) Under this Act, legal residence means:

[...]

7) residence of a victim of trafficking in human beings during the reflection period referred to in section 52b. (619/2006)

[...]

Section 52a (619/2006)

Issuing a residence permit for a victim of trafficking in human beings

(1) A victim of trafficking in human beings staying in Finland is issued with a temporary residence permit if:

1) the residence of the victim of trafficking in human beings in Finland is justified on account of the pre-trial investigation or court proceedings concerning trafficking in human beings;

2) the victim of trafficking in human beings is prepared to cooperate with the authorities so that those suspected of trafficking in human beings can be caught; and

3) the victim of trafficking in human beings no longer has any ties with those suspected of trafficking in human beings.

(2) If the victim of trafficking in human beings is in a particularly vulnerable position, the residence permit may be issued on a continuous basis regardless of whether the requirements laid down in subsection 1(1) and (2) are met.

(3) Issuing the residence permit is not conditional on the alien having secure means of support.

(4) If a victim of trafficking in human beings is issued with a temporary residence permit, his or her family members staying abroad are not issued with a residence permit on the basis of family ties. If he or she is issued with a continuous residence permit, family members are issued with a residence permit under section 47(3).

Section 52b (619/2006)

Reflection period for a victim of trafficking in human beings

(1) Before issuing a residence permit laid down in section 52a, a reflection period of at least thirty days and a maximum of six months may be granted to a victim of trafficking in human beings.

(2) During the reflection period, a victim of trafficking in human beings must decide whether he or she will cooperate with the authorities referred to in section 52a(1)(2).

(3) The reflection period may be suspended if the victim of trafficking in human beings has voluntarily and on his or her own initiative re-established relations with those suspected of trafficking in human beings or if this is necessary on the grounds mentioned in section 36(1).

Section 52c (619/2006)

Deciding on the reflection period

(1) The District Police or a border control authority shall decide on granting and suspending the reflection period.

(2) The victim of trafficking in human beings is notified of the reflection period and its suspension in writing. The notification must give the purpose, start date and duration of the reflection period, make clear that the reflection period may be suspended, and give the grounds for suspending the reflection period.

Section 53

Validity of first fixed-term residence permits

[...]

(6) A victim of trafficking in human beings is issued with a residence permit for at least six months and for a maximum of one year. (619/2006)

[...]

Section 54 (34/2006)

Issuing extended permits

[...]

(5) An alien who has been issued with a temporary residence permit under section 51 because he or she cannot be removed from the country and a victim of trafficking in human beings who has been issued with a temporary residence permit are issued with a continuous residence permit after a continuous residence of two years in the country if the circumstances on the basis of which the alien was issued with the previous fixed-term permit are still valid.

[...]

Informe EUROPEAN COMMISSION

[Enlace al Informe](#)

Contiene:

- Información general - Situación sobre la trata de seres humanos.
- Marco institucional, jurídico y de políticas para abordar la trata de seres humanos.
- Plan de Acción Nacional.
- Cooperación Transfronteriza en la trata de seres humanos.
- Informes relevantes:
- Enlaces relevantes a las autoridades nacionales / sitios web de instituciones y otros contactos pertinentes.

Otras líneas de actuación

- Información general sobre la trata de personas [Enlace a la página](#)
- Informe Ombudman 2018. [Enlace al documento](#)

Casos de trata

- Ihmiskauppa.fi. [Enlace a la página](#)

FRANCIA

Fuente de consulta y referencia

Legislación y jurisprudencia

- LEGIFRANCE: servicio público francés para la difusión del Derecho francés por internet.
Enlace a la página: <https://www.legifrance.gouv.fr/>

Legislación

DEFINICIONES tomadas de los artículos del Código Penal Francés:

Trata de seres humanos

La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes :

1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;

2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;

4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage.

Trabajo forzado

Le travail forcé est le fait, par la violence ou la menace, de contraindre une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli.

"Le fait d'obtenir d'une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli."

Esclavitud

La réduction en esclavage est le fait d'exercer à l'encontre d'une personne l'un des attributs du droit de propriété.

L'exploitation d'une personne réduite en esclavage est le fait de commettre à l'encontre d'une personne dont la réduction en esclavage est apparente ou connue de l'auteur une agression sexuelle, de la séquestrer ou de la soumettre à du travail forcé ou du service forcé.

Livre II : Des crimes et délits contre les personnes

Titre II : Des atteintes à la personne humaine

Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne

Section 1 bis : De la traite des êtres humains

Article 225-4-1

Modifié par [Loi n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 1](#)

I. - La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes :

1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;

2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;

4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage.

L'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.

La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

II. - La traite des êtres humains à l'égard d'un mineur est constituée même si elle n'est commise dans aucune des circonstances prévues aux 1° à 4° du I.

Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende.

Article 225-4-2

Modifié par [Loi n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 1](#)

I.-L'infraction prévue au I de [l'article 225-4-1](#) est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du même I ou avec l'une des circonstances supplémentaires suivantes :

1° A l'égard de plusieurs personnes ;

2° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;

3° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

4° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

5° Avec l'emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;

6° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public ;

7° Lorsque l'infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave.

II.-L'infraction prévue au II de l'article 225-4-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été commise dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du I du même article 225-4-1 ou dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du I du présent article.

Article 225-4-3

Créé par [Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32 JORF 19 mars 2003](#)

Créé par [Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32](#)

L'infraction prévue à [l'article 225-4-1](#) est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.

Article 225-4-4

Créé par [Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32 JORF 19 mars 2003](#)

Créé par [Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32](#)

L'infraction prévue à [l'article 225-4-1](#) commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende.

Article 225-4-5

Créé par [Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32 JORF 19 mars 2003](#)

Créé par [Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32](#)

Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des [articles 225-4-1 à 225-4-3](#), l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.

Article 225-4-6

Créé par [Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32](#)

Modifié par [Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124](#)

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par [l'article 121-2](#), des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par [l'article 131-38](#), les peines prévues par [l'article 131-39](#).

Article 225-4-7

Créé par [Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32 JORF 19 mars 2003](#)

Créé par [Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32](#)

La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.

Article 225-4-8

Modifié par [Loi n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 1](#)

Lorsque les infractions prévues aux [articles 225-4-1 et 225-4-2](#) sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de [l'article 113-6](#) et la seconde phrase de [l'article 113-8](#) n'est pas applicable.

Article 225-4-9

Créé par [Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 JORF 10 mars 2004](#)

Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

Section 3 : Des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, du travail forcé et de la réduction en servitude

Article 225-13

Modifié par [Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 33](#)

Modifié par [Loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 50](#)

Le fait d'obtenir d'une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de [l'article L. 6313-1 du code du travail](#) pour une durée de cinq ans.

Article 225-14

Modifié par [Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 34 JORF 19 mars 2003](#)

Créé par [Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 34](#)

Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Article 225-14-1

Créé par [Loi n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 1](#)

Le travail forcé est le fait, par la violence ou la menace, de contraindre une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli. Il est puni de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende.

Article 225-14-2

Créé par [Loi n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 1](#)

La réduction en servitude est le fait de faire subir, de manière habituelle, l'infraction prévue à [l'article 225-14-1](#) à une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur. Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.

Article 225-15

Modifié par [Loi n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 1](#)

I. – Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes :

1° Les infractions définies aux [articles 225-13 et 225-14](#) sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende ;

2° L'infraction définie à [l'article 225-14-1](#) est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ;

3° L'infraction définie à [l'article 225-14-2](#) est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d'amende.

II. – Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un mineur :

1° Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende ;

2° L'infraction définie à l'article 225-14-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ;

3° L'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d'amende.

III. – Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs :

1° Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ;

2° L'infraction définie à l'article 225-14-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d'amende ;

3° L'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 € d'amende.

Article 225-15-1

Modifié par [Loi n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 1](#)

Pour l'application des [articles 225-13 à 225-14-2](#), les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français sont considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance.

Article 225-16

Modifié par [Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124](#)

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par [l'article 121-2](#), des infractions définies aux [articles 225-13 à 225-15](#) encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article [131-38](#) :

1° (Abrogé) ;

2° Les peines mentionnées à [l'article 131-39](#) ;

3° La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à [l'article 225-14](#).

Livre II : Des crimes et délits contre les personnes

Titre II : Des atteintes à la personne humaine

Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne

Section 1 : De la réduction en esclavage et de l'exploitation de personnes réduites en esclavage

Article 224-1 A

Créé par [Loi n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 3](#)

La réduction en esclavage est le fait d'exercer à l'encontre d'une personne l'un des attributs du droit de propriété.

La réduction en esclavage d'une personne est punie de vingt années de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de [l'article 132-23](#) relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.

Article 224-1 B

Créé par [Loi n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 3](#)

L'exploitation d'une personne réduite en esclavage est le fait de commettre à l'encontre d'une personne dont la réduction en esclavage est apparente ou connue de l'auteur une agression sexuelle, de la séquestrer ou de la soumettre à du travail forcé ou du service forcé.

L'exploitation d'une personne réduite en esclavage est punie de vingt années de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de [l'article 132-23](#) relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.

Article 224-1 C

Créé par [Loi n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 3](#)

Le crime de réduction en esclavage défini à [l'article 224-1 A](#) et le crime d'exploitation d'une personne réduite en esclavage définis à [l'article 224-1 B](#) sont punis de trente années de réclusion criminelle lorsqu'ils sont commis :

1° A l'égard d'un mineur ;

2° A l'égard d'une personne dont la vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de l'auteur ;

3° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne qui a autorité sur la victime ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre l'esclavage ou au maintien de l'ordre public ;

5° Lorsque le crime est précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de [l'article 132-23](#) relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article.

- [Partie législative](#)
 - [Livre Ier : Dispositions générales](#)
 - [Titre III : Des peines](#)
 - [Chapitre II : Du régime des peines](#)
 - [Section 1 : Dispositions générales](#)
 - [Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive](#)
 - [Paragraphe 3 : Dispositions générales](#)

Article 132-16-3

- Créé par [Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 1 JORF 13 décembre 2005](#)

Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus par les [articles 225-4-1, 225-4-2, 225-4-8, 225-5 à 225-7](#) et [225-10](#) sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

[Partie législative](#)

[Livre Ier : Dispositions générales](#)

[Titre II : De la responsabilité pénale](#)

Chapitre II : Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité

Article 122-2 [En savoir plus sur cet article...](#)

N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister.

Partie législative

Livre Ier : Dispositions générales

Titre Ier : De la loi pénale

Chapitre III : De l'application de la loi pénale dans l'espace

Article 113-1 [En savoir plus sur cet article...](#)

Pour l'application du présent chapitre, le territoire de la République inclut les espaces maritime et aérien qui lui sont liés.

[Section 1 : Des infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République](#)

Article 113-2 [En savoir plus sur cet article...](#)

La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République.

L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.

Article 113-2-1 [En savoir plus sur cet article...](#)

Créé par [Loi n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 28](#)

Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d'un réseau de communication électronique, lorsqu'il est tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République.

Article 113-3 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 87](#)

La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, ou à l'encontre de tels navires ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des navires de la marine nationale, ou à l'encontre de tels navires ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Article 113-4 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 87](#)

La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en France, ou à l'encontre de tels aéronefs ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des aéronefs militaires français, ou à l'encontre de tels aéronefs ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Article 113-5 [En savoir plus sur cet article...](#)

La loi pénale française est applicable à quiconque s'est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.

[Section 2 : Des infractions commises hors du territoire de la République](#)

Article 113-6 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 36](#)

La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République.

Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.

Elle est applicable aux infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, commises dans un autre Etat membre de l'Union européenne et constatées en France, sous réserve des dispositions de [l'article 692](#) du code de procédure pénale ou de la justification d'une sanction administrative qui a été exécutée ou ne peut plus être mise à exécution.

Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé.

Article 113-7 [En savoir plus sur cet article...](#)

La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction.

Article 113-8 [En savoir plus sur cet article...](#)

Dans les cas prévus aux [articles 113-6 et 113-7](#), la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.

Article 113-8-1 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 22](#)

Sans préjudice de l'application des [articles 113-6 à 113-8](#), la loi pénale française est également applicable à tout crime ou à tout délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l'extradition ou la remise a été refusée à l'Etat requérant par les autorités françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel l'extradition avait été demandée est puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, soit que le fait considéré revêt le caractère d'infraction politique, soit que l'extradition ou la remise serait susceptible d'avoir, pour la personne réclamée, des conséquences d'une gravité exceptionnelle en raison, notamment, de son âge ou de son état de santé.

La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public.

Article 113-9 [En savoir plus sur cet article...](#)

Dans les cas prévus aux [articles 113-6 et 113-7](#), aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

Article 113-10 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 17 \(V\)](#)

La loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et réprimés par le titre Ier du livre IV, à la falsification et à la contrefaçon du sceau de l'Etat, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d'effets publics réprimés par les [articles 442-1, 442-2, 442-5, 442-15, 443-1 et 444-1](#) et à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires français, commis hors du territoire de la République.

Article 113-11 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 87](#)

Sous réserve des dispositions de [l'article 113-9](#), la loi pénale française est applicable aux crimes et délits commis à bord ou à l'encontre des aéronefs non immatriculés en France ou des personnes se trouvant à bord :

1° Lorsque l'auteur ou la victime est de nationalité française ;

2° Lorsque l'appareil atterrit en France après le crime ou le délit ;

3° Lorsque l'aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur le territoire de la République.

Dans le cas prévu au 1°, la nationalité de l'auteur ou de la victime de l'infraction est appréciée conformément aux [articles 113-6, dernier alinéa, et 113-7](#).

Article 113-12 [En savoir plus sur cet article...](#)

Créé par [Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 9 JORF 27 février 1996](#)

La loi pénale française est applicable aux infractions commises au-delà de la mer territoriale, dès lors que les conventions internationales et la loi le prévoient.

Article 113-13 [En savoir plus sur cet article...](#)

Créé par [Loi n°2012-1432 du 21 décembre 2012 - art. 2](#)

La loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'actes de terrorisme et réprimés par le titre II du livre IV commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français.

[Partie législative](#)

[Livre Ier : Dispositions générales](#)

[Titre II : De la responsabilité pénale](#)

Chapitre II : Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité

Article 122-2 [En savoir plus sur cet article...](#)

N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister.

Partie législative

Livre Ier : Dispositions générales

Titre Ier : De la loi pénale

Chapitre III : De l'application de la loi pénale dans l'espace

Article 113-1 [En savoir plus sur cet article...](#)

Pour l'application du présent chapitre, le territoire de la République inclut les espaces maritime et aérien qui lui sont liés.

[Section 1 : Des infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République](#)

Article 113-2 [En savoir plus sur cet article...](#)

La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République.

L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.

Article 113-2-1 [En savoir plus sur cet article...](#)

Créé par [Loi n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 28](#)

Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d'un réseau de communication électronique, lorsqu'il est tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République.

Article 113-3 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 87](#)

La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, ou à l'encontre de tels navires ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des navires de la marine nationale, ou à l'encontre de tels navires ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Article 113-4 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 87](#)

La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en France, ou à l'encontre de tels aéronefs ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des aéronefs militaires français, ou à l'encontre de tels aéronefs ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Article 113-5 [En savoir plus sur cet article...](#)

La loi pénale française est applicable à quiconque s'est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.

[Section 2 : Des infractions commises hors du territoire de la République](#)

Article 113-6 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 36](#)

La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République.

Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.

Elle est applicable aux infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, commises dans un autre Etat membre de l'Union européenne et constatées en France, sous réserve des dispositions de [l'article 692](#) du code de procédure pénale ou de la justification d'une sanction administrative qui a été exécutée ou ne peut plus être mise à exécution.

Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé.

Article 113-7 [En savoir plus sur cet article...](#)

La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction.

Article 113-8 [En savoir plus sur cet article...](#)

Dans les cas prévus aux [articles 113-6 et 113-7](#), la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.

Article 113-8-1 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 22](#)

Sans préjudice de l'application des [articles 113-6 à 113-8](#), la loi pénale française est également applicable à tout crime ou à tout délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l'extradition ou la remise a été refusée à l'Etat requérant par les autorités françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel l'extradition avait été demandée est puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, soit que le fait considéré revêt le caractère d'infraction politique, soit que l'extradition ou la remise serait susceptible d'avoir, pour la personne réclamée, des conséquences d'une gravité exceptionnelle en raison, notamment, de son âge ou de son état de santé.

La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public.

Article 113-9 [En savoir plus sur cet article...](#)

Dans les cas prévus aux [articles 113-6 et 113-7](#), aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

Article 113-10 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 17 \(V\)](#)

La loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et réprimés par le titre Ier du livre IV, à la falsification et à la contrefaçon du sceau de l'Etat, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d'effets publics réprimés par les [articles 442-1, 442-2, 442-5, 442-15, 443-1 et 444-1](#) et à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires français, commis hors du territoire de la République.

Article 113-11 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 87](#)

Sous réserve des dispositions de [l'article 113-9](#), la loi pénale française est applicable aux crimes et délits commis à bord ou à l'encontre des aéronefs non immatriculés en France ou des personnes se trouvant à bord :

1° Lorsque l'auteur ou la victime est de nationalité française ;

2° Lorsque l'appareil atterrit en France après le crime ou le délit ;

3° Lorsque l'aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur le territoire de la République.

Dans le cas prévu au 1°, la nationalité de l'auteur ou de la victime de l'infraction est appréciée conformément aux [articles 113-6, dernier alinéa, et 113-7](#).

Article 113-12 [En savoir plus sur cet article...](#)

Créé par [Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 9 JORF 27 février 1996](#)

La loi pénale française est applicable aux infractions commises au-delà de la mer territoriale, dès lors que les conventions internationales et la loi le prévoient.

Article 113-13 [En savoir plus sur cet article...](#)

Créé par [Loi n°2012-1432 du 21 décembre 2012 - art. 2](#)

La loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'actes de terrorisme et réprimés par le titre II du livre IV commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français.

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

- [Partie législative](#)
 - [Titre préliminaire : Dispositions générales](#)
 - [Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile](#)

Article 2-22

Modifié par [Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 43](#)

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou l'action sociale en faveur des personnes prostituées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les [articles 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12-2, 225-14-1 et 225-14-2](#) du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l'accord est donné par son représentant légal.

Si l'association mentionnée au premier alinéa du présent article est reconnue d'utilité publique, son action est recevable y compris sans l'accord de la victime.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

- [Partie législative](#)
 - [Livre IV : De quelques procédures particulières](#)
 - [Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction](#)

Article 706-3

Modifié par [Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 157](#)

Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de [l'article L. 126-1](#) du code des assurances ni du chapitre Ier de la [loi n° 85-677 du 5 juillet 1985](#) tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

2° Ces faits :

-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;

-soit sont prévus et réprimés par les [articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27](#) du code pénal ;

3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.

La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

- [Partie législative](#)
 - [Livre IV : De quelques procédures particulières](#)
 - [Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes](#)

Article 706-47

Modifié par [Loi n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 1](#)

Le présent titre est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes :

1° Crimes de meurtre ou d'assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un mineur ou lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale ;

2° Crimes de tortures ou d'actes de barbarie prévus aux articles 222-1 à 222-6 du même code et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente prévus à l'article 222-10 dudit code ;

3° Crimes de viol prévus aux articles 222-23 à 222-26 du même code ;

4° Délits d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-31-1 du même code ;

5° Délits et crimes de traite des êtres humains à l'égard d'un mineur prévus aux articles 225-4-1 à 225-4-4 du même code ;

6° Délit et crime de proxénétisme à l'égard d'un mineur prévus au 1° de l'article 225-7 et à l'article 225-7-1 du même code ;

7° Délits de recours à la prostitution d'un mineur prévus aux articles 225-12-1 et 225-12-2 du même code ;

8° Délit de corruption de mineur prévu à l'article 227-22 du même code ;

9° Délit de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, prévu à l'article 227-22-1 du même code ;

10° Délits de captation, d'enregistrement, de transmission, d'offre, de mise à disposition, de diffusion, d'importation ou d'exportation, d'acquisition ou de détention d'image ou de représentation pornographique d'un mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d'un paiement d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, prévus à l'article 227-23 du même code ;

11° Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, prévus à l'article 227-24 du même code ;

12° Délit d'incitation d'un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation, prévu à l'article 227-24-1 du même code ;

13° Délits d'atteintes sexuelles prévus aux articles 227-25 à 227-27 du même code.

- [Partie législative](#)
 - [Livre IV : De quelques procédures particulières](#)
 - [Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques](#)

Article 706-55

- Modifié par [LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 24](#)

Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

1° Les infractions de nature sexuelle visées à [l'article 706-47](#) du présent code ainsi que le délit prévu par [l'article 222-32](#) du code pénal ;

2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les [articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21](#) du code pénal ;

3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus par les [articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2 et 322-1 à 322-14](#) du code pénal ;

4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie, l'association de malfaiteurs et les crimes et délits de guerre prévus par les [articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-6, 442-1 à 442-5, 450-1 et 461-1 à 461-31](#) du code pénal ;

5° Les délits prévus aux articles [222-52 à 222-59](#) du code pénal, aux articles [L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2339-11-2, L. 2353-4 et L. 2353-13](#) du code de la défense et aux articles [L. 317-1-1 à L. 317-9](#) du code de la sécurité intérieure ;

6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les [articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6](#) du code pénal.

- [Partie législative](#)
 - [Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services](#)
 - [Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements](#)
 - [Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale.](#)

Article L345-1

- Modifié par [Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 128 \(V\)](#)

Bénéficiaire, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être accueillis dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés " centres provisoires d'hébergement " définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent code.

Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par voie réglementaire, assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de [l'article L. 312-1](#), en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale. Les centres remplissent chaque année une enquête nationale de coûts relative au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion, pour le recueil des données relatives à l'année précédente. En l'absence de transmission de ces données, l'autorité compétente de l'Etat procède à une tarification d'office de l'établissement. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire.

Ce règlement précise, d'une part, les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement et d'entretien et, d'autre part, les conditions dans lesquelles elles perçoivent la rémunération mentionnée à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion professionnelle prévues à l'alinéa précédent.

Des places en centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont ouvertes à l'accueil des victimes de la traite des êtres humains, du proxénétisme et de la prostitution dans des conditions sécurisantes.

Les personnels des centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles [226-13](#) et [226-14](#) du code pénal. Par dérogation au même article 226-13, ils peuvent échanger entre eux les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision.

Legislación relacionada

- [Avis sur la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel](#)

(JORF n°0136 du 14 juin 2014, texte n° 70)

Article

(Assemblée plénière - 22 mai 2014)

1. Le 4 décembre 2013, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel (1). Ce texte, qui a reçu le soutien du Gouvernement, se présente comme l'aboutissement d'un travail approfondi sur la question de la prostitution mené notamment par la mission d'information sur la prostitution en France. Cette mission, constituée au sein de la commission des lois de l'Assemblée nationale, a rendu en avril 2011 un rapport intitulé « Prostitution : l'exigence de responsabilité. Pour en finir avec le plus vieux métier du monde » (2). Ces travaux ont conduit à l'adoption par l'Assemblée, à l'unanimité, le 6 décembre 2011 d'une résolution réaffirmant la position abolitionniste de la France en matière de prostitution (3). A la suite de cette résolution, deux rapports parlementaires reposant sur des logiques distinctes ont été adoptés à l'automne 2013, l'un rédigé par la délégation aux droits des femmes de cette même Assemblée sur « le renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel » (4) ; l'autre émanant du Sénat sur « la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées : inverser le regard » (5). Ainsi qu'il ressort de son intitulé et de son exposé des motifs, la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, qui devrait être débattue au Sénat avant l'été, s'inscrit dans la ligne du premier de ces deux rapports, à savoir la lutte contre la prostitution ; une prostitution appréhendée en tant qu'élément d'un système dans lequel elle se trouve intrinsèquement liée à la traite et à l'exploitation des êtres humains.

2. Au regard de la mission qui lui est impartie de protection des libertés et droits fondamentaux, la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDDH) a jugé nécessaire de s'autosaisir de cette proposition de loi qui s'attache à combattre la traite et l'exploitation des êtres humains, car elles sont à l'origine de violations des droits de l'homme parmi les plus graves. Soucieuse de la lutte contre ce fléau, la CNCDDH — qui a déjà, à l'issue d'une importante étude menée en 2009 sur ce sujet, rédigé un avis riche de 94 recommandations (6) — se félicite d'un certain nombre d'avancées de la proposition de loi, relatives notamment à la prévention et à la lutte contre la traite et l'exploitation ainsi qu'à la prise en charge des victimes. Elle regrette toutefois que certaines de ces avancées demeurent limitées et recommande, au terme d'une longue réflexion enrichie par les auditions de très nombreux acteurs de terrain, l'abandon de certaines dispositions. Elle entend aussi contribuer, par son avis, à éclairer le débat et à l'apaiser, car comme l'a relevé le Sénat dans son rapport précité, « peu de sujets soulèvent autant de controverses et de passions que celui de la prostitution. Chacun semble en avoir une idée précise, soit pour la condamner comme une violence faite aux femmes, soit pour la défendre comme la traduction de la libre disposition du corps humain. Parce qu'elle renvoie à deux sujets tabous entre tous que sont la sexualité et l'argent, la prostitution suscite à la fois des réactions de rejet et de fascination qui semblent empêcher toute construction d'un discours apaisé susceptible d'être partagé par le plus grand nombre » (7).

3. L'exposé des motifs de la proposition de loi inscrit le texte dans une approche abolitionniste de la prostitution, mais les auditions réalisées par la CNCDDH ont montré que le mouvement abolitionniste est loin d'être unifié, et qu'en son sein les approches peuvent être très divergentes (8). Il convient donc d'être prudent dans l'usage des termes. C'est pourquoi la CNCDDH estime utile de préciser le sens attribué à la doctrine abolitionniste par rapport aux doctrines prohibitionniste et réglementariste :

— le prohibitionnisme correspond à l'interdiction pénale de la prostitution, à sa définition comme une infraction et donc à la sanction de tous ses acteurs (le client, la personne prostituée, l'éventuel proxénète). Il a pour objectif l'éradication de la prostitution ;

— le réglementarisme repose sur l'existence d'une réglementation légale et/ou administrative de la prostitution. L'exercice de cette activité est soumise à un certain nombre de conditions dont le respect est contrôlé par les pouvoirs publics (obligation d'inscription sur un fichier sanitaire et social, examens sanitaires réguliers, exercice limité à des lieux déterminés, etc.) (9) ;

— l'abolitionnisme vise originellement l'abolition du régime réglementariste. « Il s'agit de supprimer toute forme d'intervention de la puissance publique encadrant l'exercice de la prostitution » (10) (11). La CNCDH relève toutefois que la définition même de l'abolitionnisme est sujette à débats. Ces débats trouvent leur source dans l'ambiguïté du terme d' « abolitionnisme » et s'expliquent par l'histoire du mouvement abolitionniste. Né à la fin du xix^e siècle en Angleterre, ce mouvement avait pour objectif de mettre un terme au corpus de règles qui contribuait à enfermer les prostituées (maisons closes, mise en carte sanitaire, fichiers de police, etc.). Mais dès cette époque, des débats se sont fait jour en son sein sur ce que devait être l'objectif de long terme : l'abolition de la réglementation, laissant libre court à une prostitution exercée sans contrainte, ou l'abolition de la prostitution elle-même, afin de protéger les personnes du « fléau » qu'elle constitue (12).

Au terme de ces définitions, elles-mêmes sujettes à débats au sein de la CNCDH, la proposition de loi, qui introduit des mesures répressives (interdiction de l'achat d'un acte sexuel, pénalisation des clients de personnes prostituées) et vise la suppression de la prostitution, paraît s'inscrire dans une logique plus prohibitionniste qu'abolitionniste.

4. La CNCDH a examiné la proposition de loi en s'attachant à prendre en compte la complexité et la diversité des phénomènes prostitutionnels, d'exploitation et de traite. S'il lui apparaît que le recours à la répression doit être limité à l'exploitation de la prostitution d'autrui et à la traite à cette fin ainsi qu'à la prostitution des mineurs et des personnes vulnérables, elle se félicite en revanche du volet social de la proposition de loi, qui tend à assurer à toute personne prostituée l'accompagnement adéquat garantissant à chacun la jouissance des droits reconnus à tous. Elle entend dès lors distinguer le volet répressif de la proposition de loi (I) de son volet social (II).

I. - Volet répressif

5. En France, la lutte contre la traite et l'exploitation des êtres humains est souvent principalement considérée sous l'angle de la prostitution et des violences faites aux femmes. La proposition de loi ne déroge pas à cette approche. Elle s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes et, plus largement, de la promotion de l'égalité entre hommes et femmes. Mêlant les questions de traite des êtres humains en général, d'exploitation de la prostitution et de celle-ci en tant que telle, elle considère la prostitution comme un phénomène homogène. Elle se fonde par ailleurs sur le présupposé que toute forme de prostitution porte atteinte à la dignité humaine et constitue une violence faite aux femmes et aux personnes démunies ainsi qu'une exploitation des plus faibles (13).

6. Pourtant, le phénomène prostitutionnel est hétérogène et de surcroît particulièrement difficile à appréhender. Il couvre un ensemble large de pratiques sociales, dont on ne connaît ni l'étendue, ni les limites exactes, ni la diversité. La prostitution peut être « traditionnelle », de rue ou indoor, féminine, masculine ou transgenre, régulière ou occasionnelle, etc. Cette hétérogénéité témoigne du fait qu'il n'y a pas « d'état de prostitution », mais des « situations de prostitution ». Il convient donc de parler de personnes prostituées et non de prostitution. Par ailleurs, « l'examen de la diversité des situations de prostitution fait apparaître des degrés très variables dans la contrainte ou au contraire dans la liberté » (14). Cette gradation entre contrainte et liberté ne peut être ignorée car elle se traduit de façon concrète en termes de pratiques, de risques sanitaires, de violences, et de vulnérabilité. Elle exclut donc que l'on parle de « système prostitutionnel » pour désigner de manière globale la situation des personnes

prostituées. En revanche, il existe bien un système, mais c'est un système d'exploitation et de traite à cette fin, qui touche l'ensemble des activités humaines et qui est le fait d'individus ou de groupes organisés, y compris des réseaux mafieux très puissants, à l'échelle nationale ou internationale. La CNCDH entend à cet égard rappeler que l'exploitation et la traite ne sont pas le propre de l'exercice de la prostitution et touchent tous les secteurs d'activité (15).

7. La CNCDH estime, en s'appuyant notamment sur les rapports du Sénat et de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) (16), que le texte législatif doit prendre en compte cette complexité et cette diversité des situations de prostitution afin d'y apporter les réponses les plus adéquates. Une telle approche conduit à distinguer, d'une part, la prostitution en tant que telle (activité légale en France, sous réserve du respect de l'ordre public et de l'exception du recours à la prostitution des mineurs et des personnes vulnérables) et, d'autre part, l'exploitation de la prostitution d'autrui ainsi que la traite à cette fin, activités lourdement pénalisées aussi bien au niveau national qu'international. Aussi convient-il d'examiner successivement les dispositions de la proposition de loi relatives à la répression pénale de la traite et de l'exploitation (A), et celles relatives à la répression pénale de la prostitution (B).

A. — La répression pénale de la traite et de l'exploitation

8. La CNCDH salue l'intention du législateur d'adapter le cadre juridique de la lutte contre la traite et l'exploitation aux évolutions récentes que connaît ce type de criminalité. Face à l'expansion des réseaux de traite, d'exploitation et de proxénétisme sur internet, la proposition de loi se propose de renforcer les moyens de lutte contre ces phénomènes sur internet. L'article 1er, alinéa 1, tend ainsi à impliquer plus fortement les acteurs de l'internet, et notamment les hébergeurs de sites et les fournisseurs d'accès à internet dans cette lutte. Ils doivent désormais mettre en place un dispositif permettant à toute personne de porter à leur connaissance les infractions liées à la traite d'êtres humains ainsi qu'au proxénétisme sur internet, informer promptement les autorités publiques compétentes et rendre publics les moyens qu'ils consacrent à la lutte contre ces activités illicites (17). L'alinéa 2 de l'article 1er prévoyait en plus que des sites internet hébergés à l'étranger, contrevenant à la loi française contre le proxénétisme et la traite des êtres humains, puissent être bloqués par les fournisseurs d'accès à internet, sur demande de l'autorité judiciaire. Le Conseil national du numérique (CNN) a toutefois estimé que cette disposition portait « atteinte à la liberté d'expression et de communication » et qu'en outre l'institution d'un dispositif de filtrage des adresses électroniques par l'autorité administrative constituait « une mesure dont l'adoption se révélerait contre-productive, sans même répondre aux objectifs fixés par la proposition de loi ». Suivant l'avis du CNN, le Gouvernement et le législateur ont écarté cette disposition. Si la CNCDH comprend les difficultés relevées par le CNN, elle invite néanmoins le législateur à réfléchir à la mise en œuvre d'un nouveau dispositif qui, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et de communication, permettrait de signaler, de bloquer l'accès et de rechercher les auteurs de contenus illicites relatifs à la traite et à l'exploitation des êtres humains.

9. La CNCDH regrette par ailleurs que la proposition de loi n'aborde pas plus largement la question du cadre juridique de la traite et de l'exploitation, bien que la loi du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France ait déjà introduit de nouveaux éléments de définition des infractions de traite et d'exploitation et permis une mise en cohérence de la répression de l'exploitation et de la traite à cette fin.

10. Certes, cette loi renforce la lutte contre la traite des êtres humains, désormais définie comme « le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir » à différentes fins d'exploitation et dans diverses circonstances ([art. 225-4-1 du code pénal](#)). Elle élargit en outre l'élément matériel de l'infraction (18) en ajoutant à la recherche du profit, qui était jusque-là la seule composante de la traite, des hypothèses nouvelles ne renvoyant pas à un comportement

mercantile (contrainte, violences, abus d'autorité, abus de vulnérabilité, minorité...), qui auparavant étaient des circonstances aggravantes. Les objectifs d'exploitation poursuivis par l'auteur ont également été étendus par la nouvelle loi (19). Si le champ pénal a été ainsi considérablement élargi, une ambiguïté persiste néanmoins dans la définition de l'élément moral de l'infraction (20), en ce qui concerne l'objet de la connaissance du projet de traite ou d'exploitation par la personne qui exécute l'une des opérations énumérées dans la loi (21). Cette imprécision pose problème au regard de l'exigence de qualité de la loi découlant du principe constitutionnel de la légalité criminelle.

11. Par ailleurs, la CNCDH note que l'infraction de traite des êtres humains soulève un conflit de qualification avec celle de proxénétisme (22). Or même si les circulaires du ministère de la justice (23) rappellent qu'il convient, dans les cas de traite et d'exploitation, de poursuivre les individus concernés à la fois pour traite et pour proxénétisme, les auditions ont montré que les dispositions relatives au proxénétisme demeurent privilégiées car elles s'avèrent moins exigeantes en termes de preuve, entraînent des sanctions équivalentes et permettent de clore l'enquête plus rapidement, et donc de faire cesser plus vite l'infraction à l'encontre des victimes. Si la CNCDH peut comprendre le souci d'efficacité et de rapidité qui préside au choix des qualifications fondant les poursuites, elle estime toutefois qu'au regard de la gravité des comportements en cause il convient néanmoins, au nom du principe de la plus haute expression pénale, de choisir en priorité la qualification de traite.

12. La loi du 5 août 2013 identifie et précise ensuite la notion d'exploitation et les circonstances dans lesquelles elle s'inscrit. L'exploitation fait ainsi l'objet d'une définition, bâtie à partir de faits dont les finalités représentent des formes d'utilisation d'autrui sans son consentement, auxquels viennent s'ajouter la réduction en esclavage, la réduction en servitude, le travail forcé et le prélèvement d'organes. La loi a donc introduit une distinction plus claire entre le comportement (recruter, transporter...), le moyen employé qui a été élargi (menace, promesse de rémunération...) et le but poursuivi (exploiter une personne, c'est-à-dire en disposer afin de la contraindre à faire différentes choses). A cet égard, la CNCDH note que la loi, en privilégiant l'approche en termes de gradation retenue par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (24), donne une cohérence à la répression de l'exploitation, et définit celle-ci de manière claire et précise. Une hiérarchie est introduite entre les différentes formes d'exploitation, dont les trois degrés sont la réduction en esclavage, la servitude et le travail forcé (25).

13. La CNCDH note par ailleurs que la diversité des peines actuellement encourues par les auteurs de faits de traite ou d'exploitation ne permet de respecter ni le principe de légalité criminelle, ni celui d'égalité. En raison du recours à des « infractions relais » (26) exposant leurs auteurs à des peines s'élevant de deux mois d'emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité, la peine encourue pour des faits de traite ou d'exploitation est particulièrement imprévisible. Elle peut en outre varier, alors même que des faits similaires ont été commis, en fonction de l'incrimination finalement retenue.

14. Par ailleurs, la gravité des faits de traite et d'exploitation exige que des enquêtes soient immédiatement et systématiquement ouvertes, sans dépendre de la déclaration ou de la dénonciation émanant d'une victime, en particulier lorsqu'elle est mineure. Des recommandations en ce sens doivent être adressées avec force aux parquets. De façon à harmoniser la répression de la traite et de l'exploitation sur l'ensemble du territoire, la CNCDH recommande donc de définir une politique pénale en la matière, en insistant sur son caractère prioritaire. Face à un phénomène complexe aux contours encore mal définis, la sensibilisation et la formation des policiers, gendarmes et magistrats est essentielle pour favoriser la mise en œuvre efficace des dispositions pénales internes.

15. De plus, afin de mesurer l'action des services de détection et de répression et de la justice à l'égard de la traite et de l'exploitation, mais aussi de leur permettre de s'adapter aux évolutions du phénomène, la CNCDH recommande de procéder chaque année :

— au recensement des faits constatés, poursuivis et condamnés, quelle que soit la forme de traite ou d'exploitation concernée, et selon la forme en cause ;

— au recueil des informations relatives au profil des auteurs (sexe, âge, nationalité, etc.) et aux méthodes employées par eux ;

— à l'analyse quantitative et qualitative de l'ensemble de ces données.

16. La CNCDH recommande en outre un renforcement de la lutte contre la traite et l'exploitation des mineurs. La proposition de loi reste silencieuse en la matière. Pourtant, une véritable attention au traitement des infractions commises à leur encontre s'impose ; la CNCDH rappelle à cet égard que la minorité des victimes n'est pas toujours retenue dans la qualification des infractions de proxénétisme (27). Les enquêtes doivent être approfondies, car les situations sont complexes et peuvent recouvrir plusieurs infractions. Un mineur victime de traite et d'exploitation, en particulier lorsqu'il s'agit d'exploitation et de recours à la prostitution, doit être systématiquement considéré comme une victime et accompagné afin qu'il puisse être représenté tout au long de la procédure. Les infractions ne doivent pas être correctionnalisées lorsque des actes criminels ont été commis. Il convient de veiller à ce que les pratiques policières et judiciaires soient harmonisées sur l'ensemble du territoire. De manière plus générale, la CNCDH relève le constat fait par l'IGAS (28) du très faible investissement des pouvoirs publics dans cette lutte contre la prostitution et le proxénétisme des mineurs. La volonté politique doit donc être renforcée afin qu'il n'y ait pas de demi-mesure dans la prise en compte de ces mineurs. La formation des professionnels-enquêteurs, des travailleurs sociaux, des magistrats, des équipes médicales, et la sensibilisation du grand public sur la pénalisation des clients des mineurs victimes de prostitution, est urgente et nécessaire. Se pose également la question de la prise en charge de ces mineurs, qui doivent pouvoir bénéficier de structures adaptées et encadrées par des professionnels spécifiquement formés.

17. Enfin, la CNCDH rappelle que la lutte contre la traite et l'exploitation ne peut être réellement efficace que si le phénomène est appréhendé dans sa globalité. Or la proposition de loi, parce qu'elle assimile prostitution, exploitation de la prostitution et traite des êtres humains, appréhende la lutte contre la traite et l'exploitation sous le seul angle de la prostitution (en oubliant les autres formes d'exploitation, comme notamment le travail forcé). En 2001 déjà, la mission d'information sur les différentes formes d'esclavage moderne invitait à ne pas isoler la prostitution des autres formes d'esclavage (29). De même, le Groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), dans son premier rapport de 2013 concernant la France (30), « rappelle l'importance de couvrir l'ensemble des différents types de traite, notamment aux fins d'exploitation par le travail (par exemple dans le cadre du travail saisonnier, du secteur de la construction ou du travail domestique) ». La CNCDH recommande donc, au nom de l'intelligibilité et de l'autorité du dispositif pénal de lutte contre la traite et l'exploitation, de lui conférer un caractère général plutôt que de créer un droit spécifique à l'exploitation de la prostitution et à la traite à cette fin. Elle invite le législateur à élargir le périmètre de la proposition de loi pour renforcer la lutte contre la traite et l'exploitation des êtres humains, sous toutes leurs formes. S'agissant des formes d'exploitation à caractère sexuel, elle renouvelle sa recommandation de faire du caractère sexuel une circonstance aggravante de l'exploitation et de la traite, en raison des préjudices physiques et moraux supplémentaires que cette forme d'exploitation peut entraîner. A cet égard, l'adoption par le conseil des ministres du 14 mai 2014 d'un plan d'action national contre la traite des êtres humains (2014-2016), qui pose les fondements d'une véritable politique publique de lutte contre la traite des êtres humains sous toutes les formes d'exploitation, doit être saluée. Ce plan prévoit une évaluation de cette politique publique et la rédaction d'un rapport public périodique par un rapporteur national indépendant, missions qui ont été confiées à la CNCDH. La CNCDH espère qu'elle pourra bénéficier de tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de ces missions.

B. — La répression pénale de la prostitution : la suppression du délit de racolage et l'incrimination de l'achat d'acte sexuel

18. La CNCDH se félicite de l'abrogation du délit de racolage public, qu'il soit actif ou passif, qui plaçait les victimes de la traite et de l'exploitation dans le cadre ou par voie de prostitution dans une

situation de délinquance. Menacées de poursuites, les victimes de traite ou d'exploitation de la prostitution subissent aujourd'hui encore un préjudice secondaire et se défient des services de détection et de répression qui pourraient leur venir en aide. Par ailleurs, le délit de racolage public passif, introduit par la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003, traduisait une volonté de lutter contre la visibilité de l'activité prostitutionnelle sur la voie publique. Cette évolution politique, couplée à des évolutions techniques (31), a sans doute contribué au développement d'autres formes de prostitution, qualifiées de indoor, moins visibles, mais qui placent les personnes prostituées dans une plus grande vulnérabilité. Comme l'ont révélé plusieurs associations auditionnées par la CNCDH, cette tendance à « l'invisibilité », ou à la moindre visibilité, de la prostitution a contribué à la dégradation de l'état de santé des personnes prostituées et des conditions d'exercice de leur activité. Elle a accru la relégation et l'isolement des personnes prostituées en raison de la clandestinité qu'elle a induite, et les a rendues plus vulnérables face aux violences.

19. Les articles 16 et 17 de la proposition de loi visent à interdire et à sanctionner l'achat d'un acte sexuel ; la CNCDH estime qu'ils posent problème à plus d'un titre. L'exigence de responsabilisation des clients de la prostitution et les fonctions expressive et pédagogique de la loi pénale sont des arguments qui peuvent être avancés en faveur de l'interdiction de l'achat d'un acte sexuel et de la pénalisation des clients des personnes prostituées (32). Cependant, la pénalisation du client aura nécessairement des répercussions sur la personne prostituée, puisque l'acte interdit requiert un partenaire exerçant la prostitution. Ainsi, même si c'est le client qui est pénalisé et non la personne qui se prostitue, ces dispositions tendent indirectement à considérer la prostitution comme une activité illicite.

20. La CNCDH s'interroge par ailleurs sur le choix du législateur de fonder sa lutte contre la prostitution sur l'atteinte au principe de dignité, sans prendre les précautions qu'imposerait sa lecture, et ce d'autant que les auditions qu'elle a réalisées montrent combien la question porte division. Elle rappelle à cet égard que les différents travaux du Conseil constitutionnel (33), du Conseil d'Etat (34) ou du comité chargé en 2009 de réfléchir à la réécriture du Préambule de la Constitution de 1958 (35) soulignent, au-delà du caractère éminent de ce principe, son ambivalence. De la façon la plus nette, le Conseil d'Etat fait ainsi état de « deux conceptions de la dignité qui peuvent potentiellement s'opposer ou se limiter mutuellement : celle de l'exigence morale collective de la sauvegarde de la dignité, le cas échéant, aux dépens du libre arbitre de la personne (qui trouve une traduction jurisprudentielle dans la décision Morsang-sur-Orge) et celle de la protection du libre arbitre comme élément consubstantiel de la personne humaine » (36). De son côté, la Cour européenne des droits de l'homme considère qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre dignité et prostitution, dès lors que celle-ci n'est pas exercée sous la contrainte (37).

21. La proposition de loi appréhende également la question de la prostitution à travers le prisme de l'égalité entre les femmes et les hommes : parce qu'il s'agit d'un acte sexuel imposé par l'argent et la contrainte financière, la prostitution serait en soi une violence faite aux femmes et un obstacle à l'égalité. La CNCDH relève en premier lieu que la diversification des situations de prostitution (féminine, masculine et transgenre) rend difficile l'invocation du principe d'égalité. En second lieu, elle observe que la législation sur la traite et l'exploitation, la répression du recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables, la législation sur le viol... sont autant de moyens juridiques permettant déjà de sanctionner les formes de prostitution contraintes et la violence qui s'exerce alors.

22. La pertinence de la disposition visant à pénaliser le client semble de surcroît discutable tant elle risque d'être contre productive. En effet, la pénalisation des clients reléguerait en fait les personnes prostituées vers des lieux plus reculés et donc plus dangereux. Le pouvoir de « négociation » avec les clients et de choix du client serait diminué ; les acteurs médico-sociaux auraient plus de difficultés à accéder aux personnes. On risque également d'observer une plus grande défiance vis-à-vis des forces de l'ordre et donc un moindre réflexe d'y recourir en cas de violence subie, ce qui constituerait de fait

un recul du droit. Cette bienveillance paradoxale induirait donc des stratégies de contournement qui ne seraient pas sans grave incidence sur la santé et les droits des personnes prostituées (38).

23. En vérité, plutôt que d'instituer un nouvel instrument répressif, mieux vaudrait s'interroger sur la rareté des poursuites et des condamnations dans les cas de recours à la prostitution d'un mineur. Il ressort en effet des auditions des associations par la CNCDH que l'infraction spéciale de recours à la prostitution de tout mineur par toute personne (quel que soit son âge) (39) n'est quasiment pas retenue par les juridictions et que le nombre de condamnations est anecdotique. Même en cas d'investigations relatives à des faits de proxénétisme sur mineurs, après de longues observations et l'identification de nombreux clients, seuls les proxénètes des adolescents victimes de prostitution sont poursuivis ; les clients ne le sont qu'exceptionnellement. Bien plus, les associations constatent que, dans la plupart des cas, lorsque les adolescents en situation de prostitution sont appréhendés par la police ou pris en charge par les services sociaux (ASE), ils sont souvent traités comme des délinquants par certains enquêteurs. Or, sans reconnaissance de leur situation de victime de prostitution, ces mineurs risquent de faire de la prostitution leur métier. La CNCDH estime que la politique pénale doit mettre au cœur de ses priorités la poursuite des clients des mineurs.

24. La pénalisation des clients, difficile à mettre en œuvre, risque de n'avoir d'impact que sur la prostitution visible, la prostitution de rue, et non sur les autres formes d'exploitation de la prostitution. Elle va sans doute contribuer à accentuer le développement d'autres formes de prostitution, dites prostitution « indoor ». Or cette prostitution « invisible » est plus mouvante, voire insaisissable. Dès lors, les victimes de ces formes d'exploitation étant moins accessibles aux associations et aux pouvoirs publics, se pose donc le problème de leur prise en charge et de leur accompagnement. De plus, dans une Europe aux législations hétérogènes, la pénalisation des clients risque de les repousser aux frontières (cf. ce qui se passe à la frontière franco-espagnole, à la Junquera, ou ce qui se passe dans les eaux territoriales danoises, entre la Suède et le Danemark).

25. On peut d'ailleurs s'interroger plus largement sur la cohérence du dispositif prévu : si l'objectif est d'inscrire la prostitution dans le champ des violences et des atteintes à la dignité de la personne, pourquoi la nouvelle infraction de recours à la prostitution n'est-elle considérée que comme un simple trouble mineur à l'ordre public, puni par une contravention de cinquième classe ? En outre, qu'en est-il de la symbolique de la loi pénale si, au-delà de l'incertitude pesant sur l'effectivité de sa mise en œuvre, l'interdit se voit discrédité par la faiblesse de la peine contraventionnelle qui l'accompagne ? Enfin, l'efficacité de la répression impliquera la mise en place de dispositifs de surveillance dont la nécessaire généralisation contredira évidemment les exigences d'une société libre.

II. - Volet social : l'accompagnement et l'accès aux droits

26. En préambule de ce chapitre consacré à la prise en charge des personnes prostituées, la CNCDH tient à rappeler qu'il est impossible en l'état actuel des données statistiques d'évaluer avec précision non seulement le nombre de personnes en situation de prostitution en France, mais aussi la proportion de celles d'entre elles qui sont victimes d'exploitation de la prostitution ou de traite à cette fin. En effet, les différents acteurs s'accordent pour déplorer l'absence quasi totale de données publiques sur les conditions d'exercice ainsi que sur la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées (40).

27. La loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 prévoyait dans son article 52 qu'un rapport soit transmis chaque année au Parlement sur le sujet. Celui-ci n'a, en pratique, été publié qu'une fois et, faute de pouvoir s'appuyer sur une expertise suffisamment étayée, n'a pu proposer qu'une analyse de portée très limitée. Une seule enquête récente, celle de l'IGAS, permet de disposer d'un aperçu relativement global de l'état de santé des personnes qui se prostituent (41). Or, dresser un constat partagé par l'ensemble des acteurs de la situation démographique, sanitaire et sociale des personnes prostituées constitue la première et indispensable étape à la mise en place de politiques intelligentes en la matière (42). A ce titre, la CNCDH regrette que la proposition de loi ne contienne aucune

disposition relative aux études quantitatives et qualitatives ou au développement des recherches universitaires permettant d'appréhender l'évolution de la prostitution et de l'exploitation sexuelle en France ainsi que de la traite à cette fin.

28. Si des constats peuvent être faits, ils ne peuvent être chiffrés précisément. Un élément fait toutefois consensus : la grande majorité des personnes en situation de prostitution se trouve particulièrement exposée à l'exploitation ou la traite, en particulier les migrants, lorsqu'ils sont en situation administrative précaire. Chacun s'accorde également pour dire que la prostitution dite « traditionnelle » est en déclin tandis que la prostitution organisée et gérée par des réseaux de traite s'est fortement développée, au point de constituer la forme largement majoritaire de prostitution aujourd'hui en France.

A. — Accompagnement des personnes victimes de la traite et de l'exploitation

29. La CNCDH salue la volonté du législateur de vouloir faire de la question de la protection et de la prise en charge des victimes de la traite et de l'exploitation de la prostitution le cœur de la proposition de loi. Un certain nombre de propositions qui constituent de réelles avancées doit être relevé (43). Il en est ainsi de :

— l'inclusion des infractions de traite et de proxénétisme dans la liste des incriminations ouvrant le droit à une indemnisation par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), sous réserve pour les étrangers d'être en situation régulière (infra 36) ([art. 706-3 du code de procédure pénale](#)) ; mesure favorisant la juste réparation des préjudices qu'elles ont subis et constituant au-delà un tremplin important pour la réinsertion ;

— l'insertion de dispositions relatives à l'anonymat, l'hébergement, la possibilité d'utiliser une identité d'emprunt visant à mieux protéger les victimes pendant la durée des procédures judiciaires ;

— la possibilité pour les personnes étrangères victimes d'exploitation de la prostitution d'obtenir un titre de séjour sans condition de dénonciation des exploitateurs ;

— la création d'une nouvelle instance chargée, au sein des conseils départementaux de prévention de la délinquance, « d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution et de la traite ». Cette instance multipartite, placée sous l'autorité du préfet et du procureur, permettra notamment de rechercher et d'accueillir les personnes en danger d'exploitation de la prostitution, de fournir l'assistance dont elles peuvent avoir besoin et d'exercer toute action médico-sociale en faveur des personnes en situation de prostitution. La CNCDH espère que ce nouveau dispositif, de proximité, permettra un égal accès à l'assistance et aux droits sur l'ensemble du territoire, et recommande à cet égard d'évaluer auparavant le dispositif actuellement existant ;

— la mise en place d'un parcours d'accompagnement des personnes victimes de l'exploitation de la prostitution et de traite. Ce parcours devrait leur permettre de bénéficier d'un système de protection, d'hébergement et d'accompagnement social pour construire un projet de sortie de la prostitution et favoriser leur insertion socio-professionnelle.

30. Toutefois, la CNCDH tient à signaler que certaines mesures lui semblent problématiques au regard du respect des droits fondamentaux. En 2009, la CNCDH avait mis en exergue trois grands principes qui doivent présider à l'instauration de toute mesure de protection ou d'accompagnement des victimes :

— la non-discrimination ;

— le droit effectif à la justice ;

— le droit des victimes au rétablissement dans leurs droits économiques et sociaux.

31. En vertu du principe de non-discrimination, il ne devrait pas y avoir de différence de traitement entre les victimes de traite et d'exploitation et les victimes d'autres infractions. Or, on constate dans la proposition de loi que pour les victimes de l'exploitation de la prostitution, l'octroi de certains droits est conditionné à l'arrêt de la prostitution. Ainsi, l'article 3 de la proposition de loi prévoit l'abrogation de [l'article 42 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003](#) pour la sécurité intérieure (44), qui posait l'obligation générale de protection et d'assistance de l'Etat en faveur de toutes les victimes d'exploitation sans condition ; or cette assistance est désormais conditionnée par la sortie de la prostitution. A l'obligation de l'Etat d'assister et protéger, la proposition de loi substitue en effet l'obligation des « victimes de prostitution » de cesser la prostitution si elles veulent pouvoir bénéficier de cette assistance ou protection. De même, en matière de droit au séjour, le nouvel article L. 316-1-1 du CESEDA proposé prévoit une autorisation provisoire de séjour conditionnée à l'arrêt de la prostitution. Plus largement, la proposition de loi subordonne l'octroi de droits sociaux, notamment en matière d'hébergement, de santé, de ressources, à la sortie de la prostitution et à la signature d'une convention tripartite avec l'administration et avec une association. La CNCDH ne peut souscrire à de telles dispositions, qui sont contraires au principe d'égal accès aux droits. De plus, la mise en œuvre de ces dispositions paraît pour le moins aléatoire au regard des difficultés de tous ordres (économiques, sociales, professionnelles) que rencontrent les personnes qui souhaitent sortir de la prostitution. En toute hypothèse, pour leur offrir de réelles alternatives, un renforcement des moyens alloués à l'accompagnement est nécessaire. La CNCDH recommande la suppression de la notion de « parcours de sortie », qui implique que la sortie de la prostitution pourrait passer par des étapes prédéfinies, ce qui ne tient pas compte des situations individuelles : chaque personne, selon son histoire, sa situation, n'a pas les mêmes besoins, progressera dans la mise en œuvre de son projet à son rythme, pourra retourner un temps dans son activité prostitutionnelle, sans que cela remette en cause la réalité de son parcours d'insertion. Il s'agit donc de proposer un « projet d'insertion sociale et professionnelle », condition d'une réinsertion durable, plutôt qu'un « parcours de sortie ». Ce projet, qui mettrait en avant la dimension d'accompagnement individualisé, ferait de la personne accompagnée un acteur à part entière dans sa construction et sa mise en œuvre.

32. En outre, la proposition de loi reprend l'idée, déjà contenue dans le rapport de la délégation aux droits des femmes, d'un parcours de sortie dont pourra bénéficier la personne, dès lors qu'elle est prise en charge par une association agréée à cette fin. Sans remettre en cause le travail de grande qualité que peuvent fournir ces associations, la CNCDH s'inquiète de ce que seront les critères d'agrément pour des associations qui deviendront de fait le passage obligé pour les victimes de traite et d'exploitation de la prostitution qui sollicitent une aide. Cette configuration peut susciter une certaine méfiance des personnes victimes — qui de fait n'auront pas le choix d'une association — vis-à-vis de ces organisations qui auront un lien particulier avec les pouvoirs publics. Elle craint également qu'une telle disposition ne vienne assécher l'offre associative de prise en charge des personnes prostituées, alors même que les associations sont peu nombreuses et inégalement réparties sur le territoire.

33. Le principe de non-discrimination suppose également l'absence de discrimination entre les victimes d'exploitation et de traite entre elles, en fonction des formes d'exploitation (sexuelle, domestique, travail forcé...) ou de la situation des victimes (leur sexe, leur âge, leur nationalité, leur situation administrative régulière ou non, leur coopération ou non avec les autorités répressives, etc.). Or la proposition de loi ne prévoit de telles dispositions que pour les victimes de l'exploitation de la prostitution ou de la traite à cette fin. Les victimes d'autres formes d'exploitation ou de traite sont exclues des dispositifs. Il conviendrait d'étendre les mesures de protection et de prise en charge à l'ensemble des victimes de traite et d'exploitation, quelle que soit la forme que prend l'exploitation.

34. S'agissant du droit au séjour des victimes de traite et d'exploitation, la régularisation de leur séjour par la délivrance de plein droit d'un titre de séjour est une disposition indispensable. Elle permet, d'une part, de garantir leur accès à la justice et leur rétablissement dans leurs droits économiques et sociaux, d'autre part, et surtout, de prévenir la commission des mêmes faits à leur encontre. Si l'article 6 de la proposition de loi assouplit les conditions d'octroi d'un titre de séjour (non-dénonciation des exploités), il ne remet pas en question le caractère discrétionnaire de la délivrance du titre de séjour, ni sa courte durée. Bien plus, il conditionne l'octroi du titre de séjour à l'arrêt de la prostitution. La CNCDH recommande donc à nouveau (45) de délivrer de plein droit à tout étranger, y compris les

ressortissants communautaires soumis à un régime transitoire (46), à l'égard duquel des éléments concordants (récit circonstancié de la personne, suivi par une association spécialisée ou un syndicat, indices recueillis par les autorités ou tout autre élément disponible) laissent présumer qu'il est victime de traite ou d'exploitation :

— une autorisation provisoire de séjour d'au moins six mois, avec autorisation de travailler ;

— puis une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d'un an, avec autorisation de travailler, renouvelée automatiquement le temps qu'il accède effectivement à la justice et qu'il soit rétabli dans ses droits économiques et sociaux. S'agissant de la procédure de délivrance de ces titres de séjour, la CNCDH recommande de :

— prévoir une procédure simple ;

— exonérer les victimes étrangères sans ressources des frais liés à la délivrance de ces titres de séjour ou, au minimum, en différer le paiement.

35. La CNCDH tient par ailleurs à signaler qu'à aucun moment le droit d'asile n'est abordé. Il est important de rappeler que l'accès à la procédure d'asile est un véritable parcours du combattant pour une victime de traite et d'exploitation, d'autant qu'il arrive qu'une première demande d'asile « fictive » soit déposée par les trafiquants pour la victime afin de régulariser son séjour en France pendant quelques mois et faciliter ainsi son exploitation. La CNCDH, en la matière, renvoie à ses avis sur le droit d'asile (47) et à son avis sur la traite et l'exploitation des êtres humains, dans lesquels elle rappelle que la demande ou l'obtention d'un titre de séjour par une victime de traite ou d'exploitation, y compris lorsqu'il lui est délivré en cette qualité, doit être sans incidence sur son droit de demander l'asile et celui de recevoir les informations nécessaires à son exercice. Elle souligne en outre la nécessité de recommander aux autorités compétentes en matière d'asile de faire preuve d'une vigilance particulière dans l'examen, au titre de la convention de Genève de 1951 et de son protocole de 1967 relatifs au statut de réfugié, des demandes des étrangers victimes de traite ou d'exploitation craignant de subir des persécutions en cas de retour dans leur pays d'origine. Enfin, la CNCDH recommande d'accorder la plus grande attention aux demandes de « visa asile » formées à l'étranger par les membres de la famille d'une victime de traite ou d'exploitation lorsqu'ils sont exposés ou subissent, en tant que tels, des persécutions.

B. — Accès aux droits et accompagnement des personnes en situation de prostitution

36. En plus de la mise en œuvre d'un certain nombre de dispositifs visant à assurer une meilleure prise en compte des victimes de l'exploitation de la prostitution et de la traite à cette fin, la proposition de loi prévoit un renforcement des dispositifs d'accompagnement des personnes en situation de prostitution, qu'elles soient ou non victimes d'exploitation ou de traite à cette fin. Ces dispositions doivent être saluées, dans la mesure où elles contribuent à renforcer l'accès aux droits de personnes prostituées :

— la création d'un fonds spécial afin de contribuer au financement des différents dispositifs, de prévention et protection ([art. L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles](#) [48]). La question de l'alimentation du fonds reste toutefois posée ;

— la création d'un document national de référence sur la santé et la prévention des risques.

37. En outre, alors qu'une action de premier plan est nécessaire pour compenser le retard pris par la France dans l'accompagnement et le suivi des personnes prostituées afin de leur assurer l'accès effectif aux droits, à la prévention et aux soins, la CNCDH regrette que la proposition de loi ne contienne pas plus de dispositions garantissant aux personnes prostituées des droits identiques à ceux du reste de la population (49). Pour répondre à l'ensemble de leurs besoins, il convient de garantir, sur l'ensemble du territoire, et notamment aux populations difficilement accessibles ou isolées, une offre de services

adaptés comprenant : counselling (50), fourniture de matériel de prévention, accès effectif au dépistage, au traitement post-exposition (TPE), à la prise en charge des infections sexuellement transmissibles (IST), aux soins de santé primaires, aux services de santé sexuelle, à la réduction des risques, à l'accompagnement social, à l'interprétariat et la médiation culturelle.

38. Au regard du rôle déterminant des personnes prostituées elles-mêmes dans les actions de prévention, il conviendrait de soutenir les démarches communautaires en :

— renforçant les actions communautaires destinées à favoriser l'auto-organisation des personnes prostituées ;

— encourageant la prise en charge par ces personnes des missions de prévention et de médiation sanitaire, et en dotant les programmes communautaires des moyens suffisants pour ouvrir des postes d'agents de médiation, de prévention et d'information ;

— soutenant plus particulièrement les programmes s'adressant aux populations traditionnellement les moins bénéficiaires des actions de proximité : escorts, masseuses, personnes migrantes, personnes transgenres.

39. Concernant les personnes transgenres, les auditions ont montré qu'elles constituaient un groupe particulièrement vulnérable. L'insertion sociale des personnes transgenres est rendue très difficile du fait de la stigmatisation et des discriminations dont elles sont victimes. La durée excessive du processus de changement de sexe à l'état civil met en péril notamment leur accès au logement, à l'emploi et aux droits sociaux. De ce fait, de nombreuses personnes transgenres n'ont d'autres solutions que le recours à la prostitution, car c'est la seule ressource économique dont elles peuvent disposer. La CNCDDH rappelle à ce titre son avis du 27 juin 2013 sur l'identité de genre et sur le changement de la mention de sexe à l'état civil (51), et renouvelle sa demande de démedicalisation et de déjudiciarisation partielle de la procédure de changement de sexe à l'état civil, de nature à l'alléger, l'accélérer, et à favoriser ainsi leur sortie de la précarité et leur intégration sociale.

40. S'agissant des personnes vulnérables, la CNCDDH, alertée par certaines associations auditionnées sur la situation des personnes handicapées (52), attire l'attention du Gouvernement sur la question de leur vie affective et sexuelle, trop souvent bafouée ou niée, mais aussi sur la vigilance particulière qui s'impose à l'égard du risque de leur exploitation sexuelle ainsi qu'au recueil de leur consentement dans leur vie sexuelle.

41. Au-delà des avancées de la proposition de loi en matière d'accès aux droits des personnes en situation de prostitution, et des suggestions ici faites par la CNCDDH, celle-ci tient à souligner l'importance des mesures d'éducation et de prévention, en matière de sexualité, de santé sexuelle et reproductive, de représentations du corps. A ce titre, elle salue la disposition prévue au chapitre III du texte, qui prévoit une information dispensée à tous les stades de la scolarité. Elle rappelle l'article 5 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui prévoit que « les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes ».

(20 voix « pour », 16 voix « contre », 4 abstentions.)

[LOI n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées \(1\)](#)

- [Chapitre Ier : Renforcement des moyens de lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle](#)

Article 3

Le titre XVII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-40-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-40-1.-Les personnes victimes de l'une des infractions prévues aux articles [225-4-1 à 225-4-6](#) et [225-5 à 225-10](#) du code pénal, ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l'intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national, peuvent faire l'objet en tant que de besoin de la protection destinée à assurer leur sécurité prévue à l'article 706-63-1 du présent code.

« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux membres de la famille et aux proches des personnes ainsi protégées.

« Lorsqu'il est fait application à ces personnes des dispositions de l'article 706-57 relatives à la déclaration de domicile, elles peuvent également déclarer comme domicile l'adresse de leur avocat ou d'une association mentionnée à l'article 2-22.

« Sans préjudice du présent article, l'article 62 est applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. »

-
- [Chapitre II : Protection des victimes de la prostitution et création d'un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle](#)
 - - [Section 1 : Dispositions relatives à l'accompagnement des victimes de la prostitution](#)

Article 6

I. - L'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le e, sont insérés des f et g ainsi rédigés :

« f) De personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'[article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles](#) ;

« g) De personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles [225-4-1 à 225-4-6](#) et [225-5 à 225-10](#) du code pénal. » ;

2° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « dixième à douzième » sont remplacés par les mots : « douzième à quatorzième » et le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quinzième ».

II. - Au troisième alinéa de l'article L. 441-2 du même code, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dixième ».

III. - A la [première phrase du premier alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990](#) visant à la mise en œuvre du droit au logement, les références : « aux a à e » sont remplacées par les

références : « aux a à g ».

Article 8

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 316-1, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

2° Après l'article L. 316-1, il est inséré un article L. 316-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 316-1-1. - Une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger victime des infractions prévues aux articles [225-4-1 à 225-4-6](#) et [225-5 à 225-10](#) du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'[article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles](#). La condition prévue à l'article L. 313-2 du présent code n'est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. »

3° L'article L. 316-2 est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase, la référence : « de l'article L. 316-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 316-1 et L. 316-1-1 » ;

b) Après la référence : « L. 316-1 », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 316-1-1 ainsi que les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette carte ou cette autorisation provisoire de séjour est accordée. »

Article 13

I.-L'article 2-22 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 2-22.-Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou l'action sociale en faveur des personnes prostituées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les articles [224-1 A à 224-1 C](#), [225-4-1 à 225-4-9](#), [225-5 à 225-12-2](#), [225-14-1](#) et [225-14-2](#) du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l'accord est donné par son représentant légal.

« Si l'association mentionnée au premier alinéa du présent article est reconnue d'utilité publique, son action est recevable y compris sans l'accord de la victime.»

II.-La loi n° 75-229 du 9 avril 1975 habilitant les associations constituées pour la lutte contre le proxénétisme à exercer l'action civile est abrogée.

[LOI no 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes](#)

ANNEXE

LIVRE II. DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES

TITRE II. DES ATTEINTES A LA PERSONNE HUMAINE

CHAPITRE V. Des atteintes à la dignité de la personne

Section 3: Des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne.

Art. 225-13. - Le fait d'obtenir d'une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende.

Art. 225-14. - Le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende.

Art. 225-15. - Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 1000000 F d'amende lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes.

Art. 225-16. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-13 à 225-15. Les peines encourues par les personnes morales sont: 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38; 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.

1. LEGISLACIÓN FRANCESA SOBRE DELITOS LABORALES

La legislación francesa sobre delitos laborales está en su *CODE DU TRAVAIL*, y en este documento se ha hecho una selección de los artículos más directamente relacionados con el tema, incluyendo los relativos a disposiciones penales y sanciones administrativas.

Asimismo, añadimos índice de la parte Octava del *CODE DU TRAVAIL*, sobre el control de la aplicación de la legislación del trabajo, tanto a nivel legislativo como reglamentario. Se incluyen los enlaces a todos los artículos.

Artículos relacionados

[Partie législative](#)

[Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail](#)

Livre Ier : Inspection du travail

- Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
 - Chapitre Ier : Répartition des compétences entre les différents départements ministériels.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
 - Chapitre II : Compétence des agents de contrôle de l'inspection du travail ([Articles L8112-1 à L8112-2](#))

Article L8112-2 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 4](#)

Modifié par [LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 4](#)

Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article [L. 8112-1](#) constatent également :

1° Les infractions commises en matière de discriminations prévues au 3° et au 6° de [l'article 225-2](#) du code pénal, les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les [articles 222-33](#) et [222-33-2](#) du même code, l'infraction de traite des êtres humains prévue à l'article 225-4-1 dudit code, les infractions relatives à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 225-4-1, 225-14-1 et 225-14-2 du même code, ainsi que les infractions relatives aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité des personnes, prévues par les [articles 225-13 à 225-15-1](#) du même code ;

2° Les infractions aux mesures de prévention édictées par les caisses régionales d'assurance maladie et étendues sur le fondement de [l'article L. 422-1](#) du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions aux dispositions relatives à la déclaration des accidents du travail et à la délivrance d'une feuille d'accident, prévues aux [articles L. 441-2](#) et [L. 441-5](#) du même code ;

3° Les infractions aux dispositions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, prévues à [l'article L. 3511-7](#) du code de la santé publique ;

4° Les infractions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, prévues par les [articles L. 622-1](#) et [L. 622-5](#) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5° Les infractions aux dispositions de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, relatives à la certification des services et produits autres qu'alimentaires, ainsi qu'au livre II de ce même code, relatives à la conformité et la sécurité des produits et des services ;

6° Les infractions aux dispositions des [articles L. 123-10 à L. 123-11-1](#) du code de commerce, relatives à la domiciliation des personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

7° Les manquements aux articles L. 124-7, L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13 et L. 124-14 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation.

Livre II : Lutte contre le travail illégal

- Titre Ier : Définition
 - Chapitre unique. ([Article L8211-1](#))
- Titre II : Travail dissimulé
 - Chapitre Ier : Interdictions
 - Section 1 : Dispositions générales. ([Articles L8221-1 à L8221-2](#))
 - Section 2 : Travail dissimulé par dissimulation d'activité. ([Articles L8221-3 à L8221-4](#))

Section 2 : Travail dissimulé par dissimulation d'activité.

Article L8221-3 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 \(V\)](#)

Modifié par [Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 99](#)

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article [L. 613-4](#) du code de la sécurité sociale ;

3° Soit s'est prévalu des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de

la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.

Article L8221-4 [En savoir plus sur cet article...](#)

Les activités mentionnées à l'article L. 8221-3 sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif :

1° Soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ;

2° Soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ;

3° Soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ;

4° Soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.

- Chapitre IV : Dispositions pénales. ([Articles L8224-1 à L8224-6](#))

Article L8224-1 [En savoir plus sur cet article...](#)

Le fait de méconnaître les interdictions définies à l'article L. 8221-1 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros.

Article L8224-2 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 94](#)

Le fait de méconnaître les interdictions définies à [l'article L. 8221-1](#) par l'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros.

Le fait de méconnaître les interdictions définies au même article L. 8221-1 en commettant les faits à l'égard de plusieurs personnes ou d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €.

Le fait de méconnaître les interdictions définies aux 1° et 3° du même article L. 8221-1 en commettant les faits en bande organisée est puni de dix ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.

Article L8224-3 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 102](#)

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux [articles L. 8224-1 et L. 8224-2](#) encourrent les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par [l'article 131-27 du code pénal](#), soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

3° La peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article [131-21](#) du code pénal ;

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article [131-35](#) du même code.

Le prononcé de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné à l'article L. 8224-2 du présent code. L'affichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale d'un an par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ;

5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par [l'article 131-26 du code pénal](#), des droits civiques, civils et de famille.

Article L8224-4 [En savoir plus sur cet article...](#)

Tout étranger coupable des infractions prévues aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 est passible d'une interdiction du territoire français qui peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus.

Article L8224-5 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 102](#)

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par [l'article 121-2 du code pénal](#), des infractions prévues par les [articles L. 8224-1 et L. 8224-2](#) encourent :

1° L'amende, dans les conditions prévues à [l'article 131-38 du code pénal](#) ;

2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 12° de l'article 131-39 du même code.

L'interdiction prévue au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.

Le prononcé de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné à l'article L. 8224-2 du présent code.

L'affichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale d'un an par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Article L8224-5-1 [En savoir plus sur cet article...](#)

Créé par [Loi n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 88](#)

Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au [4° de l'article 131-39 du code pénal](#) n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné.

Article L8224-6 [En savoir plus sur cet article...](#)

Le fait, pour toute personne soumise aux obligations énoncées à l'article L. 8221-7, de diffuser ou de faire diffuser, ou de communiquer au responsable de la publication ou de la diffusion des informations mensongères relatives à son identification est puni d'une amende de 7 500 euros.

- Titre III : Marchandage
 - Chapitre Ier : Interdiction. ([Article L8231-1](#))

Article L8231-1 [En savoir plus sur cet article...](#)

Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'é luder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit.

- Chapitre IV : Dispositions pénales. ([Articles L8234-1 à L8234-3](#))

Article L8234-1 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 282](#)

Le fait de commettre le délit de marchandage, défini par [l'article L. 8231-1](#), est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende :

1° Lorsque l'infraction est commise à l'égard de plusieurs personnes ;

2° Lorsque l'infraction est commise à l'égard d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

La juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal.

La juridiction peut prononcer, en outre, l'interdiction de sous-traiter de la main-d'oeuvre pour une durée de deux à dix ans.

Le fait de méconnaître cette interdiction, directement ou par personne interposée, est puni d'un emprisonnement de douze mois et d'une amende de 12 000 euros.

La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à [l'article 131-35](#) du code pénal. Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article L8234-2 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 12](#)

Modifié par [Loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 8](#)

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par [l'article 121-2 du code pénal](#), du délit de marchandage défini à l'article L. 8231-1 encourent les peines suivantes :

1° L'amende dans les conditions prévues à [l'article 131-38 du code pénal](#) ;

2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de [l'article 131-39](#) du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9° du même article 131-39 soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article L8234-3 [En savoir plus sur cet article...](#)

Créé par [Loi n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 88](#)

Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au [4° de l'article 131-39 du code pénal](#) n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné.

- Titre IV : Prêt illicite de main-d'œuvre
 - Chapitre Ier : Interdiction. ([Articles L8241-1 à L8241-3](#))

Article L8241-1 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Ordonnance n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 7](#)

Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :

1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;

2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;

3° Des dispositions des articles [L. 2135-7](#) et [L. 2135-8](#) du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article [L. 2231-1](#).

Une opération de prêt de main-d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.

Article L8241-2 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1](#)

Les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées.

Dans ce cas, les [articles L. 1251-21 à L. 1251-24](#), les 2° et 3° de l'[article L. 2312-6](#), le 9° du II de l'[article L. 2312-26](#) et l'article L. 5221-4 du présent code ainsi que les [articles L. 412-3 à L. 412-7](#) du code de la sécurité sociale sont applicables.

Le prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :

1° L'accord du salarié concerné ;

2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ;

3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.

A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.

Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l'entreprise utilisatrice.

Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.

La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif.

Pendant la période de prêt de main-d'œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse.

Le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en œuvre d'un prêt de main-d'œuvre et informé des différentes conventions signées.

Le comité de l'entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l'entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de [l'article L. 4154-2](#).

Le comité social et économique de l'entreprise utilisatrice est informé et consulté préalablement à l'accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d'œuvre.

L'entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d'œuvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l'une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d'œuvre entraîne la modification d'un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d'œuvre à l'initiative de l'une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement.

Article L8241-3 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11](#)

I.-Par dérogation au dernier alinéa de [l'article L. 8241-1](#) et dans les conditions prévues par le présent article, une entreprise peut mettre à disposition de manière temporaire ses salariés auprès d'une jeune ou d'une petite ou moyenne entreprise, afin de lui permettre d'améliorer la qualification de sa main-d'œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d'affaires ou d'intérêt commun. Le dispositif est applicable :

1° Pour les entreprises utilisatrices, aux personnes morales dont la liste est fixée aux a à g du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, aux jeunes entreprises qui ont moins de huit ans d'existence au moment de la mise à disposition et aux petites ou moyennes entreprises d'au maximum deux cent cinquante salariés ;

2° Pour les entreprises prêteuses, aux entreprises ou aux entreprises appartenant à un groupe d'au moins 5 000 salariés.

La mise à disposition d'un salarié dans les conditions prévues au présent article ne peut être effectuée au sein d'un même groupe, au sens des dispositions de [l'article L. 233-1](#), des I et II de l'article [L. 233-3](#) et de l'article [L. 233-16](#) du code de commerce.

Elle ne peut excéder une durée de deux ans.

II.-Les opérations de prêt de main-d'œuvre réalisées sur le fondement du présent article n'ont pas de but lucratif au sens de l'article L. 8241-1 pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro.

Ces opérations ne sont pas soumises aux dispositions de l'[article L. 8241-2](#).

III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

- Chapitre III : Dispositions pénales. ([Articles L8243-1 à L8243-3](#))

Article L8243-1 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 282](#)

Le fait de procéder à une opération de prêt illicite de main-d'oeuvre en méconnaissance des dispositions de [l'article L. 8241-1](#), est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende :

1° Lorsque l'infraction est commise à l'égard de plusieurs personnes ;

2° Lorsque l'infraction est commise à l'égard d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

La juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal.

La juridiction peut prononcer, en outre, l'interdiction de sous-traiter de la main-d'oeuvre pour une durée de deux à dix ans.

Le fait de méconnaître cette interdiction, directement ou par personne interposée, est puni d'un emprisonnement de douze mois et d'une amende de 12 000 euros.

Dans tous les cas, la juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à [l'article 131-35](#) du code pénal. Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article L8243-2 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 12](#)

Modifié par [Loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 8](#)

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'[article 121-2 du code pénal](#), du délit de prêt illicite de main-d'oeuvre prévu par l'[article L. 8241-1](#) encourent les peines suivantes :

1° L'amende dans les conditions prévues à l'[article 131-38 du code pénal](#) ;

2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l'[article 131-39](#) du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9° du même article 131-39 soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article L8243-3 [En savoir plus sur cet article...](#)

Créé par [Loi n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 88](#)

Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au [4° de l'article 131-39 du code pénal](#) n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné.

- Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler
 - Chapitre Ier : Interdictions. ([Articles L8251-1 à L8251-2](#))

Article L8251-1 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 74](#)

Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa.

Article L8251-2 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 18](#)

Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler.

- Chapitre II : Droits du salarié étranger. ([Articles L8252-1 à L8252-4](#))

Chapitre II : Droits du salarié étranger.

Article L8252-1 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1](#)

Le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l'employeur définies par le présent code :

1° Pour l'application des dispositions relatives aux périodes d'interdiction d'emploi prénatal et postnatal et à l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-29 à L. 1225-33 ;

2° Pour l'application des dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés prévues au livre Ier de la troisième partie ;

3° Pour l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail prévues à la quatrième partie ;

4° Pour la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise.

Il en va de même pour les articles L. 713-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime pour les professions agricoles.

Article L8252-2 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 18](#)

Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :

1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;

2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.

3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.

Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.

Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°.

Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.

Article L8252-3 [En savoir plus sur cet article...](#)

Le salarié étranger mentionné à l'article L. 8252-1 bénéficie des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie relatives aux assurances et privilèges de salaire pour les sommes qui lui sont dues en application de cet article.

Article L8252-4 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 18](#)

Les sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de [l'article L. 8252-2](#), lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou assigné à résidence en application de [l'article L. 561-2](#) du même code ou lorsqu'il n'est plus sur le territoire national, ces sommes sont déposées sous le même délai auprès d'un organisme désigné à cet effet, puis reversées à l'étranger.

Lorsque l'employeur ne s'acquitte pas des obligations mentionnées au premier alinéa, l'organisme recouvre les sommes dues pour le compte de l'étranger.

Les modalités d'application des dispositions relatives à la consignation, au recouvrement et au reversement des sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler ainsi que les modalités d'information de celui-ci sur ses droits sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

- Chapitre VI : Dispositions pénales. ([Articles L8256-1 à L8256-8](#))

Article L8256-1 [En savoir plus sur cet article...](#)

Le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre mentionné à l'article L. 8251-1 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 000 euros.

Article L8256-2 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 18](#)

Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros.

Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines.

Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

Le premier alinéa n'est pas applicable à l'employeur qui, sur la base d'un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à [l'article L. 1221-10](#), à la déclaration unique d'embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.

Article L8256-3 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 282](#)

Les personnes physiques coupables des infractions prévues à [l'article L. 8256-2](#) encourent les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par [l'article 131-27](#) du code pénal ;

2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

3° La peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal ;

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à [l'article 131-35](#) du code pénal. Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par [l'article 131-26](#) du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille ;

6° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus.

Article L8256-4 [En savoir plus sur cet article...](#)

Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 8256-2 encourent la peine complémentaire de fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés.

Article L8256-5 [En savoir plus sur cet article...](#)

Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 8256-2 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature.

Article L8256-6 [En savoir plus sur cet article...](#)

L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif à l'encontre de tout étranger coupable des infractions définies à l'article L. 8256-2.

Article L8256-7 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 12](#)

Modifié par [Loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 8](#)

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'[article 121-2 du code pénal](#), des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 8256-1, encourent :

1° L'amende, dans les conditions prévues à l'[article 131-38 du code pénal](#) ;

2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l'[article 131-39](#) du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9° du même article 131-39 soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article L8256-7-1 [En savoir plus sur cet article...](#)

Créé par [Loi n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 82](#)

Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au [4° de l'article 131-39 du code pénal](#) n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné.

Article L8256-8 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 81](#)

Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction prévue au troisième alinéa de l'article L. 8256-2 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature.

- Titre VII : Contrôle du travail illégal
 - Chapitre Ier : Compétence des agents
 - Section 1 : Dispositions communes. ([Articles L8271-1 à L8271-6-4](#))
 - Section 2 : Travail dissimulé. ([Articles L8271-7 à L8271-12](#))

Article L8271-7 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 84](#)

Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à [l'article L. 8271-1-2](#).

Article L8271-8 [En savoir plus sur cet article...](#)

Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.

Article L8271-9 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 31](#)

Pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions du travail dissimulé, les agents de contrôle peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme et leur support :

1° Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession ou à l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ;

2° Les documents justifiant que l'entreprise a vérifié, conformément aux dispositions des articles L. 8222-1 ou L. 8222-4, que son ou ses cocontractants ont accompli les formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ou des réglementations d'effet équivalent de leur pays d'origine ;

3° Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8221-1 ;

4° Les attestations d'assurances professionnelles détenues par les travailleurs indépendants lorsque ces assurances répondent à une obligation légale.

Article L8271-10 [En savoir plus sur cet article...](#)

Les agents de contrôle peuvent, sur demande écrite, obtenir des services préfectoraux tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée.

Article L8271-12 [En savoir plus sur cet article...](#)

Les agents de contrôle sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun en application de l'article L. 123-10 du code de commerce réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous les documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.

- Section 3 : Marchandage. ([Articles L8271-14 à L8271-15](#))

Article L8271-14 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 \(V\)](#)

Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article [L. 8112-1](#), les agents et officiers de police judiciaire, les agents des impôts et des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article [L. 8231-1](#) relatives à l'interdiction du marchandage.

Article L8271-15 [En savoir plus sur cet article...](#)

Dans le cadre de leur mission de lutte contre le marchandage, les agents mentionnés à l'article L. 8271-14 peuvent se faire présenter les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux opérations de marchandage.

- Section 4 : Prêt illicite de main-d'oeuvre. ([Article L8271-16](#))

Article L8271-16 [En savoir plus sur cet article...](#)

Dans le cadre de leur mission de lutte contre le prêt illicite de main-d'oeuvre, les agents mentionnés à l'article [L. 8112-1](#) peuvent se faire présenter les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux opérations de prêt illicite de main-d'oeuvre.

- Section 5 : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler. ([Articles L8271-17 à L8271-19](#))

Article L8271-17 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 \(V\)](#)

Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article [L. 8112-1](#), les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article [L. 8251-1](#) relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de [l'article L. 8251-2](#) interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler.

Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article [L. 8253-1](#) du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à [l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile](#), le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions.

Article L8271-18 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 18](#)

Les dispositions de l'article L. 8271-13 sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions à l'emploi d'étranger non autorisé à travailler.

Article L8271-19 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 \(V\)](#)

Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de travail dans les conditions définies par la [Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978](#) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Pour les mêmes motifs, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article [L. 8112-1](#) et fonctionnaires assimilés, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

- Chapitre II : Sanctions administratives. ([Articles L8272-1 à L8272-5](#))

Article L8272-1 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 85](#)

Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines des aides publiques en matière d'emploi, de formation professionnelle et de culture à la personne ayant fait l'objet de cette verbalisation.

Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.

L'autorité administrative peut également demander, eu égard aux critères mentionnés au premier alinéa, le remboursement de tout ou partie des aides publiques mentionnées au premier alinéa et perçues au cours des douze derniers mois précédant l'établissement du procès-verbal.

Un décret fixe la nature des aides concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution ou à leur remboursement.

Article L8272-2 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 98](#)

Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de [l'article L. 8211-1](#) ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à [l'article L. 8271-1-2](#) constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.

La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu'une fermeture administrative temporaire a été décidée par l'autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s'impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l'article [131-39](#) du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale.

La mesure de fermeture temporaire peut s'accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants.

Lorsque l'activité de l'entreprise est exercée sur des chantiers de bâtiment ou de travaux publics ou dans tout lieu autre que son siège ou l'un de ses établissements, la fermeture temporaire prend la forme d'un arrêt de l'activité de l'entreprise sur le site dans lequel a été commis l'infraction ou le manquement.

Lorsque la fermeture temporaire selon les modalités mentionnées au quatrième alinéa est devenue sans objet parce que l'activité est déjà achevée ou a été interrompue, l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au même alinéa, prononcer l'arrêt de l'activité de l'entreprise sur un autre site.

Les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L8272-3 [En savoir plus sur cet article...](#)

Créé par [Loi n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 86](#)

La décision de fermeture provisoire de l'établissement par l'autorité administrative prise en application de [l'article L. 8272-2](#) n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement.

Article L8272-4 [En savoir plus sur cet article...](#)

Modifié par [Loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 10](#)

Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de [l'article L. 8211-1](#), elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner, par décision motivée prise à l'encontre de la personne ayant commis l'infraction, l'exclusion des contrats administratifs mentionnés aux [articles L. 551-1](#) et [L. 551-5](#) du code de justice administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.

La mesure d'exclusion est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire, d'ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire d'exclusion des marchés publics mentionnée au 5° de [l'article 131-39](#) du code pénal.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L8272-5 [En savoir plus sur cet article...](#)

Créé par [Loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 10](#)

Le fait de ne pas respecter les décisions administratives mentionnées au troisième alinéa de [l'article L. 8272-1](#) ainsi qu'aux [articles L. 8272-2](#) ou [L. 8272-4](#) est puni d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 3 750 €.

Titre VIII : Vigilance du donneur d'ordre en matière d'application de la législation du travail

- Chapitre unique : Obligation de vigilance et responsabilité du donneur d'ordre. ([Article L8281-1](#))

Article L8281-1

- Créé par [Loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 4](#)

Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents mentionnés à [l'article L. 8271-1-2](#) d'une infraction aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié d'un sous-traitant direct ou indirect dans les matières suivantes :

1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;

2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ;

4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;

5° Exercice du droit de grève ;

6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;

7° Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;

8° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;

9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants,

enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant de faire cesser sans délai cette situation.

Le sous-traitant mentionné au premier alinéa informe, par écrit, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l'agent de contrôle mentionné au même premier alinéa.

En l'absence de réponse écrite du sous-traitant dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre informe aussitôt l'agent de contrôle.

Pour tout manquement à ses obligations d'injonction et d'information mentionnées au présent article, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible d'une sanction prévue par décret en Conseil d'Etat.

Liens relatifs à cet article

Cite:

[Code du travail - art. L8271-1-2](#)

Cité par:

[relatif à la lutte contre le travail illégal et... - art. \(VNE\)](#)

[LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 281, v. init.](#)

[Décret n°2016-418 du 7 avril 2016 - art. 1](#)

[Code des transports - art. L1331-2 \(V\)](#)

[Code des transports - art. R1331-6 \(VD\)](#)

[Code du travail - art. R8281-1 \(V\)](#)

[Code du travail - art. R8282-1 \(V\)](#)

Créé par: [Loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 4](#)

ADMISSION AU SÉJOUR, PROTECTION, ACCUEIL ET HÉBERGEMENT DES ÉTRANGERS VICTIMES DE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS ET DU PROXÉNÉTISME

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Art. [L. 316-1 et s.](#)

Modifié par [Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20](#)

Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux [articles 225-4-1 à 225-4-6](#) et [225-5 à 225-10](#) du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article [L. 313-2](#) n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites.

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

Art. [R. 316-1 et s.](#)

Créé par [Décret n°2007-1352 du 13 septembre 2007 - art. 1 JORF 15 septembre 2007](#)

Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles [225-4-1 à 225-4-6](#) et [225-5 à 225-10](#) du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe :

1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article [L. 316-1](#) ;

2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ;

3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits.

Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa.

Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection.

Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale.

MISSIONS, ORGANISATION, COMPOSITION STRUCTURELLE ET FONCTIONNEMENT DE LA MISSION INTERMINISTÉRIELLE POUR LA PROTECTION DES FEMMES CONTRE LES VIOLENCES ET LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS.

[Décret n° 2016-1096 du 11 août 2016 modifiant le décret n° 2013-7 du 3 janvier 2013 portant création d'une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains](#)

Publics concernés : tous publics.

Objet : modification de la composition du comité d'orientation et création en son sein d'un comité de coordination en matière de lutte contre la traite des êtres humains.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret modifie la composition du comité d'orientation en y intégrant des associations et instances à caractère administratif intervenant en matière d'égalité femme-homme et de lutte contre les violences faites aux femmes et la traite des êtres humains. Il crée par ailleurs un comité de coordination regroupant les membres du comité d'orientation intervenant en matière de lutte contre la traite des êtres humains chargé de suivre la mise en œuvre des actions nationales menées sur ce champ.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr>).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,
Vu le [décret n° 2013-7 du 3 janvier 2013](#) modifié portant création d'une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains,

Décrète :

Article 1

A l'article 6 du décret du 3 janvier 2013 susvisé, les mots : « de la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 en liaison avec le groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) » sont remplacés par les mots : « des actions nationales contre la traite des êtres humains, en lien avec les ministères et les acteurs concernés ».

Article 2

L'article 7 du même décret est ainsi modifié :

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Dix représentants de structures associatives intervenant en matière de violences faites aux femmes et de lutte contre la traite des êtres humains, nommés par le ministre chargé des droits des femmes ; » ;

2° Le 4° est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Des représentants de l'Etat, d'établissements publics de l'Etat ou de commissions administratives à caractère consultatif » ;

b) Après le douzième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« - le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant ;

« - le président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme ou son représentant ;

« - le président du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ou son représentant. »

Article 3

Après l'article 8 du même décret, il est ajouté un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Un comité de coordination, composé des membres du comité d'orientation intervenant en matière de lutte contre la traite des êtres humains, suit la mise en œuvre des actions nationales contre la traite des êtres humains.

« Les membres du comité de coordination se réunissent au moins deux fois par an, sur proposition du secrétaire général de la mission, qui fixe l'ordre du jour de ses travaux et en assure la préparation et le suivi. »

Article 4

La ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 août 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,

Laurence Rossignol

SOBRE TRABAJO FORZADO

Cour de cassation
CHAMBRE_CRIMINELLE
Audience publique du 09 janvier 2019
N° de pourvoi : 18-81817
Non publié au bulletin

M. Soulard (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Antonia C... D... , partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 mars 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre Mme Tatiana E... et M. Bruno X..., témoin assisté, des chefs notamment d'infractions à la législation sur les étrangers, emploi d'étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225-13, 225-14, 225-15-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a prononcé un non-lieu partiel au bénéfice de M. X... et de Mme E... des chefs de rétribution insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante et

soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes au préjudice de Mme C... D... ;

"aux motifs propres que sur l'infraction de traite des êtres humains : selon le conseil de la partie civile, l'infraction prévue à l'article 225-4-1 du code pénal est établie dans ses trois éléments constitutifs : le recrutement et la promesse d'avantage ou de rémunération, et ce aux fins de réalisation de l'infraction de l'article 225-14 du code pénal ; que le conseil affirme que le magistrat instructeur a fait une analyse erronée en y ajoutant le critère de "conditions de vie indignes", sans statuer sur les éléments spécifiques constitutifs de l'infraction ; qu'il convient de rappeler d'abord que les infractions de traite des êtres humains (article 225-4-1 du code pénal) et de conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine (article 225-14 du code pénal) sont des infractions distinctes dans leurs éléments constitutifs, le but de la traite des êtres humains étant l'exploitation de la personne telle que déclinée par l'article 225-4-1 du code pénal ; qu'en outre, la partie civile se réfère à l'article 225-4-1 dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2013, alors qu'à la période des faits dénoncés, l'article était ainsi libellé : "La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit. La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende" ; que ce n'est que par sa rédaction telle qu'issue de la loi du 20 novembre 2007, que l'infraction a été étendue au fait de recruter... héberger ou accueillir une personne "pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d'un tiers ..."; qu'en l'espèce, il n'est ni discuté, ni discutable que si Mme Tatiana E... a fait venir Mme C... D... , et s'il s'agissait de la faire travailler en France, c'était pour la mettre à sa propre disposition et non à la disposition d'un tiers, de sorte que l'infraction de traite des êtres humains, en vigueur à l'époque des faits dénoncés, ne peut trouver application à l'encontre de Mme E... ; que sur l'infraction de conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine : l'infraction est ainsi prévue par le code pénal dans son article 225-14 : "Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende" ; que la partie civile soutient que toute situation de travail forcé est constitutive de conditions de travail contraires à la dignité humaine en citant en exemple un arrêt de la cour d'appel de Caen du 18 février 2013, et que l'existence d'une "certaine liberté de déplacement" de la victime est inopérant, selon un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 11 décembre 2001 ; que selon elle, l'information a démontré la réalité du travail effectué en qualité de "dame à tout faire" ou de "bonne", ou de "gouvernante" selon les témoins, mais aussi la contrainte subie par Mme C... D... , qui s'était vue confisquer son document d'identité par Mme E... et qui était dans l'incapacité de déposer plainte compte tenu de sa situation irrégulière sur le territoire ; quant aux conditions d'hébergement, qu'il est affirmé également que selon l'évolution de la jurisprudence, Mme C... D... , qui logeait dans une pièce bureau, ne disposait pas d'une pièce qui lui soit exclusivement réservée qui garantisse son intimité ; que cependant, s'il est constant que Mme C... D... pouvait être dans un état de dépendance ou de vulnérabilité particulièrement sur le plan économique, en raison de sa situation administrative irrégulière connue de Mme E... , en revanche il ne résulte pas de l'information qu'elle ait été soumise à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine ; qu'en effet, force est de constater que cette thèse ne résulte que des propres allégations de Mme C... D... , et n'est corroborée par aucun élément objectif ; qu'il apparaît au contraire de plusieurs témoignages, que l'appartement du couple

X.../E... était un grand logement T5 avec quatre chambres (D221, D230, D309) et que Mme C... D... y disposait d'une pièce qui lui était réservée ; que s'il pouvait y avoir un meuble bureau dans cette chambre, ce n'était pas pour autant une pièce bureau, dans laquelle la famille s'autorisait à pénétrer à n'importe quel moment, même en présence de la partie civile ; que c'est ce que précise d'ailleurs M. X... devant le magistrat instructeur le 16 février 2017 (D311) ; que d'autre part, si Mme C... D... a prétendu auprès de deux voisines, Mme A... et Mme B... qu'elle s'était fait confisquer son passeport, qu'elle dormait sur une carpeste à même le sol ou encore qu'elle n'était pas payée, Mme B... précise qu'elles ont toutes deux douté de la sincérité de l'intéressée et pensé qu'elle réglait ainsi un conflit avec le couple qui l'hébergeait, puisque par ailleurs Mme C... D... était propre, disposait des clés du logement et avait même proposé à une reprise à Mme B... de lui montrer sa chambre, ce qui ne s'était pas fait (D247-248) ; que Mme B... ajoutait même qu'elle avait employé Mme C... D... sur la demande de cette dernière, à des tâches de repassage, contre des petites sommes d'argent ; que Mme A... indiquait quant à elle : "Pour moi, elle ne donnait pas l'impression d'être employée chez le couple, elle avait sa chambre, elle vivait chez le couple, elle faisait du ménage ou à manger, pour s'occuper elle-même. Elle avait demandé dans le Camp-Robert si quelqu'un n'avait pas besoin d'une femme de ménage ou besoin de repassage... Je sais qu'une fois elle est partie au Brésil car quelqu'un de sa famille avait eu un problème et elle y était allée, elle avait dû rester plus d'un mois au Brésil avant de revenir. Je sais aussi que c'est Tatiana qui lui payait les cartes téléphoniques pour appeler au Brésil..."(D231) ; qu'il résultait en outre de l'ensemble des témoignages que Mme C... D... était présentée ou vécue par le voisinage comme un proche "un peu de la famille" ou un membre de la famille ; et que sur l'infraction de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante : selon les dispositions de l'article 225-13 du code pénal dans sa rédaction applicable au moment des faits, "le fait d'obtenir d'une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende" ; que la partie civile insiste sur le caractère manifestement insuffisant de sa rémunération, au vu des 1 000 euros reçus pour un travail exercé pendant treize mois, qui plus est à temps plein au regard des horaires effectués, de sorte que le fait d'être logée et nourrie ne peut être considéré non plus comme une rémunération suffisante ; mais que là encore, sa thèse ne résulte que de ses propres allégations, et n'est corroborée par aucun élément objectif ; qu'en effet, s'il est manifeste que Mme C... D... a effectué des tâches ménagères et de la garde d'enfants au domicile du couple X.../E..., les horaires de seize heures par jour tels qu'allégués, ne sont pas confirmés et semblent même contredits par le fait que Mme C... D... réclamait du travail auprès des voisins de la famille ; qu'il en va de même pour le quantum de sa rémunération puisque par définition, s'agissant d'espèces, il n'est pas vérifiable, pas plus que n'est vérifiable le caractère prétendument insuffisant de cette rémunération, alors que par ailleurs Mme C... D... était logée et nourrie gratuitement chez Mme E... , qu'elle y effectuait des tâches de gouvernante sans aucune maltraitance avérée, et qu'elle se trouvait en France de son plein gré (laissant ses quatre enfants au Brésil à la garde d'un tiers) et cherchait surtout à s'y maintenir ; qu'ainsi, les infractions ci-dessus visées n'apparaissent pas caractérisées et le non-lieu ordonné à l'égard de Mme E... , témoin assistée de ces chefs, est justifié ;

"et aux motifs adoptés que s'agissant des infractions de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante, de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes, ou de traite d'être humain, la partie civile met en avant le fait que la traite des êtres humains est établie par la très faible rémunération, que les conditions de travail et d'hébergement indignes sont caractérisées par la situation de travail forcé et de dame à tout faire résultant du dossier, qu'enfin la rémunération insuffisante d'une personne vulnérable ou dépendante est manifeste au vu des 1 000 euros reçus sur un travail exercé pendant treize mois ; que

toutefois, comme le souligne le procureur de la République, il ne résulte pas de l'information des éléments suffisants permettant de conclure que la partie civile s'est trouvée dans un situation de vulnérabilité ou de dépendance telle qu'elle n'a pu qu'accepter les conditions de vie indignes qui lui auraient été proposées ; qu'à cet égard, il sera noté que les témoins entendus confirment que la partie civile était de son plein gré en France, qu'elle cherchait à s'y maintenir et qu'elle n'apparaissait pas particulièrement maltraitée ou calfeutrée dans des conditions inhumaines ; que les infractions visées ne sont donc pas caractérisées dans tous leurs éléments et un non-lieu sera ordonné à l'égard de Mme E... , témoin assistée de ces chefs ;

"1°) alors qu'est réprimé le fait de soumettre une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine ; que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun élément objectif du dossier ne démontrait que Mme C... D... avait été soumise à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, après avoir pourtant relevé qu'il était manifeste qu'elle avait effectué des tâches ménagères et de garde d'enfants au profit du couple X.../E..., et sans s'expliquer sur la circonstance, invoquée par la partie civile qu'elle s'était faite confisquer ses papiers d'identité par ces derniers, ni préciser les éléments de fait établissant de manière positive que ses conditions de travail étaient compatibles avec la dignité humaine, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"2°) alors qu'est réprimé le fait d'obtenir d'une personne vulnérable ou dépendante la fourniture de services en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli ; que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun élément objectif du dossier ne démontrait le caractère insuffisant de la rémunération perçue par Mme C... D... , qui était par ailleurs logée et nourrie gratuitement chez Mme E... , dès lors que le montant de 1 000 euros invoqué par celle-ci n'était pas vérifiable s'agissant d'espèces, sans s'expliquer sur le faible montant des mandats envoyés par la partie civile à sa famille au cours de cette période, sur la circonstance qu'elle réclamait auprès des voisins un travail rémunéré, et sans préciser les éléments de fait établissant que les conditions de sa rémunération étaient proportionnées à l'importance du travail manifeste d'aide-ménagère et de garde d'enfants accompli par la partie civile, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"3°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en jugeant que les infractions susvisées n'étaient pas caractérisées dès lors que Mme C... D... se trouvait en France de son plein gré et cherchait à s'y maintenir après avoir pourtant laissé ses quatre enfants à la garde d'un tiers au Brésil, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants, et n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que Mme C... de Frettas, de nationalité brésilienne, est venue en France à l'initiative de Mme E... , qui l'avait contactée en Guyane et lui avait proposé un poste de garde d'enfants à temps plein à son domicile français rémunéré mensuellement et un hébergement gratuit ; que Mme E... s'était engagée de surcroît à prendre en charge ses frais de transport ainsi que les démarches destinées à lui assurer un séjour régulier en France ; que Mme C... D... a été hébergée et a travaillé au domicile du couple E... durant treize mois, jusqu'au 3 février 2007, avant d'être prise en charge par une association ; qu'après une première plainte déposée en 2008 et classée sans suite en 2013, Mme C... D... a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Draguignan le 20 janvier 2014 des chefs de traite des êtres humains aux fins d'exploitation domestique, rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante,

soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine, aide aggravée à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié ; qu'au terme de l'information, ouverte le 5 mai 2014, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi de Mme E... devant le tribunal correctionnel des seuls chefs d'infractions à la législation sur les étrangers et d'emploi d'étranger non muni d'une autorisation de travail salarié ; que Mme C... D... a interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer la décision de non-lieu partiel des chefs d'obtention abusive, de la part d'une personne vulnérable ou dépendante, de services non rétribués ou insuffisamment rétribués et de soumission de cette personne à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, l'arrêt prononcé par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction qui a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Mme Tatiana E... et M. Bruno X... d'avoir commis les délits définis aux articles 225-13 et 225-14 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 21 juin 2016
N° de pourvoi: 15-80270
Non publié au bulletin Rejet
M. Guérin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

Mme Aissatou X...,

- Mme Coumba Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 9 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Amadou Z...et Mme Ndeye A... des chefs d'exécution d'un travail dissimulé, d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, d'aide aggravée à l'entrée et au séjour d'un étranger en France, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandresses ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4, 6, 7 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Convention sur le travail forcé du 28 juin 1930, de l'article 15-4 de la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005, de l'article 14 de la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005, de la directive 2004/ 81/ CE du Conseil du 29 avril 2004, de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 225-4-1, 225-13 et 225-14 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles préliminaire, 2, 3, 388, 512, 591 et 593 du ode de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt, statuant dans les limites de l'appel, a confirmé le jugement ayant condamné solidairement Mme A... et M. Z... à payer à Mme X..., la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et à Mme Y..., la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs qu'à l'audience, l'avocat de Mmes Y... et X... demande que les faits délictueux reprochés aux condamnés soient requalifiés en ceux de traite des êtres humains (article 225-4-1 du code pénal) avec la circonstance aggravante que ces faits ont été commis à l'égard de plusieurs personnes, d'obtention de services non rétribués de la part d'une personne en état de vulnérabilité ou de dépendance, de fourniture et de soumission de ladite personne à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine (articles 225-13 et 225-14 du code pénal) et en conséquence que Mme A... et M. Z... soient condamnés à payer à Mme Y... la somme de 15 000 euros et à Mme X... 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, tous préjudices confondus ; que le représentant du ministère public a présenté ses observations ; que Mme A... et M. Z... ne se sont pas présentés à l'audience ni fait représenter ; que les parties civiles soutiennent qu'elles sont recevables à solliciter la requalification des faits de la cause y compris comme seules appelantes des dispositions civiles d'un jugement de condamnation des prévenus, en application de leurs droits, garantis par les articles 4 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, en travail forcé, servitude et traite des êtres humains dont elles ont été victimes ; qu'elles affirment qu'en rejetant la demande de requalification des parties civiles sur le fondement de la saisine in rem du juge pénal et au motif que les éléments constitutifs de l'infraction différaient de ceux retenus dans la prévention par le juge d'instruction, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que, si toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et s'il appartient au juge répressif, sans pouvoir substituer un fait nouveau à celui dont elle est saisi, de rechercher, même d'office, si le fait poursuivi devant lui sous une qualification, échappant à la disposition pénale visée par la citation ou l'ordonnance de renvoi, n'est pas susceptible d'une autre qualification ; que l'article 3 du code de procédure pénale dispose que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction et qu'elle est recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits objets de la poursuite ; qu'en l'espèce, l'action publique ayant été définitivement tranchée par une condamnation des prévenus, la cour d'appel de renvoi saisie uniquement des intérêts civils, n'a pas le pouvoir de requalifier les faits poursuivis ; qu'il appartient donc aux appelantes à partir et dans la limite des seuls faits dont a été saisie la cour, tels que définitivement qualifiés par les premiers juges, de démontrer leur préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation ; qu'il résulte de la procédure et du jugement qu'en août 2009 Mme Y... a déposé plainte contre Mme A..., sa cousine, expliquant que celle-ci était venue la chercher au Sénégal pour la ramener en France afin qu'elle s'occupe des enfants du couple qu'elle forme avec M. Z... et qu'elle fasse le ménage ; que, pour pouvoir entrer en France, elle lui aurait fait faire un faux passeport, puis lui aurait subtilisé ses vrais papiers ; que Mme Y... a indiqué qu'elle travaillait tous les jours pour 150 euros par mois qui étaient versés directement à une tante au Sénégal, elle-même ne percevant aucune rémunération ; qu'après s'être confiée à un compatriote, M. B..., elle a trouvé de l'aide auprès du Comité contre l'esclavage moderne et, profitant d'un voyage de Mme A... au Sénégal, s'est enfuie du domicile de ses employeurs ; qu'en octobre 2009, ce comité informait les services de police de la présence d'une autre jeune femme découverte au domicile des mis en cause, Mme X... ; que Mme A... et M. Z..., ont été définitivement déclarés coupables par le jugement entrepris, qu'il est établi que les prévenus en subtilisant les papiers d'identité de Mmes X... et Y..., en les empêchant de régulariser leur situation administrative en France, en les contraignant à effectuer quotidiennement des tâches ménagères à leur domicile moyennant une rémunération inexistante ou d'un faible montant versé à un tiers, même complétée d'avantages en nature sous la forme d'hébergement et de repas, sans déclaration aux organismes sociaux, ont soumis les plaignantes à des conditions de vie, de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine pour les avoir placées dans un isolement relationnel, social et culturel ; que les préjudices ainsi soufferts étant en relation directe avec les faits objets de la poursuite, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de Mmes X... et Y... et fait une exacte appréciation des souffrances endurées par ces dernières ;

" 1°) alors que les obligations positives qui pèsent sur les Etats membres en vertu de l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme commandent la répression effective sous une qualification en rapport avec les faits de tout comportement constitutif d'une situation de traite des êtres humains à des fins de travail forcé ou de servitude ; qu'en refusant de requalifier, comme relevant des délits de traite des êtres humains, d'obtention abusive de la part d'une personne vulnérable ou dépendante de services non rétribués ou insuffisamment rétribué et de fourniture et soumission d'une telle personne à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, les faits poursuivis sous la qualification de travail dissimulé, d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier, alors qu'elle constatait, d'une part, qu'« il résulte de la procédure et du jugement qu'en août 2009 Mme Y... a déposé plainte contre Mme A..., sa cousine, expliquant que celle-ci était venue la chercher au Sénégal pour la ramener en France afin qu'elle s'occupe des enfants du couple qu'elle forme avec M. Z... et qu'elle fasse le ménage ; que, pour pouvoir entrer en France, elle lui aurait fait faire un faux passeport, puis lui aurait subtilisé ses vrais papiers ; que Mme Y... a indiqué qu'elle travaillait tous les jours pour 150 euros par mois qui étaient versés directement à une tante au Sénégal, elle-même ne percevant aucune rémunération » et, d'autre part, qu'« il est établi que les prévenus en subtilisant les papiers d'identité de Mmes X... et Y..., en les empêchant de régulariser leur situation administrative en France, en les contraignant à effectuer quotidiennement des tâches ménagères à leur domicile moyennant une rémunération inexistante ou d'un faible montant versé à un tiers, même complétée d'avantages en nature sous la forme d'hébergement et de repas, sans déclaration aux organismes sociaux, ont soumis les plaignantes à des conditions de vie, de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine pour les avoir placées dans un isolement relationnel, social et culturel » en sorte que les agissements relevaient de la traite des êtres humains à des fins de travail forcé ou de servitude, la cour d'appel, qui a méconnu l'obligation positive de réprimer effectivement les agissements visés par l'article 4 de la Convention européenne, a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que la cour d'appel saisie par la partie civile seule de l'appel formé contre un jugement de condamnation doit porter sa propre appréciation sur l'infraction pénale génératrice du dommage et, le cas échéant, redonner aux faits infractionnels générateurs de responsabilité, leur véritable qualification ; que Mmes X... et Y... sollicitaient, dans leurs conclusions d'appel signifiées aux prévenus, que soit restituée leur véritable qualification aux faits dont les prévenus avaient été déclarés coupables et constituant la faute pénale ayant entraîné un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation ; qu'en affirmant que l'action publique ayant été définitivement tranchée par une condamnation des prévenus, la cour d'appel saisie uniquement des intérêts civils, n'avait pas le pouvoir de requalifier les faits poursuivis tels que définitivement qualifiés par les premiers juges alors qu'en l'état d'un jugement de condamnation, les juges saisis de l'action civile pouvaient substituer leur appréciation à celle des premiers juges pour restituer aux faits infractionnels générateurs de responsabilité, leur véritable qualification, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y... a porté plainte en exposant que Mme A..., après qu'elle l'eut ramenée du Sénégal à l'aide d'un faux passeport et eut subtilisé sa carte d'identité, l'a, avec M. Z..., son compagnon, employée pour s'occuper de leur appartement et de leurs trois enfants, sans procéder à la déclaration légalement exigée et en ne la rétribuant pas autrement que par l'envoi à sa tante, chaque mois, de la somme de 150 euros ; que l'enquête entreprise consécutivement ayant permis de recueillir des indices corroborant ses dires, une perquisition a été effectuée au domicile des mis en cause qui a permis, notamment, d'y découvrir une jeune femme, Mme X..., dont les conditions d'entrée sur le territoire national et de travail se sont avérées similaires à celles qu'avait décrites Mme Y... ; que Mme A... et M. Z... ayant été renvoyés

devant le tribunal correctionnel pour exécution d'un travail dissimulé, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, et aide aggravée à l'entrée et au séjour d'un étranger en France, le tribunal les a déclarés coupables de ces chefs, puis condamnés pénalement et civilement, au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles ; que celles-ci ont formé appel de cette décision ;

Attendu que, si c'est à tort que, pour rejeter l'argumentation de Mmes X... et Y... aux fins de voir requalifier en traite des êtres humains les faits poursuivis sous la qualification de travail dissimulé et fixer leur préjudice en conséquence, l'arrêt retient que le jugement est revêtu sur ce point de l'autorité de la chose jugée, la décision prononcée, sur le seul appel des parties civiles, n'encourt pas la censure dès lors que la qualification de la faute civile, à l'origine du préjudice direct et personnel ayant été causé par les infractions reprochées, ne peut être caractérisée qu'à partir et dans la limite des faits matériels, objet de la poursuite ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-25665
Non publié au bulletin Cassation
Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Alison X..., mineure, a été victime d'une infraction pénale commise par sa mère ; qu'à la suite de la condamnation de cette dernière par un jugement d'un tribunal correctionnel en 2010, statuant sur l'action civile en 2011, le président du Conseil général de Loir-et-Cher, agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la victime, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) d'une demande en réparation des préjudices subis ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté que l'infraction dont a été victime Alison X... ouvre droit à indemnisation par le Fonds de garantie des victimes d'infraction en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, ce dernier soutenait que « les conditions de recevabilité sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale n'étaient pas remplies », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu que l'arrêt fait droit à la demande d'indemnisation sur le fondement de ce texte ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser à quel titre la victime relevait de l'indemnisation par une CIVI, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR alloué à M. le Président du Conseil général du Loir-et-Cher, en qualité d'administrateur ad hoc de Mlle Alison X..., la somme de 31. 094, 66 euros, à la charge du Fonds de garantie des victimes d'infractions ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que l'infraction dont a été victime Alison X... ouvre droit à indemnisation par le Fonds de garantie des victimes d'infractions en application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; qu'il ressort aussi de la décision entreprise que Monsieur le Président du Conseil général du Loir-et-Cher ès qualités d'administrateur ad hoc d'Alison X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour demander le solde du montant de l'indemnisation retenue par le tribunal correctionnel ; que Monsieur le Président du Conseil général du Loir-et-Cher ès qualités d'administrateur ad hoc d'Alison X... précise, en outre dans ses conclusions d'appel, qu'il demande la réparation de ses préjudices avérés et chiffrés qui sont considérés comme définitifs (conclusions du 8 janvier 2014) ; que dès lors, le débat sur la consolidation de l'état d'Alison X... devient sans objet dans le présent litige ; qu'en l'occurrence, à la lecture du rapport d'expertise judiciaire ordonnée par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions et que l'expert judiciaire a déposé le 6 décembre 2012, il ressort qu'Alison X... dont la naissance s'est passée sans incident, a subi des maltraitances physiques qui ont perturbé considérablement son affectivité et son éveil psychologique (rapport page 12) ; que lors de son hospitalisation le 1er octobre 2007, les médecins ont mis en évidence un retard psychomoteur ainsi qu'un retard du langage et des troubles du graphisme ; qu'il est ainsi établi qu'Alison X... subit des dommages directement en lien avec l'infraction dont elle a été victime et notamment des troubles psychomoteurs et un retard d'acquisition ; qu'au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, à savoir le rapport d'expertise judiciaire du docteur Y..., la notification de la décision relative à l'orientation scolaire en classe d'inclusion scolaire (CLIS) en date du 23 juin 2011 émanant de la Maison départementale des personnes handicapées, l'attestation du Président du Conseil général du Loir-et-Cher en date du 18 octobre 2011 relative à la majoration de salaire pour soins particuliers versée à l'assistante familiale d'Alison X..., le préjudice subi par Alison X... sera évalué ainsi qu'il suit : au titre des préjudices patrimoniaux : Frais de tierce personne : 19. 112, 66 euros ; Préjudice scolaire : 5. 000 euros ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire correspondant à la période d'hospitalisation du 1er octobre 2007 au 8 octobre 2007 : 161 euros ; souffrances endurées que l'expert judiciaire évalue à 3/ 7 : 11. 000 euros ; soit un montant total de 35. 273, 66 euros ; que Monsieur le Président du Conseil général du Loir-et-Cher ès qualités d'administrateur ad hoc d'Alison X... ayant déjà perçu la somme de 4. 179 euros à titre de provision de la part du Fonds de garantie des victimes d'infractions, sans que la décision allouant cette provision ait été contestée, il y a lieu de l'en déduire du montant de 35. 273, 66 euros ; qu'en conséquence, le montant de l'indemnité due à Monsieur le Président du Conseil général du Loir-et-Cher ès qualités d'administrateur ad hoc d'Alison X... par le Fonds de garantie des victimes d'infractions s'élève à 35. 273, 66 € 4. 179 = 31. 094, 66 euros ; que le jugement entrepris sera réformé concernant le montant de l'indemnité ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 706-3 du Code de procédure pénale ouvre notamment, sous certaines réserves, le droit à indemnisation auprès de la CIVI pour les personnes victimes de faits soit ayant entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois soit prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du Code pénal ; que tel est bien le cas en l'espèce puisque les faits cause du dommage relèvent des articles ci-dessus énoncés ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le Fonds de garantie soutenait que « les conditions de recevabilité sur le fondement de l'article 706-3 du Code de Procédure pénale n'étaient pas remplies : aucun déficit fonctionnel permanent n'étant évalué en l'état et l'incapacité temporaire totale étant inférieure à un mois (en l'occurrence 8 jours) » et que « conformément aux conclusions médico-légales, il convient donc d'attendre que l'état de santé de l'enfant soit consolidé et que la jeune victime soit examinée par un pédopsychiatre qui évaluera le préjudice définitif imputable, ce qui permettra de déterminer si la victime est susceptible de bénéficier d'une réparation intégrale de son préjudice sur le fondement de l'article 706-3 du Code de Procédure pénale, ce qui n'est pas établi en l'état » (conclusions, p. 5) ; qu'en retenant néanmoins qu'il ne serait « pas contesté que l'infraction dont a été victime Alison X..., ouvre droit à indemnisation par le Fonds de garantie des victimes d'infractions en application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale » (arrêt, p. 4, § 5), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions du Fonds de garantie et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE pour faire l'objet d'une indemnisation par la CIVI, les faits présentant le caractère matériel d'une infraction doivent soit avoir entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, soit être prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 (agressions sexuelles), 224-1 A à 224-1 C (esclavage), 225-4-1 à 225-4-5 (traite des êtres humains), 225-14-1 et 225-14-2 (travail forcé et réduction en servitude) et 227-25 à 227-27 (atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans) du Code pénal ; qu'en jugeant établi le droit à indemnisation de Mlle X... sans constater que l'une de ces conditions était remplie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

3°) ALORS QUE pour faire l'objet d'une indemnisation par la CIVI, les faits présentant le caractère matériel d'une infraction doivent soit avoir entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, soit être prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 (agressions sexuelles), 224-1 A à 224-1 C (esclavage), 225-4-1 à 225-4-5 (traite des êtres humains), 225-14-1 et 225-14-2 (travail forcé et réduction en servitude) et 227-25 à 227-27 (atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans) du Code pénal ; qu'en jugeant que « les faits cause du dommage relèvent des articles ci-dessus énoncés » (jugement, p. 3, § 1er), quand il ressortait de ses propres constatations que Mlle X... avait « été victime de faits de violence n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail » (arrêt, p. 2, pénult. §), faits totalement étrangers aux infractions visées par l'article 706-3 2° du Code de procédure pénale, la Cour d'appel a encore violé ce texte ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'en allouant à Mlle X... une indemnité de 19. 112, 66 euros au titre des frais de tierce personne, quand il résultait de ses propres constatations, et notamment de « l'attestation du Président du Conseil général du Loir-et-Cher en date du 18 octobre 2011 relative à la majoration de salaire pour soins particuliers versée à l'assistante familiale d'Alison X... » (arrêt, p. 5, § 1er), que le coût de cette assistante familiale avait été pris en charge par le Conseil général du Loir-et-Cher, de sorte que Mlle X... ne subissait de ce chef aucun préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 706-9 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

SOBRE TRATA EN GENERAL

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 13 décembre 2018

N° de pourvoi: 18-10276

Publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président

SCP Delvolvé et Trichet, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2017), que, par jugement du 19 avril 2013, un tribunal correctionnel a reconnu Mme X... victime des faits de prostitution forcée et de **traite d'êtres humains** et lui a alloué diverses sommes en réparation de ses préjudices, dont 50 000 euros au titre d'un préjudice d'avilissement ; que Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice exceptionnel d'avilissement, alors, selon le moyen :

1°/ que toute personne ayant subi un préjudice résultant d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne ; que constitue un préjudice réparable, le préjudice permanent exceptionnel correspondant à un préjudice extrapatrimonial atypique, en lien avec un handicap permanent qui prend une résonance toute particulière pour certaines victimes, soit en raison de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'exposante soutenait que le préjudice exceptionnel d'avilissement subi du fait de l'atteinte particulière causée à la dignité humaine et à la liberté par la prostitution forcée et la **traite des êtres humains** dont elle avait été victime pendant plus d'un an, constituait un préjudice permanent exceptionnel ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande d'indemnisation formée à ce titre, qu' « il est patent que le préjudice moral lié à ces souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste des souffrances endurées », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice d'avilissement invoqué par la victime ne caractérisait pas, en raison de ses caractères atypique et exceptionnel affectant, de manière pérenne, le reste de la vie de celle-ci, un préjudice permanent exceptionnel distinct du poste de préjudice des souffrances endurées, par ailleurs indemnisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2°/ que nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude ; que les victimes de **traite d'êtres humains** ont le droit à être indemnisées au titre du préjudice spécifique subi du fait de la **traite** ; qu'en refusant de reconnaître à Mme X... le droit d'obtenir réparation du préjudice spécifique né de l'esclavage sexuel dont elle avait été victime, la cour d'appel a violé les articles 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 et 15 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la **traite des êtres humains** signée à Varsovie le 16 mai 2005 ;

Mais attendu que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément quelle que soit l'origine de ces souffrances ; qu'ayant, pour le réparer, inclus dans le poste des souffrances endurées et, après consolidation, dans celui du déficit fonctionnel permanent, le préjudice qualifié d'avilissement d'une victime de faits de prostitution forcée et de **traite d'êtres humains**, dont elle a relevé qu'il était lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, c'est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la cour d'appel, qui a ainsi exclu l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel ou spécifique, a écarté la demande de Mme X... tendant à le voir réparer séparément ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir le grief de la seconde branche du moyen ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice exceptionnel d'avilissement ;

AUX MOTIFS QUE sur le préjudice exceptionnel d'avilissement, le Fonds de garantie considère que la demande à ce titre doit être rejetée comme menant à une double indemnisation alors que les souffrances endurées ont été indemnisées ; la victime considère qu'un tel préjudice constitue un préjudice hors norme ne se confondant pas avec les souffrances endurées pas plus qu'avec le déficit fonctionnel permanent mais correspondant à l'atteinte à sa dignité. Il est patent que le préjudice moral lié à ces souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste des

souffrances endurées, et qui sont considérées depuis le début des faits de prostitution forcée jusqu'à la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent évalué à 5% prenant en compte les souffrances endurées depuis lors. En l'absence de préjudice distinct, la demande doit être rejetée afin de ne pas permettre une double indemnisation de la victime, qui a droit à une réparation intégrale des préjudices subis mais sans perte ni profit. La décision entreprise sera donc réformée de ce chef (arrêt, p. 5 et 6) ;

1) ALORS QUE toute personne ayant subi un préjudice résultant d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne ; que constitue un préjudice réparable, le préjudice permanent exceptionnel correspondant à un préjudice extrapatrimonial atypique, en lien avec un handicap permanent qui prend une résonance toute particulière pour certaines victimes, soit en raison de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'exposante soutenait que le préjudice exceptionnel d'avilissement subi du fait de l'atteinte particulière causée à la dignité humaine et à la liberté par la prostitution forcée et la **traite des êtres humains** dont elle avait été victime pendant plus d'un an, constituait un préjudice permanent exceptionnel ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande d'indemnisation formée à ce titre, qu'« il est patent que le préjudice moral lié à ces souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste des souffrances endurées », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice d'avilissement invoqué par la victime ne caractérisait pas, en raison de ses caractères atypique et exceptionnel affectant, de manière pérenne, le reste de la vie de celle-ci, un préjudice permanent exceptionnel distinct du poste de préjudice des souffrances endurées, par ailleurs indemnisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2) ALORS QUE nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude ; que les victimes de **traite d'êtres humains** ont le droit à être indemnisées au titre du préjudice spécifique subi du fait de la **traite** ; qu'en refusant de reconnaître à Madame X... le droit d'obtenir réparation du préjudice spécifique né de l'esclavage sexuel dont elle avait été victime, la Cour d'appel a violé les articles 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 et 15 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la **traite des êtres humains** signée à Varsovie le 16 mai 2005.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation formée au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

AUX MOTIFS QUE sur la perte de gains professionnels actuels : le Fonds de garantie reproche à la commission d'avoir alloué à Mme X... la somme de 7.500 euros à ce titre en faisant application de la notion de perte de chance considérant qu'elle aurait pu espérer un emploi rémunéré au SMIC alors que la victime se trouvait en situation irrégulière en France, et ne pouvait donc bénéficier d'un travail. La victime rétorque qu'elle aurait pu rechercher une activité professionnelle si elle n'avait pas été victime de ce réseau de proxénétisme, qui l'a amenée à se retrouver en situation irrégulière en France et alors qu'elle a suivi une formation pour établir un bilan de compétence. Elle sollicite donc la confirmation de la décision. Il est patent que la victime est arrivée en France en situation irrégulière et en ne maîtrisant pas le français. Elle n'était donc pas à même de trouver un emploi. Si elle a été autorisée à se maintenir sur le territoire français, c'est à partir de novembre 2010. En regard de ces circonstances, l'existence d'une perte de gains professionnels ou d'une perte de chance n'est pas établie (arrêt, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ; que toute perte de chance ouvre droit à réparation ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait que la prostitution forcée dont elle avait été victime à son arrivée en France, jusqu'en décembre 2009, lui avait fait perdre une chance de trouver un emploi, de se former et d'engager des démarches d'insertion sur le marché du travail, pendant cette période ; qu'à cet égard, elle faisait sienne la motivation de la décision de la CIVI ayant constaté que « la capacité de Mme X... à exercer un emploi est loin d'être inexistante dès lors que celle-ci, en cours de formation de langue française, est en voie de débiter un bilan de compétence afin de cibler le domaine vers lequel elle pourra être orientée » ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la victime était arrivée en France en situation irrégulière et en ne maîtrisant pas le français, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure que Mme X... avait perdu une chance, fût-elle minime, de trouver un emploi ou de se former plus tôt, du fait de l'esclavage sexuel subi pendant près un an à son arrivée en France, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 dudit code.

ECLI:FR:CCASS:2018:C201528

Analyse

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes , du 18 janvier 2017

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 13 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-28716
Publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
Me Balat, SCP Delvolvé et Trichet, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2017), que par jugement du 19 avril 2013, un tribunal correctionnel a reconnu Mme X... victime **des** faits de prostitution forcée et de **traite d'êtres humains** et lui a alloué diverses sommes en réparation de ses préjudices, dont 35 000 euros au titre d'un préjudice qualifié d'avilissement ; que Mme X... a saisi une commission d'indemnisation **des** victimes d'infractions ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice exceptionnel d'avilissement, alors, selon le moyen, que le préjudice d'avilissement, qui concerne spécialement les victimes de la **traite des êtres humains**, obligées par la violence à se prostituer, doit être indemnisé en tant que préjudice permanent exceptionnel ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice exceptionnel d'avilissement, au motif que « le préjudice moral lié à ces souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de souffrances endurées », la cour d'appel, qui n'a pas réparé le préjudice d'avilissement distinct de tout autre poste de préjudice, a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Mais attendu que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire **des** souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément, quelle que soit l'origine de ces souffrances ; qu'ayant, pour le réparer, inclus dans le poste **des** souffrances endurées et, après consolidation, dans celui du déficit fonctionnel permanent, le préjudice qualifié d'avilissement par la victime de faits de prostitution forcée et de **traite d'êtres humains**, dont elle a relevé qu'il était

lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, c'est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la cour d'appel a écarté la demande de Mme X... tendant à le voir réparer séparément ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains actuels ;

AUX MOTIFS QUE sur la perte de gains professionnels actuels, le Fonds de garantie reproche à la commission d'avoir alloué à Mme X... la somme de 14.000 € à ce titre en faisant application de la notion de perte de chance considérant qu'elle aurait pu espérer un emploi rémunéré au Smic alors que la victime se trouvait en situation irrégulière en France et ne pouvait donc bénéficier d'un travail ; que la victime rétorque qu'elle aurait pu chercher une activité professionnelle si elle n'avait pas été victime de ce réseau de proxénétisme, qui l'a amenée à se retrouver en situation irrégulière en France et qu'elle travaille comme femme de ménage depuis février 2002 ; qu'elle sollicite donc la confirmation de la décision entreprise, soit 500 € par mois de prostitution sur vingt-six mois et 1.000 € pour les trois mois de transition dans l'attente d'un récépissé d'une autorisation de travailler ; qu'il est patent que Mme X... est arrivée en France en situation irrégulière et ne maîtrisant pas le français ; qu'elle n'était donc pas à même de trouver un emploi ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a bénéficié d'une autorisation de travailler le 23 février 2011 ayant accepté de témoigner contre les proxénètes ; qu'en regard de ces circonstances, l'existence d'une perte de gains professionnels ou d'une perte de chance n'est pas établie ;

ALORS QU' il doit être fait droit à une demande d'indemnisation d'un événement futur favorable **dès** lors que cet événement n'est pas simplement virtuel et hypothétique ; qu'en énonçant, pour refuser à Mme X... toute indemnisation au titre de la perte de chance de travailler en France, que l'intéressée était arrivée en situation irrégulière et sans maîtriser le français, de sorte qu'elle « n'était donc pas à même de travailler » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), sans rechercher si le fait pour Mme X... de s'être trouvée victime d'un réseau de proxénètes ne l'avait précisément pas privée d'une chance, durant la période considérée, de régulariser sa situation administrative et de suivre une formation qui lui aurait donné accès au marché du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale et de l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif également de ce chef, d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice exceptionnel d'avilissement ;

AUX MOTIFS QUE sur le préjudice exceptionnel d'avilissement, le Fonds de garantie considère que la demande à ce titre doit être rejetée comme menant à une double indemnisation alors que les souffrances endurées ont été indemnisées ; que la victime considère qu'un tel préjudice constitue un préjudice hors norme ne se confondant pas avec les souffrances endurées pas plus qu'avec le déficit fonctionnel permanent mais correspondant à l'atteinte à sa dignité ; qu'il est patent que le préjudice moral lié à ces souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de souffrances endurées, et qui ont été considérées depuis le début **des** faits de prostitution forcée jusqu'à la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent évalué à 4 % prenant en compte les souffrances endurées depuis lors ; qu'en l'absence de préjudice distinct, la demande doit être rejetée afin de ne pas permettre une double indemnisation de la victime, qui a droit à une réparation intégrale **des** dommages subis mais sans perte ni profit ;

ALORS QUE le préjudice d'avilissement, qui concerne spécialement les victimes de la **traite des êtres humains**, obligées par la violence à se prostituer, doit être indemnisé en tant que préjudice permanent exceptionnel ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice exceptionnel d'avilissement, au motif que « le préjudice moral lié à ces souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de souffrances endurées » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), la cour d'appel, qui n'a pas réparé le préjudice d'avilissement distinct de tout autre poste de préjudice, a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

ECLI:FR:CCASS:2018:C201525

Analyse

Publication

:

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes , du 18 janvier 2017

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 24 octobre 2017
N° de pourvoi: 17-84629
Non publié au bulletin Cassation
M. Soulard (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

Mme Awussi X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 avril 2017, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre les époux Y...**des** chefs de **traite d'êtres humains**, soumission d'une personne à **des** conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine, rétribution insuffisante d'une personne vulnérable, aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'un étranger, emploi d'un étranger démuné de carte de travail, a infirmé partiellement l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Schneider, Mme Ingall-Montagnier, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. **Desportes** ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général **DESSPORTES** ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation **des** articles 6 et 7 de la Convention européenne **des** droits de l'homme, **des** articles 225-4-1, 225-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque pour avoir commis les faits de **traite d'êtres humains** ;

" aux motifs que, sur les faits de **traite d'êtres humains**, il est constant que :

- le juge d'instruction était saisi de tels faits, visés expressément dans la plainte avec constitution de partie civile même s'ils n'étaient pas repris dans le réquisitoire introductif,
- M. et Mme Y...n'ont pas été mis en examen de ce chef,
- l'ordonnance de règlement est silencieuse à ce sujet ; que les faits dénoncés par Mme X...concernent la période du 15 octobre 2005 au 21 septembre 2008 ; que le libellé de l'article 225-4-1 du code pénal prévoyant et réprimant la **traite d'êtres humains** a été modifié par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; que le texte antérieur était le suivant : « La **traite d'êtres humains** est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de l'héberger ou de l'accueillir pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié afin de permettre la commission contre cette personne **des** infractions de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité » ; qu'il résulte **des** déclarations même de Mme X...qu'Ida Y...lui a promis que si elle venait travailler en France chez son frère, elle percevrait un salaire plus important et pourrait suivre **des** cours d'alphabétisation ; qu'étant informée de la réalité de la situation de la jeune femme en France, Ida Y...lui avait déclaré qu'elle en était **désolée** et que si elle avait su cela, elle ne lui en aurait pas parlé ; que ces éléments sont insuffisants à démontrer qu'Ida Y...savait que Mme X...supporterait **des** conditions de travail ou d'hébergement indignes et en conséquence qu'Ida Y...puisse être considérée comme tiers au sens de l'article susvisé ; qu'en outre pour la période du 15 octobre 2005 au 20 novembre 2007, les époux Y...n'étaient pas ceux qui auraient mis à disposition Mme X...mais les bénéficiaires potentiels de la venue chez eux de la partie civile ; qu'au 20 novembre 2007, cette dernière se trouvait déjà chez eux ; que l'article 225-4-1 du code pénal modifié par la loi susvisé dispose **désormais** : « La **traite des êtres humains** est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de l'héberger ou de l'accueillir pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin de permettre la commission contre cette personne **des** infractions de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité » ; qu'en l'espèce, pour la période du 20 novembre 2007 au 21 septembre 2008, les époux Y...pourraient être poursuivis pour avoir hébergé Mme X...dans le but qu'elle travaille chez eux dans **des** conditions indignes, alors qu'elle se trouvait en état de vulnérabilité, étant en situation irrégulière dans un pays qu'elle ne connaissait pas, dont elle ne parlait pas la langue ; que toutefois, en vertu de la règle non bis in idem, un même fait, autrement qualifié, ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'il en découle que les époux Y...ne peuvent pas être poursuivis à la fois pour le délit de **traite** d'être humain par le fait d'avoir hébergé Mme X...et pour le délit d'offre de conditions d'hébergement indignes ; qu'en conséquence, il y a lieu de compléter l'ordonnance de clôture devant le tribunal correctionnel et de prononcer un non-lieu contre quiconque du chef de **traite** d'être humain sur la personne de Mme X...;

" 1°) alors que le principe non bis in idem ne trouve pas à s'appliquer lorsque les infractions poursuivies ont **des** éléments constitutifs distincts et protègent **des** valeurs différentes ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque pour avoir commis les faits de **traite d'êtres humains** aux motifs qu'« en vertu de la règle non bis in idem, un même fait, autrement qualifié, ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité » et qu'« il en découle que les époux Y...ne peuvent pas être poursuivis à la fois pour le délit de **traite** d'être humain par le fait d'avoir hébergé Awussi X...et pour le délit d'offre de conditions d'hébergement indignes » quand les délits de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à **des** conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine et de **traite des êtres humains** sont susceptibles d'être appliquées concurremment, comme

sanctionnant **des** comportements distincts et visant à la protection de valeurs différentes, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que l'article 225-4-1 du code pénal, dans sa version antérieure à la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, réprimait le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin de permettre la commission contre cette personne **des** infractions de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque pour avoir commis les faits de **traite d'êtres humains** sur la personne de Mme X...aux motifs que « pour la période du 15 octobre 2005 au 20 novembre 2007, les époux Y...n'étaient pas ceux qui auraient mis à disposition Awussi X...mais les bénéficiaires potentiels de la venue chez eux de la partie civile » tout en relevant que « quand elle (Katia Z...) avait eu besoin, elle-même, d'aide, il avait été décidé qu'Awussi X...viendrait chez elle, sans que son avis ne lui soit demandé » et que « Awussi X...(a) été constamment avec les époux Y..., ne s'absentant de leur domicile que pour aller travailler chez un de leurs proches » constatant par-là même que Mme X...avait été mise, par les époux Y..., à dispositions de tiers, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation **des** textes susvisés ;

" 3°) alors qu'en cas de cumul idéal d'infractions, une action délictuelle unique doit être réprimée sous sa plus haute acception pénale ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque pour avoir commis les faits de **traite d'êtres humains** sur la personne de Mme X...aux motifs que « les époux Y...ne peuvent pas être poursuivis à la fois pour le délit de **traite** d'être humain par le fait d'avoir hébergé Awussi X...et pour le délit d'offre de conditions d'hébergement indignes » quand le délit de **traite** est plus sévèrement réprimé et qu'un concours idéal d'infraction doit se résoudre à la faveur de la loi pénale la plus sévère, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction **des** motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Awussi X...a porté plainte et s'est constituée partie civile, des chefs, notamment, de traite d'êtres humains et de soumission d'une personne à des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine ; que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre de ces chefs ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer partiellement l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce qu'en vertu de la règle non bis in idem, un même fait, autrement qualifié, ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité, que les époux Y...ne peuvent pas être poursuivis à la fois pour le délit de traite d'êtres humains par le fait d'avoir hébergé Awussi X...et pour le délit d'offre de conditions d'hébergement indignes et qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer un non-lieu contre quiconque du chef de traite d'être humain sur la personne d'Awussi X...;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, il résultait de ses propres constatations que les mis en examen avaient entre 2005 et 2008 mis Mme X...à la disposition de tiers pour effectuer un travail sans rémunération, ce dont il résultait des éléments susceptibles de caractériser le délit de traite d'êtres humains, d'autre part, la mise à leur propre disposition d'une personne soumise à des conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité devait être poursuivie, pour les faits commis depuis

la loi du 20 novembre 2007, sous la qualification la plus haute de traite d'êtres humains, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 avril 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02765

Analyse

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles , du 20 avril 2017

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 16 décembre 2015
N° de pourvoi: 14-85900
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Guérin, président
M. Moreau, conseiller rapporteur
M. Bonnet, avocat général
SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Nancy,
- M. Julian X...,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 22 juillet 2014, qui a condamné M. X...pour recel aggravé à cinq ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour, et qui, après avoir renvoyé M. Dragan Y... des fins de la poursuite de chef de traite des êtres humains, l'a condamné, pour complicité de vols aggravés et association de malfaiteurs, à huit ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 450-5 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu que, pour rejeter la demande de confiscation du patrimoine immobilier appartenant à M. Y..., l'arrêt retient que l'acquisition de ces biens est ancienne et sans lien avec la période de la prévention ;

qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de motiver sa décision, n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de l'article 450-5 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 100-5, 429, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel de vols aggravés et l'a condamné, en conséquence, à la peine de cinq ans d'emprisonnement ;

" aux motifs qu'il apparaît que, pour chaque prévenu, a été annexé au procès-verbal transmis au magistrat instructeur, un récapitulatif des traductions en langue françaises des communications enregistrées

HOLANDA

Fuentes de consulta y referencia

Legislación

- Base de datos nacional de legislación (lengua holandesa): <https://wetten.overheid.nl/zoeken/>

Jurisprudencia

- Base de datos de jurisprudencia holandesa (lengua holandesa): <https://www.uitspraken.nl/>

Legislación

CÓDIGO PENAL

WETBOEK VAN STRAFRECHT / DUTCH CRIMINAL LAW

(Aplicable desde 01/01/2019) (version no oficial en lengua inglesa) Enlace al texto en holandés de actualización constante: <https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2019-01-01>

Al no estar disponible ninguna traducción del Código Penal holandés actualizada a 1-1-2019, se ha trabajado sobre la del Código Penal de 2012 (disponible en la web del *National Rapporteur on Trafficking in Human Beings*: www.dutchrapporteur.nl) y **se han incorporado las modificaciones posteriores mediante traducciones realizadas en el propio CEPC.**

Dichas modificaciones afectan principalmente a un incremento de las penas.

RESUMEN:

El artículo 273f y siguientes del *Código Penal* holandés penalizan la TSH. De acuerdo con este articulado, cualquiera que voluntariamente se beneficie de la explotación laboral de otra persona es culpable de TSH. Lo mismo se aplica a cualquier persona que obligue a otro ser humano a proporcionarle el producto del trabajo sexual de esa persona o la extracción de sus órganos.

La pena máxima para TSH sin circunstancias agravantes es de doce años de prisión. La TSH con circunstancias agravantes se castiga con una pena mayor (hasta 30 años de prisión en caso de muerte de la víctima).

Se han recogido los artículos **273F-283** del Código penal holandés específicos sobre TSH más otro articulado que pudiera ser aplicable (Eej. trabajo ilegal, participación en organización criminal, falsificación de documentos).

No se ha encontrado ninguna disposición específica sobre **no encausar a las víctimas**, si bien, los tribunales podrían aplicar para ello el artículo 9a (→ no hay nada parecido al 177bis 11 español que exime de pena a las víctimas por los delitos cometidos a causa de su explotación).

Part I. Scope of Application of Criminal Law [A quién se puede aplicar el Código Penal holandés]

Article 2

The criminal law of the Netherlands shall apply to any person who commits a criminal offence in the Netherlands.

Article 3

The criminal law of the Netherlands shall apply to any person who commits a criminal offence on board a Dutch vessel or aircraft outside the territory of the Netherlands.

Article 5

1. Dutch criminal law is applicable to anyone who commits a crime against a Dutch national, a Dutch civil servant, a Dutch vehicle, vessel or aircraft outside the Netherlands, insofar as according to the legal definition a prison sentence of at least eight years has been imposed and punished by the law of the country where it is committed.

2. With a Dutch citizen, the foreign national who has a permanent place of residence or residence in the Netherlands is considered equivalent for the purposes of the first paragraph.

Article 6

1. The Dutch criminal law is applicable to anyone who is guilty of a fact outside the Netherlands insofar as a treaty or decision of an international organization designated by order in council requires the establishment of jurisdiction over that fact.

2. The general administrative order referred to in the first paragraph shall define the facts with regard to which the conventions and decisions of international organizations designated by the measure require the establishment of jurisdiction.

Article 7

1. The Dutch criminal law is applicable to the Dutchman who is guilty outside the Netherlands of a fact that is regarded as a criminal offense under Dutch criminal law and is punished by the law of the country where it is committed.

2 The Dutch criminal law is also applicable to the Dutchman who is guilty outside the Netherlands:

[...]

d. one of the offenses described in articles 300 up to and including 303, insofar as the fact constitutes female genital mutilation of a female gender who has not yet reached the age of eighteen;

[...]

3. For the purposes of the first and second paragraphs, under b up to and including e, a foreign national is deemed equivalent to the foreign national who becomes a Dutch national after committing the offense and, for the purposes of paragraphs 1 and 2, the alien who has a permanent place of residence or residence in the Netherlands.

Article 8b

1 The Dutch criminal law is applicable to anyone against whom the prosecution by the Netherlands of a foreign state has been taken on the basis of a treaty from which the authority to prosecute for the Netherlands follows.

2 The Dutch criminal law is applicable to anyone against whom the prosecution has been taken over by the Dutch public prosecution service on the basis of a request to this effect from the public prosecutor of Bonaire, St. Eustatius and Saba.

[...]

4 The Dutch criminal law also applies to anyone against whom the criminal prosecution has been taken over by the Netherlands at the request of an international court established by an international organization under the treaty or decision of an international organization.

Article 8c

The Dutch criminal law is applicable to the foreign national who outside the Netherlands is guilty of a crime on which, according to the legal definition, a prison sentence of at least eight years is imposed, if this foreign national is in the Netherlands and:

- a. extradition in respect of this crime is refused on grounds that do not also mean that no prosecution can take place under Dutch law, or
- b. extradition in respect of this offense due to the lack of a treaty relationship is not possible, insofar as the fact is punished by the law of the country where it is committed.

Part II. Punishments

Article 9a [Posibilidad de NO culpabilización de la víctima]

The court may determine in the judgment that *no punishment* or measure shall be imposed, where it deems this advisable, by reason of the lack of gravity of the offence, the character of the offender, or the circumstances attendant upon the commission of the offence or thereafter.

Part V. Serious Offences against Public Order

Article 140 [Participación en organización criminal]

1. Participation in an organisation which has as its purpose the commission of *serious offences*, shall be punishable by a term of imprisonment not exceeding six years or a fine of the fifth category.
2. Participation in the continuation of the activities of an organisation that has been declared prohibited by final judicial decision or is prohibited by operation of law or against which an irrevocable declaratory judgment has been pronounced as referred to in Article 10:122(1) of the Civil Code, shall be liable to a term of imprisonment not exceeding one year or a fine of the third category.
3. The terms of imprisonment for founders, directors or managers may be increased by one third.
4. Participation, as defined in subsection (1), shall also include the provision of financial or other material support as well as the raising of funds or the recruitment of persons on behalf of the organisation defined in said subsection.

Part VIII. Serious Offences against Public Authority [Tráfico ilegal de personas y trabajo clandestino]

Véase también arts. 2 y 18 de la ley Vreemdelingen2000

Article 197

A foreign national who resides in the Netherlands, while he knows or has serious reason to suspect that a decision declaring him an undesirable foreign national has been issued pursuant to a statutory regulation or that an entry ban has been imposed on him under application of Article 66a(7) of the Aliens Act 2000 [Vreemdelingenwet 2000], shall be liable to a term of imprisonment not exceeding six months or a fine of the third category.

Article 197a

1. Any person who provides assistance to another person to obtain entry to the Netherlands or to transit the Netherlands, another member state of the European Union, Iceland, Norway or any state which has acceded to the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air concluded in New York on 15 November 2000 supplementing the Convention against Transnational Organised Crime concluded in New York on 15 November 2000, or provides that person with opportunity, means or information enabling him to do so, while he knows or has serious reason to suspect that such entry or transit is unlawful, shall be guilty of the *smuggling of human beings* and shall be liable to a term of imprisonment not exceeding four years or a fine of the fifth category.

2. [...]

3. If any of the offences defined in subsections (1) and (2) is committed in the performance of any office or practice of any profession, a term of imprisonment not exceeding six years or a fine of the fifth category shall be imposed and the court may order disqualification of the person concerned from holding that office or practising that profession and publication of its judgment.

4. If any of the offences defined in subsections (1) and (2) is committed by a person who makes a profession or habit of it or by several persons in concert, a term of imprisonment not exceeding eight years or a fine of the fifth category shall be imposed.

5. If any of the offences defined in subsections (1) and (2) results in grievous bodily harm or is likely to endanger the life of another person, a term of imprisonment not exceeding twelve years or a fine of the fifth category shall be imposed.

6. If any of the offences defined in subsections (1) and (2) results in death, a term of imprisonment not exceeding eighteen years or a fine of the fifth category shall be imposed.

[...]

8. In the application of this Article, the Netherlands shall also be understood to mean the public bodies Bonaire, St. Eustatius and Saba.

Article 197b

Any person who employs or appoints another person, who has gained unlawful entry to or unlawful residence in the Netherlands, to perform work, while he knows or has serious reason to suspect that

the entry or that residence is unlawful, shall be liable to a term of imprisonment not exceeding one year or a fine of the fifth category.

Article 197c

Any person who makes a profession or habit of the offence defined in Article 197b shall be liable to a term of imprisonment not exceeding four years or a fine of the fifth category.

Article 197d

If the offender commits the offences defined in Articles 197b or 197c in the performance of any office or the practice of any profession, the court may also disqualify the offender from holding office or practising the profession and order publication of its judgment.

Part XII. Falsity with writings, data and biometric characteristics [Falsificación de documentos]

Article 225

1. Any person who makes a false document or falsifies a document that is intended to be used as evidence of any fact, with the intention that he or others shall use it as if it were genuine and unfalsified, shall be guilty of forgery and shall be liable to a term of imprisonment not exceeding six years or a fine of the fifth category.

2. Any person who intentionally uses such a false or falsified document as if it were genuine and unfalsified or intentionally delivers or possesses such a document, while he knows or has reasonable cause to suspect that this document is destined for such use, shall be liable to the same punishment.

3. If an offence, as defined in subsection (1) or (2), is committed with the intention of preparing or facilitating a terrorist offence, the term of imprisonment prescribed for the offence shall be increased by one third.

Article 226

1. Any person who is guilty of forgery shall be liable to a term of imprisonment not exceeding seven years or a fine of the fifth category, if the offence is committed in regard of:

1°. authentic instruments;

2°. debt instruments or certificates of indebtedness of any state, province, municipality or public institution;

3°. shares or debt instruments or depositary receipts issued for shares or certificates of indebtedness of any association, foundation or company;

4°. talons, dividend coupons or interest coupons to any of the documents defined in subsections (2) and (3), or the documentary evidence issued in place of these documents;

5°. credit paper or commercial paper.

2. Any person who intentionally makes use of any false or falsified document defined in subsection (1) as if it were genuine and unfalsified, or intentionally delivers, possesses, receives, obtains, transports,

sells or transfers such a document, while he knows or has reasonable cause to suspect that this document is destined for such use, shall be liable to the same punishment.

PART XVIII. SERIOUS OFFENCES AGAINST PERSONAL LIBERTY [Trata de seres humanos]

Article 273f

1. Any person shall be guilty of human trafficking and as such shall be liable to a term of imprisonment not exceeding twelve years or a fine of the fifth category:

1° by coercion, act of violence or any other act or threat of violence or threat of any other act, by extortion, fraud, deception or abuse of a position of authority arising from de facto circumstances, by abuse of a position of vulnerability or by giving or receiving remuneration or benefits in order to obtain the consent of a person who has control over this other person recruits, transports, transfers, harbours or receives another person with the intention of exploiting this other person or removing his organs;

2° recruits, transports, transfers, harbours or receives another person with the intention of exploiting this other person or removing his organs whereas this person is under the age of eighteen years;

3° recruits, removes or abducts another person with the intention of inducing this person to make himself available for the performance of sexual acts with or for a third party for remuneration;

4° compels or persuades another person with one of the means referred to in 1° to make himself available for the performance of work or services or to make his organs available or under the circumstances referred to in 1°, takes any action which he knows or has reasonable cause to suspect will lead that other person to make himself available for the performance of labour or services or make his organs available;

5° induces another person to make himself available for the performance of sexual acts with or for a third party for remuneration or make his organs available for remuneration or takes any action in regard of another person which he knows or has reasonable cause to suspect will lead that other person to make himself available for the performance of these acts or services or make his organs available, whereas this person is under the age of eighteen years;

6° intentionally profits from the exploitation of another person;

7° intentionally profits from the removal of the organs of another person while he knows or has reasonable cause to suspect that his organs have been removed under one of the circumstances referred to in 1°;

8° intentionally profits from the sexual acts of another person with or for a third party for remuneration or the removal of his organs for remuneration, whereas this other person is under the age of eighteen years;

9° compels or induces another person by any of the means referred to in 1° to provide him with the proceeds of his sexual acts with or for a third party or of the removal of his organs;

2. Exploitation shall at least include exploitation of another person in prostitution, other forms of sexual exploitation, forced or compulsory labour or services, including begging, slavery and slavery-like practices, servitude and exploitation of criminal activities.

3. The offender shall be liable to a term of imprisonment not exceeding fifteen years or a fine of the fifth category, if:

1°. the offences, defined in subsection (1), are committed by two or more persons in concert;

2°. the offences defined in subsection (1) have been committed against a person who is under the age of eighteen years or against a person in a vulnerable position

3°. the facts described in subsection (1) have been preceded, accompanied or followed by violence.

4. If any of the offences defined in subsection (1) results in grievous bodily harm or is likely to endanger the life of another person, a term of imprisonment not exceeding thirty years or a fine of the fifth category shall be imposed.

5. If any of the offences defined in subsection (1) results in death, a term of imprisonment not exceeding eighteen years or a fine of the fifth category shall be imposed.

6. 6 A vulnerable position also includes a situation in which a person has no other actual or acceptable choice than to undergo the abuse.

7. Article 251 shall apply *mutatis mutandis*⁵

Article 274

Any person who engages in slave trading, for his own or another's account, or who intentionally participates in it, either indirectly or directly, shall be liable to a term of imprisonment not exceeding twelve years or a fine of the fifth category.

Article 275

1. Any person who takes service or serves as a master on a vessel, knowing that it is intended for slave trading, or employing it for that purpose, shall be liable to a term of imprisonment not exceeding twelve years or a fine of the fifth category.

2. If the transportation results in the death of one or more slaves, the master shall be liable to a term of imprisonment not exceeding fifteen years or a fine of the fifth category.

Article 276

Any person who takes service on a vessel as a crew member, knowing that it is intended for slave trading or that it is employed for that purpose, or voluntarily continues his service on such vessel after having learned of such purpose or employment, shall be liable to a term of imprisonment not exceeding nine years or a fine of the fifth category.

⁵ 1. In the case of conviction for any of the serious offences defined in sections 240b to 247 inclusive and 248a to 250 inclusive, disqualification from the rights listed in section 28(1)(1°)(2°) and (4°) may be imposed.

2. If the offender commits any of the serious offences defined in Articles 240b to 247 inclusive and 248a to 250 inclusive in the practice of his profession, he may be disqualified from the practice of that profession.

Article 277

Any person who, for his own or another's account, either indirectly or directly, cooperates in the leasing, hiring out or insuring of a vessel, knowing that it is intended for slave trading, shall be liable to a term of imprisonment not exceeding eight years or a fine of the fifth category.

Article 278

Any person who takes another person across the borders of the Kingdom in Europe, with the intention of unlawfully placing him under the control of another person or placing him in a helpless situation, shall be guilty of kidnapping and shall be liable to a term of imprisonment not exceeding twelve years or a fine of the fifth category.

Article 279

1. Any person who intentionally removes a minor from the custody of a person who exercises parental authority over him, or from the supervision of a person legally vested with such supervision, shall be liable to a term of imprisonment not exceeding six years or a fine of the fourth category.

2. A term of imprisonment not exceeding nine years or a fine of the fifth category shall be imposed if a ruse, an act of violence or threat of violence has been used, or if the minor is under age of twelve.

Article 280

1. Any person who intentionally hides, or conceals from the investigation by judicial officers or police officers, a minor who has been removed or has removed himself from the custody of the person who exercises legal authority over him or from the supervision of a person legally vested with such supervision, shall be liable to a term of imprisonment not exceeding three years or a fine of the fourth category, or if the minor is under the age of twelve years, a term of imprisonment not exceeding six years or a fine of the fourth category.

2. The preceding provision shall not apply to:

a. any person who, without delay, communicates the minor's whereabouts to the Child Protection Board; or

b. the care provider, referred to in Article 1 of the Youth Care Act, which receives funding pursuant to Article 41 of that Act from the province and acts in accordance with the rules set in Article 3(5);

c. any person who acts for the purpose of providing conscientious assistance to the minor.

3. Conscientious assistance to minors shall constitute prompt communication of the fact that assistance is being provided and prompt disclosure of the identity of the person rendering assistance and his place of residence or (head)office to the person who exercises legal authority over the minor.

Article 281

1. 1°. Any person who takes away a female minor against the will of her parents or guardians, but with her consent, with the intention of securing possession of her, either in or out of wedlock, shall be guilty of abduction and shall be liable to a term of imprisonment not exceeding six years or a fine of the fourth category;

2°. Any person who takes away a woman by a ruse, an act of violence or threat of violence, with the intention of securing possession of her, either in or out of wedlock, shall be guilty of abduction and shall be liable to a term of imprisonment not exceeding nine years or a fine of the fifth category;

2. Prosecution shall take place only on complaint.

3. The complaint shall be filed:

a. by the woman, or by the person whose consent she requires to enter into a marriage, if she was a minor at the time of the abduction;

b. by the woman, or by her husband, if she was of age at the time of the abduction.

4. If the abductor has entered into a marriage with the abducted woman, conviction shall only take place after the marriage has been declared null and void.

Article 282

1. Any person who intentionally deprives or continues to deprive another person unlawfully of his liberty shall be liable to a term of imprisonment not exceeding eight years or a fine of the fifth category.

2. If the offence results in grievous bodily harm, the offender shall be liable to a term of imprisonment not exceeding nine years or a fine of the fifth category.

3. If the offence results in death, he shall be liable to a term of imprisonment not exceeding twelve years or a fine of the fifth category.

4. The punishments prescribed in this Article shall also apply to a person who intentionally provides a place for the purpose of such unlawful deprivation of liberty.

Article 282a

1. Any person who intentionally deprives or continues to deprive another person unlawfully of his liberty with the intention of compelling him to act or to refrain from certain acts, shall be guilty of hostage-taking and shall be liable to a term of imprisonment not exceeding fifteen years or a fine of the fifth category.

2. If the offence results in death, he shall be liable to life imprisonment or a determinate term of imprisonment not exceeding thirty years or a fine of the fifth category.

3. Article 282(4) shall apply.

Article 282b

1. Any person who intentionally deprives or continues to deprive another person unlawfully of his liberty with terrorist intent shall be liable to life imprisonment or a determinate term of imprisonment not exceeding thirty years or a fine of the fifth category.

2. Article 282(4) shall apply mutatis mutandis.

Article 282c

1. Conspiracy to commit the serious offence defined in Article 282b shall be liable to a term of imprisonment not exceeding ten years or a fine of the fifth category.

2. Article 96(2) shall apply *mutatis mutandis*.

Article 283

1. Any person who, through negligence, causes the unlawful deprivation of liberty of another person or causes its continuance shall be liable to a term of imprisonment not exceeding six months or a fine of the second category.

2. If the offence results in grievous bodily harm, the offender shall be liable to a term of imprisonment not exceeding one year or a fine of the third category.

3. If the offence results in death, he shall be liable to a term of imprisonment not exceeding two years or a fine of the fourth category.

LEY DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL

WETBOEK VAN STRAFVORDERING / CODE OF CRIMINAL PROCEDURE /

(Aplicable desde 01/01/2019) (versión no oficial en lengua inglesa) Enlace al texto en holandés de actualización constante: [Enlace al documento](#)

Al no estar disponible ninguna traducción del La Ley de procedimiento criminal, actualizada a 1-1-2019, se ha trabajado sobre la de 2012 (disponible en la web del *National Rapporteur on Trafficking in Human Beings*: www.dutchrapporteur.nl) y se han incorporado las modificaciones posteriores mediante traducciones realizadas en el propio CEPC.

RESUMEN:

Se han recogido aquellos artículos con alguna medida específica relacionada con víctimas de TSH.

Book Two. Criminal Procedure in the First Instance.

Part I. The Criminal Investigation. Chapter Two. The Public Prosecutors

Article 151da

[...]

2. Cellular material which has been taken under this Code for the establishment and processing of a DNA profile, may be used for establishing kinship. Except for the case referred to in the following sentence, cellular material of a third party may only be taken and used to establish consanguinity with his written consent. In the case of a third party who is a minor and is suspected of being the object of a serious offence as defined in Article 197a, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 248a, 248b, 249, 256, 273f, 278, 287, 289, 290 or 291 of the Criminal Code, cellular material may, in the interest of the investigation, be taken from the third party and used to establish consanguinity by order of the public prosecutor with written authorisation granted by the examining magistrate.

Part III. Investigation by the Examining Magistrate. Chapter Two. The conduct of Investigative Acts by the Examining Magistrate.

Article 195g

[...]

2. Cellular material which has been taken under this Code or another law for the establishment and processing of a DNA profile, may be used for establishing kinship. Except for the case referred to in the following sentence, cellular material of a third party may only be taken and used to establish consanguinity with his written consent. In the case of a third party who is a minor and is suspected of being the object of a serious offence as defined in Article 197a, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 248a, 248b, 249, 256, 273f, 278, 287, 289, 290 or 291 of the Criminal Code, cellular material may, in

the interest of the investigation, be taken from the third party and used to establish consanguinity by order of the examining magistrate.

Book Three. Legal Remedies. Part VIII. Review of Appeal Judgments and Judgments.

Article 481

1. If an application for review or an application for further investigation, as referred to in Article 461, has been submitted, the Public Prosecution Service shall, where possible, ask the victim or his surviving relatives whether he/they wishes/wish to be kept informed about the progress and outcome of the review proceedings.

2. On application of the victim or his surviving relatives, the Public Prosecution Service shall give notice, in any case, of the decision of the Supreme Court on the application for review and of the final judgment in the review case against the former suspect. In appropriate cases and in any case if the offence for which the former suspect was convicted involves a serious offence which carries a statutory term of imprisonment of at least eight years, or any of the serious offences referred to in 181, Articles 240b, 247, 248a, 248b, 249, 250, **273f(1)**, 285, 285b, 300(2) and (3), 301(2) and (3), 306 to 308 inclusive and 318 of the Criminal Code and Article 6 of the Road Traffic Act 1994, the Public Prosecution Service shall, if requested, also notify the release of the former suspect.

Book Four. Some Special Proceedings. Part VIII. Special Provisions pertaining to the Detection of Offences punishable under the Criminal Code

Article 551

1. In the case of suspicion of a criminal offence as defined in Articles 92 to 96 inclusive, 97a to 98c inclusive, 240, 240a, 240b, 248a, 250 and 273f of the Criminal Code, the civil servants referred to in Article 141, shall have the power for the purpose of seizure to request the surrender of all objects liable to seizure, insofar as said request serves to enable confiscation or withdrawal from circulation, and seizure of those objects after surrender. Article 96a(4) shall apply *mutatis mutandis*.

2. They shall have access to all places in which they have reasonable grounds to believe a criminal offence is being committed.

RELATOR NACIONAL SOBRE TRATA DE SERES HUMANOS

Y LEY DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA INFANCIA

WET NATIONAAL RAPPORTEUR MENSENHANDEL EN SEKSUEEL GEWELD TEGEN KINDEREN/NATIONAL RAPPORTEUR ON TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS AND SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN (ESTABLISHMENT) ACT

(Aplicable desde 19/09/2018) (version no oficial en lengua inglesa) Enlace al texto en holandés de actualización constante: [Enlace al documento](#)

Al no estar disponible ninguna traducción de esta Ley actualizada a 19-9-2018, se ha trabajado sobre la de 2012 (disponible en la web del *National Rapporteur on Trafficking in Human Beings*: www.dutchrapporteur.nl) y se han incorporado las modificaciones posteriores mediante traducciones realizadas en el propio CEPC.

TEXTO

The National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children

Article 1

There shall be a National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children.

Article 2

1. The National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children shall be assisted in his work by a bureau. The bureau and the National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children shall together constitute the institution of the National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children.

2. The staff members of the bureau shall be exclusively accountable for their work to the National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children.

3. Staff members of the bureau shall be appointed, promoted and dismissed by Our Minister of Security and Justice acting on a proposal from the National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children.

4. Our Minister of Security and Justice shall, after consultation with the National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children, provide the facilities that the institution of the National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children requires to perform its work.

Article 3

1. The National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children shall be appointed by royal decree on a proposal from our Minister of Security and Justice, after consultation with our Minister of Health, Welfare and Sport. He shall be appointed for a period of not more than four years. Reappointment shall be for a period of not more than four years.

2. The appointment of the National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children shall be terminated at his own request. He may also be suspended and dismissed by royal decree on the grounds of incapacity or incompetence or on other serious grounds.

3. By arrangement of Our Minister of Justice and Security, the legal position of the National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children will be further regulated and rules can be laid down regarding requirements for appointment as National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children.

Article 4

The National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children shall arrange his own working methods and those of the bureau.

Article 5

The duties of the National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children are:

a. to conduct research into developments in the scale and nature of trafficking in human beings and sexual violence against children, as well as the effects of policy measures taken to tackle trafficking in human beings and sexual violence against children;

b. to provide advice to the government on policies to prevent and suppress combating of human beings and sexual violence against children;

c. to report periodically to the government by sending reports relating to trafficking in human beings and to sexual violence against children to our Minister of Security and Justice.

Article 6

The National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children shall perform his tasks independently.

Article 7

1. The reports referred to in Article 5, under c, shall in any case contain:

a. an explanation of the research methods;

b. the results of the research that has been carried out and the conclusions based on that research;

c. recommendations for improvements in policies to prevent and suppress trafficking in human beings and sexual violence against children.

2. The recommendations referred to in the first paragraph, under c, may be addressed to the central government, local authorities and other administrative bodies, to international organisations and non-governmental organisations and to other relevant parties.

3. Our Minister of Security and Justice shall send the reports to the House of Representatives of the States-General for its information.

Article 8

The National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children shall draw up an annual plan each year and submit it to Our Minister of Security and Justice.

Article 9

The institution of the National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children shall be evaluated every four years. A review of whether the tasks of the National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children should be revised shall be conducted on the basis of the evaluation.

Otra legislación relacionada

Se ha realizado una selección de normativa holandesa relacionada o subsidiaria que pudiera ser de aplicación en casos de trata con fines de explotación laboral. No se ha podido revisar el articulado de cara a determinar qué párrafos concretos serían de aplicación en casos de TSH porque no se ha localizado traducciones actualizadas de estas disposiciones (probablemente no existan). Se probó a emplear traductores automáticos, pero, el proceso de traducción resultaba costosísimo.

Si más adelante fuera necesario realizar dicha revisión completa, tendríamos que plantearnos la contratación de un traductor profesional.

Se adjunta link directo a cada disposición (en holandés) y traducción aproximada del título.

LEGISLACIÓN Y DISPOSICIONES RELACIONADAS (TSH EXPLOTACIÓN LABORAL):

- . [Wet arbeid Vreemdelingen](#) (Aplicable desde 1-1-2018) [Ley de derecho laboral o empleo para extranjeros]
- . [Wijzigingswet Wet arbeid vreemdelingen, enz.](#) (Aplicable desde 1-4-2014) [Ley de modificación de la Ley de derecho laboral o empleo para extranjeros]
- . [Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen](#) (Aplicable desde 1-1-2018) [Decreto de implementación de la Ley de derecho laboral o empleo para extranjeros]
- . [Arbeidsomstandighedenwet](#) (Aplicable desde 1-1-2019) [Ley de condiciones de trabajo]
- . [Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014](#) (Aplicable desde 1-4-2014) [Reglamento sobre la aplicación de la Ley de Empleo de Extranjeros 2014; implementa la Directiva 2011/98/UE, sobre el conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro de la UE]
- . [Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag](#) (Aplicable desde 1-1-2019) [Ley de salario mínimo y vacaciones mínimas]
- . [Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen](#) (Aplicable desde 1-1-2005) [Ley de sanciones administrativas para extranjeros]
- . [Algemene wet inzake rijksbelastingen. Artikels 68-69](#) (Aplicable desde 1-1-2019) [Ley general de impuestos gubernamentales. Artículos 68 y 69: delitos por información fiscal o comercial falsa, falta de cooperación tributario, etc.]

Jurisprudencia

A partir de la base de datos nacional de legislación, se sacó un listado de sentencias recientes relacionadas con el art. 273f del Código Penal. Posteriormente, se han buscado dichas sentencias en la base de datos de jurisprudencia Uitspraken y se ha realizado una traducción básica al español empleando un traductor automático.

Pese a las limitaciones de dicha traducción, por lo general, esto ha sido suficiente para comprender los aspectos juzgados en cada sentencia concreta, efectuar una selección de las mismas y redactar un brevísimo resumen de cada una de ellas.

Los números ECLI de cada sentencia seleccionada se han marcado con un hipervínculo que permite navegar directamente al texto de la sentencia (obviamente en holandés).

*Cabe señalar que las últimas modificaciones del *Código Penal* no empezaron a ser aplicables hasta el pasado 01/01/2019, por lo que, en la fecha de preparación de esta publicación aún no hay sentencias construidas a partir del nuevo texto.

[ECLI:NL:PHR:2018:1449](#) - Parket bij de Hoge Raad, 06-11-2018 / 17/02699

[condena por TSH con fines de explotación laboral en el ámbito del trabajo doméstico; agravante: se perpetra sobre una menor de edad; establece que deben usarse como marco de referencia los estándares habituales en la sociedad holandesa. Rechazo del recurso de casación]

[ECLI:NL:RBNNE:2018:5201](#) - Rechtbank Noord-Nederland, 18-12-2018 / 18/830420-12

[condena por TSH con fines de explotación laboral e influencia múltiple en un testigo]

[ECLI:NL:RBDHA:2018:12549](#) - Rechtbank Den Haag, 19-10-2018 / 09/767338-16

[Absolución de TSH con fines de explotación laboral. El tribunal considera que el acusado ha violado una gran cantidad de normas: legislación sobre higiene, condiciones de trabajo, salarios mínimos, cotizaciones, etc., pero que no ha existido TSH. Aunque, se determina la posición vulnerable de las víctimas (falta de conocimiento del idioma, cierto nivel de discapacidad intelectual, etc.), no se considera que se hayan violado los derechos humanos fundamentales porque: no hubo privación de libertad (las víctimas pudieron trabajar para otros empleadores, o bien, tomarse vacaciones cuando quisieron), la jornada laboral era de 9 horas, el salario no llegaba al mínimo legal pero sí suponía más de 50 euros/día. Se comparan estas condiciones de trabajo con las establecidas por otra sentencia de TSH de personas chinas en las que sí hubo TSH y la explotación era claramente superior]

[ECLI:NL:HR:2018:1940](#) - Hoge Raad, 16-10-2018 / 16/04661

[se establece TSH con fines de explotación laboral; el tribunal valora especialmente que el trabajador, cocinero chino, sólo disponía de un cuartucho para dormir y alojarse, así como las largas jornadas de trabajos de duración superior a 12 horas y que no tuviera acceso a su cuenta bancaria; posteriormente se rechaza recurso de casación]

[ECLI:NL:RBNNE:2018:5199](#) - Rechtbank Noord-Nederland, 18-12-2018 / 18/850077-14

[condena por tráfico de drogas pero absolución de TSH; la defensa de uno de los acusados intenta a acogerse al estatus de víctima de TSH para que absuelvan a su defendido]

[ECLI:NL:GHAMS:2018:4082](#) - Gerechtshof Amsterdam, 06-11-2018 / 23-001322-15

[condena por TSH con fines de explotación sexual; el Tribunal se declara competente para juzgar hechos cometidos fuera de Holanda en virtud del art. 2 y siguientes del Código Penal]

[ECLI:NL:RBDHA:2018:13784](#) - Rechtbank Den Haag, 26-11-2018 / 09/767400-17 en 09/767014-18 (gev ttz)

[condena por TSH con fines de explotación sexual; agravante: se perpetra sobre una menor de edad; se absuelve por falta de pruebas en el caso de una explotada adulta]

[ECLI:NL:PHR:2018:1225](#) - Parket bij de Hoge Raad, 06-11-2018 / 17/03087

[condena por TSH con fines de explotación sexual; las víctimas húngaras se trasladan a Holanda a ejercer voluntariamente la prostitución, sin embargo, son engañadas en cuanto a las condiciones de trabajo y, posteriormente son recluidas, extorsionadas y maltratadas; en base a esto se establece la TSH]

[ECLI:NL:RBROT:2018:8790](#) - Rechtbank Rotterdam, 23-10-2018 / 10/750130-16

[Absolución de TSH con fines de explotación sexual; condena por otros delitos. Se determina la posición vulnerable de las víctimas y cierto abuso por la prevalencia del acusado, pero, no se prueba intención de explotación, coacción, ni privación de libertad. Las víctimas se quedaban la mayoría del dinero ganado para sí y, pasado un tiempo tras su llegada al país, se independizan del acusado y sólo recurren a sus servicios como intermediario puntualmente cuando necesitan ayuda para conseguir clientes]

ITALIA

Fuentes de consulta y referencia

Legislación

- Web nacional con códigos actualizados - [Enlace a la página](#)
- Base de datos nacional de legislación - [Enlace a la página](#)

Jurisprudencia

- Base de datos (parcial) de jurisprudencia italiana - [Enlace a la página](#)

Legislación

CÓDIGO PENAL

CODICE PENALE

(Aplicable desde 31/01/2019) (versión oficial en italiano)

[Enlace](#) al texto oficial de actualización constante.

En la base de datos de legislación italiana consta por defecto la versión original del Código Penal de 1930. Todas las modificaciones posteriores del texto se señalan mediante la inclusión de una letra “a” (de *aggiornamento*) a la izquierda del artículo modificado, motivo por el cual es necesario clicar, desplegar las modificaciones y pinchar sobre la última modificación para tener acceso a la versión en vigor del articulado.

RESUMEN:

El artículo 600 y siguientes del *Código Penal* italiano penalizan la TSH.

Han sido modificados recientemente: textos en vigor desde la fecha 6-4-2018; 4-11-2016 en el caso del art. 603 bis sobre explotación laboral.

Se establece una pena “básica” de prisión de entre 8 y 20 años, sin embargo, se fijan numerosos agravantes y condicionantes tanto generales como específicos de cada artículo, lo que hacen que resulte un poco confuso saber qué pena aplicar (ej.: art. 603 bis sobre explotación laboral).

No se ha encontrado ninguna disposición específica sobre **no encausar a las víctimas de TSH**, si bien, se podría aplicar las disposiciones generales de los artículos 46 y 48.

LIBRO PRIMO. DEI REATI IN GENERALE. TITOLO PRIMO. DELLA LEGGE PENALE

Art. 3 (Obbligatorietà della legge penale)

La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale. La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.

Art. 4 (Cittadino italiano. Territorio dello Stato)

Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato. Agli effetti della legge penale, e' territorio dello Stato il territorio del Regno, quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

Art. 6. (Reati commessi nel territorio dello Stato)

Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato e' punito secondo la legge italiana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, e' ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si e' ivi verificato l'evento che e' la conseguenza dell'azione od omissione.

Art. 9 (Delitto comune del cittadino all'estero)

Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e' punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.(5)

Se si tratta di delitto per il quale e' stabilita una pena restrittiva della liberta' personale di minore durata, il colpevole e' punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunita' europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole e' punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

((Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis)).

----- AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 10. (Delitto comune dello straniero all'estero)

Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, e' punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.(5)

Se il delitto e' commesso a danno delle Comunita' europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole e' punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:

1° si trovi nel territorio dello Stato;

2° si tratti di delitto per il quale e' stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;(5)

3° l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

((La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis)).

----- AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 11. (Rinnovamento del giudizio)

Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero e' giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.

Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, e' giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.

TITOLO TERZO. DEL REATO. CAPO I. Del reato consumato e tentato

Art. 46. (Costringimento fisico)

Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.

Art. 48. (Errore determinato dall'altrui inganno)

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato e' determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo.

TITOLO QUINTO. Dei delitti contro l'ordine pubblico

Art. 416. (Associazione per delinquere)

Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'.

Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli **articoli 600, 601 ((, 601-bis)) e 602**, nonche' all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ((nonche' agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91,))si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma. (33) (96) (125) (233)

----- AGGIORNAMENTO (33) La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

----- AGGIORNAMENTO (96) La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto: - (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione; -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

----- AGGIORNAMENTO (125) La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.

----- AGGIORNAMENTO (233) Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: - (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione; - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

CAPO III. Dei delitti contro la liberta' individuale. Sezione 1ª. Dei delitti contro la personalita' individuale PENALE

Art. 600. (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu').

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprieta' ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque ((*al compimento di attivita' illecite*)) che ne comportino lo sfruttamento ((*ovvero a sottoporsi al prelievo di organi*)), e' punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta e' attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione ((di vulnerabilita',)) di inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di necessita', o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorita' sulla persona.

COMMA ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 2010, N. 108. (191) (233)

----- AGGIORNAMENTO (191) La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 11 agosto 2003, n. 228 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che la pena stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

----- AGGIORNAMENTO (233) Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: - (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione; - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

V.a. los artículos 600 bis-600 quinquies → prostitución infantil, pornografía y turismo sexual

Art. 600-octies. ((Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio))

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorita' o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, e' punito con la reclusione fino a tre anni.

((Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto e' punito con la reclusione da uno a tre anni)).

Art. 601. (Tratta di persone).

E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorita' sulla persona, ospita una o piu' persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o piu' persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di vulnerabilita', di inferiorita' fisica, psichica o di necessita', o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attivita' illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalita' di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di eta'.

((La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, e' aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso

di navigazione, alla tratta e' punito, ancorche' non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.))

----- AGGIORNAMENTO (191) La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 11 agosto 2003, n. 228 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che la pena stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

----- AGGIORNAMENTO (233) Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: - (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione; - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 601-bis. (Traffico di organi prelevati da persona vivente).

Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)).

((Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico e' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.))

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaga viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

Art. 602. (Acquisto e alienazione di schiavi).

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 e' punito con la reclusione da otto a venti anni.

COMMA ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 2010, N. 108. (191) ((233))

----- AGGIORNAMENTO (191) La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 11 agosto 2003, n. 228 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che la pena stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

----- AGGIORNAMENTO (233) Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: - (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione; - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 602-ter. (Circostanze aggravanti).

La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 ((primo e secondo comma)) e 602 e' aumentata da un terzo alla meta':

- a) se la persona offesa e' minore degli anni diciotto;
- b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
- c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrita' fisica o psichica della persona offesa.

Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso approfittando della situazione di necessita' del minore.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonche' dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e' commesso in danno di un minore degli anni sedici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche', se il fatto e' commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e' commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e' stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se e' commesso in danno di un minore in stato di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche' dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e' commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se e' commesso nei confronti di tre o piu' persone.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies, la pena e' aumentata.

- a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
- b) se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';
- c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 602-quater. ((*Ignoranza dell'eta' della persona offesa.*))

((Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non puo' invocare a propria scusa l'ignoranza dell'eta' della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile)).

Art. 603. (Plagio) [Plagio civil o esclavitud de facto]⁶ (← *inconstitucional desde 1981*)

Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. ((88))

----- AGGIORNAMENTO (88) La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile - 8 giugno 1981, n. 96 (in G.U. 1^a s.s. 10/6/1981, n. 158), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Art. 603-bis. ((*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.*))]

((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

⁶ En el derecho italiano el *Plagio civil* es la reducción de una persona a un estado de esclavitud o similar "de facto". El código de 1930 distingue entre el delito de esclavitud y servidumbre en el que se ejercen derechos de propiedad sobre la víctima (ver art. 600 y tradición del derecho romano) del delito de "plagio" (art. 603) en el que el estado de sujeción completa en el que se encuentra la víctima, se considera una situación de hecho. Según el informe ministerial al borrador original del Código (No. 703), "entre el culpable y la víctima se establece, en esencia, una relación en la que el primero adquiere sobre el segundo completo dominio y dominación, aniquilando su libertad en su contenido integral, dominando completamente su personalidad".

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro)).

Art. 604. (Fatto commesso all'estero).

Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609- quater ((, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies)), si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano.

In quest'ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

CODICE DI PROCEDURA PENALE (Aplicable desde 31/01/2019) (versión oficial en italiano)

[Enlace](#) al texto oficial de actualización constante

En la base de datos de legislación italiana consta por defecto la versión original del Código de Procedimiento Penal de 1988. Todas las modificaciones posteriores del texto se señalan mediante la inclusión de una letra “a” (de *aggiornamento*) a la izquierda del artículo modificado, motivo por el cual es necesario clicar, desplegar las modificaciones y pinchar sobre la última modificación para tener acceso a la versión en vigor del articulado.

RESUMEN:

Se han recogido aquellos artículos con alguna medida específica relacionada con víctimas de TSH.

Art. 5. Competenza della corte di assise

1. La corte di assise e' competente:

((a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309));

b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 del codice penale;

c) per ogni delitto doloso se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale.

d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni. *((d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonche' per i delitti con finalita' di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni)).* ((176))

----- AGGIORNAMENTO (100) Il D.L. 22 febbraio 1999, n. 29 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 1999, n. 109 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "l'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applica anche ai procedimenti per i delitti di rapina ed estorsione aggravata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise." Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "conservano efficacia gli atti compiuti

e i provvedimenti emessi nei procedimenti indicati nel comma 1, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dal giudice competente a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto."

----- AGGIORNAMENTO (132) La L. 11 agosto 2003, n. 228 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che la modifica al presente articolo si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

----- AGGIORNAMENTO (176) Il D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 2010, n. 52 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le modifiche al presente articolo "si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data del 30 giugno 2010 non sia stata già esercitata l'azione penale."

Art. 51. Uffici del pubblico ministero

- Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale; (90) (90a)

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia. (28)

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere **delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis , 416-ter ((, 452-quaterdecies)) e 630** del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, (...) le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. (132)

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008, N. 92, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 125. (127)

3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. (159)

----- AGGIORNAMENTO (28) Il D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni dalla L. 20 gennaio 1992, n. 8, ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 2, comma 1, lettera b), 3, comma 1, lettera b), 7, 8, 9, 10, comma 1, e 11 hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dall'articolo 15, comma 2".

----- AGGIORNAMENTO (90) Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

----- AGGIORNAMENTO (90a) Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

----- AGGIORNAMENTO (132) La L. 11 agosto 2003, n. 228 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "La disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 6, ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero di giudice dell'udienza preliminare, non si applica ai procedimenti nei quali la notizia di reato e' stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge".

----- AGGIORNAMENTO (134) Il D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438, ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 3) che la modifica al presente articolo "si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione medesima".

----- AGGIORNAMENTO (159) La L. 18 marzo 2008, n. 48, come modificata dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, ha disposto (con l'art. 11, comma 1-bis) che le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 51 del codice di procedura penale si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della L. 48/2008.

Art. 380. Arresto obbligatorio in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

[...]

d) delitto di **riduzione in schiavitù** previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;

d.1) delitti di intermediazione illecita e **sfruttamento del lavoro** previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale;

[...]

Art. 398. Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio

1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilita' o di rigetto e' immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.

2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:

a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;

b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;

c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non puo' intercorrere un termine superiore a dieci giorni.

3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni gia' rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso e' comunicato al pubblico ministero.

3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis.

4. Se si deve procedere a piu' incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.

5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non puo' essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo puo' delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.

5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1, 609-quater e 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e Le modalita' particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza puo' svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio e' anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle parti. (93) (140)

5-ter. Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al comma 5-bis quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilita', desunta anche dal tipo di reato per cui si procede. ((5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 5-ter, **quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilita' si applicano le diposizioni di cui all'articolo 498, comma 4-quater**)).

Art. 407 Termini di durata massima delle indagini preliminari

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo' comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

b) notizie di reato chiedono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese; (108) (123)

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.

((3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello)). ((247))

----- AGGIORNAMENTO (108) Il D.L. 27 settembre 1999, n. 330 convertito, senza modificazioni, dalla L. 23 novembre 1999, n. 438 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di quattro anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale".

----- AGGIORNAMENTO (123) Il D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Nei

procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari e' di cinque anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale".

----- AGGIORNAMENTO (247) La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 36) che "Le disposizioni di cui al comma 30 si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Leyes y otras normas específicas sobre TSH

Se ha realizado una selección de normativa italiana específica sobre TSH o TSH con fines de explotación laboral a partir de la base de datos de legislación nacional.

No se adjunta permalink directo a cada disposición porque no existe (hay que realizar búsqueda manual caso a caso en la base de datos nacional), aunque sí se incluye referencia para su búsqueda en la base de datos de legislación nacional (permite consultar la versión consolidada).

LEGISLACIÓN ESPECÍFICA (TSH Y TSH EXPLOTACIÓN LABORAL):

LEGGE 2 luglio 2010, n. 108

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (10G0131) (GU n. 163 del 15-07-2010)

LEGGE 11 agosto 2003, n. 228

Misure contro la tratta di persone. (GU n. 195 del 23-08-2003)

**Ley de 2003 con modificaciones posteriores de fecha 06-05-2017.*

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 24

Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI. (14G00035) (GU n.60 del 13-03-2014)

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286. **Artículo 18 [artículo sobre víctimas TSH]**

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. (GU n.191 del 18-08-1998 - Suppl. Ordinario n. 139)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2005, n. 237

Regolamento di attuazione dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone. (GU n.270 del 19-11-2005)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2016, n. 234

Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. (16G00248) (GU n.298 del 22-12-2016)

Otra legislación relacionada

Se ha realizado una selección de normativa relacionada o subsidiaria que pudiera ser de aplicación en determinados casos de trata a partir de la base de datos de legislación nacional.

No se adjunta permalink directo a cada disposición porque no existe (hay que realizar búsqueda manual caso a caso en la base de datos nacional), aunque sí se incluye referencia para su búsqueda la base de datos de legislación nacional (permite consultar la versión consolidada).

LEGISLACIÓN Y OTRAS DISPOSICIONES RELACIONADAS EN LAS QUE SE INCLUYE ALGUNA MENCIÓN SOBRE TSH:

a)

LEGGE 27 giugno 2013, n. 77 [Matrimonios forzosos y forzados: art. 32 y art. 37]

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011. (13G00122) (GU n.152 del 01-07-2013)

LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172 [Abuso y/o explotación sexual de menores]

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (12G0192) (GU n.235 del 08-10-2012)

b)

LEGGE 4 dicembre 2017, n. 193

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014. (17G00204) (GU n.297 del 21-12-2017)

LEGGE 6 ottobre 2017, n. 159

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011. (17G00172) (GU n.256 del 02-11-2017)

LEGGE 19 maggio 2017, n. 86

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013. (17G00099) (GU n.138 del 16-06-2017)

LEGGE 21 dicembre 2016, n. 247

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013. (16G00262) (GU n.3 del 04-01-2017)

LEGGE 21 dicembre 2016, n. 246

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012. (16G00256) (GU n.2 del 03-01-2017)

LEGGE 3 novembre 2016, n. 213

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalita', fatto ad Amman il 27 giugno 2011. (16G00226) (GU n.274 del 23-11-2016)

LEGGE 3 novembre 2016, n. 209

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014. (16G00222) (GU n.272 del 21-11-2016)

LEGGE 3 ottobre 2016, n. 192

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalita', fatto a Roma il 9 luglio 2014. (16G00203) (GU n.247 del 21-10-2016)

LEGGE 3 ottobre 2016, n. 186

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. (16G00199) (GU n.243 del 17-10-2016 - Suppl. Ordinario n. 44)

LEGGE 28 luglio 2016, n. 155

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013. (16G00164) (GU n.186 del 10-08-2016)

LEGGE 11 luglio 2016, n. 139

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012. (16G00146) (GU n.171 del 23-07-2016 - Suppl. Ordinario n. 30)

LEGGE 25 maggio 2016, n. 107

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. (16G00114) (GU n.142 del 20-06-2016)

LEGGE 6 aprile 2016, n. 56

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. (16G00067) (GU n.99 del 29-04-2016)

LEGGE 29 settembre 2015, n. 169

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. (15G00178) (GU n.247 del 23-10-2015 - Suppl. Ordinario n. 57)

LEGGE 28 aprile 2015, n. 50

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010. (15G00064) (GU n.102 del 05-05-2015)

LEGGE 12 gennaio 2015, n. 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012. (15G00013) (GU n.23 del 29-01-2015)

LEGGE 1 agosto 2014, n. 113

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010. (14G00127) (GU n.187 del 13-08-2014)

LEGGE 9 dicembre 2013, n. 135

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (13G00179) (GU n.288 del 09-12-2013)

LEGGE 6 agosto 2013, n. 96

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013. (13G00137) (GU n.194 del 20-08-2013)

LEGGE 30 novembre 2012, n. 240

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. (13G00010) (GU n.9 del 11-01-2013)

LEGGE 27 ottobre 2011, n. 197

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica per la seconda volta l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima

volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010. (11G0229) (GU n.274 del 24-11-2011 - Suppl. Ordinario n. 243)

LEGGE 27 ottobre 2011, n. 194

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009. (11G0227) (GU n.273 del 23-11-2011 - Suppl. Ordinario n. 241)

LEGGE 27 ottobre 2011, n. 192

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. (11G0225) (GU n.273 del 23-11-2011 - Suppl. Ordinario n. 241)

LEGGE 13 agosto 2010, n. 151

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. (10G0176) (GU n.213 del 11-09-2010 - Suppl. Ordinario n. 215)

LEGGE 8 giugno 2010, n. 97

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. (10G0116) (GU n.146 del 25-06-2010 - Suppl. Ordinario n. 139)

LEGGE 3 agosto 2009, n. 108

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. (09G0117) (GU n.181 del 06-08-2009)

LEGGE 29 maggio 2009, n. 73

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003. (09G0078) (GU n.143 del 23-06-2009 - Suppl. Ordinario n. 97)

LEGGE 20 marzo 2009, n. 27

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007. (09G0035) (GU n.76 del 01-04-2009)

LEGGE 30 dicembre 2008, n. 218

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004. (09G0006) (GU n.21 del 27-01-2009 - Suppl. Ordinario n. 13)

LEGGE 6 marzo 2006, n. 138

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunita' andina e i suoi Paesi membri, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003. (GU n.80 del 05-04-2006 - Suppl. Ordinario n. 82)

LEGGE 6 marzo 2006, n. 137

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003. (GU n.80 del 05-04-2006 - Suppl. Ordinario n. 82)

LEGGE 20 febbraio 2006, n. 94

Ratifica ed esecuzione del Protocollo elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) che modifica detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2003.(GU n.62 del 15-03-2006 - Suppl. Ordinario n. 61)

LEGGE 25 gennaio 2006, n. 29

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005. (GU n.32 del 08-02-2006 - Suppl. Ordinario n. 34)

LEGGE 9 dicembre 2005, n. 274

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalita' organizzata ed altre forme di criminalita', fatto a Nicosia il 28 giugno 2002. (GU n.2 del 03-01-2006)

LEGGE 29 dicembre 2004, n. 324

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002. (GU n.18 del 24-01-2005 - Suppl. Ordinario n. 7)

LEGGE 29 luglio 2004, n. 221

Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL), che modifica l'articolo 2 e l'Allegato di detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 30 novembre 2000. (GU n.196 del 21-08-2004)

LEGGE 29 luglio 2004, n. 219

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001. (GU n.195 del 20-08-2004 - Suppl. Ordinario n. 145)

LEGGE 30 giugno 2004, n. 187

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002. (GU n.177 del 30-07-2004 - Suppl. Ordinario n. 133)

LEGGE 19 agosto 2003, n. 260

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001. (GU n.215 del 16-09-2003 - Suppl. Ordinario n. 151)

LEGGE 23 marzo 1998, n. 93

Ratifica ed esecuzione della convenzione basata sull'articolo K3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996. (GU n.86 del 14-04-1998 - Suppl. Ordinario n. 69)

DECRETO-LEGGE 10 luglio 2018, n. 84

Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici. (18G00111) (GU n.158 del 10-07-2018)

DECRETO-LEGGE 8 luglio 2015, n. 99

Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. (15G00119) (GU n.156 del 08-07-2015)

DECRETO-LEGGE 1 agosto 2014, n. 109

Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero. (14G00118) (GU n.179 del 04-08-2014)

DECRETO-LEGGE 16 gennaio 2014, n. 2

Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (14G00005) (GU n.12 del 16-01-2014)

DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2013, n. 114

Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (13G00159) (GU n.238 del 10-10-2013)

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2012, n. 227

Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (12G0250) (GU n.301 del 28-12-2012)

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 228

Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia. (10G0257) (GU n.304 del 30-12-2010)

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2010, n. 102

Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. (10G0125) (GU n.156 del 07-07-2010)

DECRETO-LEGGE 1 gennaio 2010, n. 1

Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. (010G0001) (GU n.4 del 07-01-2010)

DECRETO LEGISLATIVO 21 giugno 2017, n. 108

Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale. (17G00120) (GU n.162 del 13-07-2017)

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 75

Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI. (16G00088) (GU n.117 del 20-05-2016)

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 38

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. (16G00046) (GU n.61 del 14-03-2016)

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 36

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare. (16G00044) (GU n.59 del 11-03-2016)

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 35

Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. (16G00043) (GU n.59 del 11-03-2016)

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2015, n. 212

Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. (15G00221) (GU n.3 del 05-01-2016)

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142

Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (15G00158) (GU n.214 del 15-09-2015)

DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2015, n. 137

Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. (15G00152) (GU n.203 del 02-09-2015)

DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 18

Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. (14G00028) (GU n.55 del 07-03-2014)

DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. 25

Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. (GU n.40 del 16-02-2008)

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 251

Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. (GU n.3 del 04-01-2008)

Jurisprudencia

A partir de la base de datos SentenzeWeb, se sacó un listado de sentencias recientes relacionadas con TSH y TSH laboral.

La referencia de cada sentencia seleccionada se ha marcado con un hipervínculo que permite navegar directamente al texto de la sentencia (en italiano)

[Penale Sent. Sez. 4 Num. 5081 Anno 2019](#)

[Rechazo del recurso de casación. Condena inicial en virtud del art. 603bis del Código Penal por participación en asociación criminal destinada a la mediación y explotación ilícitas del trabajo, reclutamiento de mano de obra destinada al trabajo en condiciones de explotación y delitos fiscales variados.]

[Penale Sent. Sez. 4 Num. 1231 Anno 2019](#)

[Rechazo del recurso de casación. Condena inicial en virtud del art. 603bis del Código Penal por participación en explotación laboral de rumanos en el marco del trabajo agrícola con empleo de violencia y amenazas, ritmo de trabajo insostenible, retención de la documentación de las víctimas, etc.]

[Penale Sent. Sez. 1 Num. 24785 Anno 2018](#)

[Rechazo del recurso de casación. Sentencia inicial de condena por participación en una serie indefinida de delitos contra nigerianos y nigerianas (entrada de inmigrantes ilegales; TSH con fines, principalmente de prostitución; reducción y mantenimiento en esclavitud, trato degradante, etc). Rechazo del recurso de casación]

[Penale Sent. Sez. 1 Num. 12879 Anno 2018](#)

[Sentencia inicial de condena por participación de dos acusados en una serie indefinida de delitos (inmigración ilegal; TSH con fines variados; reducción y mantenimiento en esclavitud, trato degradante, etc). Se rechazó el recurso de casación de uno de ellos, sin embargo, se ordena repetir el juicio de apelación del otro.]

[Penale Sent. Sez. 1 Num. 39268 Anno 2017](#)

[Rechazo del recurso de casación. Sentencia inicial de condena por participación en organización criminal con fines de TSH y prostitución con nigerianas.]

[Penale Sent. Sez. 1 Num. 978 Anno 2016](#)

[Rechazo del recurso de casación. Condena inicial por participación en una serie indefinida de delitos contra egipcios (inmigración ilegal; TSH; secuestro con fines de extorsión, etc).

PORTUGAL

Fuentes de consulta y referencia

Legislación

- La fuente principal utilizada es el *Diario de la República portuguesa*: <https://dre.pt/>,
- *El último documento al que se hace referencia en legislación relacionada procede del Boletín Oficial del Estado español*: <https://www.boe.es/>

Jurisprudencia

- Diario de la República portuguesa, apartado jurisprudencia - [enlace a la página](#)
- European e-justice, portal europeo de e-justicia- [enlace a la página](#)

Legislación

CÓDIGO PENAL

Artigo 159.º

Escravidão

Quem:

- a) Reduzir outra pessoa ao estado ou à condição de escravo; ou
- b) Alienar, ceder ou adquirir pessoa ou dela se apossar com a intenção de a manter na situação prevista na alínea anterior; é punido com pena de prisão de 5 a 15 anos.

Artigo 160.º

Tráfico de pessoas

1 - Quem oferecer, entregar, recrutar, aliciar, aceitar, transportar, alojar ou acolher pessoa para fins de exploração, incluindo a exploração sexual, a exploração do trabalho, a mendicidade, a escravidão, a extração de órgãos ou a exploração de outras atividades criminosas:

- a) Por meio de violência, rapto ou ameaça grave;
- b) Através de artil ou manobra fraudulenta;
- c) Com abuso de autoridade resultante de uma relação de dependência hierárquica, económica, de trabalho ou familiar;
- d) Aproveitando-se de incapacidade psíquica ou de situação de especial vulnerabilidade da vítima ou
- e) Mediante a obtenção do consentimento da pessoa que tem o controlo sobre a vítima; é punido com pena de prisão de três a dez anos.

2 - A mesma pena é aplicada a quem, por qualquer meio, recrutar, aliciar, transportar, proceder ao alojamento ou acolhimento de menor, ou o entregar, oferecer ou aceitar, para fins de exploração, incluindo a exploração sexual, a exploração do trabalho, a mendicidade, a escravidão, a extração de órgãos, a adoção ou a exploração de outras atividades criminosas.

3 - No caso previsto no número anterior, se o agente utilizar qualquer dos meios previstos nas alíneas do n.º 1 ou actuar profissionalmente ou com intenção lucrativa, é punido com pena de prisão de três a doze anos.

4 - As penas previstas nos números anteriores são agravadas de um terço, nos seus limites mínimo e máximo, se a conduta neles referida:

- a) Tiver colocado em perigo a vida da vítima;
- b) Tiver sido cometida com especial violência ou tenha causado à vítima danos particularmente graves;
- c) Tiver sido cometida por um funcionário no exercício das suas funções;
- d) Tiver sido cometida no quadro de uma associação criminosa; ou
- e) Tiver como resultado o suicídio da vítima.

5 - Quem, mediante pagamento ou outra contrapartida, oferecer, entregar, solicitar ou aceitar menor, ou obtiver ou prestar consentimento na sua adoção, é punido com pena de prisão de um a cinco anos.

6 - Quem, tendo conhecimento da prática de crime previsto nos n.os 1 e 2, utilizar os serviços ou órgãos da vítima é punido com pena de prisão de um a cinco anos, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal.

7 - Quem retiver, ocultar, danificar ou destruir documentos de identificação ou de viagem de pessoa vítima de crime previsto nos n.os 1 e 2 é punido com pena de prisão até três anos, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal.

8 - O consentimento da vítima dos crimes previstos nos números anteriores não exclui em caso algum a ilicitude do facto.

[Rectificado pelo/a Declaração de Retificação n.º 39/2013 - Diário da República n.º 192/2013, Série I de 2013-10-04, em vigor a partir de 2013-08-28](#)

[Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a Lei n.º 60/2013 - Diário da República n.º 162/2013, Série I de 2013-08-23, em vigor a partir de 2013-08-28](#)

[Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a Lei n.º 59/2007 - Diário da República n.º 170/2007, Série I de 2007-09-04, em vigor a partir de 2007-09-15](#)

[Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Lei n.º 65/98 - Diário da República n.º 202/1998, Série I-A de 1998-09-02, em vigor a partir de 1998-09-07](#)

Código Penal: Livro I. Parte geral / Título I. Da lei criminal /

Capítulo único. Princípios gerais

Artigo 1.º

Princípio da legalidade

1 - Só pode ser punido criminalmente o facto descrito e declarado passível de pena por lei anterior ao momento da sua prática.

2 - A medida de segurança só pode ser aplicada a estados de perigosidade cujos pressupostos estejam fixados em lei anterior ao seu preenchimento.

3 - Não é permitido o recurso à analogia para qualificar um facto como crime, definir um estado de perigosidade ou determinar a pena ou medida de segurança que lhes corresponde.

Artigo 2.º

Aplicação no tempo

1 - As penas e as medidas de segurança são determinadas pela lei vigente no momento da prática do facto ou do preenchimento dos pressupostos de que dependem.

2 - O facto punível segundo a lei vigente no momento da sua prática deixa de o ser se uma lei nova o eliminar do número das infracções; neste caso, e se tiver havido condenação, ainda que transitada em julgado, cessam a execução e os seus efeitos penais.

3 - Quando a lei valer para um determinado período de tempo, continua a ser punível o facto praticado durante esse período.

4 - Quando as disposições penais vigentes no momento da prática do facto punível forem diferentes das estabelecidas em leis posteriores, é sempre aplicado o regime que concretamente se mostrar mais favorável ao agente; se tiver havido condenação, ainda que transitada em julgado, cessam a execução e os seus efeitos penais logo que a parte da pena que se encontrar cumprida atinja o limite máximo da pena prevista na lei posterior.

Alterações

- [Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a Lei n.º 59/2007 - Diário da República n.º 170/2007, Série I de 2007-09-04, em vigor a partir de 2007-09-15](#)

Artigo 3.º

Momento da prática do facto

O facto considera-se praticado no momento em que o agente actuou ou, no caso de omissão, deveria ter actuado, independentemente do momento em que o resultado típico se tenha produzido.

Artigo 4.º

Aplicação no espaço: princípio geral

Salvo tratado ou convenção internacional em contrário, a lei penal portuguesa é aplicável a factos praticados:

- a) Em território português, seja qual for a nacionalidade do agente; ou
- b) A bordo de navios ou aeronaves portuguesas.

Artigo 5.º

Factos praticados fora do território português

1 - Salvo tratado ou convenção internacional em contrário, a lei penal portuguesa é ainda aplicável a factos cometidos fora do território nacional:

- a) Quando constituírem os crimes previstos nos artigos 221.º, 262.º a 271.º, 308.º a 321.º e 325.º a 345.º;
- b) Contra portugueses, por portugueses que viverem habitualmente em Portugal ao tempo da sua prática e aqui forem encontrados.
- c) Quando constituírem os crimes previstos nos artigos 144.º-A, 154.º-B e 154.º-C, 159.º a 161.º, 171.º, 172.º, 175.º, 176.º e 278.º a 280.º, desde que o agente seja encontrado em Portugal e não possa ser extraditado ou entregue em resultado de execução de mandado de detenção europeu ou de outro instrumento de cooperação internacional que vincule o Estado Português;
- d) Quando constituírem os crimes previstos nos artigos 144.º, 163.º e 164.º, sendo a vítima menor, desde que o agente seja encontrado em Portugal e não possa ser extraditado ou entregue em resultado de execução de mandado de detenção europeu ou de outro instrumento de cooperação internacional que vincule o Estado Português;
- e) Por Portugueses, ou por estrangeiros contra Portugueses, sempre que:
 - i) Os agentes forem encontrados em Portugal;

ii) Forem também puníveis pela legislação do lugar em que tiverem sido praticados, salvo quando nesse lugar não se exercer poder punitivo; e

iii) Constituírem crime que admita extradição e esta não possa ser concedida ou seja decidida a não entrega do agente em execução de mandado de detenção europeu ou de outro instrumento de cooperação internacional que vincule o Estado Português;

f) Por estrangeiros que forem encontrados em Portugal e cuja extradição haja sido requerida, quando constituírem crimes que admitam a extradição e esta não possa ser concedida ou seja decidida a não entrega do agente em execução de mandado de detenção europeu ou de outro instrumento de cooperação internacional que vincule o Estado Português;

g) Por pessoa colectiva ou contra pessoa colectiva que tenha sede em território português.

2 - A lei penal portuguesa é ainda aplicável a factos cometidos fora do território nacional que o Estado Português se tenha obrigado a julgar por tratado ou convenção internacional.

Alterações

- [Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Lei n.º 83/2015 - Diário da República n.º 151/2015, Série I de 2015-08-05, em vigor a partir de 2015-09-04](#)
- [Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a Lei n.º 59/2007 - Diário da República n.º 170/2007, Série I de 2007-09-04, em vigor a partir de 2007-09-15](#)
- [Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Lei n.º 31/2004 - Diário da República n.º 171/2004, Série I-A de 2004-07-22, em vigor a partir de 2004-08-21](#)
- [Alterado pelo/a Artigo 10.º do/a Lei n.º 52/2003 - Diário da República n.º 193/2003, Série I-A de 2003-08-22, em vigor a partir de 2003-08-27](#)
- [Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Lei n.º 65/98 - Diário da República n.º 202/1998, Série I-A de 1998-09-02, em vigor a partir de 1998-09-07](#)

Artigo 6.º

Restrições à aplicação da lei portuguesa

1 - A aplicação da lei portuguesa a factos praticados fora do território nacional só tem lugar quando o agente não tiver sido julgado no país da prática do facto ou se houver subtraído ao cumprimento total ou parcial da condenação.

2 - Embora seja aplicável a lei portuguesa, nos termos do número anterior, o facto é julgado segundo a lei do país em que tiver sido praticado sempre que esta seja concretamente mais favorável ao agente. A pena aplicável é convertida naquela que lhe corresponder no sistema português, ou, não havendo correspondência directa, naquela que a lei portuguesa previr para o facto.

3 - O regime do número anterior não se aplica aos crimes previstos nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo anterior.

Alterações

- [Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a Lei n.º 59/2007 - Diário da República n.º 170/2007, Série I de 2007-09-04, em vigor a partir de 2007-09-15](#)

Artigo 7.º

Lugar da prática do facto

1 - O facto considera-se praticado tanto no lugar em que, total ou parcialmente, e sob qualquer forma de participação, o agente actuou, ou, no caso de omissão, devia ter actuado, como naquele em que o resultado típico ou o resultado não compreendido no tipo de crime se tiver produzido.

2 - No caso de tentativa, o facto considera-se igualmente praticado no lugar em que, de acordo com a representação do agente, o resultado se deveria ter produzido.

Alterações

- [Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Lei n.º 65/98 - Diário da República n.º 202/1998, Série I-A de 1998-09-02, em vigor a partir de 1998-09-07](#)

Artigo 8.º

Aplicação subsidiária do Código Penal

As disposições deste diploma são aplicáveis aos factos puníveis pelo direito penal militar e da marinha mercante e pela restante legislação de carácter especial, salvo disposição em contrário.

Artigo 9.º

Disposições especiais para jovens

Aos maiores de 16 anos e menores de 21 são aplicáveis normas fixadas em legislação especial.

Título II. Do facto /Capítulo I. Pressupostos da punição

Artigo 10.º

Comissão por acção e por omissão

1 - Quando um tipo legal de crime compreender um certo resultado, o facto abrange não só a acção adequada a produzi-lo como a omissão da acção adequada a evitá-lo, salvo se outra for a intenção da lei.

2 - A comissão de um resultado por omissão só é punível quando sobre o omitente recair um dever jurídico que pessoalmente o obrigue a evitar esse resultado.

3 - No caso previsto no número anterior, a pena pode ser especialmente atenuada.

Alterações

- [Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Lei n.º 65/98 - Diário da República n.º 202/1998, Série I-A de 1998-09-02, em vigor a partir de 1998-09-07](#)

Artigo 11.º

Responsabilidade das pessoas singulares e colectivas

1 - Salvo o disposto no número seguinte e nos casos especialmente previstos na lei, só as pessoas singulares são susceptíveis de responsabilidade criminal.

2 - As pessoas coletivas e entidades equiparadas, com exceção do Estado, de pessoas coletivas no exercício de prerrogativas de poder público e de organizações de direito internacional público, são responsáveis pelos crimes previstos nos artigos 152.º-A e 152.º-B, nos artigos 159.º e 160.º, nos artigos 163.º a 166.º sendo a vítima menor, e nos artigos 168.º, 169.º, 171.º a 176.º, 217.º a 222.º, 240.º, 256.º, 258.º, 262.º a 283.º, 285.º, 299.º, 335.º, 348.º, 353.º, 363.º, 367.º, 368.º-A e 372.º a 376.º, quando cometidos

a) Em seu nome e no interesse colectivo por pessoas que nelas ocupem uma posição de liderança; ou

b) Por quem aja sob a autoridade das pessoas referidas na alínea anterior em virtude de uma violação dos deveres de vigilância ou controlo que lhes incumbem.

3 - (Revogado).

4 - Entende-se que ocupam uma posição de liderança os órgãos e representantes da pessoa colectiva e quem nela tiver autoridade para exercer o controlo da sua actividade.

5 - Para efeitos de responsabilidade criminal consideram-se entidades equiparadas a pessoas colectivas as sociedades civis e as associações de facto

6 - A responsabilidade das pessoas colectivas e entidades equiparadas é excluída quando o agente tiver actuado contra ordens ou instruções expressas de quem de direito.

7 - A responsabilidade das pessoas colectivas e entidades equiparadas não exclui a responsabilidade individual dos respectivos agentes nem depende da responsabilização destes.

8 - A cisão e a fusão não determinam a extinção da responsabilidade criminal da pessoa colectiva ou entidade equiparada, respondendo pela prática do crime:

a) A pessoa colectiva ou entidade equiparada em que a fusão se tiver efectivado; e

b) As pessoas colectivas ou entidades equiparadas que resultaram da cisão.

9 - Sem prejuízo do direito de regresso, as pessoas que ocupem uma posição de liderança são subsidiariamente responsáveis pelo pagamento das multas e indemnizações em que a pessoa colectiva ou entidade equiparada for condenada, relativamente aos crimes:

a) Praticados no período de exercício do seu cargo, sem a sua oposição expressa;

b) Praticados anteriormente, quando tiver sido por culpa sua que o património da pessoa colectiva ou entidade equiparada se tornou insuficiente para o respectivo pagamento; ou

c) Praticados anteriormente, quando a decisão definitiva de as aplicar tiver sido notificada durante o período de exercício do seu cargo e lhes seja imputável a falta de pagamento.

10 - Sendo várias as pessoas responsáveis nos termos do número anterior, é solidária a sua responsabilidade.

11 - Se as multas ou indemnizações forem aplicadas a uma entidade sem personalidade jurídica, responde por elas o património comum e, na sua falta ou insuficiência, solidariamente, o património de cada um dos associados.

Alterações

- [Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a Lei n.º 30/2015 - Diário da República n.º 78/2015, Série I de 2015-04-22, em vigor a partir de 2015-04-27](#)
- [Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a Lei n.º 60/2013 - Diário da República n.º 162/2013, Série I de 2013-08-23, em vigor a partir de 2013-08-28](#)
- [Rectificado pelo/a Declaração de Retificação n.º 39/2013 - Diário da República n.º 192/2013, Série I de 2013-10-04, em vigor a partir de 2013-08-28](#)
- [Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a Lei n.º 59/2007 - Diário da República n.º 170/2007, Série I de 2007-09-04, em vigor a partir de 2007-09-15](#)

Artigo 12.º

Actuação em nome de outrem

1 - É punível quem age voluntariamente como titular de um órgão de uma pessoa colectiva, sociedade ou mera associação de facto, ou em representação legal ou voluntária de outrem, mesmo quando o respectivo tipo de crime exigir:

- a) Determinados elementos pessoais e estes só se verificarem na pessoa do representado; ou
- b) Que o agente pratique o facto no seu próprio interesse e o representante actue no interesse do representado.

2 - A ineficácia do acto que serve de fundamento à representação não impede a aplicação do disposto no número anterior.

Artigo 13.º

Dolo e negligência

Só é punível o facto praticado com dolo ou, nos casos especialmente previstos na lei, com negligência.

Artigo 14.º

Dolo

1 - Age com dolo quem, representando um facto que preenche um tipo de crime, actuar com intenção de o realizar.

2 - Age ainda com dolo quem representar a realização de um facto que preenche um tipo de crime como consequência necessária da sua conduta.

3 - Quando a realização de um facto que preenche um tipo de crime for representada como consequência possível da conduta, há dolo se o agente actuar conformando-se com aquela realização.

Artigo 15.º

Negligência

Age com negligência quem, por não proceder com o cuidado a que, segundo as circunstâncias, está obrigado e de que é capaz:

- a) Representar como possível a realização de um facto que preenche um tipo de crime mas actuar sem se conformar com essa realização; ou

b) Não chegar sequer a representar a possibilidade de realização do facto.

Artigo 16.º

Erro sobre as circunstâncias do facto

1 - O erro sobre elementos de facto ou de direito de um tipo de crime, ou sobre proibições cujo conhecimento for razoavelmente indispensável para que o agente possa tomar consciência da ilicitude do facto, exclui o dolo.

2 - O preceituado no número anterior abrange o erro sobre um estado de coisas que, a existir, excluiria a ilicitude do facto ou a culpa do agente.

3 - Fica ressalvada a punibilidade da negligência nos termos gerais.

Artigo 17.º

Erro sobre a ilicitude

1 - Age sem culpa quem actuar sem consciência da ilicitude do facto, se o erro lhe não for censurável.

2 - Se o erro lhe for censurável, o agente é punido com a pena aplicável ao crime doloso respectivo, a qual pode ser especialmente atenuada.

Artigo 18.º

Agravação da pena pelo resultado

Quando a pena aplicável a um facto for agravada em função da produção de um resultado, a agravação é sempre condicionada pela possibilidade de imputação desse resultado ao agente pelo menos a título de negligência.

Artigo 19.º

Inimputabilidade em razão da idade

Os menores de 16 anos são inimputáveis.

Artigo 20.º

Inimputabilidade em razão de anomalia psíquica

1 - É inimputável quem, por força de uma anomalia psíquica, for incapaz, no momento da prática do facto, de avaliar a ilicitude deste ou de se determinar de acordo com essa avaliação.

2 - Pode ser declarado inimputável quem, por força de uma anomalia psíquica grave, não acidental e cujos efeitos não domina, sem que por isso possa ser censurado, tiver, no momento da prática do facto, a capacidade para avaliar a ilicitude deste ou para se determinar de acordo com essa avaliação sensivelmente diminuída.

3 - A comprovada incapacidade do agente para ser influenciado pelas penas pode constituir índice da situação prevista no número anterior.

4 - A imputabilidade não é excluída quando a anomalia psíquica tiver sido provocada pelo agente com intenção de praticar o facto.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

Disposições preliminares e gerais

Artigo 1.º

(Definições legais)

1 - Para efeitos do disposto no presente Código considera-se:

- a) Crime: o conjunto de pressupostos de que depende a aplicação ao agente de uma pena ou de uma medida de segurança criminais;
- b) Autoridade judiciária: o juiz, o juiz de instrução e o Ministério Público, cada um relativamente aos actos processuais que cabem na sua competência;
- c) Órgãos de polícia criminal: todas as entidades e agentes policiais a quem caiba levar a cabo quaisquer actos ordenados por uma autoridade judiciária ou determinados por este Código;
- d) Autoridade de polícia criminal: os directores, oficiais, inspectores e subinspectores de polícia e todos os funcionários policiais a quem as leis respectivas reconhecerem aquela qualificação;
- e) Suspeito: toda a pessoa relativamente à qual exista indício de que cometeu ou se prepara para cometer um crime, ou que nele participou ou se prepara para participar;
- f) Alteração substancial dos factos: aquela que tiver por efeito a imputação ao arguido de um crime diverso ou a agravação dos limites máximos das sanções aplicáveis;
- g) Relatório social: informação sobre a inserção familiar e sócio-profissional do arguido e, eventualmente, da vítima, elaborada por serviços de reinserção social, com o objectivo de auxiliar o tribunal ou o juiz no conhecimento da personalidade do arguido, para os efeitos e nos casos previstos neste diploma;
- h) Informação dos serviços de reinserção social: resposta a solicitações concretas sobre a situação pessoal, familiar, escolar, laboral ou social do arguido e, eventualmente, da vítima, elaborada por serviços de reinserção social, com o objectivo referido na alínea anterior, para os efeitos e nos casos previstos neste diploma.
- i) «Terrorismo» as condutas que integram os crimes de organizações terroristas, terrorismo, terrorismo internacional e financiamento do terrorismo;
- j) 'Criminalidade violenta' as condutas que dolosamente se dirigirem contra a vida, a integridade física, a liberdade pessoal, a liberdade e autodeterminação sexual ou a autoridade pública e forem puníveis com pena de prisão de máximo igual ou superior a 5 anos

l) 'Criminalidade especialmente violenta' as condutas previstas na alínea anterior puníveis com pena de prisão de máximo igual ou superior a 8 anos;

m) 'Criminalidade altamente organizada' as condutas que integrem crimes de associação criminosa, tráfico de pessoas, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes ou de substâncias psicotrópicas, corrupção, tráfico de influência, participação económica em negócio ou branqueamento

Alterações

- [Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Lei n.º 58/2015 - Diário da República n.º 120/2015, Série I de 2015-06-23, em vigor a partir de 2015-06-24](#)
- [Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a Lei n.º 26/2010 - Diário da República n.º 168/2010, Série I de 2010-08-30, em vigor a partir de 2010-10-29](#)
- [Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a Lei n.º 48/2007 - Diário da República n.º 166/2007, Série I de 2007-08-29, em vigor a partir de 2007-09-15](#)
- [Alterado pelo/a Artigo 9.º do/a Lei n.º 52/2003 - Diário da República n.º 193/2003, Série I-A de 2003-08-22, em vigor a partir de 2003-08-27](#)
- [Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a Lei n.º 59/98 - Diário da República n.º 195/1998, Série I-A de 1998-08-25, em vigor a partir de 1999-01-01](#)
- [Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a Decreto-Lei n.º 317/95 - Diário da República n.º 275/1995, Série I-A de 1995-11-28, em vigor a partir de 1995-12-03](#)
- [Alterado pelo/a Artigo 8.º do/a Decreto-Lei n.º 212/89 - Diário da República n.º 148/1989, Série I de 1989-06-30, em vigor a partir de 1989-06-12](#)
- [Rectificado pelo/a Declaração - Diário da República n.º 75/1987, 1º Suplemento, Série I de 1987-03-31, em vigor a partir de 1987-02-17](#)

Livro II Dos actos processuais

Título I Disposições gerais

Artigo 87.º

(Assistência do público a actos processuais)

1 - Aos actos processuais declarados públicos pela lei, nomeadamente às audiências, pode assistir qualquer pessoa. Oficiosamente ou a requerimento do Ministério Público, do arguido ou do assistente pode, porém, o juiz decidir, por despacho, restringir a livre assistência do público ou que o acto, ou parte dele, decorra com exclusão da publicidade.

2 - O despacho referido na segunda parte do número anterior deve fundar-se em factos ou circunstâncias concretas que façam presumir que a publicidade causaria grave dano à dignidade das pessoas, à moral pública ou ao normal decurso do acto e deve ser revogado logo que cessarem os motivos que lhe deram causa.

3 - Em caso de processo por crime de tráfico de pessoas ou contra a liberdade e autodeterminação sexual, os actos processuais decorrem, em regra, com exclusão da publicidade.

4 - Decorrendo o acto com exclusão da publicidade, apenas podem assistir as pessoas que nele tiveram de intervir, bem como outras que o juiz admitir por razões atendíveis, nomeadamente de ordem profissional ou científica.

5 - A exclusão da publicidade não abrange, em caso algum, a leitura da sentença.

6 - Não implica restrição ou exclusão da publicidade, para efeito do disposto nos números anteriores, a proibição, pelo juiz, da assistência de menor de 18 anos ou de quem, pelo seu comportamento, puser em causa a dignidade ou a disciplina do acto.

Alterações

- [Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a Lei n.º 48/2007 - Diário da República n.º 166/2007, Série I de 2007-08-29, em vigor a partir de 2007-09-15](#)

Artigo 88.º

(Meios de comunicação social)

1 - É permitida aos órgãos de comunicação social, dentro dos limites da lei, a narração circunstanciada do teor de actos processuais que se não encontrem cobertos por segredo de justiça ou a cujo decurso for permitida a assistência do público em geral.

2 - Não é, porém, autorizada, sob pena de desobediência simples:

a) A reprodução de peças processuais ou de documentos incorporados no processo, até à sentença de 1.ª instância, salvo se tiverem sido obtidos mediante certidão solicitada com menção do fim a que se destina, ou se para tal tiver havido autorização expressa da autoridade judiciária que presidir à fase do processo no momento da publicação;

b) A transmissão ou registo de imagens ou de tomadas de som relativas à prática de qualquer acto processual, nomeadamente da audiência, salvo se a autoridade judiciária referida na alínea anterior, por despacho, a autorizar; não pode, porém, ser autorizada a transmissão ou registo de imagens ou tomada de som relativas a pessoa que a tal se opuser;

c) A publicação, por qualquer meio, da identidade de vítimas de crimes de tráfico de pessoas, contra a liberdade e autodeterminação sexual, a honra ou a reserva da vida privada, excepto se a vítima consentir expressamente na revelação da sua identidade ou se o crime for praticado através de órgão de comunicação social.

3 - Até à decisão sobre a publicidade da audiência não é ainda autorizada, sob pena de desobediência simples, a narração de actos processuais anteriores àquela quando o juiz, oficiosamente ou a requerimento, a tiver proibido com fundamento nos factos ou circunstâncias referidos no n.º 2 do artigo anterior.

4 - Não é permitida, sob pena de desobediência simples, a publicação, por qualquer meio, de conversações ou comunicações interceptadas no âmbito de um processo, salvo se não estiverem sujeitas a segredo de justiça e os intervenientes expressamente consentirem na publicação.

Alterações

- [Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a Lei n.º 48/2007 - Diário da República n.º 166/2007, Série I de 2007-08-29, em vigor a partir de 2007-09-15](#)
- [Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a Lei n.º 59/98 - Diário da República n.º 195/1998, Série I-A de 1998-08-25, em vigor a partir de 1999-01-01](#)

Parte II

Livro VI Das fases preliminares *Título I Disposições gerais*

Capítulo II Dos actos de inquérito

Artigo 271.º

(Declarações para memória futura)

1 - Em caso de doença grave ou de deslocação para o estrangeiro de uma testemunha, que previsivelmente a impeça de ser ouvida em julgamento, bem como nos casos de vítima de crime de tráfico de pessoas ou contra a liberdade e autodeterminação sexual, o juiz de instrução, a requerimento do Ministério Público, do arguido, do assistente ou das partes civis, pode proceder à sua inquirição no decurso do inquérito, a fim de que o depoimento possa, se necessário, ser tomado em conta no julgamento.

2 - No caso de processo por crime contra a liberdade e autodeterminação sexual de menor, procede-se sempre à inquirição do ofendido no decurso do inquérito, desde que a vítima não seja ainda maior.

3 - Ao Ministério Público, ao arguido, ao defensor e aos advogados do assistente e das partes civis são comunicados o dia, a hora e o local da prestação do depoimento para que possam estar presentes, sendo obrigatória a comparência do Ministério Público e do defensor.

4 - Nos casos previstos no n.º 2, a tomada de declarações é realizada em ambiente informal e reservado, com vista a garantir, nomeadamente, a espontaneidade e a sinceridade das respostas, devendo o menor ser assistido no decurso do acto processual por um técnico especialmente habilitado para o seu acompanhamento, previamente designado para o efeito.

5 - A inquirição é feita pelo juiz, podendo em seguida o Ministério Público, os advogados do assistente e das partes civis e o defensor, por esta ordem, formular perguntas adicionais.

6 - É correspondentemente aplicável o disposto nos artigos 352.º, 356.º, 363.º e 364.º

7 - O disposto nos números anteriores é correspondentemente aplicável a declarações do assistente e das partes civis, de peritos e de consultores técnicos e a acareações.

8 - A tomada de declarações nos termos dos números anteriores não prejudica a prestação de depoimento em audiência de julgamento, sempre que ela for possível e não puser em causa a saúde física ou psíquica de pessoa que o deva prestar.

Alterações

- [Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a Lei n.º 48/2007 - Diário da República n.º 166/2007, Série I de 2007-08-29, em vigor a partir de 2007-09-15](#)
- [Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a Lei n.º 59/98 - Diário da República n.º 195/1998, Série I-A de 1998-08-25, em vigor a partir de 1999-01-01](#)

LEGISLAÇÃO RELACIONADA

Lei n.º 60/2013

Publicação: Diário da República n.º 162/2013, Série I de 2013-08-23

SUMÁRIO

Procede à 30.ª alteração ao Código Penal, aprovado pelo [Decreto-Lei n.º 400/82](#), de 23 de setembro, à quarta alteração à [Lei n.º 5/2002](#), de 11 de janeiro, e à primeira alteração às Leis n.º [101/2001](#), de 25 de agosto, e [45/2011](#), de 24 de junho, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º [2011/36/UE](#), do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril, relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas, e que substitui a Decisão Quadro [2002/629/JAI](#), do Conselho

TEXTO

Lei n.º 60/2013, de 23 de agosto

Procede à 30.ª alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, à quarta alteração à Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro, e à primeira alteração às Leis n.º 101/2001, de 25 de agosto, e 45/2011, de 24 de junho, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º [2011/36/UE](#), do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril, relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas, e que substitui a Decisão Quadro [2002/629/JAI](#), do Conselho.

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º

Alteração ao Código Penal

Os artigos 11.º e 160.º do Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, e alterado pela Lei n.º 6/84, de 11 de maio, pelos Decretos-Leis n.os 101-A/88, de 26 de março, 132/93, de 23 de abril, e 48/95, de 15 de março, pelas Leis n.os 90/97, de 30 de julho, 65/98, de 2 de setembro, 7/2000, de 27 de maio, 77/2001, de 13 de julho, 97/2001, 98/2001, 99/2001 e 100/2001, de 25 de agosto, e 108/2001, de 28 de novembro, pelos Decretos-Leis n.os 323/2001, de 17 de dezembro, e 38/2003, de 8 de março, pelas Leis n.os 52/2003, de 22 de agosto, e 100/2003, de 15 de novembro, pelo Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de março, e pelas Leis n.os 11/2004, de 27 de março, 31/2004, de 22 de julho, 5/2006, de 23 de fevereiro, 16/2007, de 17 de abril, 59/2007, de 4 de setembro, 61/2008, de 31 de outubro, 32/2010, de 2 de setembro, 40/2010, de 3 de setembro, 4/2011, de 16 de fevereiro, 56/2011, de 15 de novembro, e 19/2013, de 21 de fevereiro, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 11.º

[...]

1 - ...

2 - As pessoas coletivas e entidades equiparadas, com exceção do Estado, de outras pessoas coletivas públicas e de organizações internacionais de direito público, são responsáveis pelos crimes previstos nos artigos 152.º-A e 152.º-B, nos artigos 159.º e 160.º, nos artigos 163.º a 166.º, sendo a vítima menor, e nos artigos 168.º, 169.º, 171.º a 176.º, 217.º a 222.º, 240.º, 256.º, 258.º, 262.º a 283.º, 285.º, 299.º, 335.º, 348.º, 353.º, 363.º, 367.º, 368.º-A e 372.º a 374.º, quando cometidos:

a) ...

b) ...

3 - ...

4 - ...

5 - ...

6 - ...

7 - ...

8 - ...

9 - ...

10 - ...

11 - ...

Artigo 160.º

[...]

1 - Quem oferecer, entregar, recrutar, aliciar, aceitar, transportar, alojar ou acolher pessoa para fins de exploração, incluindo a exploração sexual, a exploração do trabalho, a mendicidade, a escravidão, a extração de órgãos ou a exploração de outras atividades criminosas:

a) ...

b) ...

c) ...

d) ... ou

e) ...

2 - A mesma pena é aplicada a quem, por qualquer meio, recrutar, aliciar, transportar, proceder ao alojamento ou acolhimento de menor, ou o entregar, oferecer ou aceitar, para fins de exploração, incluindo a exploração sexual, a exploração do trabalho, a mendicidade, a escravidão, a extração de órgãos, a adoção ou a exploração de outras atividades criminosas.

3 - ...

4 - As penas previstas nos números anteriores são agravadas de um terço, nos seus limites mínimo e máximo, se a conduta neles referida:

a) Tiver colocado em perigo a vida da vítima;

b) Tiver sido cometida com especial violência ou tenha causado à vítima danos particularmente graves;

c) Tiver sido cometida por um funcionário no exercício das suas funções;

d) Tiver sido cometida no quadro de uma associação criminosa; ou

e) Tiver como resultado o suicídio da vítima.

5 - (Anterior n.º 4.)

6 - (Anterior n.º 5.)

7 - (Anterior n.º 6.)

8 - O consentimento da vítima dos crimes previstos nos números anteriores não exclui em caso algum a ilicitude do facto.»

Artigo 2.º

Alteração à Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro

O artigo 1.º da Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro, que estabelece medidas de combate à criminalidade organizada e económico-financeira, alterada pela Lei n.º 19/2008, de 21 de abril, e pelos Decretos-Leis n.os 317/2009, de 30 de outubro, e 242/2012, de 7 de novembro, passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 1.º

[...]

1 - ...

a) ...

b) ...

c) ...

d) ...

e) ...

f) ...

g) ...

h) ...

i) ...

j) ...

l) ...

m) Lenocínio e lenocínio de menores;

n) Tráfico de pessoas;

o) [Anterior alínea n).]

2 - O disposto na presente lei só é aplicável aos crimes previstos nas alíneas j) a o) do número anterior se o crime for praticado de forma organizada.

3 - ...»

Artigo 3.º

Alteração à Lei n.º 101/2001, de 25 de agosto

O artigo 2.º da Lei n.º 101/2001, de 25 de agosto, que estabelece o regime jurídico das ações encobertas para fins de prevenção e investigação criminal, passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 2.º

[...]

...

- a) ...
- b) ...
- c) ...
- d) ...
- e) Tráfico de pessoas;
- f) [Anterior alínea e).];
- g) [Anterior alínea f).];
- h) [Anterior alínea g).];
- i) [Anterior alínea h).];
- j) [Anterior alínea i).];
- l) [Anterior alínea j).];
- m) [Anterior alínea l).];
- n) [Anterior alínea m).];
- o) [Anterior alínea n).];
- p) [Anterior alínea o).];
- q) [Anterior alínea p).];
- r) [Anterior alínea q).];
- s) [Anterior alínea r).]»

Artigo 4.º

Alteração à Lei n.º 45/2011, de 24 de junho

O artigo 17.º da Lei n.º 45/2011, de 24 de junho, que cria, na dependência da Polícia Judiciária, o Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA), passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 17.º

[...]

1 - ...

2 - ...

a) ...

b) ...

c) O produto da receita de bens conexos com o crime de tráfico de pessoas, que reverte para a entidade coordenadora do Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos, destinando-se ao apoio de ações, medidas e programas de prevenção do tráfico de pessoas e de assistência e proteção das suas vítimas.»

Aprovada em 24 de julho de 2013.

A Presidente da Assembleia da República, Maria da Assunção A. Esteves.

Promulgada em 14 de agosto de 2013.

Publique-se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendada em 19 de agosto de 2013.

O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

Lei n.º 28/2016

Publicação: Diário da República n.º 161/2016, Série I de 2016-08-23

SUMÁRIO

Combate as formas modernas de trabalho forçado, procedendo à décima primeira alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela [Lei n.º 7/2009](#), de 12 de fevereiro, à quinta alteração ao regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, aprovado pela [Lei n.º 102/2009](#), de 10 de setembro, e à terceira alteração ao regime jurídico do exercício e licenciamento das agências privadas de colocação e das empresas de trabalho temporário, aprovado pelo [Decreto-Lei n.º 260/2009](#), de 25 de setembro

TEXTO

Lei n.º 28/2016, de 23 de agosto

Combate as formas modernas de trabalho forçado, procedendo à décima primeira alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, à quinta alteração ao regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, aprovado pela Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, e à terceira alteração ao regime jurídico do exercício e licenciamento das agências privadas de colocação e das empresas de trabalhotemporário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 260/2009, de 25 de setembro.

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º Objeto

A presente lei procede à alteração do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, do regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, aprovado pela Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, e do regime jurídico do exercício e licenciamento das agências privadas de colocação e das empresas de trabalho temporário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 260/2009, de 25 de setembro.

Artigo 2.º Alterações ao Código do Trabalho

Os artigos 174.º e 551.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, alterado pelas Leis n.os 105/2009, de 14 de setembro, 53/2011, de 14 de outubro, 23/2012, de 25 de junho, 47/2012, de 29 de agosto, 69/2013, de 30 de agosto, 27/2014, de 8 de maio, 55/2014, de 25 de agosto, 28/2015, de 14 de abril, e 120/2015, de 1 de setembro, e 8/2016, de 1 de abril, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 174.º

1 - ...

2 - A empresa de trabalho temporário e o utilizador de trabalho temporário, bem como os respetivos gerentes, administradores ou diretores, assim como as sociedades que com a empresa

de trabalho temporário ou com o utilizador se encontrem em relação de participações recíprocas, de domínio ou de grupo, são subsidiariamente responsáveis pelos créditos do trabalhador e pelos encargos sociais correspondentes, assim como pelo pagamento das respetivas coimas.

Artigo 551.º

- 1 - ...
- 2 - ...
- 3 - ...

4 - O contratante e o dono da obra, empresa ou exploração agrícola, bem como os respetivos gerentes, administradores ou diretores, assim como as sociedades que com o contratante, dono da obra, empresa ou exploração agrícola se encontrem em relação de participações recíprocas, de domínio ou de grupo, são solidariamente responsáveis pelo cumprimento das disposições legais e por eventuais violações cometidas pelo subcontratante que executa todo ou parte do contrato nas instalações daquele ou sob responsabilidade do mesmo, assim como pelo pagamento das respetivas coimas.»

Artigo 3.º Alteração ao regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho

O artigo 16.º do regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, aprovado pela Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, alterada pelas Leis n.os 42/2012, de 28 de agosto, e 3/2014, de 28 de janeiro, pelo Decreto-Lei n.º 88/2015, de 28 de maio, e pela Lei n.º 146/2015, de 9 de setembro, passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 16.º

- 1 - ...
- 2 - ...
- 3 - ...
- 4 - ...

5 - O dono da obra, empresa ou exploração agrícola e a empresa utilizadora ou adjudicatária de obra ou serviço, bem como os respetivos gerentes, administradores ou diretores, assim como as sociedades que com o dono da obra, empresa ou exploração agrícola, empresa utilizadora ou adjudicatária de obra ou serviço se encontrem em relação de participações recíprocas, de domínio ou de grupo, são solidariamente responsáveis pelas violações das disposições legais relativas à segurança e saúde dos trabalhadores temporários, dos que lhe forem cedidos ocasionalmente ou dos trabalhadores ao serviço de empresas prestadoras de serviços, cometidas durante o exercício da atividade nas suas instalações, assim como pelo pagamento das respetivas coimas.»

Artigo 4.º Alteração ao regime jurídico do exercício e **licenciamento** das agências privadas de colocação e das empresas de trabalho temporário

O artigo 13.º do regime jurídico do exercício e licenciamento das agências privadas de colocação e das empresas de trabalho temporário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 260/2009, de 25 de setembro, alterado pelas Leis n.os 5/2014, de 12 de fevereiro, e 146/2015, de 9 de setembro, passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 13.º

- 1 - ...
- 2 - ...
- 3 - ...
- 4 - ...

5 - O utilizador, bem como os respetivos gerentes, administradores ou diretores, assim como as sociedades que com aquele se encontrem em relação de participações recíprocas, de domínio ou de grupo, são solidariamente responsáveis pelo incumprimento, por parte da empresa de trabalho temporário, dos encargos e obrigações legais relativas aos trabalhadores, bem como pelo pagamento das respetivas coimas.»

Artigo 5.º

Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor 30 dias após a data da sua publicação.

Aprovada em 20 de julho de 2016.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Promulgada em 10 de agosto de 2016.

Publique-se.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Referendada em 10 de agosto de 2016.

O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 80/2018

Publicação: Diário da República n.º 116/2018, Série I de 2018-06-19

[Enlace al documento](#)

SUMÁRIO

Aprova o IV Plano de Ação para a Prevenção e o Combate ao Tráfico de Seres Humanos 2018-2021

TEXTOS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 80/2018

O XXI Governo Constitucional reconhece que o flagelo do tráfico de seres humanos assume formas cada vez mais diversificadas, complexas e sofisticadas, o que implica a necessidade de uma orientação estratégica bem definida e conduzida de modo coerente, designadamente através de uma política de segurança coordenada e eficaz, respondendo aos principais riscos e ameaças internas e externas e promovendo uma proteção integrada das vítimas.

Portugal tem sido um dos países na vanguarda do combate ao tráfico de seres humanos. No período temporal de 2007 a 2017, sob a coordenação da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, foram implementados três planos nacionais de prevenção e combate ao tráfico de seres humanos, numa perspetiva de estreita colaboração entre as diversas entidades públicas e as organizações da sociedade civil.

O IV Plano de Ação para a Prevenção e o Combate ao Tráfico de Seres Humanos 2018-2021 (IV PAPCTSH 2018-2021) visa reforçar o conhecimento sobre a temática do tráfico de seres humanos, assegurar às vítimas um melhor acesso aos seus direitos, bem como qualificar a intervenção, e promover a luta contra as redes de crime organizado, nomeadamente desmantelando o modelo de negócio e desmontando a cadeia de tráfico.

O IV PAPCTSH 2018-2021 toma em consideração as recomendações e os compromissos assumidos por Portugal nas várias instâncias internacionais e está alinhado com os Objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável relativos ao tráfico de seres humanos, com os mecanismos de cooperação previstos na Declaração Política da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 27 de setembro de 2017, e com as prioridades específicas para a prevenção do tráfico de seres humanos da Comunicação da Comissão Europeia - Seguimento dado à Estratégia da UE para a erradicação do tráfico de seres humanos e identificação de novas ações concretas {COM(2017) 728 final}, de 4 de dezembro de 2017.

O IV PAPCTSH 2018-2021 incorpora, ainda, as recomendações dirigidas ao Estado Português no âmbito do relatório sobre a implementação da Convenção do Conselho da Europa relativa à Luta contra o Tráfico de Seres Humanos, aprovadas em março de 2017, pelo Comité das Partes.

A construção do IV PAPCTSH 2018-2021 baseou-se numa auscultação ampla dos departamentos governamentais, autarquias, especialistas e organizações da sociedade civil organizada, sob coordenação técnica da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.

Foram também consideradas as recomendações das avaliações do anterior plano nacional.

O IV PAPCTSH 2018-2021 foi submetido a consulta pública.

Assim:

Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:

1 - Aprovar o IV Plano de Ação para a Prevenção e o Combate ao Tráfico de Seres Humanos 2018-2021 (IV PAPCTSH 2018-2021), nos termos que constam do anexo à presente resolução e que dela fazem parte integrante, o qual assenta nos seguintes objetivos estratégicos:

a) Reforçar o conhecimento, e informar e sensibilizar sobre a temática do tráfico de seres humanos (TSH);

b) Assegurar às vítimas de tráfico um melhor acesso aos seus direitos, bem como consolidar, reforçar e qualificar a intervenção;

c) Reforçar a luta contra as redes de crime organizado, nomeadamente desmantelar o modelo de negócio e desmontar a cadeia de tráfico.

2 - Estabelecer que, para alcançar os objetivos estratégicos, são definidos objetivos específicos, medidas, indicadores de produto, metas anuais, entidades responsáveis e envolvidas, e orçamento associado.

3 - Designar a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) como entidade coordenadora do IV PAPCTSH 2018-2021, a ser coadjuvada por uma Comissão Técnica de Acompanhamento, nos seguintes termos:

a) A Comissão Técnica de Acompanhamento do IV PAPCTSH 2018-2021 reúne semestralmente e integra:

i) O membro do Governo responsável pela área da cidadania e da igualdade, que preside;

ii) Presidente da CIG, que substitui o membro do Governo nas suas ausências ou impedimentos;

iii) Relator/a nacional para o tráfico de seres humanos;

iv) Representante de cada gabinete ministerial dos departamentos governamentais responsáveis e ou envolvidos na execução do IV PAPCTSH 2018-2021;

v) Conselheiro/a ministerial de cada departamento governamental responsável e ou envolvido na execução do IV PAPCTSH 2018-2021;

vi) Representante da Secretaria-Geral do Sistema de Segurança Interna;

vii) Representante do Alto Comissariado para as Migrações, I. P.;

viii) Representante da Guarda Nacional Republicana;

ix) Representante da Polícia de Segurança Pública;

x) Representante dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras;

xi) Chefe de equipa do Observatório do Tráfico de Seres Humanos;

- xii) Representante da Polícia Judiciária;
- xiii) Representante do Instituto da Segurança Social, I. P.;
- xiv) Representante da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens;
- xv) Representante da Autoridade para as Condições do Trabalho;
- xvi) Representante da Polícia Marítima;
- xvii) Representante da Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos;
- xviii) Representante do Conselho Superior da Magistratura;
- xix) Representante da Procuradoria-Geral da República;
- xx) Representante da Associação Nacional de Municípios Portugueses;
- xxi) Representante da Associação Nacional de Freguesias;
- xxii) Três representantes de organizações da sociedade civil que compõem a Rede de Apoio e Proteção a Vítimas de Tráfico (RAPVT), escolhidos/as de entre os respetivos membros;

b) Os membros da Comissão Técnica de Acompanhamento não auferem qualquer remuneração, incluindo senhas de presença, nem ajudas de custo;

c) O/a relator/a nacional para o tráfico de seres humanos é designado/a por despacho do membro do Governo responsável pela área da cidadania e da igualdade e não auferem qualquer remuneração, incluindo senhas de presença, nem ajudas de custo.

4 - Determinar que compete à CIG, enquanto entidade coordenadora, designadamente:

- a) Analisar o ponto de partida de cada objetivo, a ter lugar em 2018;
- b) Definir e aprofundar os indicadores de resultado e de impacto, a ter lugar em 2018;
- c) Elaborar anualmente o plano de atividades para execução do IV PAPCTSH 2018-2021, de acordo com as planificações anuais apresentadas por cada departamento governamental;
- d) Orientar e acompanhar as entidades responsáveis pela implementação das medidas, solicitando, sempre que necessário, informações sobre o respetivo processo de execução;
- e) Garantir a monitorização da implementação do IV PAPCTSH 2018-2021, assegurando o funcionamento regular da Comissão Técnica de Acompanhamento;
- f) Elaborar anualmente um relatório intercalar sobre a execução das medidas do IV PAPCTSH 2018-2021, no qual seja feita também a avaliação do cumprimento do plano anual de atividades, a entregar ao membro do Governo responsável pela área da cidadania e da igualdade até 15 de março de cada ano;
- g) Elaborar um relatório final de execução do IV PAPCTSH 2018-2021 até ao final do primeiro trimestre seguinte ao termo da respetiva vigência, dele dando conhecimento ao membro do Governo responsável pela área da cidadania e da igualdade;

h) Promover um momento de avaliação ongoing ou formativa do IV PAPCTSH 2018-2021 no terceiro ano da respetiva vigência;

i) Apresentar ao membro do Governo responsável pela área da cidadania e da igualdade a proposta de revisão do IV PAPCTSH 2018-2021, até seis meses antes do termo da respetiva vigência, com base nos relatórios intercalares e avaliação ongoing ou formativa;

j) Promover uma avaliação final, externa e independente, do IV PAPCTSH 2018-2021 no termo da respetiva vigência.

5 - Determinar que a proposta de revisão a que se refere a alínea i) do número anterior é apresentada pelo membro do Governo responsável pela área da cidadania e da igualdade aos membros de Governo responsáveis pelas áreas que tutelam os organismos com representação na Comissão Técnica de Acompanhamento do IV PAPCTSH 2018-2021, previstos na alínea a) do n.º 3, para aprovação.

6 - Determinar que cabe às entidades identificadas como responsáveis no IV PAPCTSH 2018-2021 desencadear, por sua iniciativa, as diligências necessárias à concretização das medidas pelas quais são responsáveis, nos termos do planeamento anualmente definido e em estreita articulação com a CIG.

7 - Determinar que a assunção de compromissos para a execução das medidas do IV PAPCTSH 2018-2021 depende da existência de fundos disponíveis por parte das entidades públicas competentes.

8 - Determinar que compete aos/às conselheiros/as ministeriais, no âmbito das suas responsabilidades no IV PAPCTSH 2018-2021:

a) Apresentar à CIG, até 31 de janeiro, o relatório de atividades de implementação relativo ao ano anterior e o plano de atividades relativo ao ano seguinte, depois de validados pelo respetivo membro do Governo;

b) Colaborar na monitorização e avaliação da implementação do IV PAPCTSH 2018-2021, designadamente nas reuniões da secção interministerial e nas reuniões plenárias do conselho consultivo da CIG;

c) Apresentar à CIG, até 15 de fevereiro do ano seguinte ao termo da vigência do IV PAPCTSH 2018-2021, o relatório final de execução das medidas da responsabilidade do respetivo departamento governamental.

9 - Determinar que a presente resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Presidência do Conselho de Ministros, 7 de junho de 2018. - O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa.

ANEXO

(a que se refere o n.º 1)

IV Plano de Ação para a Prevenção e o Combate ao Tráfico de Seres Humanos 2018-2021

(IV PAPCTSH 2018-2021)

O tráfico de seres humanos constitui uma grave violação dos direitos humanos e assume-se como um dos principais desafios com que a sociedade moderna se depara. As suas causas estão desde há muito tempo reconhecidas ao nível da comunidade internacional, cujas raízes profundas são a

vulnerabilidade causada pela pobreza, as desigualdades entre homens e mulheres e a violência perpetrada contra as mulheres, as situações de conflito e pós-conflito, a falta de integração social, a falta de oportunidades e de emprego, a falta de acesso à educação e o trabalho infantil, sendo este considerado, juntamente com o tráfico de drogas e o tráfico de armas, um dos mecanismos de criminalidade mais lucrativos da história contemporânea.

Concomitante à exposição a determinadas formas específicas de violência, como a exploração sexual, servidão doméstica e casamentos precoces, infantis e forçados, o tráfico de seres humanos tem afetado desproporcionalmente mais mulheres e raparigas, aliado às situações de maior vulnerabilidade e de discriminação múltipla a que estão sujeitas, desencadeando processos de exploração de natureza variada.

Importa sublinhar a estreita proximidade entre o tráfico de seres humanos e movimentos migratórios, seja migração económica (procura de melhores condições de vida ou de emprego), migração política (por perseguição ideológica, religiosa, identitária ou em fuga de conflitos armados) ou migração climática (abandono de países em desertificação).

Ao longo das últimas décadas, Portugal tem ratificado várias convenções no âmbito do tráfico de seres humanos. Simultaneamente, foram também surgindo várias diretivas europeias que visaram comprometer os Estados Membros a implementar legislação, a nível interno, de combate ao tráfico de seres humanos, nomeadamente:

Diretiva [2004/80/CE](#), de 29 de abril de 2004, relacionada com a indemnização das vítimas de tráfico;

Diretiva [2004/81/CE](#), de 29 de abril de 2004, relativa ao título de residência concedido a nacionais de países terceiros que sejam vítimas de tráfico de pessoas ou objeto de uma ação de auxílio à imigração ilegal e que cooperem com as autoridades competentes;

Diretiva [2004/83/CE](#), de 29 de abril de 2004, que estabelece normas mínimas relativas às condições a preencher por nacionais de países terceiros ou apátridas para poderem beneficiar do estatuto de refugiado ou de pessoa que, por outros motivos, necessite de proteção internacional, bem como relativas ao respetivo estatuto, e relativas ao conteúdo da proteção concedida;

Diretiva [2009/52/CE](#), de 18 de junho de 2009, que estabelece normas mínimas sobre sanções e medidas contra as entidades empregadoras de nacionais de países terceiros em situação irregular;

Diretiva [2011/36/UE](#), de 5 de abril de 2011, relativa à prevenção e combate ao tráfico humano e proteção das vítimas que se centra na defesa dos direitos humanos, ao implementar mecanismos de proteção e assistência às vítimas, para além da prevenção e repressão do crime.

De sublinhar a recente Declaração Política da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 27 de setembro de 2017, sobre a implementação do Plano Global de Ação de Combate ao Tráfico de Pessoas (Resolução 64/293 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 12 de agosto de 2010), na qual é reiterado todo o empenho dos Estados Membros no combate a esta forma de escravatura, promovendo o estabelecimento de novos mecanismos de cooperação internacional que contribuam para uma maior defesa e proteção das vítimas, em especial mulheres, crianças e adolescentes, designadamente:

Recolher dados que permitam uma consolidação do conhecimento do fenómeno, com uma especial atenção às novas formas de recrutamento, nomeadamente através da Internet;

Impedir a aquisição de bens e serviços resultantes do trabalho efetuado por vítimas de tráfico de seres humanos;

Envolver o setor empresarial na implementação de medidas sustentáveis para prevenir e combater o tráfico de pessoas.

Ainda no âmbito das Nações Unidas, importa referir que, em 2015, foi formalmente adotada uma nova Agenda para o Desenvolvimento Sustentável, que integra 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a implementar até 2030, de onde se destaca, na área do tráfico de seres humanos:

ODS 5. Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas: 5.2. Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e raparigas nas esferas pública e privada, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos;

ODS 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo, e o trabalho digno para todos/as: 8.7. Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas, e assegurar a proibição e a eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de crianças-soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas;

ODS 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos/as e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis: 16.2. Acabar com o abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra as crianças.

No âmbito da União Europeia, é importante assinalar a Estratégia da União Europeia para a erradicação do tráfico de seres humanos (2012-2016), a qual tem sido um dos principais instrumentos no desenvolvimento, coordenação e execução da ação da União Europeia neste domínio, designadamente na prevenção e combate ao tráfico de seres humanos e na proteção dos direitos das vítimas, tendo em especial consideração as vulnerabilidades específicas de mulheres e crianças.

Com base na Estratégia referida e nos dois relatórios decorrentes do artigo 23.º da Diretiva [2011/36/UE](#), de 5 de abril de 2011, a Comissão Europeia apresentou uma Comunicação ao Parlamento Europeu e ao Conselho - Seguimento dado à Estratégia da UE para a erradicação do tráfico de seres humanos e identificação de novas ações concretas {COM(2017) 728 final}, de 4 de dezembro de 2017, onde foram identificadas três prioridades específicas na prevenção do tráfico de seres humanos:

Reforçar a luta contra as redes de crime organizado, nomeadamente desmantelando o modelo de negócio e desmontando a cadeia de tráfico;

Assegurar às vítimas de tráfico um melhor acesso aos seus direitos e concretizá-los;

Reforçar uma resposta coordenada e consolidada, tanto dentro como fora da União Europeia.

Além destas três prioridades específicas, foram igualmente apresentadas duas prioridades transversais: alargar e aprofundar o conhecimento deste fenómeno complexo e alocar financiamento para iniciativas e projetos relacionados com o tráfico de seres humanos.

Decorrente dos esforços que se têm vindo a assumir nesta matéria, é de destacar que o exemplo de Portugal foi assinalado no Manual de Boas Práticas na implementação da Convenção do Conselho da Europa relativa à Luta contra o Tráfico de Seres Humanos, publicado pelo Grupo de Peritos sobre a Luta contra o Tráfico de Seres Humanos (GRETA) a 19 de outubro de 2016, no âmbito da celebração do 10.º Dia Europeu contra o Tráfico de Seres Humanos.

Nesse contexto, foi realçado o papel do Observatório do Tráfico de Seres Humanos (OTSH) na recolha e tratamento de dados estatísticos, o qual, através da cooperação com outras entidades

públicas, organizações da sociedade civil e organizações internacionais, recorrendo a uma plataforma de georreferenciação, permite hoje aferir, de forma detalhada, a realidade do tráfico de seres humanos em Portugal.

Foi também sublinhado o papel de Portugal na construção de um sistema de recolha e análise de dados estatísticos sobre esta realidade, harmonizado com todos os países europeus por via do projeto Towards a Pan-European Monitoring System of Trafficking in Human Beings (The Pan-EU Mosy).

Foi ainda assinalado o caso de Portugal relativamente aos cursos de prevenção de tráfico de seres humanos dedicados a agentes de polícia, guardas fronteiriços, magistrados/as, inspetores/as de trabalho, trabalhadores/as sociais e profissionais de saúde, bem como a existência de Equipas Multidisciplinares Especializadas.

Também no relatório do GRETA de março de 2017, aquando da 2.^a Ronda de Avaliação a Portugal sobre a implementação da Convenção do Conselho da Europa relativa à Luta contra o Tráfico de Seres Humanos, foi realçada a existência de uma Rede Nacional de Apoio e Proteção a Vítimas de Tráfico (RAPVT), que congrega entidades públicas e organizações da sociedade civil, assim como a aposta forte na área da formação e no alargamento dos respetivos públicos estratégicos.

A melhoria na identificação e assistência das vítimas por via da atualização do mecanismo de referência nacional, a prioridade clara em equipas multidisciplinares na intervenção sobre esta realidade, assim como a aposta em campanhas de sensibilização de âmbito nacional e regional, são também aspetos valorizados neste relatório.

Em 2016, com a criação da Equipa Multidisciplinar Especializada na região do Algarve, foi garantida a cobertura de todo o território nacional, tendo sido igualmente criada, à semelhança das outras regiões, uma Rede Regional de Apoio e Proteção a Vítimas de Tráfico, a qual agrega entidades públicas e privadas que trabalham nas diversas dimensões do tráfico de seres humanos, imprimindo uma maior eficácia à intervenção, uma vez que atua numa lógica de proximidade.

Na área da saúde importa destacar o modelo de intervenção integrada sobre a violência interpessoal ao longo do ciclo de vida, com a designação de Ação de Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de Vida, que visa privilegiar a intervenção assente na articulação entre serviços e entre profissionais com responsabilidade na prevenção da violência ao longo do ciclo de vida, em particular os/as prestadores/as de cuidados diretos à população, abordando uma área relativa ao tráfico de seres humanos.

De acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna, em 2017 foram sinalizadas 175 presumíveis vítimas de tráfico de seres humanos, 150 registadas em Portugal e 25 cidadãos/ãs portugueses/as no estrangeiro (referenciados em Espanha, França e Costa do Marfim).

O tráfico para fins de exploração laboral corresponde à maior parte das sinalizações, seguido da exploração sexual e da mendicidade, sendo que as vítimas de tráfico de seres humanos para fins laborais são sobretudo exploradas no setor agrícola. Em 2017, os distritos com maior incidência de presumíveis vítimas foram Lisboa, Beja e Porto. Ao mesmo tempo, foram sinalizados 45 menores como presumíveis vítimas de tráfico de seres humanos em Portugal.

De acordo com o Global Trafficking in Persons Report - 2016, da United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), cuja série temporal em análise se reporta ao período de 2012 a 2014, foram identificadas mais de 500 rotas e um total de 63.251 vítimas em 106 países e territórios, incluindo Portugal.

Desagregando por sexo, o mesmo relatório constata que, em média, a nível global, 71 % das vítimas são mulheres e raparigas, e 63 % das pessoas condenadas são homens. Ainda relativamente às vítimas,

o número de homens tem vindo a crescer de forma acentuada, correspondendo a 29 %. De igual modo, tem aumentado o número de mulheres condenadas, correspondendo já à maioria das condenações na Europa Oriental e na Ásia Central (55 %).

O tráfico com vista à exploração sexual é a mais relevante motivação do crime correspondendo a 54 % das vítimas (72 % são mulheres) e cerca de 38 % das vítimas são canalizadas para trabalho forçado (86 % são homens).

Esta realidade assume contornos muito distintos em função das regiões, sendo que é na Europa Ocidental, do Sul e Central que os objetivos sexuais preponderam (66 %), enquanto na Europa Oriental e na Ásia Central, os motivos se prendem mais com trabalhos forçados (64 %).

Ao nível da União Europeia, nos termos do Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre os progressos alcançados na luta contra o tráfico de seres humanos (2016), cuja série temporal em análise se reporta ao período de 2013 a 2014, foram registadas 15.846 vítimas (presumíveis e identificadas), 76 % do sexo feminino e 21 % para fins de exploração sexual.

Este panorama da realidade internacional relativo à severidade do fenómeno do tráfico de seres humanos apela à existência de um quadro normativo nacional e internacional suficientemente amplo e abrangente que permita uma intervenção concertada e estruturada contra um fenómeno transnacional complexo.

O IV PAPCTSH 2018-2021 é estruturado com base nos seguintes Objetivos Estratégicos:

- 1 - Reforçar o conhecimento, e informar e sensibilizar sobre a temática do tráfico de seres humanos.
- 2 - Assegurar às vítimas de tráfico um melhor acesso aos seus direitos, bem como consolidar, reforçar e qualificar a intervenção.
- 3 - Reforçar a luta contra as redes de crime organizado, nomeadamente desmantelar o modelo de negócio e desmontar a cadeia de tráfico.

Otra documentación

INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO SOBRE LA SIMPLIFICACIÓN DE LA EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA, LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA, HECHO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2010.

BOE n. 99 de 26 de abril de 2017

[Enlace al documento](#)

Jurisprudencia

Acórdãos STJ

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça

Processo:

355/15.2T9VFR.P1.S1

Nº Convencional: 3.ª SECÇÃO

Relator: MANUEL AUGUSTO DE MATOS

Descritores: RECURSO PENAL

ESCRAVIDÃO

MEDIDA CONCRETA DA PENA

Data do Acórdão: 18/10/2017

Votação: UNANIMIDADE

Texto Integral: S

Privacidade: 1

Meio Processual: RECURSO PENAL

Decisão: PROVIDO EM PARTE

Área Temática: DIREITO PENAL – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO FACTO / FINALIDADES DAS PENAS E DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA / ESCOLHA E MEDIDA DA PENA / DETERMINAÇÃO DA MEDIDA DA PENA – CRIMES EM ESPECIAL / CRIMES CONTRA AS PESSOAS / CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL / ESCRAVIDÃO.

Doutrina:

- AMÉRICO TAIPA DE CARVALHO, Comentário Conimbricense do Código Penal – Parte Especial, dirigido por JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, Tomo I, Coimbra Editora, p. 423, 425 e 426;

- JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal Português – As Consequências Jurídicas Do Crime, Editorial de Notícias, p. 227 e ss. ; Temas Básicos da Doutrina Penal, Coimbra Editora, 2001, p. 109 e ss ; Direito Penal – Questões fundamentais – A doutrina geral do crime, 1996, p. 121;

- M. MIGUEZ GARCIA e J. M. CASTELA RIO, Código Penal – Parte Geral e Especial, 2015 – 2.ª Edição, Almedina, p. 697;

- MARIA JOÃO ANTUNES, Consequências Jurídicas do Crime, Coimbra Editora, p. 44.

Legislação Nacional:

CÓDIGO PENAL (CP): - ARTIGOS 40.º, N.º 1, 71.º, N.º 2 E 159.º, ALÍNEA B). CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA (CRP): - ARTIGO 18.º, N.º 2.

Referências Internacionais:

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM (DUDH): - ARTIGO 4.º.

CONVENÇÃO EUROPEIA DOS DIREITOS DO HOMEM (CEDH): - ARTIGO 4.º.

Jurisprudência Nacional:

ACÓRDÃOS DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

- DE 15-12-2011, PROCESSO N.º 706/10.6PHLSB.S1;
- DE 03-07-2014, PROCESSO N.º 1081/11.7PAMGR.C1.S1;
- DE 25-07-2014, PROCESSO N.º 1784/03.0PSLSB.L1.S1;
- DE 06-11-2014, PROCESSO N.º 161/05.2JAGRD.C2.S1;
- DE 27-05-2015, PROCESSO N.º 445/12.3PBEVR.E1.S1.

ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO:

- DE 30-01-2013, PROCESSO N.º 123/09.3JAPRT.P1;
- DE 27-11-2013, PROCESSO N.º 322/04.1TAMLG.P1.

Sumário :

I - As exigências de prevenção geral positiva ou de integração são absolutamente salientes num tipo de crime como o de escravidão, em que avulta a agressão de um bem de natureza pessoal de grande ressonância ético-social, como a própria dignidade e personalidade humana.

II - A factualidade provada revela que a menor ofendida viu-se esbulhada de toda a dignidade inerente à pessoa humana, tendo sido tratada durante o tempo em que permaneceu em poder dos arguidos como um objecto. O grau de ilicitude do comportamento dos arguidos é, pois, elevado, sendo merecedor de um forte juízo de censura.

III - Se é indiscutível que a inserção dos arguidos nesse grupo de etnia cigana não pode justificar os actos tão desvaliosos que praticaram na pessoa da menor ofendida, a verdade é que essa situação não pode ser ignorada. Tal como se não pode ignorar o facto de ter sido a própria mãe da menor a entregá-la a terceiros: primeiro a um indivíduo da mesma nacionalidade (romena) residente na Irlanda, com o qual foi forçada a partilhar a cama e a mendigar e furtar; depois aos arguidos nas circunstâncias já descritas.

IV - Este quadro e a demais factualidade apurada revelam uma situação pautada por alguma degradação moral geradora de alguma displicência, lassidão ou afrouxamento na observância dos valores sociais, éticos e normativos vigentes. As exigências de prevenção especial também se fazem sentir no caso, embora não em termos tão prementes como os de que se reportam à prevenção geral, já que os arguidos não têm antecedentes criminais no nosso país. Pelo que tudo ponderado se afigura como adequada a pena de 8 anos de prisão, em lugar da pena de 9 anos e 6 meses de prisão aplicada pelo acórdão da relação recorrido.

Decisão Texto Integral:

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça:

I - RELATÓRIO

1. O Ministério Público deduziu acusação sob a forma de Processo Comum com intervenção de Tribunal Colectivo, contra os arguidos:

A - **AA**, filho de BB e de CC, natural de ..., ..., nascido a 22 de Março de 1978, sem profissão conhecida, residente na Rua ..., n.º ..., 3880 - ..., titular do passaporte com o n.º ..., emitido por ..., ..., actualmente detido no Estabelecimento Prisional ...;

B - **DD**, filha de EE e de FF, natural da ..., nascida a 08 de Maio de 1977, nascida a 05 de Agosto de 1977, sem profissão conhecida, residente na Rua ..., n.º ..., 3880 - ..., titular do passaporte com o n.º 0...1, emitido por ..., ..., actualmente detida no Estabelecimento Prisional ...;

e

C - **GG**, filho de AA e de DD, natural da ..., natural de ..., ..., nascido a 07 de março de 1997, sem profissão conhecida, com última residência conhecida na Rua ..., n.º ..., 3880 - ..., titular do passaporte com o n.º 0...4,

Imputando:

I - Ao arguido AA, nascido a 22 de Marco de 1978, a prática de:

- Um crime de tráfico de pessoas, em co-autoria e na forma consumada, previsto e punível pelo artigo 160.º, n.º 1, alíneas a), c) e d), n.º 3 e n.º 4, alínea b), do Código Penal;
- Um crime de tráfico de pessoas, em co-autoria e na forma consumada, previsto e punível pelo artigo 160.º, n.º 5 do Código Penal;
- Um crime de tráfico de pessoas, em co-autoria e na forma consumada, previsto e punível pelo artigo 160.º, n.º 7 do Código Penal;
- Um crime de uso de documento de identificação alheio, em co-autoria e na forma consumada, previsto e punível pelo artigo 261.º, n.º 1 do Código Penal;
- Um crime de violência doméstica, em co-autoria e na forma consumada, previsto e punível pelo artigo 152.º, n.º 1, alínea d), e n.º 2, n.º 4, n.º 5 e n.º 6 do Código Penal;
- Um crime de escravidão, em co-autoria e na forma consumada, previsto e punível pelo artigo 159.º, alíneas a) e b), do Código Penal;
- Vinte e sete crimes de violação agravados, em co-autoria e na forma consumada, previstos e puníveis pelos artigos 164.º, n.º 1, alínea a), 177.º, n.º 1, alínea b), n.º 7 e n.º 8 do Código Penal;
- Vinte e quatro crimes de violação agravados, em co-autoria e na forma consumada, previstos e puníveis pelos artigos 164.º, n.º 1, alínea a), e 177.º, n.º 1, alínea b), n.º 6 e n.º 8 do Código Penal;
- Um crime de violação agravado, em co-autoria e na forma consumada, previsto e punível pelos artigos 164.º, n.º 1, alínea a), e 177.º, n.º 1, alínea b), n.º 5, n.º 6 e n.º 8 do Código Penal;
- Cinquenta e dois crimes de violação agravados, em co-autoria e na forma consumada, previstos e puníveis pelos artigos 164.º, n.º 1, alínea a), e 177.º, n.º 1, alínea b), n.º 6 e n.º 8 do Código Penal;
- Nove crimes de violação agravados, em co-autoria e na forma consumada, previstos e puníveis pelos artigos 164.º, N.º 1, alínea a), e 177.º, N.º 1, alínea b), n.º 6 e n.º 8 do Código Penal;
- Dezoito crimes de violação agravados, em co-autoria e na forma consumada, previstos e puníveis pelos artigos 164.º, N.º 1, alínea a), e 177.º, N.º 1, alínea b), n.º 6 e n.º 8 do Código Penal;
- Setenta e cinco crimes de violação agravados, em co-autoria e na forma consumada, previstos e puníveis pelos artigos 164.º, N.º 1, alínea a), e 177.º, N.º 1, alínea b), do Código Penal;
- Um crime de falsas declarações, previsto e punível pelo artigo 348.º - A do Código Penal.

II - À arguida DD a prática de:

- Um crime de tráfico de pessoas, em co-autoria e na forma consumada, previsto e punível pelo artigo 160.º, n.º 1, alíneas a), c) e d), n.º 3 e n.º 4, alínea b), do Código Penal;

- Um crime de tráfico de pessoas, em co-autoria e na forma consumada, previsto e punível pelo artigo 160.º, n.º 5 do Código Penal;
- Um crime de tráfico de pessoas, em co-autoria e na forma consumada, previsto e punível pelo artigo 160.º, n.º 7 do Código Penal;
- Um crime de uso de documento de identificação alheio, em co-autoria e na forma consumada, previsto e punível pelo artigo 261.º, n.º 1 do Código Penal;
- Um crime de violência doméstica, em co-autoria e na forma consumada, previsto e punível pelo artigo 152.º, n.º 1, alínea d), e n.º 2, n.º 4, n.º 5 e n.º 6 do Código Penal;
- Um crime de escravidão, em co-autoria e na forma consumada, previsto e punível pelo artigo 159.º, alíneas a) e b), do Código Penal
- Vinte e sete crimes de violação, em co-autoria e na forma consumada, previstos e puníveis pelos artigos 164.º, 11.º 1, alínea a), 177.º, n.º 1, alínea b), n.º 7 e n.º 8 do Código Penal
- Vinte e quatro crimes de violação agravados, em co-autoria e na forma consumada, previstos e puníveis pelos artigos 164.º, n.º 1, alínea a), e 177.º, n.º 1, alínea b), n.º 6 e n.º 8 do Código Penal;
- Um crime de violação agravado, em co-autoria e na forma consumada, previsto e punível pelos artigos 164.º, n.º 1, alínea a), e 177.º, n.º 1, alínea b), n.º 5, n.º 6 e n.º 8 do Código Penal;
- Cinquenta e dois crimes de violação agravados, em co-autoria e na forma consumada, previstos e puníveis pelos artigos 164.º, n.º 1, alínea a), e 177.º, n.º 1, alínea b), n.º 6 e n.º 8 do Código Penal;
- Nove crimes de violação agravados, em co-autoria e na forma consumada, previstos e puníveis pelos artigos 164.º, n.º 1, alínea a), e 177.º, n.º 1, alínea b), n.º 6 e n.º 8 do Código Penal;
- Dezoito crimes de violação agravados, em co-autoria e na forma consumada, previstos e puníveis pelos artigos 164.º, n.º 1, alínea a), e 177.º, n.º 1, alínea b), n.º 6 e n.º 8 do Código Penal;
- Setenta e cinco crimes de violação agravados, em co-autoria e na forma consumada, previstos e puníveis pelos artigos 164.º, n.º 1, alínea a), e 177.º, n.º 1, alínea b), do Código Penal.

III – Ao arguido GG, nascido a 07 de marco de 1997, a prática de:

- Um crime de tráfico de pessoas, em co-autoria e na forma consumada, previsto e punível pelo artigo 160.º, n.º 1, alíneas a), c) e d), n.º 3 e n.º 4, alínea b), do Código Penal;
- Um crime de tráfico de pessoas, em co-autoria e na forma consumada, previsto e punível pelo artigo 160.º, n.º 7 do Código Penal;
- Um crime de uso de documento de identificação alheio, em co-autoria e na forma consumada, previsto e punível pelo artigo 261.º, n.º 1 do Código Penal;
- Um crime de violência doméstica, em autoria material e na forma consumada, previsto e punível pelo artigo 152.º, n.º 1, alínea b), n.º 2, n.º 4, n.º 5 e n.º 6 do Código Penal,
- Um crime de escravidão, em co-autoria e na forma consumada, previsto e punível pelo artigo 159.º, alíneas a) e b), do Código Penal

- Dezoito crimes de violação agravados, em co-autoria e na forma consumada, previstos e puníveis pelos artigos 164.º, n.º 1, alínea a), e 177.º, n.º 1, alínea b), n.º 6 e n.º 8 do Código Penal;

- Setenta e cinco crimes de violação agravados, em co-autoria e na forma consumada, previstos e puníveis pelos artigos 164.º, n.º 1, alínea a), e 177.º, n.º 1, alínea b), do Código Penal.

Ainda em fase de inquérito, a fls.1666 e ss., foi determinada a separação de processos relativamente ao arguido GG, nascido a 7 de Março de 1997, prosseguindo o processo apenas relativamente aos restantes dois arguidos.

Foi proferido despacho que recebeu a acusação, a fls.1677 e ss., nos precisos termos em que foi deduzida.

O Ministério Público ao abrigo do disposto no artigo 82.º - A do Código de Processo Penal, formulou pedido de reparação das vítimas em casos especiais, peticionando a condenação dos arguidos a indemnizar:

- a demandante HH, em montante não inferior a € 500.000,00 (quinhentos mil euros), acrescidos de juros de mora, à taxa legal, desde a citação até efectivo e integral pagamento.

2. Por acórdão de 15 de Julho de 2016, proferido pelo Tribunal de ... – Instância Central – ... Secção Criminal – J..., da Comarca de ..., foi decidido:

A) Condenar o arguido AA:

- Pela prática de um crime de escravidão, em co-autoria e na forma consumada, previsto e punível pelo artigo 159.º, alíneas a) e b), do Código Penal, na pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de prisão.

- Pela prática de um crime de falsas declarações, previsto e punível pelo artigo 348.º - A do Código Penal, na pena de 6 (seis) meses de prisão.

Absolvendo-o da prática de todos os restantes crimes de que vinha acusado.

Em cúmulo jurídico, foi o arguido AA condenado na pena única de de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de prisão.

B) Condenar a arguida DD, pela prática de um crime de escravidão, em co-autoria e na forma consumada, previsto e punível pelo artigo 159.º, alíneas a) e b), do Código Penal, na pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de prisão.

Absolvendo-a da prática de todos os restantes crimes de que vinha acusado.

Foram ainda os arguidos condenados no pagamento da quantia de €75.000,00 à ofendida HH, a título de danos não patrimoniais, acrescidos de juros de mora, à taxa legal, desde a citação até efectivo e integral pagamento.

3. Na sequência de recurso interposto pelo Ministério Público, o Tribunal da Relação do Porto, por acórdão proferido em 08 de Fevereiro de 2017, agravou a pena a ambos os arguidos pela prática do crime de escravidão para 9 anos e 6 meses de prisão e, por força de tal modificação, a pena única do arguido AA, resultante do cúmulo jurídico com a pena de 6 meses que pelo crime de falsas declarações, foi fixada em 9 anos e 9 meses de prisão.

4. Inconformados, os arguidos AA e DD vieram interpor o presente recurso, rematando a respectiva motivação, apresentada em conjunto, com as seguintes conclusões:

«EM CONCLUSÃO

1. Os critérios de escolha e determinação das medidas das penas parcelares e conseqüente pena resultante do cúmulo jurídico não foram, uma vez mais, devidamente ponderados pelo Tribunal recorrido.

2. Os recorrentes são primários;

3. Não olvidando ainda as demais condições especiais dos recorrentes e toda a factualidade dada como assente no acórdão, mas com mais vigor a que ora supra se deixa transcrita e a que resulta expressa nos factos provados – percurso de vida dos arguidos - cremos que as penas parcelares justas adequadas e proporcionais são:

a) Para o arguido **AA**

7 (sete) anos e 6 (seis) meses de prisão pela prática de **um crime de escravidão**, em co-autoria e na forma consumada, p. e p. Pelo Art. 159º al. al. a) e b) do Código Penal;

6 (seis) meses de prisão pela prática de **um crime de falsas declarações**, p. e p. pelo Art. 348º-A do Código Penal;

b) Para a arguida **DD**:

7 (sete) anos e 6 (seis) meses de prisão pela prática de **um crime de escravidão**, em co-autoria e na forma consumada, p. e p. Pelo Art. 159º al. al. a) e b) do Código Penal;

4. Houve pois inadequada interpretação e aplicação do disposto nos Art. 22º., 23º., 131º. e 132º., nsº. 1 e 2 al. h), 40º. e 71º., todos do Código Penal; e, ainda, Art. 32º, nº. 2 da CRP.»

5. Respondeu o Ministério Público, dizendo:

«I - Por acórdão de 15.07.2016, proferido na 1.ª instância, foi decidido:

a) Condenar o arguido AA pela prática, em co-autoria, de um crime de escravidão pp. pelo artr. 159º, als. a) e b) e ainda de um crime de falsas declarações pp. pelo art. 348º-A, ambos do C. Penal, respectivamente, nas penas de prisão de 7 anos e 6 meses e de 6 meses

e,

em cúmulo jurídico de ambas na pena única de 7 anos e 9 meses de prisão;

b) Condenar a arguida DD, pela prática, em co-autoria com aquele, de um crime de escravidão pp. pelo artr. 159º, als. a) e b) do C. Penal, na pena de 7 anos e 6 meses de prisão;

O Ministério Público interpôs recurso dessa decisão que foi julgado parcialmente procedente, por acórdão desta Relação, de 08 de Fevereiro de 2017, pelo qual se agravou a pena a ambos os arguidos pelo crime de escravidão para 9 anos e 6 meses de prisão e, por força de tal modificação, a pena única

do arguido AA, resultante do cúmulo jurídico com a pena de 6 meses que pelo crime de falsas declarações, para 9 anos e 9 meses de prisão.

II - Inconformados com a agravação das penas pelo crime de escravidão e, por consequência da pena única aplicada ao AA, recorrem do acórdão desta Relação com o que visam ambos alcançar a pena de 7 anos e 6 meses de prisão para aquele ilícito e, no caso do AA, também, a pena única de 7 anos e 9 meses de prisão, ou seja, "regressar" às penas a que tinham sido condenados pelo acórdão proferido na 1.^a instância.

Para o efeito, tecem-se considerações genéricas sobre os critérios que devem presidir à medida das penas, não se aduzindo um só argumento que, aplicado ao caso dos autos, fundamente aquele desiderato, a não ser que as penas aplicadas pela Relação são "excessivas e desproporcionadas, tendo em conta todos os factos dados como assentes" e que "os recorrentes são primários".

III - Decorre do já dito que o Tribunal da Relação agravou as penas do crime de escravidão de 7 anos e 6 meses para 9 anos e 6 meses. Tal agravação foi impulsionada pelo recurso do MP, tendo no parecer que então emitimos, apoiado tal pretensão, embora considerando que a pena "justa" por tal crime não deveria ser inferior a 10 anos de prisão, em vez dos pretendidos 12 anos.

Escrevemos então: "Nessa parte, também se apoiam os termos do recurso, nomeadamente a argumentação sobre a gravidade da conduta dos arguidos, as suas consequências, o longo período em que se manteve, a vítima ser uma menor deslocada do seu país [...] para Portugal, obrigada a sofrer sevícias sexuais de que resultou uma filha - quando tinha apenas 14 anos e 9 meses de idade - que lhe foi retirada por acção dos arguidos, a também a furtar e a mendigar, causando-lhe ainda maus tratos físicos e psíquicos e limitações da liberdade, durante mais de 4 anos, no período sensível da formação da sua personalidade, [na adolescência, entre os 13 e 17 anos de idade], propício a fortes traumatismos que, necessariamente, perdurarão por toda a sua vida".

E ainda: "Por outro lado, não pode deixar de se acentuar a desvalorização que os arguidos atribuem a tais condutas, desculpabilizando-se com pretensas tradições e "leis" ciganas, o que revela uma personalidade distorcida que acentua as necessidades da prevenção especial. As necessidades de prevenção geral são também muito prementes, uma vez que este tipo de condutas se vêm tomando cada vez mais frequentes, a que não será alheia a facilidade e a liberdade de circulação de pessoas, nomeadamente, no espaço europeu".

IV - Nada mais se nos oferece dizer, a não ser que o Tribunal da Relação com pertinentes considerações justifica adequadamente a agravação das penas, interpretando e aplicando correctamente os inerentes preceitos legais, mormente, os que se afirmam violados no recurso.

Nestes termos e nos demais que V. Ex's se dignarão suprir, o recurso deve ser julgado totalmente improcedente, por ser de inteira JUSTIÇA».

6. Neste Supremo Tribunal, a Ex.ma Procuradora-Geral Adjunta considerou «nada [ter] a acrescentar ao entendimento defendido pelo Ministério Público (...) no sentido da improcedência do recurso».

7. Cumprido o disposto no artigo 417.º, n.º 2, do Código de Processo Penal, doravante CPP, nada foi dito.

8. Não tendo sido requerida a realização da audiência, o recurso é julgado em conferência – artigo 419.º, n.º 3, alínea c), do CPP.

Colhidos os vistos, e realizada a conferência, cumpre decidir.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Os factos

As instâncias consideraram provados e não provados os seguintes factos:

A – «Os factos provados»

1º HH, nascida no dia 09 de Julho de 1997, em ..., ..., na ..., filha de II, mãe solteira, foi criada por uma sua avó até aos 10 anos de idade.

2º HH, aos 10 anos de idade decidiu, voluntariamente, passar a residir junto da sua progenitora, a qual, pouco tempo depois, acordou com desconhecido, mediante contrapartida económica de montante não apurado, a partida da sua filha menor para a ..., o que aconteceu.

3. HH, enquanto residiu na ..., foi obrigada a partilhar cama com um individuo de identidade desconhecida, de nacionalidade ... e foi, ainda, forçada a mendigar e a furtar para o agregado familiar daquele jovem e foi, também, agredida no seu corpo, um número não concretamente apurado de vezes, por elementos que constituíam aquele agregado.

4º HH, volvido cerca de um ano sobre a sua chegada à ..., face à sua permanente resistência e constantes pedidos para regressar ao seu país de origem, foi devolvida à sua progenitora na ..., local onde permaneceu acamada, durante um número não concretamente apurado de dias, em resultado dos maus tratos físicos infligidos por elementos, não determinados, daquele agregado familiar com quem residiu na

5º Em Abril de 2010, decorridas poucas semanas sobre o regresso de HH da ..., a sua progenitora entregou-a, mais uma vez, ao arguido AA, nascido a 22 de marco de 1978 (doravante, caso nada mais se indique, será a este arguido que se pretenderá referir e não ao seu filho, com o mesmo nome.)

6º À altura, os arguidos tinham os seguintes filhos:

GG, nascido a 07 de marco de 1997

JJ, nascido a 24 de marco de 1998, natural de ..., ..., ..., filho de AA, nascido a 22 de marco de 1978, e de DD;

c. b. KK, nascido a 25 de abril de 1999, natural de ..., filho de AA, nascido a 22 de marco de 1978, e de DD;

d. c. LL, nascido a 09 de Novembro de 2005, natural de ..., ..., ..., filho de AA, nascido a 22 de marco de 1978, e de DD; e e. d. MM, nascido a 14 de marco de 2010, natural de ..., ..., filho de AA, nascido a 22 de marco de 1978, e de DD.

f Para além de NN, nascida em a 19 de Outubro de 1995, que não vivia já com os arguidos.

7º Assim que HH chegou a Portugal e passou a residir juntamente com o agregado familiar dos arguidos, o arguido AA, logo lhe ordenou que entregasse o passaporte e certidão de nascimento.

8º HH entregou o seu passaporte e a sua certidão de nascimento ao arguido AA, não tendo tido mais acesso a tais documentos enquanto foi mantida no seio do agregado familiar dos arguidos.

9º Assim que passou a residir com o agregado familiar dos arguidos, estes mais ordenaram a HH que esta, perante terceiros, deveria tratar os arguidos AA e DD por pais e que deveria, ainda, tratar o arguido GG, nascido a 07 de marco de 1997, e demais elementos do agregado familiar por irmãos, para que não surgissem quaisquer problemas com as autoridades policiais, sob pena de, não o fazendo, a agredirem no corpo, tendo a ofendida HH cumprido com o ordenado pelos arguidos, enquanto residiu com aquele agregado.

10º Os arguidos passaram a transmitir a terceiros que a menor HH era filha de uma relação anterior do arguido AA, nascido a 22 de marco de 1978.

11º Desde o momento em que chegou a Portugal e enquanto residiu com o agregado familiar dos arguidos nunca lhe foi permitido encetar contactos telefónicos com a sua progenitora, II, não obstante ter manifestado, perante estes, tal vontade.

12º Assim que HH passou a residir com o agregado familiar dos arguidos, estes ordenaram-lhe que partilhasse a sua cama com o arguido GG, nascido a 07 de marco de 1997, e mantivesse relações sexuais de cópula completa com este, o que veio a suceder, um número não apurado de vezes, sob pena de ser agredida no seu corpo caso não o fizesse.

13º Desde que HH passou a residir no seio do agregado familiar dos arguidos logo começou, a tratar das crianças que compunham tal agregado familiar e que tinham entre cerca de 1 mês e os 10 anos de idade, acordando às 06h30m da manhã, alimentando-as, lavando-as, levando-as e buscando-as à escola, dormindo com a criança mais nova, MM, de modo a proporcionar-lhe todos os cuidados e acompanhamento necessário durante o dia e durante a noite, lavando à mão toda a roupa do agregado familiar e procedendo à limpeza da casa onde habitavam.

14º Enquanto a menor HH tratava das crianças e procedia às limpezas da habitação onde residiam, a arguida DD por vezes ausentava-se do domicílio comum.

15º Em resultado de uma relação sexual com cópula encetada pelo arguido GG, nascido a 07 de marco de 1997, com HH e por esta não consentida, a menor engravidou.

16º OO, a descendente de HH e do arguido GG, nasceu no dia 17 de Abril do ano de 2012, no Hospital de ..., em ..., e ali foi deixada para a adopção, contra a vontade e sem o consentimento da progenitora, a, então, menor de 16 anos, HH.

17º Querendo garantir que HH se dedicasse, em exclusivo, à educação, à alimentação, ao acompanhamento, à prestação dos cuidados de higiene dos descendentes dos arguidos e para evitar quaisquer complicações advenientes do facto de HH se encontrar em território nacional e, bem assim, para evitar quaisquer constrangimentos subsequentes resultantes do facto de HH se encontrar grávida do arguido GG, nascido a 07 de marco de 1997, os arguidos decidiram identificar a HH como se tratasse de NN, nascida a 19 de Agosto de 1995, filha dos arguidos, e que se encontrava a residir em ... desde, sensivelmente, a chegada de HH a território nacional e fizeram crer, perante terceiros, que esta era a pessoa que teria dado à luz.

18º Tais motivações e, ainda, o facto de pretenderem que o arguido GG, nascido a 07 de marco de 1997, pudesse continuar a ter relações sexuais com HH, sempre que quisesse e sem que daí resultasse qualquer gravidez, os arguidos obrigaram-na a colocar um implante anticoncepcional, denominado "Implanon", sem o seu consentimento e contra a sua vontade.

19º Na execução do plano referido, a arguida DD, no dia 17 de Abril de 2012, pelas 16h30m, dirigindo-se a PP, profissional de saúde em neonatologia, com o número profissional identificativo ..., que se encontrava no exercício dessas funções na unidade de neonatologia de ... do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E., disse-lhe que era a avó materna de OO, que a progenitora da recém-

nascida praticamente não falava português, uma vez que só teria vindo para Portugal quando já se encontrava grávida de dois meses, que o progenitor terá permanecido na ..., pois tinha passado a viver com outra pessoa, e que a progenitora não queria ficar com a criança.

20º Em seguida, DD assinou a documentação que lhe foi entregue, tendo em vista a adopção de OO.

21º Tais factos determinaram a comunicação, elaborada por QQ a 18 de Abril de 2012, a Tribunal, tendo em vista a adopção de OO.

22º Através da actuação referida, os arguidos obrigaram HH a deixar a sua filha junto dos competentes serviços de protecção de menores e a não mais procurar pelo paradeiro da sua descendente, o que conseguiram, e sem que aquela tivesse prestado consentimento prévio para tal.

23º Para além do parto e da colocação de implante anticoncepcional, os arguidos nunca permitiram que HH tivesse qualquer acompanhamento médico pré-natal.

24º A partir de determinado momento, não concretamente apurado, em que a HH passou a residir com o agregado familiar dos arguidos, estes ordenaram-lhe, ainda, que esta mendigasse a terceiros, solicitando quantias monetárias, o que a aquela obedeceu.

25º A partir de determinado momento, não concretamente apurado, em que a HH passou a residir juntamente com o agregado familiar dos arguidos, estes mais ordenaram a HH que se apoderasse de bens em estabelecimentos comerciais, sem a autorização e contra a vontade dos seus proprietários, sob pena de, não cumprindo as ordens, ser agredida no seu corpo, para assim beneficiarem dos produtos do crime e da inimputabilidade desta, designadamente no estabelecimento comercial RR, no estabelecimento comercial SS e no estabelecimento comercial denominado TT, sito na Rua ..., n.º ..., em ..., ..., ..., e pertencente a UU, de onde subtraiu em datas não concretamente determinadas, bens e produtos igualmente não determinados.

26º Esmo após HH ter atingido os 16 anos de idade, os arguidos continuaram a ordenar-lhe que se apoderasse de bens em estabelecimentos comerciais, sem autorização e contra a vontade do seu legítimo proprietário, designadamente, nos estabelecimentos acima identificados.

27º Assim, no dia 07 de agosto de 2014, a hora não concretamente determinada, a arguida DD, exigiu a HH que se deslocasse ao estabelecimento comercial denominado TT, sito na Rua ..., n.º ..., ..., ..., para aí se apoderar, sem o consentimento ou autorização do seu proprietário, de produtos não concretamente apurados.

28º Como HH se recusou, a arguida DD, desferiu-lhe diversas pancadas com um pau nas pernas e, em seguida, colocou-a na rua enquanto lhe dizia que estava proibida de dormir em casa nessa noite.

29º No dia 18 de Dezembro de 2014, a hora não concretamente determinada, porque HH se havia recusado, mais uma vez, a apoderar-se de bens existentes no estabelecimento comercial denominado TT, sito na Rua ..., n.º ..., em ..., ..., ..., e pertencente a UU, a arguida DD, agarrou-a pela cabeça e empurrou-a contra a porta de entrada do domicílio comum, sito na Rua ..., n.º ..., ..., ..., e, em seguida, desferiu-lhe diversas pancadas nas pernas, provocando-lhe:

a. Duas escoriações no crânio, uma, localizada na metade direita da região frontal, com 3 cm por 0,5 cm de maiores dimensões, e outra, localizada na região supraciliar à direita com 3 cm por 0,2 cm de maiores dimensões;

b. Uma equimose de coloração arroxeadada localizada na face lateral e posterior do terço inferior da coxa com 6 cm por 5,5 cm de maiores dimensões.

30° Tais lesões determinaram seis dias para a cura, sem afectação da capacidade de trabalho geral.

Os arguidos continuaram a obrigar HH a dedicar-se, contra a sua vontade, à prática de furtos, à mendicidade, às lides domésticas, à educação, à alimentação, à prestação dos cuidados de higiene dos filhos menores, JJ, KK, LL, MM e VV, entretanto nascido a 21 de Fevereiro de 2014, filho dos arguidos e, bem assim, a ter relações sexuais com cópula e a outros contactos de natureza sexual com o arguido GG, nascido a 07 de março de 1997, sem o seu consentimento e contra a sua vontade, o que conseguiram, até militares da GNR a terem retirado do agregado familiar daqueles, o que aconteceu a 19 de Dezembro de 2014, altura em que por determinação destes, a HH readquiriu o seu passaporte e a sua certidão de nascimento.

32° Durante todo o período que mediou entre a chegada a HH a Portugal até o dia 19 de Dezembro de 2014, os arguidos, de comum acordo, dividindo tarefas entre si, ameaçaram-na e agrediram o corpo desta, provocando-lhe dores e hematomas, ora porque se recusava a furtar, ora porque não adoptava uma conduta em público que os arguidos consideravam apropriada, ora porque não executava as lides domésticas como os arguidos pretendiam, ora porque não cuidava dos menores JJ, KK, LL, MM como os arguidos pretendiam, ora porque se recusava a ter relações sexuais com o arguido GG, nascido a 07 de Março de 1997, utilizando quer as mãos, quer vassouras ou um pau, provocando-lhe, por diversas vezes, dores e hematomas na cara, cabeça, membros inferiores e superiores, o que chegou a acontecer mesmo quando a mesma estava grávida.

33° No dia 19 de Dezembro de 2014, o arguido AA, nascido a 22 de Março de 1978, informou, perante elementos da GNR no exercício das suas funções, no Quartel de ..., no âmbito dos autos registados com o n.º 228/14.6GDOAZ, ser o progenitor de HH, concedendo, desse modo, autorização à Comissão de protecção de Crianças e Jovens de ... para intervir junto de HH.

34° No dia 19 de Dezembro de 2014, o arguido AA, nascido a 22 de Março de 1978, informou a gestora do processo de promoção e protecção registado com o n.º 134/14, que se encontrava no exercício das suas funções, ser o progenitor de HH, para, assim, ser lavrada declaração de consentimento à intervenção da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de ... e, bem assim, para, em auto de declarações, se opor à institucionalização de HH.

35° Os arguidos detinham, no dia 14 de Julho de 2015, no interior do seu domicílio, um taco em madeira, com cerca de 80cm de comprimento, e envolvido numa fita de tecido do tipo gaze branca, que utilizavam para agredir o corpo de HH.

36° Os arguidos agiram de forma livre, voluntária e consciente, em conjugação de esforços e identidade de fins, bem sabendo que transportavam a menor HH da ... para território nacional e que a acolhiam no seu domicílio para a submeterem, sem o seu consentimento e contra a sua vontade, por meio de violência, de ameaça grave contra a sua integridade física, aproveitando-se do facto de a menor não dispor de quaisquer condições económicas e da sua especial vulnerabilidade em razão da idade, a dedicar-se à mendicidade, à prática de furtos, com intenção lucrativa, a zelar e a limpar a casa onde residiam, a lavar à mão toda a roupa pertencente ao agregado familiar dos arguidos e a cozinhar para estes, a cuidar, a todo o tempo, das crianças JJ, KK, LL, MM e VV, a ter relações sexuais com cópula, a contactos de natureza sexual e outros contactos de natureza íntima com o arguido AA, nascido a 22 de Março de 1978, reduzindo-a assim à condição de escrava, privando-a da sua liberdade e autodeterminação.

37° Os arguidos agiram de forma livre, voluntária e consciente, em conjugação de esforços e identidade de fins, dividindo tarefas entre si, bem sabendo que retinham e ocultavam de HH, sem o seu consentimento e contra a sua vontade, o seu passaporte e a sua certidão de nascimento.

38° Os arguidos AA, nascido a 22 de Março de 1978, e DD, de acordo com o plano comum que previamente traçaram, dividindo tarefas entre si, forçaram-na a aceitar a colocação, no seu corpo, de

implante anticoncepcional, obrigando-a a abandonar a sua filha OO e a não mais procurar pelo paradeiro desta, bem sabendo que esta era menor, que com eles coabitava e que se encontrava em situação de manifesta dependência económica e, por isso, especialmente vulnerável quer em razão da idade quer em razão de gravidez quer em razão da manifesta dependência, submetendo-a a um ambiente familiar totalmente disfuncional, sujeitando-a a um tratamento desrespeitoso da sua personalidade e auto estima e, por isso, merecedor de especial e acentuada reprovação.

39° Os arguidos agiram de forma livre, voluntária e consciente, em conjugação de esforços e identidade de fins e identidade de fins, dividindo tarefas entre si, identificando no Hospital a HH como sendo NN, para, assim, poderem garantirem que aquela se dedicasse, em exclusivo, à educação, à alimentação, ao acompanhamento, à prestação dos cuidados de higiene dos descendentes dos arguidos e para evitar quaisquer complicações advenientes do facto de HH se encontrar em território nacional e, bem assim, para evitar quaisquer constrangimentos subsequentes decorrentes do facto de HH se encontrar grávida do suspeito AA em resultado de relação sexual com cópula não consentida.

40° Os arguidos AA, nascido a 22 de Março de 1978; e DD agiram de forma livre, voluntária e consciente, dividindo tarefas entre si na execução do plano comum, com o propósito alcançado de adulterar a posição jurídica familiar de OO, bem sabendo que se declarava, perante os técnicos de saúde que acompanharam o parto de HH que OO era filha de NN e de pai incógnito.

41 ° O arguido AA, nascido a 22 de Março de 1978, agiu de forma livre voluntária e consciente, tendo em vista esconder a verdadeira posição jurídica familiar de HH, bem sabendo que, no dia 19 de Dezembro, no âmbito dos autos registados com os n.os 228/14.6GDOAZ e 134/14, ao declarar ser o progenitor de HH atestava falsamente, aos funcionários, nos exercícios das respectivas funções, sobre a identidade desta e do próprio, para, assim, ser lavrada declaração de consentimento à intervenção da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de ... e, bem assim, para se opor à institucionalização da menor.

42° Os arguidos agiram de forma livre, voluntária e consciente, bem sabendo que as suas condutas são proibidas e puníveis por lei e especialmente censuráveis e merecedoras de extrema reprovação.

43.° Consta do relatório social de AA:

"O processo de crescimento de AA terá ocorrido junto do agregado de origem, pais e seis descendentes, a residirem na ..., de onde são todos naturais. O arguido recorda uma situação económica desfavorecida, assente nos proventos que os pais auferiam da actividade agro-pecuária, que desenvolviam. A dinâmica familiar é sinalizada como afectuosa, alicerçada em laços de coesão entre o núcleo familiar restrito e alargado, na sua maioria a residirem nas imediações, conservando o património sócio-cultural e tradições da etnia cigana.

O arguido não frequentou a escolaridade, projecto totalmente desvalorizado pela família e pelo próprio, em prol do desenvolvimento de tarefas laborais que dessem continuidade ao trabalho executado pelos pais, agro-pecuária e às expectativas segundo as tradições da sua etnia de pertença.

Pelos 15 anos de idade casou, segundo os rituais ciganos, com DD, jovem da mesma idade, pertencente à mesma etnia.

AA encetou em 1996 o processo emigratório para a Europa ocidental, numa fase inicial para ..., país onde permaneceu sozinho cerca de seis meses, dependendo de apoios prestados pelos serviços de segurança social, posteriormente em ..., dois meses em ... e mais tarde em ..., onde esteve durante o período de 5 anos, juntamente com a companheira, enquanto os 4 filhos do casal, nascidos na ..., ficaram entregues aos cuidados dos avós paternos.

Nesta fase da sua vida dedicou-se à actividade laboral no sector da agricultura, na venda de jornais, na recolha de sucata, e na compra e venda de automóveis usados. Decorridos 5 anos, o casal regressou à ..., altura em que, e segundo AA refere, permaneceu em cumprimento de uma pena de 3 anos de prisão, pela prática dum crime de roubo.

Quando restituído à liberdade, regressou a ..., ..., onde esteve mais 5 anos, fazendo-se acompanhar da família constituída, acrescida de mais um elemento que nasceu naquele país, retomando o exercício das mesmas actividades laborais.

AA e família constituída vieram para Portugal, em período não concretamente apurado, mas que terá sido há cerca de 7 anos.

Instalaram-se, inicialmente, no ..., ..., ..., junto doutros seus familiares (pais e irmãos) e em meados de 2013 alteraram o domicílio para a ..., justificada com a melhoria das condições habitacionais.

Em território nacional nascerem os dois filhos mais novos do arguido, actualmente com 6 e 2 anos de idade.

À data dos factos pelos quais vem acusado nos presentes autos, AA mantinha vivência em comum com a família constituída (9 elementos), a residirem na Rua ..., ..., Fracção A,

Ocupavam um apartamento arrendado no r/ch, duma moradia unifamiliar, com adequadas condições de habitabilidade e conforto, localizada em zona periférica da cidade de ..., zona sem problemas sociais ou marginais de relevo.

O grupo familiar viveu sempre de apoios sociais, designadamente de rendimento social de inserção (534€), ao que acresce o abono atribuído aos menores (234€) e os rendimentos variáveis resultantes da compra e venda de automóveis usados, actividade não declarada, mas desenvolvida pelo arguido. Estes rendimentos, segundo refere, seriam suficientes para propiciar a satisfação das necessidades da sua família.

O arguido nega que algum elemento da sua família, incluindo a ofendida HH, a quem apelida de "filha", se dedicasse à mendicidade, pese embora no meio comunitário esta seja referenciada por se dedicar àquela actividade, situação que não era atribuída aos demais elementos da família.

AA procura exaltar as características do grupo familiar constituído e a sua dinâmica, não só por conservarem as tradições da sua etnia de pertença, tais como os valores de coesão e solidariedade, a maneira de viver herdada dos ancestrais e passada de geração em geração, cabendo à companheira cuidar das tarefas do lar e ensinar essas tarefas à filha e, numa fase mais recente, à ofendida nos presentes autos, sempre sob o escrutínio e controlo daquela, como também pelos laços afectivos que existiam entre todos os elementos que pertenciam ao grupo.

Seguindo as mesmas tradições, segundo o arguido, coube a ele acertar o casamento do filho e co-arguido GG, com a ofendida HH, formalizado em ... através duma festa segundo as tradições ciganas, alegando desconhecimento das leis em vigor no território nacional, relativamente ao casamento entre menores, procurando legitimar este comportamento.

Segundo ainda o arguido, o comando da família pertence de forma completa e responsável ao homem, cabendo à mulher e aos filhos inteira subordinação.

Ao nível social/comunitário, esta família registava reduzida participação/interacção social, apesar de frequentarem cafés e estabelecimentos comerciais na localidade. AA há 2/3 anos frequentava com regularidade uma oficina de reparação automóvel, em S. ..., propriedade de XX, co-proprietário da

habitação onde a família actualmente reside, local onde o arguido efectuava reparações nos carros que comprava e que mais tarde vendia.

Após o despoletar do processo n.º 228/14.6GDOAZ, apenso aos presentes autos, e da retirada da ofendida do agregado familiar, e as consequentes críticas por parte de alguns vizinhos, conhecedores de alguns dos factos constantes da presente acusação, AA e restante família constituída saíram de ... fixando residência, em Janeiro de 2015, na Rua, n.º, ... - ..., habitação de tipologia 4, arrendada por €21 O mensais na qual permanecem actualmente os filhos do arguido.

A habitação dispõe de um pátio vedado onde existe um quarto independente, actualmente ocupado pelo agregado familiar do irmão do arguido. O imóvel está inserido num meio de características rurais, sem problemáticas sociais dignas de registo.

A família actualmente não recebe qualquer prestação social. Os filhos mais velhos estarão aparentemente, em situação ilegal em Portugal, o que dificulta a inscrição no IEFP/inscrição no mercado de trabalho. O rendimento social de inserção social ficou suspenso após a detenção do arguido e da companheira, uma vez que AA era o titular dessa prestação social. Na altura foi encontrada uma alternativa, tendo sido solicitado apoio familiar através dos processos instaurados referentes aos menores na CPCJ de ..., recebendo a quantia de 500€ (100€ por menor), apoio que cessou em Fevereiro de 2016, por questões burocráticas.

As despesas familiares correntes têm sido, alegadamente, asseguradas através do negócio de venda de automóveis por via Internet, que o irmão e o companheiro da filha mais velha do arguido, ZZ têm desenvolvido, actividade que não é perceptível junto da comunidade de inserção. Já receberam apoio monetário do avô paterno que terá remetido da ... 1000€.

Segundo refere o senhorio do imóvel onde a família do arguido reside, têm sido pontuais no pagamento da renda de casa, não sendo conhecidas práticas desviantes por parte dos elementos que compõem esta família, nomeadamente o recurso à mendicidade.

A imagem social deste grupo familiar, no actual meio residencial, está associada á inactividade laboral, registando uma inscrição isenta de reparos. Assumem uma atitude colaborante com os serviços públicos, sobretudo quando está em causa o eventual benefício de apoios sociais.

Em liberdade, o arguido perspectiva o seu regresso ao agregado constituído, e recuperar o negócio de compra e venda de automóveis usados, ou mesmo iniciar a actividade na reparação automóvel.

AA cumpre no Estabelecimento Prisional ... desde o dia 15-07-2015, medida de coacção de prisão preventiva à ordem do presente processo, acusado da prática, em co-autoria com a companheira, dos crimes de tráfico de pessoas, escravidão, de violência doméstica, e de violação agravados.

Após a reclusão de AA e da sua companheira foram instaurados processos aos filhos mais novos do casal, na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de ..., processos ainda activos. Os menores estão entregues aos cuidados da filha mais velha do arguido, NN, de 20 anos de idade, que veio de ... onde vivia, movida por esse objectivo."

Nada consta do seu registo criminal.

Consta do relatório social da DD:

"De nacionalidade ... e pertencente à etnia cigana, DD nunca frequentou um estabelecimento de ensino na ... pelo facto da escolarização não ter sido valorizada pelo agregado familiar. A sua infância foi passada em casa, ocupando-se de ajudar a família nas lides domésticas.

A arguida casou-se, segundo a tradição do seu grupo étnico, aos quinze anos de idade com AA, nascido a 22.03.1978, co-arguido nos presentes autos. Dessa união conjugal nasceram sete filhos, quatro na ..., um em ... e dois deles em território português. O casal viveu também em ..., ... - os filhos terão permanecido numa primeira fase com os avós na Após cinco anos a trabalhar no sector da agricultura e na recolha de sucata, o casal regressou ao país de origem, onde o companheiro já cumprira pena de prisão.

Decorrido um segundo período de permanência em território ... e já na companhia dos filhos, o agregado emigrou para Portugal, há cerca de sete anos aproximadamente - DD possui cartão de residência permanente com o na 4... e válido até 11.08.2024. Instalaram-se inicialmente no local do ..., em ..., ..., onde possuíam outros familiares. Para o efeito, arrendaram uma casa pelo valor de 200€ e aí permaneceram até meados de 2013, quando então mudaram-se para a Esta mudança foi justificada com a intenção de melhorar as condições habitacionais.

Na localidade de ..., ..., o agregado arrendou o rés-do-chão de uma moradia unifamiliar com adequadas condições de habitabilidade, localizada na zona periférica da cidade, onde não são visíveis problemas de ordem social de relevo.

A arguida refere nunca ter trabalhado e negou também o recurso a outros meios de subsistência, como, por exemplo, a prática da mendicidade. O agregado familiar beneficiava da atribuição do rendimento social de inserção (RS!) no valor de 534€, no âmbito do qual DD frequentou um curso de português, e do abono família - 234€. O companheiro dedicar-se-ia à venda de automóveis, situação que não foi passível de confirmação, uma vez que se trataria de uma actividade não declarada.

o agregado familiar registava reduzida participação social, frequentava estabelecimentos comerciais da localidade, como o supermercado e cafés, não sendo assinalados problemas de interacção na comunidade.

Aquando dos factos contidos na acusação, o agregado familiar era constituído por 9 elementos:

AA, companheiro; DD, GG, filho, D.N.: 07.03.1997, inactivo; JJ, filho, D.N.: 24.03.1998; KK, filho, D.N.: 25.04.1999; LL, filho, D.N.: 09.11.2005; MM, filho, D.N.: 14.03.2010; VV, filho, D.N.: 21.02.2014; HH, vítima.

Aquando da elaboração dos relatórios sociais no âmbito da jurisdição tutelar educativa, referentes a dois dos filhos da arguida a ofendida, HH, foi identificada enquanto filha apenas de AA, companheiro da arguida. Contudo, DD e demais familiares referem que HH integrou o agregado familiar em 2011, sendo a mesma companheira do filho GG e não filha do co-arguido com o mesmo nome. Da relação entre HH e GG (filho) resultou o nascimento de um filho que terá sido entregue para a adopção. Segundo DD, é tradição dentro do seu grupo étnico que as parceiras(os) dos filhos(as) sejam também chamadas por filhas(os), cabendo a esses(as) elementos o mesmo tratamento dado aos descendentes directos.

Após o despoletar do processo nº 228/14.6GDOAZ, apenso aos presentes autos, e da retirada da alegada vítima do agregado familiar, os arguidos decidiram sair de ..., tendo a imagem da família sido afectada pelo incidente e alvo de críticas decorrente da conduta do casal. Ao contrário das informações facultadas pela arguida, HH dedicava-se à prática da mendicidade. Após ter sido acolhida no Lar ..., foi colocada noutra instituição uma vez que estava a ser alvo de pressão por parte da família da arguida.

Em Jan./15, o agregado fixou residência na Rua ..., nº ... - ... - Arrendaram uma casa no valor de 210€, composta por quatro quartos, cozinha e wc, onde se mantêm a residir os filhos de DD. Os menores frequentam a escola ou o infantário, os demais elementos não estão empregados. Aparentemente, os filhos mais velhos estarão em situação ilegal em Portugal, o que dificulta a

inscrição no IEFP ou na inserção no mercado de trabalho. A habitação dispõe ainda de um pátio vedado e existe um outro compartimento independente, actualmente ocupado pelo agregado familiar do irmão do companheiro da arguida, AAA, desempregado, respectiva companheira e filho menor do casal. A habitação localiza-se num meio com características rurais e dispõe de infra-estruturas adequadas.

No meio de inserção, a imagem social do agregado está associada à inactividade profissional.

Assumem atitude colaborante com os serviços da acção social sobretudo nos casos em que está em avaliação a atribuição de apoios sociais.

Segundo informações da PSP, o agregado familiar não está referenciado a situações ilícitas, não existindo queixas ou participações na actualidade.

DD deu entrada no EPFSCB em 16.07.15 à ordem dos presentes autos. Após a reclusão de DD e do companheiro, AA, foram instaurados processos na CPCJ de ... sobre todos os filhos menores do casal, os quais estão confiados à filha NN, 19 anos, proveniente de ... e que integrou o agregado familiar com o objectivo de cuidar dos irmãos. Assim, actualmente fazem parte do agregado, para além de NN, o seu companheiro, a filha de ambos e os filhos da arguida anteriormente identificados, com excepção do filho GG que terá regressado a

A atribuição do RSI foi cessada, uma vez que AA era o titular do processo.

Na altura, foi encontrada uma alternativa, tendo sido disponibilizado à família um apoio de 100E por cada menor, no total de 500E, no âmbito da decisão da CPCJ. Contudo, este apoio cessou em Fevereiro do ano em curso por questões burocráticas. Assim, desde então, o agregado familiar não beneficia de qualquer prestação pecuniária. Segundo os elementos do agregado, as despesas correntes, como água, luz, renda da habitação, etc., estarão a ser pagas com valores que ZZ e AAA terão obtido com a venda de viaturas através da internet e venda de sucata. Acrescentam que o avô paterno dos menores terá remetido da ... 1000€ para ajudar nas despesas.

Em meio prisional, DD assume comportamento adequado e investe o tempo numa ocupação laboral e na frequência escolar. Mensalmente, são-lhe depositados na conta afecta ao estabelecimento prisional valores por volta de 40E provenientes de transferências bancárias e os quais são utilizados para a aquisição de produtos de uso pessoal. A arguida manifestou preocupação face à situação processual por receio de um desfecho desfavorável."

46.º Nada consta do seu registo criminal.

B - Factos não provados:

Não se provaram quaisquer outros factos que estejam em oposição com os dados como provados, tendo optado ainda por se ter expurgado a douda acusação pública de manifestas repetições ou redundâncias.

1 - Para além disso não se provou que HH tenha sido entregue aos arguidos, mediante o pagamento de quantia monetária, no valor de €.: 1.000,00 (mil euros)

2 - Que os contactos telefónicos encetados com II eram realizados unicamente pelo arguido AA, nascido a 22 de Março de 1978, que lhe transmitia que estava tudo bem com HH.

3 - Que em resultado da actuação concertada dos arguidos, AA e DD, e do denunciado, GG, mediante o plano delineado, conseguiram, no dia 18 de Abril de 2012, falsear o assento de nascimento n.º 4..., do ano de 2012, de OO, filha de HH e do arguido GG, nascido a 07 de Março de 1997, fazendo constar falsamente em tal documento que a registanda é filha de NN e de pai desconhecido.

4 - Que os arguidos nunca permitiram que a ofendida beneficiasse de qualquer acompanhamento médico quando esteve grávida.

5 - Que em Dezembro de 2014, nas imediações do estabelecimento comercial, denominado Café ..., o suspeito AA, de comum acordo com os demais arguidos, agarrou os cabelos de HH e, com toda a sua força muscular, arremessou a cabeça desta contra uma porta de ferro ali existente, enquanto lhe ordenava que regressasse a casa para, assim, se dedicar às tarefas domésticas a que estava obrigada.

6 - Em ato contínuo, o suspeito, de comum acordo com os demais arguidos, desferiu-lhe murros e pontapés no percurso até ao domicílio comum, provocando lesões e hematomas na zona da cabeça e das pernas de HH, ocasionando a necessidade de receber tratamento hospitalar.

7 - Que os arguidos AA, nascido a 22 de Março de 1978, e DD conseguiram alcançar o seu propósito inicial, fazendo com que o competente oficial público elaborasse termo de assento de nascimento n.º 4... do ano de 2012.»

2. Objecto do recurso

Perante as conclusões formuladas pelos recorrentes, a única questão que suscitam respeita à medida da pena parcelar aplicada pela prática do crime de escravidão, pugnando pela fixação de uma pena de 7 anos e 6 meses de prisão para cada um deles pela prática de tal delito.

3. O Crime de escravidão

O artigo 159.º do Código Penal consagra o tipo de crime de escravidão, descrevendo-o com a seguinte formulação:

«Quem:

a) Reduzir outra pessoa ao estado ou à condição de escravo; ou

b) Alienar, ceder ou adquirir pessoa ou dela se apossar com a intenção de a manter na situação prevista na alínea anterior;

é punido com pena de prisão de 5 a 15 anos.»

Em conformidade com a imposição que decorre do artigo 8.º da Constituição da República, a interpretação e aplicação daquele preceito incriminador, devem ser feitas à luz de importantes textos de direito internacional convencional que vinculam Portugal.

Desde logo, a Convenção sobre a escravatura, concluída em Genebra, em 1926 e a Convenção suplementar relativa à abolição da escravatura, do tráfico de escravos e das instituições e práticas análogas à escravatura, concluída igualmente em Genebra no ano de 1956.

De acordo com o artigo 1.º da primeira Convenção,

«A escravatura é o estado ou condição de um indivíduo sobre o qual se exerce todos ou quaisquer atributos do direito de propriedade.»

A Convenção suplementar de 1956 indica várias práticas tidas como análogas à escravidão, onde inclui, no artigo 1.º, a servidão por dívidas e a servidão da gleba, a alienação ou aquisição, a qualquer título, do direito de disposição total sobre mulher ou menor, condutas que se subsumem à descrição constante da alínea b) do artigo 159.º do Código Penal.

A Declaração Universal dos Direitos do Homem proclama no seu artigo 4º que:

«Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos.»

E a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, estabelece no seu artigo 4.º que :

«1 – Ninguém pode ser mantido em escravatura ou servidão.

2 – Ninguém pode ser constrangido a realizar um trabalho forçado ou obrigatório.».

Com igual mensagem normativa, dispõe o artigo 8.º do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos que:

«1. Ninguém será submetido à escravidão; a escravidão e o tráfico de escravos, sob todas as suas formas, são interditos.

2. Ninguém será mantido em servidão. 3. Ninguém será constrangido a realizar trabalho forçado ou obrigatório.».

O bem jurídico protegido pela incriminação é a *dignidade da pessoa humana*.

Como assinala AMÉRICO TAIPA DE CARVALHO, «[a] autonomia e especificidade deste tipo de crime [escravidão] passa pela recondução do bem jurídico tutelado à **dignidade ou personalidade humana individual** (...), enquanto *prius* ontológico relativamente não só às várias liberdades humanas mas também a todas as outras dimensões desta dignidade ou personalidade fundamentante (como, p. ex., a honorabilidade, a privacidade, a patrimonialidade). Reconduzir o bem jurídico tutelado exclusivamente à liberdade equivaleria a esvaziar de conteúdo prático este tipo de crime, atribuindo-lhe mesmo uma função simbólica, pois que as diversas manifestações da liberdade humana (liberdade de decisão, de ação, de movimento, sexual, religiosa, política, etc.) já estão previstas e tuteladas pelos diversos tipos de crime contra as liberdades»^[1].

Para M. MIGUEZ GARCIA e J. M. CASTELA RIO, trata-se de um *crime complexo* por excelência, no sentido de que implica a aniquilação do conjunto de bens jurídicos inerentes à vida de uma pessoa numa sociedade democrática contemporânea: a integridade física, a liberdade pessoal, no mais amplo sentido da palavra, a liberdade e autodeterminação sexual, a honra, a reserva da vida privada e o direito à propriedade e ao património de outra pessoa^[2].

Elemento essencial e suficiente da caracterização de uma conduta como escravidão é que uma pessoa seja em si mesma tratada como uma coisa de que o agente dispõe como sua propriedade.

Segundo AMÉRICO TAIPA DE CARVALHO, não basta que uma pessoa seja instrumentalizada como meio para a realização de um determinado fim, como a exploração económica, para haver escravidão. Exige-se a redução da vítima à categoria de objecto, de coisa, sobre a qual o agente exerce um poder fáctico de disposição^[3].

Como se afirma no acórdão deste Supremo Tribunal de 06-11-2014 (Proc. n.º 161/05.2JAGR.D.C2.S1 – 5.ª Secção)^[4], subscrevendo considerações tecidas no acórdão do Tribunal da Relação do Porto de

27-11-2013 (Proc. n.º 322/04.1TAMLG.P1), constituem traços característicos da escravidão: o trabalho forçado ou obrigatório, mediante a prática ou ameaça de qualquer tipo de castigo, ainda que *ab initio* o trabalho resulte de burla relativa a promessa de trabalho e emprego; o exercício de um direito de propriedade sobre a pessoa escravizada por parte de outrem, recorrendo a castigos ou a ameaças da sua prática; a desumanização; e a limitação da liberdade de movimentos.

Em concordância com o que se consigna no acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 30-01-2013 (Proc. n.º 123/09.3JAPRT.P1), o conceito de escravidão tem de ser densificado perante as circunstâncias sociais, históricas e políticas contemporâneas, e de acordo com as concepções ético-filosóficas dominantes e, por isso, cabem na previsão legal da escravidão os casos em que a vítima é objecto de uma completa relação de domínio por parte do agente, vivenciando um permanente “regime de medo”, não tendo poder de decisão sobre o modo e tempo da prestação do trabalho e não recebendo qualquer parte da sua retribuição.

Como justamente se refere acórdão da Relação do Porto de 30-01-2013, já citado, «[e]mbora julgando-se erradicado durante muito tempo, das chamadas sociedades “modernas e civilizadas”, assentes no Estado Social de garantia de plenos direitos a todos os cidadãos sem excepção, a verdade é que a realidade tem vindo a demonstrar um crescente aumento de uma nova modalidade de escravatura e de tráfico de pessoas com chocantes violações dos mais elementares direitos humanos[5], situada sobretudo a dois níveis:

- Por um lado a exploração laboral de mão-de-obra agrícola e industrial, em que as vítimas trabalham sem salários, sem liberdade e em regime de detenção ou carcere privado, muitas vezes passando fome e outras privações, como foi o caso dos autos, relativamente ao C... que viveu vários anos nesse regime, sob intimidação e maus tratos (-);

- Por outro, temos a exploração e tráfico de pessoas que visam essencialmente a indústria do sexo (incluindo crianças) e mais recentemente a compra e venda de pessoas jovens, para extracção de órgãos, o que não pode deixar de merecer viva repulsa e obrigar os responsáveis políticos a legislar com vista a punir fortemente tais condutas».

Perante a dimensão dos valores fundamentais que se visam acautelar, não se suscitam quaisquer dúvidas relativamente à gravidade do crime de escravidão, repercutida, desde logo, na moldura penal consignada no artigo 159.º do Código Penal. Este crime é punido com pena de prisão de 5 a 15 anos, numa moldura muito próxima à prevista para o crime de homicídio.

«A dignidade humana e a consequente personalidade jurídica individual é o fundamento de todos os bens jurídicos; donde – sublinha-o AMÉRICO TAIPA DE CARVALHO – a indisponibilidade absoluta do bem jurídico protegido por este tipo de crime e, conseqüentemente, a absoluta impossibilidade humana e jurídica de qualquer justificação de uma situação ou acto de escravidão», sendo «impensáveis quaisquer possibilidades de justificação de comportamentos tão radicalmente desumanos», como impensáveis são, para o mesmo autor, quaisquer hipóteses de desculpação[6].

4. A medida da pena

Expostas estas considerações de enquadramento, retornando ao caso em apreço, importa determinar se a pena aplicada no acórdão recorrido pelo crime de escravidão, cuja prática os arguidos-recorrentes não discutem, é de manter ou se deverá ser reduzida para a pena de 7 anos e 6 meses de prisão para cada um deles, como pretendem.

O Tribunal recorrido, concedendo parcial provimento ao recurso que o Ministério Público interpusera, fixou para cada um dos arguidos a pena de 9 anos e 6 meses de prisão pela prática do crime de escravidão, de cuja fundamentação se extraem os seguintes trechos:

«A propósito da medida da pena, refere Figueiredo Dias (*Direito Penal – Questões fundamentais – A doutrina geral do crime, 1996, p. 121*), o seguinte:

“...1) Toda a pena serve finalidades exclusivas de prevenção, geral e especial. 2) A pena concreta é limitada, no seu máximo inultrapassável, pela medida da culpa. 3) dentro deste limite máximo ela é determinada no interior de uma moldura de prevenção geral de integração, cujo limite superior é oferecido pelo ponto óptimo de tutela dos bens jurídicos e cujo limite inferior é constituído pelas exigências mínimas de defesa do ordenamento jurídico. 4) Dentro desta moldura de prevenção geral de integração a medida da pena é encontrada em função de exigências de prevenção especial, em regra positiva ou de socialização, excepcionalmente negativa ou de intimidação ou segurança individuais.”

As penas são “instrumentos político-criminais destinados a actuar (psiquicamente) sobre a globalidade dos membros da comunidade, afastando-os da prática de crimes através das ameaças penais estatuídas pela lei, da realidade da aplicação judicial das penas e da efectividade da sua execução”, aparecendo a prevenção geral positiva ou de integração “como forma de que o Estado se serve para manter e reforçar a confiança da comunidade na validade e na força da vigência das suas normas de tutela de bens jurídicos e, assim, no ordenamento jurídico-penal; como instrumento por excelência destinado a revelar perante a comunidade a inquebrantabilidade da ordem jurídica, pese todas as suas violações que tenham tido lugar (ob. cit., p. 84)

A pena também tem uma função de prevenção geral negativa ou de intimidação, como forma de intimidação das outras pessoas pelo mal que com ela se faz sofrer ao delinquente, levando-as a não cometerem factos criminais, mas “*não constitui todavia por si mesma uma finalidade autónoma de pena apenas podendo*” *surgir como um efeito lateral (porventura desejável) da necessidade de tutela dos bens jurídicos.*” (ob. cit., p. 118).

Também o artº 18º nº 2 da Constituição da República Portuguesa e que o legislador penal acolheu no artigo 40º do Código Penal, estabelece no seu nº 1, que a aplicação das penas visa a protecção de bens jurídicos e a reintegração do agente na sociedade, determinando o nº 2 que em caso algum a pena pode ultrapassar a medida da culpa.

Assim, é a prevenção geral positiva ou de integração que dá corpo ao princípio da necessidade de pena.

Este mesmo autor, (*As Consequências Jurídicas do Crime, §55*), refere que “*Só finalidades relativas de prevenção geral e especial, e não finalidades absolutas de retribuição e expiação, podem justificar a intervenção do sistema penal e conferir fundamento e sentido às suas reacções específicas. A prevenção geral assume, com isto, o primeiro lugar como finalidade da pena. Prevenção geral, porém, não como prevenção geral negativa, de intimidação do delinquente e de outros potenciais criminosos, mas como prevenção positiva ou de integração, isto é, de reforço da consciência jurídica comunitária e do seu sentimento de segurança face à violação da norma ocorrida: em suma, como estabilização contrafáctica das expectativas comunitárias na validade e vigência da norma ‘infringida’.*”

Porém, em caso algum pode haver pena sem culpa ou ultrapassar a medida da culpa, pois que o princípio da culpa “*não vai buscar o seu fundamento axiológico a uma qualquer concepção retributiva da pena, antes sim ao princípio da inviolabilidade da dignidade pessoal. A culpa é condição necessária, mas não suficiente, da aplicação da pena; e é precisamente esta circunstância que permite uma correcta incidência da ideia de prevenção especial positiva ou de socialização.*”(ob. cit., § 56).

A culpa não é fundamento de pena, mas constitui o seu limite inultrapassável: o limite inultrapassável de todas e quaisquer considerações ou exigências preventivas – sejam de prevenção geral positiva de

integração ou antes negativa de intimidação, sejam de prevenção especial positiva de socialização ou antes negativa de segurança ou de neutralização. A função da culpa, deste modo inscrita na vertente liberal do Estado de Direito, é por outras palavras, a de estabelecer o máximo de pena ainda compatível com as exigências de preservação da dignidade da pessoa e de garantia do livre desenvolvimento da sua personalidade nos quadros próprios de um Estado de Direito democrático. E a de, por esta via, constituir uma barreira intransponível ao intervencionismo punitivo estatal e um veto incondicional aos apetites abusivos que ele possa suscitar.- (F. DIAS, *Temas Básicos da Doutrina Penal*, Coimbra Editora, 2001, p. 109 e ss.).

Por sua vez, o artigo 71º do Código Penal estabelece o critério da determinação da medida concreta da pena, dispondo que a determinação da medida da pena, dentro dos limites definidos na lei é feita em função da culpa do agente e das exigências de prevenção, estabelecendo o n.º 2 do mesmo artigo do CP, que:

Na determinação concreta da pena o tribunal atende a todas as circunstâncias que não fazendo parte do tipo de crime, depuserem a favor do agente ou, contra ele, considerando nomeadamente:

- a) O grau de ilicitude do facto, o modo de execução deste e a gravidade das suas consequências, bem como o grau de violação dos deveres impostos ao agente;
- b) A intensidade do dolo ou da negligência;
- c) Os sentimentos manifestados no cometimento do crime e os fins ou motivos que o determinaram;
- d) As condições pessoais do agente e a sua situação;
- e) A conduta anterior ao facto e a posterior a este, especialmente quando esta seja destinada a reparar as consequências do crime;
- f) A falta de preparação para manter uma conduta lícita, manifestada no facto, quando essa falta deva ser censurada através da aplicação da pena.

A prevenção geral deve ser determinante na fixação da medida das penas, como necessidade de tutela da confiança e das expectativas da comunidade na manutenção da vigência da norma violada, ou do restabelecimento da paz jurídica comunitária abalada pelo crime, garantindo a consolidação dos valores fundamentais reconhecidos pela comunidade, com especial destaque para a dignidade da pessoa humana, para fortalecer as bases da coesão comunitária e para tranquilizar os sentimentos afectados, em coordenação com a prevenção especial, como forma de reforçar o sentimento de pertença na vivência social e no respeito pela essencialidade dos valores afectados.

Olhando agora para o caso concreto, vimos que consta da matéria de facto provada, que:

«...HH, nascida no dia 09 de Julho de 1997, em ..., ..., na ..., filha de II, mãe solteira, foi criada por uma sua avó até aos 10 anos de idade.

Aos 10 anos de idade decidiu, voluntariamente, passar a residir junto da sua progenitora, a qual, pouco tempo depois, acordou com desconhecido, mediante contrapartida económica de montante não apurado, a partida da sua filha menor para a ..., o que aconteceu.

Enquanto residiu na ..., HH foi obrigada a partilhar cama com um individuo de identidade desconhecida, de nacionalidade ... e foi, ainda, forçada a mendigar e a furtar para o agregado familiar daquele jovem e foi, também, agredida no seu corpo, um número não concretamente apurado de vezes, por elementos que constituíam aquele agregado.

HH, volvido cerca de um ano sobre a sua chegada à ..., face à sua permanente resistência e constantes pedidos para regressar ao seu país de origem, foi devolvida à sua progenitora na ..., local onde se permaneceu acamada, durante um número não concretamente apurado de dias, em resultado dos maus tratos físicos infligidos por elementos, não determinados, daquele agregado familiar com quem residiu na

Em Abril de 2010, decorridas poucas semanas sobre o regresso de HH da ..., a sua progenitora entregou-a, mais uma vez, ao arguido AA, nascido a 22 de Março de 1978.

Assim que HH chegou a Portugal e passou a residir juntamente com o agregado familiar dos arguidos, o arguido AA, logo lhe ordenou que entregasse o passaporte e certidão de nascimento.

HH entregou o seu passaporte e a sua certidão de nascimento ao arguido AA, não tendo tido mais acesso a tais documentos enquanto foi mantida no seio do agregado familiar dos arguidos.

Assim que passou a residir com o agregado familiar dos arguidos, estes ordenaram a HH que a mesma, perante terceiros, deveria tratar os arguidos AA e DD por pais e que deveria, ainda, tratar o arguido GG, nascido a 07 de Março de 1997, e demais elementos do agregado familiar por irmãos, para que não surgissem quaisquer problemas com as autoridades policiais, sob pena de, não o fazendo, a agredirem no corpo, tendo a ofendida HH cumprido com o ordenado pelos arguidos, enquanto residiu com aquele agregado.

Os arguidos passaram a transmitir a terceiros que a menor HH era filha de uma relação anterior do arguido AA, nascido a 22 de Março de 1978.

Desde o momento em que chegou a Portugal e enquanto residiu com o agregado familiar dos arguidos nunca lhe foi permitido encetar contactos telefónicos com a sua progenitora, II, não obstante ter manifestado, perante estes, tal vontade.

Assim que HH passou a residir com o agregado familiar dos arguidos, estes ordenaram-lhe que partilhasse a sua cama com o arguido GG (filho), nascido a 07 de março de 1997, e mantivesse relações sexuais de cópula completa com este, o que veio a suceder, um número não apurado de vezes, sob pena de ser agredida no seu corpo caso não o fizesse.

Desde que HH passou a residir no seio do agregado familiar dos arguidos logo começou, a tratar das crianças que compunham tal agregado familiar e que tinham entre cerca de 1 mês e os 10 anos de idade, acordando às 06h30m da manhã, alimentando-as, lavando-as, levando-as e buscando-as à escola, dormindo com a criança mais nova, MM, de modo a proporcionar-lhe todos os cuidados e acompanhamento necessário durante o dia e durante a noite, lavando à mão toda a roupa do agregado familiar e procedendo à limpeza da casa onde habitavam.

Enquanto a menor HH tratava das crianças e procedia às limpezas da habitação onde residiam, a arguida DD por vezes ausentava-se do domicílio comum.

Em resultado de uma relação sexual com cópula encetada pelo arguido GG (filho), com HH e por esta não consentida, a menor engravidou.

OO, a descendente de HH e do arguido GG, nasceu no dia 17 de Abril do ano de 2012, no Hospital de ..., em ..., e ali foi deixada para a adoção, contra a vontade e sem o consentimento da progenitora, a, então, menor de 16 anos, HH.

Querendo garantir que HH se dedicasse, em exclusivo, à educação, à alimentação, ao acompanhamento, à prestação dos cuidados de higiene dos descendentes dos arguidos e para evitar quaisquer complicações advenientes do facto de HH se encontrar em território nacional e, bem assim,

para evitar quaisquer constrangimentos subsequentes resultantes do facto de HH se encontrar grávida do arguido GG (filho), os arguidos decidiram identificar a HH como se tratasse de NN, nascida a 19 de Agosto de 1995, filha dos arguidos, e que se encontrava a residir em ... desde, sensivelmente, a chegada de HH a território nacional e fizeram crer, perante terceiros, que esta era a pessoa que teria dado à luz.

Tais motivações e, ainda, o facto de pretenderem que o arguido GG (filho), pudesse continuar a ter relações sexuais com HH, sempre que quisesse e sem que daí resultasse qualquer gravidez, os arguidos obrigaram-na a colocar um implante anticoncepcional, denominado "Implanon", sem o seu consentimento e contra a sua vontade.

Através da actuação referida, os arguidos obrigaram HH a deixar a sua filha junto dos competentes serviços de protecção de menores e a não mais procurar pelo paradeiro da sua descendente, o que conseguiram, e sem que aquela tivesse prestado consentimento prévio para tal.

Para além do parto e da colocação de implante anticoncepcional, os arguidos nunca permitiram que HH tivesse qualquer acompanhamento médico pré-natal.

A partir de determinado momento, não concretamente apurado, em que a HH passou a residir com o agregado familiar dos arguidos, estes ordenaram-lhe, ainda, que esta mendigasse a terceiros, solicitando quantias monetárias, o que a aquela obedeceu.

A partir de determinado momento, não concretamente apurado, em que a HH passou a residir juntamente com o agregado familiar dos arguidos, estes ordenaram a HH que se apoderasse de bens em estabelecimentos comerciais, sem a autorização e contra a vontade dos seus proprietários, sob pena de, não cumprindo as ordens, ser agredida no seu corpo, para assim beneficiarem dos produtos do crime e da inimputabilidade desta, designadamente no estabelecimento comercial ..., no estabelecimento comercial SS e no estabelecimento comercial denominado TT, sito na Rua ..., n.º ..., em ..., ..., ..., e pertencente a UU, de onde subtraiu em datas não concretamente determinadas, bens e produtos igualmente não determinados.

Mesmo após HH ter atingido os 16 anos de idade, os arguidos continuaram a ordenar-lhe que se apoderasse de bens em estabelecimentos comerciais, sem autorização e contra a vontade do seu legítimo proprietário, designadamente, nos estabelecimentos acima identificados.

Assim, no dia 07 de agosto de 2014, a hora não concretamente determinada, a arguida DD, exigiu a HH que se deslocasse ao estabelecimento comercial denominado TT, sito na Rua ..., n.º ..., ..., ..., para aí se apoderar, sem o consentimento ou autorização do seu proprietário, de produtos não concretamente apurados.

Como HH se recusou, a arguida DD, desferiu-lhe diversas pancadas com um pau nas pernas e, em seguida, colocou-a na rua enquanto lhe dizia que estava proibida de dormir em casa nessa noite.

No dia 18 de Dezembro de 2014, a hora não concretamente determinada, porque HH se havia recusado, mais uma vez, a apoderar-se de bens existentes no estabelecimento comercial denominado TT, sito na Rua ..., n.º ..., em ..., ..., ..., e pertencente a UU, a arguida DD, agarrou-a pela cabeça e empurrou-a contra a porta de entrada do domicílio comum, sito na Rua ..., n.º ..., ..., ..., e, em seguida, desferiu-lhe diversas pancadas nas pernas, provocando-lhe:

a. Duas escoriações no crânio, uma, localizada na metade direita da região frontal, com 3 cm por O, 5cm de maiores dimensões, e outra, localizada na região supraciliar à direita com 3cm por O, 2cm de maiores dimensões;

b. Uma equimose de coloração arroxeadada localizada na face lateral e posterior do terço inferior da coxa com 6cm por 5,5cm de maiores dimensões.

Tais lesões determinaram seis dias para a cura, sem afectação da capacidade de trabalho geral.

Os arguidos continuaram a obrigar HH a dedicar-se, contra a sua vontade, à prática de furtos, à mendicância, às lides domésticas, à educação, à alimentação, à prestação dos cuidados de higiene dos filhos menores, JJ, KK, LL, MM e VV, entretanto nascido a 21 de Fevereiro de 2014, filho dos arguidos e, bem assim, a ter relações sexuais com cópula e a outros contactos de natureza sexual com o arguido GG, nascido a 07 de Março de 1997, sem o seu consentimento e contra a sua vontade, o que conseguiram, até militares da GNR a terem retirado do agregado familiar daqueles, o que aconteceu a 19 de Dezembro de 2014, altura em que por determinação destes, a HH readquiriu o seu passaporte e a sua certidão de nascimento.

Durante todo o período que mediou entre a chegada a HH a Portugal até o dia 19 de Dezembro de 2014, os arguidos, de comum acordo, dividindo tarefas entre si, ameaçaram-na e agrediram o corpo desta, provocando-lhe dores e hematomas, ora porque se recusava a furtar, ora porque não adoptava uma conduta em público que os arguidos consideravam apropriada, ora porque não executava as lides domésticas como os arguidos pretendiam, ora porque não cuidava dos menores JJ, KK, LL, MM como os arguidos pretendiam, ora porque se recusava a ter relações sexuais com o arguido GG (filho), utilizando quer as mãos, quer vassouras ou um pau, provocando-lhe, por diversas vezes, dores e hematomas na cara, cabeça, membros inferiores e superiores, o que chegou a acontecer mesmo quando a mesma estava grávida.

Os arguidos agiram de forma livre, voluntária e consciente, em conjugação de esforços e identidade de fins, bem sabendo que transportavam a menor HH da ... para território nacional e que a acolhiam no seu domicílio para a submeterem, sem o seu consentimento e contra a sua vontade, por meio de violência, de ameaça grave contra a sua integridade física, aproveitando-se do facto de a menor não dispor de quaisquer condições económicas e da sua especial vulnerabilidade em razão da idade, a dedicar-se à mendicância, à prática de furtos, com intenção lucrativa, a zelar e a limpar a casa onde residiam, a lavar à mão toda a roupa pertencente ao agregado familiar dos arguidos e a cozinhar para estes, a cuidar, a todo o tempo, das crianças JJ, KK, LL, MM e VV, a ter relações sexuais com cópula, a contactos de natureza sexual e outros contactos de natureza íntima com o arguido AA, nascido a 22 de Março de 1978, reduzindo-a assim à condição de escrava, privando-a da sua liberdade e autodeterminação.

Assim, atenta a matéria de facto provada, vimos que a ofendida HH, veio para Portugal contra a sua vontade, e durante 4 anos viveu com os arguidos, submetida à vontade destes, levando-a e ter uma identidade falsa, sendo obrigada a ter relações sexuais contra a sua vontade com o filho destes, como se tratasse de existência de um casamento, sendo obrigada a realizar os mais diversos trabalhos domésticos, tendo inclusive, aos 12 anos de idade, tratado de uma criança recém-nascida, e obrigada a praticar furtos, a mendigar, sem contactos com a sua verdadeira família, sendo retirado, sem o seu consentimento, o filho que entretanto deu à luz, sempre sobre a ameaça ou a prática efectiva de agressões...».

Ora, vimos que o crime de escravidão, p. e p. pelo art.159º al. a) e al. b) do Código Penal é punido com pena de prisão de 5 a 15 anos, e o crime de crime de falsas declarações, previsto e punível pelo artigo 348.º-A do Código Penal é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa.

O bem jurídico protegido pela incriminação no crime de escravidão é a dignidade da pessoa humana, sendo neste ilícito, uma pessoa tratada como uma coisa de que o agente dispõe como sua propriedade.

A redução da pessoa humana à condição de objecto, de coisa (escravidão) significa a negação não apenas desta espécie de liberdade ou das outras manifestações de liberdade (v.g. de decisão, de acção,

sexual, religiosa, etc.) mas a negação da raiz de todas de todas as expressões da personalidade humana, que é a dignidade humana (*cf. Américo Taipa de Carvalho in Comentário Conimbricense do Código Penal, t. I, Coimbra Editora, 1999, p. 422*).

O conceito de dignidade da pessoa humana concretiza-se historicamente, assumindo um valor eminentemente cultural, que não é estático e encontra-se em constante mutação, desenvolvendo-se através de um intercâmbio com outras culturas, e de acordo com as concepções sociológicas e políticas dominantes.

Ora, a realidade tem vindo a demonstrar chocantes violações dos mais elementares direitos humanos, sobretudo na exploração laboral, em que as vítimas trabalham sem salários, sem liberdade e em regime de detenção, passando fome e outras privações, mas também na exploração e tráfico de pessoas que visam essencialmente a indústria do sexo e para extracção de órgãos

Na escravatura contemporânea muitas pessoas são vendidas, pois, como meros objectos, ficando nas mãos de indivíduos, que muitas vezes pertencem a grupos de crime organizado, obrigadas a trabalho forçado, e ameaçadas com castigos, no fundo vivendo de uma forma desumana, com limitação da liberdade de movimentos».

Depois de examinar a alegação dos arguidos, não renovada no recurso para este Supremo Tribunal, no sentido de que «muitas das coisas aqui relatadas em relação à ofendida HH, se processariam de acordo com as "leis ciganas"», o Tribunal da Relação conclui que «face à importância do bem jurídico aqui protegido, não há qualquer justificação para que se limite a protecção da infância e a liberdade de autodeterminação sexual das crianças em face de direitos culturais, em nome da dignidade da pessoa humana, pelo que devem prevalecer os direitos da criança, em detrimento dos eventuais hábitos culturais da raça cigana, invocados pelos arguidos para justificar o seu comportamento».

Quanto à questão de saber «se as penas aplicadas são ajustadas ao caso concreto», afirma-se no acórdão recorrido:

«Em primeiro lugar, não se pode esquecer o modo de execução dos factos, no que concerne nomeadamente às agressões de que a ofendida foi alvo, tendo o Tribunal *a quo* dado como provado que, desde que "HH passou a residir com o agregado familiar dos arguidos, estes ordenaram-lhe que partilhasse a sua cama com o arguido GG (filho), e mantivesse relações sexuais de cópula com este, o que veio a suceder, um número não apurado de vezes, sob pena de ser agredida no seu corpo caso não o fizesse. Em resultado de tais relações sexuais, por esta não consentida, a menor engravidou.

Por sua vez, da actuação dos arguidos resultaram consequências graves para a ofendida, tanto mais que a mesma foi privada da sua juventude, de viver, entre os seus 12 e os 17 anos de idade, a vida de uma criança a quem é reconhecida dignidade por ser pessoa humana.

Ora, os arguidos, não obstante terem incorrido na prática dos factos ilícitos típicos em apreço, não demonstraram arrependimento, um qualquer juízo autocrítico das suas actuações, apresentando, versões dos factos incoerentes, próprias de quem tem interiorizado que actuou bem e de forma correcta, passando a ideia de normalidade das coisas, invocando os usos e costumes da raça cigana.

A menor quando chegou a Portugal, tinha apenas 12 anos, estava desenraizada num país que não era o seu, sendo conduzida a um estado de passividade idêntica àqueles que vivem em cativo, sobre a ameaça ou a sujeição a maus-tratos, sobre a mesma tendo sido exercida coacção e ameaças e ofensas físicas tendo em vista a prática ou omissão de actos, obedecendo sempre a ordens que lhe eram dadas, e não se encontrando um único acto que se pudesse reconduzir à sua vontade.

HH não tinha, pois, liberdade, estava sujeita à vontade dos arguidos que dela dispuseram como entenderam, sem vontade própria, não podendo decidir sobre a sua própria pessoa, encontrando-se

numa relação de domínio por parte dos arguidos, sujeita à vontade dos arguidos, praticando furtos ou fazendo ou tratando das crianças do casal, submetendo-se ao seu "pretensão" marido, sob pena de agressões caso o não fizesse.

Por isso, os arguidos, molestaram física e psicologicamente a ofendida, bem sabendo que esta era menor, cerceando a sua liberdade, obrigando-a, por meio de agressões físicas e ameaças à sua integridade física e vida, a sujeitar-se a relações sexuais de cópula não consentidas e a contactos de natureza sexual e, bem assim, obrigando-a, por aqueles meios, a praticar furtos em estabelecimentos comerciais, a dedicar-se à mendicância, a sujeitar-se à servidão doméstica e obrigando-a a abandonar a sua filha OO, provocando-lhe dores, privação da liberdade, profundas tristeza, agonia, desespero e insegurança, e submetendo-a a um tratamento desrespeitoso da sua dignidade enquanto ser humano, da sua personalidade e auto-estima e reduzindo-a à condição de escrava.

Assim, quanto ao crime de escravatura, não podemos desde logo esquecer, a enorme ilicitude que o mesmo em si transporta e lhe é inerente, nem o modo de execução do facto, nomeadamente às agressões de que a ofendida foi alvo, tidas como as necessárias para vencer a sua vontade, mas que ainda assim, face aos elementos dos autos se foram avolumando, sendo que pouco antes de a ofendida ser retirada da casa dos arguidos a mesma tinha já em si marcas de violência.

Ora, estando perante alguém tão jovem e logo tão indefesa, revela-se bastante elevada a ilicitude, obrigando a mesma a ter relações sexuais com o filho dos mesmos ainda tendo a mesma apenas 12 anos, bem como ao facto de não permitirem à ofendida ficar com o seu filho, dando o mesmo para adopção contra a sua vontade.

Os arguidos sabiam que actuavam contra a lei e por isso tudo fizeram para dar a aparência de uma realidade diversa, em que a ofendida seria filha do GG, escondendo a sua gravidez apesar de ter acontecido com 13 anos e dando o nome de outrem aquando da sua entrada no Hospital.

Em termos de prevenção geral, em relação ao crime de escravatura, ter-se-á em consideração que estamos perante um tipo legal de crime que pretende dar tutela a uma das formas mais reprováveis de relacionamento com outro ser humano, na sua redução a mera coisa por parte de outro, como a situação presente em que alguém é subjugada a uma vida de violência, forçado a aceitar as ordens de outrem mais forte, subjugada ao que lhe é imposta, privada da liberdade e da auto-determinação, quando parecia que a mesma estaria abolida das sociedades modernas, exigindo-se assim uma forte repressão.

Quanto à prevenção especial, deve ter-se em conta todo o passado dos arguidos, as habilitações literárias, as condições sociais, familiares e económicas, designadamente as existentes na data da prática dos factos, bem assim as suas condições de vida actuais.

Em favor dos arguidos, deverá ponderar-se o facto de não ter antecedentes criminais conhecidos no nosso país.

Tudo isto tem de ser devidamente ponderado, repetimos, atenta a gravidade da conduta dos arguidos, as suas consequências, o longo período em que se manteve, a vítima ser uma menor deslocada do seu país para Portugal, obrigada a sofrer sevícias sexuais de que resultou uma filha, quando tinha cerca de 14 anos de idade, e que lhe foi retirada por acção dos arguidos, obrigada também a furtar e a mendigar, causando-lhe ainda maus tratos físicos e psíquicos e limitações da liberdade, durante mais de 4 anos, no período da formação da sua personalidade, que, necessariamente, a marcaram e perdurarão por toda a sua vida.

Por sua vez, como refere o Sr. PGA, há que referir a desvalorização que os arguidos atribuem a tais condutas, desculpabilizando-se com as tradições e leis ciganas, o que revela uma personalidade distorcida que acentua as necessidades da prevenção especial.

Também as necessidades de prevenção geral são muito acentuadas, uma vez que este tipo de condutas se vêm tornando cada vez mais frequentes, quando deviam estar totalmente abolidas.

Assim sendo, consideramos mais ajustada a pena de 9 anos e 6 meses de prisão a cada um dos arguidos, pelo crime de escravidão.»

Estas considerações merecem, no essencial, a nossa concordância, sendo que os factores a atender na definição da medida da pena são os que, em geral, vêm sendo definidos pela doutrina e pela jurisprudência.

Reafirma-se agora que, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 71.º do Código Penal, a medida da pena é determinada, dentro dos limites definidos na lei, **em função da culpa do agente e das exigências de prevenção**, sendo que, em caso algum a pena pode ultrapassar a medida da culpa, conforme prescreve o artigo 40.º, n.º 2, do mesmo Código.

Na determinação concreta da pena há que atender às circunstâncias do facto, que deponham a favor ou contra o agente, nomeadamente ao grau de ilicitude, e a outros factores ligados à execução do crime, à intensidade do dolo, aos sentimentos manifestados no cometimento do crime e aos fins e motivos que o determinaram, às condições pessoais do agente, à sua conduta anterior e posterior ao crime (artigo 71.º, n.º 2, do Código Penal).

Sobre a determinação da pena, em razão da culpa do agente e das exigências de prevenção, lê-se no acórdão deste Supremo Tribunal, de 15-12-2011, proferido no processo n.º 706/10.6PHLSB.S1, convocado, mais recentemente no acórdão de 27-05-2015 (proc. n.º 445/12.3PBEVR.E1.S1):

«Ao elemento prevenção, no sentido de prevenção geral positiva ou de integração, vai-se buscar o objectivo de tutela dos bens jurídicos, erigido como finalidade primeira da aplicação de qualquer pena, na esteira de opções hoje prevalecentes a nível de política criminal e plasmadas na lei, mas sem esquecer também a vertente da prevenção especial ou de socialização, ou, segundo os termos legais: a reintegração do agente na sociedade (art. 40.º n.º 1 do CP).

Ao elemento culpa, enquanto traduzindo a vertente pessoal do crime, a marca, documentada no facto, da singular personalidade do agente (com a sua autonomia volitiva e a sua radical liberdade de fazer opções e de escolher determinados caminhos) pede-se que imponha um limite às exigências, porventura expansivas em demasia, de prevenção geral, sob pena de o condenado servir de instrumento a tais exigências.

Neste sentido é que se diz que a medida da tutela dos bens jurídicos, como finalidade primeira da aplicação da pena, é referenciada por um ponto óptimo, consentido pela culpa, e por um ponto mínimo que ainda seja suportável pela necessidade comunitária de afirmar a validade da norma ou a valência dos bens jurídicos violados com a prática do crime. Entre esses limites devem satisfazer-se, quanto possível, as necessidades de prevenção especial positiva ou de socialização (Cf. FIGUEIREDO DIAS, *Direito Penal Português – As Consequências Jurídicas Do Crime*, Editorial de Notícias, pp. 227 e ss.).

Quer isto dizer que as exigências de prevenção traçam, entre aqueles limites óptimo e mínimo, uma submoldura que se inscreve na moldura abstracta correspondente ao tipo legal de crime e que é definida a partir das circunstâncias relevantes para tal efeito e encontrando na culpa uma função limitadora do máximo de pena. Entre tais limites é que vão actuar, justamente, as necessidades de prevenção especial positiva ou de socialização, cabendo a esta determinar em último termo a medida da pena, evitando, em toda a extensão possível (...) a quebra da inserção social do agente e dando azo à sua reintegração na sociedade (FIGUEIREDO DIAS, *ob. cit.*, p. 231).

Ora, os factores a que a lei manda atender para a determinação concreta da pena são os que vêm indicados no referido n.º 2 do art. 71.º do CP e (visto que tal enumeração não é exhaustiva) outros que

sejam relevantes do ponto de vista da prevenção e da culpa, mas que não façam parte do tipo legal de crime, sob pena de infracção do princípio da proibição da dupla valoração.»

Como igualmente se lê no acórdão deste Supremo Tribunal, de 03-07-2014 (proc. n.º 1081/11.7PAMGR.C1.S1 – 3.ª Secção), «a defesa da ordem jurídico-penal, tal como é interiorizada pela consciência colectiva (prevenção geral positiva ou de integração), é a finalidade primeira, que se prossegue, no quadro da moldura penal abstracta, entre o mínimo, em concreto, imprescindível à estabilização das expectativas comunitárias na validade da norma violada, e o máximo, que a culpa do agente consente; entre estes limites, satisfazem-se quando possível, as necessidades de prevenção especial positiva ou de socialização».

Também MARIA JOÃO ANTUNES salienta que, «[s]e a medida da pena é a protecção de bens jurídicos e, na medida do possível, a reintegração do agente na sociedade, e se a pena não pode ultrapassar, em caso algum, a medida da culpa (artigo 40.º, n.ºs 1 e 2, do CP), então a medida da pena há-de ser dada pela medida da necessidade de tutela dos bens jurídicos, sem ultrapassar a medida da culpa, actuando os pontos de vista de prevenção especial de socialização entre o ponto óptimo e o ponto ainda comunitariamente suportável de tutela de tais bens»[7].

A medida da pena, considera a mesma autora, «há-de ser dada pela medida da necessidade de tutela dos bens jurídicos, face ao caso concreto, num sentido prospectivo de tutela das expectativas da comunidade na manutenção (ou mesmo no reforço) da vigência da norma infringida»[8].

Na realização dos fins das penas – protecção de bens jurídicos e a reintegração do agente na sociedade (artigo 40.º, n.º 1 do Código Penal) – as exigências de prevenção geral constituem uma finalidade de primordial importância. Decorrendo desse preceito a protecção dos bens jurídicos como a finalidade primeira da pena, e como essa protecção se refere necessariamente ao futuro, «deverão ser convocadas finalidades gerais preventivas (sobretudo a positiva mas também a intimidatória), e especiais preventivas (intimidação pessoal, neutralização temporária e reinserção social, esta última, aliás, especialmente mencionada no preceito)» – v. acórdão do STJ de 25-07-2014, proferido no processo n.º 1784/03.OPSLB.L1.S1 – 5.ª Secção).

As exigências de prevenção geral positiva ou de integração são absolutamente salientes num tipo de crime como o de escravidão, em que avulta a agressão de um bem de natureza pessoal de grande ressonância ético-social, como a própria dignidade e personalidade humana.

Este crime não pode deixar de causar um forte abalo na comunidade pelo que há necessidade de lhe ser transmitido um sinal claro no sentido da afirmação da validade da norma violada, restabelecendo o sentimento de segurança abalado pelo crime.

Retomando considerações já tecidas, e convocando o ensinamento de FIGUEIREDO DIAS, «A prevenção geral assume o primeiro lugar como finalidade da pena. Prevenção geral, porém, não como prevenção negativa, de intimidação do delinquent e de outros potenciais criminosos, mas como prevenção positiva, de integração e de reforço da consciência jurídica comunitária e do seu sentimento de segurança face à violação da norma ocorrida; numa palavra, como estabilização das expectativas comunitárias na validade e na vigência da norma infringida»[9].

Como já se consignou, citando-se MARIA JOÃO ANTUNES, a medida da pena há-de ser dada pela medida da necessidade de tutela dos bens jurídicos, face ao caso concreto, num sentido prospectivo de tutela das expectativas da comunidade na manutenção da vigência da norma infringida.

Significando a prevenção geral positiva ou de integração, sublinha-o AMÉRICO TAIPA DE CARVALHO, que a pena é um meio de interpelar a sociedade e cada um dos seus membros para a relevância social e individual do respectivo bem jurídico tutelado penalmente.

A prevenção geral positiva tem ainda, considera o mesmo autor, a dimensão ou objectivo da pacificação social ou, por outras palavras, do restabelecimento ou revigoramento da confiança da comunidade na efectiva tutela penal estatal dos bens jurídicos fundamentais à vida colectiva ou individual. Esta mensagem de confiança e de pacificação social é dada, especialmente, através da condenação penal, enquanto reafirmação efectiva da importância do bem jurídico lesado[10].

Mas a pena tem também uma função de prevenção geral negativa ou de dissuasão da prática de futuros crimes.

Nesta perspectiva, como justamente é lembrado no acórdão deste Supremo Tribunal, de 15-05-2013, proferido no processo n.º 154/12.3JDLSB.L1.S1 – 3.ª Secção:

«[O] ponto de partida da individualização penal é a determinação dos fins das penas pois que só arrancando de fins claramente definidos é possível determinar os factos que relevam na respectiva ponderação. Aqui, é preciso, em primeiro lugar, readquirir a noção da importância fundamental que assume a justa retribuição do ilícito, e da culpa, compreendendo o princípio da culpa quer uma função fundamentadora, quer uma função limitadora da mesma pena. Ao mesmo nível que a retribuição justa situa-se o fim da prevenção especial.

(...)

Em termos dogmáticos é fundamento da individualização da pena a importância do crime para a ordem jurídica violada (conteúdo da ilicitude) e a gravidade da reprovação que deve dirigir-se ao agente do crime por ter praticado o mesmo.»

Perante os factos dados como provados e na síntese efectuada no acórdão recorrido, a menor ofendida HH, quando chegou a Portugal, tinha apenas 12 anos, estava desenraizada num país que não era o seu, sendo conduzida a um estado de passividade idêntica àqueles que vivem em cativeiro, sobre a ameaça ou a sujeição a maus-tratos, sobre a mesma tendo sido exercida coacção e ameaças e ofensas físicas tendo em vista a prática ou omissão de actos, obedecendo sempre a ordens que lhe eram dadas, e não se encontrando um único acto que se pudesse reconduzir à sua vontade.

HH não tinha liberdade, estava sujeita à vontade dos arguidos que dela dispuseram como entenderam, sem vontade própria, não podendo decidir sobre a sua própria pessoa, encontrando-se numa relação de domínio por parte dos arguidos, sujeita à vontade dos arguidos, praticando furtos ou fazendo ou tratando das crianças do casal, submetendo-se ao seu "pretenso" marido, sob pena de agressões caso o não fizesse.

Por isso, os arguidos, molestaram física e psicologicamente a ofendida, bem sabendo que esta era menor, cerceando a sua liberdade, obrigando-a, por meio de agressões físicas e ameaças à sua integridade física e vida, a sujeitar-se a relações sexuais de cópula não consentidas e a contactos de natureza sexual e, bem assim, obrigando-a, por aqueles meios, a praticar furtos em estabelecimentos comerciais, a dedicar-se à mendicidade, a sujeitar-se à servidão doméstica e obrigando-a a abandonar a sua filha OO, provocando-lhe dores, privação da liberdade, profundas tristeza, agonia, desespero e insegurança, e submetendo-a a um tratamento desrespeitoso da sua dignidade enquanto ser humano, da sua personalidade e auto-estima e reduzindo-a à condição de escrava.

A factualidade provada revela que a menor ofendida viu-se esbulhada de toda a dignidade inerente à pessoa humana, tendo sido tratada durante o tempo em que permaneceu em poder dos arguidos como um objecto, como um «ente» sobre o qual eles podiam exercer faculdades similares às exercidas no âmbito de um direito de propriedade sobre coisas ou animais, impressionando, de forma particularmente negativa, o facto de lhe ter sido retirada a sua própria filha, pois a deixaram no hospital onde nasceu para adopção, contra a vontade e sem o consentimento da ofendida (facto 16.º), com o que a impediram de exercer a sua maternidade em relação a ela.

O grau de ilicitude do comportamento dos arguidos é elevado, sendo merecedores de um forte juízo de censura. Os arguidos invocaram no recurso perante o Tribunal da Relação hábitos culturais da raça cigana, a que pertencem, para justificarem o seu comportamento. Tal alegação não foi atendida, e bem, sendo que os arguidos não voltaram a invocar essa circunstância.

Mas, se é indiscutível que a inserção dos arguidos nesse grupo de etnia cigana não pode justificar os actos tão desvaliosos que praticaram na pessoa da menor ofendida, a verdade é que essa situação não pode ser ignorada.

Tal como se não pode ignorar o facto de ter sido a própria mãe da menor a entregá-la a terceiros: primeiro a um indivíduo, da mesma nacionalidade (romena) residente na Irlanda, com o qual foi forçada a partilhar a cama e a mendigar e furtar (factos provados n.ºs 2 e 3); depois aos arguidos nas circunstâncias já descritas.

Este quadro e a demais factualidade apurada revelam uma situação pautada por alguma degradação moral geradora de alguma displicência, lassidão ou afrouxamento na observância dos valores sociais, éticos e normativos vigentes.

As exigências de prevenção especial também se fazem sentir no caso, embora não em termos tão prementes como os que se reportam à prevenção geral.

Os arguidos não têm antecedentes criminais no nosso país e encontravam-se, antes de presos (encontram-se nesta situação desde 15-07-2015), razoavelmente inseridos socialmente, residindo em casa arrendada, sendo pontuais no pagamento da respectiva renda.

Não consta que os arguidos assumam comportamentos desadequados no estabelecimento prisional, sendo que a arguida DD investe o tempo numa ocupação laboral e na frequência escolar.

Dois dos seus filhos são crianças de pouca idade (actualmente com 12 anos e 7 anos). O arguido tem perspectivas de, em liberdade, retomar o negócio de compra e venda de automóveis usados ou iniciar a actividade de reparação de automóveis.

À luz dos critérios que se enunciaram sobre a medida da pena e às circunstâncias que se referenciaram, consideramos que a pena de 8 anos de prisão pela prática do crime de escravidão a aplicar a cada um dos arguidos é proporcionada e satisfaz adequadamente as necessidades de prevenção geral e o juízo de censura que os arguidos merecem pelos actos que praticaram, procedendo parcialmente o recurso.

O arguido AA foi ainda condenado na pena de 6 meses de prisão pela prática do crime de falsas declarações, pena que o Tribunal da relação manteve, sendo insusceptível agora de alteração por irrecorribilidade – artigos 400.º, n.º 1, alínea e), e 432.º, n.º 1, alínea b), do CPP.

Operando o cúmulo jurídico desta pena com a pena de 8 anos de prisão pela prática do crime de escravidão, condena-se o arguido AA na pena única de 8 anos e 3 meses de prisão.

III - DECISÃO

Nestes termos, acordam os Juízes da 3.ª Secção do Supremo Tribunal de Justiça em:

Conceder parcial provimento ao recurso interposto pelos arguidos AA e DD, condenando-se cada um deles na **pena de 8 (oito) anos de prisão pela prática do crime de escravidão** p. e p. pelo artigo 159.º do Código Penal.

Em **cúmulo jurídico** com a pena de 6 meses de prisão pela prática do crime de falsas declarações, vai o arguido AA condenado na **pena única de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de prisão**.

Sem custas (artigo 513.º, n.º 1, do CPP)

(Processei e revi – artigo 94.º, n.º 2, do CPP)

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18 de Outubro de 2017

Manuel Augusto Matos (Relator)

Lopes da Mota

[1] *Comentário Conimbricense do Código Penal – Parte Especial*, dirigido por JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, Tomo I, Coimbra Editora, p. 423. Destacado no original.

[2] *Código Penal – Parte Geral e Especial*, 2015 – 2.ª Edição, Almedina, p. 697.

[3] *Ibidem*.

[4] Disponível, como os demais que se citarem sem outra indicação quanto à fonte, nas Bases Jurídico-Documentais do IGFEJ, em www.dgsi.pt.

[5] Lê-se, em nota, no acórdão que «Um estudo divulgado em 2005 pela Organização Mundial do Trabalho aponta para a existência de cerca de 12,3 milhões de pessoas vítimas de escravatura no mundo. A organização não governamental Free The Slaves (FTS), estima esse número em 27 milhões, o que não pode deixar ninguém de sã consciência indiferente. Destes, 24 milhões estão localizados na Ásia, o que coloca esta região do planeta no centro da escravatura moderna. Seguem-se a América Latina, com 1 milhão e 300 mil escravos, e o conjunto África e Médio Oriente, com cerca de 920 mil. Noventa dólares, cerca de 70 euros, é o preço médio de venda de um escravo no mundo, estima a FTS. Casos recentes têm demonstrado que ela existe também na Europa “civilizada” e EUA».

Uma outra organização não governamental, a Walk Free Foundation, estima em mais de 40 milhões o número de pessoas vítimas da moderna escravatura (<https://www.walkfreefoundation.org/>). No «Índice Global da Escravatura», referente a 2014, elaborado por esta organização, em Portugal encontravam-se 1400 pessoas em situação de escravatura (dados retirados do jornal digital *Observador*).

[6] *Ob. cit.*, pp. 425-426.

[7] *Consequências Jurídicas do Crime*, Coimbra Editora, p. 44.

[8] *Idem, ibidem*.

[9] “O sistema sancionatório do Direito Penal Português”, *Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Eduardo Correia*, I, p. 815.

[10] *Direito Penal – Parte Geral*, 2.ª Edição, Coimbra Editora, pp. 65-66.

SENTENCIAS ANTERIORES A LA Lei n.º 28/2016 DE TRABALHO FORÇADO

Publicação: Diário da República n.º 161/2016, Série I de 2016-08-23

Acórdãos TRP

Acórdão do Tribunal da Relação do Porto

Processo:

1231/09.3JAPRT.P1

Nº Convencional: JTRP000

Relator: JOSÉ PIEDADE

Descritores: CRIME DE ESCRAVIDÃO
ELEMENTOS DO TIPO
ESCRAVIDÃO LABORAL

Nº do Documento: RP201301301231/09.3JAPRT.P1

Data do Acórdão: 30/01/2013

Votação: UNANIMIDADE

Texto Integral: S

Privacidade: 1

Meio Processual: REC PENAL

Decisão: NEGADO PROVIMENTO

Indicações Eventuais: 4ª SECCÃO

Área Temática: .

SUMARIO:

I – O crime de escravidão previsto no artº 159º do C. Penal visou consagrar a que tal respeito se dispõe na Convenção de Genebra sobre a escravatura, assinada em 25/09/1926.

II - Assim sendo, o tipo legal tem de ser interpretado e aplicado à luz dos conceitos e princípios constantes desse texto de Direito Internacional.

III – Por escravatura entende-se «o estado ou condição de um indivíduo sobre o qual se exercem todos ou quaisquer atributos do direito de propriedade».

IV- Consequentemente, é escrava toda e qualquer pessoa que tenha tal estado ou condição.

V – No entanto, o conceito tem de ser densificado perante as circunstâncias sociais, históricas e políticas contemporâneas, e de acordo com as concepções ético-filosóficas dominantes.

VI – Por isso, cabe na previsão legal a escravidão laboral, nos casos em que a vítima é objecto de uma completa relação de domínio por parte do agente, vivenciando um permanente “regime de medo”, não tendo poder de decisão sobre o modo e tempo da prestação do trabalho e não recebendo qualquer parte da sua retribuição.

Reclamações:

Decisão Texto Integral:

Proc. Nº 1231/09.3JAPRT.P1

Círculo Judicial de Lamego do T. J. de Moimenta da Beira

Acordam, em Conferência, os Juízes desta 2ª Secção Criminal do Tribunal da Relação do Porto:

No Círculo Judicial de Lamego do T. J. de Moimenta da Beira, processo supra referido, foram julgados B... e C..., tendo sido proferido Acórdão com o seguinte dispositivo:

“a) Absolver o arguido C... da prática de um crime de escravidão, na forma consumada, p. e p. pelo artigo 159.º, n.º 1, al. a) do C.P.;

b) Condenar o arguido B... pela prática, em autoria material e na forma consumada, de um crime de escravidão, p. e p. pelo artigo 159.º, al. a) do C.P., na pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de prisão.

c) Condenar o arguido C... pela prática, em autoria material e na forma consumada, de um crime de escravidão, p. e p. pelo artigo 159.º, al. b) do C.P., na pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de prisão.

d) Condenar também os arguidos no pagamento das custas do processo crime (artigos 513.º e 514.º do C.P.P.), fixando-se, individualmente (para cada um dos arguidos) a taxa de justiça em 5 (cinco) U.C..

Notifique e deposite.

Comunique-se ao Instituto de Reinserção Social (cfr. fls. 1273).

Prisão preventiva.

Cumpre, neste momento, proferir decisão de reexame dos pressupostos da prisão preventiva oportunamente aplicada aos arguidos (cfr. artigos 213.º, n.º 1, al. b) do C.P.P.), para a qual, atenta a fase processual em que nos encontramos, se torna dispensável a audição prévia dos arguidos (cfr. artigo 213.º, n.º 3 do C.P.P.).

E, assim, por se encontrarem agora reforçados (com a decisão condenatória proferida por este Tribunal) os pré-existentes pressupostos de facto e de direito que motivaram a aplicação aos arguidos C... e B... da medida de coação prisão preventiva, atendendo ainda a que o seu prazo máximo não se encontra esgotado, decide-se pela sua manutenção.

Nos termos e pelos fundamentos explanados, decide-se manter a prisão preventiva oportunamente aplicada aos arguidos, aguardando os arguidos, nessa medida, os ulteriores termos do processo.”

Deste Acórdão recorreram os condenados B... e C..., formulando as seguintes conclusões:

“1. Os recorrentes B... e C..., foram condenados como autores do crime de escravidão, nas penas, respectivas de 7 anos e seis meses de prisão e 5 anos e seis meses de prisão

2. Não se conformam com tal condenação, porque entendem não ter cometido tal crime;

3. Daí o presente recurso para V^{as} Ex^{as} em que pretendem que seja alterada a matéria de facto dada como provada reapreciando-se a prova gravada, nos termos adiante indicados e devendo concluir-se pela absolvição dos arguidos pelo crime por que foram condenados;

4. Ou, subsidiariamente, que seja alterada a incriminação relativa ao arguido B..., ou ainda subsidiariamente, sejam alteradas as penas a aplicadas, e a sua execução, nos termos adiante indicados;

5. Como introdução às suas alegações, não podem deixar de referir a exigência do elevado grau de certeza jurídica, no que respeita à prova, a severidade da punição prevista, no artº 159º do C. Penal;

6. E, na mesma sede, não podem deixar de invocar os termos em que, a investigação do caso dos autos se processou, considerando-se entender-se o caso presente como um crime de catálogo, em que se

procurou, salvo o devido respeito, encaixar na mesma, os requisitos ideologicamente estabelecidos para a verificação desse crime;

7. Os recorrentes entendem que devem ser alterados parte dos factos dados como provados, pelo Tribunal Colectivo;

E assim,

8. Entendem dever ser dados como não provados os pontos 6, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26 parte final, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;

9. Como devem ser alterados os factos dados como provados, nos pontos 1 e 38, no que respeita à época em que ocorreram;

10. Tudo pelas razões invocadas no texto desta motivação, que aqui se dão por reproduzidas;

11. E que nomeadamente respeitam à prova documental, às declarações dos arguidos, às declarações do assistente D..., aos depoimentos das testemunhas e à prova indirecta circunstancial por simples induções ou presunções utilizadas pelo Tribunal Colectivo, para fixar a matéria de facto impugnada;

E assim, resumindo:

12. No que respeita à prova documental, constante de fls. 833, verifica-se que, o D..., iniciou trabalho em Espanha em 29/05/2007, pelo que a época indicada no ponto 1 dos factos provados, está incorrectamente julgada;

12. Também o ponto 38 dos factos provados está incorrectamente julgado, porque há recibos juntos a fls. 202 e seguintes, que indicam que o E... trabalhava em Espanha, no mês de Janeiro de 2007, e há outro recibo do C..., que trabalhava em Espanha em Dezembro de 2006, Se trabalhavam em Espanha não podiam encontrar-se em Mirandela no início do ano de 2007, o que imporá alteração da matéria de facto nesse ponto;

13. Igualmente da prova documental atrás citada resulta que as residências dos arguidos B... e C... eram diferentes em Espanha como também eram diferentes em Portugal, o que leva a concluir que não tinham os contactos profissionais que, o Tribunal considerou existentes nos pontos 27, 30, 34 e a fls. 21 parte final, do Acórdão;

14. O que, conjuntamente com as outras razões atrás invocadas no texto da motivação, deverá levar a que tais factos se dêem como não provados;

15. As declarações dos arguidos foram abertas e colaborantes e deverão ser valorizadas como tal;

16. Já no que respeita *as declarações do assistente, a sua credibilidade está manifestamente afectada, pelo que baseando-se a convicção do Tribunal essencialmente em tais declarações - já que nenhuma das testemunhas de acusação teve conhecimento directo dos factos – os factos indicados na conclusão 8ª deverão ser dados como não provados;

17. A credibilidade das declarações do assistente é nenhuma, porque é parte interessada e interesseira, constituindo-se assistente e procurando uma indemnização,

18. Porque se trata de pessoa influenciável, de um alcoólico, desenraizado social e familiarmente, com lapso de memória frequentes depondo de uma maneira pouco clara, imprecisa e contraditória, inventando situações como as relativas à carrinha Ford, e com contradições entre o que declarou para memória futura e o que declarou perante o Tribunal Colectivo.

19. Declarações aliás contraditadas, pelo depoimento das testemunhas de defesa F...; G... e H..., cuja credibilidade não deve ser posta em causa, sendo as únicas testemunhas que tiveram convencimento presencial dos factos ocorridos em Espanha;
20. Por toda estas as razões e as mais invocadas no texto desta motivação, as declarações do assistente, não podem servir de prova bastante, para dar como provados os factos indicados no ponto 8 destas alegações;
21. O depoimento das testemunhas de acusação, em nada relevam para a fixação dos factos integradores do crime do artº 159º;
22. O recurso, a prova indirecta, ou extracção de ilações ou presunções, do modo como o Tribunal Colectivo o fez, aparece como ilegal e injustificada, contrariando frontalmente, os princípios invocados no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça atrás citado de 9/02/2012;
23. Todas estas razões deverão levar a que os factos da conclusão 8ª, sejam sindicados por este Tribunal, no sentido de serem dados como não provados; Se assim se não entender,
24. As razões invocadas são suficientes para criar no julgador uma dúvida legítima, duvida essa que o Tribunal Colectivo devia ter acolhido, e que o não fez;
25. Violando então, os princípios da presunção da inocência e in dubio pro reo, constantes do artº 2º e 32º da Constituição da Republica Portuguesa, que assim terá sido violada;
26. Mesmo considerando os factos dados como provados na sentença, entendem os recorrentes que não praticaram o crime de escravidão porque foram condenados;
27. O crime do artº 159º do C. Penal. exige que o agente disponha do ofendido como uma coisa, que seja tratado como objecto ou propriedade em regime de sujeição absoluta, o que se não verifica no caso presente, pelo que tal disposição legal foi violada;
28. Tal como resulta da fonte deste artigo, Convenção de Genebra de 1926 e, dos ensinamentos de Maia Gonçalves, Vítor Sá Pereira, nos locais atrás citados;
29. Não se verifica tal coisificação do assistente D..., não se verificando assim a prática do dito crime;
30. Aliás o mesmo assistente D... usava de todas as facilidades que vêm referidas no texto das alegações de fls. 80 e aqui se dão por reproduzidas por economia processual;
31. A haver alguma responsabilidade penal do arguido B..., tal responsabilidade enquadrar-se-ia no crime do artº 160º do C. Penal. se vier a entende-se que houve exploração do trabalho do assistente, valendo-se o arguido de alguma situação de vulnerabilidade do mesmo, disposição legal que terá sido violada;
32. Assim sendo, a pena a aplicar seria dentro da moldura penal de 3 a 10 anos, não devendo ser-lhe aplicada pena superior a 3 anos e meio;
33. Por simples alteração da qualificação jurídica, ou com reenvio à 1ª Instância do processo para cumprimento do disposto no artº 358º do C.P. Penal, que neste caso teria sido violado;
34. Então a execução da pena a aplicar ao arguido B... deveria ser suspensa, pelas razões constantes de fls. 83, desta motivação que aqui se dá por reproduzida; Subsidiariamente e sem prescindir;
35. Se este Alto Tribunal, não acolher – o que por cautela de patrocínio tem de admitir-se – as razões

atrás invocadas, então a pena aplicada ao arguido B..., deverá ser reduzida, consideravelmente, dentro da moldura legal;

36. Tal pena aparece como excessiva e desproporcional, excedendo notoriamente as exigências da prevenção geral (não há notícia de condenações em Portugal por tal crime), e excede manifestamente a culpa do arguido;

37. O Tribunal não valorizou devidamente a personalidade do arguido, a sua colaboração com a Justiça, o facto de ser um delinquente primário, ser pobre e ter 5 filhos menores de tenra idade a seu cargo, sendo assim violado o disposto no artº 71º do C. Penal;

38. A pena a aplicar-lhe devia ser muito próxima do mínimo legal e nunca superior a 5 anos e meio;

39. Como já se conclui o arguido C... não terá cometido o crime de escravidão previsto na alínea b) do artº 159º do C. penal;

40. Não se prova o dolo específico – intenção – elemento do tipo previsto no artº 159º alínea b) do C. Penal, que assim terá sido violado;

Por outro lado,

41. Tendo-lhe sido imputado o crime a título de dolo eventual, tal não se verificará, já que os pontos 24, 27 e 30, dos factos provados foram incorrectamente decididos, já que se atribuem ao arguido C..., factos que apenas foram praticados pelo arguido B...;

42. Houve desse modo, erro notório na apreciação da prova, no que respeita a tais pontos de facto, o que constitui erro notório na apreciação da prova, vício previsto no artº 410º nº 2 da alínea c) do C.P. Penal, que terá sido violado;

43. Deverá pois o arguido ser absolvido pela prática do crime de que foi condenado; Só por cautela de patrocínio;

44. Se assim se não entender, o que só por hipótese tem de admitir-se então a pena aplicada ao arguido C... não devia ser superior ao mínimo legal de 5 anos, dada a sua diminuta culpa e as circunstâncias atenuantes existentes a seu favor, em obediência ao disposto no artº 71º do C. Penal, que terá sido violado; E,

45. O que a verificar-se deverá conduzir à suspensão da execução da pena, pelas razões indicadas a fls. 88 destas alegações, aqui dadas por reproduzidas por economia processual;

46. Deve pois revogar-se a dita sentença, nos termos acima indicados, com todas as legais consequências;

Assim farão V^{as} Ex^{as} Justiça.”

Em 1ª Instância, o MºPº defendeu a improcedência do recurso, concluindo pela seguinte forma:

“a. O Tribunal errou ao julgar provados os factos vertidos nos pontos nº 5 a 11 dos factos provados da forma como o fez.

b. No mais, a prova produzida foi correctamente valorada, pelo que não se verifica qualquer erro de julgamento da matéria de facto.

a. Não se verifica qualquer erro notório na apreciação da prova.

b. Não foi violado o princípio in dubio pro reo.

c. Os factos cometidos pelos recorrentes B... e C... integram, respectivamente, a prática de um crime de escravidão, p. e p. pelo art. 159.º al. a) e b) do Código Penal.

d. As penas de prisão concretamente aplicadas foram correctamente doseadas e são adequadas às finalidades de prevenção que com ela se visam alcançar e proporcionadas ao grau de culpa dos agentes.

e. Não foram violadas quaisquer normas jurídico-constitucionais, jurídico-penais, nem jurídico-processuais penais.

Porém, V. Exas. farão a costumada Justiça”

Neste Tribunal, o Sr. Procurador-Geral Adjunto pronunciou-se, igualmente, pela improcedência do recurso, subscrevendo a resposta do MºPº em 1ª Instância.

Com interesse para a decisão a proferir, é o seguinte o teor do Acórdão recorrido.

Factos Provados:

“1. Em data, não concretamente apurada, do ano de 2006, D... encontrava-se a residir temporariamente num Centro de Acolhimento (“I...”) em Lisboa/..., quando ali surgiu um indivíduo de etnia cigana que não conhecia e que depois soube tratar-se do arguido B..., que lhe propôs a ida para a atividade agrícola em Espanha, informando-o que teria de permanecer naquele país até ao fim da campanha (vindima), isto é, até ao final do mês de Outubro.

2. Como contrapartida para a prestação daquele serviço, iria auferir a importância diária de €20,00/dia (a receber, em “bolo”, no final de cada mês), “com tudo incluído” (transporte, alojamento e alimentação); à parte, cabia-lhe suportar os custos do consumo de tabaco e álcool.

3. Porque se encontrava desempregado, sem perspectivas de trabalho e vivendo sérias dificuldades financeiras, aceitou a proposta formulada, decidindo acompanhá-lo para aquele país.

4. Foram ainda acompanhados por dois outros indivíduos/trabalhadores.

5. Fizeram-se transportar na viatura do arguido B..., tratando-se de um furgão Mercedes-Benz, de cor verde, de matrícula desconhecida.

6. Deslocaram-se de imediato para a residência que aquele mantinha arrendada em Espanha/.../..., ali ficando instalados com aquele e respectiva família (a companheira, J..., o “sogro”, o arguido C... e a “sogra”);

7. Os três trabalhadores ficaram alojados no sótão do imóvel, acompanhados de outros trabalhadores que já ali se encontravam; 8. De imediato o arguido B... solicitou aos trabalhadores os respectivos Bilhetes de Identidade, alegando necessitar dos mesmos para regularização da situação laboral / “dar de alta”, mantendo aquele documento na respectiva posse e devolvendo-lhos volvidos alguns meses;

9. O arguido B... acompanhou-os ainda a uma instituição bancária, ali tendo procedido à abertura de uma conta, co-titulada pelo referido arguido (aquele havia argumentado que tal procedimento era condição para recebimento das remunerações pagas pelos patrões espanhóis).

10. A partir daquele momento e durante cerca de três anos coube a D... a realização de todo o tipo de tarefas agrícolas na província de .../Espanha, por conta do arguido B... (efectuou ali diversas campanhas agrícolas, designadamente vindima - Setembro/Outubro, poda - Dezembro/Janeiro, apanha do pimento, da couve e da maçã).

11. Como as tarefas eram realizadas em diferentes pontos daquela província, iam-se também deslocando, ficando, nessas alturas, D... alojado inicialmente num camião onde dormia em beliches do tipo militar e, posteriormente, em tendas de campismo, sendo que o arguido e demais elementos da respectiva família ficavam em “camiões-vivenda”/caravanas/roulottes, formando acampamentos.

12. O arguido B... avisou D... que não poderia abandonar os “acampamentos” sem a sua autorização. Este chegou a sair algumas vezes, sempre com a autorização daquele, deslocando-se a cafés nas imediações.

13. O trabalho (rotina diária) em Espanha processava-se normalmente da seguinte forma:

- De manhã (no Verão às 07H00, no Inverno às 08H00) deslocavam-se para as “fincas” nas “carrinhas” daqueles (Mercedes-Benz, de cor verde, Ford ..., Citroen ..., e Toyota ..., de cor amarela, com matrícula portuguesa desconhecida), usualmente pelo arguido B... ou pelo arguido C...;
- Pelas 10H00, efectuavam uma pequena paragem para “a merenda”;
- Almoçavam no período compreendido entre as 12H00/12H30 e as 13H00/13H30; as refeições ocorriam no “campo” e eram compostas, normalmente, de arroz/massa, “espinaço/osso de frango” e lentilhas.
- O arguido e os elementos da respectiva família alimentavam-se nos mesmos locais, cabendo-lhes a “melhor parte da comida - a carne”; aqueles também trabalhavam, orientando as tarefas dos restantes trabalhadores e controlando/fiscalizando a prestação laboral; quando se apercebiam da paragem de qualquer trabalhador, logo intervinham, impondo a continuação do trabalho;
- Regressavam ao “acampamento” pelas 18H00/19H00, ali jantando, após tomarem banho num qualquer rio/riacho/canal que houvesse nas imediações;
- Faziam as necessidades fisiológicas “no campo”;
- Não se encontravam “fechados”, mas o arguido B... impunha alguns condicionalismos às saídas dos “acampamentos” (tal sucedia apenas quando o mesmo permitia e visando a deslocação a cafés; às companheiras cabiam as “tarefas domésticas”).

14. Quanto à remuneração, no final de cada mês, o patrão espanhol entregava ao arguido B... os cheques correspondentes às remunerações devidas aos trabalhadores, deslocando-se aquele com os trabalhadores ao banco, entregando a cada um, apenas à entrada do mesmo, o respectivo cheque e aguardando pela saída dos trabalhadores, altura em que lhes retinha os valores correspondentes.

15. Se questionado, o arguido B... respondia que “não tinha dinheiro para lhes entregar”; se reclamavam eram agredidos fisicamente por aquele (designadamente, com murros) o que sucedeu por diversas vezes com o assistente D....

16. Durante aquele período de cerca de três anos, até ao dia 12 de Agosto de 2009, e enquanto prestou o seu trabalho por conta do arguido B..., este apenas lhe entregou, em alguns fins-de-semana, a importância de € 5,00; ademais, por alturas de um Natal (e uma única vez), entregou-lhe cerca de € 50,00.

17. Durante aquele período, deslocaram-se a Portugal sempre por alturas da Páscoa e no mês de Agosto, onde permaneciam por períodos que duravam entre 10 dias a 1 mês.

18. Em Portugal dedicavam-se à venda ambulante de chapéus, guarda-chuvas, cestos e balões em diversas feiras e festas populares (nomeadamente, em ... e ...) -, sendo que D... pernoitava normalmente nas condições supra relatadas; as necessidades fisiológicas eram feitas “ao ar livre” e banhava-se “nas fontes e riachos”;

19. D..., em Portugal, chegou a pernoitar também na residência de uma filha do arguido C..., situada em ..., ... (ocupou a respectiva cave; quando se encontrava naquele local, o arguido B... acompanhou-o ao registo civil para renovação do B.I., tendo indicado como morada aquele imóvel);
20. Nas festas e feiras era controlado pelo arguido B..., que, pelo menos, no final de cada dia “lhe exigia contas” (sempre que se verificava uma diferença de valor, mesmo que decorrente de um erro, aquele agredia-o fisicamente);
21. Em indeterminado momento em Espanha, porque o arguido B... não dispunha de trabalho para manter D... ocupado, entregou-o ao arguido C....
22. Enquanto esteve entregue ao arguido C... e para ele prestou trabalho, o modo como o trabalho se desenvolvia e as condições de vida de D... eram exactamente as mesmas que ocorriam quando prestava trabalho por conta de B..., até porque a maior parte do tempo, os ditos arguidos trabalhavam e residiam nos mesmos locais.
23. O arguido C... não lhe pagou qualquer montante pela sua prestação laboral.
24. Todavia, este nunca o agrediu, nem o ameaçou.
25. Após, em data não concretamente apurada, o arguido C... “entregou” D... ao arguido B..., passando então o assistente a prestar novamente o seu trabalho por conta do arguido B....
26. Não obstante, as “condições laborais e de vida” de D... mantinham-se. Durante aquele período, contactou telefonicamente, algumas vezes, com os seus familiares em Portugal, através do telemóvel do arguido B... que, invariavelmente, “controlava” o teor das conversas, assistindo ao seu decurso.
27. Pese embora durante aquele lapso temporal tenha tido algumas hipóteses de fuga (por ausência/distância daqueles), nunca as concretizou por receio de represálias sobre a sua integridade física e vida; em Espanha sentia-se “perdido”, por desconhecimento do território. D..., além das quantias indicadas em 16., nunca recebeu qualquer outro tipo de compensação, monetária ou outra, pelo trabalho prestado. Quando reivindicava/reclamava junto do arguido B... com vista ao recebimento do seu salário, era vítima de agressões. A força dos arguidos advinha do “clima de intimidação” que o arguido B... criava nos trabalhadores, nomeadamente através das ameaças (dizendo ao ofendido D... que o mandava para o rio; dizendo-lhe que o pendurava) e agressões perpetradas pelo arguido B....
28. O arguido B... afirmou a D... que era portador de uma arma de fogo/pistola, dizendo-lhe: “um dia espeto-te um tiro”.
29. As condições de vida em que D... viveu naquele período em nada correspondiam àquilo que lhe fora inicialmente proposto/prometido.
30. O poder dos arguidos em Espanha advinha do facto de:
- B... criar um clima de intimidação entre os trabalhadores, por intermédio de ameaças e agressões;
 - Os arguidos controlarem permanentemente a localização de D...;
 - De D... se encontrar em território para si desconhecido.
31. Uma vez em território nacional, os arguidos estreitavam o controlo sobre D..., dificultando-lhe a solicitação de auxílio.
32. D... vive num clima de intranquilidade, receando vir a ser encontrado por aqueles e obrigado a com eles regressar.

33. O arguido B..., ao agir da forma supra descrita, actuou com o propósito concretizado de causar medo e inquietação a D..., fazendo-o temer pela sua integridade física e pela sua vida, pois este receava que a qualquer momento aquele o poderia ofender na sua integridade física e mesmo causar a sua morte, e desse modo, obrigando-o contra a sua vontade a trabalhar sob as ordens dos arguidos.

34. O arguido C..., tendo conhecimento das condições laborais e de vida do assistente D... enquanto este havia trabalhado por conta do arguido B..., nomeadamente, do medo, inquietação e intimidação criados ao assistente pelo arguido B... por intermédio de ameaças e agressões – como também sabia o arguido C... – aceitou que D... lhe fosse entregue, aproveitando tal circunstancia para o obrigar a trabalhar sob as suas ordens. Posteriormente, ao entregar novamente o assistente D... ao arguido B..., o arguido C... sabia que o arguido B... sujeitaria o assistente ao mesmo tratamento que para com este havia anteriormente adoptado, conformando-se o arguido C... com esse facto.

35. Os arguidos, ao agir da forma descrita, actuaram em conjugação de esforços e de intentos e de acordo com um plano previamente delineado, com o propósito de manterem o assistente D... controlado espacialmente.

36. Os arguidos sabiam que:

- a) Pelo facto de manterem o assistente controlado espacialmente;
- b) Pelo facto de o arguido B... agredir o assistente D...;
- c) Pela circunstância de o arguido B... ameaçar o assistente D...;
- d) Pela circunstancia de B... coagir o assistente D..., e;
- e) Pelo facto de o cederem entre si nos termos referidos em 21. a 25.;

Constrangiam o assistente na sua liberdade e dignidade, com o objectivo de obter vantagens económicas decorrentes do trabalho do mesmo, e que reduziam D... á condição de escravo, como pretenderam.

37. Os arguidos sabiam que as suas descritas condutas eram proibidas e punidas pela lei penal.

38. No início do ano de 2007 o ofendido K1... encontrava-se em Mirandela a arrumar automóveis (estava sozinho, sem abrigo e padecia de dependência do álcool), junto da praça/mercado municipal, quando foi abordado por um indivíduo de etnia cigana que não conhecia e que depois soube tratar-se do arguido C...;

39. Este propôs-lhe então vir a trabalhar por sua conta, na venda ambulante em festas e feiras em território nacional. Como contrapartida para a prestação daquele serviço, ofereceu-lhe a importância mensal de “trinta contos” (150€) (a receber no final de cada mês), estando incluído o transporte, o alojamento e alimentação.

40. Pelo facto de se encontrar desempregado, sem perspectivas de vida e de trabalho e vivendo sérias dependências e dificuldades financeiras, aceitou a proposta formulada, vindo a acompanhá-lo para a respectiva residência, em ... (junto à Biblioteca e Igreja), volvidos 2 ou três dias, quando aquele o ali recolheu, conforme acordado – fazia-se transportar num veículo Mitsubishi ..., de caixa aberta, com toldo de cor cinzento e com matrícula portuguesa (desconhecida) -.

41. Uma vez em ..., E... conheceu a família daquele, sendo que nenhum outro trabalhador se encontrava no local.

42. Enquanto aquela família ficou instalada e pernoitava na respectiva residência (em reboco de cimento, sem tinta, constituída apenas por r/c, cozinha com lareira e três quartos), E... pernoitava no interior de um furgão (compartimento da caixa, com um colchão) Ford ..., de cor branca, com matrícula portuguesa (desconhecida) que o arguido C... ali mantinha, fazendo as necessidades fisiológicas no campo e banhava-se numa bacia com água tépida.

43. Manteve-se naquele local durante algum tempo, cabendo-lhe, designadamente, a tarefa de recolha de lenha. Por diversas vezes acompanhou aqueles para algumas festas (onde se dedicavam à venda ambulante), que decorriam em localidades relativamente próximas (... , ... , ... – ... , etc.), onde se instalavam e permaneciam durante quatro ou cinco dias, “montando o toldo” (barraca tipo tenda).
44. Cabia-lhe vender todo o tipo de artigos, designadamente chapéus, cestos, brinquedos, guardas-chuva e balões, entregando a totalidade dos montantes auferidos ao arguido C....
45. E... pernoitava naquele furgão, fazendo as necessidades fisiológicas “ao ar livre”.
46. E... conheceu entretanto o arguido B... (companheiro da filha do arguido C...) numa daquelas festas, já que este se dedicava ao mesmo tipo de actividade.
47. Não obstante o passar do tempo, e pese embora confrontado por E... com a ausência de pagamento, invariavelmente o arguido C... protelava a entrega de qualquer remuneração, dizendo, designadamente, “recebes depois, quando receberes todo juntinho até é melhor”.
48. Volvidos cerca de seis meses após a chegada a ... , o arguido C... informou-o que iriam deslocar-se para Espanha, visando ali trabalhar na actividade agrícola, alegando que E... “ali iria ganhar muito mais dinheiro”.
49. E... acompanhou-os então para aquele país, ficando alojados em “acampamentos/tendas” que instalavam nas imediações das fincas onde havia trabalho, na província de ... (...).
50. Durante o tempo em que permaneceram em Espanha, vários outros trabalhadores portugueses trabalharam por conta do arguido C..., que os recrutava, designadamente nas artérias/ruas daquela província espanhola.
51. Mais tarde, o arguido C... adquiriu uma residência naquele local, ficando os trabalhadores alojados num sótão daquela casa.
52. Em momento e circunstâncias não concretamente apuradas o arguido C... apossou-se do Bilhete de identidade do ofendido E..., não mais lho tendo devolvido.
53. Sempre que o ofendido E... solicitava o bilhete de identidade, o arguido C... recusava a entrega daquele documento, dizendo, designadamente, “não precisas do Bilhete de Identidade para nada”.
54. A partir do momento em que se deslocou para Espanha e durante cerca de um ano e meio, coube-lhe a realização de todo o tipo de tarefas agrícolas na província de .../Espanha, por conta do arguido C....
55. Efectuou ali as diversas campanhas agrícolas, designadamente vindimas (Setembro/Outubro), poda (Dezembro/Janeiro), apanha da “acelga” e do pimento.
56. Como as tarefas eram realizadas em diferentes pontos daquela província, iam-se também deslocando, ficando os trabalhadores alojados em tendas de campismo e os elementos daquela família em “camiões-vivenda”/caravanas/roulotes, formando “acampamentos”.
57. O arguido C... avisou-o que não poderia abandonar os “acampamentos” sem a sua autorização.
58. E... saiu algumas vezes, deslocando-se a cafés nas imediações.
59. O trabalho (rotina diária) processava-se normalmente da seguinte forma:

- De manhã (por volta das 06.00 horas, cabia a E... a tarefa de acender o lume) deslocavam-se para as “fincas” em “carrinhas” (Fiat ..., de cor verde, matrícula espanhola e Toyota ..., de cor amarela, com matrícula portuguesa desconhecida) usualmente conduzidas pelo arguido C...;

- Aí iniciavam o seu trabalho por volta das 8 horas da manhã;

- Entre as 10.00 e as 10.30 horas, efectuavam uma pequena paragem para “a merenda”;

- Almoçavam no período compreendido entre as 13H00 e as 14H00; tais refeições sucediam no “campo”. Os elementos da família do arguido alimentavam-se nos mesmos locais.

O arguido C... também trabalhava, orientando as tarefas dos trabalhadores que havia angariado e controlando/fiscalizando a prestação laboral.

- Cessavam o trabalho nas “fincas” por volta das 18.00 horas, altura em que regressavam ao “acampamento”, ali jantando, após tomarem banho numa bacia.

Faziam as necessidades fisiológicas no campo.

60. E... não se encontrava “fechado”, mas o arguido C... impunha alguns condicionalismos às saídas dos “acampamentos”, pretendendo que tais saídas apenas sucedessem quando o mesmo permitisse e visando a deslocação a cafés.

61. No final de cada mês, os patrões espanhóis entregavam ao arguido C... os valores correspondentes às remunerações devidas aos trabalhadores, que aquele retinha.

62. Numa única vez, o arguido C... entregou a E... um cheque que havia recebido de um daqueles patrões, no valor de € 1.200,00, acompanhando-o a uma entidade bancária, onde E... efectuou o respectivo levantamento, sendo aguardado no exterior pelo arguido C... e pela respectiva mulher.

63. À saída, a esposa do arguido C... solicitou a E... a entrega da totalidade daquele valor, ao que este acedeu, “por reear represálias”. Nessa altura o ofendido E... pediu que lhe entregassem, pelo menos, € 50, tendo a esposa do arguido C... manifestado resistência à pretensão de E..., mas acabando por lhe entregar os € 50,00 após intervenção nesse sentido da parte do arguido C....

64. Durante aquele período de dois anos, o arguido C..., além da quantia indicada em 62., apenas lhe entregou, por uma única vez, €100,00 (quando o deixou em Mirandela).

65. Durante aquele período, deslocaram-se a Portugal duas ou três vezes, aqui permanecendo por períodos que duraram entre 10 dias a 1 mês.

66. Em meados do ano de 2009, regressaram a território nacional, deixando E... em Mirandela, dizendo o arguido C... que voltaria a recolhê-lo após a passagem de ano.

67. O bilhete de identidade de E... não lhe foi devolvido, sendo que este apenas desejava não voltar a vê-los.

68. Entretanto, o arguido voltou a procurar o ofendido, E..., em Mirandela, sem sucesso.

69. Por duas ou três vezes, outros indivíduos ciganos (cujas identidades se desconhece, mas que mantinham ali outros trabalhadores portugueses) abordaram o arguido C... durante o tempo em que o ofendido E... permaneceu com o arguido C..., para “comprarem o E...”, dizendo, “dou-te cem contos pelo homem”, tendo o arguido C... respondido “este não, eu não o vendo por nada, ele já é da família”.

70. Com excepção do referido em 62. e 64., E... nunca recebeu qualquer tipo de compensação, monetária ou outra, pelo trabalho prestado ao serviço do arguido C....

71. As condições de vida em que viveu naquele período em nada correspondiam àquilo que lhe fora inicialmente prometido.

72. No mês de Janeiro de 2010, quando andava a vaguear pelas ruas de Mirandela, foi ajudado por um casal daquela cidade, que o encaminhou para uma instituição de recuperação social, sendo que ainda hoje se mantém em instituições semelhantes, com “sucesso”.

73. No dia 14 de Setembro de 2011, foi efectuada diligência de busca domiciliária visando a morada sita no ..., n.º ., ..., ..., correspondente à residência do arguido C... e respectiva esposa, ali tendo sido recuperado Bilhete de Identidade (original) n.º, referente ao ofendido E....

74. Não são conhecidos antecedentes criminais aos arguidos.

75. O arguido B...:

- a) Nasceu no dia 09-11-1981, no seio de uma família de etnia cigana, fixada no concelho de Vila Flor.
- b) Frequentou o ensino, embora com pouco sucesso, completando o 4.º ano de escolaridade, após várias reprovações.
- c) Aos 14 anos começou a desenvolver actividade laboral na agricultura, área a que dedicou grande parte da sua vida profissional.
- d) Aos dezoito anos “casou” segundo os costumes de etnia cigana com J... (filha do arguido C...), abandonando então o agregado de origem e passando a residir em ..., onde habitavam os familiares da companheira.
- e) B... manteve a actividade laboral na agricultura, que exercia sobretudo em Espanha, onde se deslocava em campanhas agrícolas sazonais. Recolhia também sucata, o que ocupava o arguido quando permanecia no local onde morava. Também confeccionava e vendia cestos e chapéus nas feiras.
- f) Em 2010 o arguido decidiu recorrer ao apoio estatal, passando a auferir o rendimento social de inserção.
- g) Por sugestão da Segurança Social, o seu agregado familiar abandonou a caravana onde habitava e fixou-se, arrendando uma casa na localidade do ..., do mesmo concelho de ..., pagando de renda € 50 mensais.
- h) Aufere na actualidade apoio estatal no valor de € 695,00/mês, a que acresce o abono de família, recebendo, na totalidade, o valor de € 975,00.
- i) É pai de cinco filhos com idades compreendidas entre os onze anos e os dez meses de idade.
- j) Encontra-se preso preventivamente à ordem do presente processo desde o dia 15-09-2011.
- k) Tem revelado um comportamento adequado no EPR de Lamego.

76. O arguido C...:

- a) Nasceu no dia 25-05-1958 no seio de uma família de etnia cigana, oriunda do concelho de
- b) É analfabeto.
- c) Começou a trabalhar aos 11 anos de idade, para agricultores próximos do local onde vivia, para quem desenvolvia tarefas indiferenciadas e que lhe forneciam alojamento e alimentação e cujo salário era integralmente gerido pela progenitora e pelo seu padrasto.
- d) Foi exercendo a sua actividade laboral da forma descrita até contrair matrimónio, mantendo-se a trabalhar na agricultura na companhia da cónjuge, mas de forma nem sempre regular, auferindo um salário diário.
- e) O casal começou por ocupar uma barraca num acampamento cigano de ..., sendo que passados alguns anos conseguiu adquirir um pequeno terreno onde construiu uma outra barraca.
- f) Há anos atrás decidiu deslocar-se para Espanha com a cónjuge e alguns dos seus filhos para trabalhar na época das vindimas. Desde essa altura que passou a deslocar-se para o país vizinho para desenvolver tarefas agrícolas sazonais e acabou por vender a sua habitação e adquirir uma outra em Espanha.
- g) Retomou ao acampamento cigano de ... e passou então a dedicar-se à recolha e venda de sucata, bem como à confecção e comercialização de artigos (nomeadamente, de cestos e chapéus) em festas populares sobretudo na época estival.
- h) Do casamento nasceram nove filhos, sendo que o mais novo tem 16 anos de idade.

- i) Há cerca de um ano que tem residência voluntária numa freguesia de Sernancelhe, local onde conseguiu adquirir uma habitação.
- j) Tal casa é constituída por r/c e dois pisos e está dotada das infra-estruturas necessárias, apresentando porém um baixo índice de habitabilidade atentos os elementos que nela residem. Ali vivia o arguido (antes de ser preso preventivamente), a sua cónjuge, uma filha de dezasseis anos, dois netos em idade escolar, uma outra filha do arguido (K...) e os seus três descendentes, um filho e respectiva companheira e um descendente deste casal.
- k) C... paga de prestação mensal da casa o valor de € 150,00 e que tem conseguido solver.
- l) O arguido e seu agregado familiar beneficiam de atribuição do rendimento social de inserção, que no caso de C... ascende a € 300,00 mensais.
- m) Encontra-se preso preventivamente à ordem do presente processo desde 15-09-2011.
- n) Não existe qualquer referência negativa à sua conduta em meio prisional.”

Motivação da convicção do Tribunal:

“Para formar a sua convicção o Tribunal alicerçou-se, genericamente, na prova documental junta aos autos e bem assim, nas declarações dos arguidos, nas declarações do assistente D..., e ainda, nos depoimentos das testemunhas, tudo concatenado com as regras da experiência comum.

Assim, desde logo, o Tribunal tomou em consideração o teor dos seguintes documentos:

- Ficha de carta de condução relativa ao arguido B... (cfr. fls. 9);
- Ficha de carta de condução relativa ao arguido C... (cfr. fls. 10);
- Resultado de pesquisa de veículos registados na CRA em nome de B... (cfr. fls. 13 a 18), através do qual se pode constatar que, em 21-01-2010, o arguido tinha registadas em seu nome 5 viaturas automóveis (entre as quais, uma viatura de marca “Ford”, modelo “...”, de cor azul – cfr. fls. 15); Informação das autoridades espanholas constante de fls. 817 a 821 (e respectiva tradução de fls. 966 a 970) através da qual se pode constatar que tal arguido, à data da informação, tinha registados em seu nome, no Reino de Espanha, 4 veículos automóveis;
- Resultado de pesquisa de veículos registados na CRA em nome de C..., através do qual se pode verificar que, em 21-01-2010, tal arguido tinha registados em seu nome 8 veículos automóveis (cfr. fls. 19 a 27); Informação das autoridades espanholas constante de fls. 830 e 831 (a tradução encontra-se a fls. 977 e 978) através da qual se pode constatar que tal arguido, á data da informação, tinha registado em seu nome, no Reino de Espanha, 1 veículo automóvel;
- Pedido do Bilhete de Identidade do arguido B... (cfr. fls. 38 a 42);
- Pedido do Bilhete de Identidade do arguido C... (cfr. fls. 43 a 47);
- Auto de Busca e apreensão constante de fls. 199 e 200 à residência situada no ..., n.º ., ..., ..., realizada em 14-09-2011 aí tendo sido apreendido, além do mais, recibos de vencimento de E... do ano de 2007 já em Espanha (cfr. fls. 202 e ss.), o bilhete de identidade do ofendido E... (cfr. fls. 216); Reportagem fotográfica de fls. 231 e ss. inerente a tal busca domiciliária;
- Documentos de fls. 404 e ss. (nomeadamente, atestado de residência do arguido C..., constante de fls. 404; Ficha de Eleitor de C...; Atestado de residência do arguido B... de fls. 405; Certificados de matrícula dos filhos de B... de fls. 409 e ss; Comprovativo de transferência do CDSSS de Viseu para conta do arguido B... de € 223,60; relatório de consulta no Hospital ..., EPE relativo ao arguido C... – cfr. fls. 437 -).

- Documentos de fls. 550 e ss. (especialmente, fotocópia da certidão de nascimento de L..., filha de B... – cfr. fls. 550 e 555 - ; Fotocópia do cartão de cidadão de M... – cfr. fls. 551 -; Fotocópia do cartão de cidadão de J... - cfr. fls. 552 - ; Fotocópia do cartão de cidadão de N... - cfr. fls. 553 -; Fotocópia do cartão de cidadão de O... - cfr. fls. 554 –

- Dados laborais existentes no Reino de Espanha sobre B... (cfr. fls. 808 a 812 e respectiva tradução a fls. 957 a 961);

- Dados de domicílio, rendimentos e contas bancárias do arguido B... em Espanha no ano fiscal de 2010 (cfr. fls. 814 a 815 e respectiva tradução a fls. 963 a 964);

- Dados laborais existentes no Reino de Espanha sobre o arguido C... (cfr. fls. 824 a 826, sendo que a tradução de tais documentos consta de fls. 971 a 973);

- Dados de domicílio do arguido C... no Reino de Espanha no ano Fiscal de 2010 (cfr. fls. 829 sendo que a inerente tradução consta de fls. 976);

- Dados laborais existentes no Reino de Espanha sobre D... (cfr. fls. 833 a 835, sendo que a sua tradução consta de fls. 980 a 982);

- Dados de domicílio e rendimentos inerentes ao ano fiscal de 2009, existentes no Reino de Espanha e relativos ao assistente D... (cfr. fls. 838, constando a inerente tradução a fls. 985);

- Resultado da consulta das bases de dados do Reino de Espanha relativamente á informação sobre E... (cfr. fls. 987 e ss.).

- Informações das autoridades espanholas sobre a existência de seguros relativos ás viaturas de matrícula espanhola (cfr. fls. 1000 e ss.).

- Informação das autoridades espanholas acerca da titularidade, por parte do arguido C..., de um numero de telemóvel espanhol (cfr. fls. 1032).

- CRC's dos arguidos de fls. 140, 142, 1233 e 1234.

- Relatórios sociais de fls. 1236 e ss. (relativo ao arguido B...) e 1315 a 1318 (respeitante ao arguido C...), no que tange à situação pessoal e económica dos arguidos.

Entrando agora na apreciação critica dos depoimentos dos arguidos B... e C..., importa referir que admitiram eles uma boa parte dos factos cuja prática lhes era imputada nos presentes autos, sendo certo que tal admissão é consentânea e coerente com a demais prova produzida nos presentes autos (especialmente, com os documentos constantes dos autos e com as declarações de D... e de E...).

Nessa parte, pois, os depoimentos dos arguidos convenceram o Tribunal (sendo certo que o mesmo sucedeu no tocante aos depoimentos dos arguidos atinentes á respectiva situação pessoal e económica, uma vez que eles se mostraram, grosso modo, corroborados, pelos relatórios sociais constantes dos autos).

Já na parte em que os depoimentos dos arguidos foram no sentido da infirmação de alguns dos factos vertidos no libelo acusatório, não lograram eles obter credibilidade probatória.

Em primeiro lugar, porque seus depoimentos nesta sede se mostraram interessados (os arguidos são os principais afectados por uma possível e eventual sentença/acórdão condenatória a proferir nos presentes autos).

Em segundo lugar, nesse âmbito, os depoimentos dos arguidos mostraram-se incongruentes e ilógicos quando analisados em face das regras da experiência comum.

Assim, por exemplo, não faz qualquer sentido, em face das máximas da experiência comum, a justificação oferecida pelo arguido B... para a circunstancia de que, logo que recebia os cheques da entidade empregadora, os entregava aos seus trabalhadores e de imediato os acompanhava à respectiva instituição de crédito para que estes procedessem ao inerente levantamento e, logo à saída do banco (ou, caso fossem imediatamente para “casa”, neste local), lhe entregassem todo o dinheiro que assim haviam recebido.

Como igualmente carece de sentido, em face das regras da experiência, a afirmação do arguido B... de que, por vezes, o dinheiro que os trabalhadores recebiam não chegava para lhe pagar as “despesas” que aquele havia tido com eles (com vinho e tabaco).

Como também não tem lógica a afirmação (proferida pelo arguido B...) de que nunca agrediu o assistente D... e que este “saía quando queria e entrava quando queria” quando a verdade é que D... trabalhou (nas condições descritas nos factos provados) para o arguido B... durante cerca de 3 anos e, nesse período, apenas dele recebeu, em alguns fins-de-semana, a importância de € 5 e, uma única vez pelo Natal, a importância de € 50,00. De facto, nenhuma razão explicaria que D... (que conta já com cerca de 50 anos e que à data contava já com uma experiência de vida assinalável – note-se que D... que antes havia estado já a trabalhar em Sevilha e tendo ali, depois de ficar desempregado, sobrevivido através do que recebia a estacionar carros e pedir em frente às igrejas, dormindo, nessa altura, ao relento e que, depois disso, se encontrava a residir no Centro de Acolhimento ...) se submetesse, durante cerca de 3 anos, a tais provações se não existissem circunstancias excepcionais que lhe impusessem a necessidade de as suportar.

Talqualmente, carece de lógica a explicação, produzida pelo arguido C..., para a circunstância de, durante todo o período em que E... trabalhou por “sua conta” (por conta do arguido C...), apenas lhe ter dado a quantia de € 100,00 (adiantando que, uma outra vez, lhe “emprestou” € 50,00) – o arguido referiu que se tratava do “saldo” positivo resultante da subtração das despesas por tal ofendido efectuadas com tabaco e álcool às receitas por tal ofendido geradas com o seu trabalho.

Em terceiro lugar, porque essas declarações produzidas pelos arguidos no sentido da infirmação dos factos descritos na acusação foram, em larga medida, frontalmente contrariadas pelas declarações do assistente D... e pelo depoimento da testemunha E....

E, relativamente às declarações do assistente D... e da testemunha E..., importa afirmar que elas se mostraram espontaneamente desenvolvidas e, tanto quanto possível (considerando a concreta materialidade constante da acusação e o período de tempo da sua ocorrência), pormenorizadas sendo, ademais, sustentadas em indiscutível razão de ciência.

Alem disso, a descrição que o assistente D... e a testemunha E... fizeram dos factos é inteiramente lógica em face das regras da experiência comum (dando-se aqui por reproduzidos grande parte dos argumentos atrás expendidos acerca da falta de coerência da versão apresentada pelos arguidos quanto aos factos por eles infirmados, argumentação essa que, agora, pela inversa, de “per si” sustenta uma parcela considerável dos factos confirmados pelo assistente D... e dos factos cuja veracidade foi asseverada pela testemunha E...).

Por outro lado, mesmo quando analisadas internamente (v.g. confrontadas as declarações prestadas em audiência pelo agora assistente D... com as declarações para memória futura por si oportunamente prestadas; concatenado o depoimento da testemunha E... com as declarações para memória futura que este também prestou nos autos) não se vislumbram quaisquer incoerências sensíveis, susceptíveis de abalar a sua credibilidade probatória.

Por essas razões, o Tribunal lançou mão das declarações de D... e do depoimento de E... para a confirmação dos factos dados como demonstrados (e nos exactos termos em que o foram).

Relativamente à prova testemunhal deverá afirmar-se que a primeira testemunha inquirida foi P..., inspetor da Polícia Judiciária, que efectuou diligências no âmbito do inquérito dos presentes autos.

Esta testemunha não demonstrou qualquer conhecimento directo dos factos em discussão nos presentes autos, pelo que o seu depoimento em nada convenceu o Tribunal. Posteriormente, procedeu-se à inquirição da testemunha Q..., guarda da G.N.R. que, de modo calmo, sereno e directo transmitiu ao Tribunal o motivo pelo qual foram encetadas as diligências no sentido do estabelecimento de contacto com o assistente D..., o modo como tal contacto ocorreu e a reacção do dito assistente.

Desta forma, o depoimento desta testemunha auxiliou o Tribunal na formação da sua convicção.

S..., amigo do ofendido E..., aposentado da função pública, foi também inquirido como testemunha nos presentes autos.

Esta testemunha não mostrou conhecimento directo dos factos vertidos na acusação. No entanto, a testemunha demonstrou saber as condições de vida deste ofendido anteriores à alegada prática dos factos descritos na acusação e, mesmo, as suas actuais condições de vida.

Esta testemunha respondeu, tanto quanto possível, de forma directa às questões que lhe foram sendo colocadas, sendo certo que o seu depoimento aparentou ser completamente desinteressado relativamente à decisão que vier a ser tomada no presente feito crime.

Por tais razões, ao depoimento desta testemunha foi atribuída inteira credibilidade probatória.

T... (casado, reformado, residente em ...), U... (residente em ..., a cerca de 150 metros da residência do arguido C...), V..., W... (vizinha do arguido B...) e T..., apresentaram também o seu testemunho.

O depoimento destas testemunhas, no essencial, foi no sentido da abonação do carácter dos arguidos, tendo sido, como tal, considerados.

Alguns destes testemunhos versaram também sobre a situação pessoal e económica dos arguidos, tendo nessa sede sido valorados positivamente na parte em que foram concordantes com as declarações dos próprios arguidos e com o teor dos relatórios sociais a que acima já se fez referência.

F..., Y..., G... e H... foram também inquiridos como testemunhas.

O depoimento destas testemunhas, no importante, foi no sentido de terem estado em Espanha a trabalhar para o arguido B... (testemunha F..., Y..., G...) ou em sociedade para o qual o arguido B... também trabalhou (testemunha H... – que afirmou ter trabalhado para a empresa “Z...”).

Analisando criticamente os depoimentos destas testemunhas, importa afirmar que elas em nada foram consideradas na formação da convicção do Tribunal.

Com efeito, aos referidos depoimentos não se podem atribuir os predicados necessários (v.g. precisão, clareza, segurança, firmeza, coerência, espontaneidade nas respostas oferecidas, a circunstancia de as testemunhas responderem directamente às perguntas e do mesmo modo às perguntas que lhes iam sendo colocadas pelos sujeitos processuais) para que, com base neles, o Tribunal pudesse chegar a qualquer conclusão segura acerca da confirmação ou infirmação dos factos que constituem o objecto do presente processo criminal.

Basta, a esse título, atentar-se às patentes e notórias contradições existentes entre tais depoimentos para se chegar à falada conclusão (v.g. a testemunha F... inicialmente referiu que “hoje tenho a vida que tenho derivado do apoio financeiro deles” [reportando-se ao arguido B...] para, posteriormente, afirmar que não conseguiu juntar tanto dinheiro quanto isso; O depoimento da testemunha F... foi no sentido de que inicialmente se deslocou para Espanha na companhia de Y... [sua actual companheira],

sendo que a testemunha Y... referiu que quando se deslocou para Espanha F... já se encontrava naquele país; o depoimento de G... foi no sentido de que se deslocou para Espanha na companhia de F... e de Y..., enquanto esta testemunha referiu que quando fez tal deslocação o seu actual companheiro [F...] já para ali se havia deslocado; O depoimento de F... foi no sentido de que nos acampamentos existiam balneários/contentores nos quais se podia tomar banho enquanto o depoimento de Y... foi no sentido de que nos acampamentos não existiam instalações para se tomar banho [o banho era tomado no rio]; O depoimento da testemunha G... foi no sentido de que depois de trabalharem vinham tão cansados que, quando chegavam a casa/acampamento, nem sequer dali saíam, enquanto o depoimento de H... foi no sentido de que, depois do dia de trabalho era costume deslocarem-se ao café [nomeadamente, a testemunha G...]).

Por todos os expostos motivos, aos depoimentos das ditas testemunhas não foi atribuído relevo probatório.

Em sede de convicção probatória, o Tribunal considerou não só a prova directa mas também a prova indirecta ou circunstancial, em que a actividade probatória recaiu sobre factos a partir dos quais, através de indução lógica, se pode afirmar a verificação dos elementos típicos dos ilícitos em causa nos autos.

E, neste âmbito, o Tribunal considerou, designadamente, que se demonstrou a existência de uma relação de enorme e especial proximidade entre os arguidos B... e C... (relação de grande proximidade que deriva, nomeadamente, do facto de o primeiro ser “casado” segundo os costumes ciganos, com uma filha do arguido C...; que dimana também do facto de ambos de dedicarem às mesmas actividades, normalmente, nos mesmos locais [v.g. note-se que não é por acaso que aquando da identificação de D... pela Guarda Nacional Republicana e que originou o auto de notícia de fls. 3 e 4, os dois arguidos se deslocaram espontaneamente para o Posto – cfr. especialmente fls. 12 das declarações para memória futura de D...] e que permitiu até que se verificasse uma “cedência” do assistente “das mãos” do arguido B... para “as mãos” de C..., tendo, depois, este “devolvido” o assistente ao arguido B...) de modo que, por um lado, C... não podia deixar de saber a concreta forma como B... tratava o assistente, aproveitando-se disso quando o assistente passou a trabalhar para si (arguido C...) e, pelo outro, não podia deixar de saber que após a entrega do assistente novamente ao arguido B... este continuaria a tratar o assistente da mesma forma como anteriormente o havia tratado.

No que toca aos factos dados como não provados, fiquem eles a dever-se à falta de elementos seguros que os pudessem confirmar.”

Enquadramento Jurídico-Penal:

“Na acusação pública imputou-se:

- Ao arguido B..., na forma consumada e em autoria material, a prática de um crime de escravidão, p. e p. pelo artigo 159.º, als. a) e b) do C.P.;

- Ao arguido C..., na forma consumada e em autoria material, a prática de dois crimes de escravidão, p. e p. pelo artigo 159.º, als. a) e b) do C.P.;

Analisemos, pois, se os arguidos praticaram os crimes que lhes são imputados no libelo acusatório.

O crime de escravidão.

Preceitua o 159.º do Código Penal que, quem: a) Reduzir outra pessoa ao estado ou à condição de escravo; ou b) Alienar, ceder ou adquirir pessoa ou dela se apossar, com a intenção de a manter na situação prevista na alínea anterior; é punido com pena de prisão de 5 a 15 anos.

A redução da pessoa humana à condição de objecto, de coisa (escravidão) é muito mais grave do que um atentado à liberdade física de movimento em que se consubstanciam o sequestro e o rapto, pois que implica e significa a negação não apenas desta espécie de liberdade ou das outras manifestações de liberdade (v.g. de decisão, de acção, sexual, religiosa, etc.) mas a negação da raiz de todas de todas

as expressões da personalidade humana, que é a dignidade humana (cfr. Américo Taipa de Carvalho in Comentário Conimbricense do Código Penal, t. I, Coimbra Editora, 1999, p. 422).

O bem jurídico protegido pela incriminação é, assim, a dignidade da pessoa humana (cfr. Américo Taipa de Carvalho in op. cit., p. 423).

O conceito de dignidade da pessoa humana concretiza-se historicamente, assumindo um valor eminentemente cultural (cfr. Frank Moderne, “La dignité de la personne comme principe constitutionnel dans les constitutions portugaise et française”, in Jorge Miranda, Perspectivas Constitucionais – Nos 20 anos da Constituição, Coimbra Editora, 1996, p. 207, apud Benedita Mac Crorie, “O recurso ao princípio da dignidade humana na jurisprudência do Tribunal Constitucional” in Estudos em Comemoração do 10.º Aniversário da Licenciatura em Direito da Universidade do Minho, Almedina, p. 165).

A concretização do princípio da dignidade humana, enquanto “prius” incondicional de todo o direito, faz-se de forma histórico-culturalmente aberta (cfr. Jorge Miranda/Rui Medeiros in Constituição Portuguesa Anotada, t. 1, 2.ª ed., Coimbra Editora, p. 78).

O contexto cultural não é estático e encontra-se em constante mutação, até porque, cada vez mais, este conceito se desenvolve através de um intercâmbio com outras culturas (cfr. Benedita Mac Crorie in op. cit., p. 167).

Relativamente ao tipo objectivo de ilícito importa referir que, como acima se mencionou, na al. a) do dito artigo 159.º do C.P. se prevê a hipótese de redução de outra pessoa ao estado ou à condição de escravo.

Na interpretação deste inciso legal importa, desde logo, tomar em linha de conta o direito internacional.

Com efeito, a Convenção de Genebra sobre Escravatura (assinada em 25-09-1926) define, no seu artigo 1.º, parágrafo 1.º, a escravatura como “o estado de condição de um individuo sobre o qual se exercem todos ou quaisquer atributos do direito de propriedade”, sendo, portanto, escravo, toda e qualquer pessoa que tenha tal estado ou condição (cfr. artigo 7.º, al. a) da Convenção Suplementar relativa à abolição da escravatura, do tráfico de escravos e das instituições e práticas análogas à escravatura, assinada em Genebra, em 7 de Setembro de 1956).

Essencial e suficiente da caracterização de uma conduta como escravidão é que uma pessoa seja em si mesma tratada como uma coisa de que o agente dispõe como sua propriedade, sendo certo que a escravidão não pressupõe a exploração económica ou sexual da vítima, exploração essa que, historicamente, andava ligada à escravatura (cfr. Taipa de Carvalho in op. cit., p. 423).

A redução de que se fala no preceito pode ser executada por qualquer meio. Ela não implica necessariamente um cativo da vítima, mas o cativo da vítima é um forte indício da existência de uma situação de escravidão (cfr. Paulo Pinto de Albuquerque in Comentário do Código Penal à luz da Constituição de Republica e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 2.ª ed., Univ. Católica, p. 490).

A redução ao estado de escravidão, tratando-se de vítimas imputáveis, pressupõe, no geral, a prática de coacções (físicas ou psíquicas) ou a exploração de uma dependência económica, sendo embora certo que, como se expendeu, não existe qualquer exigência típica relativamente aos meios (cfr. Américo Taipa de Carvalho in op. cit., p. 424).

A expressão “estado” usada no texto da lei dá uma ideia de permanência, enquanto que a “condição” tem mais que ver com uma situação transitória (cfr. Leal Henriques/Simas Santos in Código Penal

Anotado, 2.º vol., 3.ª ed., Rei dos Livros, p. 353; cfr. ainda Américo Taipa de Carvalho in op. cit., pp. 421 e 422).

Na al. b) do artigo 159.º estão em causa actos de transmissão ou de aquisição de propriedade ou plena disposição sobre uma pessoa que já está no estado ou condição de escravo. Trata-se, aqui, de alienar, ceder ou adquirir pessoa ou dela se apossar com a intenção de a manter no estado ou condição de escravo.

Sujeito passivo do crime de escravidão pode ser qualquer pessoa, seja homem ou mulher, adulto ou criança, imputável ou inimputável.

Quanto ao grau de lesão do bem jurídico, o crime de escravidão é qualificado como um crime de dano (cfr. Paulo Pinto de Albuquerque in op. cit., p. 490), isto é, pressupõe a efectiva lesão do bem jurídico.

Pode ainda qualificar-se este tipo de crime, quanto ao objecto da acção, como um crime de material ou de resultado (cfr. Paulo Pinto de Albuquerque in op. e loc. cit.), ou seja, um crime que pressupõe um efeito sobre aquilo sobre que incidiu a acção que se distingue espacio-temporalmente da própria acção.

Já no que tange ao tipo subjectivo de ilícito, deverá afirmar-se que se impõe aqui o dolo, em qualquer das suas variantes bastando, pois, o dolo eventual (cfr., neste sentido, Paulo Pinto de Albuquerque in op. cit., p. 490).

No caso da verificação da hipótese normativa prevista na al. b) do citado artigo 159.º do C.P. é necessário o dolo (em qualquer das suas variantes) quanto à objectiva situação de escravidão, de acordo com a regra geral vertida no artigo 13.º, n.º 1 do C.P..

Também quanto à possibilidade de o adquirente manter a pessoa na situação de escravo é suficiente a conformação com o risco ou a eventualidade de a pessoa continuar nessa condição de escravidão após a transferência de domínio, bastando o dolo eventual (cfr., quanto a esta última afirmação, Américo Taipa de Carvalho in op. cit., p. 425).

Depois destas brevíssimas considerações técnico-jurídicas, importa agora voltar à situação dos autos, a fim de analisar e decidir se os factos dados como demonstrados permitem a condenação dos arguidos pela prática dos crimes de que se encontram eles acusados nos presentes autos.

Aqui, considerando o que se deixou exposto e o manancial fáctico dado como demonstrado sob os n.ºs 1. a 21., 25. a 30., 33., 35. a 37, entende este Tribunal Colectivo ter o arguido B... praticado o crime de escravidão a que se reporta a al. a) do artigo 159.º do C.P., em virtude de estarem verificados todos os seus requisitos, a nível objectivo e volitivo.

Com efeito, provou-se que:

- Após ter sido contactado pelo arguido B... com uma proposta laboral que incluía remuneração, alojamento e alimentação (cfr. matéria de facto dada como demonstrada sob os n.ºs 2 e 3), o assistente aceitou tal proposta, vindo a deslocar-se, inicialmente, para Espanha (sendo que também se deslocava a Portugal pontualmente – cfr. matéria de facto dada como provada sob o n.º 17).

- Apesar de ter desempenhado as tarefas laborais que lhe foram destinadas, durante cerca de 3 anos, o assistente apenas recebeu do arguido a importância indicada em 16., sendo que, quando o assistente reclamava o pagamento das quantias que lhe eram devidas a título de remuneração, o dito arguido agredia-o fisicamente

- Além das agressões físicas (cfr. matéria de facto dada como demonstrada sob os n.ºs 15., 20., 27.), o arguido ameaçava o assistente (cfr. matéria de facto dada como provada sob os n.ºs 27 e 28).

- Após o período inicial em que o assistente ficou a viver num imóvel (cfr. matéria de facto dada como demonstrada sob o n.º 7), e por se deslocarem, o assistente passou a viver num camião onde dormia em beliches do tipo militar e, finalmente, em tendas de campismo.

- Não existiam condições hodiernamente aceitáveis ao nível da higiene (tomavam banho num qualquer rio/riacho/canal que existisse nas imediações do local onde se encontravam; faziam as necessidades fisiológicas no campo – cfr. matéria de facto dada como demonstrada sob os n.ºs 13. e 18.);

- O trabalho realizado pelo assistente era um trabalho que pode definir-se como duro, muito exigente fisicamente, sendo certo que a alimentação que lhe era oferecida era deficiente (cfr. facto dado como demonstrado sob o n.º 13. e 18.).

- O arguido B... controlava permanentemente a localização de D... (cfr. especialmente, matéria de facto dada como demonstrada sob o n.º 30.), e mesmo as conversas que D... tinha com os seus familiares não decorriam com privacidade (essas conversas eram efectuadas através do telemóvel do arguido B... que, invariavelmente, assistia ao teor dessas conversas).

- O arguido B... entregou o assistente ao arguido C..., assim o cedendo (adquirindo-o posteriormente).

Tendo em conta especialmente a dita facticidade pode concluir-se que o arguido B... reduziu o assistente D... ao estado de escravo.

Ao nível do elemento subjectivo, constata-se que o arguido B... actuou com dolo directo (cfr. matéria de facto dada como demonstrada sob os n.ºs 33., 35. a 37.).

Conclui-se, desta forma, ter o arguido B... praticado, em autoria material e na forma consumada, o crime de escravidão p. e p. pelo artigo 159.º, al. a) do C.P..

Adiantando mais um passo, importa agora entrar na análise da comprovada conduta do arguido C....

Nesta matéria, provou-se, desde logo, que em momento indeterminado, em Espanha, porque o arguido B... não dispusesse de trabalho para manter o assistente ocupado, entregou-o ao arguido C.... O modo como o trabalho se desenvolvia e as condições de vida de D... eram iguais às que lhe eram proporcionadas pelo arguido B... (sendo embora certo que o arguido C... nunca o agrediu, nem o ameaçou).

E demonstrou-se, ainda, que o arguido C... “entregou” novamente o assistente D... ao arguido B....

Da falada matéria de facto resulta que o assistente foi cedido pelo arguido B... ao arguido C... para, posteriormente, ser por este cedido ao arguido B....

Verifica-se, desta forma, o elemento objectivo do crime de escravidão p. no artigo 159.º, al. b) do C.P..

Quanto ao elemento subjectivo, pode, no caso dos autos, afirmar-se que ele também se encontra perfectibilizado atendendo à materialidade fáctica dada como provada e vertida sob os n.ºs 34., 35., 36. e 37..

Constata-se, pois, a prática pelo arguido C... do crime de escravidão, p. e p. pelo artigo 159.º do C.P. (perpetrado sobre a pessoa de D...).

Na acusação pública, ao arguido C... vem ainda imputada a prática de um outro crime de escravidão, perpetrado sobre o ofendido E....

A esse propósito, deverá afirmar-se que a análise dos factos consignados na matéria de facto dada como demonstrada leva à conclusão que não se mostram perfectibilizados todos os elementos

objectivos e subjectivos configurantes deste crime que a douta acusação pública imputa ao arguido (nomeadamente, por não ter ficado demonstrado: que o dito ofendido E... tivesse estado “preso”; b) que o ofendido E... fosse alvo de constantes ameaças e de agressões; c) Que o almoço deste ofendido fosse composto invariavelmente por comida enlatada e pão e que os elementos da família do arguido se alimentassem de outro tipo de comida; d) o elemento subjectivo do crime.

Deve, pois, o arguido C... ser absolvido do crime de escravidão p. e p. pelo artigo 159., al. a) do C.P

Em suma, este Tribunal Colectivo considera que:

a) O arguido B... praticou o crime de escravidão p. e p. pelo artigo 159.º, n.º 1, al. a) (que tem como vítima D...);

b) O arguido C... praticou o crime de escravidão p. e p. pelo artigo 159.º, n.º 1, al. b) (que tem como vítima D...);

c) O arguido C... não praticou o crime de escravidão p. e p. pelo artigo 159.º, n.º 1, als. a) e b) (que teria como vítima E...), devendo, em concomitância, dele ser absolvido como, a final, se decidirá.”

Medida concreta da pena:

“A moldura penal abstracta do crime de escravidão é a seguinte:

- Pena de prisão de 5 a 15 anos.

Dentro destes limites teremos, portanto, de elaborar a dosimetria da pena cingidos à regra do art. 71º do C.P. vigente, valorando: a culpa do agente, a concorrência de circunstâncias agravantes ou atenuantes estranhas à tipicidade e a satisfação das exigências preventivas (geral e especial).

Assim, valora-se:

a) Em desfavor dos arguidos:

- O grau de ilicitude é mediano tanto no crime cometido pelo arguido B... como no crime cometido pelo arguido C...;

- Relativamente ao modo de execução do crime:

- - Deverá ponderar-se que o arguido B... utilizava violência contra a vítima D... (traduzida essencialmente em agressões físicas e ameaças), o que em muito releva em seu desfavor;

- Deve ainda atender-se ao facto de D..., quando foi contactado pelo arguido B..., se encontrar numa situação de extrema debilidade financeira (cfr. matéria de facto dada como provada sob o n.º 3) e, portanto, mais susceptível ao aliciamento efectuado;

- Deve também considerar-se que a redução ao estado de escravo foi operada pelo arguido B..., sendo que o arguido C... se aproveitou daquele estado anteriormente criado pelo arguido B...

- Quanto à gravidade das consequências do crime, atente-se ao facto de o assistente continuar a viver um clima de intranquilidade (cfr. matéria de facto dada como demonstrada sob o n.º 32).

- O dolo é intenso em ambos os crimes (sendo embora, comparativamente, menos intenso no crime praticado por C... pois que actuou ele com dolo eventual relativamente ao elemento contido na parte final da al. b) do artigo 159.º do C.P.).

- No que tange aos fins ou motivos que determinaram a prática do crime, os arguidos actuaram com o objectivo de explorarem o resultado da prestação do trabalho do assistente D... (o que também releva em seu desfavor);

- As exigências de prevenção geral são elevadas. Na verdade, em casos de criminalidade que choca a comunidade, como é o caso da tratada nos presentes autos, e em face do crescente aumento do sentimento de insegurança que se vai generalizando, torna-se necessário uma pena mais elevada para, por um lado, manter e reforçar a confiança da comunidade na validade e eficácia das normas jurídico-penais como instrumentos de tutela de bens jurídicos e, por outro lado, intimidar a generalidade das pessoas para que não cometam factos semelhantes.

b) Em favor dos arguidos:

- Não lhes são conhecidos antecedentes criminais;
- Têm família constituída.
- O possuem eles hábitos de trabalho.
- O arguido B... tem revelado um comportamento adequado no EPR de Lamego;
- Não existe referência negativa à conduta de C... em meio prisional;

Destarte, tudo ponderado, atendendo aos limites abstractos da pena prisão acima referidos, fazendo apelo a critérios de justiça, adequada proporcionalidade entre a gravidade do crime e a culpa dos arguidos, concomitantemente com a ideia de uma certa intimidação e dissuasão ou de pura prevenção geral negativa, reputamos como justa a imposição:

- Ao arguido B..., da pena de 7 anos e 6 meses de prisão;
- Ao arguido C..., da pena de 5 anos e 6 meses de prisão.”

Colhidos os Vistos, efectuada a Conferência, cumpre apreciar e decidir.

Das conclusões, delimitadoras do respectivo objecto, extrai-se que os recorrentes B... e C... pretendem suscitar as seguintes questões:

- Impugnação da decisão sobre a matéria de facto;

Em matéria de Direito,

- Qualificação jurídica dos factos;

Subsidiariamente,

- Medida da pena a aplicar ao B...;
- Medida da pena a aplicar ao C....

Impugnação da decisão sobre a matéria de facto.

Nessa impugnação começa por se colocar em causa os nºs 1 e 38 dos factos provados, mas apenas «no que respeita à época em que ocorreram».

É essa a única matéria em que têm razão – como se irá ver a seguir –, necessitando os momentos temporais aí referidos de correcção.

O nº 1 diz respeito à altura em que o D... foi contactado pelo B....

Da prova documental junta, em especial a referente aos “dados laborais” existentes em Espanha, respeitantes ao D..., conjugada com as declarações para memória futura do mesmo, resulta que esse contacto terá sido efectuado em 2007, mas em data anterior a Maio.

O nº 38 diz respeito à altura em que o E... foi contactado pelo C..., e embora este recorrente não tenha sido responsabilizado penalmente pela actividade em causa, também aí deve haver uma correcção.

Considerando que o primeiro recibo de “vencimento” do E... em Espanha surge datado de Janeiro de 2007, tem de se concluir que o contacto terá ocorrido em data anterior, cerca de seis meses antes, pois tal como resulta do nº 48 da matéria provada, só “volvidos seis meses” sobre este contacto e a sua ida para ..., o C... o levou para Espanha.

A alteração destes momentos temporais é, porém, irrelevante para a efectuada subsunção dos factos ao Direito.

Para além destes, os factos indicados como incorrectamente julgados são «os pontos 6, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26 parte final, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37».

São indicadas como provas que impõem decisão diversa: «a prova documental, as declarações dos arguidos, as declarações do assistente D..., os depoimentos das testemunhas e a prova indirecta circunstancial por simples induções ou presunções utilizadas pelo Tribunal Colectivo».

Na motivação surgem extractos do depoimento do P..., inspector da PJ (que não serviu para formar a convicção do Julgador, por considerar que não teve “conhecimento directo dos factos”); das declarações do D...; das declarações do aqui recorrente B...; do depoimento do Q..., guarda da GNR que elaborou o auto de notícia; do depoimento do S...; das declarações do E...; dos depoimentos do F...; do G... e do H....

Basicamente, pretende fazer-se prevalecer as declarações dos recorrentes (embora só se forneçam extractos das do B...), classificadas de «abertas e colaborantes», às do D..., afirmadas de nenhuma credibilidade «porque é parte interessada e interesseira» e porque «se trata de uma pessoa influenciável, de um alcoólico, desenraizado social e familiarmente» e «com contradições entre o que declarou para memória futura e o que declarou perante o Tribunal Colectivo».

Acrescenta-se que as mesmas são ainda contraditadas «pelo depoimento das testemunhas de defesa F...; G... e H..., cuja credibilidade não deve ser posta em causa».

Como resulta evidente desta síntese, a argumentação fornecida mostra-se parcial e ilógica; os excertos da prova oral que se fornece e a prova documental que invoca não impõem decisão diversa; não se procede a uma efectiva e credível valoração e conjugação, de acordo com as regras da experiência comum e do raciocínio lógico-dedutivo, de toda a considerável prova documental, da obtida através das buscas e apreensões e da oral produzida, ou analisada em Audiência.

Em contraste, na explicitação da sua convicção, o Julgador indica toda a prova documental e oral que conjugou e analisou no seu conjunto, com o recurso às regras da experiência comum.

Começa por indicar a vasta prova documental e a obtida através das buscas e apreensões, referindo detalhadamente a sua localização nos autos e respectivo conteúdo.

Quanto às declarações dos aqui recorrentes, refere que “admitiram uma boa parte dos factos”.

Na parte em que os negaram são referidas as razões pelas quais não foi atribuída credibilidade às suas declarações, “incongruentes e ilógicas” face às regras da experiência comum e do raciocínio lógico-dedutivo.

Efectivamente, as declarações do B... são essencialmente negatórias, com expressões curtas (“não sra.”) e não se mostram credíveis, sendo contrariadas pelos restantes elementos de prova.

São disso nítido exemplo a “explicação” que dá para se apoderar do salário do D...: “a ele pagava 20€ por dia. Pagava 20€, dias trabalhados. Dias trabalhados. Pronto, eu recebia 30 ou 35 já, ou 40. Mas eu

tinha que descontar o meu, tinha de lhe pagar os 20€. 20, pagava os 20€, tinha de fazer a conta às despesas, ao que eles pediam durante a semana, o tabaco que eles, que eles pediam dinheiro para ir comprar tabaco, para vinho, para isso tudo. Depois fazíamos as contas, às vezes não chegavam para, para as despesas, eles ao fim-de-semana queriam 50€, em todas as vezes, de semana sempre 5, 10€ para tabaco e vinho.

(...)

Juiz: Diz-se aqui também que o, o trabalho que este sr. D... prestou e nas condições de vida em que viveu naquele período em nada correspondiam àquilo que lhe fora inicialmente proposto, prometido.

B...: Foi, foi sim sra.. Como prometi, foi o que combinámos. Eu paguei-lhe”.

O mesmo sucede com as declarações do C..., que, no entanto, incidem predominantemente sobre a sua actividade relativamente ao E....

São pelo Julgador referidas, por outro lado, as razões pelas quais foi atribuída credibilidade às declarações do D... e do E..., que «se mostraram espontaneamente desenvolvidas e tanto quanto possível pormenorizadas», e produzidas com “indiscutível razão de ciência”.

Foi também considerado que as declarações para memória futura do D... e do E..., comparadas com as que produziram em Audiência, não contém “incoerências sensíveis, susceptíveis de abalar a sua credibilidade probatória”.

E, efectivamente, essas declarações mostram-se credíveis, com o grau de pormenorização adequado às circunstâncias em que são proferidas, sendo corroboradas pelos restantes meios de prova, nomeadamente os documentais e os obtidos através das buscas e apreensões efectuadas.

Entre as prestadas para memória futura, em especial pelo D..., e as prestadas em Audiência – ao contrário do afirmado, sem adequada concretização no recurso – não se detectam contradições relevantes que as descredibilizem.

Acrescente-se que a argumentação para desvalorizar a do D..., acima transcrita, é por si só – e sem necessidade de quaisquer comentários acerca do seu cariz – reveladora da completa sem razão dos recorrentes.

Quanto às testemunhas ouvidas em Audiência e indicadas pelos recorrentes, acima nomeadas (F..., G... e H...), os respectivos depoimentos foram considerados inverosímeis, não porque o Julgador considerasse «as testemunhas de defesa de segunda classe e as de acusação de primeira classe» – tal como se afirma no recurso –, mas pelas razões detalhadamente apontadas na explicitação da sua convicção.

E essas razões mostram-se, a esse respeito, convincentes.

Acaba por se contestar também no recurso, «a prova indirecta, ou extracção de ilações ou presunções, do modo como o Tribunal colectivo o fez».

Argumentação, igualmente, sem nenhuma validade.

A apreciação da prova, em Julgamento, é – pela natureza das “acções humanas” e porque se pretende reconstituir acontecimentos do passado – necessariamente composta, também, por raciocínios lógico-dedutivos [processo raciocinativo pelo qual se passa de proposições conhecidas (premissas) a outra proposição que se apresenta como a consequência lógica, em termos de conclusão].

No caso, esses raciocínios mostram-se correctamente efectuados.

Em conclusão, e tal como já referido, não são fornecidos argumentos válidos e devidamente fundamentados que convençam este Tribunal, de que a decisão deveria ser diversa da efectuada pelo Julgador, no Tribunal recorrido.

Pelo contrário, da análise efectuada conclui-se que o Julgador efectuou uma detalhada análise e procedeu a uma correcta conjugação de toda a prova produzida ou analisada em Audiência – com excepção da correcção efectuada em relação aos nºs 1 e 38 da matéria provada, circunscritas ao respectivo momento temporal – e, com base nela, formulou os juízos lógico-dedutivos adequados com inteiro respeito pelo princípio da verdade material e sem violação dos restantes orientadores do Direito Processual Penal.

Noutra parte da peça de recurso, e a propósito de um pretensão “não cometimento do crime” por parte do C..., surge a invocação de «erro notório na apreciação da prova».

Num completo desconhecimento do que constitui esse conceito jurídico-processual penal, afirma-se que ele ocorre por «não se ter provado o dolo específico – intenção – elemento do tipo previsto no art. 159º, al. b) do CP», e sendo-lhe imputado o crime a título de dolo eventual, «tal não se verificará, já que os pontos 24, 27 e 30, dos factos provados foram incorrectamente decididos, já que se atribuem ao arguido C..., factos que apenas foram praticados pelo arguido B...».

Como é evidente, este argumentário tem nenhuma validade.

Do texto da decisão recorrida – e tal como decorre do já exposto, pois quem analisa o mais, também analisa o menos – não resulta a existência desse ou de outro vício da decisão sobre a matéria de facto, previstos no art. 410º, nº 2, do CPP.

Também a propósito da impugnação da matéria de facto acaba por surgir a invocação do princípio in dubio pro reo: «as razões invocadas são suficientes para criar no Julgador uma dúvida legítima, dúvida essa que o Tribunal colectivo devia ter acolhido e não o fez».

Tal como já temos referido noutras decisões, este princípio do Direito probatório, não se traduz num sistemático favorecimento do réu (arguido, na moderna terminologia).

É um princípio do Direito Probatório e significa apenas que, ficando o Tribunal, após a produção das provas, na dúvida sobre se determinado facto se provou, essa dúvida tem de ser resolvida a favor da defesa, considerando-se o facto não provado, se tal o favorecer.

No caso, o Julgador não ficou com dúvidas, chegou a certezas, no respeitante à matéria de facto considerada provada, e é essa certeza, cabalmente explicitada que os recorrentes pretendem pôr em causa.

Tal como decorre do exposto, a decisão sobre a matéria de facto deve ser mantida, apenas se procedendo à modificação acima relatada.

Assim, decide-se modificar a decisão sobre a matéria de facto – tal como o prevê o art. 431º, al. b) do CPP –, alterando-se os factos provados sob os nºs 1 e 38, pela seguinte forma:

1. Em data, não concretamente apurada, do ano de 2007, mas anterior ao mês de Maio, D... encontrava-se a residir temporariamente num Centro de Acolhimento (“I...”) em Lisboa/..., quando ali surgiu um indivíduo de etnia cigana que não conhecia e que depois soube tratar-se do arguido B...,

que lhe propôs a ida para a actividade agrícola em Espanha, informando-o que teria de permanecer naquele país até ao fim da campanha (vindima), isto é, até ao final do mês de Outubro.

(...)

38. Em data não concretamente apurada do ano de 2006, mas posterior ao mês de Julho, o ofendido E... encontrava-se em Mirandela a arrumar automóveis (estava sozinho, sem abrigo e padecia de dependência do álcool), junto da praça/mercado municipal, quando foi abordado por um indivíduo de etnia cigana que não conhecia e que depois soube tratar-se do arguido C....

Mantém-se, na íntegra, a descrição dos restantes factos provados constantes da decisão sob recurso.

Recurso em matéria de Direito.

Na peça de recurso, coloca-se em causa a qualificação jurídica dos factos, defendendo-se que os mesmos não integram o crime de escravidão por cuja prática os recorrentes foram condenados.

Afirma-se que «o crime do artº 159º do C. Penal. exige que o agente disponha do ofendido como uma coisa, que seja tratado como objecto ou propriedade em regime de sujeição absoluta, o que se não verifica».

Afirma-se também que «não se verifica tal coisificação do assistente D...» e que este «usava de todas as facilidades que vêm referidas no texto das alegações de fls. 80».

Prossegue-se suscitando a seguinte hipótese: «a haver alguma responsabilidade penal» seria apenas do B..., «tal responsabilidade enquadrar-se-ia no crime do artº 160º do C. Penal. se vier a entende-se que houve exploração do trabalho do assistente, valendo-se o arguido de alguma situação de vulnerabilidade do mesmo».

Vejamos:

O tipo vem previsto no art. 159º (sob a epígrafe “Escravidão”), em redacção de grande simplicidade, e consiste no seguinte:

“Quem:

- a) Reduzir outra pessoa ao estado ou à condição de escravo; ou
- b) Alienar, ceder ou adquirir pessoa ou dela se apossar com a intenção de a manter na situação prevista na alínea anterior;

é punido com pena de prisão de 5 a 15 anos”.

O seu texto é resultante da revisão do Código introduzida pelo DL nº 48/95, de 15/03, e reproduz, com pequenas alterações formais e diminuição da medida da pena, o art. 161º do Código Penal, na sua versão original, de 1982.

Trata-se da consagração no Direito Penal Português de Direito Internacional a que Portugal se encontra vinculado, nomeadamente a Convenção de Genebra sobre a escravatura, assinada em 25/09/1926.

Assim sendo, a previsão tem de ser interpretada e aplicada tendo-se em conta os conceitos e princípios expressos nesse Direito Internacional (“à luz dos seus textos”).

Trata-se de uma imposição Constitucional decorrente dos artigos 8º e 29º, nº 2, da CRP.

Na decisão recorrida o texto da Convenção de Genebra surge convenientemente referenciado: “a Convenção de Genebra sobre Escravatura (assinada em 25/09/1926) define, no seu artigo 1º, parágrafo 1º, a escravatura como «o estado ou condição de um individuo sobre o qual se exercem todos ou quaisquer atributos do direito de propriedade», sendo, portanto, escravo, toda e qualquer pessoa que tenha tal estado ou condição (cfr. artigo 7º, al. a) da Convenção Suplementar relativa à abolição da escravatura, do tráfico de escravos e das instituições e práticas análogas à escravatura, assinada em Genebra, em 7 de Setembro de 1956”.

Na resposta do MºPº em 1ª Instância, procede-se ao enquadramento dessa Convenção com os restantes textos do Direito Internacional, referentes à escravatura: “a Declaração Universal dos Direitos do Homem, no seu art. 4º, estatui que «Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos», a Convenção Europeia dos Direitos do Homem consagra no art. 4º que «1 – Ninguém pode ser mantido em escravatura ou servidão. 2 – Ninguém pode ser constrangido a realizar um trabalho forçado ou obrigatório» e o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, no art. 8º, dispõe que «1 – Ninguém será submetido à escravidão; a escravidão e o tráfico de escravos, sob todas as suas formas, são interditos. 2 – Ninguém será mantido em servidão. 3 a) – Ninguém será constrangido a realizar trabalho forçado ou obrigatório»”.

Como é evidente, a integração contemporânea do conceito pouco ou nada tem a ver com o conceito de escravatura, quando foi decretada, em Portugal, a proibição do tráfico de escravos, em 1836.

O conceito tem de ser densificado perante as circunstâncias sociais, históricas e políticas contemporâneas, e de acordo com as concepções ético-filosóficas dominantes.

Assim, na previsão se pretende integrar, entre outras formas de “escravidão”, a laboral, em que a vítima seja sujeita a uma situação de servidão, sendo objecto de uma completa relação de domínio por parte do agente, vivenciando um permanente “regime de medo”, não tendo poder de decisão sobre o modo e tempo da prestação do trabalho e não recebendo qualquer parte da sua retribuição.

O trabalho efectuado em tal situação de servidão ter-se-á de considerar trabalho realizado em condições análogas às de escravo, em que a vítima, colocada sob o domínio do agente, é destituída de toda a dignidade inerente ao ser humano; tal como conclui o MºPº em 1ª Instância, estabelece-se “uma relação tal que o primeiro se apodera totalmente da liberdade pessoal do segundo, ficando este reduzido a um estado de passividade idêntica àqueles que viviam em cativeiro”.

No caso, da matéria de facto provada resulta indubitável a verificação dos seguintes elementos, no que à vítima D... respeita (e é a actividade dos recorrentes em relação a este que aqui está sob análise): desapossamento da documentação; esbulho do salário, com a conseqüente privação do mesmo por parte da vítima; domínio do modo e horários da prestação de trabalho, que se estendem por extensos períodos; domínio e controle contínuos da movimentação da vítima, com confinamento a espaços sem condições de higiene ou salubridade e com alimentação deficiente; proibição ou restrição da sua comunicação com o exterior, nomeadamente com a família; isolamento social e geográfico; sujeição a maus-tratos, coacção e ameaças; disposição da vítima como se de uma “coisa” fosse, com a sua “entrega” e conseqüente “recebimento”, mantendo-a na mesma condição.

Perante estes elementos, tem de se concluir que a vítima D... viu-se esbulhado de toda a dignidade inerente à pessoa humana, sendo tratado como um “ente” sobre o qual podiam ser exercidas faculdades similares às do direito de propriedade sobre coisas ou animais.

Por outro lado, da matéria de facto provada resulta que o C... “recebeu” a vítima, mantendo-a nas mesmas condições, e voltou a “entregá-la” ao B..., agindo com consciência da condição da mesma e conformando-se com ela.

Nos termos expostos, a actividade do B... preenche a previsão do art. 159º, al. a), a título de dolo directo, e a do C... a do art. 159º, al. b), a título de dolo eventual.

Quanto à pretendida responsabilização penal do B... pela prática do «crime do artº 160º do C. Penal. se vier a entender-se que houve exploração do trabalho do assistente, valendo-se o arguido de alguma situação de vulnerabilidade do mesmo».

Tal como bem refere o MºPº em 1ª Instância, na sua resposta, a questão nem se coloca, pois, para além de se encontrar excluída pela verificação da previsão acima analisada, a tal se oporia o princípio da legalidade, constituindo um anacronismo que seja o próprio arguido a pretendê-lo.

Com efeito, este tipo penal, na modalidade de exploração do trabalho, foi introduzido pela Lei 59/2007, de 04/09, entrada em vigor em 15/09/2007 (no regime anterior, constante do art. 169º, o tipo respeitava apenas às actividades de exploração sexual), o que é por completo omitido na peça de recurso.

Complete-se referindo que não tem aqui qualquer cabimento a aplicação retroactiva desse novo regime, pois não se trata de um regime que extinga ou atenua a responsabilidade penal, mas sim de um regime que cria uma nova responsabilidade penal, a acrescer à aqui tipificada.

Em conclusão, a qualificação jurídica efectuada na decisão recorrida mostra-se correcta.

Medida da pena a aplicar ao B....

Numa moldura penal entre 5 a 15 anos de prisão, foi-lhe imposta a pena de 7 anos e 6 meses de prisão.

Na fixação da medida da pena teve-se em conta o grau de ilicitude dos factos, referenciado pelo modo e circunstâncias da sua execução, e gravidade das suas consequências; o dolo intenso e as exigências de prevenção geral, consideradas elevadas.

A estes factores de medida da pena, na peça de recurso apenas se contrapõe que não se valorizou «devidamente a personalidade do arguido, a sua colaboração com a Justiça, o facto de ser um delinquente primário, ser pobre e ter 5 filhos menores de tenra idade a seu cargo», devendo a pena nunca ser «superior a 5 anos e meio».

A impropriedade deste argumentário é evidente.

A ausência de antecedentes criminais e a condição familiar foram consideradas como atenuantes.

Quanto à «personalidade do arguido», manifestada nos factos, a mesma não foi entendida como atenuante, e bem (a considerar-se expressamente a mesma, teria de ser como agravante).

Quanto à «colaboração com a Justiça», ela não se encontra minimamente retratada nos factos provados, nem no seu comportamento processual (o recorrente contínua, aliás, a negar a sua prática).

Em conclusão, a pena fixada não requer qualquer diminuição.

Medida da pena a aplicar ao C....

Numa moldura penal entre 5 a 15 anos de prisão, foi-lhe imposta a pena de 5 anos e 6 meses de prisão. Na fixação da medida da pena teve-se em conta a ilicitude dos factos e as exigências de prevenção geral, consideradas elevadas.

Como factores atenuantes, foi considerada a ausência de antecedentes criminais e a condição familiar, e a acrescer (em relação ao B...) a prática dos factos com dolo eventual.

Na peça de recurso, defende-se que a pena não deve ser «superior ao mínimo legal de 5 anos, dada a sua diminuta culpa e as circunstâncias atenuantes existentes a seu favor» e deverá ser suspensa.

Considerando o grau de ilicitude dos factos, referenciado pelo modo e circunstâncias da sua execução e gravidade das suas consequências, a pena fixada 6 meses acima do mínimo legal, não requer qualquer diminuição.

Em conclusão, o recurso mostra-se improcedente, não sendo relevante a alteração, a que se procedeu, do descrito nos n.ºs 1 e 38 da matéria provada.

Nos termos relatados, decide-se:

- *Modificar a decisão sobre a matéria de facto, nos termos supra relatados;*
- *Julgar improcedente o recurso, mantendo-se, na íntegra, o dispositivo do Acórdão recorrido.*

Custas pelos recorrentes, fixando-se a Taxa de Justiça devida por cada um deles em 5 UC's.

Porto, 30/01/2013

José Joaquim Aniceto Piedade

Acórdãos TRP

Acórdão do Tribunal da Relação do Porto

Processo:

9238/13.0TDPRT.P1

Nº Convencional: JTRP000

Relator: BORGES MARTINS

Descritores: CRIME DE ESCRAVIDÃO
BEM JURÍDICO

Nº do Documento: RP201512099238/13.0TDPRT.P1

Data do Acórdão: 09/12/2015

Votação: UNANIMIDADE

Texto Integral: S

Privacidade: 1

Meio Processual: REC PENAL

Decisão: NEGADO PROVIMENTO

Indicações Eventuais: 4ª SECÇÃO

Área Temática: .

Súmario:

I - No crime de escravidão, p.p. pelo art.º 159.º a) CP, não está apenas em causa a exploração do ser humano, feita por outro, mas abrange todas as formas de servidão humana.

II - O bem jurídico protegido por tal incriminação é o interesse da sociedade no reconhecimento e salvaguarda da personalidade individual de toda a pessoa humana.

Reclamações:

Decisão Texto Integral:

Proc. Comum Colectivo 9238/13.0TDPRT.

Porto - Inst. Central – 1.ª Secção Criminal – J6.

Nos presentes autos, foi exarada que, entre outros, condenou **B...** e **C...** como autores, em concurso real, de três crimes de escravidão, p. e p. no art.º 159, al. a) do CP, na idêntica pena de cinco anos e seis meses de prisão por cada um deles; e, em cúmulo jurídico, nos termos do disposto no art.º 77.º do CP, na idêntica pena de sete anos de prisão.

Recorreram estes dois arguidos, em síntese, aquele arguido alegando erro notório na apreciação da prova e impugnando o juízo da matéria de facto, nos termos do disposto no art.º 412.º, ns. 3 e 4 do CPP; nulidade de sentença, prevista no art.º 379.º, n.º 1, al) a do CPP; na procedência da alteração reclamada, evidencia-se a não integração do tipo; esta arguida, também impugnando o juízo da matéria de facto, nos termos do disposto no art.º 412.º, ns. 3 e 4 do CPP e invocando nulidade de sentença, prevista no art.º 379.º, n.º 1, al) a do CPP, por violação do disposto no art.º 374.º, n.º 2 do CPP.

Entende ainda a recorrente que a matéria apurada não permite integrar os elementos do tipo; invoca a necessidade de atenuar especialmente as penas, nos termos do disposto no art.º 72.º, n.º 2, als. a) e d) do CP, para um ano as parcelares e a unitária fixada em dois anos e meio de prisão. Alega para tal o terem decorrido mais de onze anos depois da prática dos factos, ser reduzida a culpa da recorrente e a sua situação familiar.

Respondeu o MP, alegando, em síntese, quanto ao primeiro recurso, inexistir qualquer vício previsto no art.º 410.º, n.º 2 do CPP ou qualquer nulidade de sentença; não ter o recorrente cumprido os ónus previstos no art.º 412.º, ns. 3 e 4 do CPP – pelo que relativamente a ele deverá manter-se inalterado o juízo da matéria de facto; e quanto ao segundo, a verificação também desta última circunstância; inexistência da apontada nulidade sentença; correcta subsunção dos factos ao tipo.

Recorreu também o MP, pretendendo a elevação das penas de prisão com que os dois arguidos foram condenados, particularmente a pena única para nove anos de prisão.

Relativamente a este recurso, entendeu o Exmo PGA junto deste Tribunal da Relação não merecer o mesmo provimento, devendo ter-se em consideração o facto de os arguidos serem delinquentes primários; concordar com teor da Resposta, relativamente aos recursos dos arguidos, e não ter deparado com erro algum no julgamento da matéria de facto.

Foi dado cumprimento ao disposto no art.º 417.º, n.º 2 do CPP, não ocorrendo resposta.

Colhidos os Vistos, importa decidir.

Foi a seguinte a fundamentação de facto da decisão recorrida:

2.1. Os factos.

2.1.1. Factos provados.

Discutida a causa resultou provada a seguinte matéria de facto:

2.1.1.1-Factos gerais e comuns

Dadas as dificuldades económicas e sociais que afectam Portugal, nomeadamente a verificação de elevado número de desempregados, muitos portugueses, passaram a emigrar para Espanha em busca de melhores condições de vida.

Assim, nos últimos anos, muitas pessoas provenientes de Portugal, foram aliciadas para trabalharem em Espanha, mediante a oferta de trabalho agrícola, bem remunerado e em condições vantajosas, através de contactos pessoais.

Com este fenómeno foram constituídos grupos organizados de cidadãos, a maioria de nacionalidade portuguesa, que encaminham, controlam e exploram os trabalhadores que vão trabalhar em Espanha.

Estes grupos através de formas de intimidação aterrorizam os trabalhadores visando obter, à sua custa e contra a sua vontade, lucros patrimoniais, que sabem não lhes serem devidos.

Os arguidos B... e C..., nos termos abaixo descritos, trataram do transporte para Espanha, em veículos automóveis, dos trabalhadores que recrutaram até às localidades onde iam prestar o seu trabalho agrícola.

Uma vez em Espanha, os trabalhadores eram colocados a trabalhar, desconhecendo as respectivas condições de trabalho e sem qualquer garantia de que lhes fossem assegurados os seus direitos laborais.

Os arguidos B... e C..., recorreram à intimidação e privação da liberdade dos trabalhadores.

Aproveitando a circunstância de aqueles já se encontram fragilizados pela própria condição de emigrantes e trabalhadores e estarem longe das suas famílias.

Temendo pela sua integridade física e vida, as vítimas, em geral, não apresentavam queixa às entidades policiais competentes nem denunciavam esta situação.

Mesmo na presença das autoridades policiais, as vítimas e testemunhas revelavam medo e receio de poderem vir a sofrer represálias por parte dos membros do grupo.

Os arguidos B... e C... actuavam de comum acordo, em conjugação de esforços, de forma concertada, com distribuição de tarefas entre si, na execução de um plano devidamente delineado visando um enriquecimento ilegítimo, e ganhos patrimoniais para ambos.

Utilizando, em território espanhol um regime de intimidação, alicerçados num medo omnipresente, sendo a distância e o isolamento elementos presentes e quotidianos.

E os ofendidos coarctados na sua liberdade de movimentos porque não se podiam mover em espaços por si escolhidos, sempre vigiados pelos arguidos B... e C..., que lhes geravam um regime de intimidação, lhes subtraíam os seus documentos pessoais e se apropriavam de pelo menos parcialmente de toda e qualquer remuneração, salário ou importância em dinheiro que tivessem direito a receber.

Os proprietários espanhóis das “D...” suportavam a remuneração média de 30,00/40,00€, como contrapartida pela prestação laboral diária por cada trabalhador, sendo que a entidade empregadora entregava as remunerações devidas directamente ao fornecedor da mão-de-obra, limitando-se este a reter a totalidade das retribuições.

Apesar de manifestarem o desejo de regresso a território nacional, os trabalhadores eram coagidos a permanecer em Espanha perante as constantes ameaças de que eram vítimas.

Os arguidos B... e C..., recrutavam, transportavam e arranjavam trabalho directamente e com recurso a intermediários.

Num primeiro contacto, aos trabalhadores recrutados é-lhes prometido um vencimento diário que varia entre 25,00/40,00€, incluindo alimentação e transporte para as localidades onde iriam prestar serviço.

O alojamento e a alimentação eram efectuadas em casas dos arguidos B... e C..., ou por eles arrendadas, que não possuíam o mínimo de condições de higiene e, que, regra geral, eram espaços exíguos onde também habitavam, igualmente, entre oito a dez trabalhadores, o patrão e seus familiares.

As refeições eram preparadas pela arguida C..., sendo o arguido B... que efectuava o transporte para o campo, e a estadia, alimentação, transporte e o trabalho era por eles controlado.

Os arguidos B... e C... pagavam aquilo que muito bem entendiam aos trabalhadores, alguns deles conseguindo apenas que, diariamente, lhe entregassem um maço de tabaco e o pagamento de bebidas.

2.1.1.2-Factos relativos ao arguido E...

Na busca efectuada, no dia 25.04.2005, à residência sita no ..., ..., pertencente a F..., e onde vivia o arguido E..., composta por três quartos, uma casa de banho, uma sala e uma cozinha, conforme consta do auto de busca e apreensão junto a fls. 845 dos autos, foram encontradas e apreendidas:

- no quarto, onde dormia o arguido E..., mais concretamente no armário ali existente, cinco cartuchos n.º 6 e duas pistolas de calibre 6,35 mm, adaptadas, uma delas com carregador com sete munições de calibre 6,35 mm, que, devidamente examinadas, foram identificadas como sendo uma pistola transformada da marca ..., de modelo ..., originariamente de alarme mas, como resultado de transformação artesanal, actualmente apta para o disparo de munições de calibre 6,35 mm ..., não apresentando qualquer número de série, mas apresenta as inscrições originais de fábrica, embora posteriormente adulterados de modo a fazer crer tratar-se de arma de calibre 6,35 mm, possuindo cano toscamente estriado, medindo cerca de 6 cm e está em razoável estado de conservação, com acabamento a pintura de óleo preto fosco e aparenta estar em bom estado de funcionamento; uma pistola transformada da marca ..., de modelo ..., originariamente de alarme mas, como resultado de transformação artesanal, actualmente apta para o disparo de munições de calibre 6,35 mm ..., não apresentando qualquer número de série e foram removidas as inscrições originais de fábrica e gravados os algarismos 635, de modo a fazer crer tratar-se de uma arma de calibre 6,35 mm, possuindo cano toscamente estriado, medindo cerca de 6 cm e está em razoável estado de conservação, com acabamento a pintura de óleo preto fosco, dotado de carregador original, e aparenta estar em bom estado de funcionamento, conforme consta do auto de exame directo de fls. 851 e seguintes dos autos.

- Na sala, e pertença do arguido E..., foram encontrados e apreendidos 8 (oito) cartuchos n.º 6, quatro (4) munições de calibre 6,35 mm, um facalhão de cozinha, com cabo preto e cuja lâmina mede cerca de 22 cm de comprimento, o punhal, integralmente em liga metálica, cuja lâmina mede cerca de 16 cm de comprimento, uma das navalhas é integralmente em liga metálica e a lâmina mede cerca de 10 cm de comprimento;

- Outra das navalhas, com cabo em material de plástico, madrepérola, em tons de ... e cuja lâmina mede cerca de 16 cm de comprimento, outra navalha integralmente em liga ..., cuja lâmina mede cerca de 11,5 cm de comprimento, uma faca com cabo de ... de cor ... e cuja lâmina mede cerca de 10 cm de comprimento e um punhal, com cabo ..., ..., cuja lâmina mede cerca de 16 cm de comprimento, com respectiva bolsa, em material tipo ..., de cor ..., conforme consta do auto de exame directo junto a fls. 856 e seguintes dos autos;

2.1.1.3-Factos relativos ao ofendido G...

No dia 26 de Janeiro de 2004, o ofendido G..., foi abordado por um conhecido seu, de nome H..., residente na Rua ..., n.º ..., ..., nesta cidade e comarca, propondo-lhe a ida para Espanha, para trabalhar na manutenção de máquinas.

O referido H... transmitiu ao ofendido G... que teria de permanecer em Espanha, durante alguns meses, recebendo diariamente a quantia de €40,00 tendo ainda incluído alojamento, transporte e alimentação, descontando 10 € por dia para a alimentação.

O ofendido G... entendeu aceitar tal proposta e, na data, hora e local previamente acordadas apareceu um indivíduo, o ora arguido B..., ficando a saber que aquele era o indivíduo que o iria transportar para Espanha, bem como a I..., e seria quem lhes conseguiria o trabalho.

O arguido B..., confirmou, as condições da prestação laboral que haviam sido as referidas pelo H....

Na deslocação para Espanha, fizeram-se transportar num veículo automóvel, da marca Mercedes-Benz, de nove lugares, de cor ... e com a matrícula ...-OU, propriedade do arguido B..., com destino á residência deste, sita em Murça, que era de cor .../..., situada à face da E.N., num dos extremos desta cidade.

Nessa noite dormiu naquela residência, e, no dia seguinte, reiniciaram a viagem para Espanha, passando ainda pela residência da irmã e pais da arguida C..., sita em ..., Alfândega da Fé.

Chegou o ofendido a ..., localidade que dista cerca de doze quilómetros de ... e cerca de cinquenta de cinco quilómetros de ..., no dia 29 de Janeiro de 2004

Aí vieram a instalar-se na residência do arguido B...

A 30 de Janeiro de 2004, ao ofendido G... foi dado conhecimento que o tipo de trabalho a prestar não era aquele que acordara em Portugal, porquanto teria de trabalhar no serviço agrícola, na poda.

Assim, o ofendido G..., como os restantes trabalhadores, iniciava o seu trabalho, cerca das 06h00, sendo transportados no veículo Mercedes ... pelo arguido B... para as vinhas, cuja localização variava, e pertenciam a espanhóis, passando o dia na poda.

O referido ofendido parava para almoçar, cerca das 13h00, abandonava as vinhas, deslocando-se para a residência do arguido B..., onde lhe era servida uma refeição, retomando o trabalho pelas 14h00, terminando ao fim do dia, altura em que regressavam à residência daquele arguido, onde era servido o jantar.

As refeições eram, a maior parte das vezes, constituídas por ossos rapados com massa ou arroz.

O arguido B... não permitia ao ofendido G... e aos outros, o acesso ao WC, pelo que quando precisavam de satisfazer as necessidades fisiológicas, tinham de se dirigir ao monte, e só lhe era permitido tomar banho uma vez por semana, quase sempre ao domingo.

Nas quintas, quando da prestação do serviço agrícola, o arguido B... exercia uma vigilância constante sobre o referido ofendido e os demais trabalhadores.

O trabalho agrícola era efectuado, em qualquer condição climatérica.

Face a tais condições, de modo frequente, era solicitado ao arguido B... o regresso a Portugal, porém, este não acedia, não permitindo que algum trabalhador abandonasse o trabalho antes de acabar a campanha.

Em Fevereiro de 2004, o arguido B... regressou temporariamente a Portugal, passando as actividades dos trabalhadores a ser controladas por indivíduos de nomes J... e L....

Era a arguida C..., na ausência do companheiro, o arguido B..., quem orientava a prestação de trabalho na residência, dividindo o trabalho a efectuar por todos os trabalhadores, sendo que neste período de tempo, eram os proprietários espanhóis que asseguravam o transporte, quer á ida quer á vinda, das quintas.

No lapso de tempo que ali permaneceu, o G..., presenciou tentativas de fuga de trabalhadores, porém, o arguido B..., assim que se apercebia de tal, de imediato, iniciava a perseguição, no seu veículo automóvel, procedendo á recolha e transporte dos mesmos para a residência.

O ofendido G... solicitou algumas vezes aos arguidos B... e C..., que permitissem o seu regresso Portugal, o que recusaram.

No dia 4 de Julho de 2004, o ofendido G..., foi conduzido pelo arguido B..., juntamente com o J... à estação ferroviária de ..., situada a cerca de vinte quilómetros da residência, no veículo automóvel pertença do arguido.

Na estação em causa, o arguido B... entregou, ao ofendido G..., um rolo de notas do Banco Central Europeu, no montante de €900.

O ofendido G... teve que pagar a viagem de regresso do seu próprio bolso.

2.1.1.4-Factos relativos ao ofendido I...

O ofendido I..., no dia 26 de Janeiro de 2004, foi contactado pelo seu amigo H..., residente no Porto, propondo-lhe ir trabalhar, no serviço agrícola, na poda das vinhas, para Espanha.

O tal H... deu-lhe conhecimento que teria de permanecer em Espanha, por alguns meses, recebendo diariamente a quantia de €40,00 tendo ainda incluído alojamento, transporte e alimentação, descontando 10 € por dia para a alimentação.

O ofendido I... aceitou essa proposta, ficando acordado que iriam encontrar-se para iniciarem a viagem até Espanha, a fim de começar a trabalhar no serviço agrícola.

No dia, hora e local, previamente, acordados, o ofendido I... encontrou-se com o H..., que se encontrava na companhia do arguido B..., e de um indivíduo que veio a conhecer como G..., sendo que o arguido os ia transportar para Espanha e ali arranjar-lhes emprego no serviço agrícola.

Ali, o arguido B... confirmou ao ofendido I... as condições de prestação laboral que o H... havia mencionado pelo que iniciaram a viagem par Espanha, circulando num veículo automóvel da marca Mercedes-Benz, de cor ..., com a matrícula ...-OU, pertencente e conduzida pelo arguido B..., acabando todos por pernoitar em Murça, na residência do arguido, uma vivenda de cor ... ou ..., situada num dos extremos dessa cidade, junto da

Ali já se encontrava, a aguardar a chegada do arguido B... e acompanhantes, um outro trabalhador, que os iria acompanhar para Espanha, assim como a mulher do arguido B..., a arguida C....

Na manhã do dia seguinte prosseguiram a viagem até Espanha, passando ainda pela residência da irmã e pais da arguida C..., continuando a viagem, agora acompanhados de mais outros trabalhadores, de nomes J..., L... e outro de identidade que se desconhece. Chegou o ofendido I... a ..., localidade que dista cerca de doze quilómetros de ... e cerca de cinquenta de cinco quilómetros de ..., no dia 29 de Janeiro de 2004

Aí vieram a instalar-se na residência do arguido B....

O ofendido I... iniciou o seu trabalho a dia 17 de Fevereiro de 2004, sendo que tinha de sair de casa pelas 06h00, deslocava-se para as vinhas, que eram propriedade de cidadãos espanhóis, transportado pelo arguido B...

O referido ofendido parava para almoçar, cerca das 13h00, abandonava as vinhas, deslocando-se para à residência do arguido B..., onde lhe era servida uma refeição, retomando o trabalho pelas 14h00, terminando ao fim do dia, altura em que regressavam à residência daquele arguido, onde era servido o jantar.

A alimentação era, normalmente, constituída por ossos rapados com massa ou arroz

Para satisfazer as necessidades fisiológicas tinha de se deslocar para o monte, porquanto o arguido B... não lhe permitia o acesso ao WC, que ali existia, e somente lhe era permitido tomar banho apenas uma vez por semana, normalmente, ao domingo.

Quando o ofendido I... se encontrava nas D... nos serviços agrícolas, era o arguido B... que exercia uma vigilância constante sobre aquele e os restantes trabalhadores.

O trabalho agrícola era efectuado, quaisquer fossem as condições climatéricas.

Sempre que o referido ofendido e os demais, solicitavam ao arguido B... para regressar a Portugal, este recusava com o argumento que ninguém abandonava a actividade laboral, até terminar a campanha.

Em Fevereiro de 2004, o arguido B... regressou temporariamente a Portugal, passando as actividades dos trabalhadores, a serem controladas pelo J... e pelo L...

Ocorrendo uma situação fora da normalidade, o J... e o L... davam conta à arguida C..., que ali havia ficado.

Estando ausente o arguido B..., era a arguida C... que orientava a prestação de trabalho na residência, distribuindo o trabalho pelos trabalhadores, sendo que, neste período, eram os proprietários espanhóis que asseguravam o transporte, quer á ida quer á vinda, dos trabalhadores para o trabalho agrícola desenvolvido nas vinhas.

Enquanto ali permaneceu, o ofendido I..., assistiu a tentativas de fuga dos trabalhadores, sendo que o arguido B..., assim que se apercebia de tal situação, iniciava, de imediato a perseguição, no seu veículo automóvel, e após localizá-los recolhia-os e transportava-os para a residência.

Na sequência da fuga, ocorrida em Maio de 2004, um trabalhador de nome M... dirigiu-se á polícia local, a quem participou a situação a que estavam a ser sujeitos, tendo alguns elementos policiais comparecido na residência do arguido B..., à noite.

O arguido B... não esteve presente nessa altura.

Os elementos policiais que se faziam acompanhar do M..., retiraram, de imediato, os residentes para o monte e questionaram se havia algum problema, alguém insatisfeito ou com quaisquer queixas a fazer.

Quando o G... se preparava para denunciar as condições em que se encontravam, de verdadeira escravatura, foi impedido pelo L..., pois este, sem que os elementos policiais se tivessem apercebido, encostou-lhe uma navalha à zona do abdómen.

Perante tal ameaça, o G... nada disse, o mesmo aconteceu com o ofendido I... e os demais, tendo aqueles elementos policiais abandonado o local na companhia do M..., que regressou a Portugal.

No mês de Junho de 2004, em dia indeterminado, o arguido B... aceitou o regresso a Portugal de todos os trabalhadores, a efectuar um a um e em dias diferentes.

Em 6 de Julho de 2004, o I... foi transportado pelo arguido B... à estação ferroviária de ..., que fica situada a cerca de vinte quilómetros, da localidade onde se encontrava, e uma vez ali, o arguido B... entregou-lhe 550 €, em notas do Banco Central Europeu, dizendo que aquela quantia correspondia á retribuição pelo seu trabalho agrícola.

O ofendido I..., tinha direito ao pagamento duma quantia não inferior a €2.650, já descontando o tabaco e cerveja, que consumira, pela remuneração dos serviços prestados.

O veículo automóvel da marca Mercedes-Benz, de cor verde, com a matrícula ...-OU, utilizado para a angariação e transporte dos trabalhadores para Espanha, encontra-se registado em nome do arguido B..., conforme registo do certificado de registo automóvel junto, que aqui se dá por reproduzido.

O ofendido G... esteve registado, na segurança social espanhola, com inscrição em 02 de Junho de 2004 e, como períodos de trabalho, registado, nas datas de 02 de Junho de 2004 a 03 de Junho de 2004, 12 de Junho de 2004 a 15 de Junho de 2004, 16 de Junho de 2004 a 17 de Junho de 2004, 24 de Junho de 2004 e 23 de Fevereiro de 2005, como resulta dos documentos de fls. 2147 e segs. dos autos, que aqui se dão por reproduzidos.

O ofendido I... esteve registado, na segurança social espanhola, com inscrição em 02 de Junho de 2004 e, como períodos de trabalho, registado, nas datas de 02 de Junho de 2004 a 03 de Junho de 2004, 12 de Junho de 2004 a 15 de Junho de 2004, 16 de Junho de 2004 a 17 de Junho de 2004, 24 de Junho de 2004 e 23 de Fevereiro de 2005, como resulta dos documentos de fls. 2152 e segs., que aqui se dão por reproduzidos

2.1.1.5-Factos relativos ao ofendido M...

O ofendido M..., em data não apurada do mês de Dezembro de 2003, foi abordado pelo arguido B... que lhe propôs trabalhar em Espanha, na actividade agrícola. Referiu-lhe o arguido B... que teria de permanecer em Espanha para as campanhas da poda, auferindo a remuneração diária de €25, incluindo, nomeadamente alojamento e alimentação.

O ofendido M... por aceitar tal proposta, ficando acordado que alguns dias depois se encontrariam para iniciarem o percurso para Espanha.

Conforme o acordado, o arguido B..., passados alguns dias, apareceu tendo ambos seguido viagem para a residência do arguido, situada em Murça, onde se encontrava a arguida C..., mulher do arguido, e onde acabaram por pernoitar.

Uns dias depois, o arguido B... voltou a aparecer acompanhado da arguida C... e de mais cinco trabalhadores, de nacionalidade portuguesa, de nomes G..., I..., H..., todos naturais do Porto, e J....

Nesse mesmo dia não apurado do mês de Janeiro de 2004, fazendo-se transportar no veículo automóvel acima referido, da marca Volkswagen, iniciariam a viagem para Espanha, onde chegaram, à localidade de

Nesta localidade ficaram alojados na residência do arguido B....

Iniciado que foi o trabalho agrícola, o ofendido M... saía da residência cerca das 07h00, deslocando-se, no veículo automóvel, conduzido pelo arguido B..., para as vinhas, cuja localização variava, propriedade de indivíduos de nacionalidade espanhola, onde passavam o dia na poda e a arrancar videiras.

Paravam cerca das 13h00, para almoçar na residência do arguido B..., retomando o trabalho pelas 14h00, e terminando pelas 18h00, altura em que retornavam à residência do mesmo, onde lhes era servida, como jantar, um prato de ossos rapados com massa ou batata.

O ofendido M... de satisfazer as necessidades fisiológicas no monte, porque o arguido B... não lhe permitia o acesso ao WC, e somente lhe era permitido tomar banho uma vez por semana, normalmente, ao domingo.

Era o arguido B... quem, nas vinhas, fiscalizava o trabalho do ofendido M... e demais trabalhadores, e quando tinha de se ausentar, dava ordens expressas ao J... e ao L..., para que tal tarefa fosse desempenhada por eles.

O arguido B... intimidava o ofendido M... mediante a utilização de uma bengala, a que chamava "...", pois independentemente das condições climatéricas, o arguido obrigava os trabalhadores a efectuar o trabalho agrícola.

Durante a campanha agrícola, o M... solicitou ao arguido B..., para regressar a Portugal, o que este recusava.

Durante o mês de Fevereiro, o arguido B... regressou a Portugal, temporariamente, passando as actividades agrícolas a ser fiscalizadas pelo J... e L....

Devido às péssimas condições de trabalho e de vida que lhe eram proporcionadas, e ainda pelo facto de ver recusado o seu regresso a Portugal, o ofendido M... resolveu fugir do local onde se encontrava, sendo que na primeira vez não teve sucesso.

Foi perseguido e recolhido pelo arguido B....

Após ter sido localizado, foi o ofendido M... obrigado a entrar no veículo automóvel em que o arguido B... e fazia transportar, e conduzido para a residência onde se encontrava, e pertencente ao arguido B....

Ali, o arguido B... disse ao ofendido M... que se tentasse fugir outra vez que o metia debaixo de terra.

À segunda tentativa, o ofendido M... conseguiu concretizar a fuga, e chegado á localidade mais próxima, dirigiu-se ao posto da polícia, onde deu conhecimento do que se estava a passar.

Perante isso, os elementos policiais, na companhia do ofendido M..., deslocaram-se à residência do arguido B..., que não se encontrava presente, tendo questionado os trabalhadores que ali se encontravam, sobre as condições em que os mesmos se encontravam.

Porém, face ao clima de intimidação, nenhum dos restantes trabalhadores referiu as condições de trabalho e de vida em que se encontravam, receosos da sua integridade física.

A arguida C..., face á intervenção policial acima descrita entregou ao ofendido M... cerca de metade da quantia oferecida pelo trabalho prestado, em notas do Banco Central Europeu, como parte da retribuição devida pelo seu trabalho, não tendo, até ao presente momento, efectuado o pagamento da restante quantia em dívida

2.1.1.6- factos provados relativos ao ofendido N...

- Nenhuns

2.1.1.7-Factos provados - Buscas

Na busca efectuada ao veículo automóvel ligeiro de passageiros da marca Fiat, modelo ..., de matrícula UL-...-, pertencente ao arguido B..., conforme auto de busca a apreensão em veículo automóvel, de fls. 4555, que aqui se dá por reproduzido, foi apreendido um caderno de capa azul, com a referência "...", que continha, devidamente manuscritas, declarações de prestação de serviços de vários trabalhadores, nomeadamente de,

- H..., J..., O..., P..., Q..., S..., T..., U..., V..., W... e X...,

- Nas quais estes trabalhadores declaram que o horário de trabalho é de oito horas diárias, mediante a retribuição de €30 diários, com um dia de descanso semanal e estadia para dormir, almoço, café da manhã e jantar, todas emitidas a favor do arguido B....

- Duas declarações de demissão referentes aos trabalhadores X... e T..., nas quais declaram que receberam a quantia de €1.440, em notas do BCE, como retribuição pelo trabalho prestado entre 11 de Maio e 18 de Junho de 2005 e

- Três documentos comprovativos do pagamento de trabalho prestado em Espanha, á empresa Y..., relativo ao mês de Junho de 2005 e referente aos trabalhadores Z...O..., H... e T...

Na busca efectuada á residência sita em ... – ..., Murça, pertencente ao arguido B..., conforme auto de busca e apreensão, de fls. 4488 e segs, que aqui se dá por reproduzido, foram apreendidos:

- extractos bancários relativos á conta poupança n.º, da Z..., balcão de ..., titulada pela arguida C...;

- Extractos bancários referentes á conta n.º, da AB..., balcão de ..., titulada pelo arguido B...;

- Documentos relativos ao pagamento de trabalho prestado nas AC..., S.L., em ..., Espanha, pelos trabalhadores L..., G..., AD..., AE..., O... e I... pelo periodo compreendido entre Maio e Junho de 2004;

- E um telefone da rede móvel da marca NEC, com o IMEI, com a respectiva bateria da marca Nec, modelo ...-..., tendo inserido o cartão SIM da operadora da rede móvel espanhola Telefónica Movistar, com o número, devidamente examinado no auto de exame directo junto a fls. 4528 e seguintes dos autos;

- Na revista efectuada ao arguido B..., conforme do auto de revista pessoal e apreensão de fls. 4489 , que aqui se dá por reproduzido, foi encontrado e apreendido um telefone da rede móvel da marca SONY ... com o IMEI-...-..., com a respectiva bateria da marca Sony ..., modelo BKB 170/3 3.7 V Li-ion, tendo inserido o cartão SIM da operadora da rede móvel Optimus, com o n.º, devidamente examinado no auto de exame directo junto a fls. 4528 e seguintes dos autos.

299.

Na busca efectuada ao veículo automóvel ligeiro de passageiros da marca Mercedes-Benz, modelo ..., com a matrícula ...-OU, pertencente ao arguido B..., conforme auto de busca e apreensão em veículo junto a fls. 4547 que aqui se dá por reproduzido, foi encontrado e apreendido um cartão de contribuinte emitido pela Direcção-Geral dos Impostos em nome de H..., com o NIF

- Uma fotocópia do bilhete de identidade n.º, emitido em 5 de Março de 2001, pelo Arquivo de Identificação de Vila Real e uma fotocópia de Confirmação de Dados de Identificação – Inscrição na Direcção-Geral dos Impostos em nome de AF... e quatro documentos do Ministério de Trabajo Y Assuntos Sociales em nome de Q...

2.1.1.8-Factos Provados - Elemento Subjectivo

O arguido E... conhecia as características das armas e munições que detinha e sabia que não tinha autorização para tal detenção.

Os arguidos B... e C..., bem sabiam que não lhes era permitido impor um número indeterminado de horas de trabalho aos trabalhadores que angariavam e transportavam para Espanha, bem como de se apoderarem de toda ou parte da retribuição devida pelos serviços prestados por tais trabalhadores bem como dos seus documentos, neste caso dos ofendidos G..., I... e M..., reduzindo-os à condição de escravos.

Os arguidos E..., B... e C... agiram deliberada, livre e conscientemente.

308.
Bem sabendo que as suas condutas eram proibidas e punidas por lei.

2.1.1.9-Factos Provados - Outros -

O arguido B... é natural de ..., oriundo de uma família numerosa de etnia cigana, sendo o mais novo elemento de uma fratria de nove irmãos. A progenitora sempre se dedicou às lides domésticas, sendo o sustento da família assegurado, apenas, pelo pecúlio auferido pelo progenitor, decorrente do seu trabalho como engraxador, actividade que lhe permitiu, com dificuldades, colmatar as necessidades básicas dos filhos, os quais se foram autonomizando. O arguido ingressou na escola primária, em ..., na idade própria, tendo concluído, apenas o ... ano de escolaridade, com cerca de 13 anos de idade, após algumas reprovações, sendo o seu insucesso escolar resultado da pouca motivação e empenho que o arguido revelava face ao seu percurso escolar. Quando o arguido tinha 13/14 anos de idade, ocorreu o falecimento da sua progenitora, vítima de doença, tendo nesta ocasião, B... sido entregue aos cuidados de uma irmã, residente na localidade de Murça, integrando um meio familiar marcado pela coesão afectiva entre os vários elementos, no qual lhe foram proporcionadas condições de vida favorecedoras de um desenvolvimento adequado. A família vivia ... em Murça e não obstante algumas dificuldades económicas com que o agregado se debatia, ao arguido foram sempre garantidos os bens essenciais. Por volta dos 20 anos de idade contraiu matrimónio com uma jovem da mesma etnia (C...), passando o casal a viver autonomamente, em Murça, numa residência próxima dos familiares daquela. Desta relação existem 2 filhos, actualmente com .. e .. anos de idade respectivamente. Cerca de um ano após o casamento, o casal deslocou-se para Espanha, onde se fixou e passou a trabalhar na área da agricultura, nomeadamente, em trabalhos sazonais, regressando a Murça, apenas, por curtos períodos de tempo. Na altura da ocorrência dos alegados factos o arguido mantinha um estilo de vida idêntico ao acima descrito, residindo e trabalhando em Espanha. Contudo, a residência efectiva do casal continuava a ser em Murça, onde dispunham de urna habitação. Aproximadamente há 18 meses, segundo refere, e na sequência dos factos pelos quais se encontra indiciado, o casal separou-se passando o seu ex. cônjuge e filhos a residir na casa de família em Murça, tendo o arguido permanecido em Espanha a morar com familiares. O arguido trabalha na agricultura, efectuando qualquer trabalho para o qual for solicitado, não sabendo precisar um montante mensal, urna vez que esta dependente da oferta de trabalho. Assim, o seu quotidiano é gerido em função da actividade que desenvolve e do convívio que mantém com familiares e amigos, deslocando-se a Portugal, apenas, para visitar os filhos. Dos contactos efectuados no meio (Murça), onde o arguido residiu até a um passado recente, pese embora seja do conhecimento da comunidade os factos pelos quais se encontra indiciado, transpareceu uma inserção social adequada, sendo referenciado como pessoa educada. Até à data, na localidade de Murça, o presente processo não teve qualquer impacto em termos da imagem social do arguido, sendo considerado pessoa educada e respeitadora.

A arguida C... é proveniente de um agregado carenciado, ao nível cultural e económico, constituído pelos pais e 7 irmãos, dos quais uma falecida. O espaço habitacional onde a família residia, localizado em meio rural, não lhe garantia as condições mínimas de habitabilidade e salubridade. Os progenitores subsistiam do trabalho desenvolvido pela compra e venda de animais em feiras, insuficiente para fazer face às despesas básicas, de higiene e alimentação. Em termos escolares, a arguida apenas concluiu o .. ano, uma vez que esta não era uma preocupação educativa no contexto onde se inseria, antes o incentivo ao ingresso precoce no mercado de trabalho, como veio a suceder, prestando C... trabalhos indiferenciadas no sector agrícola. Contraiu matrimónio aos 26 anos, nascendo dois filhos desta união. Numa fase inicial permaneceu a residir em Murça, junto do agregado constituído, sendo a dinâmica familiar descrita como harmoniosa. A trajectória profissional da arguida esteve associada a diversos sectores, iniciou-se com 10 anos de idade no sector agrícola, prestação de serviços de limpeza e apoio domiciliário a idosos, passando ainda pela emigração em França, onde prestou apoio na área da restauração, como auxiliar de cozinha e serviço de mesa até à idade em que se casou. Em 1999, a arguida conjuntamente com o marido, emigraram para Espanha, para desenvolvimento de actividades sazonais, na área da agricultura, vinha, onde se mantiveram por um período de oito anos, com idas/voltas alternadas de dois meses. Em 2006, decidiram fixar residência pelo facto do filho mais novo ter ingressado no ensino escolar, regressando a Portugal apenas em períodos de férias escolares, sendo que regressaram definitivamente a Portugal em Agosto de 2013. No período a que se reportam os factos constantes da acusação, a arguida vivia juntamente da família constituída, marido e um dos filhos menores (B...), em Espanha, em moradia integrada numa quinta, local onde ambos prestavam serviços laborais. O seu quotidiano era circunscrito basicamente ao espaço habitacional, onde se mantinha a executar as tarefas domésticas e refeições

para os trabalhadores da quinta (muitos deles angariados por si e pelo seu marido, B..., coarguido no presente processo). A ruptura conjugal, concretizada há alguns meses, despoletou uma grande mágoa e tristeza na arguida, pelo distanciamento e ausência que o progenitor revela no contacto com os filhos, constituindo-se, no momento, a mãe como única figura de suporte no seu quotidiano. Actualmente e desde o início do ano lectivo 2013/2014, encontram-se (arguida e os dois filhos) a residir na cidade de Murça, Vila Real, em habitação própria, moradia tipologia quatro, de condições de habitabilidade adequadas, inserida em meio urbano, sem problemáticas relevantes associados. O agregado apresenta, presentemente, algumas carências económicas, sendo que subsiste do trabalho prestado, única e exclusivamente pela arguida, pontualmente (quando existe), em serviços de limpeza e do rendimento social que recebeu em duas fatias (300€ mais 200€) e, que vai deixar de usufruir enquanto não provar documentalmente que o marido os abandonou. Na área de residência as fontes abordadas revelam conhecimento superficial da situação em que C... se encontra envolvida, porém, referiram que se trata de uma pessoa de trato educado e cordial com os vizinhos, pelo que não suscita sentimentos de hostilidade. A arguida foi referenciada pelas forças policiais como sendo uma pessoa bem integrada, sem registo de situações anómalas.

Dos CRCs dos arguidos E..., B..., C... e AG... não constam quaisquer condenações.

2.1.2. Factos não provados.

Não se provaram outros factos com interesse para a decisão da causa, designadamente:

-Que o arguido E... (juntamente com F..., e AH..., estes acusados no âmbito do processo 2731/04.7JAPRT), fazia parte do grupo/clã de AI...

- Que os arguidos B..., C... e AG... (juntamente com AJ..., AL..., AM..., NA..., estes acusados no Proc. 2731/04.7JAPRT) faziam parte do Clã de AO....

- Que o H... tenha transmitido ao ofendido G... o número exacto de meses que teria de permanecer em Espanha, e que este receberia mensalmente a quantia de €1.500, que lhe seria paga no final da campanha.

- Que dado que o senhorio do arguido B... havia mudado as fechaduras, por falta de rendas devidas, o ofendido G... foi descansar numa residência de AJ..., irmão da arguida C..., e que já se encontravam ali outros três portugueses, que trabalhavam na agricultura, sendo que o AJ... era proprietário de um veículo automóvel, marca Mercedes-Benz, modelo ..., de cor ... e de um outro da marca Volkswagen, modelo ..., de cor ..., ambas com matrícula espanhola.

- Que o ofendido G... ao confrontar o arguido B..., este disse simplesmente que “os que sabiam fazer faziam, aqueles que não sabiam aprendiam”.

- Que foi comunicada pelo arguido B... ao ofendido G... que não era permitida qualquer saída da residência, bem como idas ao café ou telefonar de qualquer posto público para os familiares.

- Que nas quintas, quando da prestação do serviço agrícola, o arguido B... na presença do ofendido G... empunhava um pau, como forma de intimidação e com o qual chegou a agredir alguns trabalhadores, ao mesmo tempo que dizia para efectuarem o trabalho mais rápido.

- Que alguns dos proprietários espanhóis alertaram o arguido B..., para as difíceis e deploráveis condições em que o ofendido G... e os outros trabalhadores, que angariava, se encontravam a trabalhar.

- *Que a arguida C... punia os trabalhadores com trabalho doméstico, como qualquer tipo de limpeza, na residência.*
- *Que quando do regresso à residência, o arguido B... agredia quem tentara fugir, a soco e com vergastadas, sendo que tal punição acontecia na presença dos restantes trabalhadores, para servir de lição e para afastar a intenção de mais alguém que tinha a fuga no pensamento.*
- *Que o ofendido G..., tentou a fuga, por três vezes, sendo que sempre foi apanhado e recolhido, pelo arguido B... e, naturalmente agredido pelo mesmo e nos moldes acima referenciados.*
- *Que até ao seu regresso a Portugal, ocorrido em 4 de Julho de 2004, o ofendido G... foi, permanentemente, humilhado pelos arguidos B... e C..., que o obrigaram a fazer todo o trabalho doméstico, desde limpezas, lavagens e regas, várias vezes ao dia, ao mesmo tempo que diziam “que até agora gozaste tu, agora quem vai gozar somos nós”.*
- *Que o ofendido G... ao conferir a quantia que lhe fora entregue pelo arguido B..., veio a verificar que se tratava somente de €800.*
- *Que o senhorio do arguido B... havia mudado as fechaduras, por falta de pagamento da renda devida, não conseguiram entrar na residência, tendo assim, de ir descansar à residência do arguido AJ..., irmão da arguida C...,*
- *Que já se encontravam ali outros três portugueses, que trabalhavam na agricultura, sendo que o AJ... era proprietário de um veículo automóvel, marca Mercedes-Benz, modelo ..., de cor branca e de um outro da marca Volkswagen, modelo ..., de cor branca, ambas com matrícula espanhola.*
- *Que o ofendido I... tinha ordens do arguido B... para não se ausentar da residência.*
- *Que não era permitida ao ofendido I..., qualquer saída daquela residência, pelo arguido B..., incluindo as saídas para o café ou telefonar de para a família em Portugal.*
- *Que só os arguidos B... e a C..., possuíam telefone da rede móvel e apenas o J... e o L... tinham autorização para se ausentarem da residência, porquanto já ali trabalhavam há muitos anos para o arguido B....*
- *Que o arguido B... perante o ofendido I... empunhava um pau, como forma de os intimidar e com o qual os chegava a agredir, enquanto dizia para trabalharem mais rápido.*
- *Que os proprietários espanhóis alertaram o arguido B..., para as miseráveis condições em que o ofendido I... e os demais trabalhadores se encontravam a trabalhar.*
- *Que a arguida C..., castigava os ofendidos com trabalho doméstico, nomeadamente a limpeza, de qualquer tipo, na residência.*
- *Que o arguido B... agredia os “autores da fuga” corporalmente a soco e com vergastadas, sendo que esta retaliação acontecia na presença dos restantes trabalhadores, servindo de lição, e para alertar outros candidatos à fuga.*
- *Que o arguido B... entregou ao ofendido I... €40, dizendo que era “para os copos” e mais €80, dizendo que era para efectuar o pagamento do bilhete de viagem de regresso.*
- *Que o AJ... era visita frequente da residência dos arguidos acima referidos, mantendo alguns cidadãos portugueses, a trabalhar nas condições em que o fazia o arguido B..., sendo que ambos se auxiliavam mutuamente.*
- *Que o ofendido M..., foi abordado também por AM..., este conhecido por “AMI...”,.*

- *Que o ofendido M... foi informado pelo arguido B... que não seguiriam para Espanha, pois a sogra deste estava doente, mas que poderia ali ficar, até que fosse possível encetar tal viagem.*
- *Que nesse mesmo dia, o arguido B... apareceu na residência, acompanhado de AM... e NA..., irmã da arguida C..., que ficaram, também, instalados na residência.*
- *Que face à doença da sogra do arguido B..., o ofendido M... acabou por permanecer na residência cerca de quinze dias, período no qual efectuou todo o tipo de trabalhos agrícolas, designadamente arrancar ervas e batatas nos terrenos adjacentes e que pertenciam aos arguidos B... e C...*
- *Que durante o período referido, o arguido B... acabou por angariar mais um outro trabalhador, de nome L..., que acompanhou o ofendido M... na execução dos trabalhos supra referidos, enquanto os referidos AM... e AN... foram ao Porto, onde vieram adquirir um veículo automóvel da marca Volkswagen, modelo ..., de cor*
- *Que passados os quinze dias, o arguido B... informou o ofendido M... e o individuo de nome L..., que teriam de acompanhar o AM... e AN... para a residência dos pais deles, que ficava situada em AO..., onde teriam de cortar lenha, que ali se encontrava, até à sua chegada, que estava prevista para o final do dia seguinte.*
- *Que acedendo a tais ordens, o ofendido M... e o L..., juntamente com a AN..., deslocaram-se para AO..., fazendo-se transportar no veículo automóvel de marca Volkswagen, modelo ..., conduzido pelo AM..., não tendo levado consigo os sacos com os seus haveres, pelo facto do arguido B... não o ter permitido, pois que ele próprio se encarregaria de o fazer.*
- *Que uma vez em AO..., de imediato, o AM... arranhou serviço para o ofendido M... e para o L..., que consistiu em cavar a terra e cortar lenha.*
- *Que em ... não puderam alojar-se na residência do arguido B..., uma vez que o senhorio havia mudado as fechaduras da residência, por motivo da falta de pagamento da renda, pelo que tiveram necessidade de ir para a residência de outro irmão da arguida C..., de nome AJ..., que ficava situada próxima da igreja,*
- *Que ali o ofendido M... e acompanhantes acabaram por ficar alojados e permanecer, até que o arguido B... ter resolvido os problemas existentes com o proprietário da residência.*
- *Que a residência do arguido B..., era uma casa velha e sem quaisquer condições de habitabilidade e de salubridade, tendo o referido ofendido e os demais, de dormir dois a dois na cave da mesma.*
- *Que após o jantar, o ofendido M... era obrigado diariamente, pelos arguidos B... e C..., a fazer a lide doméstica da residência.*
- *Que o ofendido M... recebia €1 ao domingo, como retribuição do seu trabalho, sendo que o arguido B... não lhe permitia qualquer saída da residência, nomeadamente ao café, ou telefonar para a família.*
- *Que durante o mês de Fevereiro, o transporte para os locais de trabalho era efectuado pelo AJ..., que utilizava o seu veículo automóvel da marca Volkswagen, modelo*
- *Que o ofendido M... tentou fugir por três vezes.*
- *Por quem foi perseguido e recolhido o ofendido M..., para além do arguido B....*
- *Que o arguido B... agarrou o ofendido M... pelo pescoço.*

- *Que numa segunda vez, o ofendido M... foi recolhido pelo arguido B..., que o transportou de regresso á residência, no interior da qual, o arguido e o J... o agrediram violentamente a pontapé e a soco.*
- *Que passado este episódio, o ofendido M..., que já se encontrava na sua terra natal, em Portugal, veio a ter conhecimento, por vizinhos, que o arguido B... o havia procurado, por diversas vezes, na sua residência,*
- *Que, receando pela sua vida, o ofendido M... teve de abandonar a sua residência, deslocando-se para Peniche.*
- *Que a arguida C..., face á intervenção policial acima descrita entregou ao ofendido M... a quantia de €650, em notas do Banco Central Europeu.*
- *Que o ofendido N... em data não apurada, mas no início de 2007, cerca das 13Horas, quando se encontrava em Macedo de Cavaleiros, foi abordado pelo arguido AG... e por AM..., que se faziam transportar num veículo automóvel, de cor ..., que lhe disseram “anda daí connosco que nós levamos-te a casa”.*
- *Que o N... aceitou a boleia e durante o trajecto o arguido AG... disse que tinham de ir a AO... ver o sogro e que depois o levariam á sua residência, o que foi aceite, mais uma vez.*
- *Que na residência do AJ..., o arguido AG... e o AM..., abordaram o N... no sentido de o convencerem a ir para Espanha trabalhar, ao que o ofendido respondeu que “não, não quero, agora não me interessa”.*
- *Que face à recusa do ofendido N..., em acto contínuo, os arguido AG... e o AM..., contra a vontade daquele e mediante o recurso à força física, introduziram o N... no veículo automóvel, seguindo para uma zona de castanheiros perto da residência.*
- *Que ali, retiraram o N... do veículo e o arguido AG... empunhou uma navalha, conhecida por ..., cujas características não foi possível determinar, e apontou ao ofendido, ao mesmo tempo que lhe disse que “ou vais para a Espanha ou mato-te”.*
- *Que temendo pela sua vida, o ofendido N... acabou por aceitar a ida para Espanha, e, em consequência, voltaram à residência,*
- *Que, Aproveitando uma distração do arguido AG... e AM..., quando entravam na residência, cerca das 18H00M, o N... empreendeu a fuga, correndo pelo campo e montes até chegar á localidade de ..., cerca das 10H00M, do dia seguinte, obstando desta forma que o os arguidos concretizassem os seus intentos de o levar para Espanha*
- *Que, em dia não apurado de Abril de 2007, cerca das 22Horas, o ofendido N... encontrava-se deitado no quarto da sua residência, quando o arguido AG... e o AM... ali deram entrada, sem o seu consentimento, através da respectiva janela.*
- *Que os arguidos em tom ameaçador disseram ao N..., para estar calado, não fazer barulho, e para se vestir e calçar, pois iriam ao café tomar uma bebidas.*
- *Que receando pela sua vida, o ofendido N... teve de acompanhar o arguido AG... e o AM..., vestindo apenas um par de calças e uma camisa, não trazendo consigo qualquer elemento de identificação ou dinheiro.*
- *Que assim, deixaram a residência e dirigiram-se para um veículo automóvel de cor ..., cuja marca, modelo e matrícula não foi possível de determinar, e pertencente ao arguido AG...*

- Que com o arguido AG... ao volante, o AM... no banco ao lado do condutor, o N... ocupou o banco posterior, foi iniciada a viagem para o tal café, que acabou por não acontecer, pois vieram a passar sem pararem, seguindo em direcção a

- Que apesar de questionados e das solicitações do ofendido N... para pararem o automóvel, o arguido AG... e o AM... não acederam dizendo que já se encontravam perto, mas acabaram por circular durante horas, por trajecto desconhecido, apenas tendo parado junto de um armazém, já em Espanha, na zona de Saragoça.

- Que o que aconteceu cerca das 03Horas, do dia seguinte, tendo o ofendido N... sido alojado no armazém, onde já se encontravam cerca de vinte trabalhadores portugueses e o também supra referido AJ.... E que tal armazém, não possuía as mínimas condições de habitabilidade encontrando-se os colchões colocados no chão, não havia WC, pelo que os utentes do armazém tinham de satisfazer as suas necessidades fisiológicas no mato que rodeava e tinham de tomar banho com a utilização de uma mangueira, somente de água fria, quaisquer que fossem as condições atmosféricas.

- Que o ofendido N... começou o seu trabalho agrícola nas “D...”, a retirar os “mamões” das videiras, que se iniciava pelas 06Horas, quando abandonava o armazém para se dirigir para as “D...”, transportados em veículo automóvel conduzido pelo arguido AG....

- Que o trabalho era iniciado ás 07Horas até as 13Horas, hora em que efectuava uma breve paragem para almoço, que consistia sempre em massa com carne, que era confeccionada pela AN....

- Que retomava o trabalho pelas 14Horas até às 20Horas, hora a que o arguido AG... o conduzia de regresso ao armazém, onde tomava banho e jantava.

- Que após o jantar, o ofendido N... e os demais eram obrigados a acompanhar o arguido AG... e os referidos AM... e AJ... e, onde eram obrigados a subtrair materiais de construção, nomeadamente ferro, cimento e areia, que retiravam das obras em construção, para posteriormente os utilizados na reconstrução de um imóvel adquirido pelo AJ....

- Que uma vez que o AJ... se recusava pagar a retribuição devida pelo trabalho prestado, alguns trabalhadores, oriundos da área do Porto, acabaram por fugir daquele local.

- Que em consequência desta fuga, o arguido AG..., o AM... e o AJ..., ameaçaram os demais trabalhadores, entre eles o ofendido N..., que se tentassem fugir, seriam perseguidos e mortos, ameaças estas que foram levadas a sério.

- Que durante o período que esteve naquela localidade e no trabalho agrícola referido, o ofendido N... foi vítima de permanentes ameaças e agressões físicas, por parte do arguido AG..., bem como não foi devidamente alimentado, chegando mesmo a passar fome, pois não lhe era fornecida, que satisfizesse as necessidades mínimas exigidas.

- Que o ofendido N..., teve de ser submetido a uma intervenção cirúrgica a uma hérnia, em consequência das agressões sofridas, nomeadamente de um pontapé, desferido pelo AJ..., na zona da ...

- Que não foi entregue ao ofendido N... a totalidade da retribuição devida pelo trabalho prestado até Agosto de 2007, pois só lhe foi entregue a quantia de €250, em notas do BCE, quando o AJ..., se deslocou a Portugal, e transportou o referido ofendido e o veio a abandonar junto ao local onde se realiza a ... de Macedo de Cavaleiros,

- Que o ofendido N... manifestou, por diversas vezes, o desejo de regressar a Portugal, mas nunca lhe foi autorizado pelo arguido, que usava as mais variadas ameaças e agressões físicas, embora não tendo recorrido às autoridades policiais espanholas, por recear pela sua vida.

- Que em busca efectuada á residência dos arguidos B... e C... sita na Estrada ... na Meda, , foram apreendidos: - uma agenda telefónica, de cor ..., com margens em cor ..., contendo manuscrito vários contactos telefónicos da rede móvel e fixa, uma agenda, tipo organizer, de cor ..., em dois ..., contendo manuscrito diversos apontamentos e vários contactos telefónicos da rede móvel e fixa; - Uma munição, por percutir, contendo gravadas as inscrições, em razoável estado de conservação, uma munição, por percutir, contendo gravadas as inscriçõesL, em razoável estado de conservação; - Um recibo novo de seguro do veículo automóvel ligeiro de passageiros da marca Mercedes-Benz, de matrícula ...-GN, emitido em 12 de Novembro de 2004, pelo período de um ano, entre 8 de Novembro de 2004 e 7 de Novembro de 2005, em nome de AP...; - Três documentos bancários do AQ..., balcão de ..., um cartão de visita do arguido AS..., um recibo de seguro da Seguradora AT..., relativo á apólice, emitido em nome do arguido AS..., relativo ao veículo automóvel ligeiro de passageiros da marca Mercedes-Benz, de matrícula ...-AI; - Um documento bancário do AQ..., balcão de ..., da conta n.º, manuscrito por AU..., um talão de depósito de numerário no montante de €5.000, na conta n.º, do balcão de ... do AQ..., efectuado pelo arguido AS...; - Um envelope do Ministério do Trabajo Y Assuntos Sociales contendo vários documentos de trabalho espanhóis, um documento do Centro Inspeções Automóveis AV..., Lda., referente ao veículo automóvel ligeiro de passageiros da marca Mercedes-Benz, modelo ..., de matrícula ...-GN, em nome de AW..., um livrete e titulo de registo de propriedade do veículo automóvel ligeiro de passageiros da marca Peugeot, ..., de matrícula VU-...-, em nome do arguido AS...; - Um bilhete de identidade com o n.º, emitido em nome de AX..., trinta e sete extractos bancários referentes á conta n.º, sobre o AQ..., balcão de ..., titulada pelo arguido AS..., três extractos bancários referentes á conta n.º, sobre o AQ..., titulada em nome de AU...; - Três extractos bancários referentes á conta n.º, sobre o AQ..., balcão de ..., titulada por AY..., quatro documentos referentes á apólice, da seguradora AZ..., em nome do arguido AS..., referente a uma vivenda sita em ... – ..., cinco cartões de visita em nome de firmas espanholas; - Um revólver de calibre .32 ..., da marca Rossi, modelo não identificado, com o número de série rasurado, com cano estriado medindo cerca 7,5 cm, com tambor dotado de seis câmaras, provido de sistema de disparo por dupla acção, simples e guarnecido com ... de ..., em bom estado de conservação e de funcionamento e dezassete (17) munições de calibre .32

Que na busca efectuada á residência sita na Avenida..., Saragoça, pertencente a BA... e BB..., foi encontrado e apreendido: - a quantia de €6.054,42 (seis mil e cinquenta e quatro euros e quarenta e dois cêntimos) referente ao saldo da conta n.º, do AQ..., titulada pelo arguido AS...; - a quantia de €1.030,91 (mil e trinta euros e noventa e um cêntimos), referente á conta n.º, da AB..., titulada pela arguida C...;- a quantia de €59.260,00 (cinquenta e nove mil e duzentos e sessenta euros), referente á conta n.º, da AB..., titulada pela arguida C...; - a quantia de €2,15 (dois euros e quinze cêntimos), referente á conta n.º, da Z..., titulada pela arguida C....

- Os que não se encontrem descritos entre os provados, estejam em oposição com estes ou constituam meras conclusões, repetições, matéria instrumental ou matéria de direito.

2.1.3. Formação da convicção do tribunal.

O Tribunal formou a sua convicção na análise e ponderação crítica, de acordo com as máximas da experiência e as regras da lógica, do conjunto da prova – designadamente, por declarações, testemunhal e documental –, produzida, a qual se revelou suficiente para, além da dúvida razoável, dar por provados os factos que o foram.

Com efeito, quanto ao modo de actuação e episódios relatados nos factos provados, a prova produzida não ofereceu grandes dúvidas quanto ao essencial do sucedido, pois, desde logo, com a

explicação global que a testemunha BC..., Inspector da Polícia Judiciária, fez da investigação que foi feita neste caso e noutras da mesma natureza, esclarecendo sobre o modo de actuação repetido que foi encontrando, tendo ainda esclarecido sobre as diligências realizadas nos autos e os documentos relativos aos trabalhadores encontrados na posse do arguido B..., bem como pelos depoimentos dos ofendidos G..., I... e M... que narraram as condições em que foram recrutados, o modo como foram transportados e o modo como trabalharam e viveram em Espanha, sob o jugo dos arguidos B... e C... e dos homens de mão que se encontravam às ordens destes. E se em alguns pormenores os depoimentos não foram totalmente coincidentes, a verdade é que tal não invalida que o tribunal retire de cada um dos depoimentos e do conjunto dos mesmos o que de essencial se passou e que ficou plasmado nos factos provados. Cabe ainda referir que não só de alguma fragilidade pessoal destas três testemunhas o tribunal se apercebeu, como também ainda de algum medo ou pelo menos receio que transpareceu, a que acresce o facto de a testemunha, não credível, H..., ter, conforme resultou dos depoimentos, contactado algumas das testemunhas em período próximo ao do julgamento. Seja como for, os episódios relatados pelas testemunhas, nomeadamente os das fugas da testemunha M..., a primeira em que foi perseguido e capturado pelo arguido B..., trazido de volta à residência e ameaçado por este, bem como da fuga em que teve sucesso dirigindo-se à polícia, altura em que acompanhado da polícia foi ao local onde residiam, tendo então recebido parte do dinheiro que lhe era devido, sendo que os demais trabalhadores nada disseram, por medo. A narração que as testemunhas fizeram da proibição da utilização do quarto de banho (tinham de ir ao monte fazer as necessidades), da comida que lhes era fornecida (ossos rapados com massa), da vontade de virem embora que manifestaram, mas que os arguidos B... e C... não deixavam. Do medo que todos sentiam. Enfim, tudo devidamente analisado e concatenado permitiu ao tribunal dar por assentes os factos que o foram quanto à condição e situação em que os três referidos ofendidos se encontraram. E a isto não obsta o depoimento de H..., o qual se mostrou na sua maior parte de credibilidade duvidosa e comprometido.

Resumindo, a prova produzida foi abundante quanto ao modus operandi empreendido pelos arguidos B... e C... no empreendimento relatado nos factos provados.

Quanto aos factos não provados, a prova produzida foi insuficiente para que o tribunal pudesse formar convicção positiva e os pudesse dar por assentes.

Assim, teve o Tribunal em conta designadamente:

As declarações da arguida C..., na estrita parte em que pareceram verdadeiras, embora com pouco relevo, que primeiro disse não desejar prestar declarações, tendo posteriormente prestado declarações apenas sobre parte dos factos, referindo, nomeadamente que o ofendido I... não queria tomar banho e que havia problemas com a casa e banho porque não tinha chave e às vezes havia fila para lá ir. Referiu ainda que quem fez os contratos com os trabalhadores foi o arguido B....

O depoimento sincero e isento da testemunha BC..., inspector da Polícia Judiciária do Porto, que participou na investigação dos factos que estiveram na base do inquérito que deu origem aos presentes autos, fazendo primeiro um relato genérico das investigações e do resultado destas, nomeadamente que desde 1999 começaram a chegar várias participações à polícia judiciária dando conta do desaparecimento de vários indivíduos que se veio a apurar serem angariados por vários indivíduos e que depois iam para as campanhas agrícolas em Espanha – ... -, nomeadamente para as vindimas, para a poda e apanha de fruta. Que os indivíduos recrutados tinham geralmente como características pessoais o facto de terem deficiências cognitivas, serem um fardo para as famílias, serem homens e já com alguma idade, normalmente com escolaridade baixa, sofrendo de alcoolismo ou toxicod dependência. Que os ofendidos eram abordados nas zonas piscatórias e em jardins, sendo procurados pelos indivíduos que os recrutavam. Que o presente processo teve início em 2004, sendo que os arguidos investigados pertenciam a várias famílias residentes em Trás os Montes. Referiu ainda que os arguidos investigados levavam as vítimas para ... em viaturas próprias e que em Espanha os ofendidos ficavam alojados em locais controlados pelos arguidos. Que eram preenchidos os requisitos formais para a prestação de trabalho, nomeadamente a inscrição na segurança social; e

que os patrões entregavam as remunerações directamente aos arguidos que depois não entregavam as remunerações aos ofendidos. Que mais tarde foram abertas contas bancárias em nome dos ofendidos, mas que os arguidos investigados ficavam com as cadernetas. Que os patrões espanhóis pagavam em média 40/60€ por oito horas de trabalho, mas que o dinheiro era controlado pelos arguidos. Que os ofendidos, além de trabalharem para os patrões Espanhóis ainda tinham de trabalhar na residência onde estavam, nomeadamente a apanhar lenha e a limpar a casa. Que em Espanha, nas campanhas das vindimas os trabalhadores podiam trabalhar aos fins de semana ou mais horas (do que as 8h), com aumento de remuneração. Que havia constrangimento das pessoas, designadamente e desde logo pela própria condição pessoal dos ofendidos, pela falta de documentos, pelo desconhecimento da língua, pela pressão dos arguidos para os ofendidos não e deslocarem sem autorização dos arguidos, pelas deslocações dos ofendidos sempre na companhia dos arguidos. Por outro lado, os episódios de fuga tinham como consequência agressões na presença dos restantes membros do grupo. Que os arguidos quando abordavam as vítimas prometiam a remuneração, as condições de trabalho, o alojamento e a alimentação. Os ofendidos aderiam imediatamente e seguiam logo com os arguidos, muitas vezes sem avisar a família. As famílias dos ofendidos só denunciavam o desaparecimento dos ofendidos por vezes quando precisavam de levantar as reformas destes. Os arguidos agiam em grupos recorrendo a familiares próximos ou indivíduos de confiança oriundos das zonas onde angariavam vítimas.

Referiu que, em relação ao arguido E..., a arma apreendida resultou duma busca domiciliária realizada em 25.04.2005, donde resulta que havia uma arma de fogo no quarto do arguido Ilídio, conforme resulta do auto de busca de fls. 845-848, tendo procedido ao exame dos artigos apreendidos (cfr. auto de exame de fls. 856-868).

Em relação aos arguidos B... e C... referiu que as vítimas deste grupo terão sido recrutadas na zona do Porto, tendo realizado o maior número possível de diligências com as vítimas, nomeadamente o reconhecimento de pessoas, de locais e trajectos. Referiu o reconhecimento relatado a fls. 1663 e segs. dos autos, nomeadamente o local onde os ofendidos estiveram em trânsito, a residência dos arguidos B... e C... em Murça.

O depoimento da testemunha G..., pintor de automóveis, que indicou as circunstâncias em que foi recrutado e eu foi para Espanha trabalhar. Referiu, nomeadamente, que se encontrava desempregado na altura dos factos e que o arguido B... o convidou por intermédio do seu amigo e vizinho H... para ir trabalhar para Espanha na manutenção de máquinas. Que foram (a testemunha o H... e o I... e outros dois ou três indivíduos) na carrinha do Chefe – o arguido B... -, tendo parado primeiro em Murça, onde ficaram uma noite em casa do arguido B... e da arguida C..., casa essa que indicou ao Inspector da P.J. Ao chegarem a Espanha, estiveram dois dias de descanso e depois começaram a trabalhar na poda das videiras. Esclareceu o horário de trabalho e as tarefas, diferentes das que lhe tinham sido oferecidas. Referiu que a comida não era boa nem má e que lhe pagavam 40 € por dia e que não lhe ficaram a dever nada. Que quis vir embora mais que uma vez, porque o trabalho era pesado e não percebia nada da poda, mas que não veio porque não conseguiu meios de comunicação e que a estação ficava a mais de 10 km de distância. Que estava num sítio isolado, não podia vir embora. Que disse várias vezes ao arguido B... que se queria vir embora, mas que este dizia para aguentar. Que uma vez foi lá a polícia perguntar se estavam todos bem, mas ninguém falou. Que o B... nunca bateu em ninguém. Que era o Sr. B... que orientava no trabalho e que pagava. Que quando se veio embora, ao fim de seis meses, o Sr. B... levou-o à estação e lhe entregou 900 €. Dos seis meses que lá trabalhou recebeu 900 €. Que as limpezas da casa tocavam a todos, que a casa tinha casa de banho, mas tinham que ir ao monte fazer as necessidades porque a arguida C... não deixava e que tomavam banho só uma vez por semana (ao Domingo). Que o L... uma vez picou-o com uma navalha. Que o M... tentou fugir da quinta, mas alguém o viu e trouxe-o de volta pra casa. Que a arguida C... tomava conta da casa e fazia a comida, que era péssima e sempre a mesma arroz com borrego e que a carne era pouca. Ninguém da sua família sabia que a testemunha estava em Espanha. Que o B... dava um maço de tabaco por dia a cada um, a descontar da conta. Que toda a gente (dos trabalhadores) queria vir embora, mas que ninguém vinha.

O depoimento da testemunha BD..., reformada, irmã do ofendido G..., que referiu que a dada altura deixou de ver o irmão e que lhe disseram que o mesmo tinha ido trabalhar para Espanha e que o irmão é uma pessoa doente. Que a dada altura a mãe do H... lhe deu um número de telefone e que telefonou ao irmão que lhe disse que estava bem, mas que ficou com a ideia de que ele não podia falar; passados dois meses o irmão regressou, muito magro. Que o irmão depois referiu que tinha muito trabalho e tentou fugir.

O depoimento da testemunha I..., serralheiro mecânico, que referiu que foi para Espanha, com o G... e com o H..., para trabalhar, a convite do H.... Que pensaram que os serviços eram adaptáveis à arte de cada um, sendo que o G... até levou a mala com a ferramenta. Quando lá chegou foi trabalhar na poda. A proposta que lhe fizeram era de 40 € por dia, descontando 10 € para alimentação. Foi para Espanha na carrinha do arguido B..., conduzida por este, que ia acompanhado da mulher, o G..., o H..., o I... e outros, incluindo o J... e o L..., tendo ficado uma noite em casa do arguido B..., casa essa que indicou ao Sr. Inspector da Polícia Judiciária. Esteve perto de seis meses em Espanha. Em Espanha ficaram numa habitação do arguido B..., pequena para todos. Que trabalhou para vários patrões que pagavam ao arguido B... ou à arguida C..., sendo esta que mandava mais. Que as refeições eram batatas, arroz, massa ou arroz e ossos à mistura. Que não tinha possibilidades para económicas para vir embora e que eram perseguidos. Que andavam sem dinheiro nenhum nem para telefonar. Só podiam tomar banho ao Domingo. Não podiam ir à casa de banho e faziam as necessidades no monte. Pediu ao arguido B... para vir embora, mas que este lhe dizia que não que era preciso acabar o trabalho. O J... e o L... vigiavam-nos. O M... uma vez à noite fugiu e o L... agrediu a testemunha porque queria saber se tinha ajudado o M... a fugir. Apareceu a polícia a pedir as roupas e o dinheiro devido ao M.... Que a polícia reuniu todos e perguntou quem queria ir embora, só que nessa altura o J... e o L... apontaram navalhas às suas costas e do G.... No final recebeu 550 € por seis meses de trabalho e o arguido B... levou-o à estação para vir embora. Não tinham dinheiro para ir ao café. O arguido B... dava um maço de tabaco por dia a cada um e mais nada. Que na viagem para Espanha ou o arguido B... ou a arguida C... confirmaram que iriam receber 30 € por dia e 10 € para alimentação. Como o pagamento era para ser diário e como não pagavam disse que queria vir embora mas a arguida C... disse que tinha que acabar a campanha.

O depoimento da testemunha M..., agricultor, que referiu que foi com o arguido B... e co a arguida C... para Espanha. Que o arguido B... lhe ofereceu trabalho em Espanha. que foi para Espanha trabalhar na poda, mas que nunca lhe pagaram o que prometeram (25 € por dia+comida). Que a dada altura fugiu e foi à polícia, que se deslocou ao local onde se encontravam alojados e lhe foi paga metade do dinheiro oferecido. Que o arguido B... os ameaçava com a bengala «...». As refeições eram só massa e batata com carne de borrego barata – os restos do talho. Referiu que podia usar a casa de banho para tomar banho e ir à casa de banho. Que o arguido B... lhe retirou o bilhete de identidade que lhe foi devolvido quando foi ao local na companhia da polícia. Que anteriormente havia tentado fugir, mas apanharam-no e que o arguido B... disse que se tentasse fugir outra vez o metia debaixo de terra e que o atirava da Serra abaixo. Que o L... e o J... eram capatazes do B... e que o primeiro o ameaçava e que ambos lhes davam ordens. Que quando foi com a polícia ao local, os outros acobardaram-se e ninguém disse que queria vir embora, embora nas conversas à noite todos dissessem que queriam vir embora. Referiu também que trabalhavam toda a semana e que o B... só dava dinheiro aos capatazes e que não podiam telefonar.

O depoimento da testemunha BE..., mãe de N..., mas cujo depoimento teve pouco interesse, uma vez que não tinha conhecimento dos factos, apenas sabendo que o seu filho terá estado a trabalhar em Espanha.

O depoimento da testemunha H..., electricista, cujo depoimento foi contraditório e prestado de modo a merecer pouca credibilidade, que referiu conhecer os ofendidos I... e G... há muitos anos e que esteve com eles a trabalhar em Espanha, depois de os ter apresentado ao arguido B.... Referiu que não fez contrato nenhum com o I... e com o G..., mas que ficou combinado que receberiam 40 € por dia para trabalharem nas vinhas, tendo dito ao G... par trazer a caixa da ferramenta. Referiu que só se receberia no fim da campanha. Referiu ainda a viagem que fizeram para Espanha, o trabalho que

lá faziam, que o M... se veio embora e que o arguido B... não lhe ficou a dever nada. Referiu que podiam tomar banho e que não estavam proibidos de ir ao quarto de banho.

O depoimento da testemunha testemunha BF..., Inspector-Chefe da PJ, que se referiu á busca realizada em AI..., confirmando o teor do auto de fls. 845-848.

O depoimento da testemunha testemunha BG..., vigilante, que referiu ter trabalhado para o arguido B... durante um mês em dois anos, em 2012-2103, nas vindimas em Espanha, referindo que tudo correu bem e tudo foi pago.

O depoimento da testemunha testemunha BH..., que referiu ter trabalhado durante 13 anos até 2013 para o arguido B..., em várias alturas do ano, sendo que nunca houve problemas.

O depoimento da testemunha testemunha BI..., sacerdote, que conhece o arguido B... há muitos anos tendo abonado da sua personalidade.

O depoimento da testemunha BJ..., reformado da GNR, que abonou do comportamento do arguido B....

O depoimento da testemunha BL..., reformado da GNR, que abonou do comportamento do arguido B....

O depoimento da testemunha BM..., Provedor ..., que abonou do comportamento do arguido B.... Teve ainda o tribunal em conta os documentos juntos aos autos, designadamente: - Auto de Busca e apreensão de fls. 845 a 848; - Auto de exame de fls. 851 a 853; - Auto de exame directo de fls. 856 a 868; - Informação de serviço de fls. 869 a 876; - Guia de fls. 877; - Registo clínico de fls. 988 a 992; - Auto de reconhecimento de locais e trajectos de fls. 1663 a 1664; - Informações laborais de fls. 2147 a 2156; - Fichas biográficas de fls. 2599 a 2602; - Informações de fls. 2920 a 2931 - Informações de fls. 3294 a 3314; - Auto de revista e apreensão de fls. 4489 a 4510; - Auto de leitura de memória e cartão Sim de fls. 4511 a 4527; - Folha de suporte e Auto de busca e apreensão de fls. 4546 e 4547; - Auto de busca e apreensão de fls. 4488.- Auto de revista pessoal e apreensão de fls.4489- Auto de busca e apreensão em veículo de fls. 4555 a 4560; - Declarações de fls. 4561 a 4573.

Mais foram tidos em conta os relatórios da DGRS e os CRC juntos aos autos.

Fundamentação:

A) Recurso do arguido B...:

Não se constata a existência, neste julgamento, dos vícios previstos no art.º 410.º, n.º2 do CPP, os quais são de conhecimento officioso, mas têm que resultar directamente do texto da decisão recorrida, só por si ou conjugadamente com as regras da experiência.

Inexiste qualquer erro notório na apreciação da prova, o qual como é sabido, vem a traduzir-se num erro grosseiro, ostensivo, na apreciação da prova, o qual não passaria despercebido a um cidadão leitor de cultura mediana, e que resultaria apenas do texto da decisão recorrida, só por si ou de forma conjugada com as regras da experiência.

A metodologia que o recorrente B... segue no que diz respeito à contestação de segmentos do julgamento da matéria de facto obedeceu genericamente aos ónus previstos no artigo 412.º, ns. 3 e 4 do CPP, pelo que nada impede que seja apreciado o seu mérito no âmbito do seu mecanismo de impugnação desse juízo. Remetendo para a globalidade de conteúdo dos depoimentos dos principais intervenientes procedeu de modo adequado, a nosso ver, pois só essa globalidade, caracterizadora de

todo um modo de vida, durante alguns meses, dos mesmos, nos permite apreender a veracidade dos factos em discussão.

Faz considerações sobre os meios de prova produzidos em audiência, mostrando discordância sobre a avaliação que foi feita pelo julgador.

Mas quanto à adesão que o tribunal fez da versão apresentada pela acusação, em detrimento da do arguido, convém aqui lembrar que um princípio que informa o processo penal é o da livre apreciação da prova. Dispõe o art. 127.º do CPP que, salvo quando a lei dispuser diferentemente, a prova é apreciada segundo as regras da experiência e a livre convicção da entidade competente. É no equilíbrio destas duas vertentes (as regras da experiência e a livre convicção do julgador) que a prova há-de ser apreciada.

Este princípio da livre apreciação da prova é válido em todas as fases processuais, mas é no julgamento que assume particular relevo. Não que se trate de prova arbitrária, no sentido de o juiz decidir conforme assim o desejar, ultrapassando as provas produzidas, A convicção do juiz não deverá ser puramente subjectiva, emocional e portanto imotivável. Tal decorre do art.º 374.º, n.º 2 do CPP, o qual determina que a sentença deverá conter “ uma exposição tanto possível completa, ainda que concisa, dos motivos de facto e de direito, que fundamentaram a decisão, com a indicação e exame crítico das provas que serviram para fundamentar a decisão do tribunal”.

Mas a decisão do juiz há-de ser sempre uma “convicção pessoal” - até porque nela desempenham um papel de relevo não só a actividade cognitiva mas também elementos racionalmente não explicáveis (v. g. a credibilidade que se concede a um certo meio de prova) e mesmo puramente emocionais “- Prof. Figueiredo Dias, “Direito Processual Penal “, Coimbra Editora, vol. I, ed. 1974, pag. 204).

Por outro lado, a livre apreciação da prova é indissociável do princípio da oralidade. Como ensinava o Prof. Alberto dos Reis, “ a oralidade, entendida como imediação de relações (contacto directo) entre o juiz que há- de julgar e os elementos de que tem de se extrair a sua convicção (pessoas, coisas, lugares), é condição indispensável para a actuação do princípio da livre convicção do juiz, em oposição ao sistema de prova legal”. E concluía aquele Professor, citando Chiovenda, que “ ao juiz que haja de julgar segundo o princípio da livre apreciação da prova é tão indispensável a oralidade, como o ar é necessário para respirar”.

O art. 127.º do CPP indica-nos um limite à discricionariedade do julgador: as regras da experiência e da lógica do homem médio suposto pela ordem jurídica. Assim, a exposição tanto possível completa sobre os critérios lógicos que constituíram o substracto racional da decisão- art.º 374.º, n.º 2 do CPP- não pode colidir com as regras da experiência.

Se a decisão do julgador, devidamente fundamentada, for uma das soluções plausíveis segundo as regras da experiência, ela será inatacável, já que foi proferida em obediência à lei que impõe que ele julgue de acordo com a sua livre convicção.

Na mencionada obra, a este propósito refere o Prof. Figueiredo Dias: “Por toda a parte se considera hoje a aceitação dos princípios da oralidade e da imediação como um dos progressos mais efectivos e estáveis na história do direito processual penal. Já de há muito, na realidade, que em definitivo se reconheciam os defeitos de processo penal submetido predominantemente ao princípio da escrita, desde a sua falta de flexibilidade até à vasta possibilidade de erros que nele se continha, e que derivava sobretudo de com ele se tornar absolutamente impossível avaliar da credibilidade de um depoimento(...). De qualquer modo, desde o momento em que- sobretudo por influxo das ideais da prevenção especial- se reconheceu a primacial importância da consideração da **personalidade do arguido** no processo penal, não mais se podia duvidar da absoluta prevalência a conferir aos princípios da oralidade e da imediação. Só estes princípios, com efeito, permitem o indispensável contacto vivo e imediato com o arguido, a recolha da impressão deixada pela sua personalidade. Só

eles permitem, por outro lado, avaliar o mais correctamente possível da *credibilidade* das declarações prestadas pelos participantes processuais”- págs. 233-234.

Os juízos dados como assentes na decisão recorrida asseveram-se como plenamente legítimos face ao conteúdo do princípio da livre apreciação da prova. A versão dada com provada é plausível e não contraria as leis da lógica.

O tribunal recorrido teve acesso a outros elementos, como tom de voz, gestos, capacidade física dos intervenientes, que lhe permitirão formar a sua convicção, a qual não resulta aqui sindicável.

A posição expressa pelo recorrente B... a propósito da não prova dos comportamentos que lhe são atribuídos parece apontar para o entendimento de que este Tribunal estaria agora em condições de proceder a um novo julgamento, considerando credível a versão da defesa do arguido agora exposta e não a da acusação.

Mas, pelas razões expostas supra, tal não é viável. O mecanismo de impugnação da prova previsto no art.º 412.º, ns. 3 e 4 do CPP destina-se antes a corrigir aquilo que se constata serem erros de julgamento e que resultem ostensivos da audição do registo de prova; já não a fazer tábua rasa das vantagens da imediação e do princípio da livre convicção de quem tem a difícil missão de julgar.

Os aspectos para que o recorrente B... chama a atenção e referenciados do registo de prova não são de molde a **imporem** uma decisão diversa da recorrida.

Reparando nos pontos para que o recorrente chama a atenção, é possível realçar contradições de pormenor, que sempre existem. A versão dos factos não foi exactamente contada da mesma forma por duas mesmas pessoas. Por vezes, a absoluta coincidência de versões é que é de molde a exigir algum distanciamento crítico.

Mas a função do julgador não é a de encontrar o máximo denominador comum entre os diversos depoimentos. Nem, tão pouco, tem o juiz que aceitar ou recusar cada um dos depoimentos na globalidade, cabendo-lhe antes a espinhosa missão de dilucidar, em cada um deles, o que lhe merece crédito. Como já há muito escrevia o prof. Enrico Altavilla, *o interrogatório como qualquer testemunho está sujeito à crítica do juiz, que poderá considerá-lo todo verdadeiro ou todo falso, mas poderá aceitar como verdadeiras certas partes e negar crédito a outras* – Psicologia Judiciária, vol. II, 3.ª ed., pág. 12.

Particularmente impressionantes são os depoimentos dos ofendidos G..., I... e M.... O seu teor é de tal forma pesado que até mesmo um cidadão de sofrível cultura e inteligência não poderia deixar de dar o seu assentimento imediato à confirmação dos factos que foram dados como provados.

Apenas mais uma nota em jeito de reforço: as reticências que poderiam existir são rapidamente eliminadas: o tom receoso inicial do depoimento G... cede face à evidência dos factos, a falta de credibilidade do depoimento do H... manifesta, com a delirante história dos barbecues a meio do trabalho, entre valados.

Como se explicitou no Ac. do STJ, de 7.12.2005, *SASTJ*, n.º 96,67, o teor do art.º 374.º, n.º2 do CPP, no que ao exame crítico das provas diz respeito, satisfaz-se com a enumeração *sem dúvida sintética* das razões que fundam a decisão.

Não se trata de construir um exercício de erudição, mas de fazer com que se possa compreender o que levou a decisão a um sentido e não a outro.

A decisão recorrida, como se explicita supra, valorou devidamente os depoimentos das testemunhas, designadamente os ofendidos, dentro dos parâmetros supra referidos, não deixando margem para dúvidas sobre a s razões porque lhes atribuiu credibilidade.

Inexiste, pois, a nulidade prevista no art.º 379.º, n.º1, al) a do CPP.

Não havendo alteração da matéria de facto dada como provada e concernente ao arguido recorrente, fazendo este derivar a não subsunção ao tipo dessa malograda alteração, subsiste necessariamente a incriminação da decisão recorrida.

B) Recurso da arguida C...:

1. O juízo sobre a *matéria de facto* e a *nulidade de sentença*.

No que diz respeito ao julgamento da matéria de facto, dão-se aqui como reproduzidas considerações já efectuadas na instância recursiva anterior, por simples razões de economia processual.

No que diz respeito à recorrente, importa ponderar a especificidade da sua actuação.

Após se ponderar o teor do registo de prova, nada há que imponha a menor ou insignificante participação nos factos da recorrente; antes pelo contrário, a sua intervenção é muito vincada, desde a sua confecção das péssimas refeições, passando pelo severo controle dos primitivos cuidados de limpeza e satisfação de necessidades fisiológicas no monte, até à substituição do marido na ausência deste, primando pela fiscalização da mão de obra, como o evidencia a testemunha I..., a qual foi vítima de uma “sacholada no pé de propósito”, e de furto de dinheiro (“num Domingo o Sr. B... deu-me 5 euros a mim e ao G... para irmos ao café e a C... tirou-nos a nota e saímos sem dinheiro nenhum”).

O registo de prova **impõe**, pois, o juízo de prova contido na decisão recorrida.

Inexiste igualmente qualquer violação do disposto no art.º 374.º, n.º2 do CPP, pois que o trecho referente à formação da convicção do tribunal não se limita a descrever o conteúdo dos diversos depoimentos, sendo objectivo no exame crítico dos mesmos, como se pode depreender, por exemplo, em todo o teor da página 32. Improcede assim a arguição da nulidade de sentença prevista no art.º 379.º, n.º1, al.) a do CPP.

2. *Subsunção jurídica* dos factos.

A decisão recorrida procedeu a esta subsunção, nestes termos:

Comecemos, então pelo crime de escravidão p. e p. pela al. a) do art. 159º do Código Penal. Dispõe tal norma:

“*Quem:*

a) Reduzir outra pessoa ao estado ou à condição de escravo;

É punido com pena de prisão de 5 a 15 anos.”

O bem jurídico tutelado por este tipo de ilícito é (cfr. Taipa de Carvalho no Comentário Conimbricense do Código Penal, Tomo I, p. 423) a dignidade ou personalidade humana individual.

Quanto ao tipo objectivo, cabe dizer que reduzir uma pessoa à condição de escravo é reduzi-la a uma coisa, tratá-la como sua propriedade, colocando-a num estado de sujeição total, consiste pois em uma pessoa ser tratada não propriamente como uma pessoa mas como uma coisa de que o agente dispõe (cfr. Taipa de Carvalho, loc. Cit. e ainda Paulo Pinto Albuquerque, Comentário do Código Penal, pág. 428). Esta noção de escravidão está contida na Convenção de Genebra de 1926: “A escravidão é o estado ou condição de um indivíduo sobre o qual se exercem os atributos do direito de propriedade ou alguns destes”.

A redução da pessoa ao estado ou à condição de escravo (Cfr. sobre esta matéria Paulo Pinto Albuquerque, loc. Cit., bem como os acórdãos do Tribunal da Relação do Porto de 30.01.2013 –Rel. Desemb. José Piedade -, de 27.11.2013 - Rel. Desemb. Augusto Lourenço – e de 05.11.2014 – Rel. Desemb. Artur Oliveira -, todos eles em dgsi.pt) pode se operada por qualquer meio, não implicando necessariamente o cativo da vítima. Os meios mais frequentes nas sociedades modernas de reduzir uma pessoa a escravo são o tráfico de seres humanos, a escravidão sexual, a escravidão laboral e a extracção de órgãos.

Em relação à escravidão laboral, cabe referir que a mesma existe, desde logo, quando se verificarem duas condições cumulativas: por um lado, a vítima não tem qualquer poder de decisão sobre o número de horas de trabalho que tem de prestar e, por outro, a vítima não dispõe de qualquer parte da retribuição pelos serviços prestados (Cfr. Paulo Pinto Albuquerque, op. cit. pág. 429).

Mas não só, porquanto, conforme se referiu no Ac. do Tribunal da Relação do Porto de 05.11.2014 (Rel. Desemb. Artur Oliveira), o conceito de escravidão do artº 159º, alínea a) do Código Penal, inclui os casos de servidão para a exploração do trabalho. A servidão constitui uma forma particularmente grave de negação da liberdade e uma realidade mais ampla que a invocada pelo sentido comum do termo “escravidão”. A servidão constitui a obrigação de viver e trabalhar na propriedade dos outros e de prestação de determinados serviços, remunerados ou não, bem como a impossibilidade de mudar a condição.

Quanto ao tipo subjectivo exige-se o dolo directo ou necessário, não bastando o eventual.

Começando pelo arguido AG..., cabe dizer que os factos que lhe eram imputados não resultaram provados, pelo que deve ser absolvido do crime de escravidão que lhe era imputado.

Já em relação aos arguidos B... e C... entende o tribunal que dos factos provados resulta que estes dois arguidos cometeram um crime de escravidão sobre cada um dos ofendidos G..., I... e M....

Com efeito, estes arguidos obtiveram o consentimento dos ofendidos para irem trabalhar para Espanha mediante uma determinada remuneração diária, a que acresceria alojamento e habitação. O que se veio a verificar, conforme resulta dos factos provados, é que os referidos arguidos se apropriavam da remuneração devida aos ofendidos, apenas lhes pagando o que quiseram quando estes se vieram embora, ao fim de alguns meses de trabalho. Acresce que, embora os ofendidos tenham pedido para se virem embora, os arguidos não os deixaram vir antes de terminada a campanha, assim lhes suprimindo a liberdade pessoal. Por outro lado, o ofendido M... tentou fugir da quinta onde se encontravam, sendo que o arguido B... o foi apanhar e o ameaçou. Mais, a determinada altura o ofendido M... conseguiu fugir e foi à polícia espanhola que se dirigiu à quinta onde se encontravam tendo a arguida C... pago parcialmente o que lhe era devido pelo trabalho, sendo que nessa altura alguns dos outros trabalhadores foram ameaçados pelos homens de confiança do arguido B.... Os ofendidos não tinham direito a servir-se da casa de banho para fazerem as suas necessidades, tendo de ir «ao monte» e apenas podendo tomar banho numa vez por semana.

Resumindo, destes factos somos forçados a concluir que os ofendidos foram sujeitos a trabalhos forçados, pois não tinham liberdade para se virem embora e apenas recebiam a sua remuneração se, quando, como e na quantidade que os arguidos B... e C... entendessem. Não podiam servir-se da casa de banho para fazer as necessidades, tendo de ir ao monte, sendo por isso tratados como se fossem coisas e não como pessoas. Se tentavam a fuga, como aconteceu com o ofendido M..., eram perseguidos, capturados e ameaçados, como se de coisas móveis pertencentes aos arguidos B... e C... se tratassem. Enfim, foram tratados de forma degradante e desumana pelos arguidos B... e C....

Também, o elemento subjectivo do tipo, o dolo, se mostra preenchido pelo comportamento dos arguidos B... e C..., tal como resulta dos factos provados.

Concordamos no essencial com esta interpretação do tipo, chamando particularmente a atenção para a sua densificação estritamente jurídica, ao nível das Convenções Internacionais, efectuada no mencionado acórdão deste TRP, de 5.11.14, tendo agora presente a segunda alínea do art.º 1.º da Convenção Suplementar de Genebra, de 7 de Setembro de 1956, a qual visa a servidão em tempo indeterminado para o trabalho agrícola. Aditamos, apenas, em jeito de reforço, e alguma correcção da argumentação em causa, duas ou três notas.

Tutela-se neste preceito legal algo mais profundo que a liberdade referida no excerto acabado de reproduzir. O “Comentário Conimbricense ao Código Penal” refere que *a autonomia e especificidade deste tipo de crime passa pela recondução do bem jurídico tutelado à dignidade ou personalidade humana individual(...) Reconduzir o bem jurídico tutelado exclusivamente à liberdade equivaleria a esvaziar de conteúdo prático este tipo de crime, atribuindo-lhe apenas uma função simbólica, pois que as diversas manifestações da liberdade humana (liberdade de decisão, de acção, de movimento, sexual, religiosa, política, etc) já estão previstas e tuteladas por diversos tipos de crime contra as liberdades)* – Tomo I da parte especial, pág. 423.

Trata-se da exploração do ser humano, feita por outro que não se resume à escravidão em sentido estrito, abarcando todas as formas de servidão. Haverá sempre que densificar o conceito com as circunstâncias económicas, sociais e culturais de cada época; e dentro de cada conjunto destas não é unívoco.

Assim, entre os escravos que trabalhavam nas minas e nos latifúndios do sul de Itália de Roma antiga e a deportação sistemática dos negros da África para a América, dos sécs. XVII e XVIII parece haver uma linha de continuidade na dureza e precariedade da condição humana envolvida. Mas *melhor, por certo, em regra, era o tratamento dos escravos que viviam na cidade e que, além dos serviços domésticos, podiam estar adstritos, segundo a sua capacidade, a funções delicadas e de responsabilidade: professores, preceptores, ajudantes do dominus no exercício colectivo de actividades empresariais, na realidade romana tardo-imperial e imperial, não se manifestava apenas na forma jurídica da societates, mas frequentemente se desenvolvia através do exercere negotiatones perservos communes. Estamos longe da concepção destes como de re rustica, que assimilava o escravo, como pertencente ao fundo, a um instrumento vocal* – cfr. Enciclopédia del Diritto, volume XLI, Giuffrè Editore, Milão, pág. 625, entrada “Schiavitù”.

Não releva a comparação com aquelas formas mais extremas de escravagismo para excluir o presente tipo legal.

A pág. 640 desta obra pode ainda ler-se: *Com esta incriminação, o ordenamento jurídico quer reprimir a constituição ou manutenção de relações de senhorio/sujeição que, considerando a pessoa análoga a um animal ou a uma coisa, não a tratam de acordo com a sua natureza humana. Objecto da tutela é o interesse da sociedade no reconhecimento e salvaguarda da personalidade individual. Mais que a liberdade, objecto de tutela é a pessoa humana.*

Já no Trattato di Diritto Penale Italiano, vol. VIII, pág. 633, Manzinni englova no conceito de escravidão «também as condições individuais que correspondem aos antigos institutos da semiliberdade e da servidão da gleba».

A condição análoga à escravidão em sentido estrito vem a ser *a condição de um indivíduo que – por meio da actividade aplicada por outrem sobre a sua pessoa – se venha a encontrar (embora conservando nominalmente o status de sujeito do ordenamento jurídico) reduzido à exclusiva senhoría do agente, o qual materialmente o utiliza, apropria-se do seu rendimento, de modo similar aquele que – segundo o conhecimento histórico, reunido no actual património sócio-cultural dos membros da colectividade – o «senhor», em tempos, exercia o seu poder sobre o escravo* – Paolo Pisa, Giurisprudenza Commentata di Diritto Penale, vol. I, Cedam, Padova, 1999, pág. 252.

Veja-se também o escrito a pág. 424 do Comentário Conimbricense: *A Convenção Suplementar de Genebra de 1956 indicou, a título exemplificativo, várias condutas que qualificou de «condições análogas» à de escravidão. Trata-se de comportamentos que têm o elemento típico da escravidão, ou seja, a redução de uma pessoa à categoria de mero objecto, coisa ou mercadoria.*

Dúvidas não existem sobre a sucessão de constrangimentos e desapossamento do fruto do seu trabalho a que os ofendidos foram sujeitos integrem o tipo de crime de escravidão.

3. A fixação da *medida da pena* e a suspensão da execução desta.

Face ao que ficou apurado no juízo da matéria de facto, o grau de culpa da arguida é máximo e elevado, sendo altamente censurável o seu procedimento do ponto de vista ético-jurídico – chocando a sensibilidade jurídica e moral de qualquer cidadão médio. Também o facto de ter filhos a seu cargo não é tida como circunstância susceptível de diminuir por forma acentuada o juízo de ilicitude, de culpa ou da necessidade da pena – pressuposto essencial da pretendida atenuação especial da pena, prevista no art.º 72.º, n.º1 do CP.

No que ao tempo decorrido desde a prática dos factos diz respeito, note-se que a decisão recorrida foi exarada em 5.2.2015. A execução dos crimes terminou sensivelmente em meados de 2004, pelo que se pode afirmar terem decorrido entre as duas datas pouco mais de dez anos e meio.

De forma reiterada e pacífica, tem o STJ vincado bem que o decurso do tempo só tem peso atenuativo se a demora não foi causada por conduta processual reprovável do arguido; ainda se o alvoroço social provocado pela prática do crime se esfumou e a personalidade do arguido se tenha transformado para melhor (veja-se conjunto de idênticas decisões na anotação ao art.º 72.º do CP, em Maia Gonçalves, Código Penal Anotado, 18.ª edição, 2007).

O tipo legal em causa envolve condutas de uma enorme magnitude. A notícia que a comunidade tem destes comportamentos provoca comoção social e fortes juízos de censura. Como escreveu o Prof. Taipa de Carvalho, no aludido Comentário Conimbricense do Código Penal, pág. 425, *a dignidade humana e a consequente personalidade jurídica individual é o fundamento de todos os bens jurídicos; donde a indisponibilidade absoluta do bem jurídico protegido por este tipo de crime e, consequentemente, a absoluta impossibilidade humana e jurídica de uma qualquer justificação de uma situação ou acto de escravidão. Acresce, sem que tal fosse necessário, que a redução de uma pessoa à condição de mero objecto nunca contribuiria para preservar fosse que bem jurídico fosse. Logo, são impensáveis quaisquer possibilidades de justificação de comportamentos tão radicalmente desumanos.*

E acrescenta o mesmo Autor, a pág. 426: *Sob o ponto de vista ontológico, moral e filosófico-jurídico, pode considerar-se a escravidão como o mais grave de todos os crimes: se, por exemplo, no homicídio ou genocídio, se destrói a vida de uma ou várias pessoas que são reconhecidas como tais pelo agente, na escravidão é a própria humanidade e dignidade pessoal que é negada pelo agente, ao transformar a pessoa em seu objecto. Não significa isto que, politico-criminalmente, a pena de escravidão deva ser superior à do homicídio ou do genocídio, pois que a “destruição” da dignidade humana é recuperável na escravidão, o que não acontece no genocídio mortal ou no homicídio. Significa, sim, que são impensáveis quaisquer hipóteses de desculpação.*

Mas impensáveis não eram, neste decurso de tempo dilatado entre a prática de tão abomináveis crimes pela recorrente, que esta procurasse convencer o tribunal que foi um ciclo perfeitamente isolado e irreversível da sua vida; que a sua personalidade não se revê neles, em síntese. Ora, a arguida não assumiu qualquer responsabilidade, confessando os factos, mostrando algum tipo de arrependimento, pelo menos reparando parte dos danos, ou sequer publicamente, em audiência, apresentando um simples pedido de desculpas.

O que evidencia que não houve qualquer transformação do mau carácter manifestado naquelas gravíssimas condutas, deixando suspeitar que, se idênticas circunstâncias se voltassem a proporcionar, a recorrente não teria grandes pruridos em as repetir.

E, na verdade, não há exagero algum nesta avaliação dessas condutas. Trata-se de abordar pessoas que já estão fragilizadas na vida, e aproveitar essa situação para as rentabilizar, como se de meras máquinas agrícolas se tratasse.

Repare-se só neste aspecto: sendo elas de humilde condição económica e social, não estariam por certo habituadas a uma boa ou adequada alimentação, conferindo-se rotinas exigentes a esse nível. Mas praticamente o conjunto das vítimas assume que a comida era péssima, que se tratava de arroz ou massa com um conjunto de ossos e pele de carne à mistura – algo que normalmente é entregue a muitos animais domésticos.

Também só os animais é que satisfazem as suas necessidades no monte. E só eles desenvolvem esforço, orientados pelos humanos, que não é recompensado a não ser pela alimentação que estes lhe proporcionam, a fim de se reconstituir elementarmente a sua força de trabalho.

Não, há, pois, qualquer razão para atenuar especialmente a pena, nos termos do disposto no art.º 72.º do CP, pois que nem a imagem global do facto não surge esbatida, na sua ilicitude ou juízo de culpa; nem a necessidade de punição se revelou menor frente a uma evolução favorável da personalidade da arguida.

Foi adequadamente cumprido o disposto no art.º 71.º do CP, limitando-se a recorrente a este nível a simplesmente invocar a violação do preceito – mas não se descortinando qualquer excesso a este nível, tanto mais que o quadro de circunstancialismo atenuante é reduzido face às correctas circunstâncias agravantes mencionadas na decisão recorrida.

Ultrapassando assim a pena única o limiar de cinco anos de prisão, inviável se mostra qualquer acto de ponderar o teor do art.º 50.º do CP.

Por último, em virtude de ter sido suscitada em audiência a questão da constitucionalidade do entendimento perfilhado relativamente ao âmbito do art.º 127.º do CPP, consideramos que o mesmo em nada ofende o art.º 32.º da CRP. Foi lido e reflectido o registo de prova, como supra se deu a entender. Quanto à imediação da prova, essa só a pode ter o tribunal recorrido, com as vantagens à mesma inerentes.

C) Recurso do MP:

Face ao que ficou dito no último parágrafo da instância recursiva da arguida, em coerência entendemos que não há razões, nem são alegadas circunstâncias especiais – além da forte ilicitude da conduta dos arguidos – que justifiquem um agravamento das penas.

Como o Exmo PGA junto deste Tribunal da Relação referiu, os arguidos não têm no seu passado inscrita a comissão de outros crimes.

Inserem-se na sua comunidade de residência de forma pacífica e sem reparos, sendo qualificados como pessoas correctas e educadas.

Não, há, pois razão para alterar a aplicação que foi feita do preceituado no art.º 71.º do CP nesta matéria.

Decisão:

Pelo exposto, acordam os Juízes deste Tribunal Colectivo em negar provimento aos recursos interpostos pelo MP e pelos arguidos **B...** e **C...**, confirmando integralmente a decisão recorrida.

Os arguidos pagarão taxa de justiça, a qual se fixa em 5 Ucs.

Porto, 9 de Dezembro de 2015.

Borges Martins
António Gama

Acórdãos TRP

Acórdão do Tribunal da Relação do Porto

Processo: 322/04.1TAMLG.P1

Nº Convencional: JTRP000

Relator: AUGUSTO LOURENÇO

Descritores: COMPETÊNCIA INTERNACIONAL
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL
CRIME DE BURLA RELATIVO A TRABALHO
CRIME DE ESCRAVIDÃO

Nº do Documento: RP20131127322/04.1TAMLG.P1

Data do Acórdão: 27/11/2013

Votação: UNANIMIDADE

Texto Integral: S

Privacidade: 1

Meio Processual: REC PENAL

Decisão: NEGADO PROVIMENTO

Indicações Eventuais: 4ª SECCÃO

Área Temática: .

Súmario:

I – Os Tribunais Portugueses são competentes para julgar crimes cometidos por portugueses contra portugueses angariados em Portugal e cuja acção se estendeu ao território espanhol, levada a cabo pelos mesmos indivíduos.

II – O princípio do juiz natural proíbe a designação arbitrária de um juiz ou tribunal para decidir um caso submetido a juízo, em ordem a assegurar uma decisão imparcial e isenta. O juiz que deverá intervir em determinado processo penal é *“aquele que resultar da aplicação de normas gerais e abstractas contidas nas leis processuais e de organização judiciária sobre a repartição da competência entre os diversos tribunais e a respectiva composição”*.

III – O crime de burla relativo a trabalho, previsto no art.º 222º do C. Penal, contém os mesmos elementos do tipo fundamental do crime de burla, exceptuando-se apenas o facto do erro ou engano incidir sobre um facto específico, que é o aliciamento ou promessa de trabalho.

IV – São traços característicos da escravatura:

- O trabalho forçado ou obrigatório, mediante a prática ou ameaça de qualquer tipo de castigo;
- O exercício de um direito de propriedade sobre a pessoa escravizada por parte de outrem, recorrendo a castigos ou a ameaças da sua prática;
- A desumanização;
- A limitação da liberdade de movimentos.

V – Comete o crime de escravatura quem, verificados os restantes elementos do tipo, obteve o trabalho de outrem mediante burla relativa a promessa de trabalho e emprego ainda que não se trate de um trabalho forçado *“ab initio”*.

Reclamações:

Decisão Texto Integral:

O TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO – SECÇÃO CRIMINAL (QUARTA)

- no processo n.º 978/07.3PAESP.P1

- com os juízes **Artur Oliveira** [relator] e **José Piedade**,

- após conferência, profere, em 5 de novembro de 2014, o seguinte

Acórdão

I - RELATÓRIO

1.No processo comum (tribunal coletivo) n.º 978/07.3PAESP, do 2º Juízo do Tribunal Judicial da Comarca de Espinho, em que são arguidos B... e C..., foi proferido acórdão que decidiu nos seguintes termos [fls. 928]:

“(…)

A) Condenamos o arguido B..., pela prática de um crime de escravidão, previsto pelo art. 159º/a) do Código Penal, na pena de 6 (seis) anos de prisão, no mais sendo absolvido;

B) Condenamos a arguida C..., pela prática de um crime de escravidão, previsto pelo art. 159º/a) do Código Penal, e com aplicação do regime especial para jovens, na pena de 2 (dois) anos de prisão, no mais sendo absolvida, pena essa que se suspende na sua execução por 2 (dois) anos, a contar do trânsito em julgado do presente acórdão, e mediante regime de prova assente em plano de reinserção social a elaborar oportunamente pela Direcção-Geral de Reinserção Social, a incidir sobre as vertentes da sua formação escolar e/ou profissionalizante e da sua inserção laboral. (...))»

2. Inconformados, os arguidos recorrem, extraíndo da respetiva motivação as seguintes **conclusões** [fls. 953-956]:

«1. Discordam os arguidos do acórdão condenatório proferido e que aplicou ao arguido B... e C... as penas de 6 anos e 2 anos de prisão (suspensa na execução), respectivamente, pela prática, em regime de em co-autoria, de um crime de escravidão, p. e p. pelo art. 159º. al. a) do CP.

2. Sustentam os arguidos existir violação do princípio in dubio pro reo (arts. 2º e 32º da CRP, 410º. N.º 2 al. c) do CPP), nulidade do acórdão por erro na determinação da norma aplicável e consequente omissão de pronúncia (artgs. 72º e 73º do CP, 374º n.º 2, 379º. N.º 2 al. c) e n.º 2 do CPP) e deficiente fixação da medida concreta da pena (artg. 71º do CP).

3. O tribunal a quo deparou-se, como resulta do texto da decisão recorrida, com dúvidas sobre a valoração atribuível à prova produzida.

4. A decisão recorrida, na exigência descrita, optou pela superação de toda a dúvida razoável assentando em três elementos fundamentais e que se percutem como notoriamente errada a sua apreciação valorativa.

5. O primeiro, avançando com a incredibilidade da versão dos arguidos ao sustentarem razões de natureza caritativa para acolherem o ofendido quando este, por seu turno, afirma que sempre os acompanhou contra a sua vontade (Págs. 10 e 11 do acórdão recorrido) O carater singular do

argumento utilizado pelo tribunal a quo - a pouca probabilidade de um casal jovem acolher alguém com deficiência e que não da sua etnia - permite superar uma dúvida probatória, sendo na sua essência o tal "puro acto de fé" que o mesmo tribunal assumiu como impeditivo de juízo valorativo.

6. O segundo, apontando a incongruência pontual das declarações dos arguidos em audiência, maxime, o conhecimento pelo arguido B... que o ofendido já havia vivido com outra família ao contrário do afirmado por este; saídas diárias do ofendido de casa dos arguidos; entrega de dinheiro pelo ofendido e aquisição de tabaco; posse de chaves da casa dos arguidos pelo ofendido. A pontual incongruência das declarações dos arguidos em nada belisca a possibilidade de corresponder realidade factual tudo quanto relataram. A vivência do arguido com outra família, a aquisição de tabaco, a posse de chaves da casa, e entrega de dinheiro de esmolas não consente a cristalização de um comportamento penalmente típico como escravagista.

7. O terceiro elemento, o facto de o ofendido já haver vivido com os avós da arguida C..., tal como esta reconheceu; a arguida reconheceu, igualmente, que o ofendido pediu esmola aquando desta vivência com os seus avós. Tal factualidade mereceu, inclusivamente, o julgamento dos avós da arguida pela Vara Criminal do Porto no âmbito do processo no 1478/04.9 J APRT, reportando-se os factos ilícitos até 30/6/2006. Tal factologia - ainda que a defesa não percepcione qual a verdadeira relevância que a mesma tem na determinação dos factos ilícitos imputados aos arguidos, maxime, arguido B... - é assumida pelo tribunal a quo como dúbia no sentido de possibilitar a "... confusão no espírito do ofendido no que concerne à exacta delimitação dos períodos em que esteve com uns e com outros dos elementos deste mesmo agregado..." sendo que tal confusão é positivamente assumida pelo julgador (pág. 13 do acórdão recorrido).

8. Em conclusão, os três elementos fundamentais, e únicos, que serviram de estribo à valoração da prova sobre a qual havia recaído dúvida (tal qual reconhece o tribunal a quo) não permitem a conclusão extraída pelo julgador, seja pela sua contradição e opacidade, seja pela manifesta exiguidade em caucionar a certeza para além de qualquer dúvida razoável (saliente-se que o arguido B... nem sequer é figurante ocasional no segundo dos elementos de dissipação de dúvida).

9. Neste conspecto, assume limpidez cristalina a violação do princípio in dubio pro reo na determinação dos factos provados e não provados, sendo tal violação constante do texto da decisão recorrida e, como tal, sindicável pela via de recurso e enquadrável na previsão do artg. 410º. N.º 2 al. c) do CPP.

10. Devendo, em consequência, ser revogado o acórdão recorrido, e, em conformidade, ser proferido acórdão pelo tribunal ad quem que, pela aplicação do princípio in dubio pro reo, absolva os arguidos da prática do crime de escravidão, p. e p. pelo artg. 159º al. a) do CP pelo qual se acham condenados.

11. Os arguidos B... e C... foram condenados pela prática de um crime de escravidão, p. e p. pelo art. 159º al. a) do CP, nas penas de 6 anos de prisão e 2 anos de prisão (suspensa na sua execução por igual período), respectivamente.

12. Os factos encontram-se delimitados temporalmente ao período compreendido entre 15 de Agosto a 16 de Setembro de 2007, sendo que prolação de acórdão condenatório ocorreu a 16 de Julho de 2013 (cfr. declaração de depósito), ou seja, decorridos que são mais de 6 anos sobre a prática delituosa.

13. O tribunal a quo atribui relevância jurídica ao decurso do prazo assinalado, 6 anos, em sede de determinação da fixação da medida concreta da pena (veja-se fundamentação de fls. 23 e 24 do acórdão recorrido), quando devia ter inscrito tal facto objectivo na previsão do artg. 72º n.º 2 al. d) do CP, aplicando-se, em conformidade, a atenuação especial da pena abstractamente aplicável ao tipo legal de crime em causa (segundo as regras de fixação da moldura penal previstas no artg. 73º do CP).

14. A aplicação do regime atenuativo obedece aos requisitos constantes do artg. 72º n.º 1 do CP, relevando para o caso concreto a existência de circunstâncias posteriores ao crime que diminuem a necessidade da pena, acrescendo a boa conduta do agente no decurso temporal pós prática criminosa.

15. Se a boa conduta do agente se manteve, e, tal dado é objectivo na pessoa da arguida C..., o mesmo se dirá do arguido B..., embora sem perder de vista o respectivo CRC, mas, aduzindo, em abono do preenchimento da exigência lei a não comissão de qualquer crime de idêntica descrição típica, nem qualquer outro que se inscreva nos crimes que afectam a liberdade pessoal.

16. E, no caso dos autos, o longo decurso de tempo nem sequer pode ser imputado a qualquer conduta dos arguidos mas, outrossim, à patente desvalorização que foi concedida à investigação destes autos pelo OPC (cfr. fls. 18, 22, 24 a 26).

17. Neste conspecto, não se pronunciando o tribunal a quo pela aplicação do disposto no artg. 72º e 73º do CP, atenuação especial da pena pelo decurso de longo tempo sobre a actividade delituosa, omitiu pronuncia sobre matéria de direito de conhecimento obrigatório, ferindo o acórdão recorrido de nulidade por força do disposto nos artgs. 374º n.º 2, 379º. N.º 2 al. c) e n.º 2 do CPP, e, artgs. 72º e 73º do CP.

18. O que se requer seja declarado com as legais consequências, maxime, a remessa dos autos ao tribunal a quo para que se pronuncie sobre a aplicação do artg. 72º do CP, e, sendo deferida a pretensão da defesa, seja sentenciada pena criminal em conformidade.

19. O arguido B... foi condenado na pena de seis anos de prisão pela prática do crime de escravidão, p. e p. pelo artg. 159º al. a) do CP.

20. A moldura penal abstracta aplicável ao crime de escravidão tem como limite mínimo os 5 anos de prisão e, no seu máximo, os 15 anos de prisão.

21. A defesa discorda, na sua essência, com a fixação de pena superior ao limite mínimo aplicável, ou seja, 5 anos de prisão, sustentando haver sido incorrectamente valorados os elementos decisivos na determinação da medida concreta da pena.

22. No caso em apreço, o tribunal a quo — e não obstante os antecedentes criminais do arguido, circunscritos na sua quase globalidade a delito estradal — sobre dimensionou a valoração da medida concreta da pena, porquanto os elementos que indiciam a sua agravação para além do limite mínimo já se encontra inscrito na tipificação legal (vulnerabilidade da vítima), e, como tal, já sopesado pelo legislador na fixação do limiar mínimo da punição, pelo que, os demais elementos nefastos se acham neutralizados por aqueloutros que abonam o arguido, intervindo neste especial contexto, o longo decurso de tempo desde a actividade delitativa até à condenação com trânsito em julgado).

23. Em nome da justiça e da equidade, seria adequada a aplicação ao arguido/recorrente de urna pena de 5 anos de prisão, qual realizaria as exigências decorrentes do fim preventivo especial, ligadas reinserção social do delinquente e exigências decorrentes do fim preventivo geral, ligadas à contenção da criminalidade e à defesa da sociedade.

24. A condenação do arguido em 5 anos de prisão possibilita a suspensão de execução da pena de prisão (artg. 50º e do CP) o que, em entendimento da defesa, apenas poderá ser julgado pelo tribunal a quo (em 1ª instância), pelo que, em conformidade com a condenação em pena de 5 anos de prisão, deverão os autos ser remetidos ao tribunal a quo para aplicação, ou não, de regime suspensivo da execução da pena de prisão, o que expressamente se requer.

Nos termos expostos, deverá o presente recurso ser provido com o que V. Ex. farão, como sempre, Justiça!

(...))»

3. Na resposta, o Ministério Público, de forma precisa e detalhada, refuta todos os argumentos da motivação de recurso, pugnando pela manutenção do decidido [fls. 977-981].

4. Nesta Relação, o Exmo. Procurador-geral Adjunto acompanha a resposta, salientando que o tribunal recorrido justificou cabalmente as razões que lhe permitiram fixar a convicção exposta e, por outro lado, que as circunstâncias invocadas pelos recorrentes não permitem atenuar especialmente a pena nem decretar a suspensão da execução da prisão, no caso do recorrente [fls. 989-990].

5. Colhidos os vistos, realizou-se a conferência.

6. O acórdão recorrido deu como **provados e não provados** os seguintes factos, seguidos da respetiva **motivação** [fls. 904-920]:

«(...)

2.1 Factos provados

Com interesse para a decisão consideramos provados os seguintes factos:

1) À data dos factos, os arguidos eram vendedores ambulantes.

2) Em data indeterminada, não posterior a 15 de Agosto de 2007, os arguidos elaboraram um plano entre si para reter e escravizar o ofendido D..., conhecido por «D1...», que conheciam das feiras que faziam, sabiam ser invisual, dedicar-se à mendicidade e não ter familiares próximos que o apoiassem, com o intuito de se apropriarem de todo o dinheiro que o mesmo recebesse na aludida actividade, contra a sua vontade e sem o seu consentimento.

3) Em concretização do aludido plano, no dia 15 de Agosto de 2007, quando o ofendido se encontrava a pedir esmola na Festa ..., nos ..., Vila Nova de Gaia, o ofendido foi abordado pelos arguidos, que o agarraram, o introduziram à força e contra a sua vontade num veículo, cuja matrícula em concreto não foi possível determinar, e o conduziram para o ..., no Porto.

4) Desde esse dia e até 16 de Setembro de 2007, data em que a PSP de Espinho interveio, os arguidos, de comum acordo e em conjugação de esforços, passaram a colocar diariamente o ofendido a pedir esmola, nomeadamente nas várias feiras que faziam, levando-o para esses locais que previamente determinavam sem o consultar, levando-o logo de manhã e recolhendo-o ao final da tarde, obrigando-o a pernoitar no apartamento onde os arguidos B... e C... viviam no referido bairro, para onde o transportavam, bem como a dar-lhes todo o dinheiro das esmolas por si obtido durante o dia, tudo sempre sem o consentimento e contra a vontade do ofendido, que igualmente era obrigado a pedir esmola no horário que os arguidos lhe determinavam.

5) No dia 16 de Setembro de 2007 os arguidos colocaram o ofendido a pedir esmolas na cidade de Espinho, junto à praia, na ..., onde veio a ser interceptado por agentes da PSP de Espinho junto ao café E....

6) Todo o dinheiro que o ofendido obteve no referido período, da forma apontada, foi obrigado a entregar aos arguidos, que o dividiram entre si, sem dar qualquer quantia ao ofendido.

7) No mesmo período, sempre que colocavam o ofendido a mendigar para si, os arguidos escolhiam os lugares onde aquele teria de ficar nessa actividade, bem como os horários que teria de cumprir, após o que o controlavam e vigiavam, alternadamente entre si, impedindo-o de fugir.

8) Todos os dias, no final da tarde, os arguidos recolhiam o ofendido e levavam-no para o referido apartamento, onde o obrigavam a pernoitar, sempre contra a sua vontade e sem o seu consentimento, e proibindo-o de sair daquele local.

9) No dia 19 de Setembro de 2007 o ofendido apresentava: na face, duas escoriações com 0,5 centímetros de diâmetro na região malar esquerda; no abdómen, duas equimoses na face lateral esquerda do tronco sobre os arcos costais inferiores com 3x2x2 centímetros de diâmetro; na região lombar direita, duas cicatrizes paralelas com 9 centímetros de comprimento; no membro superior direito, cicatriz hipopigmentada numa área de 9x7 centímetros na face postero-lateral do terço médio do antebraço, composta por várias áreas arredondadas, cada uma das quais com 1 centímetro de diâmetro, compatível com a queimadura por cigarros; no membro superior esquerdo, equimose na face antero-medial do terço médio do braço com 3x2 centímetros, equimoses amareladas dispersas pela face posterior do braço por uma área de 16x9 centímetros, a maior das quais numa área de 5x4 centímetros e duas cicatrizes lineares paralelas com 3 centímetros de comprimento na face lateral do terço proximal do braço.

10) As lesões referidas em 9) determinaram um período de três dias para a cura, sem afectação da capacidade de trabalho geral e sem afectação da capacidade de trabalho profissional.

11) Na data mencionada em 9) o ofendido apresentava ainda as seguintes lesões: no crânio, múltiplas cicatrizes na região fronto-parietal; no membro superior direito, múltiplas cicatrizes no dorso das mãos e dispersas por toda a extensão do membro; no membro superior esquerdo, múltiplas cicatrizes no dorso das mãos e dispersas por toda a extensão do membro; no membro inferior direito, múltiplas cicatrizes na face anterior da perna; no membro inferior esquerdo, múltiplas cicatrizes na face anterior da perna.

12) Os arguidos agiram livre, deliberada e conscientemente, de comum acordo e em conjugação de esforços, mediante plano previamente gizado entre si, bem sabendo que ao obrigarem o ofendido a mendigar nos locais e horários que eles próprios determinavam, ao controlarem essa actividade e ao apropriarem-se de todo o dinheiro obtido pelo ofendido na mesma, sem o seu consentimento e contra a sua vontade, reduziam-no à condição de coisa e de escravo, como se o ofendido fosse sua (deles) propriedade, o que sabiam não ser verdade.

13) Sabiam ainda que no aludido período de 15 de Agosto a 16 de Setembro de 2007, ao levarem o ofendido para os acima mencionados locais por eles definidos, ao recolherem posteriormente o ofendido, ao obrigarem-no a pernoitar no apartamento mencionado e ao impedirem-no de daí sair, tudo contra a vontade e sem o consentimento do ofendido, estavam a privá-lo da liberdade, bem sabendo que o ofendido era invisual e, por isso, especialmente indefeso, e aproveitando-se desse facto.

14) Sabiam os arguidos que a sua conduta era proibida e punida por lei.

*

15) Os arguidos vivem juntos num apartamento de tipologia 2, inserido em bairro social da cidade do Porto, mantendo um relacionamento próximo e afectivo entre si...;

16) ...as despesas inerentes à manutenção da habitação ascendem à quantia mensal de € 60,00, o que inclui renda, água e energia eléctrica...;

17) ...para fazer face a estas despesas, o casal conta exclusivamente com o rendimento social de inserção que lhes está atribuído pelos serviços de segurança social, no valor mensal de € 235,00...;

18) ...não têm filhos, embora estes façam parte dos projectos de vida do casal.

19) O arguido B... cresceu no seio do seu agregado familiar de origem, de acordo com as normas e regras da etnia cultural (cigana) a que pertence...;

- 20) ...integravam esse agregado os pais e, crê o arguido, 13 irmãos mais velhos, pois não está muito certo quanto a este número...;
- 21) ...os pais nunca exerceram qualquer actividade profissional, subsistindo essencialmente do apoio de serviços sociais do Estado, nomeadamente em paralelo à actividade de cesteiros...;
- 22) ...residiam em barracos, que construíam, mudando com frequência o local de habitação...;
- 23) ...mais tarde residiram numa casa pré-fabricada, nas imediações do ..., até ao momento em que foram realojados no ..., pela Câmara Municipal;
- 24) ...a dinâmica familiar (deste agregado de origem do arguido) era marcada por fortes laços de afectividade...;
- 25) ...quando o arguido tinha cerca de 14 anos o pai faleceu, ficando a residir com a mãe e uma irmã, pois os restantes irmãos já eram autónomos...;
- 26) ...dada a pouca valorização dos pais, decorrente de questões culturais, o arguido nunca frequentou qualquer estabelecimento de ensino durante a infância e a adolescência...;
- 27) ...ingressou em meio escolar já em idade adulta, mas nunca concluiu qualquer grau de escolaridade, pelo que permanece analfabeto...;
- 28) ...aos 10 anos começou a vender pensos na rua e mais tarde optou por vender balões em várias feiras da região do Norte do país, sempre com carácter irregular...;
- 29) ...há cerca de 10/11 anos consumiu substâncias estupefacientes, nomeadamente haxixe, mas apenas por um curto período de tempo, tendo abandonado os consumos por vontade própria...;
- 30) ...aos 21 anos encetou relação afectiva com a co-arguida C..., com quem passou a viver em união de facto, de acordo com aquilo que descreve como sendo a «lei cigana»...;
- 31) ...à data dos factos em discussão nestes autos residia com a co-arguida no ..., uma vez que a mãe faleceu nesse mesmo ano e o casal permaneceu na morada dos autos, que também está atribuída ao arguido, situação que permanece até à actualidade...;
- 32) ...consome diariamente entre um e dois litros de bebidas alcoólicas, não considerando que esse hábito seja condicionante no seu quotidiano...;
- 33) ...quotidiano este que decorre sem qualquer actividade estruturada, ocupando o tempo na companhia da arguida C..., em casa, a passear e a visitar familiares dela...;
- 34) ...mantém contacto próximo com dois irmãos, que também residem no ... e não tem grupos de convivência fora do enquadramento familiar...;
- 35) ...considera que ainda não conseguiu até hoje ocupação laboral por ser alvo de discriminação étnica, não sabendo contudo precisar em que situações tal ocorreu...;
- 36) ...no seu meio de residência assume uma postura cordial e educada no contacto com os moradores.
- 37) A arguida C... é proveniente de um agregado familiar de etnia cigana, tendo o seu desenvolvimento ocorrido junto dos pais e de seis irmãos...;
- 38) ...o seu agregado dedicava-se à mendicidade, sempre tendo vivenciado dificuldades económicas que foram atenuadas com a atribuição da prestação social de rendimento mínimo garantido...;

- 39) ...inicialmente viviam em barracas na zona ..., na cidade do Porto, e posteriormente foram realojados no ... do Porto...;
- 40) ...nunca frequentou a escola com regularidade, tendo concluído apenas o 2º ano de escolaridade e não sabe ler nem escrever, situação que foi promovida pelas referências do seu grupo familiar e cultural, que privilegiava o convívio com a família, em detrimento da formação escolar...;
- 41) ...juntou-se com o co-arguido, seu arguido, por volta dos doze anos de idade...;
- 42) ...nessa altura os arguidos foram viver para a morada que consta dos autos e integraram o agregado familiar da mãe do companheiro, entretanto falecida em 2004...;
- 43) ...nunca desempenhou nenhuma actividade laboral, sendo desde muito nova beneficiária de prestações sociais atribuídas pelos serviços de segurança social...;
- 44) ...no seu quotidiano privilegiava a companhia dos elementos do seu agregado familiar e posteriormente do seu companheiro...;
- 45) ...à data dos factos em causa nos autos dedicava-se à venda de balões e à mendicidade em feiras e romarias...;
- 46) ...no meio em que reside é descrita como pessoa educada e sem conflitos com os vizinhos...;
- 47) ...conhece o ofendido desde a altura em que este residiu na zona
- 48) O arguido B..., no âmbito do Processo Sumaríssimo nº 258/00, do 4º Juízo do Tribunal da Maia, foi condenado pela prática em 8/06/1999 de um crime de um furto, por sentença transitada em 5/12/2000, na pena de 60 dias de multa, à taxa diária de 300\$00, pena que cumpriu...;
- 49) ... no âmbito do Processo Comum Singular nº 630/03.9TAMTS, do 2º Juízo Criminal de Matosinhos, foi condenado pela prática em 3/04/2003 de um crime de um furto qualificado na forma tentada, por sentença transitada em 30/06/2004, na pena de 8 meses de prisão, suspensa na sua execução pelo período de um ano, pena já julgada extinta sem cumprimento da prisão...;
- 50) ... no âmbito do Processo Sumário nº 760/07.8PTPRT, do 2º Juízo, foi condenado pela prática em 28/05/2007 de um crime de condução de veículo sem habilitação legal, por sentença transitada em 18/06/2007, na pena de 100 dias de multa, à taxa diária de € 2,00, pena que cumpriu...;
- 51) ... no âmbito do Processo Sumário nº 156/10.4SMPRT, do 2º Juízo do Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto, foi condenado pela prática em 26/02/2010 de um crime de condução sem habilitação legal, por sentença transitada em 22/03/2010, na pena de 240 dias de multa, à taxa diária de € 5,00, pena que cumpriu...;
- 52) ... no âmbito do Processo Sumário nº 480/10.6SLPRT, do 1º Juízo do Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto, foi condenado pela prática em 8/07/2010 de um crime de condução de veículo sem habilitação legal, por sentença transitada em 3/08/2010, na pena de 6 meses de prisão, suspensa na sua execução por 1 ano, pena esta já julgada extinta, sem cumprimento de prisão...;
- 53) ... no âmbito do Processo Sumário nº 44/12.0SLPRT, do 3º Juízo do Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto, foi condenado pela prática em 4/02/2012 de um crime de condução de veículo sem habilitação legal, por sentença transitada em 27/02/2012, na pena de 7 meses de prisão, substituída por 210 horas de trabalho, pena já julgada extinta, sem cumprimento de prisão.
- 54) A arguida C... não tem antecedentes criminais.

2.2 Factos não provados

Com interesse para a decisão não considerámos provados quaisquer outros factos e designadamente os seguintes:

- a) que entre 15 de Agosto de 2007 e 16 de Setembro de 2007 o arguido B... agrediu o ofendido, sem qualquer motivo que o justificasse, dando-lhe pontapés nas pernas, bofetadas na cara e murros em todo o corpo, designadamente na cabeça, nas costas, na barriga, nos braços e nas mãos;
- b) que em dia indeterminado nesse mesmo período o arguido B... queimou o ofendido nos braços com um isqueiro e pontas de cigarros acesas;
- c) que foi com a sua conduta que foram provocadas as lesões no ofendido mencionadas acima em 9) a 11)
- d) que no dia 16 de Setembro de 2007 os arguidos B... e C... colocaram o ofendido a pedir esmola junto à igreja em Espinho, de manhã.

2.3 Motivação

A nossa convicção resulta do conjunto da prova produzida, lida e conjugada à luz das regras da experiência comum.

Dito isto, cumpre-nos naturalmente especificar com um pouco mais de desenvolvimento as razões da nossa convicção.

Vejamos.

É inequívoco que o ofendido D... pernoitou com os arguidos durante o período em causa, de cerca de um mês: os próprios arguidos reconhecem-no, como reconhecem ainda que vieram com o ofendido a Espinho por ocasião das festas da cidade, em Setembro de 2007.

No que concerne a estes factos – que o ofendido pernoitou com os arguidos durante este lapso temporal, e que vieram juntos a Espinho naquela ocasião - não há divergência entre as declarações dos arguidos e o depoimento do ofendido D....

Onde os depoimentos divergem é no essencial neste ponto: dizem os arguidos que se limitaram a dar guarida ao Sr. D..., por terem pena dele, face à sua situação (invisual), que ele sempre esteve com eles por sua plena vontade e sem qualquer espécie de maus tratos que lhe fossem infligidos; e diz o ofendido, pelo contrário, que foi levado à força da festa ... e sempre esteve contra vontade com os arguidos, que o obrigavam nas circunstâncias relatadas a mendigar em vários locais, apropriando-se dos valores nessa actividade por si conseguidos no dia-a-dia.

Importa então tentar perceber onde reside a verdade, e nomeadamente se na versão dos arguidos, se na do Sr. D....

Postas assim as coisas, desde já adiantámos que as declarações dos arguidos não nos merecem credibilidade.

Porquê?

Em primeiro lugar, dizem os arguidos que acolheram o ofendido em casa por terem pena dele.

É difícil acreditar que um casal jovem e que vive num apartamento sem mais ninguém decida acolher em casa um senhor que não é da família, que não é da sua etnia, que é significativamente mais velho e que tem uma deficiência física tão severa como a cegueira – a verificar-se uma lógica de pura (e nesse caso saudável) solidariedade, estaríamos em presença de um casal que nos mereceria os maiores elogios.

Mas se fosse assim, então não se compreenderia de todo por que motivo o ofendido surge a dizer que esteve contra sua vontade com os arguidos, para mais quando estes mesmos dizem que durante o período de um mês em apreço não houve entre eles qualquer problema: nenhuma discussão, nenhuma desavença - tudo correrá bem, em suma.

Porquê então esta postura do ofendido?

Em segundo lugar, as declarações dos arguidos, que em audiência ouvimos em separado, manifestam incongruências entre si.

Senão vejamos:

a) disse o B... que não sabia se o ofendido já estivera a viver com outra família; ora, a C... diz que o ofendido já vivera com os avós dela, pelo que logo por aqui seria de considerar como bem provável que o B... soubesse que o ofendido já estivera a viver com aquela família; mas mais: disse a C... que a mãe do B... é irmã da sua avó e que às vezes o B... ia lá nessa altura com a mãe, tudo sugerindo pois que o B... soubesse efectivamente, ao contrário do que disse, que o ofendido vivera já com outra família;

b) disse o B... que o ofendido saía de casa pela manhã, às 9h/10h00 e que regressava à tarde, pelas 17h/18h; ora, a C... disse que o ofendido comia lá em casa ao almoço quase todos os dias – mais; disse ainda a C... que não se lembra de o ofendido alguma vez ter saído de manhã e regressado apenas ao final do dia;

c) disse o B... que nunca saíram a passear a pé pelo ... os três juntos (ele, a companheira e o ofendido); ora, a C... disse o contrário - aliás, disse mesmo que quando saíam os três juntos, andavam à volta da casa;

d) disse o B... que o ofendido saía sozinho e quando chegava dava-lhes por vezes algum do dinheiro que trazia; ora, a C..., quando inquirida pelo Tribunal, disse por mais de uma vez que o ofendido nunca lhes dera dinheiro (e só afirmou coisa diversa quando inquirida sobre a mesma matéria pelo seu Ilustre Mandatário);

e) disse o B... que era o ofendido que comprava o seu próprio tabaco; ora, disse a C... que muitas vezes eram eles, arguidos, que compravam o tabaco do ofendido;

f) disse o B... que o ofendido chegou a ter a chave do apartamento dos arguidos; ora, disse a C... que o ofendido nunca teve a assinalada chave.

E em terceiro lugar, importa notar o seguinte: o ofendido já vivera com os avós da C..., como esta mesma reconheceu, como disse que ele viveu e andava com os seus avós a pedir esmola.

E vivera e pedira esmola em que condições?

Atente-se em alguns dos factos, a que o ofendido não deixou de se referir em audiência, que foram já dados por provados por acórdão transitado em julgado, proferido no âmbito do Processo nº 1478/04.9JAPRT, da 4ª Vara Criminal do Porto (cfr. fls. 812 a 835): F... [a avó da arguida C...] e G... [a C... disse desconhecer o nome do avô, num primeiro momento, mas depois acabou por afirmar que lhe parecia que era «G...» e que este estava preso «por via do D1...»], arquitectaram um plano no

sentido de auferirem proventos económicos à custa do ofendido, e em execução desse plano e juntamente com outros indivíduos retiveram o ofendido sempre sob sua alçada, e de noite fechado por cadeado numa barraca de madeira; aproveitando-se da incapacidade física do ofendido, colocavam-no a pedir esmola em diversos locais do país, no que era acompanhado e controlado à distância; todo o dinheiro que o ofendido conseguia obter nessa actividade era entregue à arguida F... [a avó da C...]; por vezes o ofendido era obrigado a trabalhar numa sucata; por vezes o ofendido era agredido e nunca auferiu qualquer retribuição pelo seu trabalho, nem nunca conseguiu reter para si qualquer quantia obtida a mendigar; o ofendido esteve nessa situação ininterruptamente durante vários anos; várias vezes o ofendido foi encontrado a mendigar e várias vezes foi reencaminhado a seu pedido para a sua residência na Figueira da Foz; no entanto, os arguidos persistiram sempre nos seus intentos e obrigavam-no a regressar com eles para o Porto; em Maio de 2004 foi novamente reconduzido para a Figueira da Foz; ainda assim, em Julho de 2004, os arguidos, uma vez mais, sabendo do paradeiro do ofendido, lograram abordá-lo e conduzi-lo de novo para o Porto; mais uma vez viu-se obrigado a pernoitar, fechado, na referida barraca e a pedir esmola e a trabalhar na sucata, contra a sua vontade e sem que daí recebesse qualquer contrapartida; em Junho de 2006 acabou por ser encontrado pela Polícia Judiciária e foi nessa sequência conduzido para a Figueira da Foz, a 30 de Junho de 2006, onde conseguiu manter-se por período indeterminado.

E terá sido pois nestas circunstâncias que o ofendido esteve durante anos com familiares directos da aqui arguida.

Pergunta-se: poderá haver alguma confusão no espírito do ofendido no que concerne à exacta delimitação dos períodos em que esteve com uns e com outros dos elementos deste mesmo agregado?

Admitamos que sim.

Com efeito, repare-se que disse o ofendido em audiência, no contexto da confrontação feita com o que declarara em sede de Instrução, que esteve com o «B...» e a «C...» um mês, depois da intervenção da Polícia de Segurança Pública em Espinho regressou ao Porto, onde esteve uma semana, e em seguida voltou a ser «apanhado» pelo «B...» e pela «C...» e desta feita esteve com eles dois anos, até ser salvo pelo «Sr. H...», «da Junta de Freguesia».

Tendo o Tribunal assumido tratar-se da Junta de Freguesia ..., chegou a convocar o dito «Sr. H...», que veio a constatar-se ser um assistente social da assinalada Junta de Freguesia, e que reconheceu que no exercício das suas funções acompanhou o agregado familiar da C..., sobretudo a pretexto do seu realojamento; e a verdade é que esta testemunha deu conta de uma intervenção da sua parte que esteve na origem de uma das saídas do ofendido do agregado, mas que tal ocorreu seguramente em data anterior àquela que resultaria do depoimento do ofendido.

Não nos merecendo nenhuma reserva este depoimento do Dr. H..., é forçoso concluir que o ofendido incorre em aparente erro ou confusão quando diz que depois de ter estado um mês com os aqui arguidos, voltou a estar com eles, uma semana volvida, e agora durante dois anos.

A questão que se põe é a de saber se esta aparente confusão do ofendido é suficiente para descredibilizar o seu depoimento quanto ao mais, e nomeadamente quanto ao que diz ter sucedido durante o período de um mês em discussão nos autos.

Importa referir que o depoimento prestado pelo ofendido em audiência, considerado este no seu conjunto, quanto a este período de um mês, é suficientemente congruente com a demais prova existente neste aspecto, sobre o qual não há nenhuma «confusão»: o arguido esteve efectivamente um mês em casa dos aqui arguidos, onde só estes residiam, entre meados de Agosto e meados de Setembro de 2007, até à intervenção da PSP de Espinho.

Por outro lado, e neste âmbito, o ofendido foi também seguro quando descreveu o modo como foi levado contra a sua vontade, desde a altura da Festa nos ..., para casa dos arguidos e a forma como

logo de seguida era tratado no quotidiano nomeadamente no que toca às circunstâncias (i) de não o deixarem sair sozinho de casa, ao ponto de uma vez, em que tentara fazê-lo, ter sido agredido pela C... com uma «estalada», (ii) de ser colocado a pedir esmolas nos locais e horários por eles definidos, (iii) de os arguidos estarem próximos do ofendido, pois este ouvia as suas vozes e/ou o rádio da carrinha em que se deslocavam, (iv) as ameaças que lhe eram dirigidas e (v) o facto de ao final do dia o desapossarem invariavelmente da caixa de madeira usada para a recolha das esmolas.

Mais: ante a natureza, a gravidade e a duração dos factos, de resto ocorridos com interrupções, pelos quais passara já e que viriam a ser dados por provados no Processo nº 1478/04.9JAPRT, e considerando a especificidade da sua debilidade física e o seu desamparo social, e não ignorando ainda que do que se trata é no fundo de pessoas integradas num mesma família alargada de que fazem parte os arguidos B... e C..., é natural que o depoimento do ofendido não surja absolutamente cristalino.

Mas não é como se sabe de uma certeza rigorosamente absoluta o que buscamos.

Note-se que o processo penal português situa-se no âmbito do chamado sistema da prova livre, no sentido de que o relevo maior ou menor de cada um dos meios de prova é aferido pelo Tribunal de acordo com a íntima convicção do julgador, em função das circunstâncias concretas do caso, e não de acordo com regras prévia e tabelarmente fixadas em abstracto.

Não quer isto dizer, naturalmente, que uma tomada de posição por parte do tribunal quanto aos factos em causa possa traduzir-se num puro acto de fé; ao dar um determinado facto como provado, o julgador deve decerto estar convencido da sua veracidade, mas esta sua convicção não pode ser puramente subjectiva ou arbitrária – tem antes que ser motivável, objectivável, susceptível de pelo menos em tese convencer os destinatários da decisão ou a comunidade jurídica em sentido geral, o que significa que a posição que seguir em matéria de facto deve estar racionalmente estruturada.

A questão que se põe é a de saber qual o grau de convicção que ao tribunal se exige que tenha para dar por assentes os factos em causa; ora, neste aspecto, na linha da tradição anglo-americana, tem sido entendido que um facto deve ser tido por provado se o Tribunal dele se convencer para além de toda a dúvida razoável [Figueiredo Dias, Direito Processual Penal, 1ª ed., reimpressão (2004), Coimbra Editora, pgs. 199 e 206].

Se existir uma dúvida razoável sobre determinado aspecto da prova, isto é, uma dúvida séria, consistente, que seja justificável de forma convincente diante terceiros, então o facto que se destinaria a provar deve ser tido por não provado [BAPTISTA GONÇALVES, Do julgamento, Centro de Estudos Judiciários, 2006 (inédito), pg. 127].

Ora, estamos em crer que o que acima expusemos permite superar o «teste da dúvida razoável» quanto aos factos provados e nomeadamente quanto à natureza e ao grau da intervenção dos arguidos.

E o que vimos de dizer surge ainda reforçado se considerarmos as circunstâncias em que foi posto fim a este período de um mês, que ressaltam do conjunto dos depoimentos produzidos em audiência pelas testemunhas Manuel Ferreira, agente da PSP que estava de patrulha na área em que se achava o ofendido no dia 16 de Setembro de 2007 e a quem foi a situação sinalizada por uma jovem, a qual víriamos também a ouvir em audiência, de seu nome I...

O depoimento desta última testemunha, aliás, relevou ainda na afirmação de dois aspectos que corroboram o desenho antes traçado quanto à vivência do ofendido e à intervenção dos arguidos (e neste específico ponto do arguido B...): um, é o de que tem a certeza que o arguido B... achava-se na ocasião nas imediações, embora não consiga precisar se o mesmo foi ou não um dos indivíduos de etnia cigana levados pela PSP; outro, é o de que, antes da intervenção da PSP, vira duas crianças de etnia cigana saírem do local onde havia vários adultos da mesma etnia, entre os quais o arguido B..., e dirigiram-se (as crianças) ao ofendido, e uma vez chegados junto deste, puxaram-lhe a caixa de esmolas e agrediram-no ao pontapé.

Vale isto por dizer que os arguidos não andavam sempre sozinhos com o ofendido (como este não deixou de referir ao mencionar o nome de um tal «J...», com intervenção desde logo no primeiro dia, na Festa ..., nos ...), o que também não deixará de contribuir para uma certa nebulosidade no espírito do ofendido.

Todavia, isto não significa que a intervenção dada por provada quanto aos arguidos B... e C..., no mês em referência, não esteja suficientemente estribada, para além de toda a dúvida razoável, na prova produzida, e nomeadamente no depoimento do ofendido.

Dizer isto não equivale evidentemente a que faça impender-se sobre os arguidos qualquer espécie de ónus de prova, como não significa que o critério de aferição da prova não continue a ser o acima assinalado da «dúvida razoável».

Equivale apenas à constatação de que o depoimento do ofendido tem que ser compreendido sem leituras precipitadas, com paciência e cuidado, na medida em que nem ele é uma pessoa comum, dadas as suas limitações físicas e sociais, nem é tão pouco uma pessoa que tenha passado por situações comuns.

Ora, entendemos que uma compreensão do seu depoimento na linha do que acabamos de mencionar, feita em articulação com os demais elementos, levam-nos a concluir, com o grau de segurança que temos por exigível, pela veracidade dos factos que demos por provados.

Face à natureza dos factos objectivos imputados aos arguidos, lidos e compreendidos à luz das regras da experiência comum, são judicialmente de presumir a consciência, a voluntariedade e a intenção que lhes presidiu, como é de presumir ainda que eles soubessem que era proibida a sua conduta.

No que diz respeito às lesões físicas que o ofendido apresentava no dia 19 de Setembro de 2007, tivemos em atenção os relatórios periciais de fls. 119 a 126.

Da análise desses relatórios, para além da caracterização daquelas lesões, ressalta ainda a identificação de um conjunto de lesões que logo aí são afastadas, por insusceptíveis de terem sido sofridas pelo ofendido no período de um mês em referência, a saber, as lesões mencionadas em 11), que são apresentadas a fls. 121 como «sem relação com o evento».

Por outro lado, quanto às lesões em tais relatórios afirmadas como sendo relacionáveis com o evento, diríamos que o ofendido não as imputou ao período de um mês que passou com os aqui arguidos, e nessa medida não damos por provada a relação das mesmas com alguma conduta daqueles.

No que concerne à matéria que demos por não provada, a nossa posição resulta, para além do que deriva do já dito, da ausência de prova directa e com suficiente consistência.

No que diz respeito às condições sócio-económicas dos arguidos, a nossa posição estriba-se nos relatórios sociais juntos a fls. 711 a 719.

*

Em matéria de antecedentes criminais, tivemos em atenção o que deriva dos certificados correspondentes, que constam dos autos.

(...))»

II – FUNDAMENTAÇÃO

7. Face às conclusões apresentadas, que delimitam o objeto do recurso, importa decidir as seguintes questões:

- Violação do princípio in dubio pro reo;
- Atenuação especial da pena;
- Medida da pena fixada ao recorrente.

Violação do princípio in dubio pro reo

8. Os recorrentes sustentam que o acórdão violou o princípio in dubio pro reo na medida em que o “tribunal ad quo [se] deparou, como resulta do texto da decisão recorrida, com dúvidas sobre a valoração atribuível à prova produzida” e ainda assim, “optou pela superação de toda a dúvida razoável assentando em três elementos fundamentais e que se percutem como notoriamente errada a sua apreciação valorativa” [conclusões 3 e 4 e 5 a 10].

9. Não tem razão. Como bem se percebe do texto da decisão recorrida, o coletivo de juízes limitou-se a explanar as vicissitudes da prova produzida e, ponto por ponto, a forma e as razões pelas quais se firmou a sua convicção.

10. Traça, com elevado rigor e total transparência, o equilíbrio e o sentido de valoração das provas produzidas que, em seu entender, levam claramente à afirmação dos factos dados como provados. Não há, portanto, um reconhecimento de dúvidas mas sim uma pormenorizada revelação do exame crítico que fizeram sobre a totalidade da prova produzida. A prova, mais do que uma demonstração racional, é um esforço de razoabilidade [Cristina Líbano Monteiro, In Dubio Pro Reo, 1997, pág. 17]. E perante as circunstâncias específicas destes autos (que o acórdão identifica e detalha com pormenor) o coletivo de juízes entendeu, num exercício de honestidade intelectual, expor com absoluta transparência os raciocínios e premissas que atenderam na delimitação dos factos dados como provados.

11. Importa reafirmar que a violação deste princípio só ocorre quando, após a produção e a apreciação dos meios de prova relevantes, o julgador se defronte com a existência de uma dúvida razoável sobre a verificação dos factos e, perante ela, decida “contra” o arguido. Não se trata de uma dúvida hipotética, abstrata ou de uma mera hipótese sugerida pela apreciação da prova feita pelo recorrente, mas de uma dúvida assumida – ou que devia ter sido assumida – pelo próprio julgador. Assim, haverá violação do princípio in dubio pro reo se for manifesto que o julgador, perante essa dúvida relevante, decidiu contra o arguido, acolhendo a versão que o desfavorece; ou quando, embora se não vislumbre que o tribunal tenha manifestado ou sentido dúvidas, da análise e apreciação objetiva da prova produzida, à luz das regras da experiência e das regras e princípios em matéria de direito probatório, resulta que as deveria ter [Ac.STJ de 27.5.2010 e de 15-07-2008; e Ac.RP de 22.6.2011, 17.11.2010, 2.12.2009, 9.9.2009 e de 11.1.2006, todos disponíveis em www.dgsi.pt].

12. Segundo os recorrentes, estão em causa a falta de credibilidade atribuída às suas declarações (e a incongruência das mesmas) e a justificação vançada para a “confusão” da vítima quanto à exata delimitação dos períodos em que foi forçado a viver com os aqui arguidos e o período em que foi forçado a viver com familiares destes, matéria que foi objeto de condenação num anterior processo.

13. Ora, a credibilidade assumida em relação às declarações e aos depoimentos é fortemente marcada pela prestação na audiência de julgamento. A oralidade e a imediação que informam a dinâmica deste ato processual facultam ao julgador um vastíssimo leque de pormenores e de elementos valiosos sobre a (im)parcialidade, espontaneidade, seriedade, hesitações, postura, atitude, razões de ciência, linguagem, à-vontade, comportamento, etc., dos depoentes. Alguns destes aspetos, de tão subtis

[“linguagem silenciosa e do comportamento”], não são sequer passíveis de identificação e de revelação. Nas palavras do Professor **Figueiredo Dias**: “desempenha um papel de relevo não só a atividade puramente cognitiva mas também elementos não racionalmente explicáveis (...) e mesmo puramente emocionais” [Direito Processual Penal, Primeiro Volume, 1981, p. 205.].

14. Por isso, se o julgador revela o quadro geral das impressões determinantes da sua convicção e estas não se mostram contrárias à razoabilidade das coisas comuns, então, nada lhe pode ser assacado em termos de produzir uma alteração da convicção formada a partir deles [Nesse sentido, Ac. STJ, de 15/07/2008, Proc. n.º 418/08 - 5.ª Secção (Conselheiro **Souto de Moura**): “I - Uma coisa é não agradar ao recorrente o resultado da avaliação que se faz da prova e outra é detetarem-se no processo de formação da convicção do julgador erros claros de julgamento, incluindo eventuais violações de regras e princípios de direito probatório. II - Por outro lado também não pode esquecer-se tudo aquilo que a imediação em 1.ª instância dá e o julgamento da Relação não permite: basta pensar no que, em matéria de valorização de testemunhos pessoais, deriva de reações do próprio ou de outros, de hesitações, pausas, gestos, expressões faciais, enfim, das particularidades de todo um evento que é impossível reproduzir. III - O trabalho que cabe à Relação fazer, na sindicância do apuramento dos factos realizados em 1.ª instância, e da fundamentação feita na decisão por via deles, traduz-se fundamentalmente em analisar o processo de formação da convicção do julgador, e concluir, ou não, pela perfeita razoabilidade de se ter dado como provado o que se deu por provado – cf. Acs. de 15-02-2005 e de 10-10-2007, Procs. n.ºs 4324/04 - 5.ª e 3742/07 - 3.ª, respetivamente”; ver, tb., o Ac. RP de 12 de Maio de 2004 (**Élia São Pedro**), processo 0410430: “I – A convicção do julgador só pode ser modificada pelo tribunal de recurso quando seja obtida através de provas ilegais ou proibidas, ou contra a força probatória plena de certos meios de prova ou, então, quando afronte, de forma manifesta, as regras da experiência comum. II – Desde que a convicção seja uma convicção possível e explicável pelas regras da experiência comum, deve acolher-se a opção do julgador” – ambos disponíveis em www.dgsi.pt].

15. É essa, aliás, a orientação do Tribunal Constitucional ao considerar: “A censura quanto à forma de formação da convicção do Tribunal não pode consequentemente assentar de forma simplista no ataque da fase final da formação dessa convicção, isto é, na valoração da prova; tal censura terá de assentar na violação de qualquer dos passos para a formação de tal convicção, designadamente porque não existem os dados objetivos que se apontam na motivação ou porque se violaram os princípios para a aquisição desses dados objetivos ou porque não houve liberdade na formação da convicção. Doutra forma, seria uma inversão da posição dos personagens do processo, como seja a de substituir a convicção de quem tem de julgar, pela convicção dos que esperam a decisão” [Ac. n.º 198/2004].

16. É o caso dos autos: a convicção do tribunal mostra-se apoiada na prova produzida e a leitura que dela foi feita é plausível e ajustada às regras da experiência comum [artigo 127.º, do Cód. Proc. Penal]. Da análise feita nada nos permite fazer um pronunciamento de censura quanto ao juízo de credibilidade atribuído a cada um dos intervenientes em audiência e, em particular, às declarações dos arguidos e ao depoimento da vítima [ver Ac. RC de 12.5.2010 (**Orlando Gonçalves**): “(...) 5. O preceituado no art.127.º do Código de Processo Penal deve ter-se por cumprido quando a convicção a que o Tribunal chegou se mostra objeto de um procedimento lógico e coerente de valoração, com motivação bastante, e onde não se vislumbre qualquer assumo de arbítrio na apreciação da prova”; e Ac. RP de 10.09.2014 (**Neto de Moura**): “II – Tal análise crítica (das provas) há de ser mais ou menos profunda, mais ou menos exaustiva, em função da maior ou menor complexidade do caso. (...) V – Os limites da liberdade valorativa da prova no âmbito penal são as regras da lógica e da razão, as máximas da experiência e os conhecimentos técnicos e científicos. (...) XI – Se o tribunal recorrido, analisada e valorada a prova produzida, não ficou na dúvida em relação a qualquer facto, não pode dizer-se que, na dúvida decidiu contra o arguido, pelo que não tem base de sustentação a imputação de violação do princípio da presunção de inocência e do in dubio pro reo - disponíveis em www.dgsi.pt]. Improcede, pois, este primeiro fundamento do recurso.

Atenuação especial da pena

17. Dizem os recorrentes que o acórdão recorrido é nulo, por omissão de pronúncia [artigos 379.º, n.º 2, alínea c) e 374.º, n.º 2, do Cód. Proc. Penal], uma vez que não aplicou o regime da atenuação especial da pena por “os factos [se] encontrarem delimitados temporalmente ao período compreendido entre 15 de agosto e 16 de setembro de 2007” terem decorrido há mais de 6 anos e ambos os arguidos apresentarem “boa conduta (...) no decurso temporal pós prática criminosa (...) a não comissão de qualquer crime de idêntica descrição típica” [conclusões 12 a 18].

18. Voltam a não ter razão. O artigo 72.º, n.º 1, do Cód. Penal, reserva a atenuação especial da pena aos “casos previstos na lei” e àqueles em que “existirem circunstância anteriores ou posteriores ao crime, ou contemporâneas dele, que diminuam por forma acentuada a ilicitude do facto, a culpa do agente, ou a necessidade da pena”. E no n.º 2, enumera algumas dessas circunstâncias.

19. Ao aludir a uma “diminuição acentuada” da ilicitude, da culpa ou da necessidade da pena o legislador pretende criar uma válvula de segurança para as situações em que se tenha coligido um importante conjunto de circunstâncias atenuantes em face das quais a imagem global da atuação do agente não se coaduna com as hipóteses normais que o legislador pensou quando estatuiu a moldura típica para o caso [**Figureiredo Dias**, Direito Penal Português – As Consequências Jurídicas do Crime, pág. 306]. Ora, não é isso que se passa no caso dos autos: as situações invocadas pelos recorrentes, por si só ou em conjunto, não compõem uma circunstância de exceção relativamente ao padrão comum da atuação dos agentes no âmbito deste tipo de crime. Tanto a delimitação temporal dos factos – que perduram um mês –, como a circunstância destes terem ocorrido há mais de 6 anos e de não haver registo de condenações criminais nesse período não têm a expressão de relevância excepcional exigida pela Lei para justificar uma atenuação, também ela excepcional (especial) da pena.

20. Na interpretação desta disposição legal e na procura de casos em que ela deve ter aplicação há que ter em conta que o legislador, ao elaborar a norma penal, estatuiu para o caso normal, isto é, para a generalidade das situações que preenchem a tipicidade da norma e justificam uma pena situada dentro da moldura legal prevista. A atenuação especial só tem cabimento nas situações que, não constituindo o caso normal previsto pelo legislador ao estatuir os limites da moldura, reclamam, manifestamente, por razões de justiça e de equidade, uma pena inferior, o que sucederá sempre que a imagem global do facto e as circunstâncias em que ele foi praticado resulte acentuada diminuição da culpa ou da necessidade da punição [Nesse sentido, v.g., Ac. STJ de 05.03.2009, processo 08P4133 (Cons. **Souto Moura**), de 08.10.2009, Proc. n.º 228/08.5JAFAR.S1 (Cons. **Rodrigues da Costa**) e Ac. RP de 22.6.2011 (**Artur Vargues**): “(...) XI - O funcionamento da atenuação especial da pena está dependente da verificação em concreto de uma diminuição acentuada da ilicitude do facto, da culpa ou da necessidade da pena e apenas pode ter lugar em casos verdadeiramente extraordinários ou excepcionais, pois para a generalidade dos casos funcionam as molduras penais normais com os seus limites mínimos e máximos” – todos em www.dgsi.pt]. Improcede, pois, mais este fundamento.

Medida da pena fixada ao recorrente

21. Por último, o recorrente pugna para que, ponderando todas as circunstâncias do caso, a pena seja fixada no mínimo legal previsto [5 anos de prisão] e substituída por pena de suspensão da execução da prisão [conclusões 21 a 24].

22. Ainda aqui, sem razão. Os recorrentes vêm condenados pela prática, em autoria material, de um crime de Escravidão, do artigo 159.º, alínea a), do Cód. Penal. Tal qualificação jurídica não vem questionada e merece a nossa total adesão face à factualidade dada como provada. Em linha com o decidido no Ac. RP de 30.01.2013 [**José Piedade**], em cujo sumário se refere: “(...) III – Por escravatura entende-se «o estado ou condição de um indivíduo sobre o qual se exercem todos ou quaisquer atributos do direito de propriedade». IV- Consequentemente, é escrava toda e qualquer pessoa que tenha tal estado ou condição. V – No entanto, o conceito tem de ser densificado perante as circunstâncias sociais, históricas e políticas contemporâneas, e de acordo com as conceções ético-filosóficas dominantes. VI – Por isso, cabe na previsão legal a escravidão laboral, nos casos em que a vítima é objeto de uma completa relação de domínio por parte do agente, vivenciando um permanente

“regime de medo”, não tendo poder de decisão sobre o modo e tempo da prestação do trabalho e não recebendo qualquer parte da sua retribuição” [em www.dgsi.pt].

23. É, assim, seguro que o tipo legal em causa não pressupõe, necessariamente, uma situação de cativo, abrangendo, também, quadros de servidão como o dos autos, em que a vítima – um invisual, sem familiares próximos, que se dedica à mendicância sobretudo em feiras – foi agarrada e introduzida à força num veículo automóvel e permaneceu durante um mês às ordens dos arguidos que o colocavam, contra a sua vontade, a pedir esmola em lugares por si determinados, sob o seu controlo e vigilância, impedindo-o de fugir e obrigando-o a entregar-lhes todo o proveito obtido e a pernoitar com eles na habitação.

24. Seguindo a máxima “Slaves for live and servants for a time”, o conceito jurídico de escravidão inclui os casos de servidão para exploração do trabalho – em que alguém é forçado ou obrigado a realizar determinado trabalho e a viver sem a possibilidade de mudar a sua condição de propriedade de outrem. A servidão reporta uma realidade mais ampla que a invocada pelo sentido comum do termo “escravidão” [“Servitude is a linked but much broader term than slavery”]. Como refere o TEDU, em *Siliadin v. France* [2005]: “(...) 123. No que diz respeito ao conceito de ‘servidão’, o que é proibido é uma ‘forma particularmente grave de negação da liberdade’ (ver *Van Droogenbroeck v. Bélgica*, o relatório da Comissão de 09 de julho de 1980, Série B n.º 44, p. 30, §§ 78 - 80). Ele inclui, ‘além da obrigação de executar determinados serviços para outrem... a obrigação de o ‘servo’ viver como propriedade de outra pessoa e a impossibilidade de alterar a sua condição’ [tradução da responsabilidade do relator]. 25. O próprio artigo 5.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia abre espaço à autonomização do conceito de servidão no quadro geral da escravidão ao prever, sob a epígrafe “Proibição da escravidão e do trabalho forçado”:

1. Ninguém pode ser sujeito a escravidão nem a servidão.
2. Ninguém pode ser constrangido a realizar trabalho forçado ou obrigatório.
3. É proibido o tráfico de seres humanos.

26. Os órgãos da CEDH deram uma definição de "servidão". Para a Comissão Europeia dos Direitos do Homem é a obrigação de viver e trabalhar na propriedade dos outros e de prestação de determinados serviços, remunerados ou não, bem como a impossibilidade de mudar a condição (Aplicação n.º 7906/77, DR 17, p.59; ver também o relatório da Comissão de *Van Droogenbroeck* de 09 de julho de 1980, Série B, Vol 44, p.30, parágrafos 78-80.). É claro que a servidão é uma forma particular de escravidão, que se distingue menos pela natureza do que pelo grau. Embora seja um estado ou condição implica uma "forma particularmente grave de negação da liberdade" (caso *Van Droogenbroeck*, acórdão de 24 de junho de 1982, Série A, n.º 50, p.32, parágrafo 58), que não inclui os atributos do direito de propriedade característicos da escravidão [seguimos o enunciado no § 95 da Relatório Preliminar da “Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains”, Varsovie, 16.V.2005, disponível em www.coe.int/trafficking, com tradução nossa].

27. Posto isto, importa referir que a moldura penal prevista para este tipo de crime é a de prisão de 5 a 15 anos. No caso concreto, não há razões objetivas que justifiquem (imponham) a aplicação do limite mínimo da pena: a ilicitude dos factos é elevada, tal como a intensidade do dolo. O arguido revelou grande indiferença pela dignidade humana da vítima, contribuindo para a manter às suas ordens ao longo de 30 dias, até à intervenção da PSP; não tem uma vida laboral estruturada e sofreu já 6 condenações, pela prática de crimes de furto [2000], furto qualificado (tentativa) [2004] e condução de veículo sem habilitação legal [2007, 2010, 2010 e 2012]. Por último, referência às fortíssimas exigências de prevenção geral numa área da criminalidade que suscita grande repulsa na comunidade.

28. É certo que, por razões alheias ao recorrente, passaram já sete anos sobre a data da prática dos factos – período durante o qual ele foi condenado pelos 4 crimes de condução de veículo sem

habilitação. O decurso deste tempo foi, evidentemente, considerado. Porém, atendendo ao critério legal de determinação da medida da pena [artigo 71.º, n.º 1 e 2, do Cód. Penal] e à moldura penal referida – temos de reconhecer que a pena fixada pelo acórdão recorrido em 6 anos de prisão, portanto muito próxima do seu limite mínimo, não se revela manifestamente arbitrária nem desproporcionada [Figueiredo Dias, Direito Penal Português, Parte Geral II - As Consequências Jurídicas do Crime, §§ 254 e 255 e Ac. RP de 2.10.2013 (Joaquim Gomes) em www.dgsi.pt].

Com o que improcede mais este fundamento e, com ele, todo o recurso.

A responsabilidade pela taxa de justiça

Uma vez que os arguidos decaíram no recurso que interpuseram são responsáveis pelo pagamento da taxa de justiça [artigo 513.º, do CPP], cujo valor é fixado entre 1 e 15 UC [artigo 87.º, n.º 1, alínea b) e 3, do CCJ]. Tendo em conta a situação económica dos arguidos e a complexidade do processo, julga-se adequado fixar essa taxa em 3 UC para cada um.

III – DISPOSITIVO

Pelo exposto, os Juízes acordam em:

- **Negar provimento** ao recurso interposto pelos arguidos B... e C..., mantendo o acórdão recorrido.

Taxa de justiça: 3 [três] UC, a cargo de cada recorrente.

[Elaborado e revisto pelo relator – em grafia conforme ao Acordo Ortográfico de 1990]

Porto, 5 de novembro de 2014

Artur Oliveira
José Piedade

Acórdãos STJ

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça

Processo: 08P3982

Nº Convencional: JSTJ000

Relator: SOUTO DE MOURA

Descritores: EXTRADIÇÃO
COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA INTERNACIONAL EM MATÉRIA PENAL
DIREITOS DE DEFESA
RECUSA FACULTATIVA DE EXECUÇÃO
CONSUMAÇÃO
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
LENOCÍNIO
TRÁFICO DE PESSOAS

Nº do Documento: SJ200811120039825

Data do Acórdão: 11/12/2008

Votação: UNANIMIDADE

Texto Integral: S

Privacidade: 1

Meio Processual: EXTRADIÇÃO

Decisão: NEGADO PROVIMENTO

Súmario:

I - As formas de cooperação referidas no art. 1.º da Lei 144/99, de 31-08, a começar por a aí mencionada em primeiro lugar, que é a extradição, nos termos do n.º 1 do art. 3.º do diploma, “regem-se pelas normas dos tratados, convenções e acordos internacionais que vinculem o Estado Português e, na sua falta ou insuficiência, pelas disposições deste diploma”. Daí que, as causas de recusa facultativa ou obrigatória do pedido de extradição, decorrentes da lei geral, não devam ser chamadas à colação.

II - Importa sim, ter em consideração [*no caso presente, em que o Tribunal da Relação deferiu o pedido de extradição de cidadã brasileira*], o Tratado de Extradição entre Portugal e o Brasil, de 07-05-1991, concretamente em matéria de recusa do pedido de extradição. Sabido que, em relação à disciplina sobre cooperação judiciária penal, e especificamente sobre extradição, que resulta da Lei 144/99, de 31-08, esse tratado teve em conta as ligações especialmente estreitas entre os dois países e só pode ter querido facilitar a cooperação, em ambos os sentidos do Atlântico.

III -Entre as normas que prevêem circunstâncias, em face das quais a extradição é inadmissível, e, bem assim, em que a dita extradição pode ser recusada, encontra-se a prevista na al. b) do art. 3.º do Tratado: “ter sido a infracção cometida no território da Parte requerida”. Ou seja, em Portugal.

IV - Nos termos do art. 7.º do CP português, “o facto considera-se praticado tanto no lugar em que, total ou parcialmente, e sob qualquer forma de comparticipação, o agente actuou, ou, no caso de omissão, deveria ter actuado, como naquele em que o resultado típico ou o resultado não compreendido no tipo de crime se tiver produzido”.

V - Os factos indiciados nos autos reportam-se a um grupo criminoso que se organizou e que passou a funcionar a partir de S. Paulo, pelo menos desde Junho de 2006, com vista ao tráfico internacional de mulheres, para fins de prostituição. A extraditanda é reputada pessoa de confiança da co-arguida GG para a Europa. Refere-se que aquela reside em Portugal e «agencia as garotas de GG naquele continente». Importa ter em conta que se está perante a acusação, entre o mais, de um crime de associação criminosa, aí assumindo aparentemente, papel mais relevante, a tal GG, moradora em S. Paulo. Também é certo que todos os outros co-arguidos aí residem, com excepção de TB, residente em S. André, e GR em Miami, EUA, para além da extraditanda, que reside em Portugal. Os elementos

fornecidos apontam claramente para uma organização que labora a partir do Brasil, enviando raparigas para encontros de cariz sexual, não só internamente, como daí para o estrangeiro.

VI - A constituição e início do funcionamento de uma associação criminosa assinala o momento da consumação deste crime, que depois se pode prolongar. Porque a associação é autónoma em relação aos crimes que se pratiquem através dela, fazer parte da associação não implica evidentemente participar em todos os crimes praticados no seu seio.

VII - O facto de a recorrente integrar a associação criminosa em foco não reclama, obviamente, que a mesma viva e trabalhe, no que possa ser tido por sede da mesma, podendo dar o seu contributo, para funcionamento do grupo e prossecução dos seus objectivos, a partir de outro país que não o Brasil. Mais, tratando-se de uma rede transnacional de prostituição, é clara a necessidade de apoios no estrangeiro, para seu funcionamento. Em matéria de crime transnacional, a mobilidade e a dispersão de agentes e actividades, reclama, pois, que se possa proceder contra alguém por um crime cometido num lugar, a partir do qual a organização actua, mesmo que esse alguém não tenha desenvolvido toda ou alguma da sua actividade aí.

VIII - Em relação aos crimes de lenocínio e tráfico de pessoas, dir-se-á que, decisivo para efeitos de consumação e portanto de competência, à luz do normativo atrás transcrito, é o local do aliciamento, angariação ou contratação das prostitutas. E esse trabalho incidia sobre brasileiras, no Brasil.

IX - Não existe motivo que impeça a concessão da extradição em causa.

Decisão Texto Integral:

A – PEDIDO DE EXTRADIÇÃO E TERMOS SUBSEQUENTES

O Magistrado do M^o P^o, junto do Tribunal da Relação de Lisboa, veio, ao abrigo do Tratado de Extradicação entre o Governo da República Portuguesa e o da República Federativa do Brasil, assinado a 7/5/1991, e aprovado por Resolução da Assembleia da República de 4/11/1993 (D.R. 1^a Série-A de 3/2/1994), promover o cumprimento do pedido de **extradição** de

AA, cidadã brasileira, nascida a 3/2/1964, filha de N... B... R... e A... dos S... B..., com última residência em R. das F..., ..., ... Dt^o, S. Domingos de Benfica, Lisboa.

Apresentou, em síntese, os fundamentos seguintes:

1) Corre termos contra a extraditanda o processo-crime 2007. 61. 81. 001663, da 7^a Vara Federal Criminal da 1^a Subsecção Judiciária do Estado de S. Paulo.

2) Encontra-se a mesma indiciada por um conjunto de factos, que são descritos, e se prendem com o tráfico internacional de mulheres com fins de prostituição, para obtenção de proventos económicos, os quais integram, segundo o Código Penal Brasileiro, os crimes de:

- associação criminosa, p. no art^o 288^o e p. com a pena de 1 a 3 anos de prisão;

- lenocínio, p. no art^o 230^o e p. com a pena de 1 a 4 anos de prisão;

- tráfico de pessoas, p. no art^o 231^o e p. com a pena de 3 a 8 anos de prisão.

3) Segundo a lei portuguesa, tal factualidade integra os crimes de associação criminosa do art^o 299^o do C.P., punido com a pena de 1 a 5 anos de prisão, lenocínio, do art^o 169^o, punido com a pena de 6 meses a 5 anos de prisão, e tráfico de pessoas, do art^o 160^o, punido com a pena de 3 a 10 anos de prisão.

4) Sua Ex^a o Sr. Ministro da Justiça considerou admissível o pedido de extradição ao abrigo do n^o 2 do art^o 46^o e 48^o da Lei 144/99 de 31 de Agosto, conforme se pode ver do documento de fls. 57.

5) O pedido é formulado nos termos dos arts^o 1^o, 2^o e 12^o, do Tratado acima referido, e art^o 1^o, al. a), 3^o e 31^o, da Lei 144/99 de 31 de Agosto, pelo que, de acordo com o art^o 15^o daquele Tratado e 51^o desta Lei, deverá proceder-se à detenção de AA, à sua audição, e aos ulteriores termos do processado até concessão, a final, da extradição.

Juntou a documentação pertinente.

A extraditanda foi detida a 9/10/2008 (fls. 63 v.). Ouvida nesse dia, opôs-se à extradição e não renunciou á regra da especialidade. Foi ordenado o prosseguimento do processo de extradição, e, além disso, foi-lhe aplicada a medida de coacção de prisão preventiva (fls. 65 e seg.).

Na sua oposição, a extraditanda invoca, em síntese, a omissão de qualquer referência na fundamentação do pedido, aos locais onde terá cometido os factos que lhe são imputados, e ainda a circunstância de, a ter cometido tais infracções, as não poder ter cometido no Brasil. Na verdade, diz que viveu sempre em Portugal desde o ano 2000, só tendo ido ao Brasil três vezes, certo que os factos se situaram entre Junho e Novembro de 2006.

Também se insurge contra o facto de não ser indicada data, local e circunstâncias da prática das infracções.

Por último, considera a medida de coacção aplicada excessiva e inadequada, devendo ser substituída por outra menos gravosa. Tanto mais que os co-arguidos se encontram em liberdade no Brasil.

O M^o P^o pronunciou-se quanto à oposição formulada, e concluiu pela prossecução dos autos sem realização da diligência entretanto requerida pela extraditanda, a qual se reportava a uma consulta às autoridades brasileiras para se saber se ainda interessava a extradição pedida. Considerou ser de facultar a extradição, por entender inexistir dúvida sobre a identidade da pessoa a extraditar, bem como qualquer das razões de recusa da extradição, dos arts^o 6^o a 8^o da Lei 144/99 de 31 de Agosto.

B – DECISÃO DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

Por acórdão de 4/11/2008, o Tribunal da Relação de Lisboa decidiu deferir e autorizar a extradição solicitada. Fundamentou a sua decisão nos termos que se transcrevem:

“II- Conhecendo

2.1- Os factos relativos ao pedido de extradição constam já enunciados anteriormente. Os crimes imputados são concomitantemente puníveis também segundo a legislação portuguesa, ainda que com penas diferenciadas nos seus limites mínimos e/ou máximos.

A extraditanda invoca como fundamento de oposição o desconhecimento do local ou território, data e circunstâncias da prática da infracção sendo a acusação omissa nessa parte e por isso, violando-se o art^o 12^o, ala e) do Tratado. Porém, verificando-se a acusação e a descrição global dos factos, vê-se que se trata de actuação imputada com contornos transnacionais, que a organização criminosa actuará a partir do Brasil, que tem ramificações agenciadas em outros países e continentes e que a extraditanda coopera, participa e agencia com aqueles factos e organização a partir de Portugal.

Consequentemente, não há sinais de prática exclusiva em Portugal ou para Portugal mas actuação em participação criminosa também a partir deste país.

2.2- É também de assinalar que, mesmo nos termos do n^o 4 do art^o 2^o do Tratado- "Quando a infracção que deu lugar ao pedido de extradição tenha sido cometida fora do território da Parte requerente, a extradição será concedida, de acordo com as disposições do presente Tratado , desde que: a) a pessoa cuja extradição é pedida seja nacional da Parte requerente; (...)ou b) a lei da Parte requerida preveja a punição de um crime cometido fora do seu território, em condições semelhantes.

Ambas as situações se verificam in casu.

Ainda que a referência fáctica em relação à arguida seja, na verdade, muito sintética, não se pode dizer que tecnicamente existe omissão daqueles elementos circunstanciais, temporais e territoriais. A actuação é reportada em cooperação/comparticipação através de agenciamento de garotas de programa através da extraditanda para "GIGI" (algunha ou mesmo acrónimo de G... A... de O...) identificada nos autos, e sendo a actuação desta a partir de território brasileiro com outros, pertencentes à mesma organização criminosa, referenciada a partir de Junho de 2006, todos eles (excepto a extraditanda e uma outra residente em Miami) residentes em S. Paulo- Brasil.

Consequentemente, ainda que tecnicamente não se trate de um modelo perfeito e processualmente bem conseguido de acusação, os elementos mínimos de imputação fáctica contra a extraditanda não estão omitidos, sendo compreensíveis e inteligíveis não obstante a imputação bastante genérica feita contra a arguida. Esta agencia na Europa as "garotas de programa" por conta de GIGI, que opera a partir de S.Paulo para satisfazer pedidos de clientes de vários Estados da Federação, nesses Estados, para esses Estados ou às vezes no exterior.

2.3-Relativamente ao pedido de extradição, o mesmo deve considerar-se activo visto inexistir qualquer indicador sério e evidente de ter sido eliminado ou desnecessário. Caberá às autoridades brasileiras,

nesse caso, avisar de imediato as autoridades portuguesas, de acordo com a prudência, bom senso e regras de processo que vinculam as relações de extradição, sendo certo que qualquer pedido de comunicação novo para confirmação suporia uma demora intolerável, já que a formulação se tramitaria sempre por via diplomática, incompatível, na actual fase, com os curtos prazos de decisão. Aliás, o pedido da extraditanda baseia-se apenas no facto da sua anterioridade há mais de 18 meses o que equivale, de acordo com outros casos idênticos, a uma perfeita "normalidade". Não cabe agora ter de se fazer confirmação daquilo que foi solicitado e até então, nunca foi declarado extinto ou desnecessário.

Resta por último referir que as medidas de coacção aplicadas no processo em curso a outros co-arguidos pelas autoridades judiciais brasileiras paulistas, hajam sido elas o que houverem sido, não importam nem afectam os pressupostos da fixada à extraditanda, porque independentes e autónomas umas das outras.

E, de outro modo, a detenção preventiva interessa apenas e para já para se assegurar o exacto cumprimento da extradição em si, sendo irrelevante que, no Brasil, a situação detentiva venha entretanto a modificar-se.

2.4-Tudo visto e tendo em consideração as disposições normativas citadas, quer inscritas no Tratado de Extradicação de 7.5.1991 quer na Lei de Cooperação Judicial portuguesa (Lei 144/99) não se encontram razões relevantes e decisivas para se negar o pedido de extradição.

Na verdade, não se encontram quaisquer factores de negação entre os previstos no artº 3º do Tratado :

"ARTIGO III Inadmissibilidade de extradição

1. Não terá lugar a extradição nos seguintes casos:

- a) ser a pessoa reclamada nacional da Parte requerida;
- b) ter sido a infracção cometida no território da Parte requerida;
- c) ter a pessoa reclamada sido definitivamente julgada na Parte requerida ou num terceiro Estado pelos fatos que fundamentam o pedido de extradição e ter sido absolvida, ou, no caso de condenação, ter cumprido a pena;
- d) estar extinto no momento do recebimento do pedido, segundo a lei de qualquer das Partes Contratantes, o procedimento criminal ou a pena, por prescrição ou por qualquer outra causa;
- e) estar amnistiada a infracção segundo a lei de qualquer das Partes Contratantes;
- f) ser a infracção punível com pena de morte ou prisão perpétua;
- g) dever a pessoa ser julgada por tribunal de excepção ou cumprir uma pena decretada por um tribunal dessa natureza;
- h) haver fundadas razões para considerar que a pessoa reclamada será sujeita a processo que não ofereça garantias de um procedimento criminal que respeite as condições internacionalmente reconhecidas como indispensáveis à salvaguarda dos Direitos do Homem ou cumprirá a pena em condições desumanas;
- i) tratar-se, segundo a legislação da Parte requerida, de infracção de natureza política ou com ela conexas;
- j) haver fundadas razões para concluir que a extradição é solicitada para fins de procedimento criminal ou de cumprimento de pena por parte de uma pessoa, em virtude da sua raça, sexo, religião, nacionalidade ou convicções políticas, ou que a situação dessa pessoa possa ser prejudicada por qualquer dessas razões;

1) tratar-se de crime militar que, segundo a lei de ambas as Partes contratantes, não constitua simultaneamente uma infracção de direito comum.

Também não existem quaisquer causas de recusa de entre as previstas no Tratado:

"ARTIGO V. Recusa de extradição

1. A extradição poderá ser recusada:

- a) se as autoridades competentes da Parte requerida tiverem decidido abster-se de instaurar procedimento criminal, pela infracção que deu lugar ao pedido de extradição, contra a pessoa em relação à qual a extradição é pedida;
- b) se a pessoa cuja entrega é solicitada tiver sido condenada à revelia pela infracção que deu lugar ao pedido de extradição, excepto se a lei da Parte requerente lhe assegurar a possibilidade de interposição de recurso da decisão condenatória, ou a realização de novo julgamento após a extradição;
- c) se estiver pendente procedimento criminal nos tribunais da Parte requerida, pelos factos que fundamentam o pedido de extradição.

2. A Parte requerida poderá sugerir à Parte requerente que retire o seu pedido de extradição, tendo em atenção razões humanitárias que digam nomeadamente respeito à idade, saúde, ou outras circunstâncias particulares da pessoa reclamada."

Por sua vez, a Lei 144/99 de 31 de Agosto, que não prevalece sobre as do Tratado, ex vi do artº 3º, também ela mesmo não prevê situação relevante e de excepção nesta matéria.

É aplicável o princípio da reciprocidade na cooperação e, quanto ao da especialidade, a extraditanda não o renunciou.

2.5-O pedido de extradição cumpre assim os requisitos de instrução previstos no artº 12º do Tratado de Extradicação e não se lhe impõem fundamentos de rejeição."

C – RECURSO

A extraditanda recorreu, concluindo assim:

“1 - O pedido de extradição formulado pelo Brasil às autoridades portuguesas fundamenta-se na imputação, à extraditanda e ora Recorrente, da prática dos ilícitos criminais de associação criminosa, de lenocínio e de tráfico de pessoas, conforme texto acusatório junto ao pedido.

2 - A ter cometido os crimes de que está acusada, cuja prática a Recorrente refuta mas que alega por dever de patrocínio e sem prescindir, só o poderia ter feito em território português já que, à data em que os factos ocorreram, entre Junho e Novembro de 2006 segundo a acusação, a extraditanda residia e trabalhava em Portugal, como documentou em sede de oposição.

3 - Ora, a alínea b) do n.º 1 do art.º 3.º do Tratado de Extradicação entre Portugal e o Brasil, de 7 de Maio de 1991 e a alínea a) do n.º 1 do art.º 32.º da Lei n.º 144/99, de 31 de Agosto, estipulam que não há lugar à extradição quando a infracção ou crime tenha sido cometido em território da parte Requerida, pelo que se constata, in casu, a falta de um dos requisitos legais ao deferimento do pedido.

4 - Tendo decidido e autorizado a extradição, o Tribunal da Relação de Lisboa violou as ditas disposições normativas.

5 - Na sua decisão, o Tribunal Recorrido relevou a circunstância da actuação que consta da acusação ter contornos transnacionais, uma organização centrada no Brasil mas com ramificações agenciadas em outros países. Contudo e para efeitos de apreciação do pedido, relevante era e é saber-se o local e as circunstâncias da prática dos factos imputados à extraditanda sendo que, quanto a estes, o próprio Tribunal da Relação de Lisboa parece aceitar que o possam ter sido a partir do território português.

6 - O pedido de extradição e a acusação que o suporta, são totalmente omissos e nada dizem quanto à data, local e circunstâncias da prática das infracções imputadas à extraditanda.

7 - Em concreto e de substancial, a extraditanda apenas é referenciada por agenciar garotas de programa na Europa, sem uma única indicação sobre quem agenciou, quando o fez, para quem, contactos ou sobre quaisquer outros elementos circunstanciais.

8 - O próprio Tribunal Recorrido reconhece que "a referência fáctica em relação à arguida seja, na verdade, muito sintética".

9 - Contrariamente ao entendimento do Tribunal Recorrido, pensa a Recorrente que, de tão vagos, de tão genéricos e de tão pouco precisos, não estão presentes, na acusação, os elementos mínimos de imputação fáctica contra a extraditanda.

10 - Ora, o art.º 12.º do citado Tratado de Extradicação, na sua alínea e), estipula que ao pedido de extradição devam ser juntos os seguintes elementos:

" Descrição dos factos imputados à pessoa reclamada, com indicação da data, local e circunstância da infracção e a sua qualificação jurídica, se não constarem das situações referidas nas alíneas c) ou d)".

11 - Do pedido de extradição em apreço não constam tais elementos descritivos, pelo que não cumpre com o requisito exigido no Tratado de Extradicação e deveria como deverá ser indeferido.

12 - Ao ter decidido pelo deferimento e autorização da extradição, o Tribunal Recorrido violou, também neste pormenor, a referida disposição normativa.

13 - Terá violado ainda o disposto nos artigos 8.º, n.º 2 e 203.º, da C.R.P.”

Na sua resposta, o M.º P.º contrapôs o seguinte:

“1.º No seguimento do pedido formal de extradição apresentado em 4 de Agosto de 2008, feito, na sequência da solicitação efectuada pelas autoridades brasileiras para efeito de procedimento criminal, contra a extraditanda Maria de Jesus, pelo facto de se encontrar indiciada da prática de crime de associação criminosa, lenocínio e tráfico de pessoas, foi em 4 de Novembro de 2008, proferido o douto acórdão que deferiu e autorizou a extradição solicitada, determinando que se cumpra a remoção da extraditanda do território português.

2.º Foi, na sequência deste douto acórdão que a extraditanda veio interpor recurso defendendo, em síntese e de acordo com as suas "Conclusões", pois são elas que fixam o objecto do recurso, que refuta a prática dos ilícitos que as autoridades brasileiras lhe imputam, pela circunstância de à data daqueles factos que lhe são imputados residir em Portugal, sendo por esse motivo ilegal o deferimento do pedido, pelo facto de não se encontrarem reunidos os requisitos impostos por lei, uma vez que, a extradição não pode ser deferida quando a infracção ou crime tiver sido cometido em território da Requerida, para além de não se encontrarem referidos os elementos mínimos de imputação fáctica contra a extraditanda.

3.º A sem razão da recorrente, afigura-se-nos ser evidente na medida em que de acordo com o n.º 2 do art.º 55 da lei n.º 144/99 de 31 de Agosto, a oposição só pode fundamentar-se em não ser o detido a pessoa reclamada ou em não se verificarem os pressupostos da extradição, uma vez que não pode o Tribunal solicitado apreciar ou admitir prova sobre a existência ou não do crime indiciado em Tribunal do País impetrante, não cabendo aos nossos Tribunais discutir o mérito da decisão do Tribunal estrangeiro, no caso o Brasil, nem tão pouco das razões que levem ou possam levar à aplicação de determinadas penas, não sendo, assim, consentida qualquer discussão sobre a existência ou não de fortes indícios da prática do crime.

4.º Ora, não existindo qualquer dúvida quanto à identidade da pessoa a extraditar, a extradição só poderia ser recusada nos termos dos artigos 6.º a 8.º da Lei n.º 144/99 de 31 de Agosto.

5.º Sendo certo, que dos autos não se invoca a existência de qualquer situação que obstando ao deferimento do pedido, preencha alguma das situações referidas nas citadas normas, concluindo-se, assim, pela inexistência legal de qualquer facto que inviabilize o pedido efectuado.

6.º Com efeito, as razões apresentadas pela recorrente quanto à circunstância de os factos imputados terem ocorrido em território português não se encontra assente em qualquer fundamento legal, na medida em que estamos perante a prática de factos com contornos transnacionais, verificando-se que a organização criminosa a que a extraditanda pertence actua a partir do Brasil, ao mesmo tempo que através dos seu membros vai actuando noutros países e continentes, cabendo à extraditanda cooperar e compartilhar a partir de Portugal para os interesses e finalidades da organização.

7.º Efectivamente, e como se refere no duto acórdão agora colocado em crise apesar da referência fáctica relativamente à extraditanda ser bastante sintética, não nos podemos esquecer que estamos perante uma actuação reportada a cooperação/comparticipação através de agenciamento de garotas de programa através da extraditanda para "Gigi", sendo actuação desta a partir de território brasileiro com outros, pertencentes todos à mesma organização criminosa, cabendo à extraditanda agenciar na Europa "garotas de programa" por conta da referida "Gigi", a qual opera a partir de S. Paulo para satisfazer pedidos de clientes de vários Estados da Federação, quer nesses Estados, quer fora deles.

8.º E não havendo qualquer causa de inviabilização do pedido de extradição apresentado que preenche os fins e fundamentos referidos no art.º 31.º da Lei n.º 144/99 de 31 de Agosto e constituindo as infracções penais imputadas à extraditanda motivo de extradição, como consta do pedido, entende-se que o duto acórdão não merece qualquer censura, pelo que, deve ser confirmado e conseqüentemente, ser viabilizado o pedido de extradição apresentado pelas autoridades brasileiras, com e efectivação da sua entrega.”

D – APRECIÇÃO

A questão levantada nas conclusões de recurso, retomada da oposição antes deduzida, prende-se fundamentalmente com a falta de indicação, no rol dos factos imputados à recorrente, de data e circunstâncias da sua prática, mas, sobretudo, do local de actuação da extraditanda. E porque esta, a admitir que praticara os factos imputados, só o poderia ter feito em Portugal, daí dever ser negada, a seu ver, a respectiva extradição. Na verdade, de acordo com o Tratado em apreço, e seu artº 3º, alínea b), a extradição será inadmissível por “ter sido a infracção cometida no território da Parte requerida”.

Importa adiantar que, nos termos do nº 1 do artº 3º, da Lei n.º 144/99 de 31 de Agosto, as formas de cooperação referidas no artº 1º do diploma, a começar por a aí mencionada em primeiro lugar, que é a extradição, “regem-se pelas normas dos tratados, convenções e acordos internacionais que vinculem o Estado Português e, na sua falta ou insuficiência, pelas disposições deste diploma”. Daí que, as causas de recusa facultativa ou obrigatória do pedido de extradição, decorrentes da lei geral, não devam agora ser chamadas à colação.

Importa sim, ter em consideração, o que no diz o Tratado de Extradição entre Portugal e o Brasil, de 7/5/1991, concretamente em matéria de recusa do pedido de extradição. Sabido que, em relação à disciplina sobre cooperação judiciária penal, e especificamente sobre extradição, que resulta da Lei 144/99, de 31 de Agosto, esse tratado teve em conta as ligações especialmente estreitas entre os dois países e só pode ter querido facilitar a cooperação, em ambos os sentidos do Atlântico.

De todas as normas que prevêem circunstâncias, em face das quais a extradição é inadmissível, e, bem assim, em que a dita extradição pode ser recusada, a única que apresenta virtualidades para impedir a presente extradição é, à partida, a prevista na al. b) do artº 3º do Tratado: “ter sido a infracção cometida no território da Parte requerida”. Ou seja, em Portugal.

Ora, nos termos do artº 7º do C.P. português, “o facto considera-se praticado tanto no lugar em que, total ou parcialmente, e sob qualquer forma de comparticipação, o agente actuou, ou, no caso de omissão, deveria ter actuado, como naquele em que o resultado típico ou o resultado não compreendido no tipo de crime se tiver produzido”. Esta a norma que, no presente recurso, nos pode guiar em matéria de atribuição de jurisdição penal, e, consequentemente, de facultar ou não a extradição.

Se nos debruçarmos sobre os factos dos autos, verificamos que a indicição se reporta a um grupo criminoso que se organizou, e que passou a funcionar a partir de S. Paulo, pelo menos desde Junho de 2006, com vista ao tráfico internacional de mulheres, para fins de prostituição.

A extraditanda é reputada pessoa de confiança da co-arguida J... A... de O... (a “Gigi”), para a Europa.

Refere-se que aquela reside em Portugal e “agencia as garotas de “Gigi” naquele continente” (fls. 3). Há conversas telefónicas efectuadas a partir das quais se pode configurar o seu tipo de função (fls. 33, 38).

Não compete a este processo sindicar a veracidade dos factos imputados pelas autoridades brasileiras. Interessa sim apurar se os factos apresentados, quanto a data, local e circunstâncias, têm o mínimo de consistência para que se possa considerar estar perante um pedido suficientemente instruído para os efeitos das al. c) e e) do artº 12º do Tratado. Tal como se decidiu no acórdão recorrido, a factualidade mencionada, no que toca à extraditanda, sem ser abundante, preenche aquele mínimo de suficiência.

Depois, importará ter em conta, que se está perante a acusação, entre o mais, de um crime de associação criminosa, aí assumindo aparentemente, papel mais relevante, a tal “Gigi”, moradora em S.Paulo. Também é certo que todos os outros co-arguidos aí residem. Excepciona-se Thais Ballai, residente em S. André, e G... R... em Miami, E.U.A., para além da extraditanda, que, como se viu, reside em Portugal.

Os elementos fornecidos apontam claramente para uma organização que labora a partir do Brasil, enviando raparigas para encontros de cariz sexual, não só internamente, como daí para o estrangeiro. São referidos os envios de várias prostitutas para outros países, como por exemplo de uma tal E... para a Rússia em Setembro de 2006, da L... M... para Inglaterra em Novembro de 2006, da Y... M... para Lisboa em Outubro de 2006, onde ia ter um encontro com a ora extraditanda.

A constituição e início do funcionamento de uma associação criminosa assinala o momento da consumação deste crime, que depois se pode prolongar. Porque a associação é autónoma em relação aos crimes que se pratiquem através dela, fazer parte da associação não implica evidentemente participar em todos os crimes praticados no seu seio.

Sobretudo, o facto de a recorrente integrar a associação criminosa em foco não reclama, obviamente, que a mesma viva e trabalhe, no que possa ser tido por sede da mesma, podendo dar o seu contributo, para funcionamento do grupo e prossecução dos seus objectivos, a partir de outro país que não o Brasil. Mais, tratando-se de uma rede transnacional de prostituição, é clara a necessidade de apoios no estrangeiro, para seu funcionamento. Em matéria de crime transnacional, a mobilidade e a dispersão de agentes e actividades, reclama, pois, que se possa proceder contra alguém por um crime cometido num lugar, a partir do qual a organização actua, mesmo que esse alguém não tenha desenvolvido toda ou alguma da sua actividade aí.

Em relação aos restantes crimes de lenocínio e tráfico de pessoas, dir-se-á que, decisivo para efeitos de consumação e portanto de competência, à luz do normativo atrás transcrito, é o local do aliciamento, angariação ou contratação das prostitutas. E esse trabalho incidia sobre brasileiras, no Brasil.

De notar, que já no acórdão de 13/3/1990 deste S.T.J. (in Col. Jur. Ano XV, Tomo I, pag. 31), se disse que “É competente para se conhecer do crime de tráfico de pessoas, do [então] artº 217º do CP, o

tribunal da área onde a pessoa é aliciada, seduzida ou desviada para a prática da prostituição noutro país.”

Por todo o exposto, não se vê motivo que impeça a concessão da extradição solicitada.

E – DECISÃO

Termos em que se considera improcedente o recurso interposto, assim se confirmando a decisão recorrida.

Taxa de Justiça: 10 U.C.

Lisboa, 11 de Dezembro de 2008

Souto de Moura (Relator)

Soares Ramos

REINO UNIDO

Legislación

Fuente de consulta y referencia

La legislación al completo está recogida de la Página Web de la Stationery Office de Su Majestad en la que se publican a texto completo todas las leyes aprobadas por el Parlamento. [Enlace al documento](#)

Tanto las leyes como el resto de la regulación incluyen los enlaces a los originales publicados en inglés.

Legislación

Modern Slavery Act 2015

([enlace al documento](#))

(Fecha de promulgación: 26 de marzo de 2015)

(Fecha de publicación: 27 de marzo de 2015)

Breve explicación:

Ley sobre Esclavitud Moderna 2015

Ley que establece disposiciones sobre la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso u obligatorio y sobre la trata de personas, incluyendo medidas para la protección de las víctimas. Prevé un Comisionado Independiente de Lucha contra la esclavitud y establece disposiciones para fines relacionados.

La ley consta de siete partes:

- Parte 1. Consolida y aclara los delitos existentes de esclavitud y trata de personas, al tiempo que aumenta la pena máxima para tales delitos.
- Parte 2. Contempla dos nuevas órdenes preventivas civiles, la Orden de prevención de la esclavitud y la trata de personas y la Orden de riesgo de la esclavitud y la trata de personas.
- Parte 3. Prevé nuevas facultades de aplicación marítima en relación con los buques.
- Parte 4. Establece la oficina del Comisionado independiente contra la esclavitud y establece las funciones del Comisionado.
- Parte 5. Introduce una serie de medidas para apoyar y proteger a las víctimas, incluida una defensa legal para las víctimas de esclavitud o trata de personas y medidas especiales para los testigos en procedimientos penales.
- Parte 6. Requiere que ciertas empresas revelen qué actividad están realizando para eliminar la esclavitud y el tráfico de sus cadenas de suministro y negocios.
- Parte 7. Requiere que la Secretaría de Estado publique un documento impreso sobre Gangmasters Licensing Authority (un organismo público no departamental en el Reino Unido que regula el suministro de trabajadores a las industrias agrícola, hortícola y de mariscos) y, por lo demás, trata de asuntos generales y sus disposiciones.

Regulación relacionada

- [The Modern Slavery Act 2015 \(Duty to Co-operate with Commissioner\) Regulations 2016](#)

Breve explicación:

La sección 43 de la Ley de esclavitud moderna de 2015 establece qué autoridades públicas deben cooperar con el comisionado independiente antiesclavista.

- [The Modern Slavery Act 2015 \(Code of Practice\) Regulations 2016](#)

RESUMEN

Código emitido en virtud del párrafo 5 (1) del Anexo 2 de la Ley de Esclavitud Moderna 2015. Este código establece las prácticas que deben seguir los oficiales ingleses y galeses y los agentes encargados de hacer cumplir la ley cuando arrestan a una persona en virtud del párrafo 4 del Anexo 2 de dicha Ley. El párrafo 4 otorga permite arrestar sin orden alguna a cualquier persona cuando el agente de policía u oficial encuentre motivos razonables para creer que es culpable de un delito de TSH en virtud de los artículos 1 o 2 de dicha Ley.

- [The Modern Slavery Act 2015 \(Duty to Notify\) \(Amendment\) Regulations 2016](#)

RESUMEN

Modifica algunos defectos de redacción de la Ley de Esclavitud Moderna 2015, relativos al deber de notificación. Y, especifica que, cuando la víctima principal a la que se refiere la notificación ha dado su consentimiento o es menor de 18 años, no se requiere ningún consentimiento adicional para notificar el delito.

- [The Modern Slavery Act 2015 \(Commencement No. 5\) Regulations 2016](#)

RESUMEN

Estas disposiciones otorgan poderes adicionales a los oficiales de policía en Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte para enfrentarse a presuntos delitos de trata o esclavitud en el mar.

- [The Modern Slavery Act 2015 \(Consequential Amendments\) Regulations 2016](#)

RESUMEN

Recoge pequeñas modificaciones relacionadas con TSH que afectan a leyes diversas.

- [The Modern Slavery Act 2015 \(Commencement No. 4\) Regulations 2016](#)

RESUMEN

Modificaciones de la Ley de administración de justicia de 1970, la Ley sobre el producto del delito de 2002 (c. 29) y la Ley de prevención del fraude en la vivienda social.

- [The Modern Slavery Act 2015 \(Power of arrest: Code of Practice\) Order \(Northern Ireland\) 2016](#)

RESUMEN

Código de prácticas que deben seguir los agentes de policía y agentes de la ley de Irlanda del Norte cuando arrestan a una persona bajo el poder conferido por el párrafo 22 (2) del Anexo 2 de la Ley de Esclavitud Moderna 2015.

Se anuncian cambios en la legislación: La Ley de Esclavitud Moderna 2015, Sección 37, está actualizada con todos los cambios que se sabe que estarán en vigor el 11 de marzo de 2019 o antes. Hay cambios que pueden entrar en vigor en una fecha futura. Los cambios que se han realizado aparecen en el contenido y se mencionan con anotaciones en la propia Ley.

- [The Modern Slavery Act 2015 \(Duty to co-operate with Commissioner\) \(Northern Irish public authority\) Regulations \(Northern Ireland\) 2016](#)

RESUMEN

Especifica las autoridades públicas de Irlanda del Norte a los efectos del artículo 43 y del Anexo 3 de la Ley.

- [The Modern Slavery Act 2015 \(Transparency in Supply Chains\) Regulations 2015](#)

RESUMEN

La sección 54 de la Ley de Esclavitud Moderna de 2015 requiere que una organización comercial prepare una declaración sobre la esclavitud y la trata de personas para cada año financiero de la organización si su volumen de negocios total no fuera inferior a una cantidad prescrita por la Secretaría de Estado. Este Reglamento establece esa cantidad y cómo se determinará el volumen de negocios total de una organización comercial.

Asimismo la Regla 4 establece que la Secretaría de Estado revise la operación y el efecto de este Reglamento, y publique un informe dentro de los cinco años posteriores a su entrada en vigor y, posteriormente, cada nuevo período de cinco años.

- [The Modern Slavery Act 2015 \(Commencement No. 3 and Transitional Provision\) Regulations 2015](#)

RESUMEN

La regulación nº 2 pone en marcha la disposición de la Ley de 2015 relativa a la transparencia en las cadenas de suministro. La nº 3 contiene una disposición transitoria para que una organización comercial, con un año financiero que finaliza antes del 31 de marzo de 2016, no tenga que hacer una declaración sobre esclavitud y trata de personas con respecto a ese año financiero.

- [The Modern Slavery Act 2015 \(Duty to Notify\) Regulations 2015](#)

RESUMEN

La Sección 52 de la Ley de Esclavitud Moderna 2015 impone a las autoridades públicas el deber de informar a la Secretaría de Estado, cuando existan motivos razonables para creer que una persona puede ser víctima de TSH. Este Reglamento especifica la información concreta que debe proporcionarse a la Secretaría de Estado, la información que debe proporcionarse a las víctimas y, también, enumera la información adicional que debe proporcionarse cuando la víctima es menor de 18 años o cuando la persona ha dado su consentimiento.

- [The Modern Slavery Act 2015 \(Commencement No. 2\) Regulations 2015](#)

RESUMEN

Disposiciones sobre la identificación y el apoyo a las víctimas, la presunción sobre la edad y los trabajadores domésticos en el extranjero. También sobre el deber de informar a la Secretaría de Estado sobre las presuntas víctimas de la esclavitud o trata de seres humanos.

- [The Magistrates' Courts \(Modern Slavery Act 2015\) Rules 2015](#)

RESUMEN

Prevé procedimientos en los tribunales de menores relativos a notificaciones de esclavitud y órdenes de prevención del tráfico humano y otras disposiciones relacionadas.

- [The Modern Slavery Act 2015 \(Commencement No. 1, Saving and Transitional Provisions\) Regulations 2015](#)

RESUMEN

Con la regulación 2 entran en vigor el 31 de julio de 2015 las disposiciones de la Ley de 2015, relativas a los delitos de esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso u obligatorio y trata de seres humanos. También las órdenes de de prevención, el Comisionado Independiente contra la Esclavitud, y la defensa para las víctimas de la esclavitud y la trata de personas que cometen ciertos actos. Asimismo se establecen los delitos y las medidas especiales para testigos en procesos penales.

- [The Modern Slavery Act 2015 \(Consequential Amendments\) Regulations 2015](#)

RESUMEN

Establece modificaciones en la legislación secundaria relativa a delitos de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso u obligatorio y la trata de seres humanos.

Human Trafficking and Exploitation (Scotland) Act 2015

[enlace al documento](#)

Fecha de promulgación: 4 de noviembre de 2015

Fecha de publicación: 17 de noviembre 2015

RESUMEN:

LEY DE TRÁFICO Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS (ESCOCIA) 2015

Ley del Parlamento de Escocia sobre la trata de personas y la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso, incluidos los delitos y las penas, la prestación de apoyo a las víctimas y provisiones para reducir la actividad relacionada con estos delitos.

La Ley consta de seis partes:

- Parte 1. *Delitos*- Incluye disposiciones sobre la creación de un solo delito de trata de personas para todo tipo de explotación de adultos y niños; establece agravantes legales de la trata de personas para su uso con otros delitos; y replantea el actual delito independiente de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso u obligatorio.
- Parte 2. *Protección de las víctimas*- Incluye una disposición sobre instrucciones de la fiscalía para el procesamiento de las víctimas y una disposición sobre el apoyo y la asistencia a los que tienen derecho las víctimas adultas y menores.
- Parte 3. *Confiscación de bienes*- Incluye disposiciones sobre la detención y el decomiso de bienes y el producto del delito.
- Parte 4. *Órdenes de prevención de riesgos de trata y explotación*- Incluye disposiciones sobre dos nuevas órdenes preventivas, la orden de prevención de trata y explotación y la orden de riesgo de trata y explotación.
- Parte 5. *Estrategia y presentación de informes*- Incluye disposiciones sobre la estrategia de tráfico y explotación y el deber de las autoridades públicas escocesas específicas de notificar y proporcionar información sobre las víctimas.
- Parte 6. Contiene disposiciones generales y complementarias.

Regulación relacionada

- [The Human Trafficking and Exploitation \(Scotland\) Act 2015 \(Support for Victims\) Regulations 2018](#)

RESUMEN

La Sección 9 (2) (b) (i) faculta a los Ministros escoceses a especificar el período durante el cual deben garantizar al adulto la prestación de apoyo y asistencia que consideren necesarios cuando existan motivos razonables para creer que esa persona es víctima de un delito de TSH. La Regulación nº 2 establece que este período sea de 90 días. La sección 10 (1) faculta a los Ministros escoceses para establecer disposiciones sobre la prestación de apoyo y asistencia a un adulto que es, o parece ser, víctima de un delito en virtud del artículo 4 de la Ley (esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso u obligatorio). Aunque el período establecido para apoyo y asistencia será de 90 días, se pueden prorrogar el apoyo y la asistencia durante el período que se considere apropiado.

- [The Human Trafficking and Exploitation \(Scotland\) Act 2015 \(Commencement No. 4\) Regulations 2018](#)

RESUMEN

Con estos reglamentos entran en vigor los artículos 9 y 12 de la Ley de trata y explotación de personas (Escocia) de 2015 ("la Ley").

- [The Human Trafficking and Exploitation \(Scotland\) Act 2015 \(Relevant Trafficking or Exploitation Offences and Relevant UK Orders\) Regulations 2017](#)

RESUMEN

Enmiendas a la Ley de Tráfico y Explotación de Personas (Escocia) 2015, con respecto a las órdenes de prevención de trata y explotación y las órdenes de riesgo de trata y explotación.

- [The Human Trafficking and Exploitation \(Scotland\) Act 2015 \(Commencement No. 3 and Transitional Provisions\) Regulations 2017](#)

RESUMEN

Entrada en vigor de las disposiciones de la Ley de trata y explotación de seres humanos (Escocia) de 2015 en varias fechas designadas.

- [The Human Trafficking and Exploitation \(Scotland\) Act 2015 \(Consequential Provisions and Modifications\) Order 2016](#)

RESUMEN

El artículo 2 confiere a los oficiales de inmigración el poder de detener vehículos, barcos o aeronaves donde una persona haya sido arrestada por el delito de trata de seres humanos, según la sección 1 de la Ley de 2015. El oficial podrá realizar la detención si tuviera motivos razonables para creer que la propiedad en cuestión pueda estar sujeta a decomiso según la sección 14 de esta Ley, si la persona arrestada fue condenada. Este poder ya estaba conferido a los agentes de policía en Escocia por la sección 13 de esta Ley. Los bienes retenidos en virtud de este artículo pueden mantenerse hasta que concluyan los procedimientos solemnes contra la persona arrestada o se tome la decisión de no iniciar un proceso solemne contra esa persona. Cualquier persona que posea en virtud de un contrato de compra y alquiler un vehículo o aeronave detenido, o que sea fletador de un barco o aeronave detenido, podrá solicitar la liberación de la propiedad correspondiente.

El artículo 3 establece las modificaciones consiguientes a la legislación primaria como consecuencia de la creación de dos nuevos delitos en Escocia de tráfico de seres humanos (artículo 1 de la Ley de 2015), esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso u obligatorio (artículo 4 de la Ley de 2015) y la derogación de los delitos existentes en la sección 22 de la Ley de Justicia Penal (Escocia) de 2003, la sección 4 de la Ley de Asilo e Inmigración (Trato de los Demandantes, etc.) de 2004 y la Ley de Justicia Penal y Licencias de Escocia de 2010.

- [The Human Trafficking and Exploitation \(Scotland\) Act 2015 \(Commencement No. 2 and Transitional Provisions\) Regulations 2016](#)

RESUMEN

Entrada en vigor de los párrafos 2, 4 y 5 del calendario de la Ley de Trata y Explotación de Seres Humanos (Escocia) de 2015. Esos párrafos revocan los delitos previstos en la sección 22

de la Justicia Penal (Escocia), Ley de 2003 (tráfico de prostitución, etc.), sección 4 de la Ley de Asilo e Inmigración (Tratamiento de los Demandantes, etc.) de 2004 (trata de personas con fines de explotación) y sección 47 de la Ley de Justicia y Licencias Penales (Escocia) de 2010 (esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso u obligatorio) que son reemplazados por delitos contemplados en los artículos 1 y 4 de nueva Ley.

- [The Human Trafficking and Exploitation \(Scotland\) Act 2015 \(Commencement No. 1 and Transitory Provisions\) Regulations 2016](#)

RESUMEN

Con este Reglamento entran en vigor el 31 de mayo de 2016 diferentes disposiciones de la Ley de Trata y Explotación de Seres Humanos (Escocia) de 2015.

*Human Trafficking and Exploitation (Criminal Justice and Support for Victims) Act
(Northern Ireland) 2015*
[enlace al documento](#)

Fecha de promulgación: 13 de enero de 2015

Fecha de publicación: 13 de febrero de 2015

RESUMEN

LEY DE TRÁFICO Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS (JUSTICIA CRIMINAL Y APOYO A LAS VÍCTIMAS) (IRLANDA DEL NORTE) 2015

Esta Ley establece disposiciones sobre la trata de personas, la esclavitud y otras formas de explotación, incluidas medidas para prevenir y combatir esa explotación y brindar apoyo a las víctimas de dicha explotación; y para fines relacionados.

La ley se divide en cinco partes.

Parte 1

- Las secciones 1 a 4 establecen nuevos delitos de tráfico de personas y esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso u obligatorio. El objetivo principal de estas secciones es simplificar el marco legislativo para que sea más fácil para los investigadores y los fiscales presentar casos contra los perpetradores. Reemplazan los delitos anteriores de trata de personas (en virtud de los artículos 57 a 59 de la Ley de delitos sexuales de 2003 y la sección 4 de la Ley de asilo e inmigración (tratamiento de demandantes, etc.) y de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso u obligatorio (en virtud del artículo 71 de la Ley de Justicia Forense y Coroners de 2009), que posteriormente se derogan. Juntas, estas secciones:
 - introducir un nuevo delito de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso u obligatorio que se puede juzgar solo en la acusación;
 - introducir un nuevo delito consolidado de trata de personas que también sea procesable solo en la acusación;
 - definir qué constituye explotación, a los efectos de un delito de trata de personas;
 - introducir un nuevo delito preparatorio, de cometer un delito con intención de cometer un delito de trata de personas o de esclavitud.
- Las secciones 5 a 7 establecen disposiciones en relación con la sentencia de los delincuentes condenados por un delito en virtud de las secciones 1 y 2 y mejorarán el rango de opciones de sentencia disponibles para los tribunales. La Sección 5 especifica los nuevos delitos como delitos graves según el Anexo 1 de la Orden de Justicia Penal (Irlanda del Norte) y como delitos violentos o sexuales según el Anexo 2 de esa Orden (según corresponda). Esto permitirá a los tribunales dictar sentencias de por vida, penas de prisión indeterminadas y delitos de custodia amplia. La Sección 6 establece una serie de factores agravantes que los tribunales deben tener en cuenta al dictar una sentencia por un delito de trata de personas o esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso u obligatorio. La Sección 7 establece que los tribunales deben

sentenciar a los delincuentes adultos, que han sido condenados por un delito de trata de personas o de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso u obligatorio, a un mínimo de dos años de prisión, a menos que se apliquen circunstancias excepcionales.

- Las secciones 8 a 10 prevén una serie de órdenes que los tribunales podrían imponer en caso de condena por un delito de trata de personas o de esclavitud. La Sección 8 modifica la Ley de Activos del Crimen de 2002 en la medida en que se relaciona con Irlanda del Norte para especificar los delitos de trata de personas y esclavitud como "delitos penales en el estilo de vida". Esto mejorará la capacidad del tribunal para ordenar la confiscación de activos criminales y, por lo tanto, ayudará a socavar la motivación económica que alimenta la explotación de las personas. La Sección 9 introduce el Anexo 1 de la Ley y prevé la confiscación de un vehículo, barco o aeronave utilizado, o destinado a ser utilizado, en relación con un delito de trata de personas o de esclavitud. La Sección 10 introduce el Anexo 2 de la Ley y establece que los tribunales de Irlanda del Norte ordenen a los perpetradores de la trata de personas o delitos similares a la esclavitud que paguen una indemnización a sus víctimas.
- Las secciones 11 a 14 establecen disposiciones con respecto a la prevención y la aplicación de la ley en relación con la trata de personas y delitos similares a la esclavitud. La Sección 11 prevé la introducción de Órdenes de Prevención de la Esclavitud y el Tráfico, de acuerdo con el Anexo 3 de la Ley, que permitiría a los tribunales restringir el comportamiento de cualquier individuo condenado por un delito de trata de personas o de esclavitud cuando se considere necesario. La Sección 12 requiere que el Departamento de Justicia publique una estrategia anual para abordar la trata de personas y la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso u obligatorio. El objetivo de la Sección 13 es mejorar nuestra comprensión de la escala y la naturaleza de la trata de personas y las prácticas de esclavitud en Irlanda del Norte al imponer a las autoridades públicas específicas el deber de notificar a la Agencia Nacional del Delito de cualquier presunta víctima de estos delitos. La sección 14 deja claro que la investigación y el procesamiento de los delitos relevantes no están supeditados a un informe de una víctima o su cooperación en los procedimientos penales.

Parte 2. Sección 15, crea un nuevo delito de compra de servicios sexuales para reducir la demanda de personas objeto de trata y combatir la explotación. Modifica varios artículos de la Orden de Delitos Sexuales (Irlanda del Norte) de 2008 y crea un deber en la Ley para aumentar la conciencia pública sobre el nuevo delito e informar a la Asamblea sobre el funcionamiento y el impacto del nuevo delito. La sección 16 introduce una nueva ofensa de matrimonio forzado.

Parte 3. Las secciones 17 a 21 prevén la asistencia y el apoyo que se pondrá a disposición de las víctimas y las posibles víctimas de la trata de personas.

- La sección 17 establece definiciones para esta parte de la ley.
- La Sección 18 impone una obligación legal al Departamento de Justicia de brindar asistencia y apoyo a los adultos que son víctimas potenciales de la trata de personas, durante un período de "recuperación y reflexión" de 45 días, hasta que la autoridad competente determine su

condición de víctimas. Esto está en consonancia con las responsabilidades del Reino Unido en virtud del artículo 10 del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (en virtud del cual el Reino Unido ha establecido un mecanismo nacional de referencia para la identificación de las víctimas de la trata de personas).

- La Sección 19 requiere que el Departamento de Salud, Servicios Sociales y Seguridad Pública prepare y publique una estrategia, junto con otros Departamentos de Irlanda del Norte, que brindará un programa de asistencia y apoyo a disposición de una persona que desea abandonar la prostitución. Cada departamento será responsable de entregar los aspectos del programa que se encuentren dentro de su alcance.
- La Sección 20 requiere que el Departamento de Justicia produzca orientación con respecto a la compensación para las víctimas de la trata de personas.
- La Sección 21 prevé que se designe un tutor independiente para un niño que es una víctima, o una posible víctima, de la trata de personas, o que se determina que es un niño separado.

Parte 4. Las secciones 22 a 24 están destinadas a proteger a las víctimas de la trata de personas y delitos similares a la esclavitud en las investigaciones y procedimientos penales.

- La Sección 22 crea una defensa legal para las víctimas de la trata de personas y delitos similares a la esclavitud que se han visto obligados a cometer otros delitos como consecuencia directa de su situación de trata o esclavitud. La defensa no se aplicará en los casos en que el delito en cuestión atraiga una sentencia máxima de cinco años o más, con un número limitado de excepciones.
- La Sección 23 impone a la comisaria principal el deber de garantizar que, durante una investigación de un delito de trata de personas o de esclavitud, el demandante reciba un tratamiento específico destinado a prevenir la victimización secundaria.
- La Sección 24 modifica la Orden de Evidencia Criminal (Irlanda del Norte) de 1999 para garantizar que las víctimas de trata de personas y delitos de esclavitud sean automáticamente elegibles para medidas especiales en los tribunales cuando presenten pruebas.

Parte 5. Las secciones 25 a 28 de la Ley hacen disposiciones complementarias que cubren la interpretación; enmiendas, derogaciones y disposiciones consiguientes; pedidos; título corto y comienzo.

Otra legislación

[Immigration Act 2016](#)

RESUMEN

Ley con disposiciones sobre inmigración y asilo; con disposiciones sobre el acceso al trabajo, servicios, instalaciones y licencias como inmigrante; sobre los requisitos de idioma exigibles a trabajadores del sector público; sobre tarifas para los pasaportes y registro civil; etc.

En su parte primera, capítulos primero y segundo, la Ley habla del mercado laboral y el trabajo ilegal.

[Sexual Offences Act 2003](#)

RESUMEN

Ley para crear nuevas disposiciones sobre los delitos sexuales, su prevención y la protección de los niños contra los daños causados por otros actos sexuales, y fines relacionados.

En la primera parte de la Ley hay un capítulo completo dedicado al tráfico de personas.

[Sexual Offences \(Scotland\) Act 2009](#)

RESUMEN

Ley del Parlamento escocés con nuevas disposiciones sobre delitos sexuales y fines relacionados.

Otras regulaciones

- [Act of Sederunt \(Summary Applications, Statutory Applications and Appeals etc. Rules Amendment\) \(Illegal Working Orders\) 2017](#)
- [The Illegal Working Compliance Orders Regulations 2016](#)

SUECIA

Fuentes de consulta y referencia

Legislación

- Legislationline.org, página web que proporciona acceso directo a normas y estándares internacionales relacionados con cuestiones específicas de la dimensión humana, así como a la legislación nacional y otros documentos relevantes para estas cuestiones. Estos datos y otra información disponible en el sitio están destinados a los legisladores de la región de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa).

[Enlace a informes y legislación relativos a la Trata de seres humanos](#)

- European Commission, página web de la Comisión Europea que aporta el marco institucional, legal y político de cada uno de los países miembro.

[Enlace a informes y legislación relativos a la Trata de seres humanos](#)

Legislación

CÓDIGO PENAL

Unofficial translation

The Swedish Penal Code (1962:700)

(excerpt)

(...)

Chapter 4. On Offences against Liberty and Peace

Section 1a

A person who, in a case other than those referred to in Section 1, by the use of unlawful coercion or deception, exploiting someone's vulnerable situation or by some other such improper means recruits, transports, accommodates, receives or implements some other such measure with a person, and thereby assumes control over the person, with the aim that the person should be

1. subjected to an offence under Chapter 6, Section 1, 2, 3, 4, 5 or 6, exploited for causal sexual relations or in another way exploited for sexual purposes,
2. exploited in war service or compulsory work or other such compulsory condition,
3. exploited for the removal of organs, or
4. exploited in another way in a situation that involves a distressful situation for the vulnerable person,

shall be sentenced for trafficking in humans to imprisonment for at least two and at most ten years.

This also applies to a person who with such a purpose as referred to in the first paragraph,

1. passes over to another control over a person, or
2. from another person receives control over a person.

A person who commits an act as referred to in the first paragraph against a person who has not attained the age of eighteen should be sentenced for trafficking in humans even where no such improper means as referred to there have been used.

If the offence referred to in the first to third paragraphs is less grave, a sentence of imprisonment for at most four years shall be imposed. (SFS 2005:90)

(...)

Aliens Act (2005:716)

29 September 2005

With amendments up to and including Swedish Code of Statutes 2006:220

(Enters into force: 31 March 2006)

(...)

Chapter 5. Residence permits

Persons who are entitled to a residence permit as being in need of protection

Section 1

Refugees and persons otherwise in need of protection who are in Sweden are entitled to a residence permit.

A residence permit may, however, be refused to

1. a refugee under Chapter 4, Section 1 if there are exceptional grounds for not granting a residence permit in view of what is known about the alien's previous activities or with regard to national security,
2. a person otherwise in need of protection under Chapter 4, Section 2, first paragraph, points 2 and 3, if in view of his or her criminal activities there are special grounds for not granting the alien a residence permit or if there are exceptional grounds for not granting such a permit in view of what is known about the alien's previous activities or with regard to national security,
3. an asylum seeker who has entered Sweden from Denmark, Finland, Iceland or Norway and can be returned to any of these countries in accordance with an agreement between Sweden and that country, unless it is obvious that the alien will not be granted a residence permit there,
4. an asylum seeker who has otherwise, before coming to Sweden, stayed in a country other than the country of origin and is protected there against persecution and against being sent to the country of origin or to another country where he or she does not have corresponding protection,
5. an asylum seeker who has special ties to another country and is protected there as specified in point 4 or
6. an asylum seeker who can be sent to Denmark under the Convention of 15 June 1990 determining the State responsible for examining applications for asylum lodged in one of the Member States of the European Communities (the Dublin Convention) and is protected as specified in point 4.

The Dublin Regulation contains provisions that are applicable in relation to the Member States of the European Union and in relation to Iceland and Norway.

Section 2

A residence permit shall be given to an alien who has been received in Sweden within the framework of a decision that the Government has issued on the transfer to Sweden of persons in need of protection (resettlement).

Section 2a

A permanent residence permit shall be given to a person who has been granted long-term resident status in Sweden.

Residence permits on the grounds of ties to Sweden

Section 3

Unless otherwise provided in Sections 17–17b, a residence permit shall be given to

1. an alien who is a spouse or cohabiting partner of someone who is resident in or has been granted a residence permit to settle in Sweden,

2. a child who is an alien, is unmarried and

a) has a parent who is resident in or has been granted a residence permit to settle in Sweden or

b) has a parent who is married to or cohabiting partner of someone who is resident in or has been granted a residence permit to settle in Sweden,

3. a child who is an alien, is unmarried and has been adopted or is intended for adoption by someone who at the time of the adoption decision was and who still is resident in or has been granted a residence permit to settle in Sweden, if the child is not covered by point 2 and if the adoption decision

– has been issued or is intended to be issued by a Swedish court,

– is valid in Sweden under the Act on International Legal Relations concerning Adoption (1971:796) or

– is valid in Sweden under the Act consequent on Sweden's Accession to the Hague Convention on Protection of Children and Cooperation in Respect of Intercountry Adoption (1997:191) and

4. an alien who is a parent of an unmarried alien child who is a refugee or a person otherwise in need of protection, if the child arrived in Sweden separately from both parents or from another adult person who may be regarded as having taken the place of the parents, or if the child has been left alone after arrival.

When an application for a residence permit is based on a decision on adoption issued by a Swedish court, the ties that have arisen as a result of this decision shall be accepted in the residence permit case.

A residence permit under this Section shall be valid for at least one year. A residence permit granted to an unmarried child under the first paragraph, point 2b shall be valid for the same time as the parent's residence permit.

Section 3a

Unless otherwise provided in Section 17, second paragraph, a residence permit may be given to

1. an alien who intends to marry or enter into a cohabitee relationship with a person who is resident in or who has been granted a residence permit to settle in Sweden, if the relationship appears to be serious and there are no special grounds not to give a permit,
2. an alien who in some way other than those referred to in Section 3 or in this Section is a close relative of someone who is resident in or who has been granted a residence permit to settle in Sweden, if he or she has been a member of the same household as that person and there exists a special relationship of dependence between the relatives that already existed in the country of origin,
3. an alien who is to exercise access rights that are not of limited scope to a child that is resident in Sweden and
4. an alien who is of Swedish origin or has lived in Sweden on a residence permit for a long time.

If an alien has been given a residence permit under the first paragraph, point 1, a residence permit for the same period shall be given to unmarried children of the alien.

When there are exceptional grounds a residence permit may also be granted to an alien in cases other than those referred to in the first and second paragraphs if the alien

1. has been adopted in Sweden as an adult,
2. is a relative of an alien who is a refugee or a person otherwise in need of protection or
3. has some other special tie with Sweden.

Residence permits on the basis of Sweden's international commitments

Section 4

If an international body that is competent to examine complaints from individuals has found that a refusal-of-entry or expulsion order in a particular case is contrary to a Swedish commitment under a convention, a residence permit shall be granted to the person covered by the order, unless there are exceptional grounds against granting a residence permit.

Residence permits on grounds of work or other means of support

Section 5

A permanent residence permit may be granted to an alien who has been offered permanent employment in the country, if the alien has special qualifications and the need for labour cannot be satisfied by jobseekers in the country or by recruitment from another country in the European Economic Area (EEA) or Switzerland.

A residence permit may be granted to an alien with means of support other than employment.

Residence permits on grounds of exceptionally distressing circumstances

Section 6

If a residence permit cannot be awarded on other grounds, a permit may be granted to an alien if on an overall assessment of the alien's situation there are found to be such exceptionally distressing circumstances that he or she should be allowed to stay in Sweden. In making this assessment, particular attention shall be paid to the alien's state of health, his or her adaptation to Sweden and his or her situation in the country of origin.

Children may be granted residence permits under this Section even if the circumstances that come to light do not have the same seriousness and weight that is required for a permit to be granted to adults.

Temporary residence permits

Section 7

A residence permit shall be for a limited time if, in view of the alien's expected way of life, there is doubt as to whether a residence permit should be granted.

Section 8

A residence permit that is given to a spouse under Section 3, first paragraph, point 1 shall be for a limited time on the occasion of the first decision, if the spouses have not lived together on a permanent basis abroad. This also applies when a residence permit in such a case is granted to the alien's child or children.

A residence permit that is granted under Section 3a, first paragraph, point 1 or second paragraph shall be for a limited time on the occasion of the first decision.

Section 9

A residence permit that is granted pursuant to Section 6 on grounds of sickness shall be for a limited time if the alien's sickness or need of care in Sweden is of a temporary nature.

Section 10

A temporary residence permit may be granted to an alien who wishes to stay in this country for work, studies or a visit.

Section 11

A temporary residence permit may be granted if there is an impediment, which is not of a lasting nature, to enforcement of a refusal-of-entry or expulsion order.

Section 12

A temporary residence permit may be granted to an alien who needs care under the Care of Young Persons (Special Provisions) Act (1990:52).

Section 13

A temporary residence permit may be granted to a child or a man, if the presence of the child or man in Sweden is necessary in order to carry out a paternity investigation.

Section 14

If a temporary residence permit has been granted to a child under Section 12 or 13, a temporary residence permit may also be granted to the child's custodian.

Section 15

A temporary residence permit may be granted to an alien who is staying here upon application from the person in charge of a preliminary investigation, if this is necessary in order to be able to carry out a preliminary investigation or a main hearing in a criminal case.

Prolonged residence permit

Section 16

An alien who, pursuant to Section 8, has been granted a temporary residence permit on grounds of family ties may only be granted a new temporary or permanent residence permit on these grounds if the relationship continues.

An alien who has family ties under Section 3, first paragraph, point 1 or 2b or Section 3a, first paragraph, point 1 or second paragraph and who has held a temporary residence permit for two years may be given a permanent residence permit. If there are special grounds, a permanent residence permit may be given before the end of the two-year period.

If a relationship has ended, a residence permit may still be granted if

1. the alien has special ties to Sweden,
2. the relationship has ended primarily because in the relationship the alien or the alien's child has been subjected to violence or some other serious violation of their liberty or peace or
3. there are other strong grounds for prolonging the alien's residence permit.

Right of a third-country national to obtain a new residence permit

Section 16a

A third-country national who has long-term resident status in Sweden and has lost his or her residence permit because of a stay outside Sweden shall be given a new residence permit if he or she returns to Sweden to take up residence here.

Special grounds against granting a residence permit

Section 17

When examining an application for a residence permit under this Chapter, particular attention shall be paid, except in cases referred to in Section 1, 2, 3 or 4, to whether the applicant has been guilty of any criminal activity or criminal activity combined with other misconduct. When considering a residence permit under Section 3a, first paragraph, point 1 and second paragraph, particular attention shall be

paid to whether it can be assumed that the alien or the alien's child or children will be subjected to violence or some other serious violation of their liberty or peace, if a residence permit were to be granted.

A residence permit under Section 3, first paragraph, point 2 or 3 and Section 3a, second paragraph may be granted only after the parent to whom ties are not cited has also given his or her assent, if that parent shares custody of the child.

A residence permit shall not be granted to a person with long-term resident status in another EU state, or his or her relatives, if that person constitutes a threat to public order and security.

Section 17a

A residence permit may be refused in such cases as are referred to in Section 3, if

1. incorrect information has knowingly been supplied or circumstances have knowingly been suppressed that are of importance for obtaining the residence permit,
2. an alien has been adopted or a marriage entered into or a cohabitee relationship begun exclusively in order to give the alien a right to a residence permit or
3. if the alien constitutes a threat to public order and security.

A residence permit may also be refused in such cases as are referred to in Section 3, first paragraph, point 1 or point 2b, if

1. the spouses or cohabiting partners do not live together or do not intend to live together,
2. the person to whom ties are cited or the alien who has applied for a residence permit is married to or cohabiting with someone else or
3. either of the spouses or cohabiting partners is under 18 years of age.

When assessing whether a residence permit should be refused, account must be taken of the alien's other personal circumstances and family situation.

Section 17b

A residence permit shall be refused in the cases referred to in Section 3, first paragraph, point 1 or point 2b if the person to whom ties are cited is married to another person and is living with that person in Sweden.

The time at which a residence permit application must be made

Section 18

An alien who wants a residence permit in Sweden must have applied for and been granted such a permit before entering the country. An application for a residence permit may not be approved after entry.

However, this does not apply if

1. the alien is entitled to a residence permit here as a refugee or a person otherwise in need of protection under Section 1 or can be granted a residence permit here pursuant to Chapter 21, Section 2, 3 or 4,
2. the alien should be granted a residence permit here pursuant to Section 6,
3. an application for a residence permit concerns extension of a temporary residence permit that has been granted to an alien with family ties pursuant to Section 3, first paragraph, point 1 or 2b or Section 3a, first paragraph, point 1 or second paragraph,
4. the alien can be granted or has a temporary residence permit pursuant to Section 15,
5. the alien has strong ties, as described in Section 3, first paragraph, points 1–4, Section 3a, first paragraph, points 1–3 or second paragraph, to a person who is resident in Sweden and it cannot reasonably be required that the alien travel to another country to submit an application there or
6. there are some other exceptional grounds.

With regard to a residence permit for an alien who is to be refused entry or expelled in accordance with a judgment or order that has become final and non-appealable, the regulations in Chapter 8, Section 14 and Chapter 12, Sections 18–20 apply.

Section 19

A residence permit application that concerns extension of an ongoing visit or some other temporary stay in this country may be approved despite the alien being in Sweden, if there are substantial grounds for extending the period of stay.

Decision-making authorities

Section 20

Decisions on residence permits are issued by the Swedish Migration Board.

Decisions on residence permits may also be issued by the Government Offices.

Section 21

It follows from Chapter 8, Sections 14 and 21 and Chapter 12, Section 20 that the Government and the body that examines appeals against refusal-of-entry and expulsion orders may in certain cases also decide on residence permits.

Authorisations

Section 22

The Government or, by authority of the Government, the Swedish Migration Board may issue regulations empowering other authorities to decide on residence permits.

Section 23

The Government may issue regulations on residence permits for studies or visits.

The Government may issue regulations stating that a residence permit application may be approved if this follows from an agreement with a foreign state.

The Government may issue regulations on when a residence permit may be granted to a thirdcountry national who has long-term resident status in another EU state and to family members of such an alien.

Section 24

The Government may issue regulations on permanent residence permits with regard to a certain category of aliens because they are otherwise in need of protection under Chapter 4, Section 2, first paragraph, point 2 or 3.

Section 25

The Government may issue regulations stating that residence permits may not be granted to persons otherwise in need of protection under Chapter 4, Section 2, first paragraph, point 2 or 3, if this is necessary because limitations have arisen in Sweden's capacity to receive aliens.

The Government must notify the Riksdag of such regulations within three months, by a special written communication.

Section 26

The Government may issue regulations on exceptions to Section 1, second paragraph, point 4, if an alien's ties to Sweden are such that the alien should not be denied examination in this country of his or her application for asylum.

(...)

Informes relacionados

- Poverty and Trafficking in Human Beings: a Strategy for combating trafficking in human beings (2003)
- Prostitution and trafficking in human beings (2005)
- Information to non-residents becoming victims of crime in Sweden (2005)
- Information to victims of crimes against their person (2007)
- Information to crime victims (2007)
- **National Criminal Investigation Department: Trafficking in Women - Plan of Action.**

[Enlace al listado](#)

(Haciendo click en cada uno de los títulos dentro del enlace, nos llevará al correspondiente pdf).

Informe EUROPEAN COMMISSION

[Enlace al informe](#)

Contiene:

- Información general - Situación sobre la trata de seres humanos.
- Marco institucional, jurídico y de políticas para abordar la trata de seres humanos.
- Plan de Acción Nacional.
- Cooperación Transfronteriza en la trata de seres humanos.
- Informes relevantes:
 - Informe anual del relator nacional.
 - Leyes suecas, políticas e intervenciones sobre la prostitución y la trata de seres humanos: una visión general completa.
- Enlaces relevantes a las autoridades nacionales / sitios web de instituciones y otros contactos pertinentes.

Parte tercera: BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

MONOGRAFÍAS

- ✓ Caplan, A., Domínguez-Gil, B., Matesanz, R., & Prior, C. (2009). *Trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs*. <https://rm.coe.int/16805ad1bb>
- ✓ CELADE. (2003). *Derechos humanos y trata de personas en las Américas: resumen y aspectos destacados de la Conferencia Hemisférica sobre Migración Internacional*. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6669/S0311794_es.pdf
- ✓ Charpentier, C. (Ed.). (2018). *Coopération française en Europe du sud-est pour lutter contre la traite des êtres humains et la criminalité connexe: programmation 2019*. https://onu-vienne.delegfrance.org/IMG/pdf/projet_programmation_cmteh_2019_2018_6_decembre_2018.pdf?3953/0100acb58e4d8a6d0d30d8daaec8c832bbf28827
- ✓ Chaterlon, L. (1963). *En 1963 aún existe la trata de blancas*. Barcelona: Rodegar.
- ✓ Cruz Zúñiga, P., & Cordero Ramos, N. (Eds.). (2014). *Análisis, retos y propuestas en torno a la trata de personas*. Sevilla: Aconcagua Libros.
- ✓ Daunis Rodríguez, A. (2013). *El delito de trata de seres humanos: el art. 177 bis CP*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- ✓ *Directrices para la detección de víctimas de trata en Europa*. (2013). <http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/otrasFormas/trata/detectarla/pdf/ManualDirectricesDeteccionTSH.pdf>
- ✓ Escribano Úbeda-Portugués, J. (2009). *Terrorismo, narcotráfico, blanqueo de capitales, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico ilícito de armas: lucha global contra la delincuencia organizada transnacional*. Madrid: Visión Libros.
- ✓ Esteban Pérez, A. (Ed.). (2017). *El derecho ante las formas contemporáneas de esclavitud*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- ✓ García Vázquez, S., & Fernández Olalla, P. (2012). *La trata de seres humanos*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- ✓ Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings. (2013). *Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Spain: first evaluation round: (GRETA (2013) 16*. <https://www.refworld.org/docid/54b693a04.html>
- ✓ *Guía de intervención con víctimas de trata para profesionales de los medios de comunicación: como proteger y asistir a las víctimas de trata con fines de explotación sexual*. (2015). <https://apramp.org/download/guia-de-intervencion-con-victimas-de-trata-para-profesionales-de-los-medios-de-comunicacion/>

- ✓ *Guiding principles on business and human rights: implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework.* (2011).
https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf
- ✓ *Herramienta práctica para la detección de víctimas de trata con fines de explotación laboral.* (2013).
<http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/otrasFormas/trata/detectarla/pdf/HerramientaDeteccionTSHexplotacionLaboral.pdf>
- ✓ *Herramienta práctica para la detección de víctimas de trata con fines de explotación sexual.* (2013).
<http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/otrasFormas/trata/detectarla/pdf/HerramientaDeteccionTSHexplotacionSexual.pdf>
- ✓ *Herramienta práctica para la detección de víctimas de trata con fines de mendicidad: realización forzada de actividades ilícitas.* (2013).
<http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/otrasFormas/trata/detectarla/pdf/HerramientaDeteccionTSHactividadesIllicitas.pdf>
- ✓ *I Informe de Seguimiento del Plan Integral de Lucha Contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual, año 2015.* (2017).
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/otrasFormas/trata/normativaProtocolo/planIntegral/DOC/INFORME_SEGUIMIENTO_PLAN_2015_2017def.pdf
- ✓ Iglesias Skulj, A., & Puente Aba, L. M. (Eds.). (2012). *Sistema penal y perspectiva de género: trabajo sexual y trata de personas.* Granada: Comares.
- ✓ *Instrucción 6/2016 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra la trata de seres humanos y en la colaboración con las organizaciones y entidades con experiencia acreditada en la asistencia a las víctimas.* (2016).
<https://rm.coe.int/esp-2-eval-report-annex-1-thb-comprehensive-plan-2015-2018/1680790618>
- ✓ Juderías, J. (1911). *La trata de blancas: estudio acerca de este problema social en España y en el extranjero.* Madrid: Sociedad Española de Higiene.
- ✓ Kara, S. (2010). *Tráfico sexual: el negocio de la esclavitud moderna.* Madrid: Alianza Editorial.
- ✓ *La lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains: rapport année 2015.* (2016).
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/cncdh_traite_des_etres_humains_vdef.pdf
- ✓ *La trata con fines de explotación sexual.* (2015).
<https://aprap.org/download/la-trata-con-fines-de-explotacion-sexual/>
- ✓ *La trata de personas con fines de explotación laboral: estrategias para la detección e investigación del delito.* (2017)
https://www.mpf.gob.ar/protex/files/2018/02/Informe_Protex_Trata_de_personas_2018.pdf
- ✓ *La trata de personas con fines de explotación laboral: un estudio de aproximación a la realidad en España.* (2008).
<https://www.accem.es/wp-content/uploads/2017/07/trata.pdf>

- ✓ *La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles.* (2012).
<https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2015/05/2012-09-Trata-de-seres-humanos-en-Espa%C3%B1a-v%C3%ADctimas-invisibles-ESP.pdf>
- ✓ León Villalba, F. J. de. (2003). *Tráfico de personas e inmigración ilegal.* Valenciat: Tirant lo Blanch.
- ✓ *Ley modelo contra la trata de personas.* (2010).
<https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP-Model-Law-Spanish.pdf>
- ✓ López Rodríguez, J. (2016). *Conceptualización jurídica de la trata de seres humanos con fines de explotación laboral* (1ª). Cizur Menor, Navarra: Aranzadi.
- ✓ Lucea Sáenz, A. (2017). *Erradicar la trata de personas : una cuestión de derechos humanos.* Las Rozas, Madrid: Sepín.
- ✓ *Massnahmen gegen Menschenhandelauf lokaler Ebene: Richtlinien für Kommunen = Medidas contra la trata de personas a nivel local: pautas para municipios.* (2015).
<https://www.cbss.org/wp-content/uploads/2016/03/Guidelines-for-Municipalities-DE.pdf>
- ✓ Mayordomo Rodrigo, V. (2008). *El delito de tráfico ilegal e inmigración clandestina de personas : a la luz de los textos internacionales.* Madrid: Iustel.
- ✓ Meneses Falcón, C., Uroz, J., Rúa, A., Gortazar, C., & Castaño, M. J. (2015). *Apoyando a las víctimas de trata : las necesidades de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual desde la perspectiva de las entidades especializadas y profesionales involucrados : propuesta para la sensibilización contra la trata.*
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2015/pdf/Apoyando_Victimas_Trata.pdf
- ✓ Mir Puig, S., & Corcoy Bidasolo, M. (Eds.). (2009). *Protección penal de los derechos de los trabajadores : seguridad en el trabajo, tráfico ilegal de personas e inmigración clandestina.* Madrid: Edisofer.
- ✓ Napoleoni, L. (2016). *Traficantes de personas : el negocio de los secuestros y la crisis de los refugiados* (1ª ed.). Barcelona: Paidós.
- ✓ Nicola, A. di, & Musumeci, G. (2019). *Confesiones de un traficante de personas* (1ª ed.). Madrid: Altamarea.
- ✓ Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. (2009). *Manual para la lucha contra la trata de personas: programa mundial contra la trata de personas.* Recuperado de <https://www.refworld.org/es/pdfid/4a7945492.pdf>
- ✓ Pérez Alonso, E. J. (2008). *Tráfico de personas e inmigración clandestina : (un estudio sociológico, internacional y jurídico-penal).* Valencia: Tirant lo Blanch.
- ✓ *Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, 2015-2018.* (2015).
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/planActuacion/planContraExplotacionSexual/docs/Plan_Integral_Trata_18_Septiembre2015_2018.pdf
- ✓ *Recommended principles and guidelines on human rights at international borders.* (https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines.pdf). Nueva York: United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner.

- ✓ *Reply from Spain to the questionnaire for the evaluation of the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by the parties : second evaluation round (reply submitted on 27 October 2016) : GRETA (2017) 10.* (2017).
<https://rm.coe.int/168070ac80>
- ✓ *Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Spain: second evaluation round.* (2018).
<https://rm.coe.int/greta-2018-7-frg-esp-en/16808b51e0>
- ✓ *Report submitted by the Spanish authorities on measures taken to comply with Committee of the Parties Recommendation CP(2013)10 on the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings : CP (2015) 19.* (2015).
<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168063c3db>
- ✓ *Respuesta de Alemania al cuestionario para la evaluación de la aplicación del Convenio del Consejo de Europa para la Represión de Trata de Seres Humanos por los Estados miembros: segunda ronda de evaluación (respuesta presentada el 5 de febrero de 2018).* (2018).
<https://rm.coe.int/greta-2018-3-rq2-deu-deu/168078b1a0>
- ✓ Richard González, M., Riaño Brun, I., & Poelemans, M. (Eds.). (2013). *Estudios sobre la lucha contra la trata de seres humanos*. Cizur Menor, Navarra: Aranzadi.
- ✓ Salillas, R. (1902). *Discurso leído por el Sr. D. Rafael Salillas Panzano el día 10 de diciembre de 1902 en el Ateneo Científico Literario y Artístico de Madrid con motivo de la apertura de sus cátedras*.
<http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000250099&page=1>
- ✓ Senén Hernández, M. (Ed.). (2015). *Subcomisión creada en el seno de la Comisión de Igualdad para el Análisis y Estudio de la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual (núm. expte. 154/11) : aprobación por la comisión 30 de junio de 2015*. Madrid: Congreso de los Diputados.
- ✓ Serra Cristóbal, R. (2007). *Prostitución y trata : marco jurídico y régimen de derechos*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- ✓ *Trata de personas con fines de explotación sexual: y propuestas de acción social y pastoral.* (2010). Madrid: Cáritas Española.
- ✓ Valverde Cano, A. B. (2017). *La protección jurídico-penal de las víctimas de las formas contemporáneas de esclavitud a la luz del derecho internacional, europeo y nacional*. Madrid: Editorial Universitaria Manuel Areces.
- ✓ Villacampa Estiarte, C. (Ed.). (2013). *La delincuencia organizada : un reto a la política-criminal actual* (1ª ed.). Cizur Menor, Navarra: Aranzadi.

CAPÍTULOS DE LIBRO

- ✓ Amezúa Amezúa, L. C. (2017). Trata de personas y explotación laboral hoy. En *Derechos humanos, ciudadanía y globalización* (pp. 281-304). Madrid: Punto Rojo.
- ✓ Arrazola Ruiz, S. (2017). La trata de personas en los conflictos bélicos. En *Estudios sobre derechos humanos* (pp. 101-134). <https://dialnet.unirioja.es/download/libro/720009.pdf>

- ✓ Beltrand, D. (2002). Trata de personas: un desafío regional. En *Derechos humanos y trata de personas en las Américas* (p. 16 p.).
<https://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/2/11302/DBeltrand.pdf>
- ✓ Duarte López, A. (2018). Los ayuntamientos ante la trata de personas. En *La trata de seres humanos: protección de las víctimas* (pp. 513-518). Madrid: Laborum.
- ✓ Pomares Cintas, E. (2015). La colaboración de terceros en la inmigración ilegal a partir de la reforma de 2015 (artículo 318 BIS CP): ¿una cuestión penal? En *Comentario a la reforma penal del 2015* (pp. 619-632). Cizur Menor, Navarra: Aranzadi.
- ✓ Pomares Cintas, E. (2017). Directrices para el análisis y persecución penal de la explotación económica en condiciones de esclavitud o similares. En *El derecho ante las formas contemporáneas de esclavitud* (pp. 775-794). Valencia: Tirant lo Blanch.
- ✓ Sánchez Rubio, D. (2015). La inmigración y la trata de personas cara a cara con la adversidad y los derechos humanos: xenofobia, discriminación, explotación sexual, trabajo esclavo y precarización laboral. En *Migrações e trabalho* (pp. 127-162). Brasilia: Ministerio Público do Trabalho.

ARTÍCULOS

- ✓ Alvarado Alanis, K. A., Romero Vázquez, B., & Aguado Romero, G. (2018). Trata de personas, un fenómeno delictivo transnacional Alemania e Israel. *Revista Espiga*, 17(35), 45-62.
<https://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/espiga/article/viewFile/1758/2441>
- ✓ Álvarez, L. M., Buitrago Calvo, L. D., & Fajardo Guevara, G. (2019). Mendicidad ajena como modalidad del delito de trata de personas. Caso emberachamí. *Via Enveniendi et Ludicandi*, 14(1), 129-156.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6860274.pdf>
- ✓ Arenas Ramiro, M. (2018). Tribunal Europeo de Derechos Humanos y prohibición de trabajos forzados: como proteger los derechos sociales. *Estudios Latinoamericanos de Relaciones Laborales y Protección Social*, (6), 63-92.
- ✓ Barbero, N. (2017). Sobre el fallo «Hacienda verde» de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: primer caso sobre esclavitud y trata de personas: primer caso sobre esclavitud y trata de personas. *Revista de Derecho Penal y Criminología*, (4), 116-131.
- ✓ Bermejo Romero de Terreros, J. A. (2006). Inmigración ilegal y trata de seres humanos. *Boletín del Ministerio de Justicia*, 60(n. extra 2015), 98-107.
- ✓ Blasi Casagrán, C. (2018). El papel de Europol en la lucha contra el tráfico de migrantes y la trata de seres humanos. *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, (59), [333]-357.
<http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=4&IDN=1393&IDA=38369>
- ✓ Boletín del Patronato Real para la Represión de la Trata de Blancas. (s. f.). *Patronato Real para la Represión de la Trata de Blancas*. <http://hemerotecadigital.bne.es/issn/2172-6000>

- ✓ Boza Moreno, E. (2018). Prostitución versus trata de personas. *Revista General de Derecho Penal*, (29).
- ✓ Britos, P. B., & Hernández, C. A. (2017). Discusión sobre los conceptos de «vulnerabilidad» y «consentimiento» en el protocolo de Palermo. *Revista Mario Alario d'Filippo*, 9(18), 12-20. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6857133.pdf>
- ✓ Caballero-Anthony, M. (2018). Flagelo oculto: refugiados y desplazados del sudeste asiático son víctimas de la trata de personas, pero este delito no suele denunciarse. *Finanzas y Desarrollo*, 55(3), 18-21. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2018/09/pdf/caballero.pdf>
- ✓ Carmona Cuenca, E. (2017). Derechos sociales de prestación y obligaciones positivas del Estado en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. *Revista de Derecho Político*, (100), 1209-1238.
- ✓ Castaño Reyero, M. J. (2018). La esclavitud y la trata de personas en el s. XXI. *Sal Terrae*, 106(1229), 7-19.
- ✓ Chahín-Pinzón, N., Reyes Jaimes, J., & Vargas Parra, J. (2017). Aspectos psicológicos a tener en cuenta en la atención de víctimas de la trata de personas. *Psychologia: avances de la disciplina*, 11(2), 121-129. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6258527.pdf>
- ✓ Coordination as a new style of policy management in anti-trafficking field. (2014). *La Strada express*, (6). http://lastrada.md/publicatii/ebook/La_Strada_express6_en_f.pdf
- ✓ Díaz Barrado, C. M. (2013). La lucha contra la trata de seres humanos en la Unión Europea : los componentes para una política propia. *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, (45), 461-498. <http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=4&IDN=1308&IDA=36696>
- ✓ García de Diego, M. J. (2018). ¿La política migratoria actual y la desigualdad económica fomentan las redes de trata de seres humanos?: El contexto nigeriano. Una mirada desde el trabajo social. *Cuadernos de trabajo social*, 31(1), 35-45. <https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/56009>
- ✓ García, M. F. (2018). El delito de trata de personas, crimen de lesa humanidad: análisis desde la óptica de la reciente jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Revista Derechos en Acción*, 8(18), 455-476. <https://revistas.unlp.edu.ar/ReDeA/article/view/6058/4893>
- ✓ García Magariños, J. (2017). Operaciones militares en el exterior y la lucha contra la trata de personas. *Ejército de Tierra Español*, (917), 18-22. http://www.ejercito.mde.es/Galerias/multimedia/revista-ejercito/2017/917//accesible/Revista_Ejercito_Accesible.pdf
- ✓ García Marbella, A., & García Rosas, E. (2017). La trata de personas en la modalidad de trabajo infantil. *Revista de Derecho*, (47), 310-338. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6070656.pdf>
- ✓ Giménez-Salinas Frami, A. (2016). La trata de personas como mercado ilícito del crimen organizado: factores explicativos y características. *Cuadernos de la Guardia Civil*, (52), 13-35. https://intranet.bibliotecasgc.bage.es/intranet-tmpl/prog/local_repository/documents/17743.pdf

- ✓ Grima, J. M. (2017). Violencia, trata de personas y extinción social. Apostillas sobre su contexto y devenir histórico social. *Espiga*, 17(34), 169-182.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6358675.pdf>
- ✓ Hales, L. (2018). The criminalisation and imprisonment of migrant victims of trafficking. *Oñati Socio-Legal series*, 8(1), 50-70.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3082873
- ✓ Jiménez Rojas, M., & Figueredo Medina, G. (2017). Implementación de estándares internacionales de prevención de trata de personas en el control migratorio: Colombia (2015). *Inciso*, 19(1), 17-32. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6078727.pdf>
- ✓ Jones, J., & Winterdyk, J. (2018). Human Trafficking: challenges and opportunities for the 21st century: outcomes and proposals. *Oñati Socio-Legal series*, 8(1), 165-173.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3098105
- ✓ López Rodríguez, J. (2018). Trabajo forzado u obligatorio: el significado contemporáneo de un viejo fenómeno a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. *Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*, (48).
- ✓ Lousada Arochena, J. F. (2018). Normativa internacional contra la explotación humana y laboral en el trabajo doméstico: la ONU y la OIT. *Lan Harremanak*, (39), 152-187.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6550623.pdf>
- ✓ Maqueda Abreu, M. L. (2000). El tráfico de personas con fines de explotación sexual. *Jueces para la Democracia: información y debate*, (38), 23-29.
- ✓ Molina Cañizo, E. (2016). La familia y la educación como instituciones sociales coadyuvantes en la prevención del delito de trata de personas. *Jurídica*, (1), 57-70.
<https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/view/35077/32001>
- ✓ Montuori Fernandes, C., & Sacco, G. (2018). La telenovela *Salve Jorge* y la división política respecto a la trata de personas en Brasil. *Razón y Palabra*, (101), 168-181.
<http://www.revistarazonypalabra.org/index.php/ryp/article/view/1195>
- ✓ Mujica, J. (2016). Trabajo adolescente en la extracción de madera en la Amazonía peruana: explotación laboral, trabajo forzoso, trata de personas. *Revista de Direitos e Garantias Fundamentais*, 17(2), 155-180. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5911047.pdf>
- ✓ Olivar de Julián, J. M. (2002). El tráfico de emigrantes y la trata de personas : problemas e intentos de solución. *Anales de Derecho*, (3), 139-156.
- ✓ Ontiveros Alonso, M. (2015). Responsabilidad empresarial y compliance frente a la trata de personas. *Revista Penal México*, (7), 95-107.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4972875&orden=0&info=link>
- ✓ Pérez Machío, A. I. (2016). Trata de personas con fines de explotación laboral: la globalización del delito y su incidencia en la criminalización de la victimización irregular. *Estudios Penales y Criminológicos*, (36), 371-446.
<http://www.usc.es/revistas/index.php/epc/article/view/3148/3716>

- ✓ Pomares Cintas, E. (2014). La Unión Europea ante la inmigración ilegal: la institucionalización del odio. *Eunomía: revista en cultura de la legalidad*, (7), 143-174. <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/2237/1173>
- ✓ Pomares Cintas, E. (2015). Reforma del Código Penal español en torno al delito de tráfico ilegal de migrantes como instrumento de lucha contra la inmigración ilegal en la Unión Europea. *Revista de Estudios Jurídicos UNESP*, 19(29). <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5526348.pdf>
- ✓ Prada Solaesa, J. R. de. (2002). A propósito del régimen jurídico sancionador referido a la lucha contra la inmigración clandestina y el tráfico de seres humanos. *Jueces para la democracia: información y debate*, (43), 72-81.
- ✓ Ramos Velasco, B. (2018). La orden europea de investigación: desarrollo de la OEI y aplicación en los delitos de trata de seres humanos. *Iudicium*, (4), 137-160. Recuperado de <http://campus.usal.es/~iberusal/iudicium/numeros/iudicium4.pdf>
- ✓ Saiz Echezarreta, V., Alvarado López, M. C., & Gómez, P. (2018). Incidencia política de las campañas contra la trata: un relato controvertido. *Comunicar: revista científica iberoamericana de comunicación y educación*, (55), 29-38. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6353336.pdf>
- ✓ Sarson, J., & MacDonald, L. (s. f.). No longer invisible: families that torture, traffic, and exploit their girl child. *Oñati Socio-Legal series*, 8(1), 2018. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3086626
- ✓ Sotelo Cuello, E. M., Ruiz-Guevara, S. M., & López Cantero, É. J. (2018). El rol de los medios masivos de comunicación en la comprensión del fenómeno de la trata de personas. *Criminalidad*, 60(2), 25-39. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6843874.pdf>
- ✓ Trata de personas: legislación y doctrina extranjera. (2016). *Dossier Legislativo, Año II*(44). <http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/07/miscelaneas43738.pdf>
- ✓ Trujillo del Arco, Á. (2018). El asunto Chowdury y otros c. Grecia: nuevos avances bajo el artículo 4 del CEDH en el combate contra la trata de personas y la explotación. *Revista General de Derecho Europeo*, (45), 232-251.

INFORMES

- ✓ *I Informe de Seguimiento del Plan Integral de Lucha Contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual, año 2015*. (2017). http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/otrasFormas/trata/normativaProtocolo/planIntegral/DOC/INFORME_SEGUIMIENTO_PLAN_2015_2017def.pdf
- ✓ U.S. Department of State. (2018). *2018 Trafficking in Persons Report: Germany*. <https://www.state.gov/reports/2018-trafficking-in-persons-report/germany/>
- ✓ U.S. Department of State. (s. f.). *Trafficking in Persons Report: june 2018*. <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/282798.pdf>

PÁGINAS WEB

- ✓ *Grupo de Estudio Transfronterizo sobre Tráfico Ilegal e Inmigración Clandestina de Personas*. (s. f.). <http://www.inmigracionclandestina.eu/bienvenido/>
- ✓ *National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children*. (s. f.). <https://www.dutchrappporteur.nl/>
- ✓ *UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime*. (s. f.). <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html?ref=menuseide>

TESIS DOCTORALES

- ✓ Carballo de la Riva, M. (2017). *Trata de personas: consideraciones históricas y jurídicas: estructuras, institución y sistemas de explotación*. Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares.
- ✓ Díaz Morgado, C. V. (2014). *El delito de trata de seres humanos: su aplicación a la luz del Derecho Internacional y Comunitario* (Universidad de Barcelona). https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/145612/CVDM_TESIS.pdf?sequence=1
- ✓ Lucea Sáenz, A. (2016). *El estado actual de la trata de personas: una aproximación desde el derecho internacional de los derechos humanos* (Universidad de Zaragoza). <http://zaguan.unizar.es/record/60601/files/TESIS-2017-019.pdf>
- ✓ Martín Ancín, F. (2015). *La trata de seres humanos con fines de explotación sexual a partir de la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010: enfoque victimocéntrico de la actuación policial*. Universidad de Salamanca, Salamanca.
- ✓ Milano, V. (2018). *The human rights-based approach to human trafficking in international Law: an analysis from a victim protection perspective*. Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca.
- ✓ Navarrete Prida, J. A. (2017). *Delito de trata de personas: un análisis de derecho comparado desde la perspectiva mexicana*. Universidad de Sevilla, Sevilla.
- ✓ Silveira Martins, A. (2016). *El delito de tráfico de personas* (Universidad de Sevilla). <https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/40629/Tesis%20Amaury%20%289%20Dic%29%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- ✓ Trujillo del Arco, Á. (2017). *La trata de personas: la trata delito y la trata violación de derechos humanos: reconsideraciones sobre el concepto de trata y examen de las obligaciones de los Estados*. Carlos III de Madrid, Madrid.

VIDEOGRABACIONES

- ✓ Duguay, C. (2006). *Tráfico humano* [1.33:1]. Madrid: Tripictures.
- ✓ Lozano, M. (2008). *Voces: contra la trata de mujeres* [DVD vídeo]. Madrid: New Atlantis Line.